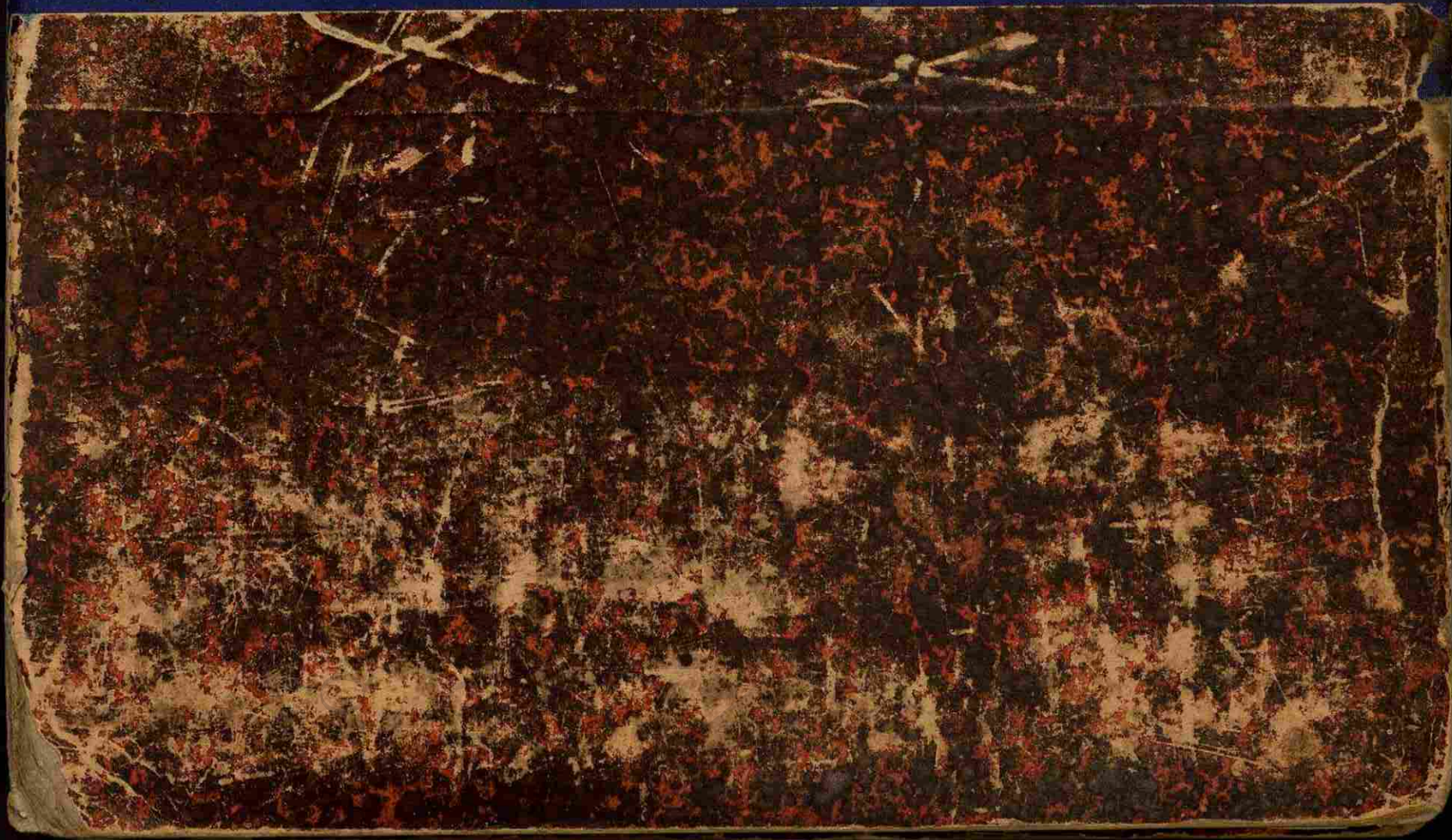



299
328
C

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
BIBLIOTECA
U. A. N. L.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ENE. 1997
16114
19 ABR. 1985
1 MAR. 1990

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
ALERE FLAMMAM VERITATIS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
BIBLIOTECA
U. N. L.

REVISTA

DE

LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

VII.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
ALERE FLAMMAM VERITATIS

REVISTA

DE

LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA

PUBLICADA POR

VICTOR M. CASTILLO

Y

JOSE L. COSSIO.

AÑO DE 1894.

JULIO A DICIEMBRE.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

MÉXICO

ANTIGUA IMPRENTA DEL COMERCIO, DE DUBLAN Y COMP.

CALLEJON DE CINCUENTA Y SIETE NUM. 7

1894

378
C.

LA PROPIEDAD LITERARIA DE ESTA PUBLICACIÓN ESTÁ ASEGURADA
CONFORME Á LA LEY.

REDACCION Y COLABORACION.

Lic. Casasúz Joaquín, Profesor de Economía Política en la Escuela Nacional de Ingenieros.

„ **Castillo Víctor Manuel,** Profesor de Derecho Internacional público en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

„ **Cossío José L.,** Prefecto de la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

„ **Díaz Infante Carlos,** Ex-Magistrado del Tribunal Superior de Guanajuato.

„ **Eguía Lis Joaquín,** Profesor de Derecho Romano en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

„ **Gamboa José M.,** Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Escuela Nacional de Comercio.

„ **Guerrero Julio,** Abogado postulante.

„ **Pallares Jacinto,** Profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

„ **Pimentel Victoriano,** Profesor adjunto en la Escuela Nacional de Comercio.

„ **Sánchez Gavito (hijo), Indalecio,** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.

„ **Vega Fernando,** Secretario de la Academia de Legislación y Jurisprudencia correspondiente de la de Madrid.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

J. M. Charles.

LA CRIMINOLOGIA Y EL JUICIO POR JURADOS.

(ENSAYO DE METODO).

Los estudios del crimen han despertado una curiosidad muy viva entre los sabios, y un interés general en todas las sociedades cultas, porque en ellos se han seguido los métodos modernos de investigación y se han aplicado doctrinas que parecían completamente extrañas á esos estudios. La Criminología, como ha llamado Garofalo á este nuevo ramo de la ciencia, no es ya un capítulo técnico de la Jurisprudencia, sino que forma una ciencia aparte, en bosquejo, es verdad, pero que ya requiere un criterio más firme y penetrante que el que dan los aforismos de Derecho y los artículos de un Código. Para adquirir las primeras nociones de lo que son el *crimen* y el *criminal* hoy, es preciso recurrir á todas las ciencias y con especialidad á las que hasta hoy se han excluido de la enseñanza jurídica. La Psicología, la Biología y la Sociología, á cada paso intervienen en los estudios que tienen al crimen por objeto; y el gabinete del criminalogista, con cráneos y fotografías, cuadros sinópticos y mapas, curvas y esfimógrafos, dista mucho de ser el severo bufete de un jurisconsulto, todo tapizado de libros y sin más recuerdo de la vida que el reloj que la cuenta, y la frente meditabunda de un filósofo de bronce.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Esto consiste en que la Historia y la Estadística han hecho comprender que el crimen no es un accidente aislado, un episodio de policía y una desgracia de familia, sino un acontecimiento fatal que se presenta en todo grupo humano, cualquiera que sea la tierra que lo alimente, el cielo que lo cubra ó la civilización que lo impulse. Desde la abrasada cuenca del Nilo y á los alrededores de los templos de los cocodrilos, hasta las playas congeladas de la Islandia y bajo la influencia de la trágica teogonía del Edda; desde las turbulentas campiñas del antiguo Latium y en un pueblo de jurisconsultos, hasta los valles de Palestina y en tribus espantadas por su credo religioso; desde la civilización estética de Grecia hasta la mercantil de la América Sajona; desde las repúblicas italianas de la Edad Media hasta el Imperio del Micado, el crimen ha sido un acontecimiento tan persistente, que no hay pueblo, ni raza, ni religión, ni moral, que hayan triunfado de él; y el problema de su represión siempre surge en las meditaciones de los gobernantes, como surgen las alucinaciones sombrías en las meditaciones del demente.

Si el crimen se aclimata con el hombre á donde quiera que vaya, siguiendo á las sociedades como si fuese la sombra negra que proyecta en el planeta la civilización, y si esa sombra la han proyectado todas las generaciones sucesivas que constituyen la Historia, es natural suponer que *algo* lo debe producir y que hay algo de fatal é irremediable en su aparición; y esto es lo que han supuesto los criminologistas modernos, de la misma manera que los astrónomos del siglo XVI sospecharon que había algo desconocido en la sucesión de los días y de las noches y en la trayectoria de los planetas á través de las constelaciones.

Este *algo* oculto y desconocido, misterioso y fatal y tan incontrastable como el destino; este algo que son las causas del crimen, es lo que buscan los criminologistas modernos con mucho estudio, con mucha tenacidad y hasta con mucha abnegación, porque el problema es tan difícil como peligroso. En efecto, aparte de los riesgos que hay en atacar ó dudar de las ideas consagradas, la primera dificultad que el problema presenta es la de separarlo de todos los demás para poderlo designar con una definición y concentrar en un punto fijo toda la observación científica. Esta dificultad es grande, porque el crimen se confunde con todo lo que la humanidad tiene de grande ó noble en sus tradiciones y en sus ideales; el asesinato, por ejemplo, se confunde con el duelo, y sobre todo, con el combate militar, al grado de que, entre el pillaje de una banda de foragidos y una sorpresa feliz en campaña, no hay más diferencia que el traje de los personajes; entre el *business* y el fraude, hay una línea de dudas tan sutil que muchas veces es difícil decir cuándo el negociante es hábil y cuándo es un ladrón: entre la injuria y la difamación, por un lado, y el proferir una honrada indignación, ya sea frente á frente ó por medio de un periódico, no hay más diferencia que un sofisma judicial; entre el contrabandista que á riesgo de su vida, quita á las mercancías el tributo de la protección, y un Cobden que convierte en contrabandistas á todos los comerciantes, la diferencia consiste, en que en un caso las sanas teorías financieras están en un infeliz y en el otro en un ministro. De suerte que todos los esfuerzos que se hagan para formular la definición del crimen, para aislarlo de los otros fenómenos sociales; todo lo que se intente para determinar las causas del robo y del asesinato, de la difamación, del fraude y del contrabando, encuentran como primer escollo, la guerra, el negocio, la educación judicial y el fisco. De esto resulta que todo hombre práctico, y en esta cuestión la práctica consiste en hacer juicios y en reglamentar prisiones ó penitenciarías, prescinde de toda especulación científica en materia de crímenes, y no reputa como criminal sino al convicto en juicio, y como crimen sino al definido y castigado por la ley.

Los criminologistas ni pueden contentarse con esa solución, ni detenerse ante aquella dificultad, sino que la rodean planteándose otra cuestión más alta y más difícil; se preguntan,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

quitando la difamación y el fraude y en general todos los delitos que sólo se reputan por tales en determinados lugares y épocas, ¿cuáles son los que en todo tiempo y lugar han sido castigados por la sociedad? y sobre todo, y en primer lugar ¿qué razones, qué causas han influido para que unos actos se penen en un lugar y en un tiempo, y en otras épocas ó países no sean punibles? Contra toda esperanza, los dos problemas han quedado en el estado de enigmas insolubles. No hay acto alguno, no hay crimen, por horroroso que sea, que no haya sido un acto lícito y hasta una costumbre general en algún grupo humano; y no sólo en los pueblos salvajes del Africa ó de la Oceanía, que han escapado á toda civilización, sino en los que fundaron antes ó actualmente siguen una muy adelantada. El asesinato, como asesinato, en tiempo de paz, de individuo á individuo, con premeditación, alevosía y ventaja, era diario, por ejemplo, en Inglaterra, cuando Shakspeare; y en Italia cuando la Reforma, en la Roma de los Triunviros y en la Francia de Felipe Augusto; el infanticidio era costumbre legal en Esparta y Roma; el aborto todavía hoy es una industria en la Turquía; la esclavitud con el plagio como origen, ha sido durante siglos el único motor de la industria; la piratería y el saqueo y el incendio son la aureola de gloria de las edades militares. De suerte que, en el método de eliminación que siguen los criminologistas para formar la definición del crimen, pretendiendo exponer el acto que en todos tiempos y lugares ha sido un crimen, se encuentran con que ninguno puede ser el *substractum* de los demás, no hay esencia histórica en ese fenómeno, no hay un delito persistente y constante, no hay acto que siempre y en todas partes haya sido común, sino que siempre depende de algo independiente de la víctima y del criminal, puesto que basta cambiar de época ó país para considerar como lícito, honorable y hasta glorioso, el acto que antes era reputado criminal.

La consecuencia lógica que se desprende es muy molesta, porque hace requerir un trabajo mayor en el estudio. Si el

crimen es fatal y no depende, para ser crimen, del delincuente sino de la actitud de la sociedad, la investigación, antes de recaer en los criminales, debe dirigirse sobre las sociedades, á fin de compararlas entre sí para saber ¿por qué razón unas castigan el robo y otras no, unas la quiebra, el contrabando, la esclavitud, el duelo; y retrocediendo más, por qué razón ha habido sociedades que hacen del crimen de las otras el honor ó la industria de sus miembros? El campo de investigación que al principio se confinaba en una cárcel, ahora se ensancha por todos los ámbitos de la Historia y por toda la faz del planeta; y el criminologista, para resolver la primera cuestión científica del crimen, tiene que convertirse en sociólogo, de la misma manera que se convierte en psicólogo é historiador el que prescindiendo de un análisis gramatical ó de retórica, trata de criticar y de explicarse la aparición del Fígaro de Beaumarchais ó de las odas de Quintana.

Nada hay, pues, más natural que ir en busca de las organizaciones sociales, buscando datos hasta en las más viejas sociedades de la Historia y en las más adelantadas de las épocas modernas; y así es que se estudian las costumbres de los negros del Africa y las fiestas obscenas de Babilonia; las prescripciones penales de la Biblia y la liturgia egipcia ó la organización en castas de la India; las órdenes monásticas de la Edad Media, los misterios de Eleusis, la circuncisión hebrea, las cruzadas, el Sábado, la Nigromancia, el puritanismo, la simonía, las *jacqueries*, la conquista, el golpe de Estado de Brumario, las revoluciones, etc., etc.; en una palabra, todo acontecimiento, época ó institución donde pueda presentarse glorificado y ensalzado un crimen de la actualidad.

El problema se convierte en un caos, y como único rayo de luz se presenta otro problema que hunde más y más al espíritu en lo desconocido y quizás en lo incognoscible, á la manera de fuegos fatuos que por la noche se siguieran como guía en un desierto. ¿Por qué ensalza la prostitución el babilonio y la matanza el vándalo? ¿Por qué toma la idolatría la forma

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

del becerro de oro en los hebreos y la de la estatua humana en los mahometanos y protestantes? ¿Por qué razón prohiben los pueblos civilizados de hoy la vivisección humana, y en los altares aztecas se arranca de los prisioneros vivos el corazón humeante como la única hostia propicia á la felicidad del imperio? ¿Por qué razón las reuniones armadas son sediciosas hoy y las secciones de París deliberaban en vivac y arrastrando sus cañones imponían su resolución á la Asamblea? ¿Por qué motivo los sabios y artistas, los filósofos y políticos, proclaman la libertad del pensamiento como único motor del progreso, y siglos atrás la esclavitud intelectual del dogma era el credo político de la estabilidad gubernativa? ¿Por qué los Césares romanos se arrogan las prerrogativas de Júpiter y castigan como crímenes de lesa majestad la simple irreverencia á sus estatuas, y hoy se pone en un código la tramitación del juicio de responsabilidad exigida á un presidente? ¿Por qué razón las cruzadas fundan Estados en Jerusalem y en Trebisonda, los condotieris en Italia, las compañías mercantiles de Holanda y de Inglaterra, en las Indias y en el Labrador, y hoy reivindican todas las potencias como derecho de regalía el de gobernar y conquistar, fusilando como filibusteros á los que campan por su cuenta y riesgo? ¿Qué motivos han hecho desaparecer de la vida los combates de gladiadores, la fiesta que en otras edades realizaba el ideal de los placeres, el deleite olímpico de hacer sufrir, de hacer morir, de ver la sangre que corría y los miembros destrozados y palpitantes en las fauces de las fieras; qué motivos son los que han arrebatado á las multitudes esa fiesta que consideraban como su más augusto privilegio, y qué motivos son esos tan poderosos que continuando su acción, llegan al través de los siglos á destinar un departamento especial en las penitenciarías para los que maltratan á los animales? .... Todas estas son cuestiones que surgen al meditar en las variantes del crimen, son otros tantos caminos por explorar y que vienen á converger en la primera meditación científica de este problema, como convergen

en la desembocadura del Amazonas todas las corrientes, arroyos y ríos que desde las cumbres de los Andes le mandan las aguas que forman su caudal.

Para conocer el Amazonas no basta conocer su salida en el Océano, sino que es preciso estudiar toda su cuenca y la de sus afluentes: sólo cuando se las ha recorrido y levantado su carta hidrográfica, se conoce al río: para conocer el *crimen* no basta conocer su aparición en la sociedad, sino que es preciso estudiar todas las corrientes de ideas, sentimientos, costumbres, leyes, tradiciones é instintos que desde las cumbres más remotas de la Historia derrama la vida sobre los pueblos, llevándoles entre las cristalinas corrientes de la Moral y del Arte y de la Ciencia, los torrentes enturbiados del delito.

* * *

Si para recorrer el sistema fluvial de una cuenca desconocida se siguiera en un esquife el primer afluente que se encontrara desembocando en el río donde se navegara, y después de vagar por sus orillas se siguiera otro afluente que de repente apareciese en medio de selvas que velasen la perspectiva, se correría riesgo de hacer inútil en las corrientes nuevas á la embarcación que fué útil en las primeras aguas, y habría la contingencia de volver al mismo punto de partida por un afluente imprevisto de comunicación, amén del peligro de que una catarata hiciera zozobrar ó de que el esquife se estancara en un pantano. Al regresar, de ningún modo podría presentarse el diario correspondiente como la científica descripción de la cuenca, sino como un simple memorandum de impresiones aisladas é incoherentes. Para que la descripción fuese científica, sería menester haber cambiado de embarcación al hacerse inútil la usada, haber marcado con estacas todos los lugares recorridos, haber llevado todos los instrumentos necesarios para medir la profundidad de las aguas y la impetuosidad de sus corrientes, martillos para arrancar peda-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

zos de sus cauces, herbarios donde clasificar sus plantas, cuchillos y tijeras para disecar los animales de tierra y agua, reactivos para analizar sus terrenos y líquidos, brújulas para orientarse, teodolitos para fijar las distancias, compases y papel cuadriculado y con escala determinada; en una palabra, todo el apero de un ingeniero geógrafo. Además, sería preciso haber sabido utilizar todos los instrumentos, trazar con las líneas convencionales la comarca recorrida, y sobre todo, haber sabido conocer al primer golpe de vista y en virtud de la previa educación geológica los puntos á donde ordenada y sucesivamente se debió llevar la exploración. De otra manera, la excursión producirá una oda al río, una novela forjada entre sus márgenes selváticas ó la simple narración de un viaje de placer, pero nunca una descripción científica.

Lo mismo sucede en los estudios que tienen al crimen por asunto. Si sólo se toma uno de ellos, el robo, por ejemplo, no bastará notar que aumenta ó disminuye con la autoridad del poder, y después estudiar las causas que á éste debilitan como un mal sistema financiero, por ejemplo, que empobreciendo al Erario no permita pagar á los gendarmes; no basta, repito, estudiar esto, para inferir que el robo tiene por causa el déficit de un presupuesto. Porque, en primer lugar, sería preciso estudiar por qué razón no sólo disminuyen las aprehensiones sino que aumentan los ladrones siempre que el presupuesto se empobrece, y en segundo lugar, por qué razón en épocas de miseria general hay ladrones y hombres honrados. La asociación de ideas, como la confluencia de un arroyo, podría inducir á investigar en el grupo especial de los ladrones, por qué razón prefieren robar á trabajar ó á sufrir, y quizás se encontrará que son menos ilustrados que las gentes honradas. Este dato sería un nuevo confluente y en las aguas de la ignorancia se buscarían los orígenes del robo. Pero en las aguas que se dejaron atrás hay robo sin ignorancia, y en la ignorancia hay honradez á veces, luego será preciso retroceder y decir que las fuentes del robo, como las del Nilo, son

desconocidas todavía.—Siguiendo otro camino se encontraría la misma decepción, tomando como punto de partida al ladrón en vez de tomar el robo. El ladrón tuvo padre honrado y una tía histérica; su abuelo materno era ebrio y uno de sus primos padece ataques de epilepsía. Aquí hay tres causas sospechosas de producir el robo: la histeria de la tía, la intemperancia del abuelo y la epilepsía del primo. La excursión ya no será en una sola dirección cómo antes, sino que deberá abarcar una que directamente parte del ladrón, la herencia: otra que corre paralela, la histeria de la tía; y otra también paralela, pero del otro lado y que llega al punto mismo de latitud que el ladrón, la epilepsía del primo. Investigando la herencia, nos encontramos con que hay una solución de continuidad muy grande, y que los dos extremos de la vía son enteramente diferentes para suponer que la primera conduzca y forme á la segunda. Que un hombre sea ebrio no quiere decir que sea ladrón, y mucho menos que su nieto sea ladrón. Si la embriaguez es neuropática, si más que una intemperancia que las circunstancias sociales desarrollaron, es una verdadera dipsomanía, lo natural sería suponer que su hijo heredara su constitución neuropática, ó que salvando al hijo y siguiendo la parábola del atavismo, se presente en el nieto; pero en la misma forma y con sus mismas consecuencias, no en una forma que aun no se clasifica, la hleptomanía. El atavismo ó la herencia pueden presentarse en el genio musical, en el soldado, en el ebrio mismo; pero nunca podrá explicarse por la ley de la herencia, ya sea en la vía directa ó en la alternada que los vicios del nieto vienen del genio del padre, ó que las tendencias artísticas del abuelo se resuelven en la disipación del nieto.

Para esto sería preciso determinar y no sólo suponer, cuándo y por qué motivos la neurosis artística ó política se resuelve en la crapulosa ó criminal de la descendencia. La ebriedad del abuelo más bien sirve, pues, para negar la herencia que para confirmarla; invocarla para explicar el crimen en este caso,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

es lo mismo que si se tratara de explicar el estrabismo ó las reumas de un individuo, diciendo que tenía la vista torcida ó las piernas encogidas porque su bisabuelo jugaba tresillo ó porque usaba un gorro blanco para dormir.

Así, pues, la investigación de las causas del robo por el camino de la herencia, á nada más conduce, tanto más, cuanto que en estos asuntos de la herencia hay un sofisma de observación muy frecuente que no se puede señalar en los tribunales, porque la acción de injurias lo defiende, pero que en un estudio abstracto se debe de notar. El sofisma consiste en creer que el hijo, es hijo del esposo de la madre, cosa que muchas veces no es verdad, sobre todo en las clases inferiores de la sociedad, en los criminales; y si jurídica y civilmente está prohibido investigar la paternidad, teniendo obligación de aceptar como padre de un individuo al que se le da ese carácter en las actas del Registro Civil, científicamente hay el deber de investigar la paternidad y de no aseverar nada sobre la ley de la herencia, sino cuando científica y no jurídicamente se haya establecido un linaje limpio é irrefutable.

Nada se consigue, pues, por el camino de la herencia, y después de muchas fatigas tendremos que convenir en que no sólo no hemos podido encontrar en ella las fuentes del robo, sino que la herencia requiere una excursión exclusiva que sólo tenga por objeto su descripción especial, porque está llena de remolinos, islotes y selvas lacustres que no permiten todavía una exploración completa.

Mayores dificultades se encuentran para unir el robo del sobrino con la histeria de la tía, y la primera consiste en el acceso mismo; y en efecto, ¿qué serie de hipótesis encadenadas en sorites no se necesita construir para unir, por un lado la fractura de una caja fuerte, y por el otro las carcajadas y convulsión de una mujer, á treinta ó quinientas leguas de distancia, y en una tarde tempestuosa? Lo primero por hacer sería cavar un canal, de la histeria de la tía á la ebriedad del abuelo, para comunicar el neuropatismo lateral con el ascendente directo, y esto por sí mismo ya es muy difícil é importuno: cuando se trata de explorar se explora y no se construye; los ferrocarriles y telégrafos se hacen cuando ya se conoce el camino y no cuando se pretende descubrir el origen de una corriente que se trata de desviar. Pero, en fin, veamos cómo se hace esta nueva exploración. *Primera etapa: La tía fué hija del abuelo; el abuelo era ebrio, luego la tía era histérica. Segunda etapa: El abuelo era padre de la madre, el abuelo era ebrio; luego el nieto era ladrón. Tercera etapa: El abuelo era ebrio; la tía era histérica, luego el nieto era ladrón.* De suerte que el camino por recorrer es este: de la tía al abuelo y del abuelo al nieto; y torcido ó derecho, corriendo ó brincando, de todos modos hemos de llegar de la histeria de la tía al robo del nieto. Pero como lo que primero debemos establecer es el parentesco, y no hay una constancia científica que lo acredite, se le tiene que suponer, y la regla de falsa suposición será buena para un problema de aritmética, pero no como dato de una investigación psicológica. En segundo lugar tropezamos otra vez con la metempsícosis hereditaria, con la transformación de la neurosis: la ebriedad en histeria, y la histeria en robo; es decir, tabernas, hospital y cárcel; vino, lluvia y dinero. No es fácil explicarse cómo la embriaguez de un hombre produce las convulsiones de una de sus hijas, y el robo de un nieto habido en otra hija que no se embriagaba, ni tenía accesos convulsivos, ni tomaba las cosas ajenas contra la voluntad de su dueño. Podrá ser así; llegará á precisarse la transformación de un instinto en otro muy diverso á través de las gencraciones. Para ello, y como presunción científica, tenemos la ley misma de la evolución y la transformación de los pueblos, con sus instintos y costumbres; pero todavía es un problema que ni siquiera se ha registrado en el libro de investigaciones que la ciencia tiene de hacer; y actualmente no es sino una hipótesis que nunca puede usarse para fundar otra ó para servir de explicación á otro hecho tan desconocido como los que supone. En resumen; nuestra explicación ha sido infructuosa para ha-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

llar las fuentes del robo en las leyes de la herencia, y lo mismo nos sucedería en el caso de que pretendiéramos unir psicológicamente y con teorías *ad hoc* la epilepsía y el robo respectivo de los dos primos.—Buscando la causalidad social con la influencia del estado financiero y la ilustración de las masas por un lado, y buscando la causalidad psicológica por el otro, hemos perdido el tiempo y no conocemos sobre el crimen sino lo que todo el mundo: *su aparición*. Los hechos anteriores que lo vienen determinando quedan desconocidos, y mientras no se conozcan éstos, no podrá decirse que el delito se conoce. ¿La exploración es imposible? No lo creo así; los datos incompletos y vagos de la crisis financiera por un lado, así como los recogidos sobre el alcance intelectual de los criminales, y la suma y orden de sus conocimientos, y por otra parte, todos los relativos á los antecedentes de familia y á la persistencia de una neurosis en ella, son útiles puesto que son exactos; pero de ninguna manera sirven para establecer una inducción ó para fijar una ley de causalidad ó coexistencia. Son útiles como en la exploración geográfica de la cuenca supuesta, las noticias aisladas de los salvajes ribereños ó los recuerdos de un turista que los recorriese, sirven para indicar parajes y para señalar algunos senderos; pero si los datos sobre los primeros no se completan con la descripción de todos los parajes que los rodean, ni se siguen y estudian los senderos indicados, las comarcas del río y del crimen quedarán tan misteriosas y desconocidas como al principio.

De esto depende que el crimen necesite estudiarse, y estudiarse metódica y sistemáticamente; que las nociones que tenemos sobre él son muy incompletas y á veces erróneas; y que para completar unas, rectificar otras y descubrir más, es indispensable hacer del crimen el objeto de una ciencia con sus métodos de observación y prueba, con sus tablas de clasificación y sus datos históricos, con sus registros, curvas y esquemas; en una palabra, es necesario formular los métodos de la Criminalogía y sus doctrinas antes de abordar el estudio en concreto del crimen y de los criminales, para tener un criterio con que juzgar de lo que observemos y generalicemos.

* * *

El segundo requisito que reclama una exploración científica es que el explorador, aparte de sus instrumentos, posea la educación técnica suficiente y toda la preparatoria que ésta requiere, porque de otra manera no podrá medir el desnivel de la cuenca, ni ensayar las rocas, ni utilizar los ángulos de su triangulación, ni estudiar las vísceras de los animales que diseque, ni clasificar las lianas que corte en los bosques ó las osamentas fósiles que exhume de las montañas. Si le falta esta educación y no sabe por consiguiente utilizar sus instrumentos, ni dirigir sus observaciones, será inútil que recorra palmo á palmo la comarca, y que de regreso almacene en su gabinete toneladas de curiosidades recogidas en su viaje. Si cuando éste se hace sin instrumentos, su resultado es una simple travesía de placer, cuando se hace sin método ó por personas que no pueden observar, el resultado es un cúmulo de datos, una montaña de observaciones, buena para erigir sobre ella una estatua al trabajo obstinado, pero nunca para levantar un faro que alumbre la comarca recorrida. Del mismo modo en los asuntos de Criminología no bastará medir los cráneos de los ajusticiados ó contar las pulsaciones de un asesino; describir los tatuajes de los afiliados á una banda, ó hacer una traducción de su caló; tampoco bastarán las medidas de peso ó talla, el número de puntos rojos que se encuentran en su cerebro, ó la extensión y lugar de las placas en los ganglios endurecidos; no bastará sumar los delitos verificados en el campo y los que se perpetran en una ciudad, ni registrar las alzas y bajas que sufren con el cambio de las estaciones; ni dar una descripción de los lugares preferidos para determinada clase de delitos, ya sea en los barrios de una ciudad ó en las provincias de un imperio; sino que será preciso: ó dejar esos apuntes como

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

simples datos de estadística, para que se estudien y clasifiquen después, ó unir con leyes fisiológicas y psicológicas la perpetración del delito y la conformación y capacidad craneana, el ritmo del pulso, las líneas del tatuaje, el tecnicismo del caló, el volumen del cuerpo, el derrame sanguíneo en el cerebro, los ganglios afectados, la influencia del campo y las alteraciones de la atmósfera, ya sean debidos al cambio de estaciones ó de latitud. En efecto, ninguno de estos datos viene por sí mismo á explicar el crimen, ni su reunión determina fatalmente su perpetración; y aislados ó reunidos, les faltan las leyes fisiológicas y psicológicas que vengan á explicar por qué el cambio de forma y volumen en el cráneo modifica en cantidad y calidad las facultades del espíritu, al grado de convertir los ideales de progreso en cavilaciones de muerte, los sentimientos generosos del filántropo en el odio latente y sordo de la envidia; los esfuerzos tenaces y abnegados de una voluntad que se consagra al triunfo de una religión ó al martirio, en el impulso explosivo y brutal que mata al niño para herir al padre. Y estas leyes cuya fórmula debe exponerse y faltan en la teoría antropológica, faltan también en la vesánica y en la climatérica y en la estadística, y con mayor razón en la que podríamos llamar la morfogénica, la que atribuye un tipo especial á los criminales: esas leyes son una laguna entre el asesinato y la curva esfimográfica, entre el peculado y el tatuaje; entre la piratería y los puntos rojos del mesacéfalo; entre la estafa y la latitud; entre el barrio y el estupro; entre la falsificación de moneda y el cambio de estaciones; entre el tipo mongoloide y el salteador; entre el prognatismo y la calumnia; y mientras paso á paso no se vaya del dato observado á la modificación orgánica, de ésta á la alteración fisiológica, de aquí á la perversión de las facultades y á la perpetración del delito, los datos recogidos no tendrán más valor que el de curiosidades por verificar y analizar. En una palabra, esas teorías dan por supuesto que la psicología y la fisiología ya están completas, cuando apenas comienzan á descubrirse los misterios que se verifican

en las profundidades del cuerpo y en los abismos del espíritu: esas teorías suponen que el mecanismo humano ya está estudiado hasta en sus últimos detalles, que las funciones de las fibras ó celdillas más pequeñas ya son conocidas y que basta indicar una alteración en las contracciones de un músculo ó un cambio de composición química en las secreciones de una glándula, para inducir el cambio correspondiente de una noción en otra, la transformación de la verdad en sofisma, el salto del sentimiento artístico á la sed de sangre del salvaje. Ojalá y esa hipótesis no fuera tan gratuita; ojalá y pudiera darse completa y detallada la función del cuerpo y el mecanismo del espíritu, la desdicha de la humanidad estaría desterrada para siempre, y el planeta sólo llevaría á cuestas la felicidad como hija del cálculo ó de la resignación, sin espejismos ningunos de esperanza; pero no es así: el cuerpo y el espíritu apenas se comienzan á conocer, y las leyes de la conducta humana, como las leyes del organismo humano son desconocidas; y ya sea para juzgar de nuestros propios actos ó de las acciones de los otros; para prever un acontecimiento ó para explicar la Historia, la Ciencia actual no tiene más luz que la que lleva entre sus alas la lucerna que alumbra un camino desconocido y perdido entre las infinitas tinieblas de la Vida.

Hipótesis tan enorme no puede proceder sino de dos causas: ignorancia completa de la Fisiología y de la Psicología, y deficiencia de educación intelectual para contener los impulsos generalizadores del espíritu. Por no saber hasta dónde llegan los conocimientos de aquellas ciencias se da su campo por indefinido; por no saber cuáles son los requisitos de una generalización y cómo deben hacerse las observaciones, se defiende por una inducción tan cierta como las leyes del péndulo, el primer indicio de coexistencia, de causalidad ó de cantidad que se observa. ¡No se ha llegado hasta formar una tabla de volúmenes craneanos para los distintos géneros de criminales, haciendo depender de un centenar de pulgadas cúbicas la diferencia orgánica que hay entre el asesinato y el robo, entre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el estupro y la calumnia! Para corregir un defecto y otro, es decir, para evitar todos los errores que puedan aparecer en el estudio del crimen, como para evitar que los datos topográficos de una comarca se usen y combinen con torpeza, es indispensable que el explorador del crimen ó de la comarca tenga la suficiente educación intelectual; que sepan cuándo y hasta qué punto pueden inducir, en qué ocasiones necesitan verificar; cuándo deben limitarse á trabajos de clasificación, y cuándo reducirse á los primeros pasos de una simple exposición; y sobre todo, es necesario que sepan cuáles son y hasta dónde llegan las verdades de las ciencias que forman su criterio, para no atribuirles méritos y triunfos que todavía ni justifican ni alcanzan. Si el geógrafo da por completa la Paleontología, creyendo que todos los seres anteriores al hombre ya son conocidos, y tan conocidos como él cree que son sus clasificaciones imaginarias, son las leyes de su aparición en el planeta, de sus transformaciones y desaparición, sus apuntes de paleontología serán absurdos y las inferencias que haga no tendrán más mérito que el de un esfuerzo de fantasía. El geógrafo y el criminologista deben tener doctrinas sanas y métodos certeros: aquellas para saber desde dónde deben partir sus investigaciones; y éstos para guiarlos á la verdad.

* * *

¿Cuáles son, pues, las doctrinas y los métodos que debe tener un criminologista? Las doctrinas de la Criminología deben ser las verdades de todas las ciencias cuyos fenómenos se encuentran en el crimen; y si esta contestación parece evidente por sí misma, el análisis de ella hará ver que no es tan fácil determinar cuáles son esos fenómenos, porque son tantos y tan variados los elementos de que se compone un delito, que para conocerlo científicamente es preciso ser un enciclopedista profundo, cosa muy difícil de realizar. En efecto, el fenómeno del crimen en las manos del sabio, es de los más complexos que

le puede presentar la vida; son sus elementos tan variados, tan inconciliables á veces, tan fugitivos y transitorios; es su combinación tan intrincada, y en algunos elementos su presencia tan embozada, que puede compararse el estudio de un crimen en el gabinete de un sabio, al que otro sabio emprendiera sobre el haz de algas, peces, detritus, crustáceos y cieno, que salen en la red de un pescador. Determinar todas las condiciones de vida de ese pedazo de lodo arrancado á un banco submarino, no es más difícil que determinar los fenómenos que constituyen el delito, ya sea adhiriéndosele constantemente en una ley de coexistencia ó transformándose lejos del criminal, cambiándole su manera de ser y estallando en la explosión del crimen en virtud de una ley causal. En prueba de ello, vamos á analizar someramente el robo. El robo ante la ciencia no es el simple apoderamiento de una cosa ajena contra la voluntad de su dueño, como queda definido para las necesidades de un juicio penal en el artículo de un Código, sino la reunión de tres órdenes de fenómenos diversos. *Primero.* De todos los que determinan la volición convertida en el acto que caracteriza al ladrón; es decir, su carácter, necesidades, organismo, ideas, costumbres, educación, raza, religión, idioma, edad y nombre; en suma, todos los elementos psicológicos, biológicos y étnicos cuya reunión forma el plexus de fenómenos que constituyen al criminal y que producen el acto por el cual se le aprehende. *Segundo.* Todos los que determinan la situación, valor, utilidad y aprecio del objeto robado con la convergencia de los fenómenos industriales, económicos y financieros que facilitan ó dificultan el apoderamiento de un objeto, despertando la codicia y extirpando ó entorpeciendo en el espíritu de un individuo las facultades que le hubieran permitido conseguirlo por medios lícitos. *Tercero.* Todas las condiciones especiales y semejantes de la víctima y que tienen de compararse con las del criminal para juzgar de la otra parte del fenómeno. No basta con estudiar esas tres partes que vendrían á formar por síntesis y en abstracto un robo determinado, sino que sería preciso

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

estudiar aun la colocación de todas esas circunstancias respecto al tiempo y al lugar; es decir, respecto á las probabilidades de éxito ó fracaso en la ejecución del robo; y en este nuevo orden de investigaciones es preciso estudiar la organización de la policía, la estabilidad del gobierno, la eficacia de la justicia, la educación de los jueces, etc., etc., que como otros tantos elementos morales pueden influir para alentar la perpetración del delito, ó para hacer imposible que se sorprenda ó burle la vigilancia del propietario.—Vemos, pues, que al más superficial análisis el problema se obscurece é intrinca más y más, como si en vez de un rayo de luz aislado que se hace pasar por prismas, lentes y espejos, tratamos de estudiar el crepúsculo en su momento solemne de fulgores decrecientes y descompuestos en las crestas rojas y doradas de nubes viajeras, con sus rumores vagos, con sus perfumes fugaces, con el cansancio del trabajo, con la tristeza del alma, con la llegada de las sombras y con la aparición de los reverberos que desde los más remotos y obscuros senos de una ciudad van corriendo de calle en calle iluminando las casas cerradas y las aceras desiertas.—Ya esto es mucho, y sin embargo, no es bastante para la ciencia todavía. El problema es más intrincado, porque esta distribución de los elementos constitutivos de un robo en cada una de las ciencias cuyos fenómenos vienen á converger en su perpetración, tiene que hacerse también respecto al asesinato y á la violación, respecto á la piratería y á la calumnia, respecto á la traición y al peculado, al duelo, al contrabando, al plagio, á la rebelión, y á todos los que registran, no sólo un Código particular, sino todos los Códigos que actualmente preceptúan en el planeta el modo y momento en que un hombre queda separado de la lucha encarnizada de la vida, para llevar una existencia sin esperanzas en el fondo de un calabozo, ó que erigen en dogma de necesidad el principio según el cual se reputa justo matar á un hombre con aparato y palabras solemnes; y á todo ese estudio científico del crimen es preciso unirle, hasta donde la ciencia lo permita, otro semejante de los

Códigos antiguos, y no como simple exploración histórica, sino filosófica y metódica, lanzando de cada dato observado una exploración retrospectiva que una, con sus transformaciones evolutivas, el presente con el pasado, sin saltos, sin vacíos ni transición, como las ondas de un lago que, siempre alejándose y siempre uniformes, llevan la sacudida del centro hasta los más remotos confines del horizonte.

Si el trabajo del criminologista fuera el del juez, todas estas investigaciones holgarían; pero entre uno y otro hay la diferencia que separa á lo concreto de lo abstracto, al trabajo práctico del especulativo. El juez se propone recoger todos los datos que puedan probar la culpabilidad de un individuo, y por consiguiente, acumula declaraciones y testimonios, inspección de los lugares, análisis de las substancias, dictámenes periciales y todo lo más que pueda servirle para explicar un delito con la conducta *reconstruida* del procesado. Por ese motivo hace converger toda su perspicacia á un delito determinado, al robo, por ejemplo, pero no en abstracto sino en concreto, al robo de tal objeto determinado, verificado á tales horas y tantos minutos, en un sitio deslindado, por fulano de tal, y con la cooperación detallada de sus cómplices. Toda la instrucción tiene por objeto probar la culpabilidad de un individuo, y concluido el último trámite, auto de sobreseimiento ó sentencia definitiva de absolución ó condenación, el juez abre otro expediente y comienza por el mismo camino una nueva instrucción; y así, de juicio en juicio, de juzgado en juzgado y de juez en juez, se va conservando en la sociedad ese trabajo de análisis y verificación de hipótesis que constituyen la fuerza y majestad lógicas de la Justicia. Otra, y muy distinta, es la tarea del criminologista: donde el juez acaba, el criminologista empieza; todo el trabajo judicial se convierte en un dato: un hombre por estudiar. en la prisión, y un expediente por analizar, en el archivo. No basta leer allí que el reo observado mató por ferocidad brutal, sin motivo, objeto, ni justificación, sino que será menester, observando al reo y estudiando el proceso, pre-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

guntarse ¿por qué fué la ferocidad brutal la que lo impulsó al delito? y para contestar eso, es preciso estudiar, procurando completar los datos del proceso con investigaciones propias que se hacen partir de él y se las lleva hasta los más íntimos detalles de la vida privada, hasta las más remotas tradiciones de familia, hasta los más insignificantes defectos de conformación, y aun á veces, es preciso quedar en espera de la ejecución capital para apoderarse del cadáver y escarbarlo, buscando los senos del cerebro, los pliegues de las vísceras, los canales de las arterias, los filamentos nerviosos y la contextura del esqueleto, para hallar el germen orgánico, la causa fisiológica de la ferocidad brutal que latente durante veinte ó treinta años, en un hombre, vino de repente, y en medio de la confianza del hogar, á encender la ira, á empuñar el puñal y á hundirlo en el pecho de su mejor amigo, de su padre mismo. Ahora bien, para determinar la causa de esa ferocidad brutal, que tomamos por ejemplo, se necesita desarrollar todos los elementos sociales, históricos, psicológicos y fisiológicos de que se compone, exponiendo su acción y combinación causal, de una manera científica, clara y fácil como se extienden las hojas de un abanico para enseñar los encajes y dibujos que lo forman. Basta meditar un momento sobre lo que son nada más los elementos psicológicos del delito, para comprender la enorme ilustración que debe tener un criminologista y la inmensidad de la tarea que se ha propuesto. Consideremos, por ejemplo, el género, cantidad y alcance de las ideas que tiene un criminal y la naturaleza más ó menos pervertida de sus facultades, advirtiendo que prescindimos, en primer lugar, de los elementos fisiológicos y sociales del crimen, y en el terreno psicológico, de los sentimientos y las voliciones.

El coeficiente intelectual de un individuo depende de la suma de ideas que quedan en su memoria y de la manera como las adquiere, de su instrucción y de su educación. Si las ideas que forman su criterio son reducidas, sus especulaciones serán reducidas también y sus proyectos serán muy limitados: si

aquellas son falsas, sus especulaciones pararán en el absurdo y sus proyectos en el fracaso; y finalmente, si el poder de adquisición es pobre, raquítico, gastado ó contrahecho, es decir, si las tendencias sofísticas del espíritu prevalecen sobre el instinto de verdad, si las generalizaciones son excesivas ó rudimentarias, si la abstracción no existe, si las facultades analizadoras de clasificación, etc., son toscas ó embotadas, el instrumento intelectual, en presencia de la vida, no recogerá más de ideas sofísticas, generalizaciones fantásticas ó rastreras, abstracciones primitivas, y en suma, datos confusos y embrollados, siempre que se le afoque hacia un fenómeno erizado de elementos y partes distintas, y combinadas en una acción común. Ahora bien, como el delito que el sabio estudia es un proyecto fracasado, puesto que de otro modo, ni el delincuente ni el caso se podrían estudiar, es preciso saber por qué razón el criminal no tuvo éxito en su empresa, cuáles fueron los ideales falsos que le sirvieron de principio en sus razonamientos, cuáles las verdades ignoradas, en qué sofismas incurrió y qué fenómenos fué impotente para observar y comprender. Es decir, el criminologista necesita hacer el análisis psicológico del criminal y clasificar su inteligencia en alguna de las etapas intelectuales de la humanidad, ya sea en las clases inferiores de una sociedad, en las épocas primitivas de la Historia, ó en alguno de los grupos bárbaros y salvajes que actualmente tienen las mismas ideas falsas de la vida y que razonan é infieren de la misma manera sofística y funesta. El fenómeno fatal del delito con la exposición coexistente de las circunstancias sociales y de toda especie que lo determinan, requiere, pues, entre otras cosas, un análisis detallado de la inteligencia del criminal, y el criminologista sólo puede decir que ha cumplido con su tarea, en esta parte de su programa, cuando señala limpio y aislado el elemento intelectual del crimen, de la misma manera que el cirujano enseña el proyectil extraído como causa de un sufrimiento, á la vez que muestra al enfermo dormido y con su respiración tranquila.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Para cumplir todo el programa, se necesita que un análisis semejante se haga en los sentimientos y en las voliciones; y sólo cuando se ha presentado la resultante de su combinación unida por la coexistencia y la causalidad al clima, á la raza, al país, á la civilización ó al organismo, puede decirse que el criminologista ha cumplido con una empresa verdaderamente científica.—Ahora bien, para hacer este análisis, es preciso que pueda comprender los fenómenos que constituyen el delito, que conozca todas las verdades de las ciencias que las estudian, es decir, necesita saber todas las ciencias que tienen por objeto al cuerpo, al espíritu y á la sociedad: Psicología, Fisiología y Sociología con todo su cortejo de ciencias auxiliares y con todos los principios de las preparatorias. El crimen, como el ciclón ó como las erupciones volcánicas, es un fenómeno complexo que no tiene de propio más de su complexidad misma: todos sus elementos están en las otras ciencias; pero así como es necesario conocer las leyes del calor y los fenómenos de los gases, el movimiento de la tierra y la forma de su superficie y continentes para poder estudiar con éxito las rachas formidables de agua y granizo que descuajan rocas y derrumban selvas, es necesario conocer las leyes del espíritu, del cuerpo y de la sociedad, para comprender la trágica explosión del crimen. ¡Quizás tenga sus leyes propias!.... pero tanto para investigarlas como para exponerlas, es necesario conocer, á lo sabio, los elementos que lo constituyen y el medio donde estalla; porque, lo repito, hasta hoy, el crimen, como la tempestad, no tienen de propio más de su complexidad; pero para abarcarlos en toda su confusión y volubilidad, se necesita saber lo que es el aire y la nube, lo que es la sociedad y el delincuente.

***

La cuestión se hace más ardua cuando se pretenden fijar los métodos de la Criminología. En efecto, hasta hoy, hemos

investigado las ideas que debe tener un criminologista, los elementos intelectuales de que debe formarse su criterio; pero una vez que éste ya está limpio y claro como los prismas y lentes de un telescopio, es necesario saber cómo se le afoca y adónde se le afoca. Si la Criminología fuera una ciencia ya hecha y completa, lo único que habría por hacer sería dar al criminologista científicamente educado, una lista de las obras de criminología ortodoxas y una indicación para que las tomara en los armarios de una biblioteca; pero como apenas comienza á formularse, es necesario que el criminologista no lea sino que observe, no aprenda sino que investigue. La educación intelectual de éste no es el fin de su carrera, sino su simple preparación, como la velada de las armas en la capilla gótica, no era el punto terminal de la caballería andante, sino el principio de las proezas y aventuras. Cuando ya se sabe lo que se sabe de los fenómenos que presenta el cuerpo, el espíritu y la sociedad; cuando el criterio se ha purificado con el aprendizaje de todas las ciencias que aquellas implican, es preciso que ese criterio se ponga en ejercicio, y este ejercicio no es nada menos que el de la investigación, el del *descubrimiento*. El criminologista, como el Edipo de Tebas, tiene que descifrar un enigma; ese enigma es el de la conducta humana, y la esfinge que lo guarda más impenetrable y terrible que la que despedazó á los que fracasaban á las puertas de la ciudad de Orfeo, porque esa esfinge se llama la *Preocupación*. ¿Podrá descifrarse el enigma? Sólo como se descifran los misterios: con la luz que aleja las sombras y deja percibir las cosas, tales como son en su conjunto y en sus partes: con el método y sólo con el método.

Pero ¿qué es el método?

Mucho y muy bueno se ha escrito sobre esta palabra; pero nada que de alguna manera vulgar precise su connotación. *Método* es, lógicamente hablando, la serie de investigaciones que conducen á la verdad cuando se trata de un trabajo especulativo; y la serie de procedimientos que hacen realizable un pro-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pósito, cuando se trata de un asunto práctico: la primera definición conviene á las ciencias y la segunda es peculiar á las artes, á las industrias y á las profesiones; pero de todos modos es el grito de calma, la voz de atención que el pensador solitario se da cuando la preocupación lo embarga y necesita poner en juego todas las ideas de su inteligencia ó todas las energías de su voluntad: es decir, cuando se propone descubrir verdades ó cuando se propone realizar proyectos. Cuando Kepler se propuso descubrir y formular las leyes de las revoluciones planetarias, y cuando César meditó la liberación de su ejército en Lérida; cuando Spencer vislumbró la evolución en la vida y se propuso descubrir y formular sus leyes, así como cuando Edisson quiso transformar el sonido en corrientes eléctricas; cuando Aristóteles quiso formular las reglas del silogismo y Stwart Mill los cánones de la inducción. así como cuando Napoleón quiso organizar á la Francia ó como cuando Miguel Angel quiso levantar la basílica de San Pedro; todos los pensadores, y no sólo los grandes y en las grandes especulaciones como las que tuvieron los ya citados y Macouley ó Tácito al hacer sus historias ó Maquiavelo y Talleyrand al regir la diplomacia; sino el niño mismo que hace una suma y el aprendiz de carpintería que construye una mesa; cuando concentran su inteligencia en busca de la verdad ó en pos del éxito siguen invariablemente: en un caso, una serie de investigaciones, y en el otro, una de procedimientos. En el primero, todos van pensando ordenada y sucesivamente; en el segundo, todos van obrando ordenada y sucesivamente; de tal manera, que en la investigación de la verdad, en las ciencias, ésta tiene como prueba y antecedentes forzosos las verdades anteriores, es una cadena de buzo en cuyo extremo pende la madrépora perlífera: en el éxito de las artes, el remate de las preocupaciones es la cruz de la linternilla que se levanta en la cúpula de una catedral. Es, pues, el método y ante todo la preparación del término, y para saber si aquel ha de consistir en especulaciones ó en actos, debemos saber antes cuál es el objeto de nuestra meditación, si descubrir una verdad ó realizar un proyecto.

En el asunto que nos ocupa debemos, pues, para saber si es necesario especular ú obrar, determinar el fin del criminologista: ¿busca las leyes del crimen ó se propone modificar al criminal? Si lo primero, su puesto es el gabinete y la academia; su actividad la de observar y experimentar; sus trabajos los de análisis, clasificaciones, cálculos y pruebas, y su ideal, la percepción de una inducción final; una verdad general y *exacta*, sin que le preocupen intereses, deberes ni derechos propios ó ajenos. Si el criminologista busca la verdad, debe marchar de especulación en especulación y en las sombras solitarias y mudas de los pensamientos, nada más; como quien recorriendo en la noche una galería, atraviesa sin preocupación ninguna su columnata para saber qué es la luz que en el fondo de su término vislumbra. Si por el contrario, el criminologista trata de fallar, de sentenciar, de hacer directa ó indirectamente de la vida de un hombre otra vida diferente, su camino es otro y tiene que sustituir á sus especulaciones, las órdenes, los actos y las voliciones analizadas ó impuestas empíricamente al criterio como cánones de acción. Su *cerebración* tiene de ser como la del artillero que sabiendo ó ignorando las leyes de las caídas de los cuerpos, toda su actividad la dirige á tener listo el ganado y los atalajes y á mover sus baterías para ponerla en el punto necesario á derribar una muralla. En una palabra: si el criminologista debe descubrir verdades, su puesto es la academia, el instituto y las sociedades; pero si el criminologista se propone hacer algo con los criminales, su puesto es el de legislador ó el de carcelero.

¿Busca el criminologista las leyes del crimen ó busca la extirpación del crimen?—Es necesario saber esto para precisar los métodos que le deban servir de especulación ó los métodos que le deban servir para obrar: si procura *saber*, necesitamos fijar la serie en que debe engarzar sus ideas: si se propo-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ne *obrar*, necesitamos fijar la serie de actos que le deben garantizar su propósito.

Hasta hoy, desde Beccaria y Bentham, á Lombroso y Maudsley, los pensadores que han meditado sobre el crimen se han distribuido el trabajo y unos han estudiado la manera de extirparlo y otros la naturaleza de este fenómeno: los primeros han prescrito los principios en que debe inspirarse la ley penal y organizar las penitenciarías; mientras que los segundos han buscado las causas que producen al crimen. ¿En cuál de los dos grupos está el objetivo de la Criminología? En los que pretenden saber y no obrar; aunque sus trabajos tiendan, como toda especulación humana, á convertirse en hechos y en reglas de conducta. El criminologista busca, como ya lo hemos dicho, las causas que producen al crimen y las causas que determinan la transformación del hombre honrado en delincuente; es, pues, su trabajo de investigación y no de acción: es, pues, la Criminología una Ciencia y no un arte ó una profesión; y sus métodos deben ser los de la investigación y prueba, los de todas las ciencias, y no las reglas de conducta que garanticen el éxito de un propósito.

Como lo expuse anteriormente, el crimen no tiene de peculiar sino la colocación de circunstancias que lo producen; y las causas que lo determinan, son agentes naturales, fuerzas biológicas ó sociales que en otra colocación producirían otros efectos: el mismo acto que en una época es delito, en otra no lo es; el salteador que, rifle en mano, acerca su caballo á la portezuela de una diligencia, en las filas de un batallón podría conquistar un laurel de victoria ó un ascenso en el poder; de suerte que las leyes del crimen son las leyes que determinan la conducta humana, y las causas orgánicas ó externas que producen al criminal, son las mismas que pueden formar al héroe, al mártir, al vagabundo ó al filósofo. Suponiendo que hubiera en el sistema nervioso un ganglio especial que como resorte motor, fatal é irresistiblemente impulsara al delito, el estudio de ese ganglio es como el de todos y no escapa á la

investigación de la fisiología, ni se le pueden encontrar elementos histológicos que la anatomía no puede estudiar y que no sean de su exclusivo dominio. Es, pues, el crimen un fenómeno de circunstancias y sus elementos constitutivos están estudiados en las otras ciencias, como en las otras ciencias están estudiados los agentes naturales que ocasionan el ciclón.

LIC. JULIO GUERRERO.

(Continuará).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LA ESCUELA POSITIVA DE DERECHO PENAL.

(Exposición sumaria de sus doctrinas).

Por el Lic. Carlos Díaz Infante, ex-Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.*

V

17.—Es opinión común y generalmente aceptada que, no hay remedio más eficaz contra el vicio, ni arma más poderosa contra el crimen, que la difusión, hasta lo más hondo de las últimas capas sociales, de la educación, tanto moral como intelectual. Medio es este que se reputa dotado de tan sorprendente virtud para corregir y contener la inmoralidad, que publicistas sostenedores de muy distintas doctrinas y filósofos secuaces de muy diversas escuelas, concuerdan, sin embargo, en afirmar: que la ignorancia engendra el delito y es causa fecunda de perversidad.

Antes de examinar lo que haya de verdad en las anteriores afirmaciones, conviene hacer presente que, si el problema que la educación suscita, es á la vez psicológico y sociológico, y puede por lo mismo ser tratado tanto en esta parte de mi estudio como

* Véase pág. 481 del tomo VI de esta Revista.

en aquella en que me ocupe de los factores antropológicos del delito; sin embargo, me ha parecido conveniente darle cabida en este lugar, por ofrecer, el problema en cuestión, más interés social que de cualquiera otra clase, supuesto que, no sólo los buenos ó malos efectos de la educación, sobre quien reobran es sobre la sociedad, sino que, además, ella es la verdadera dispensadora de la educación, ya lo haga empleando para ello la instrucción, medio educativo el más poderoso, ya la infiltre con sus usos, costumbres, ideas y creencias; pues, como dice el actual Director de la *Revue Philosophique:* "La educación, en su sentido exacto y completo, no consiste solamente en las lecciones de nuestros padres y maestros; las costumbres, las creencias religiosas, las letras, las conversaciones escuchadas ó sorprendidas, son otras tantas influencias mudas que obran sobre el espíritu como las percepciones latentes sobre los cuerpos y contribuyen á nuestra educación...."

Aunque la educación es ó debe ser *física, moral é intelectual,* como las encontradas opiniones se refieren sólo al influjo que estas dos últimas especies de educación ejercen sobre la moralidad, será por lo mismo de las únicas que me ocupe, exponiendo el parecer adoptado en el debate por la nueva escuela penal. Pues por lo que hace á la educación física, hay conformidad en cuanto á su bondad, porque aunque la gimnástica y la higiene, como dice Ferri en su estudio titulado: *Educación, ambiente y criminalidad,*[1] no pueden convertir un pobre inválido en un atleta, producen todavía transformaciones asombrosas," y quien consigue tener un cuerpo robusto, ágil y sano, ha dado un gran paso para lograr también la salud moral é intelectual: *mens sana in corpore sano.*

18.—Si la herencia, como lo asienta Guyau, no crea y solamente "fija y acumula cualidades," incuestionablemente que la educación, menos tiene aquel poder; aún más, en muchos casos, ni el de fijar y acumular cualidades, en el sentido estric-

1 Véase "La España Moderna." Madrid, Enero de 1893, pág. 119.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

to de estas palabras; pues es de observación constante y diaria que, jóvenes al parecer poseedores de una perfecta educación moral, pierden sus bondadosos y bellos sentimientos, en menos tiempo y con mayor facilidad del que emplearon en adquirirlos, al contacto de medios viciados. Estos casos tan frecuentes, y no patológicos, de cambio de conducta, ¿no son prueba suficiente en contrario de la fijeza de las cualidades que se reputaban sólidamente adquiridas en virtud de una larga y paciente educación moral? Y es que, el trabajo educativo, cuando es hábil y bien conducido, lo único que logra es dirigir y perfeccionar, mas no crea ni sentimientos ni facultades; se habitúa en ocasiones á obrar en determinado sentido; para que este hábito se fije irrevocablemente y venga á formar parte del carácter de una persona, es preciso, como lo hace notar Sciamanna, "que ningún vicio de conformación, ningún estado patológico, ninguna condición hereditaria habiendo durado en una larga serie de generaciones, hayan hecho ciertos centros nerviosos inexcitables." La educación, según el parecer de Spencer, [1] podrá disminuir nuestras inclinaciones naturales no destruirlas, pues la más hábilmente dirigida no puede cambiar totalmente la manera de ser. *Genio y figura hasta la sepultura:* adagio es este con el que el pueblo, manifestaba antes que el sabio, no sólo su creencia en la tiranía de las predisposiciones naturales, sino también la idea de que la educación ni es freno que sujeta, ni es yugo que doma naturalezas de suyo congenitalmente indisciplinadas y rebeldes.

La influencia de la educación es tan limitada cuando tropieza con defectos congenitales y predisposiciones naturalmente poco ó nada modificables, que nadie duda de la proporcionada eficacia de la educación intelectual, según la mayor ó menor potencia de las facultades sobre que se emplea, pues nadie cree que la educación sola pueda hacer un Sócrates ó un Spencer, un Cicerón ó un Castelar, un Homero ó un Dan-

1 De la educación intelectual, moral y física. Traducción de D. Enrique M. de los Ríos. México, 1887, pág. 162.

te. Aquella influencia—la de la educación—depende tanto del modo de ser del educando que, "tómese, como dice Maudsley, [1] el hijo de un salvaje de Australia y el hijo de un europeo ordinario, sujéteseles al mismo trabajo y á la misma educación; en un caso, se verá que se dispone de un instrumento complexo que ha recibido el tono de la civilización y que suena fácilmente si se le toca de una manera conveniente; en el otro caso, al contrario, no se tiene más que un instrumento imperfecto, del que se pueden sacar algunas notas, pero no las más altas, cualquiera que sea la habilidad con que se le maneje." Si pues la mejor educación no puede crear facultades intelectuales ahí donde no las hay, ni obtener de las que haya más provecho que el que naturalmente están hechas á dar, ¿por qué la educación había de hacer nacer instintos morales donde no se encuentran, ó había de modificar substancialmente los defectuosos?

Según Ferri, dada la distinta naturaleza moral de los hombres, éstos pueden dividirse en tres grupos ó categorías: la primera, comprende á todos aquellos que carecen absolutamente de instintos morales, carencia á la que Guyau llama *idiotismo moral;* clase desalmada y feroz en cuyo seno rugen y se agitan todas las malas pasiones, pero por fortuna poco numerosa, pues según el propio Ferri, es corto el número de estos desheredados de sentimientos humanos. La segunda categoría, opuesta á la anterior, y por desgracia también poco numerosa, la forman todas esas bellas naturalezas morales, organizadas naturalmente para el bien en cuyo seno nacen todos los actos abnegados y florecen todos los sentimientos altruistas. Viene, por último, el tercer grupo, el más numeroso de los tres, pues comprende todas las naturalezas morales medias, naturalezas oscilantes entre el vicio y la virtud, ni decididamente buenas, ni decididamente malas, naturalezas que, semejantes á veletas giran en uno ó en otro sentido según el lado de donde

1 La Pathologie de l'esprit. París, 1883, pág. 95.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el viento sopla; estado moral es este, caracterizado por el capricho y apellidado por Guyau: de *atonia moral*. Atenta esta variedad de inclinaciones, aptitudes y caracteres morales, se puede ya dar contestación á esta pregunta que Ferri hace, en su estudio últimamente citado: "En el orden moral ¿cuál y cuánta es la eficacia de la educación?

Tratándose del primer grupo, naturalezas insensibles é idiotas moralmente, la contestación no ofrece dificultad: la eficacia de la educación es mala; porque un defecto congenital de organización, consistente en la falta de instintos morales, no puede ser subsanado por los procedimientos y sistemas más adecuados y perfectos de educación, á menos que se quiera hacer representar á tales sistemas y procedimientos educativos, como dice Garofalo, un papel semejante al del Dios del Génesis, el de creadores *ex–nihilo*. Acerca de la segunda categoría, la opinión de Guyau es, en mi concepto, la verdadera, esto es, que esas naturalezas moralmente bellas, "realizan el *maximum de herencia* fecunda y de *educabilidad* fecunda." El perfeccionamiento que sus naturales cualidades de bondad, dulzura y generosidad, reciben de manos de la educación, es admirable. Sin la educación, todas esas cualidades y otras muchas no alcanzarían en los seres que forman esa categoría privilegiada, la espléndida grandeza que nos admira y sorprende, y es que, el germen más lleno de vida, ni florece ni da frutos si no se le cultiva. El sentir de Ferri que para eximias naturalezas, "la educación moral es bastante superflua," contiene para mí una exageración, pues es preciso convenir que, por el contrario, les es útil y provechosa: encauza y desarrolla aquella educación sus sentimientos, que si hubieran sido, aun sin la ayuda de la labor educativa, honrados, no habrían sin ésta llegado á ser moralmente superiores.

Llego al tercer grupo, en que el problema se hace más arduo y se complica; pues la respuesta no es tan fácil de dar, tratándose de estas naturalezas veleidosas en quienes, la verdad sea dicha, si la educación puede en ocasiones mucho, en otras

no puede nada, si no se encuentra ayudada por el medio social ambiente; los buenos como los malos resultados de la educación, dependen en ellas, por decirlo así, de circunstancias imprevistas y azarosas. Dadles á los poseedores de estas naturalezas un caldo, que diría Lacassagne, sin fermentos, serán ciudadanos honrados y personas con quienes nada tendrá que ver el Código penal; pero dadles, por el contrario, un caldo fermentado y formarán el contingente mayor de la delincuencia, como de hecho lo forman; su vida transcurrirá entre bregar hoy por salir de la prisión y luchar mañana por volver á la cárcel.

Para Ribot, la educación no tiene eficacia, sino sobre las naturalezas medias. "Pero contra esta afirmación, contesta Ferri,[1] puede objetarse que si un carácter es poco firme, flojo por naturaleza, su misma falta de temple excluye la posibilidad de una acción eficaz, esto es, continua y estable de la educación en un sentido ó en otro. En las arenas del desierto, movibles por todos los soplos del viento, no puede permanecer impresa ninguna huella, y esto significa que si la educación podrá muy poco sobre estas naturalezas medias, en cambio podrá mucho más el medio ambiente, dentro del cual se hallen." Sin negar la influencia que el medio social ambiente ejerce sobre estas naturalezas, y que él es un poderoso auxiliar de la educación moral, sin embargo, la educación logra en muchas de estas naturalezas, si no destruir los malos instintos que hay en ellas, sí desarrollar los buenos á tal grado, que este desarrollo sofoca aquellos malos instintos; y porque tal puede conseguirse, la importancia de la educación moral es suma, puesto que, al lograr semejante resultado, debe tenerse presente que no sólo ha mejorado al individuo actual, sino que ha trabajado en pro de la moralidad de la raza, lo que centuplica el valor y el mérito de lo que, á primera vista, parece consiguió su labor. Y esa moralidad—la de la raza—con su salud y su vigor físicos,

1 Véase "La España Moderna." Madrid, Enero de 1893, pág. 124.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

como lo asienta el malogrado Guyau,[1] debe ser hoy el objetivo principal de la educación, porque un gran medio moralizador de los pueblos, las religiones, tiende á perder su poder, vacíos como van quedando los templos de oraciones y los altares de Dioses.

Si en nombre del idealismo, hay que reducir y amenguar el optimismo idealista, tan común acerca de la influencia moralizadora de la educación, y que limitan el poder de ésta, en nombre de esa misma ciencia hay que recomendar que esa educación se imparta de una manera científica y no empírica, á fin de ensanchar aquellos límites y de obtener todo el provecho posible de la educación moral; lo que, sin duda, sólo alcanzará, del todo, hasta que se logre descubrir el asiento orgánico y el verdadero funcionalismo de las pasiones humanas.

Si el organismo psíquico, á semejanza del físico, tiene su período natural de crecimiento y de desarrollo, terminado éste ó ya muy avanzado, continuará la educación diaria y de todos los momentos de la vida, enriqueciendo el espíritu con un caudal de experiencia ó con acopio de nuevos conocimientos de muy diversas clases; pero ya su principal papel, el de dirigir y perfeccionar facultades tanto morales como intelectuales, ha terminado, Y si la influencia de la educación se encierra en ciertos límites, tratándose de facultades morales en vía de crecimiento y desarrollo, natural es, que mientras más avancen éstos, la educación pierda en la dirección y perfeccionamiento de aquellas, fuerza y poder; lo mismo puede decirse respecto de las facultades intelectuales. Así, si la mayor influencia de la educación corresponde á los primeros años de la vida, ¿cuál puede ser la que ejerza en criminales que hace tiempo pasaron de los dinteles de la infancia, cruzaron los de la juventud y han llegado á la plenitud y madurez de la edad y con ella á la de su organismo psíquico y físico? Excusado me parece contestar y sólo sí haré presente: que la escuela correccionalista, que busca por medio de la educación la regeneración moral del culpable, persigue una utopía. Sin anticipar una clasificación de las distintas clases de delincuentes, que aún no hace falta y sería extemporánea, para convencer de lo irrealizable de los propósitos de la escuela correccionalista, basta hacer notar que, aquellos criminales en quienes los instintos morales hacen falta por un defecto congénito de su organización, ni el *trabajo educativo*, ni la *educación*, procurada por medio de la instrucción, dará en ellos resultados, supuesto que, careciendo precisamente de los instintos ó facultades que se trata de educar, ¿sobre qué recae y en qué obra la educación? Además, ¿qué la regeneración del hombre puede resultar de un procedimiento mecánico? esto es lo que niega Spencer, Mittelstadt y lord Stanley. En los criminales que delinquen por hábito adquirido, el efecto de la educación y del trabajo viene á ser el mismo que en los anteriores; ese hábito, es ya en ellos su verdadera naturaleza moral, hábito en este caso, persistente y tenaz, pues indudable, como dice Garofalo,[1] "la *influencia deletérea* de una *mala educación* ó de un *medio social depravado*, puede sofocar enteramente el sentido moral transmitido, y sustituirlo por los más malos instintos. De suerte que la *creación artificial de un buen carácter será siempre poco estable*, mientras que la de un *mal carácter será completa*." Con estos criminales lo que la educación y un medio social apropiado no lograron á tiempo, es decir, cuando el mal instinto empezaba á germinar, todo lo que con posterioridad se haga con ellos para volverlos al buen sendero, es inútil. Quedan, por último, los que delinquen ocasionalmente y los criminales por pasión; para obtener la corregibilidad de éstos no hace falta la educación, sino medidas de prevención social: educados ó no, delinquirán siempre que el excitante exterior venga á sofocar en ellos, aunque sea momentáneamente, sus instintos y sentimientos morales.

1 Education et Herideté. París, 1892, pág. 70.

1 Obra citada, pág. 147.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

19.—Se ha visto qué es lo que puede esperarse y qué es lo que puede obtenerse de la educación moral; trátase ahora de saber, no la influencia que la educación ejerce sobre las facultades intelectuales, pues siendo más conocidos los coeficientes orgánicos de que tales facultades dependen, la educación intelectual da más seguros resultados y produce mejores frutos que la educación moral; pero no es esta la cuestión, sino la de saber la influencia que la instrucción, tanto elemental como superior, ejerce en la moralidad humana, ó lo que es lo mismo, si la ignorancia, como tanto se ha dicho, es una causa fecunda de criminalidad.

Locke, en el siglo XVII, enseñaba que la bondad ó maldad de los hombres dependía de la educación; Helvetius, en el pasado, que la virtud es producto de la instrucción y el vicio de la ignorancia; igual opinión profesaron Condorcet y La Mettrie. En el presente siglo, que ha presenciado los más grandes adelantos en todos los ramos del saber humano, y que ha visto nacer y desarrollarse tantas ciencias y entre ellas la verdadera ciencia pedagógica, innumerables autores han sostenido las mismas ideas que Helvetius, bastando citar, entre los contemporáneos, á Büchner, Acollas, Minzloff y Fouillée, quien reproduciendo el pensamiento de Víctor Hugo, que por cada escuela que se abre una prisión se cierra, escribe en su *Science sociale contemporaine*:[1] "Pero para que una sociedad tenga el derecho de justificar así la fuerza coercitiva, y de inscribir hasta sobre los muros de las prisiones la palabra "libertad," es preciso que antes de ocurrir á la justicia represiva para reparar las colisiones, haya hecho todo lo que puede hacerse para prevenirlas por la *instrucción universal*, que es la verdadera forma legítima de la justicia preventiva. Mientras más progresa la ciencia, más reconoce que el criminal es un insensato, frecuentemente un *ignorante. Mientras más escuelas haya, menos prisiones habrá;* sobre la puerta de las escuelas, mejor que sobre la de las cárceles, es preciso inscribir la divisa del derecho: *Libertas.*" Pero parece que este filósofo, algún tiempo después,[1] había perdido muchas de sus ilusiones sobre la eficacia de la educación para preservar del delito, y le había retirado la absoluta confianza que tenía en su poder moralizador.

1 París. Hachette, 1885, pág. 322.

En contrario de estas opiniones, hay, sin embargo, las de autores no menos reputados. Así, Guyau[2] escribe: "Fuerza es, pues, reconocer que la mayor ó menor proporción de *ignorantes* entre los *criminales*, lígase á la más ó menos grande ignorancia de las masas, no al efecto *desmoralizador de la ignorancia sola.*" Garofalo,[3] á su vez, dice: "Sin apresurarnos á concluir de esto—de los datos suministrados por la estadística—que la instrucción tenga una influencia maléfica, podemos limitarnos á asegurar que la influencia benéfica es del todo nula, al menos por lo que hace al número total de los crímenes; porque la instrucción, desarrollando conocimientos y aptitudes, puede determinar *especialidades criminales.....*" "Es superfluo detenernos más en esto, porque aunque no tuviéramos cifras en nuestro apoyo, el simple buen sentido ¿no nos diría que no hay ninguna relación entre la gramática y la inmoralidad? ¿Puede acaso imaginarse, por ejemplo, que una pasión cualquiera ó aun una preocupación de honor puede ser destruida por el alfabeto?" Corroboran lo pensado por Garofalo, estos conceptos de un psicólogo, alienista tan competente como el Dr. Despine:[4] "Las facultades intelectuales solas no procuran los conocimientos instintivos dados por las facultades morales; no tienen semejante poder. Lo que la naturaleza ha querido que conozcamos por las facultades instintivas, es decir, por inspiraciones espontáneas, no puede ser conocido sino por estas facultades...." Luego, por mucho que se cultiven

1 Véase Revue des Deux-Mondes. Julio 15 de 1890.
2 Obra citada, pág. 130.
3 Obra citada, pág. 158.
4 De la Folie au point de vue philosophique. París, 1875, pág. 39.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las facultades intelectuales, este cultivo es estéril á la moralidad del individuo: se puede ser intelectualmente superior y moralmente inferior. Por no ser demasiado cansado, no cito textualmente las opiniones de Tarde y Lombroso, quienes, por lo que hace á la instrucción primaria, son del mismo parecer y tan explícitos como los anteriores autores; pero no puedo pasarme de hacerlo con Proal, testigo irrecusable tanto por parte de los penalistas clásicos, como por parte de los que profesan ideas filosóficas demasiado espiritualistas y metafísicas.

"Cuando se supone, dice este autor,[1] que basta razonar correctamente para obrar bien, se olvida mucho que el hombre no es puro espíritu; que los placeres de los sentidos tienen una grande influencia sobre de él; que las pasiones hacen con frecuencia callar á la razón." Y es que como dijo el poeta:

Video meliora proboque;
Deteriora sequor.

"Las estadísticas criminales, añade más adelante el mismo autor, establecen que no hay relación entre la ignorancia y la criminalidad. *Se han abierto muchas escuelas, pero no se ha cerrado aún ninguna prisión;* por el contrario, ha sido preciso construir nuevas ó agrandar las antiguas. La criminalidad no ha disminuido, mientras que la instrucción se ha difundido más y más."

Y hay que asentir á las afirmaciones hechas por los autores que niegan la eficacia moralizadora de la instrucción, porque tienen en su apoyo el firmísimo testimonio de los hechos, mientras que las de los mantenedores de tal eficacia, más bien parece que sólo son debidas á excelentes y nobilísimos deseos y resultado de idealismos sin consistencia.

20.—He aquí ahora algunos de los hechos que prestan testimonio en favor de los autores que sostienen la ninguna relación que existe entre la ignorancia y el crimen.

1 Le crime et la peine. París, 1892, págs. 178 y 184.

A principios del presente siglo sucedia en Francia que, sobre 100 acusados, 61 eran ignorantes y 39 habían recibido alguna instrucción; hoy que ésta se ha difundido extraordinariamente en aquel país, pasa lo contrario: sobre 100 acusados, 70 tienen instrucción y 30 carecen de ella. En la misma Francia se nota, mejor que en cualquiera otra nación, que la cultura que poseen los obreros es superior á la de los campesinos, y sin embargo, sobre 100,000 habitantes, las clases manufactureras suministran el 23% de los acusados, las clases que se dedican á artes ú oficios 32% y las clases agricultoras sólo contribuyen con un contingente de 13.9%. La estadística criminal francesa de 1880, comparó el número proporcional de los habitantes letrados de un departamento, al número proporcional de acusados en el mismo departamento, y estos son los resultados:

Departamentos.	Iletrados por 100 habitantes.	Acusados por 100,000 habitantes.
6	7 á 10	9
13	11 „ 20	13
22	21 „ 30	11
23	31 „ 40	11
11	41 „ 50	11
11	51 „ 62	8

"Si la ignorancia fuera la única fuente de los crímenes, dice el Ministro de Justicia, las dos proporciones marcharían en el mismo sentido; pero lo más frecuentemente, pasiones y vicios, independientes de toda cuestión de instrucción, son los verdaderos móviles de los delitos."

Agregaré á los anteriores datos, estos otros que tomo también de Proal.[1]

"El Finistère y el Morbihan, dice, son los departamentos

1 Obra citada, pág. 185.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en que hay más acusados iletrados; sin embargo, aunque la criminalidad de la Francia es de 517 acusados sobre 100,000 habitantes, se cuentan solamente 356 en el Morbihan y 437 en el Finistère. Luego no hay relación entre la ignorancia y la criminalidad. Otra prueba: Los departamentos del Sena, del Sena-y-Marne, son aquellos en que hay menos acusados iletrados, y sin embargo, se cuentan sobre 100,000 habitantes, 961 acusados en el Sena y 713 en el Sena-y-Marne; en el Marne pasa lo mismo, pues cuenta con 732 acusados por cada 100,000 habitantes, aunque los iletrados son pocos en número. En resumen, los departamentos que cuentan con menos acusados iletrados, tienen una criminalidad dos veces mayor que el Morbihan y el Finistère. El departamento de Herault, según la última estadística, no cuenta más que con un solo iletrado por 100 habitantes; pero su criminalidad es de 815 sobre 100,000, es decir, más del doble de la del Morbihan."

En Italia, Lombroso[1] comparó 500 criminales con 100 personas no criminales, y encontró la ignorancia y la instrucción elemental repartidas de esta manera:

	Delincuentes.	Normales.
Analfabéticos	6%	12%
Instrucción elemental	95%	67%

Garofalo escribe: "La categoría más miserable y más ignorante en Italia, la de los agricultores, da el 25.39% de los castigados correccionalmente, mientras que las clases más instruidas, las de los comerciantes, industriales, estudiantes, militares, empleados, profesores y artistas, dan el 13.58%. No es necesario consultar las estadísticas generales para decir que, proporcionalmente á su número, estas últimas clases se dejan más fácilmente arrastrar al crimen que la primera."

En España, Jimeno Agins hace notar que, los *iletrados* forman las dos terceras partes de la población total del país, y sin embargo, no participan más que por *mitad* en la perpetración de los delitos."

1 L'Homme criminelle. París, 1887, pág. 444.

Silió y Cortés,[1] pone de relieve, en el cuadro que presenta de la instrucción y criminalidad de España, que no son las provincias que más alumnos tienen en sus escuelas, aquellas en donde el delito es menos frecuente, expresándose al efecto en los siguientes términos: "Si descendiendo á un orden de hechos más minucioso nos fijamos en la criminalidad respectiva de cada provincia, se observa, según claramente indica el cuadro unido á este capítulo, que no son siempre, ni siquiera con más frecuencia, aquellas provincias en que la instrucción se encuentra menos atendida, las que aportan un contingente más grande á la criminalidad, sino que, por el contrario, sucede á veces que las provincias menos cultas se señalan también como las menos criminales."

21.—Si los anteriores datos estadísticos revelan con claridad, que la instrucción elemental es impropia para moralizar al individuo, pues su savia fecunda y fertiliza otros campos que los de los instintos ó facultades morales, ¿hay algunos que demuestren y prueben lo contrario respecto de la instrucción superior?

Tarde y otros autores se inclinan á creer en la eficacia moralizadora de la instrucción superior, siempre que llene ciertas condiciones que el pensador citado parece reduce á dos, esto es, á que dicha instrucción no sólo revista el carácter de profesional, sino ante todo que sea eminentemente *estética* y *clásica;* bajo la norma de estas dos condiciones, no duda de su poder moralizador; y por lo mismo, debe "extenderse tan lejos como se pueda la educación profesional." Sin poner en duda las ventajas que proporciona la difusión de la instrucción superior, y la utilidad social que de tal difusión resulta, sin amenguar en lo más mínimo la importancia que en sí tiene el

1 Obra citada, pags. 235 y 241.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

estudio de lo bello y sublime, de lo heroico y grandioso; sin embargo, no hay que atribuir aquellas ventajas y utilidades de la instrucción superior á su virtud moralizadora, sino á otras que á nadie pueden ocultarse y que no son del caso referirlas aquí; pues por lo que hace á la virtud en tela de juicio, los hechos vienen de nuevo á decir que tienen razón los que sostienen que la instrucción superior carece de la cualidad que le atribuyen Tarde y otros muchos autores.

En Francia, hace cincuenta años, por cada 100 criminales había 2 que habían recibido instrucción superior; hoy que esa instrucción ha aumentado considerablemente, la proporción es de 6%; en 1879 la clase agrícola suministró el 49% de los homicidas, formando el 53% de la población, y los que ejercen profesiones liberales, que forman el 4% de la misma población, contribuyeron con el 7% á formar el contingente de dichos criminales.

"La criminalidad, dice Lombroso,[1] es desgraciadamente más frecuente entre los que ejercen profesiones liberales. En Italia, entre los criminales, encontramos 6.1% que han recibido una cultura superior; en Francia 6%; en Austria de 3.6 á 3.11%; en Baviera 4%. Estas cifras tienen su elocuencia; la proporción es aquí relativamente mayor que entre las otras clases de la sociedad."

Lo que sí parece ser cierto, según una afirmación de Messedaglia es, que las personas que se dedican al cultivo de las ciencias, son las que menos contingente suministran al crimen. "Esto nada tiene de extraño, escribe Lombroso,[2] hombres acostumbrados á respirar la serena atmósfera de la ciencia, que es ya un fin y un placer por sí misma; hombres que tienen continuamente ante su vista el criterio de lo verdadero, triunfan más fácilmente de las pasiones brutales y repugnan extraviarse en las vías tortuosas del crimen. Por otra parte, mejor que los demás hombres, comprenden cuán injusta é ilógica es una

1 Obra citada, pág. 447.
2 Obra citada, pág. 444.

acción culpable, y también cuán sin provecho, puesto que ella se torna siempre contra su autor."

22.—Si la educación no tiene sobre las pasiones y vicios de los hombres, toda la feliz influencia que noblemente le atribuyen algunos autores, ni es tampoco la panacea, el antídoto tan recomendado en contra de la maldad y el crimen, debido esto á que, como lo asegura Mandsley, es una fuerza limitada por la capacidad inherente á cada individuo; esto, no obstante, es un deber social de los más imperiosos, el de procurar que dentro de esos límites produzca el mayor beneficio posible al individuo, la utilidad mayor á la comunidad. Pero esto no se logra en el orden moral, sólo con multiplicar el número de las escuelas, en donde se enseña en forma de máximas ó de ejemplos teóricos, un conjunto de deberes y de obligaciones morales, que si pueden grabarse en la memoria del educando no así en sus sentimientos; para llegar á obtener este resultado es preciso, como lo quiere Ferri y con él otros muchos, hacer uso del ejemplo práctico y continuo, "ejemplo dado por todas las instituciones sociales del gobierno á la prensa, del teatro á las fiestas públicas."

Un buen régimen educativo, por medio del cual estima el propio Ferri[1] se lograría no pequeña victoria sobre el crimen y el vicio, demanda: además de una vigilancia constante é inteligente sobre las escuelas, principalmente las no laicas, que son con frecuencia focos de infección, tratándose de delitos contra el pudor, el que se tomaran las siguientes medidas: *Educación protectora de la infancia abandonada;* á esta protección le debe Inglaterra, en gran parte, la diminución de su criminalidad más grave.—*Aplicación del método experimental á la pedagogía;* este método, dándole al alumno menos arqueología y más conocimientos prácticos, hará á los hombres más aptos para la lucha por la vida, disminuyendo de esta manera el número de los *inútiles*, que son candidatos para el crimen.

1 Obra citada, pág. 246.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

—*Supresión de las casas de juego;* casas donde mayores y menores de edad, pierden no solamente el dinero, sino también la delicadeza, el honor y la vergüenza: pudrideros morales, de donde muchos salen para la cárcel ó para entregarse en brazos del suicidio.—*Prohibición de espectáculos atroces y de fiestas sensuales;* sustituyéndolas por teatros al alcance de todas las clases sociales y recreos higiénicos y gimnásticos.—*Prohibición de publicaciones deshonestas;* que se ocupan únicamente de reseñar el crimen ó el vicio, con el solo objeto de explotar las pasiones humanas.—*Restringir la entrada á los jurados y tribunales;* á donde los menores y reincidentes acuden, los primeros á aprender la manera de cometer el delito, y los segundos á perfeccionarse en la de perpetrarlo con más astucia y precauciones.

Estas medidas en el orden educativo, y otras más que podrían tomarse en el mismo orden, serían de más seguro resultado contra el crimen, que los castigos del Código penal.

(Continuará).

EL AGUA EN SUS RELACIONES CON EL DERECHO INTERNACIONAL,

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL.

Elemento esencial á la vida humana y á la vida general de todos los seres, donde toma el hombre su nutrición y existencia; alimento necesario de la agricultura, fuente primera de toda riqueza y de toda vida; agente maravilloso del comercio y de fáciles y baratos transportes, que aproxima inmensas distancias y comunica y acerca pueblos y centros productores esparcidos en remotas regiones; condición de salud, de higiene y aun de ornato público y privado, *el agua* representa no sólo el papel más importante en la civilización de un pueblo, sino el medio directo de extraer todas las riquezas del suelo y comunicar valor á todos los productos de la vida humana.

Por desgracia, este agente indispensable de la vida física y de la vida económica de la humanidad, no se presenta en la naturaleza con la misma abundancia y carácter de inagotabilidad que el aire y que la luz; sino que las condiciones geográficas, orográficas, geológicas, topográficas y climatéricas de cada región, de cada pueblo, de cada territorio, la producen abundante y fácilmente utilizable, ó escasa, mal repartida y difícilmente utilizable.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

—*Supresión de las casas de juego;* casas donde mayores y menores de edad, pierden no solamente el dinero, sino también la delicadeza, el honor y la vergüenza: pudrideros morales, de donde muchos salen para la cárcel ó para entregarse en brazos del suicidio.—*Prohibición de espectáculos atroces y de fiestas sensuales;* sustituyéndolas por teatros al alcance de todas las clases sociales y recreos higiénicos y gimnásticos.—*Prohibición de publicaciones deshonestas;* que se ocupan únicamente de reseñar el crimen ó el vicio, con el solo objeto de explotar las pasiones humanas.—*Restringir la entrada á los jurados y tribunales;* á donde los menores y reincidentes acuden, los primeros á aprender la manera de cometer el delito, y los segundos á perfeccionarse en la de perpetrarlo con más astucia y precauciones.

Estas medidas en el orden educativo, y otras más que podrían tomarse en el mismo orden, serían de más seguro resultado contra el crimen, que los castigos del Código penal.

(Continuará).

EL AGUA EN SUS RELACIONES CON EL DERECHO INTERNACIONAL,

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL.

Elemento esencial á la vida humana y á la vida general de todos los seres, donde toma el hombre su nutrición y existencia; alimento necesario de la agricultura, fuente primera de toda riqueza y de toda vida; agente maravilloso del comercio y de fáciles y baratos transportes, que aproxima inmensas distancias y comunica y acerca pueblos y centros productores esparcidos en remotas regiones; condición de salud, de higiene y aun de ornato público y privado, *el agua* representa no sólo el papel más importante en la civilización de un pueblo, sino el medio directo de extraer todas las riquezas del suelo y comunicar valor á todos los productos de la vida humana.

Por desgracia, este agente indispensable de la vida física y de la vida económica de la humanidad, no se presenta en la naturaleza con la misma abundancia y carácter de inagotabilidad que el aire y que la luz; sino que las condiciones geográficas, orográficas, geológicas, topográficas y climatéricas de cada región, de cada pueblo, de cada territorio, la producen abundante y fácilmente utilizable, ó escasa, mal repartida y difícilmente utilizable.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

He aquí por qué el derecho, regulador supremo de todas las cosas útiles, no se limita, ni limitarse puede, á decir, como lo hace tratándose del aire, de la luz, etc., que el agua es un don común de la naturaleza que todo hombre puede usar y aprovechar libremente, por ser bienes comunes según su naturaleza. (Et quidem *naturali jure communia* hæc: aer, aqua profluens, et mare et per hoc littora maris. Inst. Lib. II, tít. I, § I, Ley 3ª, lib. 28, Pª 3ª), sino que tiene que regular su apropiación, en virtud de la naturaleza limitada de ese manantial de vida, introduciendo distinciones importantes, clasificando las diversas corrientes, fuentes ó veneros de ese elemento, conciliando el interés público con los intereses privados, asimilando á veces el agua con la tierra donde se halle, y á veces formando una propiedad distinta regida por criterios y reglas diversas, adoptándose, en fin, en todo este proceso jurídico, á las indicaciones del suelo donde se legisla, á las formas en que se presenta este líquido inapreciable en las diversas regiones del globo.

Me propuse, pues, seguir el desenvolvimiento histórico y jurídico de nuestra legislación en este punto y presentar un cuadro completo, hasta donde mis escasos conocimientos me lo permitan, de nuestro derecho sobre apropiación, uso y servidumbres de aguas, para deducir después algunas consideraciones relativas á la necesidad ingente de expedir algunas leyes reglamentarias en beneficio de la agricultura y de la industria.

El agua se presenta en la naturaleza bajo varias formas: ora es *el Océano* inmenso que separa lejanos continentes y cuyas costas baña con flujos y reflujos periódicos explicados por la ciencia astronómica; ora son *los mares*, cuya extensión menos considerable forma otra de tantas vías de comunicación, y que además encierran en su seno riquezas incalculables; ora son los *ríos navegables ó flotables*, que naciendo y formándose por las vertientes de las altas montañas y que á la vez que son un elemento de desarrollo para la agricultura, sirven también de

medios de transporte para el comercio de los pueblos; ya *en lagos y lagunas*, cuyas aguas estancadas, navegables también, suministran la pesca como un elemento poderoso de riqueza; ya son *fuentes ó manantiales*, que dan la vida á millares de animales criados por la naturaleza para el sustento y necesidades del hombre; y por último, las *aguas subterráneas*, que como una inmensa red de hiletes de agua, parecen representar el sistema venoso hidrográfico de nuestras montañas y planicies, y que el hombre, en su afán incansable de sorprender los secretos de la naturaleza, ha logrado descubrir por medio de máquinas perforadoras y del poderoso explosivo de Nöbel, obligando á estas aguas á seguir cauces artificiales bajo la forma de *pozos artesianos* para las brotantes, y *tajos ó túneles* para las corrientes.

Estas diversas formas de manifestación del agua y las condiciones estáticas y dinámicas que presenta estancada en lagos, presas, diques ó en forma de cascadas, ríos y manantiales, influyen necesariamente en el uso y aprovechamiento jurídico, y por eso la legislación ha ido trazando insensiblemente las diversas maneras de adquirir, conservar y usar las aguas en todas sus diversas manifestaciones.

* * *

Para mayor claridad en el desarrollo de este pequeño estudio, el método aconseja tratar las siguientes cuestiones:

I. Descripción física de las aguas en México, según su orografía y geología.

II. Reseña histórica sobre el origen de la propiedad inmueble en México y de las aguas en general.

III. De la naturaleza jurídica del agua.

IV. División de las aguas, en públicas y privadas.—Las públicas en comunes y propias, y éstas, de la Federación, de los Estados y de los Municipios. Las privadas en aguas que corren en la superficie y subterráneas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

V. De las servidumbres de aguas en general.

VI. Propiedad, uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas.

VII. Reformas necesarias en nuestra legislación, y urgencia de una ley especial que reglamente el uso y aprovechamiento de las aguas, en beneficio de la agricultura y de la industria.

I

DESCRIPCION FISICA DE LAS AGUAS EN MEXICO, SEGUN SU OROGRAFIA Y GEOLOGIA.

Para comprender toda la importancia de nuestra legislación sobre las corrientes de agua, es indispensable dar una idea general del estado físico del país.

Antes de entrar al examen de nuestra legislación, echemos una mirada rápida á la naturaleza orográfica y geológica de nuestra República.

"Allá[1] donde confundidas las olas del Atlántico y del Pacífico azotan las solitarias costas de la tierra del Fuego y de la Patagonia, surge del fondo del Océano la majestuosa y variadísima cordillera de los Andes,[2] que ensanchándose hasta una amplitud de 240 kilómetros y elevándose á una altura de 6,750 metros (en *Aconcagua*, límite físico entre Argentina y Chile), llega á estrecharse y descender en el Istmo de Panamá, hasta convertirse en una colina prolongada ó lengua de tierra de 100 á 300 metros de altura y 289 kilómetros de extensión.

Pero esa masa granítica, ensanchándose de nuevo y haciéndose compacta, forma entre Guatemala y Chiapas el núcleo llamado Sierra Madre.[3] Allí engendra dos ramales secundarios, siguiendo la cordillera principal su majestuosa y atrevida elevación por Oaxaca y Tehuacán, ostentando su más soberbia elevación en las mesetas de México, Puebla; Jalapa, Orizaba, Toluca, Guanajuato, Querétaro y la importante cuenca del Valle de México, prolongándose estos valles hacia el Norte con las planicies del bajío y así sucesivamente entre valles más ó menos extensos, rodeados y atravesados por pequeñas serranías más ó menos elevadas y sinuosas hasta alcanzar las cuencas del río Bravo, cuya continuación va á perderse en la Sierra Verde del territorio americano.

1 Parte de esta descripción orográfica está tomada de una obra inédita de mi ilustrado maestro el Sr. Lic. J. Pallares.

2 De *anti cobre*, nombre que se dió originariamente á las montañas del Perú.

3 Bajo el grado 19 de latitud en Zempoaltepec (Oaxaca).

En tanto que así despliega su gigantesca mole la cordillera Madre de los Andes Mexicanos, las otras dos cordilleras engendradas en el apretado núcleo que se forma entre Chiapas y Guatemala, se prolonga en dos divisiones paralelas hacia el Norte: la cordillera Oriental, se dirige hacia el mineral de Catorce[1] (E. de San Luis Potosí), donde empieza á declinar insensiblemente hacia Coahuila, hasta perderse en el Estado de Nuevo León y la cordillera Occidental extendiéndose por Jalisco, penetra en el mineral Bolaños[2] (E. de Jalisco), se declina por Michoacán en el Estado de Sinaloa para dirigirse á Sonora, perdiéndose en las márgenes del río Gila."

Por lo expuesto se ve que nuestro país constituye el apéndice principal de la América del Norte y la porción interoceánica del golfo de México y el Océano Pacífico.

Los sistemas montañosos que define la orografía de Méxica, pueden considerarse, por el Norte, como la prolongación del sistema orográfico de los Estados Unidos, es decir, de la cordillera Californiana y de las montañas Rocallosas, y por el Sur es la continuación de la cordillera de los Andes y como el esqueleto de toda la América.

1 Mineral descubierto en 1772 por Sebastián Coronado y Antonio Llamas.
La etimología de este lugar, según un curioso manuscrito, es debida á la muerte de catorce soldados españoles, causada por los indios bárbaros poco después de conquistado el territorio de San Luis Potosí. Dic. geogr. y estadístico de la República Mexicana. Tom. III, pág. 383.

2 El punto más alto de la Sierra de Bolaños, tiene 2,802 ms. sobre el nivel del mar, según Berghes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Pero del principal sistema orográfico mexicano, hay un ramal que por su extensa prolongación y fuerte relieve, adquiere una importancia grande, puesto que entre esta cordillera llamada Sierra Madre del Golfo ú Oriental y el principal sistema ó Sierra Madre Occidental, se extiende la gran planicie elevada, conocida con el nombre de *Mesa Central* de México.

Los caracteres por los cuales pudiéramos definir las cordilleras, son en lo absoluto, los mismos que para sus dos prolongaciones, en lo que constituyen sus formaciones geológicas, su elevación, y en una pequeña parte, sus condiciones climatéricas; teniendo en cuenta las condiciones por diferencia de latitudes.

Una serie de cadenas montañosas paralelas y bastante próximas, definen las anchas cordilleras conduciendo en los valles largos y estrechos el caudal de aguas recogidas en estas vertientes, aprovechando las depresiones naturales, ó formadas por la constante degradación atmosférica, para precipitarse bruscamente en el Océano, no prestando, en consecuencia, la gran utilidad que debería esperarse para las tierras que atraviesan, debido á su carácter por demás inconstante y torrencial.

De esta misma condición de cadenas secundarias paralelas, proviene la pequeña extensión utilizabie para la agricultura, en las vertientes orientales de la Sierra Madre Occidental, cuando estas cadenas sobresalen ó presentan mayor altura que nuestra Mesa Central; pues las corrientes de agua que en otras condiciones de orografía, regarían sin duda una porción aprovechable de dichas tierras siguiendo su cauce accidentado, prontamente son desviadas hacia el interior de dicha mesa, para precipitarse, como dijimos, rápidamente en el mar; siendo esta una de las condiciones que hacen menos favorable para la agricultura la extensa Mesa del Centro.

"Las tres cordilleras principales que constituyen nuestro sistema orográfico, no atravesadas por valle alguno, forman ellas mismas entre sus diversas cadenas y ramificaciones, las elevadas planicies que representando las dos quintas partes del territorio mexicano, colocadas á una altura de 1,200 á 2,300 metros sobre el nivel del mar, sembradas de volcanes apagados y montañas irregularmente distribuidas, que alcanzando hasta 5,295 metros de altura, van descendiendo hacia el Atlántico por una serie de valles de tan rápida inclinación que en un espacio de 180 kilómetros,[1] baja desde la altura de 2,500 ms. hasta el nivel del mar; en tanto que el descenso de aquellas planicies hacia el Pacífico es más suave, pues de las planicies de México, á las costas de San Blas, Colima y Mazatlán hay que recorrer respectivamente 1.584,820 kilómetros. En esta confluencia y agrupamiento de montañas, se extienden las dilatadas llanuras del Bolsón de Mapimí, las fértiles vegas del Río Nazas, el descenso del Salado, los ricos valles del Bajío, los llanos de Apam, las campiñas de Puebla (Valle de San Martín Texmelucan), el Valle de Toluca y los llamados planes de Amilpas y Cuernavaca."[1]

1 De los 620 kilómetros que hay de México á Veracruz, 280 perteneaen á la gran llanura de Anáhuac.

1 COORDENADAS geográficas de las capitales de los Estados y Territorios de la República, según datos de la Sección de Cartografía.

Estados.	Capitales.	Latitud N.	Longitud.	Altitud.
Sonora	Hermosillo	29° 4'37"	11°47'55" O.	210 m.
Chihuahua	Chihuahua	28 38.23	6 56.23 „	1.412
Coahuila	Saltillo	25 25.26	1 48.24 „	1.627
Nuevo León	Monterrey	25 40.15	1 10. 7 E	495
Tamaulipas	Ciudad Victoria	23 42.54	0 1. 1 „	449
Sinaloa	Culiacán	24 48. 4	8 18.31 O	40
Durango	Durango	24 1.29	5 31.55 „	2.100
Zacatecas	Zacatecas	22 46.35	3 26.22 „	2.442
Aguascalientes	Aguascalientes	21 53. 1	3 9.56 „	1.861
S. Luis Potosí	S. Luis Potosí	22 9.10	1 50.20 „	1.890
Jalisco	Guadalajara	20 40.45	4 12.31 „	1.566
Colima	Colima	19 14.21	4 35.47 „	486
Michoacán	Morelia	19 42.13	2 3.29 „	1.950
Guanajuato	Guanajuato	21 0.58	2 7. 8 „	2.083
Querétaro	Querétaro	20 35.42	1 15.20 „	1.490
Hidalgo	Pachuca	20 7.35	0 23.19 E	2.450
Veracruz	Jalapa	19 31.33	2 13.12 „	1.405
México	Toluca	19 27.28	0 32.47 O	2.625
Puebla	Puebla	19 2.30	0 56. 6 E	2.162
Tlaxcala	Tlaxcala	19 19. 4	0 53.45 „	2.252
Morelos	Cuernavaca	18 55. 2	0 6.42 O	1.542
Guerrero	Chilpancingo	17 33.10	0 22. 3 E	1.193

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"Las otras dos quintas partes de la República formadas por las tierras bajas y calientes, se extienden por los Estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Sur de Puebla; y Michoacán, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Huasteca Potosina, Nuevo León y Sinaloa, difieren por sus alturas, por sus climas, sus productos, su configuración topográfica y por su proximidad á los mares de las altas mesetas."

Las principales elevaciones ó puntos culminantes en el territorio nacional, ocupan, por lo general, la porción central, como por consecuencia de la elevación poco frecuente de Valles sobre el nivel del mar, extensos y limitados por serranías que lo separan entre sí. Así, tenemos los majestuosos volcanes del Popocatepetl y del Ixtaccihuatl, el primero con 5,425 metros sobre el nivel del mar, el Pico de Orizaba con 5,460 metros, la montaña más elevada de la América del Norte (superando su altura al Monte de San Elías, en el territorio de Alaska), el Cofre de Perote (4,089 metros) en Veracruz, el Ajusco, Nevado de Toluca, Pico de Tancítaro, 3,860 metros, en Michoacán, Nevado, 4,416, y Volcán de Colima, 3,891, situados todos estos macizos sobre una gran faja volcánica dirigida de Oriente á Poniente.

Las planicies de las costas del Pacífico se extienden relativamente poco entre las montañas de la cordillera madre y las

Estados.	Capitales.	Latitud N.	Longitud.	Altitud.
Oaxaca.....	Oaxaca	17° 3.28"	2°25.21" E	1.546 m.
Tabasco	S. Juan Bautista.	17 59.37	6 6.28 ,, aproximada.	
Chiapas	San Cristóbal...	16 44.10	6 59.48 ,, ...	2.104
Yucatán	Mérida.....	20 55.40 aproximada.	9 24.30 ,, aproximada.	8
Campeche....	Campeche.....	19 49.50 ,,	8 33.30 ,, ,,	Cerca del nivel del mar.
Distrito Federal	México	19 26. 5	0 0. 0 ,, ...	2.260
Territorio de la B. California, Distº Norte..	Ensenada	31 51.50	17 31.14 O.....	6
Territorio de la B. California, Distº Sur....	La Paz.....	29 16.18	13 33.44 ,, ...	Cerca del nivel del mar.
Territº de Tepic	Tepic	21 30.47	5 46.15 ,, ...	953

NOTA.—El meridiano de referencia para las longitudes, es el que pasa por la torre oriental de la Catedral de México. (Boletín Semestral de Estadística, núm. 3, año de 1889).

aguas del Océano; pero, en general, puede decirse lo mismo que para nuestras costas del Golfo, que por la multiplicidad de vertientes de las montañas que limitan su profunda rugosidad y relieve, multiplican y bifurcan las corrientes de agua en ellas nacidas, siendo en consecuencia más extensamente regadas por multitud de arroyos pequeños, además de las extensas vegas de nuestros ríos principales que desaguan en aquellos Océanos, como el Río Grande ó de Santiago, el del Fuerte, el Yaqui, el Mayo, etc., del Pacífico, así como el río Bravo, el Grijalva, el Coatzacoalcos, el Moctezuma, etc., en las costas del Golfo de México; corrientes importantes que están muy lejos de ser convenientemente aprovechables, aun estando en las mejores condiciones, para una bien organizada irrigación.

Esta configuración orográfica del territorio mexicano, cuyas costas bañan las aguas del Atlántico y el Pacífico, está comprendida entre los "14° 30' *(boca del Suchiate)*, y los 32° 44' "15" *(región de la confluencia del Colorado y Gila)*. Los extre- "mos meridianos pasan incluyendo las islas, por la de Cozumel "(18° 14' longitud O.), cercana á la de la Baja California, re- "feridas ambas longitudes aproximativas al meridiano de Mé- "xico.

"La superficie de la República, acerca de la cual no existen "datos perfectos por diversos motivos y, esencialmente, por- "que ningún cálculo planimétrico exacto puede obtenerse, en "razón á la deficiencia de nuestra cartografía, es estimada "en las últimas publicaciones de la Secretaría de Fomento en "1.987,083 kilómetros cuadrados." [1]

Su mayor longitud es de 3,263 kilómetros y su mayor anchura 1,853 kilómetros, prolongándose sus costas 3,700 kilómetros en el primero de dichos mares, y 8,750 kilómetros en el Pacífico; pero formando dichas costas una verdadera muralla, que elevándose del mar á la Mesa Central hace difíciles las comunicaciones, unida á la formación geológica de es-

1 Schultz, Curso de Geografía, pág. 323.—1892.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tas montañas, determina las condiciones hidrográficas, climatéricas, topográficas, comerciales, económicas y aun etnográficas y políticas.

"La rápida depresión del terreno hacia las costas, hace que formando esta especie de muralla, que rápidamente se eleva á la Mesa Central, no tengan caminos naturales y sendas fáciles del centro del país á las apartadísimas costas, aislando también en el interior los diversos centros poblados. Esa misma depresión, ese rápido descenso del terreno, esa proximidad de las montañas á las costas, esos violentos desniveles, esa riquísima variedad de alturas, hacen que no existan ríos caudalosos y navegables y que los existentes sean de cortísimo curso sin poder recibir grandes raudales, pues mientras que el enrarecimiento del aire en las grandes alturas acelera la evaporación, en los demás lugares de mediana elevación los torrentes que nacen en las montañas se filtran y precipitan en las gigantescas grietas de las variadísimas serranías que cruzan el territorio, perdiéndose en los centros de antiguos volcanes de donde brota á las faldas de las cordilleras, formando gran número de ríos de curso tan corto que en seguida van á perderse en las playas de los mares. Por fortuna, las regiones situadas en la falda de las cordilleras, cubiertas de nieves perpetuas y sujetas á la acción de vientos húmedos, han alimentado su vegetación con vapores acuosos cuya humedad, sobrenadando en el calor, forma la descomposición de substancias orgánicas, activando la vegetación."

* * *

Si de la descripción orográfica pasamos á las principales y más extensas funciones geológicas,[1] tanto de las llanuras co-

1 La Geología es la ciencia que tiene por objeto la estructura de la *costra* terrestre. Entendemos por esta palabra *costra*, sin prejuzgar en nada relativamente, la constitución interior de nuestro planeta, la parte del globo accesible á nuestras investigaciones.

El estudio de esta costra, no es para el hombre un simple objeto de curiosidad. Se impone por la necesidad que tenemos de buscar en el seno de la tierra, las substancias necesarias para el desarrollo de la civilización material. En efecto, allí es donde están cubiertos, con las materias de construcción, los minerales de donde se extraen los metales, las materias primas de los productos químicos, las mejoras indispensables á la agricultura, en fin, y sobre todo, los combustibles minerales, sin cuyo recurso la industria moderna estaría condenada á perecer. A. de Lapparent. Intr. Abiégé Géologie.

mo de las cordilleras, estudio estrictamente ligado á las condiciones de relieve, veremos que aun desde este punto de vista, las sierras madres Oriental y Occidental, presentan notables diferencias.

"Geológicamente considerado,[1] México está compuesto de "tres partes distintas que difieren relativamente poco en su "extensión superficial.

"La primera, la más antigua, que es también la menos ex-"tensa, está formada de un gran macizo granítico gneissico y "esquistoso que ocupa la mayor parte del Sur del país: se ex-"tiende á lo largo de la costa del Pacífico formando una an-"gosta faja interrumpida en algunos tramos, y envía una que "otra ramificación hacia la parte media del país y algunos pun-"tos cercanos á su costa oriental.

"La segunda, que es la más extensa, esencialmente sedi-"mentaria, y en la cual se han depositado los sedimentos de "diversas épocas desde fines del Paleozoico hasta nuestros días, "ocupa la parte septentrional, central, oriental y meridional ex-"trema del país, teniendo algunas ramificaciones al O. y SE.

"Finalmente, la tercera porción cuya extensión casi iguala "á la de la anterior y cuya importancia como parte integrante "del territorio no es sobrepujada por las otras dos, está com-"puesta principalmente de rocas eruptivas pertenecientes á la "serie moderna, distribuidas todas á lo largo de la cadena de "montañas principal del país, denominada "Sierra Madre del "Pacífico," de la cual constituyen la mayor parte de su masa, "y extendiéndose hacia el E. en la región media del país, tie-

1 A la deferencia de los Sres. Ingenieros José G. Aguilera y Ezequiel Ordoñez, miembros de la Comisión Geológica del Ministerio de Fomento, debo la citada opinión fundada en profundos estudios y largos años de observación, opinión muy respetable por cierto, acerca de la geología de nuestro país.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"ne también manifestaciones aisladas en la parte N., NE., "S. y SE.

"Estas tres grandes partes constitutivas de nuestro territo- "rio, forman tres grandes divisiones sumamente características "y cuya extensión geográfica está recíprocamente limitada en- "tre ellas, salvo los pequeños grupos aislados, que como ver- "daderos islotes se encuentran enclavados respectivamente en "las tres grandes divisiones."

Las rocas sedimentarias de la era *mesozoica* [1] constituyen la porción principal de la Sierra Madre del Golfo, ya las calizas y pizarras, las arenosas, los conglomerados, etc., se extienden en vastos horizontes, en capas, en las que los restos fósiles encontrados nos definen en muchas regiones la condición de haberse formado estos poderosos sedimentos en regiones *abisales* ó de mares profundos; en tanto que en otras tan sólo son formaciones *litorales;* aquí y allá, sin embargo, algunas formaciones *eruptivas* y *volcánicas*, se ostentan en macizos y en apófi-

1 Respecto de la formación geológica de nuestro globo, debemos separarnos de las teorías antiguas que vemos consignadas en casi todos los tratados de Geografía, y admitir las de la mayor parte de los geólogos modernos y de los cuales damos una idea, sirviéndonos de los apuntamientos de nuestro ilustrado mineralogista D. Antonio del Castillo. "Por las investigaciones de los geólogos se confirma que la tierra ha tenido un origen fluido ígneo.

"Su costra se ha ido lentamente enfriando y con el transcurso de los tiempos se han formado las rocas de que consta. Unas forman como el esqueleto del globo y son de origen ígneo: otras se apoyan sobre él y constan de sedimentos acuosos, habiéndose formado en los mares.

"Por el enfriamiento de la costra terrestre que ha perturbado el equilibrio entre ésta y el fluido ígneo interior, han ocurrido en ella grandes trastornos, en que se ha modificado su faz, marcando las grandes épocas ó edades de la tierra que los geólogos dividen en cinco:

"I. La edad *azoica* (nombre formado del griego *a*, sin, y *zöe*, vida).

"II. La edad *palezoica* (derivado del griego *pallaios*, antiguo, y *zöe*, vida). Comprende la edad de los moluscos ó Siluria, la de los peces ó Devonia y la de las plantas ó Carbonífera.

"III. La edad *mesozoica* (de la voz griega *mesos*, media, y *zöe*, vida). Comprende la edad de los reptiles.

"IV. La edad *cenozoica* (del griego *Kainos*, reciente, y *zöe*, vida). Comprende la edad de los mamíferos; y

"V. La edad *neozoica*, nueva vida, edad del hombre, ó la era humana.

"A estas grandes divisiones, caracterizadas especialmente por los restos orgánicos encontrados en las rocas sedimentarias que las forman, y que se llaman *fósiles*, corresponden las antiguas denominaciones de terrenos *primitivos*, *secundarios*, *terciarios* y *modernos*."—García Cubas. Geografía Universal, pág. 90. Véase Lapparent, págs. 128, 161, 205, 232.

sis; ya los granitos, las dioritas, como los basaltos y las lavas.

En la Sierra Madre Occidental dominan casi exclusivamente las formaciones eruptivas, con un orden de sobreposición ó de erupciones tan marcado y homogéneo, que parece que este gran espinazo se ha constituido bajo las mismas condiciones, dejando á descubierto en uno que otro punto, pequeñas porciones de rocas más antiguas, esqueleto primordial de tierras emergidas, que constituirían en un principio una parte del *archipiélago primitivo* de los geólogos Americanos.

Las rocas, pues, de esta cordillera, comienzan á aparecer en la época terciaria, cuando las condiciones que los sedimentos anteriores del globo, su enfriamiento paulatino, etc., sometieron á las masas ígneas en el interior, ó colosales presiones que determinan la "eyección" de esa inmensa cantidad de rocas, ya tan sólo plegando la corteza del globo, como saliendo por las grietas formadas en el momento de este vasto plegamiento. Después de este acontecimiento de gran trascendencia para la orografía definitiva de esta parte de la América, tienen lugar erupciones de rocas de variados caracteres, que habían de facilitar la circulación de aguas calientes, cargadas de principios minerales, recorriendo, circulando y depositando estas materias minerales, en las largas y angostas grietas de estas rocas, que constituiría después su multiplicidad en determinadas regiones por cierto abundantes, los que ahora son nuestros centros mineros, cuya producción en metales preciosos, esencialmente la plata, nos había de colocar en el tercero y quizás en el segundo rango, entre los países productores de metal blanco en el mundo.

Constituida ya esta cordillera y en relativa tranquilidad las cosas á fines de aquella era, tranquilidad suficiente para permitir la vida terrestre de los grandes mamíferos, cuyos restos se han encontrado en las capas de las rocas sedimentarias, una nueva reacción tiene lugar, y durante un larguísimo período de tiempo la región central se presenta en las más grandes vicisitudes. Los temblores de tierra se suceden, innumerables

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

chimeneas volcánicas arrojan por sus bocas inmensas cantidades de lavas y vapores, las cenizas y arenas arrojadas cubrieron inmensas extensiones de terreno, como lo atestiguan y confirman nuestros principales valles, en los que las capas superficiales están formadas de "*tobas*" y potentes lechos de cenizas y de pómez, productos que no son sino dichas lavas pulverizadas y desagregadas por las fuerzas desplegadas en aquellas grandes erupciones.

Los grandes valles, ó sean los espacios dejados entre aquellas elevadas cordilleras, constituidas para siempre, representaban solamente grandes depresiones, ocupadas por inmensas cantidades de aguas, receptáculos cuya extensión y profundidad es demostrada por las poderosísimas capas de conglomerados, arcillas y algunas pizarras, en que el material siempre detrítico, en que el metamorfismo ha sido bastante para darles una forma ó carácter aparente, distinto de su propio origen, ha sido arrancado, por decirlo así, de aquellas propias montañas, en las que la acción prolongada ó secular del aire, el agua y las variaciones de temperatura, las disgregaban, alteraban y transformaban hasta el fondo de aquellos grandes lechos de agua, que por su carácter lacustre, daba las condiciones necesarias de reposo, paca permitir su completa sedimentación. Pero esta acumulación de material de segregación de aquellas montañas, á la vez que los cambios en las condiciones climatéricas se presentaban en el transcurso de los siglos, habían de originar la desecación paulatina de estos lagos ó recipientes de agua mediterráneos (ó interiores), para producir al principio inmensos pantanos donde se desarrollase la vegetación exuberante; después solamente tierras firmes, llanuras estériles, arenosas, arcillosas, etc., como lo demuestran las grandes llanuras del Norte de Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Sonora.

La elevación de estas llanuras dentro de las cordilleras madres, va de acuerdo exactamente con la elevación de aquellas montañas en que actualmente su posición, sobre el nivel del

mar, es apenas el reflejo de la altura que en lejanos tiempos alcanzaron.

Respecto á las costas constituidas en períodos muy modernos, las condiciones climatéricas han permanecido casi las mismas, y los depósitos de rocas que las forman son también de edades muy recientes, originados éstos depósitos, en parte, por las acciones aluvionales dependientes de las montañas vecinas ó depósitos arenáceos de los mares que las circundan.

En otras partes, depósitos más antiguos se presentan correspondiendo á las zonas litorales, y en los que la acción de los vegetales quizás, desarrollados con grande extensión en aquellos lugares y en épocas antiguas, se ha determinado su metamorfismo conveniente para la formación de *carburos*, como los *leñitas*, que también se presentan algunas veces en el interior del país, ó bien á la formación de *betunes* y *asfaltos*, como lo demuestra la extensa zona de estos *hidrocarburos* enfrente y á lo largo de las fértiles costas de Tamaulipas y Veracruz.

(Continuará).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LA CONDICION JURIDICA DE LA MUJER, SEGUN HERBERT SPENCER,

Por el Lic. Genaro García.

A MI PADRE EL SR. D. TRINIDAD GARCIA.

1.—Herbert Spencer, al estudiar en la Cuarta Parte de sus Principios de Moral, la cuestión relativa á los derechos de las mujeres, establece desde luego como principio general, que: "Si se consideran aisladamente á los hombres y á las mujeres como miembros independientes de una misma sociedad, donde cada uno y cada una deben proveer á sus necesidades lo mejor que puedan, se desprende que no es equitativo sujetar á las mujeres á restricciones concernientes á la ocupación, profesión ó carrera que deseen abrazar." Y agrega: "Es preciso que ellas gocen de la misma libertad que los hombres para prepararse á su carrera y para recoger el fruto de los conocimientos y de la habilidad que hayan adquirido."

2.—Examina en seguida qué modificaciones debe sufrir el principio anterior por lo que respecta á las mujeres casadas, y dice: "De los derechos iguales á los de los hombres que las mujeres deberían tener antes del matrimonio, la equidad ordena que conserven después de casadas todos aquellos que no

ataquen necesariamente el estado conyugal; son á saber: los derechos á la integridad física, á la propiedad de los bienes recogidos por el trabajo ó por sucesión, los derechos á la libertad de las creencias y de la palabra, etc. Estos derechos no deben sufrir restricción sino cuando se opongan á las cláusulas explícitas ó implícitas del contrato, voluntariamente suscrito; como la condición de las mujeres casadas varía, según los tiempos y los lugares, estas restricciones deben naturalmente variar de la misma manera."

Considerando con Herbert Spencer la libertad humana, ya como el veredicto inmediato de la conciencia disciplinada por la influencia prolongada de la vida social, ya como una deducción de las condiciones necesarias primeramente á la conservación de la vida en general, y después de la vida social, ya, en fin, como una correspondencia consciente á las exigencias de ciertas relaciones que el orden natural hace indispensables, y siendo los derechos de la mujer soltera los componentes de su propia libertad, conceder á la mujer que va á contraer matrimonio el poder de restringir á voluntad tales derechos, es lo mismo que otorgarle la facultad de transgredir las condiciones necesarias á la vida individual y social. Mas esto es radicalmente absurdo.

El mismo Herbert Spencer establece que los corolarios de la ley de igual libertad sólo pueden limitarse en el caso de que la preservación de la especie lo requiera forzosamente. De acuerdo con esta verdad, demuestra de una manera detallada que, el derecho á la integridad física y el derecho á la libertad de moverse y de trasladarse, no tienen otra restricción que la guerra defensiva; que el derecho al uso de los medios naturales no admite suspensión; que el derecho á la propiedad corporal se coarta únicamente ante las necesidades del sostenimiento de la administración pública y de la guerra defensiva; que el derecho á la propiedad incorporal es absoluto; que el derecho de testar y el de legar son análogos en sus restricciones al derecho á la propiedad corporal; que el derecho de cam-

biar é igualmente el de contratar,[1] sólo se paralizan cuando ponen en peligro la defensa nacional; que el derecho á la libertad de trabajo y el derecho á las creencias, en sí no tienen ninguna taxativa; y por último, que el derecho á la libertad de palabra y el derecho á la libertad de publicación no reconocen más limitación que la guerra defensiva. Estos principios de carácter plenamente universal, que "tienen por origen las leyes de la vida en el estado de sociedad," no pueden modificarse en lo más mínimo, menos aún si en pro de la modificación no se aducen sino simples aserciones desprovistas de prueba.

Si se admite que las restricciones de los derechos de las mujeres casadas deben variar según los tiempos y los lugares, porque así varía su condición, habrá que convenir á la vez en que las restricciones de los derechos de los hombres y de las mujeres solteras deben variar también según los tiempos y los lugares, porque asimismo varía la condición humana en general, no sólo la de la mujer casada. Pero siendo entonces las circunstancias de cada caso las que han de determinar la libertad individual, la fórmula de la justicia y sus corolarios pierden por completo toda su autoridad.

3.—Herbert Spencer pasa después á analizar la posición política de las mujeres, reservándose á hacer mayores desarrollos posteriores. Advierte que la capacidad cívica no implica sólo el derecho de votar y de ejercer por intervalos ciertas funciones representativas, sino que entraña además obligaciones onerosas, puesto que "cualquiera que sea la extensión de los derechos políticos, la defensa nacional somete á cada hombre en particular á la pérdida de su libertad, á privaciones y al peligro eventual de muerte;" que, por tanto, "el día en que las mujeres obtengan los mismos derechos políticos, sin quedar sujetas á las mismas obligaciones, su posición será una posición de superioridad y no de igualdad." Herbert Spencer concluye de aquí que, "á menos que ellas no suministren al ejército y á

1 No está de más recordar aquí que este último derecho no implica para nadie la libertad de celebrar un contrato de servidumbre.

la marina un contingente proporcional al contingente masculino, la cuestión de la seudo-igualdad de los *derechos políticos* de las mujeres no podrá ser debatida sino cuando la humanidad haya alcanzado el estado de paz permanente."—Por supuesto que esta objeción no se extiende á la participación de las mujeres al gobierno de la administración local.

Como la obligación de defender los intereses nacionales no es la única que entraña el sufragio, no puede ser tampoco la condición exclusiva de éste. Hasta hoy las leyes del sufragio no han negado en ningún país á los ciudadanos imposibilitados para la guerra, sea por debilidad muscular, sea por falta de un miembro, sea por cualquiera otra causa, el derecho de votar y de ser votados en las elecciones populares; si á esto se agrega que el estado de guerra es excepcional en todos los pueblos de nuestros días, quedará de manifiesto que es un rigorismo excesivo rehusar á las mujeres los derechos políticos, tan sólo porque existe la lejana posibilidad de que estalle una guerra, y porque se piensa que en tal caso ellas no tomarán las armas para la defensa nacional. La mayoría de los hombres encargados de la administación pública tampoco las toman nunca en caso de guerra, y sin embargo, continúan siendo tan útiles y necesarias en sus ocupaciones á su país, como lo son los mismos militares en los campos de batalla.

La concesión de los derechos políticos á las mujeres beneficiaría en alto grado la organización gubernativa, aumentando muy considerablemente la concurrencia de los individuos elegibles para el ejercicio de los cargos públicos, concurrencia que á su vez acrecería, muy considerablemente también, las probabilidades de una buena elección. La sola obtención de este beneficio basta para que se haga punto omiso de la consideración extremadamente egoísta de que las mujeres no deben gozar de los derechos políticos, porque no pueden resistir las penalidades de la guerra.

4.—Herbert Spencer, antes de volver á tratar la cuestión que acaba de iniciar, procura demostrar que la posesión uni-

versal del sufragio no asegura con eficacidad el mantenimiento de los corolarios de la fórmula de la justicia, ó sean los derechos propiamente dichos. Indica que Francia y los Estados Unidos no desconocen los ataques á la libertad, y que en Inglaterra la extensión reciente del sufragio ha producido frecuentes desconocimientos de los derechos individuales.[1]

Es evidente que la universalidad del sufragio no está destinada á crear en las personas el sentimiento de justicia, único preventor posible de toda iniquidad, sino á servir de instrumento de defensa de los derechos individuales. El problema se reduce, pues, á indagar si como tal instrumento llena satisfactoriamente su misión, y si entre las diversas formas de organización política puede considerarse como la forma superior.

Para afirmar que el sufragio universal es el mejor sostenedor del bienestar de las sociedades, y en consecuencia, de los derechos de los individuos que las componen, basta comparar la condición miserable que tuvo en Francia, bajo el antiguo régimen, la burguesía, es decir, la casi totalidad de la población, cuando *sus intereses y sus derechos descansaban únicamente en las manos del monarca*, con la condición de libertad que ha adquirido después tan violentamente al adaptarse al nuevo régimen; ó bien, el desarrollo en extremo lento, y todo sembrado de luchas intestinas y exteriores, de cualquiera nación europea, con el desarrollo rapidísimo y casi perfectamente pacífico de los Estados Unidos. Si los Constituyentes de esta nación no hubiesen otorgado á cada ciudadano la franquicia electoral, ó sea la facultad de defender por sí mismo sus derechos y de asegurar así el cumplimiento de la ley de igual libertad, la inmigración no habría afluido en una proporción colosal, ni las industrias habrían alcanzado en corto tiempo una prosperidad extrema, ni las familias se habrían multiplicado en pleno bienestar.

Una vez que las diversas formas de organización política son

1 ¿No debe atribuirse esto último á los trastornos ó desequilibrios que origina siempre toda innovación, y en especial la que recae sobre una antigua institución social?

meros instrumentos del mantenimiento de los derechos individuales, la forma que mejor mantenga á éstos será la forma superior. Si es cierto que nadie defiende mejor que uno mismo sus intereses, lo será igualmente que los derechos individuales no quedan nunca mejor asegurados que cuando cada una de las personas á quienes corresponden tiene el poder de defenderlos. Y como el sufragio da á todos los ciudadanos tal poder, se puede volver á afirmar, que es la mejor forma de organización política. El sufragio realiza, además, una concurrencia mayor para el desempeño de los puestos públicos, y saber que una concurrencia mayor, es, en todas las cosas, causa de un éxito también mayor. Los múltiples bienes generales que origina el sufragio universal, hacen aparecer insignificantes los males aislados y poco persistentes que se le adhieren. Por otra parte, un estado social en el que el sentimiento de justicia predominara en lo absoluto en cada individuo é hiciese desaparecer hasta los menores males, no necesitaría régimen gubernativo alguno.

5.—Mas para Herbert Spencer "el reparto universal del sufragio confiere á la clase más numerosa ventajas seguras, y esto á expensas de la menos numerosa. Bien pronto se quitarán á las superioridades sociales las ganancias más elevadas que les confiere su actividad más productiva, para sustraer de ellas indirectamente una parte destinada á completar las ganancias inferiores de los menos diligentes y de los menos capaces, y es evidente que la constitución del Estado que sea apropiada al tipo social industrial, llamado á realizar plenamente la equidad, establecerá la representación de los intereses en lugar de la de los individuos."[1]

1 Llega á preocuparse tanto Herbert Spencer por los intereses de las clases superiores, que más adelante parece que hace punto omiso de los de las clases inferiores, cuando dice que: "El bien general de la humanidad se realiza por la prosperidad y la expansión de sus variedades superiores." Pero si éstas forman y han formado una parte mínima del número total de las variedades humanas, no pueden representar los intereses generales de la humanidad. Si la condición de un bienestar real para los pueblos fuese la prosperidad y la multiplicación de las clases superiores, todos los pueblos serían felices, lo que no sucede. La

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Sabemos, sin embargo, que el derecho de propiedad es un corolario manifiesto y necesario de la ley de igual libertad, y que la sumisión creciente á esta ley coincide con el desarrollo de la cooperación pacífica. A medida, pues, que las sociedades avancen en su marcha, el respeto hacia el derecho de propiedad será mayor, puesto que es parte integrante de la ley de igual libertad. Sentado esto, ¿cómo admitir que el sufragio universal determinará una legislación exclusivamente favorable á la mayoría numérica, la que llegará hasta despojar á las superioridades sociales de las ganancias más elevadas que les haya procurado su actividad más productiva? Un despojo tal implicaría la negación más radical de la idea y del sentimiento de la justicia; pero aquella y ésta mejoran cada vez más el equilibrio de las funciones sociales. El mismo Herbert Spencer nos dice que "en los tiempos modernos el sentimiento de la justicia ha arreglado en un grado más alto la conducta de los hombres hacia las mujeres, que frente á frente de los otros hombres."

Pasamos aquí por alto el sentimiento de altruismo que nos hace no sólo respetar la propiedad ajena, sino desprendernos de la propia, para beneficiar á nuestros semejantes cuando lo necesitan, y el cual ha alcanzado una gran eficacidad. Herbert Spencer observa que "ya las simpatías de los hombres han llegado á ser suficientemente activas para engendrar una multitud, tal vez excesiva, de empresas filantrópicas." Mas pudiera decirse que este sentimiento no es todavía muy general.

Existe, empero, otra consideración fuera de toda objeción y duda. Suponiendo que en teoría se demostrase de una manera plena la conveniencia de sustituir una representación de individuos por una representación de intereses, esta última

felicidad de cualquiera nación requiere, por el contrario, para cada una de sus clases componentes, ó por lo menos para la mayor parte de ellas, cierta bienandanza ó satisfacción desahogada de sus necesidades; las clases superiores, por mucho que valgan, no pueden absorber nunca los intereses de las clases inferiores. Otro tanto debe decirse respecto del bien general de la humanidad. Las leyes últimas de la vida son inmutables, ya se considere al hombre como miembro de un pueblo, ya se le considere como miembro de la humanidad.

sería irrealizable en la práctica. En efecto, no hay medio de saber la relación que cabe entre los intereses de un padre como tal y un ministro de una religión, ó entre los de un sabio eminente y los de un artesano inculto. La riqueza corporal, único bien susceptible de medida, á más de formar una parte ínfima de los intereses humanos, no puede servir nunca de cartabón para la representación nacional; dar á cada capitalista tantos votos como pesos tuviese su fortuna, ya heredada, esto es, ya habida por una actividad grandemente productora, caso común, ya alcanzada por un trabajo inteligente, sería establecer la más odiosa de las plutocracias.

6.— Expuestas las ideas anteriores que tan íntimamente se ligan con nuestra cuestión principal, tomemos otra vez el hilo de ésta.

Partiendo Herbert Spencer de la hipótesis de que un día la supresión del régimen militar haga desaparecer la objeción que dirigiera primeramente contra el otorgamiento de los derechos políticos á las mujeres, se pregunta "si será entonces *ventajoso* concederles el derecho de sufragio.[1] A su juicio no lo será por las razones que expone así:

"La facilidad comparativa con la cual las mujeres ceden á su impulsividad, haría del aumento de su influencia un factor dañoso para el trabajo legislativo.... el sentimiento del momento tiene todavía más imperio sobre las mujeres que sobre los hombres. Este rasgo de su carácter está en contradicción con la impasibilidad judicial que debe presidir á la elaboración de las leyes. La condición previa y evidente para legislar bien, es guardarse de las pasiones que excitan causas temporales ú objetos particulares. A la hora actual, está condición previa no está sino imperfectamente asegurada; lo estaría mucho menos todavía si la posesión del derecho del sufragio se extendiese á las mujeres."

1 Herbert Spencer advierte que emplea el término *ventajoso*, porque el problema no es de justicia pura y simple. Ya expusimos oportunamente nuestras ideas á este respecto.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"Una diferencia intelectual análoga se asocia á esta diferencia moral. Muy pocos hombres y menos mujeres aún se forman opiniones en las que lo general y abstracto ocupen el lugar que les corresponde..... Nueve legisladores sobre diez y noventa y nueve electores sobre cien, no piensan sino en los resultados inmediatos de la medida que discuten, y no piensan nada absolutamente en sus resultados indirectos, en el precedente que creará, ó en la influencia que ejercerá sobre el carácter humano. Si las mujeres votasen, esta preocupación de lo que es próximo y personal á expensas de lo que es lejano é impersonal, se acentuaría todavía más, y los males inmensos que las condiciones presentes producen ya, se aumentarían aún."

"..... Actualmente, sus sentimientos impelen ya á los hombres y á las mujeres á viciar la moral del Estado, introduciendo en ella la de la familia. Pero las mujeres propenden particularmente, en virtud de sus funciones naturales,[1] á otorgar ventajas en razóu de la falta de méritos más bien que en razón de éstos, y á dar más á la capacidad menor. El amor de los seres sin defensa—es así como se puede expresar en suma el instinto de parentesco, más poderoso en la mujer que en el hombre y que determina también más su conducta tanto en el exterior como en el interior de la familia—la pondría todavía más que á los hombres al servicio de una acción pública cuidadosa hasta el extremo de los seres inferiores, oponiéndolos á los seres superiores. La tendencia actual de los dos sexos es considerar á los ciudadanos como teniendo títulos en razón de su miseria, precisamente cuando su miseria es por lo general la consecuencia de su demérito; si esta tendencia, más marcada en la mujer que en el hombre, se ejerce en el dominio de la política, determinará una solicitud más marcada en favor de los incapaces y en detrimento de los más capaces....."

1 Hay que notar que ni la totalidad de las mujeres ni su mayoría siquiera, ejerce las funciones de la maternidad. Aquí, en el Distrito Federal, por ejemplo, en 1889, la población fija se componía de 226,691 mujeres y 216,490 hombres, esto es, 105 mujeres por cada 100 hombres. Ahora bien, las mujeres casadas y viudas no llegaban sino á 92,322, número cuya proporción al número total de mujeres es de 40.72 por ciento. Esta proporción es casi la misma que existe en Alemania, donde por cada 100 mujeres del número total, se contaban en 1890 42.09 casadas, viudas y divorciadas.

"Otro rasgo distintivo de las mujeres dimana, no ya de la relación maternal, sino de la relación conyugal. Mientras que sus sentimientos se han amoldado á la aptitud especial requerida por los cuidados que hay que dar á los hijos, estos sentimientos se han adaptado también á la elección conveniente de un esposo, en la medida en que las circunstancias les han permitido escogerlo. El rasgo del carácter masculino que atrae más á las mujeres, es el vigor físico ó mental ó la unión de una y otra cualidades; esto ha favorecido por otra parte la multiplicación de las más vigorosas, porque en igualdad de circunstancias, las variedades donde esta preferencia instintiva estaba menos marcada, han sido arrolladas por otras variedades. De ahí, en la mujer, el culto de la fuerza bajo todas sus formas; de ahí igualmente su conservatismo relativo. Las mujeres sufren más que los hombres el ascendiente de la autoridad, bajo cualquiera forma que se manifieste—política, social ó eclesiástica,—esta tendencia obra en todos los grados del desarrollo social..... La mujer ha estado siempre, más que el hombre, imbuida del fanatismo religioso, que no es sino la expresión de la extrema subordinación á un poder que se juzga sobrenatural.... si se confiere el sufragio á las mujeres, este sentimiento que despierta en ellas el poder y su aparato bajo todas sus formas, tomará la defensa de todas las autoridades políticas y eclesiásticas..... viniendo á unirse á la predilección de la mujer por la generosidad en detrimento de la justicia, si se concede mayor libertad de expresión á aumentar el poder que tienen los poderes públicos de no considerar absolutamente los derechos individuales, siempre que haya que proseguir fines que se reputan benéficos."

"La cuestión será completamente distinta después de la desaparición de las complicaciones políticas actuales que han

salido de nuestro estado transitorio. Es muy probable que entonces la posesión del derecho de votar por las mujeres tenga efectos saludables."

Antes de aceptar las objeciones que acaba de hacer Herbert Spencer á la concesión del sufragio á las mujeres, aun en la hipótesis de que algún día desaparezca la organización militar con sus cargas respectivas, es preciso examinar si la condición psicológica actual de la mujer es en el fondo congénita y natural, ó producto meramente artificial de la sujeción inicua á que el hombre la ha sometido, abusando de su mayor fuerza bruta. Hay razones para creer que es lo último.

Hasta ahora la educación de la mujer ha sido una educación de servidumbre más ó menos mitigada. Emancipada de la tutela perpetua á que la condenó la antigüedad, no por esto gozó de libertad; su conducta continuó y ha continuado hasta aquí, sujeta á numerosas trabas que los adelantos de la civilización no han llegado á romper en su totalidad: todavía hoy no puede dedicar su actividad á las empresas que le parezcan más vantajosas.

Si las mujeres ceden fácilmente á las pasiones del momento es á causa de que las costumbres y las preocupaciones de nuestros días desarrollan en ellas poderosamente su sistema emotivo desde la más tierna infancia, y dejan, por el contrario, casi en estado de inacción su sistema muscular y su sistema intelectual; de aquí su impulsividad ó excitabilidad nerviosa. Pero este efecto desaparecerá necesariamente cuando se suprima el vicioso régimen actual de educación, y se adopte otro que ejercite y desarrolle á la vez los sistemas muscular, intelectual y emotivo.

Deja la mujer la escuela luego que la pubertad viene á dar alguna madurez y energía á su cerebro, esto es, precisamente en el tiempo en que la naturaleza se encarga de hacer más fructuosa la enseñanza. Entra en seguida á una vida mundana donde no puede abrigar otra ambición ni otro objeto que hallar un hombre que asegure y complete su personalidad, por-

que aprisionada de antemano con los grillos de la inferioridad política y civil que le pone el Estado, ha tenido que sentir ya, momento á momento, que por sí sola nada puede. Mas para hallar un hombre que asegure y complete su personalidad, se ve obligada á practicar habitualmente el arte de agradar, consagrando su existencia á tristes futilidades. Así, el sentimiento continuo de su propia impotencia despierta en ella el culto de la fuerza; y su instrucción trunca y existencia falta de ocupaciones trascendentales coadyuvan para que conserve una ligereza de espíritu infantil.

Puede preverse fácilmente que si la mujer llega á recibir algún día una educación análoga á la de los hombres, y á obtener el desempeño de todas las funciones de la vida social, inclusas las políticas, adquirirá entonces el sentimiento de su propio valer y de su propia responsabilidad, la fuerza no originará en ella una admiración anormal, y su carácter frívolo quedará sustituido por un juicio suficientemente ponderado que hará difícil, si no imposible, la intrusión de la moral de la familia en la moral del Estado; será entonces, en una palabra, un factor eficiente de la civilización.

La igualdad absoluta de las mujeres se desprende como un corolario necesario de la ley suprema de la justicia; la experiencia aconseja, empero, que las medidas que conduzcan al establecimiento de esta igualdad sean graduales en un principio, á fin de evitar el desequilibrio que produce toda innovación repentina.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LA QUIEBRA EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Tesis presentada por el Alumno Alonso Fernández Castelló en su examen profesional para la carrera de Abogado.

Señores Sinodales:

Habiendo terminado los estudios literarios y científicos necesarios para la carrera de Abogado, vengo á sustentar ante vosotros el examen profesional que exige la ley relativa para extender el título respectivo; y cumpliendo también con otro precepto de la misma ley, presento y someto á vuestro claro criterio y vasta instrucción, el estudio escrito que se exige en la presentación de dicho examen.

En este incorrecto estudio que tengo la honra de presentaros, voy á tratar de la importante y difícil cuestión de la unidad, universalidad é indivisibilidad de la Quiebra en Derecho Internacional Privado.

No es preciso valerse de pretensiosas frases ni de vanas palabras, para hacer comprender toda la importancia, todo el interés y todas las dificultades que encierra la resolución de la materia sobre la que vengo á presentaros mi tesis.

En efecto: si muchas son las dificultades que se presentan durante el juicio de quiebra, en Derecho Mercantil, en que tenemos un Código escrito, una ley á cuyas prescripciones tiene

que someterse todo el mundo, ¡cuáles y cuán grandes no serán éstas cuando se trate de su resolución en Derecho Internacional, en donde, por desgracia, no hay aún bases científicas para resolverlas! Y estas bases ciertas no podrán existir sino hasta que todas las naciones sigan una misma escuela ó una misma ley.

Afortunadamente estamos ahora en un período de adelanto para el Derecho Internacional; adelanto que sin duda llegará á unificar las legislaciones siquiera en algunas materias, ya que no es posible, según dice Fiore [1] perfectamente, unificarlas en absoluto.

Y esta unificación tan necesaria ha sido comprendida y ha hecho que se verifiquen Congresos internacionales, para ver si es posible llegar á un acuerdo universal. Uno de dichos Congresos tuvo lugar en Junio de 1880 en Turín, y versó principalmente sobre la Unificación de la Legislación en materia de quiebra, y otro que recordamos se verificó á fines del año pasado en la Haya, con fines más amplios que aquel.

No podemos dejar de lamentarnos al pensar, que las disposiciones propuestas y aprobadas por los diferentes representantes que se encontraban en el Congreso de Turín, no fueron aceptadas por las Naciones ahí representadas.

Pero mientras llegamos á esta unificación, que esperamos no ha de tardar, ¿cómo resolver los conflictos que se presenten cuando quiebre un comerciante que tiene ubicados bienes en diferentes países? ¿Cómo sostener la unidad de la quiebra mientras esto no se resuelva en un Congreso Internacional ó por tratados? Muchos autores tan notables como Martens, [2] Jitta, [3] Fiore, [4] Contuzzi, [5] Carle, [6] Esperson, [7] Rocco, [8] Calvo, [9]

1 Fiore, tomo I, pág. 1.
2 De Martens. Droit International, tomo II, pág. 504.
3 Jitta. Droit Comerciel, F. 2, pág. 280.
4 Fiore. Droit International Privé, nº 305 y siguientes.
5 Contuzzi. D. I. P.. p. 1,116 y 1,117.
6 Carle. La Faillete en D. I. P., nº 14.
7 Esperson. J. D. I. P., 1884, p. 386.
8 Rocco. D. I. P., 3ª parte.
9 Calvo, tomo 2, pág. 411.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Savigny,[1] Philmore,[2] que piensa que el sistema de la pluralidad de las quiebras es un "sistema bárbaro" y otros muchos que sería largo repetir, se han ocupado de resolver esta cuestión que cada día tiene mayor importancia, supuesto que día á día aumenta el comercio internacional, que es el factor más grande para el adelanto de la civilización y del progreso.

Tal vez sea mucha mi pretensión al presentaros un estudio sobre un punto tan difícil como este; pero vosotros todos, Señores Sinodales, sabéis perfectamente cuánto seducen á un principiante los asuntos nuevos, y cuánto agrada tratar de resolver cuestiones difíciles y de trascendencia, como es sobre la que versa este trabajo en el que me ocuparé del asunto tan sólo en Derecho Internacional. Así es que para nada os hablaré de las dificultades de la materia en Derecho Mercantil, porque esto sólo serviría para hacer más largo y difícil mi estudio; tampoco os hablaré nada de la historia de esta Institución; ¿para qué molestar vuestra atención hablando de las épocas en que la quiebra era vista como un delito y castigado el quebrado con pena de multa? ¿para qué contaros las difrentes fases por que ha pasado después?

Una vez hechas tales reflexiones y dicho ya que mi trabajo versará sobre la unidad de la Quiebra en Derecho Internacional, ya es tiempo de entrar de lleno en el asunto; y para comprenderlo mejor, es necesario ver antes cuál es el fin ó fines que se propone el legislador al declarar la quiebra.

Como sabemos perfectamente, la quiebra viene á ser la consecuencia directa y necesaria de la falta de cumplimiento de las obligaciones del deudor común para con sus acreedores, y tiene por objeto: primero, proteger á todos los acreedores del quebrado, poniéndolos en la misma situación ante la desgracia común; segundo, proteger al quebrado de las exigencias que pudieran tener los diferentes interesados en su quiebra; y tercero, conservar el orden público, cuidando que no se pierda

1 Savigny, tomo 8, p. 238.
2 Philmore. International Law, tomo 4, pág. 616.

el crédito y la confianza general. Para conseguir estos tres fines se sigue un juicio especial, llamado juicio de quiebra, y cuya marcha varía en las diferentes naciones.

Pero sucede con mucha frecuencia que el quebrado tiene bienes en uno ó en varios países diferentes de aquel en que ha sido declarada la quiebra, y entonces ¿qué hay que hacer? Dos resoluciones han sido propuestas para resolver la duda: una quiere que se declaren tantas quiebras como establecimientos haya; y la otra dice, que sólo debe haber una declaración y un juicio, y que éste debe tener verificativo en el lugar en donde estuviese situado el establecimiento principal.

Como dijimos al principio de este estudio, nosotros vamos á sostener la segunda opinión, es decir, la unidad de la quiebra en Derecho Internacional.

Para demostrar esta doctrina con toda claridad, he creído conveniente dividir mi estudio en diferentes capítulos; en el primero trataré de demostrar la superioridad del sistema que voy á sostener: una vez probada ésta, pasaré al segundo capítulo, en el que veremos cuál debe ser el tribunal competente para hacer la declaración; á continuación, en el tercero, veremos fundadamente cuáles pueden ser los efectos extraterritoriales que se deben dar á las declaraciones hechas por el tribunal competente, y para concluir veremos si este sistema es aplicable á nuestro Derecho actual.

CAPITULO PRIMERO.

SUPERIORIDAD DE LA DOCTRINA QUE SOSTIENE LA UNIDAD, INDIVISIBILIDAD Y UNIVERSALIDAD DE LA QUIEBRA.

La teoría que vamos á sostener se desprende de la naturaleza misma de la quiebra, y casi todos los autores que han estudiado la cuestión, lo dicen así; además, hay otros que dicen que esta idea se desprende del cosmopolitismo del comercio, y Savigny, que apartándose de todos, pero siendo consecuente con su teoría, dice: "Que siendo la quiebra un juicio uni-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

versal para todos los bienes, debe tener efecto en el extranjero, porque la comunidad de derecho que existe entre los Estados independientes, que tiende á crecer constantemente, quiere que se conceda una protección recíproca á las decisiones pronunciadas en otro país."

Los autores que sostienen que la quiebra debe ser una, porque esta idea se desprende desde luego de la naturaleza de la institución, raciocinan de una manera tan clara y terminante que no admiten contradicción. En efecto, uno de los resultados de la declaración de quiebra, es que coloca al comerciante en una situación especial; lo hiere con cierta especie de incapacidad al quitarle la administración de sus bienes y la da á los síndicos para que realicen el activo y lo repartan entre los acreedores. Ahora bien, si la persona física ó moral es una sola, y solo también el patrimonio que sirve de prenda á los acreedores, la quiebra que ataca á la vez á uno y á otro tiene que ser igualmente única; supuesto que el patrimonio entero sirve de prenda á todos los acreedores y éstos tienen derecho á él, sea cual fuere el lugar en que estén ubicados los bienes que lo forman; y siendo como es la quiebra una declaración de la insolvencia del deudor, ó mejor dicho, una constancia de que no ha podido cumplir sus compromisos, es evidente que esto no pueda ser cierto en un lugar y dejar de serlo en otro, porque conforme al sentido común, no puede declararse que una persona ó sociedad, sea solvente en una parte é insolvente en otra.[1]

Si pasamos á los fines que se propone el legislador al declarar la quiebra, también ahí encontramos poderosísimos argumentos en pro del sistema que sostenemos. Como vimos antes, estos fines son tres; y uno de ellos, tal vez el principal, es aquel en que se favorece á los acreedores poniendo á todos ellos en la misma situación, ante la desgracia por que se han visto heridos, ya por la torpeza, ya por la mala fe del quebrado. Y preguntamos: ¿sería esto posible si se admite que la declaración de quiebra hecha en una nación no lo sea en otra? No, evidentemente, porque los acreedores radicados en el lugar donde está situada la sucursal ó establecimiento principal, quizá podrían cobrar sus créditos íntegros, mientras que los que están domiciliados en lugar distinto, tal vez no llegarían á cobrar ó tendrían que hacerlo con mucho trabajo y recibirían sus créditos con mucha tardanza y con gran rebajo.

1 Audinet. Droit International privé.

Otros autores de gran nombre, como Fiore y Norra, sostienen la misma doctrina apoyándose en que el comercio es cosmopolita, y que por lo tanto, los juicios relativos á él tienen que serlo también. Hay también algunos, como Gunther, Sarle y Brocher, que dicen que la quiebra debe tener efecto extraterritorial, porque es asimilable á una sucesión ó porque da nacimiento á una persona moral. Dice Carle:[1] "La persona física del quebrado es reemplazada por una persona moral: el concurso."

Estas teorías, bastante extrañas por cierto, no vienen á ser más que una consecuencia de las opiniones de estos autores, que perteneciendo á la escuela de los estatutos, dicen que la quiebra pertenece al estatuto personal y que por eso debe tener un efecto extraterritorial; pero estos autores no hacen más que complicar el problema y dar motivo á críticas, porque suponiendo, como ellos suponen, que á causa de la declaración, desaparece por completo la persona física del quebrado y nace una persona moral, sucesión ó concurso que absorbe todo el patrimonio, esta persona moral tiene que ser reconocida en todas partes; pero esto no es cierto, porque para reconocer una persona moral en un Estado extranjero, se necesitan muchos requisitos que vienen á echar por tierra todo lo que de ventajoso pudiera tener este sistema.

Pero haciendo á un lado estas teorías que no aceptamos, ni podemos aceptar, por las razones antes dichas, no quedan

1 Carle. La Faillete en D. J. P. p. 31.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á nuestro favor sino las primeras y con ellas creemos que á pesar de la oposición que se hace á este sistema, nos bastarán para sostenerlo, á pesar de las críticas que le hacen los de la opinión contraria.

Los defensores de esa otra escuela que sostiene la territorialidad de la quiebra, dicen que ésta no puede tener efecto extraterritorial porque las leyes que la rigen pertenecen al orden público internacional, y son, por lo tanto, estrictamente locales y de observancia general, tanto para los nacionales como para los extranjeros allí residentes.

En este argumento no vemos ni podemos ver, por más que meditamos, ninguna fuerza, ningún poder, porque desgraciadamente, hasta ahora no se ha podido decir de una manera cierta: "tal ley es una ley de orden público, tal otra no lo es;" y la razón es bien sencilla, pues que cada escuela tiene un criterio diferente para hacer esta determinación.

A nuestra opinión agregaremos lo que dice Travers para rebatir la misma objeción en su obra "La Faillete en Droit I. C.," pág. 25: "Nosotros no podemos admitir tales razonamientos. Sostener que el orden público y que la soberanía de un Estado se ven comprometidos porque algunos inmuebles y muebles ahí situados están comprendidos en una quiebra declarada por un tribunal extranjero, equivale á tanto como declarar y consagrar de nuevo que el Estado tiene el dominio inminente de todos los bienes que se encuentran en todo su territorio. La soberanía del Estado no se pone en peligro sino cuando se viola una ley de orden público, y estas son solamente aquellas que ha establecido la ley para la organización de la propiedad y la salvaguardia del crédito público. En cuanto á la idea de que el orden público se opone á que los juicios extranjeros tengan autoridad de cosa juzgada, no es necesario refutarla, pues que un vistazo á los ensayos modernos bastará para convencerse de que esta es una idea completamente abandonada al presente."

Así, pues, aunque á primera vista parece que esta objeción

es terminante, con lo anterior queda perfectamente demostrado que no lo es, porque ha querido dar á las leyes que han de declarar la quiebra, un carácter de orden público internacional que sólo tienen en Alemania [1] y México; [2] y si solamente en estos países tienen ese carácter, es claro que ahí sí tiene que ser territorial el tribunal que ha de declarar la quiebra.

En los otros países, como Francia, España, Inglaterra, Italia, Suiza, etc., hemos buscado una disposición análoga y no la hemos encontrado; de manera que podemos concluir de ahí, de una manera absolutamente cierta, que ahí puede tener un efecto extraterritorial supuesto el célebre axioma de derecho: "Todo lo que no está absolutamente prohibido, está permitido."

Dicen también los partidarios del sistema de la territorialidad, que su escuela es la mejor, porque aun suponiendo que aquella sea mejor, bajo el punto de vista teórico, para su aplicación hay muchas dificultades, pues dicen que admitiendo como buena la doctrina que sostiene la unidad de la quiebra, no por eso dejará de haber contradicción entre la ley que ha declarado ésta y las leyes del país en donde tiene que surtir sus efectos. Por ejemplo, si se trata de acreedores que tengan derechos reales sobre los bienes, para rechazar estos derechos será absolutamente necesario aplicar las leyes del lugar en donde están dichos bienes, y como esto sucede frecuentemente, resulta que si los bienes están situados en diferentes naciones, será necesario aplicar diversas leyes, que lo más probable es que sean desconocidas para el síndico.

No creemos que esta objeción tenga la fuerza que quieren darle los que la sostienen, porque estamos seguros que no hay ninguna oposición en que los acreedores que tienen dere-

1 Artículo 4 Código de las quiebras del Imperio alemán. La competencia en materia de quiebras pertenece exclusivamente al Tribunal del Builio, á cuya jurisdicción está sometida por determinación de la ley.

2 Art. 949 Cód. Com.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

chos reales sobre la cosa, sean pagados antes que los demás; supuesto que las legislaciones de todos los países civilizados admiten que estos acreedores tienen título de preferencia; y además, otra consideración de más importancia todavía, es, que todos sabemos que los créditos de éstos nunca ni en ningún país entran al concurso.

Algunas disposiciones de derecho positivo nos servirán para probar nuestro aserto. El art. 39 del Código de las quiebras del Imperio alemán, dice: "Los que bajo el punto de vista de ejecución forzosa se consideren como formando parte de los bienes inmuebles, se destinarán al pago por detracción, cuando el pago de dichas cosas pudiera reclamarse *preferentemente* sobre el valor de los inmuebles, *en virtud de un derecho real.*"

Artículo 542 del Código de Comercio belga: "Los acreedores del quebrado legalmente afianzados con una prenda no serán inscritos en la masa sino como medio recordatorio."

Artículo 548 del mismo: "Cuando la distribución del precio de los inmuebles se haga con anterioridad á la del precio de los muebles, ó, simultáneamente, los acreedores preferentes *ó hipotecarios* no reembolsados por completo con el precio de los inmuebles, *concurrirán por el importe de la cantidad que se les haya quedado á deber*, etc."

Artículo 778 del Código de Comercio Italiano: "Si los acreedores privilegiados ó *hipotecarios*, no cubrieron con el precio de los inmuebles sino una parte de sus créditos, sus derechos sobre la masa quirografaria se regularán definitivamente, en proporción de las cantidades que se les queden adeudando, por no alcanzar á cubrirlos el precio de los inmuebles respectivos, etc."

Como las anteriores, pudiera yo citar una multitud de leyes que vienen á probar lo mismo; pero para qué fatigar vuestra atención con más citas, cuando con estas queda suficientemente refutada la objeción y probada la primera parte de la doctrina que me propuse demostrar.

CAPITULO SEGUNDO.

TRIBUNAL COMPETENTE PARA HACER LA DECLARACION DE QUIEBRA EN LA DOCTRINA QUE QUIERE LA UNIDAD DE ELLA.

En el capítulo anterior quedó probada de una manera irrefutable la superioridad del sistema que sostenemos; así es que ahora tenemos que pasar á la segunda parte, es decir, tenemos que ver cuál debe ser el tribunal competente para hacer dicha declaración.

De la unidad de la quiebra se desprende desde luego, como una consecuencia lógica, directa y necesaria, que no puede haber sino un solo tribunal capaz de hacerla; pero ¿cuál debe ser éste?

Todas las personas que han estudiado derecho saben que el juicio de quiebra es un juicio atractivo y que cuando un mismo comerciante ó una misma sociedad, tiene en un mismo país diversos establecimientos, ó bienes muebles ó inmuebles, en jurisdicciones de diferentes tribunales, únicamente es competente para hacer la declaración de quiebra, el tribunal que lo sea para declarar la del establecimiento principal, y que por consiguiente, no hay más que un solo juicio de quiebra cuyos efectos se extienden á todo el país; y nosotros creemos que la misma doctrina se puede aplicar al caso de la quiebra en Derecho Internacional.

La mayoría de los autores modernos sostienen esta opinión con clarísimos argumentos; Surville A. Artuys, en su tratado de Derecho Internacional, dice: "Una vez admitido el principio de la unidad de la quiebra, la primera consecuencia lógica que se deduce de esta idea, es que la quiebra debe ser declarada por el tribunal bajo cuya competencia se halla el establecimiento principal del quebrado, y que una vez declarada por éste, no puede serlo por ninguno otro. Y no hay que apartarse de esta idea fundamental, aun en la hipóteeis de que los diferentes establecimientos tengan la misma importancia y sean

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

regidos por leyes diferentes, de tal modo que los acreedores de cada país no pudieran tomar sino los bienes de ese país, según la expresión de Stracca: "Unus creditor quisque creditor magis meri, quam creditor credidit," porque la desigualdad de las leyes no impide la unidad del patrimonio." [1]

Y Audinet dice también, después de sostener la unidad en la quiebra, que de ella se deduce que un mismo tribunal debe ser el único competente para declararla y que este no puede ser otro sino el del lugar en que está ubicado el establecimiento principal. [2]

Pudiera decírsenos que porque el tribunal competente es el del lugar de la casa matriz y no el del domicilio del quebrado; pero la razón que para ello tenemos es muy sencilla; si suponemos que lo es el del domicilio personal, resultarían múltiples dificultades, porque el quebrado podría tomar el que más le conviniese, defraudando así los intereses de los acreedores é impediría que se lograran uno ó varios de los fines que se propone esta institución.

Ya en la práctica se ha presentado algún caso que ha sido resuelto conforme á estos principios, por los motivos asentados. Una Sociedad anónima, "Le credit Foncier *Suisse*," que tenía su domicilio en Ginebra y su establecimiento principal en París, fué declarado en quiebra casi simultáneamente en ambas partes; los síndicos nombrados se hicieron oposición, pero en una y otra parte se mantuvo el fallo en primera instancia y hasta después de pasado algún tiempo el poder administrativo suizo revocó el nombramiento de los síndicos, diciendo que supuesto que el establecimiento principal estaba en París, solamente el tribunal de ahí era el competente para seguir el juicio de quiebra.

Como vemos, con los argumentos anteriores queda comprobado teóricamente que sólo hay un tribunal que pueda hacer

1 Surville, pág. 542.
2 Audinet, pág. 559.

la declaración de quiebra, ¿pero en la práctica podemos llegar al mismo resultado?

En Derecho Francés es cosa resuelta y así lo dicen todos los autores; en cuanto á nuestro derecho, creemos que si no es indudable, sí al menos es sostenible la opinión anterior.

En Derecho Francés, el Código de Procedimientos Civiles dice: "Art. 59, fracción VII: En materia de quiebra, el acreedor tendrá que presentar su demanda ante el juez, del domicilio del quebrado."

Y nuestro Código de Comercio, dice: "Es competente en los juicios de concurso de acreedores, el juez del domicilio del deudor. Si tuviéramos tan sólo este artículo, es indudable que consagraría la unidad de la quiebra; pero más adelante, en la parte en que tratemos de ver si es posible aplicar esta doctrina á nuestro derecho, veremos que tenemos artículos expresos que hacen imposible su aplicación.

Así es que no creo equivocarme al decir que con los fundamentos anteriores se puede decir, de un modo absoluto, que no hay ni puede haber otro tribunal competente para declarar la quiebra, sino aquel que lo es, conforme á la ley, para hacer la del establecimiento ó de aquel en que estén todos los libros del fallido, ó cuente de una manera expresa y terminante su patrimonio.

CAPITULO TERCERO.

EFECTOS EXTRATERRITORIALES QUE PUEDE TENER EL JUICIO DE QUIEBRA.

Hasta este momento, durante el desarrollo de esta tesis, hemos probado de un modo que no admite duda, dos de los fines de que nos propusimos hacerlo al principio de este trabajo; vamos á ver ahora, en seguida, si en el estudio actual de la legislación universal, es posible dar un efecto extraterritorial al juicio de quiebra declarado por el tribunal competente.

Teóricamente creo haber probado de una manera inconcusa, la superioridad del sistema que quiere la unidad de la quiebra

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sobre aquel que establece que la misma se haga independientemente en todos y cada uno de los establecimientos de la propiedad del quebrado. ¿Pero es posible su aplicación en el estado actual de la ciencia, antes que se llegue á una unión de legislación á que se propusieron llegar los Estados cuando se celebraron los Congresos de Turín en 1880, de Montevideo en 1889 y de la Haya en 1893?

En el primero de los congresos mencionados, las bases que se presentaron para resolver la cuestión, fueron en general las aceptadas universalmente por todos los Estados separadamente; y en ellas, como es natural, están comprendidos todos los fines y todas las consecuencias que se deducen de ese estado y que creo haber determinado ya con toda precisión.

Entre los principios propuestos en ese Congreso encontramos determinado desde luego que el único tribunal que puede hacer la declaración de quiebra, es el que es competente para declarar la del establecimiento principal; también está determinado que la resolución de ese tribunal debe surtir todos sus efectos en todos los Estados que estaban representados en el Congreso, excepto en el caso de que fueren terminantemente contrarias al *locus regit actum* del lugar; la incapacidad del quebrado debe ser reconocida en todas partes, el nombramiento de los síndicos debe ser hecho conforme á esa ley é igualmente reconocido que los procedimientos deben ser también conformes á la ley, no que declaró la quiebra, sino conforme á la ley del lugar en que está ubicada la sucursal.

Pero, desgraciadamente, como ya lo he repetido multitud de veces, á pesar de ser evidente la necesidad de aprobar dichas bases, nada se aprobó de todo lo convenido en esos Congresos y han quedado de pie todas las dificultades que encierra la resolución de la materia y que hubieran terminado con el acuerdo tan vivamente deseado por todos aquellos que se dedican al derecho y al comercio.

Clara y patente es la necesidad de que se vuelva á verificar otro Congreso, ó que por lo menos se aprueben las bases del

de Turín, ya que los únicos motivos que hubo para que no fueran aprobados, fueron los intereses bastardos que se levantaron en el seno del mismo Congreso, y los motivos de la antigua escuela de los estatutos.

Y realmente, la causa principal de eso no pudo ser otra, porque es tal la confusión que reina aún en esa doctrina, que sus mismos sostenedores todavía no han llegado á ponerse de acuerdo sobre cuál de los estatutos debe regir la quiebra; la mayoría cree que debe ser regida por el estatuto real, y por lo tanto siendo aplicable solamente el *locus regit actum*, la declaración no puede tener efecto extraterritorial, sino de una manera excepcional y como vía de ejecución.[1] Los otros, que dicen que debe serlo por el personal, llegan al fin á la misma resolución, porque dicen que la declaración sí puede surtir sus efectos en todas partes; pero es esta y nada más que esta, porque una vez declarada la quiebra, su primer efecto es borrar la personalidad del quebrado, y quedando sólo el patrimonio, éste no puede ser regido sino por el estatuto real.

En una palabra, y reasumiendo lo antes dicho, unos y otros vienen á sostener al fin lo mismo, ó sea la territorialidad de la quiebra, supuesto que la tramitación tiene que verificarse de una manera independiente en cada país en que esté como parte del patrimonio.

Por fortuna, esta escuela ya está casi totalmente desechada en nuestros días, gracias á los luminosos estudios y á las fuertes y sabias críticas que de ella han hecho los autores modernos, tales como Despagnet, Surville A. Artuys, Audinet, Weiss, etc., que, como sabemos, han sostenido y dado gran brillo á la escuela fundada por el ilustre Mancini.

Las modernas escuelas de la reciprocidad y de la utilidad también admiten la opinión que venimos sosteniendo; los defensores de la escuela de la utilidad la sostienen sin restricción ninguna. Toelise, en su obra de Derecho Internacional Pri-

1 Thaler. La Faillete en Droit comparé, tomo 2, p. 353.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vado, dice que: "La publicación de la declaración de quiebra se rige por la ley del país en donde ha sido declarada, y basta que la publicación de la quiebra se haga en un lugar para que surta sus efectos en todas partes."

Los que sostienen que la base para resolver todos los conflictos de leyes, no debe ser otra que la reciprocidad internacional, también aceptan la misma resolución, pero solamente en el caso de que se dé en el país donde se ha declarado, el mismo valor que se quiere dar á esa resolución en el país en donde se debe ejecutar el acto.

Pasando de la cuestión doctrinal á la cuestión vista á la luz del Derecho positivo, encontramos que casi todos los Códigos actualmente en vigor, sostienen que la base debe ser la reciprocidad; de modo que con bastante fundamento creemos que en el estado actual de las legislaciones vigentes, las sentencias de quiebras pueden tener un efecto extraterritorial; ¿pero cómo y bajo qué bases deben aplicarse, y desde cuándo deben tener dicho efecto?

En otros términos: para que la declaración de quiebra hecha en un país surta sus efectos en otro distinto, ¿es preciso que haya pasado el juicio en autoridad de cosa juzgada, ó todas las disposiciones pueden ir surtiendo sus efectos desde el momento en que son conocidas en todos y cada uno de los lugares en que tengan que cumplirse?

Si se acepta lo primero, es imposible la unidad de la quiebra, porque si esperamos que todo el juicio haya pasado en autoridad de cosa juzgada, claro es que hasta entonces puede declararse la quiebra de la sucursal y hasta ese momento se comenzará á tramitar el juicio de concurso respectivo. [1]

Si por el contrario, admitimos, como debe hacerse en realidad la segunda opinión, todo queda perfectamente y sin dificultad, una vez llenados los requisitos necesarios, [2] entre los que deben contarse los siguientes:

1 Rocco, pág. 374. Lyon Caen, tomo 2, pág. 229.
2 Fiore. Efectos internacionales de las sentencias.

Primero: que el auto ó sentencia pronunciada sea legalizada por el cónsul del país donde tiene que verificarse la disposición citada.

Segundo: que se pruebe que el auto ó sentencia está hecho conforme á las leyes del país en donde se dictó.

Tercero: que no esté en oposición con las leyes del país en que deba ejecutarse, y

Cuarto: que sea revisada por el tribunal del país en que deba surtir sus efectos.

Ya sentadas las bases con que teóricamente puede resolverse la cuestión, vamos á ver, también en teoría, las consecuencias que se deducen de la declaración de incapacidad hecha en la persona del deudor, de los acuerdos verificados entre éste y los acreedores, y del nombramiento y funciones de los síndicos é interventores.

La declaración trae, como resultado inmediato, que el quebrado sufra mucho, tanto en sus derechos políticos como en sus derechos civiles, inmediatamente después de declarada aquella, pierde la administración de su patrimonio y se ve atacado de cierta especie de incapacidad que le prohibe dedicarse al comercio hasta pasado cierto tiempo. Si se admite nuestra opinión, el primero de los resultados tiene que ser universalmente reconocido; en cuanto al segundo, tenemos que hacer varias distinciones.

En efecto, es sabido que la quiebra puede ser, ó bien fortuita ó culpable. Si es la primera, la ley se limita á quitar al quebrado la administración de sus bienes y lo hiere en su país de cierta especie de incapacidad civil y política. En cuanto á los efectos que se deben dar á esas resoluciones hay que distinguir ciertos casos: si el lugar en que se ha declarado la quiebra es la nación del quebrado, los efectos deben tener un efecto extraterritorial; si es extranjero, la resolución no puede tener sino un efecto local. En efecto, si es nacional, nada más natural que admitir el resultado de esa declaración en todas partes, una vez que la doctrina de la nacionalidad de la ley quiere

que la capacidad del individuo se rija solamente por su ley nacional; en cuanto al caso del extranjero, se encuentra la razón de lo asentado por nosotros en la misma explicación que antes dimos para el caso del nacional.

Si la quiebra es culpable, nada tenemos que decir sino que la incapacidad debe seguir al individuo, en cualquier parte en que se encuentre, desde el momento en que la quiebra, culpable ó fraudulenta, entraña la comisión de un delito.

Otra cuestión de importancia que tenemos que resolver también es la relativa al valor que se debe dar á los convenios celebrados entre los acreedores mismos, ó sean los concordatos verificados. Según la doctrina que venimos sosteniendo, es claro que los concordatos deben hacerse de conformidad con la ley, bajo cuyo imperio se está tramitando el juicio; ¿pero se debe dar efecto á todos los concordatos en todas partes?

Para resolver la cuestión también hay que distinguir dos casos enteramente distintos: en primer lugar hay que preguntarse si el acuerdo á que han llegado los acreedores de un país debe ser aceptado por los residentes en otro; y segundo, si resuelta por la afirmativa la pregunta anterior, es necesario que pase por la revisión del tribunal del país en donde residen los demás acreedores que deben aceptarlo.

La primera pregunta no hay duda de que debe ser resuelta afirmativamente aun en el caso de que el acuerdo fuese hecho solamente por la mayoría de los acreedores, y esto es una consecuencia de nuestra doctrina que, como hemos visto, se reduce á aplicar al Derecho Internacional las resoluciones dadas conforme al Derecho Mercantil, y en éste sabemos que lo aprobado por la mayoría de los acreedores obliga á todos los demás.

En cuanto á la segunda, también la resolvemos afirmativamente porque desde antes vimos que para que las resoluciones de un tribunal extranjero tuvieran aplicación, tenían que pasar por ciertos requisitos, entre los que estaba la revisión por un tribunal del país.

También se presentan dificultades serias y difíciles sobre el nombramiento y funciones de los síndicos. Sobre si es ó no válido el nombramiento hecho por el tribunal que ha declarado la quiebra, nos contentaremos con decir que hay duda de que debe serlo, porque así se desprende claramente de los principios que deben regir el sistema de la Unidad de la Quiebra.

Algunos autores [1] han resuelto la cuestión también por la afirmativa, asimilando el cargo de síndico al de mandatario general, y dicen que si éste puede hacer todo lo que quiera ó que se le haya encargado en cualquier parte en que resida, el síndico también debe de tener las mismas facultades en virtud de esa similitud que ellos ven en esos dos cargos. A nuestro modo de ver, esta resolución no es la verdadera, porque no creemos que haya ni pueda haber ninguna analogía entre el síndico y el mandatario; éste es nombrado libremente por el mandante, mientras que el otro lo es por el juez, á moción de la mayoría de los interesados, sin que el quebrado tenga la más mínima intervención en su nombramiento.

Con relación á las funciones que dichos encargados pueden tener, es claro que pueden desempeñar todas las obligaciones que les da la ley que ha declarado la quiebra, siempre que no lo prohiba el orden público internacional, ó el *locus regit actum* del lugar en donde haya de verificarse el acto.

Hasta este momento me he ocupado tan sólo de desarrollar una doctrina que creo es la mejor para resolver todas las cuestiones que se presenten. Como habéis visto, se limita á la aplicación de las reglas que siguen en Derecho común al Derecho Internacional Privado. No es preciso que os repita de nuevo todas las ventajas que tiene este sistema, el que, como se ha visto durante el desarrollo de este trabajo, tiene sobre el sistema que quiere la territorialidad de la quiebra la grandísima ventaja práctica de estar en armonía perfecta con la naturaleza de esta institución.

1 Despagnet.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

He terminado de exponer una doctrina con la que creo se podrán resolver las cuestiones que se presenten, mientras no se llegue á celebrar un congreso ó un tratado que resuelva la cuestión de una manera terminante.

Voy á concluir ya; pero antes creo que es conveniente examinar si la ventajosa doctrina que tan imperfectamente he desarrollado, es aplicable á nuestro derecho positivo actualmente vigente.

Desgraciadamente esto es imposible, porque ha sido tan imperfecta nuestra codificación en materia mercantil, que existen numerosas contradicciones entre unos artículos y otros, y no podemos dejar de lamentarnos al ver que esto proviene de la irresolución de nuestros codificadores, que dejándose llevar únicamente de un sentimiento de imitación mal comprendido y no tomando como base ninguna escuela especial, han hecho una confusión tal que es en extremo difícil resolver cualquiera dificultad que se presente.

En nuestra opinión, debían haberse sujetado todos á una misma escuela ó cuando menos haber establecido dos diferentes sistemas tan bien establecidos como están en nuestros Códigos Civil y de Procedimientos Civiles.

No es nuestro ánimo hacer una comparación entre el Código de Comercio y otros Códigos, porque sería ajeno á este trabajo; pero sí vamos á ver las escuelas que aplican unos y otro para aplicarlas á la cuestión que estamos tratando de resolver.

Si hacemos un ligero examen de nuestro Código Civil, encontramos la escuela de los estatutos establecida en los artículos 11, 12 y 16, y más adelante, en materia de testamentos, la reciprocidad.

En el de Procedimientos Civiles tenemos también los estatutos y la reciprocidad; pero en el de Comercio tenemos de todas y en especial la hoy abandonada teoría de la territorialidad absoluta de la ley.

Esta territorialidad está admitida de una manera terminante

en nuestro Código en materia de quiebras; lo que hace imposible la aplicación del sistema que venimos sosteniendo.

El artículo 949 del mencionado Código, dice: "Si quebrare en el extranjero una negociación mercantil que tuviere en la República una ó más sucursales, se pondrán éstas en liquidación, sin perjuicio de que se declaren también en quiebra si tal fuere legalmente su estado. *Esta quiebra, tanto para su declaración como para sus demás efectos, se sujetará á las disposiciones de este Código.*

Nuestro Código de Procedimientos es más consecuente, porque quizá ahí, en materia de concursos, sí es aplicable nuestra doctrina, porque los artículos relativos á la ejecución de actos y sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros, se atiende en primer lugar á los tratados, y faltando éstos, á la reciprocidad. Los artículos relativos dicen á la letra: "Art. 901 C. P. C. Si no hubiere tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere por las leyes á las ejecutorias y resoluciones judiciales dictadas en la República."

México, á 9 de Junio de 1894.

ALONSO FERNÁNDEZ CASTELLÓ.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LA ESCUELA POSITIVA DE DERECHO PENAL.

(Exposición sumaria de sus doctrinas).

Por el Lic. Carlos Díaz Infante, ex-Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. *

VI

23.—Un estudio concienzudo, una crítica poderosa, pero sensata y á todas luces científica, por parte de la escuela positiva de Derecho penal, ha reducido á sus justos límites la influencia que en la producción del crimen ejercen el factor económico y la educación. Voy ahora á procurar desvanecer dos cargos que en alguna parte he visto apuntados contra la nueva escuela, á saber: que ni ha hecho el estudio completo de todos los factores sociales del delito, ni les ha concedido en sus trabajos á estos mismos factores, el puesto que por derecho les corresponde. En el primero de estos dos cargos están comprendidos todos los modernos criminalistas; en el segundo, sólo los penalistas italianos.

Por lo que hace al primero, bien se deja comprender que aun siendo cierto, entraña una exigencia que, dado el corto período de vida con que cuenta la nueva escuela penal, no

* Véase pág. 34.

está aún en aptitud de satisfacerla, pues, si el estudio que se le demanda puede llegar alguna vez á ser tan completo como se le pide, esto sólo puede ser obra del transcurso del tiempo, supuesto que ese estudio no puede salir de la cabeza del sabio, como salió Minerva de la de Júpiter armado de todas sus piezas, sino que tiene que ser obra de una observación laboriosa, lenta y meditada de un gran número de hechos.

En cuanto al segundo cargo, es infundado. Basta, al efecto, recordar que he citado ya pasajes enteros de Ferri, uno de los más caracterizados penalistas italianos de la moderna escuela y sin duda su más eminente sociólogo, pasajes que contienen declaraciones expresas acerca de cuánta es la importancia que la misma escuela les otorga, en la producción del crimen, á los factores de que se trata; y podría citar en este momento, en comprobación de lo mismo, otros muchos de esos pasajes, esparcidos en abundancia en varios de los trabajos de aquel autor, si no supiera que, en el curso de este estudio, tendré aún que recurrir al texto literal de algunos de ellos. Pero, además, propóngome dar á conocer el sentir de la moderna escuela acerca del influjo del alcoholismo en la criminalidad, y la teoría de los *sustitutivos penales*, del propio Ferri, con lo que quedará perfectamente puesto en claro que, la escuela positiva de Derecho penal, ni aun en Italia, patria de los factores antropológicos del delito, ha dejado de concederles á los sociales la importancia y el puesto á que tienen derecho.

24.—El alcoholismo es, sin disputa, una de las llagas que más tremendamente afligen á la sociedad actual. Haciendo á un lado los graves perjuicios que causa á la salud física del individuo, los peores que ocasiona á la raza, por medio de herencia tan nefasta como la degeneración, el crimen, el suicidio y la locura, la sola relación puesta en claro entre tal vicio y la criminalidad, á pesar de las afirmaciones en contrario de Tammeo, Fournier de Flaix, Colajanni y otros, es mal por sí solo tan grave, que con justicia alarma á todos aquellos que siguen con atención el continuo progresar del alcoholismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Desde 1839, Pierquin había notado ya la relación que existe entre el alcoholismo y el crimen; Monel, en 1857, decía: "que por el alcoholismo se produce una clase de desgraciados desmoralizada y embrutecida, que se caracteriza por la depravación precoz de los instintos y por el abandono á las acciones más inmorales y peligrosas;" observación esta que según más de un autor, recibe su confirmación de la diaria experiencia. Hoy el estudio del alcoholismo ha interesado á muchos autores bajo muy diversos puntos de vista, trabajos todos útiles bajo más de un concepto, pero que, sin relación directa con el objeto que en este momento me propongo, extraviarían lamentablemente el curso de mi estudio, si tratara, tomándolas de dichos estudios, de dar á conocer las distintas manifestaciones del alcoholismo.

Al asegurar el Dr. Despine, que es enorme la cifra de los homicidios y suicidios provocados por las bebidas espirituosas, asegurando también que muchos alcohólicos son arrastrados á la vez á estos dos extremos, según lo pudo comprobar Briez de Boismont en diez y seis casos, no hacía más que asegurar un hecho comprobado plenamente por la estadística, conforme se va á ver.

En Francia, de 1829 á 1869, el consumo anual del vino por persona asciende, de 62 litros á más de 100, y el del alcohol, de 0.93 de litro—1829—á 3.90—1885—; y, durante este período de tiempo, la delincuencia aumenta constantemente. Sin disputa que, este aumento de la criminalidad, no obedece solamente al consumo del vino y del alcohol, sino también á otras causas; pero que una de ellas es la señalada no puede ponerse en duda, si se atiende á esta demostración de Ferri que, en los meses de vendimias, hay un acrecentamiento de delitos ocasionales contra las personas, delitos que no tienen otra explicación que el excitante producido por el mayor consumo del vino durante esos meses. Pero, sobre todo, esa perniciosa influencia de las bebidas espirituosas, resulta más patente de este hecho innegable: que á los años de mayor consumo de alcohol y á los más abundantes en cosechas de vino, corresponde mayor número de delitos contra las personas—golpes, heridas y homicidios—é inversamente, á los años en que tal consumo y tales cosechas disminuyen, los referidos delitos decrecen igualmente. Así, en los años anteriores á 1854 y 1855, á contar de 1849, la menor cosecha de vino en Francia no había bajado de 22.600,000 hectólitros; pero en aquellos desciende la cosecha á 10.700,000 hectólitros en el primero y á 15.100,000 en el segundo; pues bien, á la vez se nota que los delitos de sangre, que en los años anteriores á los citados no habían bajado de 12,451, disminuyen en éstos hasta quedar reducidos á 9,830 en 1854 y á 9,638 en 1855. Esta misma diminución en los delitos contra las personas se nota en los años de 1859, 67, 73, 78, 79 y 80 en que la cosecha del vino es menor que la ordinaria, y al contrario, esos mismos delitos aumentan en los años de 1850, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 68, 74 y 75 en que la cosecha supera á las de otros años. En 1869, llega por primera vez el consumo del alcohol en Francia á 1.800,000 hectólitros, á lo que hay que agregar una abundante cosecha de vino, y los delitos de sangre llegan también por vez primera á la enorme cifra de 18,762.[1]

Los crímenes contra las buenas costumbres, acusan igualmente la influencia del alcoholismo; M. Claude, en su *Relación sobre el consumo del alcohol en Francia*, hizo notar que, en los departamentos del Norte, en donde el consumo anual por persona es de 6 litros de alcohol, los delitos relacionados son tres veces más numerosos que en los departamentos del Sur, donde el consumo anual del líquido en cuestión sólo alcanza la cifra de 2 litros por persona.

Riant asegura que, de los crímenes cometidos contra las personas el 60% lo han sido bajo la influencia del alcohol, proporción que estimo exagerada; pero hasta qué extremo el alcoholismo es frecuente entre los criminales, dálo á conocer

1 V. Ferri, ob. cit., pág. 222.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el cuadro que publicó Marambat en su estudio: *L'alcolisme et la criminalité*, pues de su contenido aparece: que en España, Estados Unidos y el Tirol, de los reos condenados el 100 por 100 son dados á la embriaguez; en Bélgica el 80 por 100, en Inglaterra el 75, en Francia el 72, en Suiza el 50 y en Italia el 33.33%.

Después de lo anterior, ¿será lícito dudar de la evidente relación que liga al alcoholismo con la criminalidad? y si á esta relación se agrega la que también tiene ese vicio con el suicidio, nadie podrá tildar de metafórico el dictado que comunmente se le aplica de gangrena social.

25.—Ferri, resume la idea ó propósito fundamental de lo que ha llamado *sustitutivos penales*, de la siguiente manera: "que el legislador, observando los orígenes, las condiciones, los efectos de la actividad individual y colectiva, llegue á conocer las leyes psicológicas y sociológicas, por medio de las cuales podrá adueñarse de una gran parte de los factores del crimen, y *sobre todo, de los factores sociales*, para influir indirectamente, pero con mayor seguridad, sobre el movimiento de la criminalidad. Es decir, que en las disposiciones legislativas, políticas, económicas, administrativas, penales, desde las instituciones más monumentales hasta los más ínfimos detalles, se dé al organismo social un arreglo por el cual la actividad humana, en lugar de estar tan continua como inútilmente amenazada de represión, se vea guiada indirectamente por senderos no criminales con la libre dilatación de las energías y la satisfacción de las necesidades individuales, con la condición de chocar lo menos posible con ellas y de quitarles las ocasiones y tentaciones delictuosas."

"Estos sustitutivos penales, entrando una vez en la conciencia y hábitos de los legisladores, por las enseñanzas de la sociología criminal, serán los antídotos por excelencia de los *factores sociales del crimen*."

Los *sustitutivos penales* tienden, pues, á remover en la medida de lo humano y posible, las causas ó factores sociales del

delito, á su vez ellos mismos constituyen medidas sociales; no se necesita más para que quede desvanecido el cargo, que sin fundamento, se le ha hecho á la nueva escuela penal, de que no les concede en sus trabajos á los factores sociales la importancia á que tienen derecho; toda vez que, si toma esos factores como principal objetivo de la prevención por ella aconsejada, es porque los considera factores importantísimos de la criminalidad. Y refiero á la escuela lo que sólo ha sido propuesto por Ferri, porque si algunos autores rechazan determinado sustitutivo, todos aceptan la idea general de Ferri y el conjunto de su teoría sobre prevención social del crimen.

Al enumerar á continuación la mayor parte de los constitutivos indicados por Ferri, debo advertir que el autor mismo al hacer tal indicación, no entendió dejar completa y definitivamente cerrada la enumeración, sino que además de darlos sólo como ejemplos, estima que pueden aumentarse hoy, mañana y siempre y modificarse según las exigencias de la evolución social.

1º *Orden económico.—Libre cambio;* esta medida, evitando el alza anormal en el precio de los alimentos y extirpando el monopolio de ciertas industrias, impide muchos delitos contra la propiedad.—*Sistema de tributos que grave las verdaderas fuentes de riqueza y sea proporcionado á las ganancias del contribuyente;* sustitutivo que, evitando el exagerado fiscalismo, hará desaparecer no pequeño número de los delitos que hoy se cometen contra los funcionarios, empleados públicos y agentes de la autoridad.—*Libertad de gravámenes á las pequeñas propiedades;* impide la expropiación en virtud de la facultad económico-coactiva, lo que á su vez evita el que aumente el número de los totalmente insolventes, muchos de los que se ven por esto mismo arrastrados al delito.—*Libertad de emigración;* á ella le debe Irlanda la diminución de la reincidencia, por haber abandonado su territorio el 40% de los penados cumplidos.—*Impuestos excesivos sobre fabricación y venta del alcohol;* si á ésta se agregan otras medidas que traigan con-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sigo el abaratamiento de bebidas, tales como el café, el té y la cerveza, estos sustitutivos es seguro obrarían en contra del alcoholismo, con mucha mayor eficacia que las penas y castigos correccionales con que se pretende corregir semejante vicio.—*Sueldos proporcionados á las necesidades de los funcionarios y empleados públicos;* la miseria disfrazada en que muchas de estas personas viven, las impulsa en ocasiones á faltar á sus deberes; por el medio indicado, el cohecho, el peculado y el soborno se corregirían en parte.—*Abundancia de caminos de fierro, de tranvías y del alumbrado público de las ciudades;* impide el delito y principalmente los cometidos contra la propiedad.—*Casas baratas para los obreros, sociedades cooperativas y socorros mutuos, cajas de previsión y para la vejez, cajas para los inválidos del trabajo, bancos populares y cajas de ahorros;* son otros tantos ejemplos de sustitutivos penales en el orden económico.

2º *Orden político.—Acuerdo entre el gobierno y las aspiraciones nacionales;* sustitutivo seguro contra las rebeliones, asonadas, conspiraciones, etc., etc., y sin duda más eficaz que las cárceles y las mejores medidas de policía.—*Adaptar á cada región del mismo país las leyes que demanden sus necesidades y manera de ser propia;* lográndose por este conjunto de sustitutivos que cada parte del organismo social tenga la libertad de movimiento y de desarrollo que le son necesarios, muchos delitos dejan de perpetrarse.—*Libertad completa de ideas y opiniones;* impide los delitos llamados de imprenta que resisten á las penas, porque éstas lo que hacen es avivar las pasiones, y más si son injustas y se las aplican á hombres íntegros; además, aquella libertad proporciona á la sociedad un desahogo menos violento contra los abusos de sus mandatarios. El respeto á las leyes y el respeto á los derechos individuales y sociales por parte de todas las autoridades, es, sin disputa, mejor mordaza contra la prensa que las cárceles y los gendarmes, y es á la vez el mejor medio de obtener por parte de todos los ciudadanos el respeto á la ley.

3º *Orden científico.*—Si bien la ciencia tanto se presta á ser

empleada por el criminal en sus salvajes hazañas contra la sociedad, como á serlo por el hombre honrado en beneficio, mejora y adelanto de esa misma sociedad, sin embargo, y aun en estos mismos momentos en que la química suministra á los desalmados anarquistas sus más terribles explosivos, no hay que perder la fe en ella ni retirarle nuestra confianza, pues es preciso convenir que, si por una fatalidad puede en ocasiones ser cómplice del malvado, este no es más que un efecto pasajero y enteramente transitorio, pues siempre y ante todo será la amiga y aliada del hombre honrado y virtuoso.—*El ejercicio de la medicina por la mujer;* es ejemplo, en el orden científico, de un buen sustitutivo que prevendrá delitos contra el orden de las familias y las buenas costumbres; en este mismo orden, el empleo del aparato de Marsch, es otro, y el uso de la fotografía, no sólo para identificar á los criminales, sino también para indagar y comprobar cierta clase de delitos.

4º *Orden legislativo y administrativo.—Leyes previsoras sobre sucesiones;* esta legislación evita los homicidios por ansia de recoger la herencia.—*Libertad para investigar la paternidad, obligación de atender al porvenir de los hijos nacidos fuera de matrimonio, y la de resarcir los daños y perjuicios que ocasione la falta de cumplimiento de la promesa matrimonial;* son otros tantos sustitutivos que impedirán el concubinato, el infanticidio, el aborto, la exposición y abandono de infantes, y los homicidios cometidos por las jóvenes seducidas y abandonadas.—*La justicia gratuita, su administración pronta y fácil, y un procedimiento riguroso y expedito para hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente de delito;* servirán de preventivos á delitos del orden público, contra las personas y contra la propiedad.—*Simplificación de la legislación;* evita las expoliaciones y abusos cometidos en perjuicio de los ignorantes y poco versados en el laberintesco arsenal legislativo.—*Institución del registro civil;* el mejor preservativo para los delitos contra el estado civil de las personas.—*Salas de maternidad y socorros á domicilio;* son sustitutivos contra el infanticidio, el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

aborto y el abandono de niños.—*Notariado bien reglamentado;* evita, entre otros delitos, el de falsificación.

5º *Orden religioso.—Prohibición de procesiones fuera de la iglesia;* sanciona el respeto á las creencias de todos é impide desórdenes y tumultos.—*Supresión de los conventos;* remueve una causa de atentados contra el pudor y la mendicidad profesional.—*Diminución de la suntuosidad de las iglesias;* disminuyen el incentivo al hurto de objetos preciosos.—*Abolición de ciertas peregrinaciones;* que son ocasión de delitos contra las buenas costumbres, las personas y la propiedad.—*Matrimonio de los eclesiásticos;* esta medida impediría un sinnúmero de infanticidios, tentativas de aborto, adulterios, atentados al pudor y hasta homicidios.

6º *Orden familiar.—Divorcio con ruptura del vinculo;* excelente medida contra la bigamia, el adulterio y el homicidio. *Preferencia á los casados para desempeñar ciertos empleos;* este sustitutivo impedirá muchos delitos, porque la familia es siempre un freno para el hombre.—*Antelación forzosa del matrimonio civil al religioso;* con esta obligación se evitarían, entre otros delitos, el de bigamia.

Todos estos ejemplos de sustitutivos penales que, como dice Ferri, pueden aumentarse hasta formar un Código preventivo en oposición al Código Penal, son bastantes á convencer que, una previsora legislación es arma más segura contra el crimen que la amenaza de leyes punitivas, las reformas sociales conservan mejor la salud del organismo social que el Código citado, pues sucede con este organismo lo que con el humano, que se libra mejor de la enfermedad y de toda clase de males, recurriendo á las medidas que aconseja la higiene, que no á los tratamientos terapéuticos.

No es esto decir que los sustitutivos penales sean la panacea de todo crimen, tanto más cuanto que, principalmente á lo que miran es á la prevención de los delitos en que los factores sociales son, si no las únicas, sí las más directas causas; "porque si es cierto, como dice Ferri, que modificando los factores sociales se puede influir sobre el nivel de la criminalidad, especialmente ocasional, también es cierto, desgraciadamente, que en todo medio social hay siempre un *mínimum* de criminalidad inevitable, debido á la influencia de los otros factores biológicos y físicos. Los sustitutivos no tienen por fin hacer imposible todo crimen ó delito, sino solamente reducirlos al *mínimum* en tal ó cual medio físico y social." No ha entendido, pues, Ferri que daba con la teoría de sus sustitutivos penales un remedio universal del crimen; por lo mismo, para argumentar contra ella y objetarla, es preciso colocarse en el mismo terreno y bajo el mismo punto de vista que el autor de ella.

Algunos autores han pretendido que la teoría de los sustitutivos penales de Ferri no es más que la conocida prevención de los crímenes invocada desde Montesquieu, lo que sin disputa entraña una manera de ver errónea, pues entre la prevención social propuesta por Ferri, y la prevención de mera policía, hay las siguientes notables diferencias: que la prevención social ve á los orígenes del crimen, y por medios indirectos trata de apartar algunas de las causas que lo producen; que funciona basada en el conocimiento que tiene del alcance de ciertas leyes psicológicas y sociológicas, haciendo de esta manera que su acción sea extensa y general: por el contrario, la prevención de mera policía no obra sobre las causas del delito, sino que su acción empieza cuando el germen de éste ya se ha desarrollado y es eminente la producción de aquel, y pretende sofocarlo por medidas de coacción directa; su acción, que no se dirige por el conocimiento de las leyes dichas, es por consiguiente limitada y estrecha. Si me fuera permitido, diría: que la prevención social es, hasta cierto punto, la profilaxia de los delitos ocasionales; cualidad que en ninguna ocasión, ni bajo ningún punto de vista, puede reclamar para sí la prevención de mera policía.

(Continuará).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EL AGUA EN SUS RELACIONES CON EL DERECHO INTERNACIONAL,
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL. *

II

RESEÑA HISTORICA SOBRE EL ORIGEN
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE EN MEXICO Y DE LAS AGUAS
EN GENERAL.

Apenas verificada la conquista por los españoles en 1521, el territorio Nacional pasó á ser exclùsivo patrimonio de los Reyes de Castilla, en virtud de la sumisión del último de los Emperadores Aztecas, y por las leyes de Indias [1] las tierras

* Véase pág. 51.

1 Ley 1, tít. I, lib. III. El Emperador D. Carlos, en Barcelona, á 14 de Septiembre de 1519. El mismo y la Reina Doña Juana, en Valladolid, á 9 de Julio de 1520. En Pamplona, á 22 de Octubre de 1523. Y el mismo Emperador, y el Príncipe Gobernador en Monzón de Aragón, á 7 de Diciembre de 1547. D. Felipe II en Madrid, á 18 de Julio de 1563. D. Carlos y la Reina Gobernadora de esta Recopilación:—"*Que las Indias Occidentales estén siempre unidas á la Corona de Castilla y no se pueden enajenar.*—Por donación de la Santa Sede Apostólica, y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en Nuestra Real Corona de Castilla. Y porque es Nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas de Nuestra Real Corona de Castilla, desunidas ni divididas, en todo ó en parte, ni sus ciudades, villas ni poblaciones, por ningún caso ni en favor de ninguna persona. "Y considerando la felicidad de nuestros vasallos, y los trabajos que los descubridores y pobladores pasaron en el descubrimiento y población, para que tengan mayor certeza y confianza de que siempre estarán y permanecerán unidas á nuestra Real Corona, prometemos y damos Nuestra fe y palabra real por Nos y los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás, no serán enajenadas ni apartadas, en todo ó en parte, ni sus ciudades ni poblaciones, por ninguna causa ó razón, ó en favor de ninguna persona; y si Nos ó nuestros sucesores hiciéremos alguna donación ó enajenación contra lo susodicho, sea nula y por tal la declaramos."

conquistadas en las Indias Occidentales fueron incorporadas á la Corona de España. Los soberanos se reservaron el derecho de concesión, y como observa el Sr. Mora, [1] el principio fundamental de la legislación española, en cuanto á la propiedad en Nueva España, fué que nadie podía poseer legítimamente sino á virtud de una concesión primitiva de la Corona ó de sus agentes, llevándose esto con tanto rigor, que repetidas veces se nombraron en comisión Oidores, ú otras personas, para registrar los documentos que acreditasen la propiedad de las fincas y hacer composiciones (arreglos) con sus dueños, cuando carecían de títulos suficientes, obteniéndolos mediante una suma más ó menos considerable que para ello exhibían. [2] Más tarde esta facultad fué concedida á las Audiencias. [3] En la Recopilación de Indias, [4] dice Felipe II: que pertenecen á la Corona Real los baldíos, suelos y tierras que no se hubiesen cedido por los Señores Reyes sus predecesores, por él ó en su nombre.

En 1591 Felipe II despojó á los virreyes de la facultad de repartir tierras, entre varios arbitrios, para subvenir á los gastos de guerra, echando mano del de vender las tierras que hasta esa época se habían repartido gratuitamente en América, teniendo su ley efecto retroactivo. [5]

Además, los soberanos establecieron premiar los servicios de sus súbditos con bienes territoriales y títulos de nobleza,

1 Dr. Mora.—México y sus Revoluciones, pág. 207.—Real Cédula de 24 de Noviembre de 1835.

2 Ordenanza de Intendentes, 1563.—Real Cédula de 24 de Noviembre de 1763.—Real Instrucción de 15 de Octubre de 1754.

3 Leyes 15 y siguientes, tít. 12, lib. IV, Recop. de Ind. Real Cédula de 23 de Marzo de 1798. Art. 81. Ordenanza de Intendentes, 4 de Dicimbre de 1586.

4 Ley 14, tít. 12, lib. IV, Recop. de Ind. y Real Cédula de 20 de Noviembre de 1788.

5 Leyes 14, 15 y 16, tít. 12. Libro 4º R. de I.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

con rentas sobre el tesoro público, con privilegios sobre explotaciones agrícolas ó de ganadería, con oficios ó empleos públicos ó particulares, y estos premios llevaban consigo la vinculación de la tierra á perpetuidad, á favor de determinada familia. Entonces los particulares á su turno, formaban también idénticas vinculaciones con permiso del soberano, ó daban sus bienes á perpetuidad á las Iglesias ó Monasterios; y de aquí resultó otro gravamen de mayorazgos ó bienes estancados que no gozaban de la libertad de transmisión que las propiedades particulares.[1]

A pesar de estos principios legales, los conquistadores y otros poderosos del Nuevo Mundo, se apoderaron de terrenos muy extensos, de provincias enteras y después consiguieron por grados, convertirlas en mayorazgos, título de nobleza muy conocido.[2]

En la legislación española, estaba establecida la vinculación de bienes no pudiendo ser cedidos ni enajenados, sino que debían pasar íntegros á los sucesores ó al primogénito;[3] las comunidades de indios, propiedad también inalienable.[4] La propiedad del Clero secular y regular que consistía en fincas rústicas y urbanas y en capitales hipotecados sobre las que no le pertenecían. Las Cofradías eran dueñas de casi todas las tierras de los indios, de los pueblos que las legaban con mucha facilidad para la fundación de tal ó cual santo; y de las fincas urbanas de la República, se puede asegurar que por lo menos las dos terceras partes pertenecieron á las Comunidades y Conventos.[5]

"En resumen tenemos que en Nueva España, la propiedad, los bienes, sobre todo los inmuebles, estaban distribuidos en bienes vinculados ó de mayorazgo, bienes de comunidades de indios, bienes de la Iglesia secular y regular, bienes de Cofradías ó Congregaciones de legos para fines religiosos, bienes de Capellanías, bienes destinados directamente al culto, bienes del Estado, bienes de los Municipios, bienes dedicados á objetos de utilidad pública, no comprendidos en los anteriores, y finalmente, bienes particulares, debiendo advertirse que la mayor parte de todos los bienes del país, pertenecían á esas personas morales, llamadas Iglesias, comunidades de indios, etc., ya directamente, ya reportando los bienes raíces de particulares, hipotecas ó censos á favor de dichos institutos"[1]

1 Pallares, Derecho de Propiedad. Pág. 69.
2 Orozco y Berra.—Historia Antigua. Tom. I, págs. 368 y siguientes.
3 Instrucción de 12 de Agosto de 1768.
4 Ley 1ª, tít. 12, lib. 4º; Leyes 1ª y 5ª, tít. 8º, lib. 6º R. de I.
5 Doctor Mora, México y sus revoluciones, pág. 213.

No existía, pues, la propiedad individual, libre y plebeya, tal como hoy la conocemos.

Consumada la Independencia, los derechos que sobre las tierras ejerció la corona ó Patrimonio Real, han caducado revertiendo á la Nación, en quien la soberanía reside, respetando, sin embargo, los derechos adquiridos.

No existiendo vicio más capital en la economía de nuestra sociedad, regida por las costumbres y leyes españolas, que el inmenso desarrollo de *la mano muerta*, ó sea el estanco de las propiedades raíces ó capitales hipotecados, sustraídos á la libre circulación de periódica repartición, que trae consigo la propiedad individual, dió esto origen á las sabias Leyes de Reforma, llamadas *Desamortización* (25 de Junio de 1856) y *Nacionalización* (12 de Julio de 1859).

Nuestra legislación, obedeciendo á las antiguas doctrinas españolas, sobre propiedad inmueble, las ha aplicado severamente desde la ley de Colonización de Tejas (11 de Abril de 1823. Esteban Austin) y pasado el largo período de nuestras guerras civiles, Invasión Americana é Intervención extranjera, en las leyes de baldíos anteriores á la de 22 de Julio de 1863, en esta, y hasta la última recientemente expedida en 28 de Marzo del presente año.[2]

1 Pallares, Derecho de propiedad, pág. 76.
2 Véase disertación presentada el 6 de Mayo de 1890 en la Cátedra de Derecho Mercantil y Leyes Civiles no codificadas, publicada en el tomo III, págs. 465 y siguientes. Rev. de Leg. y Jurisp.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Esta legislación, en la cual se condensa todo el derecho mexicano en materia de inmuebles, se ha aplicado y debido aplicarse á la apropiación, uso y aprovechamiento *del agua*, en tanto que ella es considerada como un accesorio de los inmuebles; pero como la naturaleza física de ese elemento es susceptible de transformaciones que no pueden tener jamás los verdaderos bienes raíces, ha existido y tendrá que existir una legislación especial, que partiendo del hecho de que *el agua*, unas veces tiene el carácter de inmueble por accesorio y otras puede ser considerado independientemente y como agregado de los fundos, establezca las reglas á que deba sujetarse el uso de las aguas públicas en general, su aprovechamiento por vía de servidumbre y la extensión que debe tener el dominio particular de ella. [1]

1 Una ojeada á la historia de nuestra legislación sobre aguas, comprobará la importancia que todos nuestros legisladores han dado siempre á este objeto del derecho.

Para mayor claridad, expondremos por orden cronológico las diferentes leyes que se han expedido sobre esta materia.

Fuero Juzgo.—La ley 29, tít. VI, lib. 8º Con objeto de dejar expedito el uso ó servicio de los ríos aptos para la navegación, dice: "Los grandes ríos, porque vienen los salmones, ó otro pescado de mar, ó en que echan los omes las redes, ó porque vienen las barcas con algunas mercaderías, ningún ome non debe cerrar el río por toller la pro á todos los otros, e facer la suya; mas puede facer seto fasta medio del río, allí ó es el agua más fuerte, é que la otra meatad finque libre para la pro de los omes..... continúa la ley.....

E si dambas las partes del rio oviese dos sennores, non deben cercar todo el rio fascas que diga cada uno que cerró la su meatad; mas el uno deben cerrar la su meatad de suso, y el otro la de yuso, ó deje por medio pasar el rio."

Fuero Real.—La ley 6ª, tít. VI, lib. IV, inserta exactamente la anterior.

La ley 4ª, tít. IV, lib. III; Si algún home quisiera facer Molino en su heredad, fágalo de guisa que no faga daño á otro alguno. La ley 8ª, tít. XXVIII, part. III, limita esta ley: quando alguno face Molino, ó Canal en los Rios que andan Navíos, ó á las riberas dellos, que en tal caso no los puedan hacer, é si estuviese edificado se deshaga.

Siete Partidas.—En igual sentido están dictadas las diversas leyes de Don Alfonso el Sabio, acerca de las aguas.

La ley 10, tít. 8º, part. 2ª y la ley 9, tít. 24, ib., dicen: Que el agua es la cosa más preciosa del mundo y que menos se puede excusar de todas las demás necesarias al hombre, y la ley 6ª declara que los ríos son comunes á todos los hombres, así á los naturales como á los extraños.

En la partida 3ª encontramos: que las leyes 3 y 4 del tít. 28, declaran: que el mar pertenece comunalmente á todas las criaturas, é indican las cosas que puede hacer el hombre en su ribera. Las leyes 4, 6 y 12 del tít. 31, establecen las servidumbres de aguas, y la 5 del mismo título, se refiere á la propiedad de las fuentes.

Las leyss 3, 13, 14, 15, 18 y 19 del tít. 32, establecen la propiedad de las aguas que corren en el subsuelo y la libertad de adquirirlas por excavaciones.

III

DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL AGUA.

La cualidad constitutiva de la propiedad consiste en el derecho de disponer libremente de las cosas que nos pertenecen, sin más limitaciones que las establecidas por el art. 729 Código Civil, ó por los pactos ó gravámenes entre particulares, arts. 653 y 655 del propio Código; de donde se deduce que se puede gozar de todos los productos del suelo, cuando existe un verdadero y absoluto dominio, no restringido de algún modo legal, arts. 655, 1,040 y 1,043.

Pero toda dificultad eonsiste y á allanarla se encaminan la legislación y la jurisprudencia, sobre esta materia, en que el dominio pleno y no limitado por algún gravamen legítimo,

Novísima Recopilación.—La ley 2ª, tít. 24, lib. 7º, establece los mismos principios que las anteriores, ratificando la prohibición de cerrar ó embargar los canales y ríos de que se aprovechan los vecinos de los pueblos, para la navegación, pesca y otras cosas. (Véase ley 8ª, tít. 28, parts. 3ª y 6ª, tít. 12, lib. 6, de las RR. OO.)

Auto 21, tít. 2, lib. 3º 5. Correspondiente á la ley III, lib. 10, núm. 5, declara que: El conocimiento de las aguas, en las causas sobre el cobro de sus pensiones, cargas, laudemios, pertenecientes á la Real Hacienda, ha de ser privativo del Superintendente; pero las que ocurran sobre el curso de las aguas públicas, daños y perjuicios en caminos, y parajes públicos ó en haciendas particulares, en que no tiene interés la Real Hacienda, como también en causas de posesión, partición y otros derechos, en que no tenga el Fisco alguno, conozca la Audiencia privativamente; y al dar facultades para enajenar las aguas públicas, respecto á ser peculiar de S. M., deberán avisar precisamente ante su Real Persona, concedidas con alguna carga ó pensión, como siempre ha ejecutado, de estas y sus laudemios, deberá conocer el Superintendente.

Leyes de Indias.—Verificada la conquista, en los años de 1533, 1536, 1538, 1541 y 1550, las leyes 5, 7, tít. 17, lib. 4º, declararon que los pastos, montes, aguas y términos, sean bienes comunes, y la 11, que las tierras se rieguen conforme á estas leyes. (Derogadas por las cortes españolas en 8 de Junio de 1813).

Cédulas Reales.—La de 25 de Junio de 1530, otra de 21 de Marzo de 1551, declararon que las aguas eran comunes y que estaba á cargo de los Ayuntamientos la custodia y distribución por mercedes de las aguas potables.

También se expidieron varias ordenanzas ó reglamentos de aguas, como la Real Instrucción de 15 de Octubre de 1784. (Ordenanza de aguas, 27 de Octubre de 1710). La Ordenanza de Intendentes de 4 de Diciembre de 1786. Corregidas por la Real Cédula de 23 de Marzo de 1798 y el Reglamento General de las medidas de las aguas de 1761.

Consumada la Independencia, se dictaron varias disposiciones relativas á las aguas; así tenemos: (15 de Marzo de 1826 y 12 de Abril de 1855. Prevenciones para la limpia de ríos, canales, arroyos y zanjas). La de 15 de Abril de 1833, acerca de las fuentes de aguas parti-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sea respetado en toda su extensión á la vez que estén protegidos también los derechos de servidumbre que lo modifican, fundados no en abusos introducidos ilegalmente, sino en virtud de justos títulos.

La propiedad puede ser restringida por efecto de obligaciones hacia el Estado; expropiación por causa de utilidad pública, por las ordenanzas de policía y municipales, por el derecho de los vecinos y por las cargas especiales de que puede ser gravada.

La distinción de bienes en muebles é inmuebles, principales y accesorios, fungibles y no fungibles, etc., tiene en nuestro derecho grande importancia, por las diferentes consecuencias que de ella se derivan, ya se trate de su adquisición como de los efectos jurídicos que engendran.

Son *inmuebles*, los objetos que no se pueden transportar de un lugar á otro, ó que su cambio no puede verificarse sin su-

culares La de 5 de Mayo de 1836, acerca de las condiciones para la concesión de mercedes y llaves económicas para las aguas. Y el reglamento de sobrestantes de aguas, de 11 de Diciembre de 1846.

Epoca de la Reforma.—La ley de 25 de Agosto de 1856, declaró que las aguas estancadas que correspondieron á terrenos de corporaciones, fueron comprendidas en la desamortización.

Res. de 18 de Septiembre de 1856.—De las tierras y aguas de repartimiento.

Res. de 20 de Octubre de 1856.—Aguas que pasan por las haciendas de caña, se adjudican á los dueños de éstas, y si renuncian á la adjudicación, se haga en favor de otros con servidnmbre.

Res. de 27 de Noviembre de 1856.—Las aguas sobrantes del ojo pertenecientes al Municipio de León, no son denunciables.

Ley de 8 de Octubre de 1863.—Aguas de la presa de Arroyo Zarco, cedidas á Popotitlán.

Aguas potables.—Está á cargo del Ayuntamiento la custodia y distribución por mercedes de las aguas potables.—Cédula de 25 de Junio de 1530—Ordenanza de aguas de 27 de Octubre de 1710 y de 5 de Mayo de 1838.—Leyes de 31 de Marzo de 1862 y 28 de Noviembre de 1867. Foro núm. 73, año de 81.

En favor de los pueblos se extendió, concediéndoles la propiedad en las aguas conducidas por cañerias, para su servicio, expropiando á los particulares cuando fuese necesario.—18 de Noviembre de 1803.—Real Orden de 22 de Junio de 1807.

Aguas.—Las que corren por acueductos son susceptibles de propiedad particular, pues no puede considerarse como río, el agua que corre por ellos, sino que es una corriente artificial. —Juzgado de 1ª Instancia, Valle de Santiago, Noviembre 17 de 1879. Foro núms. 4 y 5.

Aguas comunes.—No pueden sonsiderarse como tales las llevadas por un acueducto que forman ya parte de un fundo y han entrado al comercio de los hombres.—Foro núms. 38, 39 y 40.—Tribunal Superior de Veracruz.—Tomo 1º, año de 1880.

frir una transformación; así, son inmuebles en general los fundos de la tierra y todo lo que está fijo al suelo de una manera orgánica ó mecánica, arts. 683, 684 y 685 Cód. Civil.

Los edificios algunas veces se consideran muebles, debido á que por su construcción pueden transportarse de un lugar á otro (estatuas, objetos artísticos, etc.), como también las construcciones de madera, hierro, etc., art. 685, fracs. III y IV; y V del 684.

Son asimilados á los inmuebles todo lo que es su accesorio. A esta categoría pertenece también una serie de cosas incorpóreas, como las servidumbres y en general todos los derechos sobre los inmuebles, tales como el usufructo, el arrendamiento y las acciones que tienen por objeto un inmueble.

Es *mueble* por su *naturaleza*, todo lo que es susceptible de transportarse y variar de lugar en el espacio, sin sufrir detrimento alguno en su integridad, ya se mueva por sí mismo, ya por efecto de una fuerza exterior, y por *determinación de la ley* las obligaciones y los derechos ó nociones que tienen por objeto cosas muebles ó cantidades exigibles en virtud de acción personal, arts. 686, 687 á 697 del Código Civil del Distrito.

Los autores consideran también la división de los bienes en *divisibles* é *indivisibles*, *fungibles* y no *fungibles* y *nullius*.

Nuestro Código establece la división de los bienes ó cosas, considerados según las personas á quienes pertenecen, en bienes de propiedad *pública* y *privada* (art. 697).

Para la ley son bienes de dominio público los que tienen como destino permanente el uso general por todos los habitantes del país y clasifica estos bienes, según nuestro régimen político, en bienes pertenecientes á la Federación, á los Estados y á los Municipios (art. 698).

Coloca entre los bienes de dominio público general ó nacional, los caminos, las riberas, los puertos, las playas, las radas, las ensenadas, las costas, los ríos y torrentes, las minas, las fortalezas, los bosques, etc., y otros análogos que están

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

destinados á servicios ó usos de carácter general y regidos por las disposiciones del Código en cuanto no esté determinado por leyes especiales y los terrenos baldíos.

Considera como de dominio público municipal los caminos, calles, paseos, aguas y las obras públicas de uso general (artículos 702 y 703).

Los bienes de propiedad pública se dividen en bienes de uso común y bienes *propios*. Son bienes de uso común aquellos de que pueden aprovecharse todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley ó por los Reglamentos administrativos, y bienes propios, los que conforme á las leyes están exclusivamente destinados á cubrir los gastos públicos de las ciudades ó de los pueblos (art. 705).

Todos los demás bienes no comprendidos en las clases indicadas, tienen el carácter de propiedad privada y son todas las cosas cuyo dominio pertenece legalmente á los particulares y de los que no puede aprovecharse ningnno sin consentimiento del dueño (art. 600).

Las Corporaciones pueden adquirir bienes en propiedad, en los términos fijados por el art. 27 constitucional.

Hecha esta exposición conforme nuestro Código Civil, veamos si el *agua* es cosa inmueble ó mueble, principal ó accesoria, fungible ó no fungible, *nullius* ó baldía, y si se puede tener dominio sobre ella, independientemente del fundo en que se encuentra.

El agua, como objeto de derecho ó de propiedad (art. 683 Cód. Civ.) por su naturaleza física, es susceptible de transformaciones que no pueden tener los verdaderos bienes raíces, variando también su naturaleza jurídica ya sea considerada unida ó separadamente de los fundos en que se encuentra.

Por regla general, la ley considera el agua accesorio de los inmuebles, art. 775 Cód. Civ., siguiendo la condición de lo principal, *accesorium cedit principali*, debemos decir que el agua, mientras está unida ó incorporada naturalmente á los fundos, es *inmueble* como formando parte del fundo; así el ve-

nero ó manantial que nace en un fundo, naturalmente le está incorporado, *pars fundi videtur aqua viva*.

Así como los frutos, las espigas de trigo por ejemplo, mientras están adheridos á la tierra se consideran como parte del fundo y son *inmuebles ó raíz*, fr. II, art. 684, Cód. Civ., y cortados son cosa *mueble*, art. cit.; por analogía, podemos decir que el agua, los veneros, ojos ó manantiales, son inmueble ó raíz, como formando parte del fundo, y separados deben considerarse *muebles*. Luego el agua ó venero en sí mismo, ó sea en su continuidad, adherida al fundo donde nace, es *inmueble;* el agua corriente, considerada separadamente del fundo, es *cosa mueble*.

Esto por regla general: pues en algunos casos y debido á su naturaleza física, podrá el agua presentarse como principal y no accesorio; así, el agua en forma de cascadas y utilizada como fuerza motriz, en un pequeño fundo, puede variar su condición y entonces debemos aplicar el criterio del art. 806 del Cód. Civ. y diremos que es principal.

El agua, siendo cosa mueble, como objeto que puede trasladarse de un lugar á otro, destinada á ser consumida en beneficio de la agricultura ó de la industria, podemos decir que es *cosa fungible*.

Respecto á si el agua pertenece ó no á la categoría de las cosas *nullius* ó *baldías*, podemos resolver en tesis general que, puesto que la ley casi siempre la considera como objeto accesorio, seguirá la condición de lo principal. El agua, por su naturaleza física, es susceptible de dominio independiente del fundo en que se encuentra, ya como objeto de venta, de arrendamiento, usufructo, etc., y principalmente de servidumbre, cuyo rasgo especial y característico, que se distingue de las demás servidumbres, es que puede ser susceptible de hipoteca; art. 1,834, Cód. Civ, no se podrán hipotecar.... fr. III. Las servidumbres, á no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante, y exceptuándose en todo caso, *la de aguas*, la cual podrá ser hipotecada.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

IV

DIVISION DE LAS AGUAS EN PUBLICAS Y PRIVADAS; LAS PUBLICAS EN COMUNES Y PROPIAS, Y ESTAS DE LA FEDERACION, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS; LAS PRIVADAS, EN AGUAS QUE CORREN EN LA SUPERFICIE Y SUBTERRANEAS.

Para hacer una debida clasificación, debemos observar que entre las aguas que contiene el país, ocupado por la Nación, hay unas que por su naturaleza no pueden ocuparse, de las que ninguna persona puede atribuirse su propiedad, permaneciendo en la comunión primitiva antes y aun después del apoderamiento del país, y esas se llaman *comunes*, como las aguas pluviales, el mar y su ribera, etc., cuyo uso es común á todos los hombres, tanto nacionales como extranjeros (Ley 6, tít. 28, Part. 3ª); no pudiendo ninguna nación apoderarse con justo título de su imperio, porque la naturaleza nunca concede el derecho de apropiarse estas aguas, que satisfacen las necesidades de todos. (Escriche. Dic. de Legis., art. *mar*), asegura que en los tratados de paz y comercio, se ha fijado en general dos leguas de la costa, la distancia á que se extiende el dominio respectivo de cada país, cuyas costas baña el mar.

Nuestro mar territorial se extiende, según la ley V, título VIII, Lib. VI, Nov. Recop., dos millas de 950 toesas cada una, ó tres millas marítimas (1,854 m.), ó sean 5,562 metros.[1] Según el Lic. Vallarta, la extensión de nuestro mar territorial comprende tres millas geográficas de la costa, ó sean 6,050 varas, vigésima parte de un grado de meridiano.[2]

Todo cuanto sea susceptible de propiedad en el país, pertenece á la Nación ocupante, y forma la masa total de sus bienes; pero no en todos su posesión es igual. Las aguas repartidas entre las comunidades particulares se llaman *aguas públicas;* de éstas, unas se consideran reservadas para cubrir las necesidades del Estado y son del dominio de la República,[1] y otras permanecen comunes á todos los ciudadanos, que se aprovechan de ellas según sus necesidades y conforme las leyes que reglamentan su uso y aprovechamiento, y en nuestro régimen político debemos enumerar estas aguas públicas como pertenecientes ya á la Federación, ya á los Estados ó á los Ayuntamientos y Municipios. Existen otras que pertenecen á algún cuerpo, comunidad, Ayuntamiento y Municipios y se llaman aguas de *universidad* y conservan hacia un cuerpo en particular la misma relación que las públicas respecto á la Nación.

Estas, lo mismo que las aguas públicas, unas no se pueden usar y aprovechar por todos, y son administradas por los Ayuntamientos, dedicando sus productos á utilidad pública, que también se llaman *propias*, y otras cuyo uso es común á todos los habitantes del lugar; y por último, tenemos las aguas *privadas* ó pertenecientes á particulares, que hemos dividido en aguas que corren en la superficie, como los ríos, arroyos, manantiales, cuando únicamente pueden servir para regar campos y heredades particulares, por tener su principio ó nacimiento y fin, entre fundos pertenecientes á particulares[2] y en aguas subterráneas.

Las últimas leyes expedidas sobre esta materia, bastarán para completar el cuadro que me he propuesto presentar en este estudio.

Una ley muy reciente, la de 28 de Mayo, promulgada el 5 de Junio de 1888, reglamentaria de la frac. XII del art. 72 de la Constitución Federal, ha enumerado entre las vías generales

1 Véase Cod. de la Reforma, Tomo I. Pág. 359. B. J. Gutiérrez.
2 Véase tomo II, "Votos" del Lic. Vallarta. Págs. 325 y siguientes.

1 El decreto de clasificación de rentas de 30 de Mayo de 1868, enumera (Artículo 1º) entre las rentas y bienes federales en XIV lugar "las islas y playas, los puertos, ensenadas, lagunas y ríos navegables."—Dublán y Lozano, tomo X, pág. 331.—El art. 2, frac. 31, 32 y 33, ley de clasificación de rentas fecha 12 de Septiembre de 1857.—Dublán y Lozano.—Colección de Leyes, tomo VIII, pág. 622.

2 Parladorio. Differen. 54, Núm. 3, y Ley 1, § 3 ff. de fluminibus, y 1, § 3, ff. ut in flum, pub. nav. liceat.

Al tratar la cuestión del origen de nuestra propiedad inmueble, etc., he insertado por vía de nota las disposiciones ó leyes de nuestra antigua legislación, acerca de esta importante materia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de comunicación "los lagos y ríos interiores si fuesen navegables ó flotables, y los lagos y ríos de cualquiera clase y en toda su extensión que sirvan de límites á la República ó á dos ó más Estados de la Unión."

El art. 2º de esta ley contiene las siguientes prescripciones: "corresponde al Ejecutivo Federal la vigilancia y policía de estas vías generales de comunicación y la facultad de reglamentar el uso público y privado de las mismas, con arreglo á las bases generales que siguen:

"A.—Las poblaciones ribereñas tendrán el uso gratuito de las aguas que necesitan para el servicio doméstico de sus habitantes."

"B.—Serán respetados y confirmados los derechos de particulares respecto de las servidumbres, usos y aprovechamientos constituidos en su favor, sobre los ríos, lagos y canales, siempre que tales derechos estén apoyados en títulos legítimos ó en prescripción civil de más de diez años."

"La concesión ó confirmación de los derechos de los particulares, en los lagos, ríos y canales que son objeto de esta ley, solamente podrá otorgarse por la Secretaría de Fomento, *cuando ni produzca ni amenace producir el camhio de curso de los ríos ó canales, ni priven el uso de sus aguas á los ribereños inferiores.*"

La ley de 26 de Marzo del presente año sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, en su art. 14, dice: "No podrán enajenarse por ningún titulo, ni estarán sujetos á prescripción, sino que permanecerán siempre del dominio de la Federación:

I. Las playas del mar:

II. La zona marítima, con una extensión de veinte metros, contados desde la orilla del agua en la mayor pleamar y á lo largo de las costas de tierra firme y de las islas:

III. Una zona de diez metros en ambas riberas de los ríos navegables y de cinco metros en los flotables."

"Art. 15. Los terrenos baldíos en las islas de ambos mares,

se enajenarán en los mismos términos que los demás del territorio nacional; pero en toda isla se reservará, además de la zona marítima, una extensión mínima de cincuenta hectáreas para establecimiento de poblaciones y otros usos públicos, y en caso de que la isla no tenga esa extensión, se reservará en su totalidad para aquellos usos.

"Las islas de los ríos, lagos y esteros navegables, no se enajenarán, sino después de practicados los reconocimientos periciales y de recogidos los informes de la autoridad política superior del respectivo Estado, Distrito ó Territorio que demuestren que no hay inconveniente para efectuar la enajenación."

"Art. 16. Los esteros, lagunas y estanques de propiedad nacional, que no sean navegables, ni susceptibles de llegar á serlo, así como las marítimas, podrán ser enajenados con arreglo á esta ley, previos los reconocimientos periciales y los informes de la autoridad competente de Marina, y de la superior política del respectivo Estado, Distrito ó Territorio que demuestren que no hay inconveniente para efectuar la enajenación."

"Art. 36. La Secretaría de Fomento podrá negar la adjudicación de los terrenos baldíos que se denuncien á lo largo de los ríos ó cursos de agua, cuando por esos denuncios se inhabiliten, por quedar sin acceso al río ó al curso de agua, los terrenos colindantes; pues hasta donde fuere posible, se procurará que todos los lotes ó fracciones que se formen en los terrenos baldíos que atravesase un río, tengan acceso á éste."

La nueva Ley de Minería de 4 de Junio de 1892, art. 9, declara: "Las aguas que se extraigan hasta la superficie en virtud de los trabajos subterráneos de las minas, pertenecen á los dueños de éstas, y deberán observarse las prescripciones de las leyes comunes en cuanto á los derechos de los propietarios de los terrenos por donde se dé curso á las mismas aguas."

Las múltiples dificultades y cuantiosos litigios suscitados entre los ribereños del Río Nazas, limítrofe de los Estados de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Coahuila y Durango, con motivo del uso y aprovechamiento torrenciales de tan importante río, y principalmente el contrato de fecha 6 de Junio de 1888, celebrado entre el Ministerio de Fomento y la Compañía Agrícola Limitada del Tlahualilo, dieron origen á un proyecto de reglamento, cuyas bases se firmaron en Villa Lerdo el 10 de Julio de 1890, que con algunas modificaciones fueron aprobadas por la Secretaría de Fomento el 25 de Diciembre de 1890, y que han sido el fundamento para el Reglamento provisional vigente, de fecha 24 de Junio de 1891, y adicionado en 29 de Diciembre del mismo año.

Creada una comisión facultativa encargada de la distribución de las aguas del Río Nazas, conforme al Reglamento citado, fué aprobada por el Congreso de la Unión en 31 de Octubre de 1891.[1]

Finalmente, la Secretaría de Fomento, conforme á la Ley de 5 de Junio de 1888, ha celebrado algunos contratos sobre irrigación, que dadas las franquicias concedidas y el capital invertido, auguran una nueva era de prosperidad para nuestra agricultura.

"Contrato celebrado con la Compañía irrigadora del Río de San Juan de Camargo (Tamaulipas), para abrir, construir y explotar canales de riego, aprobado por Decreto de 15 de Diciembre de 1893.

"Contrato con F. Espinosa, para el aprovechamiento de las aguas torrenciales de los Ríos de Cuautitlán y Tula (México é Hidalgo), según decreto de 21 de Diciembre de 1893.

"Contrato celebrado con G. Raigosa y C. Barrera, para la apertura y explotación de un canal irrigador, en el Río de la Laja (Guanajuato), aprobado por decreto de 21 de Diciembre de 1893.

"Contrato con M. Robión y S. Morales Pereira para la canalización del Río Tempoal y Pánuco, aprobado por decreto de 22 de Diciembre de 1893."[1]

1 Véase Anuario de Leg. y Jurisprudencia. Sección de Legislación. Año de 1891. Págs. 622, 1,068, 903.

En 2 de Marzo de 1891, la Secretaría de Fomento celebró también un contrato con Z. M. Escudero y E. Reyes para el deslinde, desecación y colonización del lago de Cuitzeo, y de terrenos en Michoacán, aprobado por decreto de 29 de Mayo de 1891.[2]

V

DE LAS SERVIDUMBRES DE AGUAS EN GENERAL.

Los Estados marítimos tienen el derecho, tanto para la defensa de sus territorios respectivos contra los ataques injustos, como para la protección de sus intereses comerciales y de sus aduanas, de establecer una vigilancia activa en sus costas y sus cercanías, y de adoptar todas las medidas necesarias para impedir el acceso á su territorio á aquellos que se rehusen á respetar sus disposiciones ó reglamentos establecidos. Esto es una consecuencia natural del principio general: "*est quod quisque propter defensionem sui fecerit, jure fuisse videatur.*" Cada Nación es libre de establecer vigilancia y policía en sus costas como mejor le convenga, á menos que se encuentre ligada por tratados con las naciones vecinas."[3]

Desde Grocio hasta Bluntschli, y desde el célebre autor de la diplomacia del mar, hasta el distinguido publicista jalisciense Lic. Vallarta, en su dictamen de fecha 16 de Septiembre de 1890, presentado á la Secretaría de Fomento, sobre el abuso de las aguas de los ríos Bravo, Colorado y sus afluentes, todos los escritores antiguos y modernos, tanto europeos como americanos, han convenido unánimes en que los límites naturales de una Nación son las orillas del mar que baña sus costas; pero que existe una línea imaginaria, llamada *de respeto*,

2 Anuario de Leg. y Jurisprudencia. Sección de Legislación. Pág. 460.
3 Heffter, § 75, pág. 171, Der. Inter. Púb.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que la costumbre y los tratados han reconocido á cada Nación litoral para hacer más eficaz la protección de sus costas. En la página 118 hemos indicado la extensión de nuestros mares territoriales.

Pues bien; esos mismos autores, entre los que se distinguen los notables publicistas Peñeiro Ferreira, Martens, Grocio, Wheaton y Bluntschli, sostienen también la doctrina de que la jurisdicción litoral que ejercen las Naciones sobre el espacio comprendido entre sus costas y dicha línea de respeto, la ejercen de la misma manera sobre los ríos, lagunas, golfos, puertos, estrechos y bahías de sus respectivos territorios.[1]

"El territorio marítimo de todo Estado se extiende á los puertos, radas, bahías, golfos, embocaduras de ríos y ciertos mares situados dentro de la tierra, que se llaman estancados. El uso general de las Naciones ha añadido á esta jurisdicción marítima la parte inmediata á las costas, á distancia de una legua marítima, ó bien la que pueda alcanzarse con un tiro de cañón, disparado desde la playa: *terræ potestas finitur ubi finitur armorum vis*. En estos límites los derechos de propiedad y jurisdicción son absolutos y excluyen á todos los de las demás Naciones."[2]

Las relaciones naturales de Naciones, que se desarrollan unas al lado de las otras, imponen la necesidad de ciertas restricciones á los derechos soberanos, restricciones á que ningún Estado puede substraerse sin quebrantar el orden de cosas establecido y las reglas de buena vecindad. Estas restricciones se han llamado servidumbres públicas naturales *(servitutes juris gentium necessariæ)*. Así, por ejemplo, la obligación de recibir las aguas que naturalmente corren de un territorio limítrofe; la prohibición de construir en los ríos, presas ó diques que tiendan á cambiar el curso de las aguas, etc., etc.

Al lado de estas servidumbres tenemos las servidumbres

1 Blas J. Gutiérrez, "Código de la Reforma," tomo I, págs. 357 y 358.
2 Wheaton, § 6, pág. 182, tomo I, Der. Inter.

positivas, consentidas libremente por los Estados *(servitutes juris gentium voluntariæ)*. Unas y otras se rigen por los tratados, y á falta de éstos, por los principios establecidos en el Derecho Civil.

Oportuno nos parece citar los tratados que México tiene celebrados con los Estados Unidos y que de preferencia regulan esta delicada materia y apoyan firmemente las teorías citadas del Derecho internacional.

El art. V del Tratado de Guadalupe Hidalgo prohibió á las dos Naciones contratantes, y á sus respectivos ciudadanos, el hacer cualquier obra que impida ó interrumpa, en todo ó en parte, el ejercicio del derecho de navegación en el Gila y en el Bravo.

El art. IV del Tratado de la Mesilla confirmó esta prohibición, por lo relativo al río Colorado, en toda la extensión en que forma la línea divisoria, y por lo tocante al Bravo, abajo de la intersección del paralelo de 13° 47′ 30″ latitud. La Convención de 12 de Noviembre de 1884 ratificó solemnemente, por tercera vez, esa prescripción.

El art. VII del Tratado de Guadalupe Hidalgo, dice: "que la parte del río Bravo que divide las dos Naciones, será libre y común á los buques y ciudadanos de ambos países, *sin que por alguno de ellos pueda hacerse, sin consentimiento del otro, ninguna obra que impida ó interrumpa, en todo ó en parte, el ejercicio de este derecho*, ni aun con motivo de favorecer nuevos métodos de navegación."

El art. III de la Convención citada, previene que "*Ningún cambio artificial* en el curso navegable del río, ya sea para la construcción de jetties, muelles ú *obstrucciones que tiendan á desviar la corriente*, ó produzcan depósitos de aluvión, ó por el uso de dragas para hacer más profundo un canal, distinto del primitivo del tratado, cuando haya más de uno, ó para abrir nuevos canales con el objeto de acortar las distancias por agua, se permitirá que *afecte ó altere la línea divisoria*, etc."

Habiendo sido tratadas por el notable jurisconsulto Lic. Va-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

llarta, y el inteligente abogado D. José María Gamboa, de una manera extensa, completa y jurídica, las diversas relaciones de las aguas con el Derecho Internacional, Constitucional y Administrativo, cumple á mi deber excusarme de pretender desarrollar nuevamente estas difíciles cuestiones, rindiendo así el homenaje más sincero y merecido á esos fundados cuanto jurídicos estudios, acatando sus opiniones y limitándome á citar sus brillantes trabajos.

Véase Vallarta, "Votos," tomo II, pág. 325 y siguientes, competencia suscitada á consecuencia de la colisión de los vapores "Fénix" y "Frontera" en el río Grijalva, Estado de Tabasco, el año de 1880.

Dictamen presentado á la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, el 16 de Septiembre de 1890, sobre el abuso de las aguas de los ríos Bravo, Colorado y sus afluentes.

Dictámenes del Sr. Lic. José María Gamboa, de fecha 22 de Febrero de 1890, sobre el abuso de las aguas de los ríos Bravo, etc., etc.,[1] y 28 de Julio de 1890, en la cuestión de las aguas del río Nazas.[2]

(Continuará).

1 Ambos dictámenes fueron publicados por la Secretaría de Fomento en 1892.

2 Bases convencionales para el uso de las aguas del río Nazas, publicadas por la misma Secretaría de Fomento en 1890.

DEFENSA DE LA ESCUELA CRIMINAL POSITIVA.

"Una teoría que, considerando el delito una enfermedad ó "una locura, hace, por natural antítesis, de la virtud un delirio, "del heroismo un frenesí, de la caridad no se sabe qué otro "padecimiento, confunde y anula las nociones del bien y del "mal, hace inicua la pena, absurda la recompensa, bestial la "justicia humana é imposible la divina; y poniendo á la socie- "dad entera en la necesidad de volver de arriba abajo sus có- "digos, sus leyes, sus costumbres y su mismo lenguaje, la con- "duce á una vida degradada, aun más abyecta que la que vi- "ven las más salvajes tribus de la tierra conocida."

Así nos trataría un ex–héroe, un ex–demócrata, tornado de improviso tribuno–académico ó eclesiástico. Y ahí están para ayudarle el ex–ministro que nos regala nada menos que el nombre de "enemigos de la libertad humana;" el bueno y honrado sacerdote que, á ratos perdidos, entre una jaculatoria y un sermón, arremete con el derecho penal y ¡ay de mí! con la filosofía, y nos lanza las más tremendas excomuniones; y el pobre curial que nos considera perseguidores suyos, ¡precisamente suyos!

Nosotros nos hacemos á esto los desentendidos, porque responder á las frases cuando se trabaja sobre los hechos, y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

llarta, y el inteligente abogado D. José María Gamboa, de una manera extensa, completa y jurídica, las diversas relaciones de las aguas con el Derecho Internacional, Constitucional y Administrativo, cumple á mi deber excusarme de pretender desarrollar nuevamente estas difíciles cuestiones, rindiendo así el homenaje más sincero y merecido á esos fundados cuanto jurídicos estudios, acatando sus opiniones y limitándome á citar sus brillantes trabajos.

Véase Vallarta, "Votos," tomo II, pág. 325 y siguientes, competencia suscitada á consecuencia de la colisión de los vapores "Fénix" y "Frontera" en el río Grijalva, Estado de Tabasco, el año de 1880.

Dictamen presentado á la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, el 16 de Septiembre de 1890, sobre el abuso de las aguas de los ríos Bravo, Colorado y sus afluentes.

Dictámenes del Sr. Lic. José María Gamboa, de fecha 22 de Febrero de 1890, sobre el abuso de las aguas de los ríos Bravo, etc., etc.,[1] y 28 de Julio de 1890, en la cuestión de las aguas del río Nazas.[2]

(Continuará).

1 Ambos dictámenes fueron publicados por la Secretaría de Fomento en 1892.

2 Bases convencionales para el uso de las aguas del río Nazas, publicadas por la misma Secretaría de Fomento en 1890.

DEFENSA DE LA ESCUELA CRIMINAL POSITIVA.

"Una teoría que, considerando el delito una enfermedad ó "una locura, hace, por natural antítesis, de la virtud un delirio, "del heroismo un frenesí, de la caridad no se sabe qué otro "padecimiento, confunde y anula las nociones del bien y del "mal, hace inicua la pena, absurda la recompensa, bestial la "justicia humana é imposible la divina; y poniendo á la socie- "dad entera en la necesidad de volver de arriba abajo sus có- "digos, sus leyes, sus costumbres y su mismo lenguaje, la con- "duce á una vida degradada, aun más abyecta que la que vi- "ven las más salvajes tribus de la tierra conocida."

Así nos trataría un ex–héroe, un ex–demócrata, tornado de improviso tribuno–académico ó eclesiástico. Y ahí están para ayudarle el ex–ministro que nos regala nada menos que el nombre de "enemigos de la libertad humana;" el bueno y honrado sacerdote que, á ratos perdidos, entre una jaculatoria y un sermón, arremete con el derecho penal y ¡ay de mí! con la filosofía, y nos lanza las más tremendas excomuniones; y el pobre curial que nos considera perseguidores suyos, ¡precisamente suyos!

Nosotros nos hacemos á esto los desentendidos, porque responder á las frases cuando se trabaja sobre los hechos, y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á los artículos cuando se publican meditados volúmenes, es tan poco generoso como si acorazados con acero y armados con espada, nos defendiéramos de quien aoometiese con armas de papel y con gritos.

Pero el caso es diferente cuando se trata de un escrito que lleva la firma de Gabelli, lo cual debiera ser garantía de que no nos hubiese juzgado al modo de aquellos que, sin habernos leído, ó habiéndonos leído sin comprendernos, sufren esa especie de catarata que ciega aun á los hombres más honrados cuando están prevenidos en contra por una educación ó una convicción distintas, sobre todo siendo teológicas; y tanta más garantía cuanto que aquel artículo se ha publicado en una de nuestras mejores revistas, y con el ánimo, al parecer, de querer discutir en serio, no con caricaturas, ni epigramas, ni excomuniones.

En realidad, hay en él una tentativa de examen que, de primera intención, reviste verdadero aspecto de diligencia y de imparcialidad. Pero releyéndolo con un poco de atención, pronto se advierte con extrañeza que, mientras en Alemania Sommer, Flesch y Knecht; en Francia Lacassagne, Letourneau, Bournet, Tarde, Bordier, Tane, Pavlovski, etc.; en Rusia, Drill, Bilikow, Troyevski, y en Bélgica Ramlot, Warnot, Heger, Prins, etc., estudiaron muchos años y sobre muchos centenares de delincuentes antes de combatir nuestros resultados, Gabelli los condena no sólo sin comprobarlos, sino sin haberlos leído, y juzgando de oídas, por las fábulas más corrientes. Así, sin haber examinado bien ni aun el índice de mi libro, niega los estudios que en él hay sobre la jerga, sobre los afectos, sobre la inteligencia de los reos, sobre las causas de los delitos y sobre el modo de evitarlos. Y al mismo tiempo que niega mis numerosas investigaciones pletismográficas y sobre los suicidios y sobre los delincuentes por pasión, desconoce que todas mis investigaciones generales fueron hechas en confrontación con otras, no sólo entre los locos, sino entre los hombres sanos, estudiantes y soldados.

Excepto alguna que otra frase, ignora Gabelli todos los descubrimientos fisiológicos y psicológicos, sobre las varias clases de reos, contenidos en los seis primeros volúmenes del *Archivio di psichiatria* y en la *Revue philosophique* y en la *Scientifique*, y todas las publicaciones de la Biblioteca Antropológico–Jurídica (Barziali, Pavía, Setti, Fioretti, Puglia); y del mismo Ferri no ha visto más que la edición de un libro que escribió cuando aún era estudiante.

Y lo que nos parece mucho más penoso, es que este descuido no es nada comparado con el que resulta en sus conclusiones críticas, donde Gabelli contradice hasta su mismo inexactísimo resumen preliminar.

Resulta que, después de declarar que mis observaciones eran muchas más que las referentes al cráneo y á la fisonomía, escribe el resto de su crítica como si sólo me hubiera ocupado yo del cráneo; lo cual es cosa realmente común á todos los que no han leído mi libro y se le figuran simplemente como una especie de fantasía construida acerca del cráneo. El participa completamente de estas opiniones y cree en serio que yo he restaurado el sistema de Gall; llegando hasta decir, como muchas mujerzuelas, que yo condenaría á los hombres solamente por la forma del cráneo y por las orejas salientes y por los labios delgados: cuando no lo he creído ni una sola vez digno de ser discutido, cuanto más aprobado. [1]

No se ha fijado en que mis estudios antropológicos se basan también en la capacidad y en la patología de los huesos craneanos, y en las microcefalias, plagiocefalias, oxicefalias, platicefalias, etc., que tanto tienen de común con el sistema de Gall, como la anatomía quirúrgica de la mano con la quiromancia. Y que además del cráneo, examino las anomalías de la oreja, de la nariz, etc.

En este punto, y para justificar la importancia dada por mí

1 Véase mi opinión sobre el sistema de Gall, en mi estudio *Sobre el cráneo de Volta*, Turín, 1876.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á las orejas salientes, á las asimetrías craneanas, etc., es necesario saber que algunos años antes estaba ya descubierto por los alienistas un punto que aún no entraba en el mundo no médico: el de la degeneración de nuestra raza, merced á la influencia de los alcoholes, de la herencia, etc. Esta degeneración acaba en la esterilidad, en la locura ó en el delito, y se conoce exteriormente por una serie de anomalías en las orejas, en el cráneo, en los órganos genitales, etc.; y de aquí la importancia que nosotros concedemos á las anomalías, que no tienen relación con las afecciones psíquicas, pero sí con la degeneración.

Y lo mismo digo del cerebro, del que yo no he estudiado más que lo que hay en él de histología patológica y muy poco sobre arquitectura anormal de las circunvoluciones de los delincuentes confrontadas con las de los hombres honrados.

Gabelli opina que las indagaciones sobre el cráneo de los reos necesitan hacerse antes de que el delito se cometa; pero él olvida que quien no ha cometido aún el delito no es delincuente, como no es tísico, según los más, el que no ha llegado á las últimas manifestaciones patológicas de su enfermedad; que, por otra parte, estas objeciones las he evitado con el examen de los sanos, no como él hace, sobre una sola figura litográfica, sino sobre muchos centenares de ellas; lo cual por otra parte, expuesto sinceramente á los lectores, hace imposible, ó por lo menos evita con facilidad un juicio parcial ó preconcebido. Ahora bien, entre el que escribe ignorando, ó por lo menos aparentando ignorar que tiene á la vista 302 fotografías para formar sobre ellas un juicio más serio que sobre una fotografía sola, y yo, que acudo á aquel modo de comprobar mis observaciones, ¿quién está más prevenido, quién mejor armado contra los prejuicios?

En contra de la misma objeción, está además el criterio popular mostrado en los proverbios, el cual, precisamente por ser menos escrupuloso y científico, va más adelante que nosotros. Y en contra está también, por último, esa especie de presentimiento que yo he tenido ocasión de comprobar otra vez recientemente.

Habiendo elegido tres médicos, para que juzgaran sin prevención alguna sobre 200 fotografías de jóvenes que presentaran el tipo criminal, todos de acuerdo se fijaron en uno. Llamada entonces una muchacha de 12 años para que, sin conocer este primer juicio, diese el suyo propio, estuvo también perfectameute de acuerdo con él.

Pues bien, aquel joven no había cometido delitos; pero después, llegado á una posición elevada, ha hecho traición cruelmente á los que le habían ayudado á subir; no es un criminal jurídicamente, pero lo es antropológicamente.

Así se responde á aquella objeción, naturalmente más débil que los hechos; y así se explica también que, con el mismo cráneo, el loco y el criminal, antes de serlo, fueran hombres honrados y prudentes. Porque antes de ser tales, ya presentaban á los ojos de un observador no vulgar, suficientes anomalías para formar el diagnóstico. La locura que no resulta de graves causas congénitas es caso bastante raro y se cura muy pronto; y las causas llamadas ocasionales de la enfermedad no son más que un pretexto. Lo que hay es que se declara á uno loco ó criminal solamente cuando se excede en los males ó en los vicios, cuando la sociedad necesita asegurarse contra él. Pero de los declarados jurídicamente locos ó criminales, muchos lo eran ya de hecho con anterioridad, algunos desde su nacimiento; si bien en vez de matar se limitarían á firmar letras falsas, ó hurtarían en familia, ó en el colegio, ó harían delaciones políticas, ó venderían los secretos de su cargo. Para saber esto, no se necesita ser alienista; lo saben todos los hombres del mundo.

He aquí otra de las razones por que se puede muchas veces adivinar, por la fisonomía y el cráneo, la disposición moral; por más que en el fondo no es una adivinación ó una profecía lo que se hace, como cree el vulgo y con el vulgo el desacertado crítico, sino una lectura, puede decirse que la de un pa-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

limsesto; tanto más fácil cuanto que no se limita á la cara, sino que atiende á la caligrafía, á los ademanes y hasta á la sensibilidad; y lectura que de todos modos no se trata de aplicar sino á los individuos reincidentes de delitos.

El autor pretende que en el cerebro de los locos no se halla nada anómalo: lo mismo que creían nuestros abuelos, ó mejor nuestros bisabuelos, y lo mismo que cree cualquiera cuyos ojos carezcan de microscopio. Las pigmentosis, las degeneraciones calcáreas, las cariocinesis, las esclerosis, las adiposis de las células nerviosas, son regla y no excepción en estas enfermedades. Además, aunque nada se hallara en el cráneo de los locos, esto no tendría que ver con los criminales natos, que no son locos, sino más bien imbéciles, faltos de sentido moral, que del mismo modo que éstos presentan anomalías demasiado numerosas, así en lo moral como en lo físico.

Nos pregunta cómo Robespierre y Marat y los tiranos famosos de la antigüedad no tenían fisonomía de criminales; pero, en primer lugar, se necesita conocer muy superficialmente la historia para confundir al primero con el segundo: Robespierre, un teórico que seguía su sistema propio, y Marat, un loco criminal desde joven. Por otra parte, se necesita no haber leído las hermosas páginas de Taine para ignorar cuánto dominaba entre los revolucionarios de 1879 el tipo criminal que yo he señalado, como Taine indica expresamente, haciéndome un honor que no merezco. Basta haber visto una vez el retrato de Marat, con la frente deprimida, los ojos bizcos, los labios pronunciados, el cráneo oxicéfalo, las orejas en asa, para comprender cuánto error é ignorancia hay en las frases de Gabelli.

Y ¿cómo puede ignorar la impresión, correspondiente del todo á nuestra descripción del delincuente nato, que producen los tipos de Nerón, Domiciano, Mesalina, etc.? Y ¿cómo puede ignorar la historia de César, que reproduce exactamente el llamado tipo degenerativo del loco moral y la herencia del delito, y que fué, precisamente por esto, tomada como modelo por Jacoby?

Que se atreva á juzgar mis estudios sin leerlos, puede pasar; pero ignorar la historia y el aspecto de los Césares escribiendo acerca de Roma, él, arreglador oficial de los estudios clásicos, es cosa verdaderamente singular.

Se maravilla después de que, además del cráneo y de la fisonomía, hagamos otros estudios, como si no estuviera ninguno de nosotros persuadido de su omnipotencia; pero ¿dónde ve él que hayamos declarado esta omnipotencia, cuando por el contrario, hemos demostrado que en los reos sólo hay una diferencia de proporciones en las anomalías de los normales? Y además, ¿por qué y cómo puede ser vituperable que la ciencia extienda sus investigaciones hasta donde sea posible? En caso, la censura cabría por la razón contraria: si aun estudiadas la temperatura, la dinamografía, las condiciones de los glóbulos sanguíneos, etc., no tuviéramos en cuenta también la orina, por ejemplo. No siendo el cráneo más que una parte del cuerpo, pero no todo él, es natural que todo el cuerpo y todas las funciones deben tomarse como base, y especialmente las psicológicas.

En cambio, mientras así descuida los hechos desconociendo su importancia, se aprovecha como cualquier curial de una frase en que yo confesaba que no habíamos estudiado bastante los delincuentes de ocasión porque, no reincidentes, no teníamos la seguridad de que fueran criminales; y que por esto nos habíamos detenido más en el estudio de los delincuentes natos; y quiere hacer creer, sobre esta base, que nosotros no tenemos confianza alguna en nuestras investigaciones. Pero ¿de cuándo acá las precauciones que toma un observador para obrar con más seguridad, se citan como prueba de su falta de exactitud? El químico ensaya sus reactivos antes de usarlos: ¿se dirá por esto que sus reacciones no son seguras? ¿Y estas son cosas que pueden decirse en nuestros tiempos?

Pero qué, si no hubiéramos limitado nuestros estudios á los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

reincidentes, ¿no habría él en seguida asegurado, como otros varios han hecho también, que los delincuentes son hombres como todos los demás, cuyo delito no pasa de ser un incidente enteramente accidental en su vida, y que juzgábamos sus caracteres anormales bajo la preocupación de verlos en la cárcel? Pues esta acusación ya la formuló igualmente Legrand de Saulle porque ignoraba los descubrimientos de Morel y de Krafft–Ebing, los cuales fijaron mucho antes que yo los signos hallados después en los reos como caracteres degenerativos, esto es, caracteres de un organismo desarrollado imperfectamente ó con tendencia á la locura, ó víctima ya de ella, ó del idiotismo, etc.

Del único escrito mío que ha leído verdaderamente, el artículo que publiqué en la *Domenica del Fracassa*, en el que trataba de demostrar cómo el vulgo y hasta los niños tenían conciencia de las fisonomías criminales, quiere deducir la afirmación de que fundamos nuestras conclusiones en el juicio del vulgo, que, como nadie duda, es muchas veces erróneo. Pero yo no soñé nunca con recurrir al vulgo para nuestras conclusiones; tanto es así que declaré que muchas de éstas no habíamos podido comprobarlas y que, por lo mismo, no las adoptábamos. Nosotros citábamos al vulgo únicamente para demostrar que nuestras conclusiones no estaban tan lejos de la conciencia popular como se pretendía,[1] sino muchas entraban dentro de la opinión y hasta el instinto de los más. A pesar de que hubiéramos podido desde luego usar perfectamente este juicio como nuestros adversarios le usan con tanta facilidad para demostrar la existencia de Dios, del libre arbitrio, etc., no hablamos de él ninguno hasta después de haber examinado detenidamente millares de locos, criminales y hombres arreglados.

Después Gabelli, ignorando completamente la primera parte de mi libro, en el que traté por largo esta cuestión, pregunta cómo era el cráneo de aquellos que en los tiempos bárbaros realizaban las herejías, las blasfemias, las brujerías y demás actos castigados entonces por la ley, mientras ahora no lo están.

1 Esta es la objeción que me hacía un agudo crítico, Piucco, en la *Gaceta de Venecia*. Para las otras objeciones de éste y de Brusa, y de Steccetti y de Oettigen, véase mi libro *Pazzi ed Anomalé*.

Ya he demostrado que los delincuentes contra la costumbre, contra la religión, eran entonces verdaderos delincuentes, al paso que los reos de homicidio muchas veces no eran considerados como tales en las épocas salvajes. Ahora, si aquellos eran verdaderos delincuentes, excepto naturalmente los perseguidos con error, sólo por desahogos de odio teológico ó político, es natural que habían de tener los mismos caracteres de los delincuentes modernos; y así es como en la primera edición he descrito doce cráneos de reos de la Edad Media, que tenían las mismas anomalías que los nuestros.

Por otra parte, no pretendemos nosotros que á cada infracción del Código penal correspondan especiales anomalías; nosotros, que no tenemos sólo de anómalos proporciones inferiores al 60%, los hallamos casi siempre en delitos gravísimos, como asesinato, incendio, robo grave y semejantes. Los reos de imprenta, como los de calumnia, los políticos en gran parte, muchas formas de aborto y de infanticidio, el duelo, la riña momentánea, ciertos abusos de confianza, los adulterios, etc., no son más que enteramente ocasionales y no presentan alteraciones orgánicas que rarísima vez se encuentran en los delincuentes por pasión. Es aquella una de las observaciones críticas más ingeniosa y sólidamente contestadas por Ferri, con la demostración de muchos datos antropológicos y estadísticos, en 1880, en el *Archivo de psichiatria*, reproducida y completada después en los *Nuevos horizontes*.

Pregunta Gabelli si son los cráneos los que producen la mayor criminalidad de sangre en Italia, especialmente en el mediodía, en relación con Alemania, Francia, etc. Pero qué: él, estadista ¿ignora la influencia del clima cálido, de los meteoros que yo, después de Quetelet y Guerry, he demostrado, no só-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lo en mi *L'uomo delinquente* (1ª y 2ª edición), sino en un libro escrito sobre esta materia, *Pensiero e meteore*, que algunos de sus correligionarios precisamente combatieron, fingiendo creer, ó creyendo, como él ahora con el cráneo, que, al demostrar la influencia del factor climatológico, quería olvidar la existencia de los otros factores por mí estudiados?

Esto no quita para que una intimidación fuerte y una represión excepcional haya á sus ojos disminuido, sin variación en los cráneos, el bandidaje de Polesino, porque es indudable también que la prontitud en el castigo sirve de freno, no á los criminales natos que son imprevisores, sino á los reos de ocasión, que vacilan entre el bien y el mal y que, entre un bien lejano y un mal seguro, prefieren el mejor camino: la inacción.

Por lo que hace á Bergamo y Aosta, la imbecilidad aumenta los delitos atroces mixtos de los de obscenidad; y en cuanto á Roma, él, que la ha estudiado, debiera saber que la causa de los homicidios más frecuentes está en el clima, en el abuso del alcohol y en la herencia morbosa, que nos dominan y convierten en segunda naturaleza las costumbres que se adquieren.[1]

Hablando después del tatuaje, cree él que yo me he precipitado al considerarlo un carácter de los delincuentes, porque debía, á su juicio, haberles comparado con los hombres normales y con los mismos delincuentes, antes *(sic)* de entrar en la cárcel. Dejando aparte que esta última observación sería un poco difícil y siempre discutible, lo extraño es que crea que aquellos postulados han sido muy difusamente resueltos en mi libro; cuando he comparado en él un total de 9,234 individuos, penados y militares. Además, anticipándonos á su crítica, fueron estudiados los tatuados menores de edad de las casas de reforma y se halló una proporción mayor (32 á 40%) de los verdaderamente presos; y se determinó la época, 9 á 16 años, que da el máximum de tatuajes entre los encarcelados. Sólo

1 Por esto Rossi ha hecho en mi laboratorio un estudio en que se prueba que, en estos últimos nueve años, las lesiones y las rebeliones en Italia han estado en relación directa con el buen precio del vino.

le faltaba al buen crítico haberme exigido la cifra de los tatuados en la lactancia. ¿Es seria esta crítica?

Gabelli ni ha leído nuestros libros, ni siquiera las críticas formales de nuestros trabajos: las de Tarde, Billiakow, Ribot, Ramlot, Heger, Bodier, que señalaron algunos errores nuestros, pero confirmando completamente los hechos principales, con aquella imparcialidad y seriedad propias de quien no juzga los estudios ajenos por lo que otros han dicho ó por el A. B. C. de nuestras escuelas; y de ahí que nos juzgue, no por lo que somos, sino por lo que á su juicio éramos, haciendo para combatirnos lo mismo que quien, después de haber imaginado escarpada con terribles precipicios una cuesta sencilla, creyese haber realizado una gran empresa con salvarse.

Y para que él no suponga que en todo esto entra en juego mi pobre vanidad de padre de la escuela, he de decirle que, á pesar de las muchas investigaciones hechas, no creo haber llegado aún á la perfección ni con mucho. Si verdaderamente me hubiera leído, ya hubiese notado, con el agudo ingenio que le distingue, una cantidad de errores y lagunas demasiado grande. Por ejemplo: ni he estudiado el olfato, ni el gusto; poco la sensibilidad muscular y poco los errores sexuales, que deben de ser frecuentes; y puede decirse que hasta hace pocos días no he podido descubrir la conexión entre el epiléptico y el delincuente nato.

El, que es insigne estadista, hubiera notado también que yo, no nacido para este ramo de la ciencia, pero obligado por la necesidad á expresar y reunir los hechos por medio de cifras, he cometido gravísimos errores, corregidos poco á poco en las ediciones sucesivas, gracias especialmente á las críticas de Balestrini, de Bodio, de Ferri y de Beltrani-Scalia; errores que no falsean ni ponen en duda las conclusiones de la escuela, porque las pruebas están acumuladas en tal número que la presencia de una suple los defectos de la otra. Lo cual no impide que haya, para los que se preocupan justamente de la perfección de la obra y prefieren las fracciones de los hechos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

al total, graves dudas aún, que yo espero aclarar en la próxima cuarta edición.

Por otra parte, Gabelli no se preocupa de los hechos en sí, como corresponde á un buen naturalista, sino sólo del clamoreo momentáneo producido por la falsa interpretación de algunos abogados, á los que favorece tal vez verdaderamente buscarnos partido en beneficio de sus poco decorosos clientes.

Pero tampoco es nadie culpable de las aplicaciones que otro á pesar suyo puede hacer de sus descubrimientos, aspecto perjudicial que pueden tener todas las investigaciones junto á sus aspectos ventajosos. Además, Gabelli no ha considerado que seguramente este aspecto desventajoso desaparecería en absoluto el día en que nuestras doctrinas se llevaran á la práctica, con las reformas administrativas y judiciales por nosotros indicadas, y sin las cuales nuestro sistema no sería completo, y antes bien, ni sería posible.

El día que á la vana retórica de los defensores se sustituya un juicio de especialistas técnicos, suprimiendo además el jurado, que es un resto de la barbarie antigua, evitando con las leyes sobre el alcohol y sobre el divorcio, muchas causas de delitos de sangre y sexuales, y eliminando, con establecimientos de incorregibles ó con la pena de muerte ó con el trabajo en tierras eriales, el grupo de individuos que constituyen la eterna clientela de la justicia penal, todo peligro desaparecería; y cuando todas estas medidas indicadas por nosotros no se practicasen, el acusarnos sería tan injusto como si encontrara perjudicial el sistema hidroterápico quien no buscase después del baño la reacción, ó como si se creyera un mal descubrimiento la iluminación por gas, en razón de que, no sujeto convenientemente en tubos, puede escaparse y ocasionar incendios.

El no piensa tampoco que á estas artes de abogacía debe hoy por hoy entregarse nuestra escuela; porque incompleta y no en armonía con un Código, la favorece mucho menos el Código vigente con sus frases vagas, elásticas y absurdas de

fuerza irresistible, conciencia libre, libre arbitrio por mitad, por cuartas partes, por infinitésimas frases que hasta se han hecho proverbiales y con las que en estrecho rigor de lógica, dado el Código que nos rige, pudiera absolverse á todos los criminales, y mucho menos la favorece también el sistema de la abogadocracia, que ha sustituido ya á toda forma de gobierno, y que, mientras presenta á los ojos de los patanes el brillo de un sentimentalismo femenino por la pena de muerte y la reclusión perpetua, hace con el sistema del indulto regio y de los jurados, con la amovilidad de los jueces, con los Ministros abogados, con la falta de relación y el desprecio de los peritos, con la misma mezquina policía judicial, hace, decimos, de la justicia civil y penal una innoble fuente de ingresos, y, para algunos privilegiados, un oficio cuyo último cuidado es la justicia y cuya máxima aspiración es el interés personal.

Ahora bien, ¿quién ha protestado contra todo esto más firmemente que nosotros?

Se teme que la moral se ofenda, que falte la ayuda de la educación, una vez que vengan á menos el aprecio y el desprecio de los actos realizados libremente;[1] pero además de que basar tan importante freno sobre un hecho que no existe, sería, una vez probado, poco serio y poco estable, siempre queda la consideración de que nadie que ataque al mundo de los sentimientos, aun sin querer atacarle, conseguiría buen éxito.

Los criterios del mérito en nada varían, porque muchas de las virtudes y de los vicios resulten efectos de cambios moleculares. ¿Quién niega admiración á la belleza aunque crea, como yo y como muchísimos otros, que es un fenómeno enteramente material, independiente de la voluntad humana? No es (dice en unas bellas líneas Tammeo, *Sobre algunas cuestiones relativas á la libertad, 1884*), no es virtud del brillante ser más bello que el carbón; pero ninguna señora tiraría los brillantes, siendo carbón en el fondo, para adornarse con carbones. No-

1 Objeción del carísimo Abogado Piucco, de Guerzoni, etc.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sotros coronamos de flores la tumba de los grandes, y aventamos las cenizas de los malvados, aun cuando sabemos que el ser criminal ó héroe, depende, como la belleza, de una condición del organismo.

Quien pretendiera que negar ciertos principios éticos es destruir la libertad humana, se parecería á quien objetase á Galileo y Copérnico que, al sostener la fijeza del sol y el movimiento de la tierra, llevaban la pertubación y la ruina á todo el sistema solar. Del mismo modo que el sistema celeste, el mundo moral existe siempre, sea cualquiera el criterio con que se le examine. Exactamente, por lo mismo, ningún buen libro, dígase lo que se quiera, podrá animar á las gentes y salvar á un pueblo de la decadencia, una vez que se inicia. Las doctrinas quedan en los libros y los hechos continúan su camino. Sin embargo, nosotros debemos intentar todas las experiencias.

¿Cuándo, por otra parte, se ha visto que estas nociones y sistemas totalmente científicos salgan del pensamiento de los psicólogos para ir á variar el sentimiento público, el sentido del bien y del mal, de lo útil y de lo dañoso, ni siquiera en la conciencia de los mismos que los crearon? Como decía muy bien Torelli-Viollier, ¿quién de los criminalistas antropólogos daría la mano á un amigo, después de haber cometido un delito? Sólo algún materialista que estime un tonto al igual de un genio, creyendo que la inteligencia del uno y del otro no son más que un efecto de organización. Comprendamos de paso, que estas ideas no penetrarán hasta después de muchos siglos!

El desprecio, por otra parte, no siempre sigue al delito; ni contribuye siempre á eliminarlo, El adulterio es despreciado en una mujer, pero no lo es en un varón. Las jugadas de los fuertes banqueros se llaman buenos golpes. Y así sucesivamente. Ni los delitos políticos merecen desprecio, sin embargo de que deben figurar en el Código cuando la pena esté justificada por la defensa social.

El desprecio, además, puede ayudar á prevenir los delitos

en individuos no corrompidos aún, que son la parte menor de los delincuentes natos; pero los habituales son enteramente insensibles á él, y antes bien, reciben nuevos estímulos en la aprobación de sus colegas, y en aquel rumor que, aun en sentido desfavorable, se extiende en torno de su nombre y es por ellos considerado como gloria.

Ademas, un hecho, para un positivista, tiene valor en sí y por sí. Justo es que se examine hasta qué punto es cierto (aunque no, como Gabelli, sobre el dicho de los demás ó sobre leyendas de modistas); pero demostrado que lo es, no debe atacarle nadie, salvo quien sea movido por ideas teológicas, que justifican cualquier medida, exceso, sin pensar las consecuencias de sus supuestos, casi siempre equivocados, tratándose de una novedad cualquiera. Los ferrocarriles, como los telégrafos, y hasta el tabaco, y los *bretotrofi*, fueron en un principio considerados como inmorales por aquellos que, pretendiendo adivinar sus fatales consecuencias, no hacían otra cosa que desahogar, en nombre de la moral, el odio eterno á las innovaciones que existe en todos los hombres, y especialmente en las razas viejas y podridas, como las nuestras.

¡Ah, no! La razón de las oposiciones á nuestra escuela no debe buscarse en la ofensa moral. Es muy otra la causa de ellas.

El amor á la vida tranquila; aquella especie de sueño, de narcosis senil, que nos convierte á todos arqueólogos natos; que nos hace una especie de dioses ó *sancta sanctorum*, respecto de cualquiera fórmula,[1] de cualquiera fe; como por la indisolubridad del matrimonio, el libre arbitrio, la utilidad de los estudios clásicos, etc.; eso es lo que nos hace sordos á las demostraciones más evidentes. Y en este caso, tanto más, cuanto que el interés práctico está lejano y no puede conseguirse sino colocando una serie de instituciones y de leyes entre la meta y el punto de partida.

1 V. prefacio al libro *Pazzi ed anomali*, de C. Lombroso.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Pero, precisamente acerca de esto, á habernos Gabelli leído, no hubiera dado en el extraño error de creernos deseosos de reformar en Italia, de un golpe, jueces, códigos é instituciones, etc., puesto que yo, y casi todos mis compañeros, estamos de acuerdo en que vale más un mal código viejo que un nuevo; por lo mismo que las leyes, cuando antes no las pide la opinión pública, ni son serias ni se cumplen. Cuando ciertas ideas no son aceptadas ni aun por los llamados pensadores, cómo han de serlo por los hombres menos cultos? Por otra parte, no puede exigirse lo superfluo cuando falta lo necesario. Antes de las leyes que nosotros proponemos y que Gabelli cree mitológicas, á pesar de que en América y en Inglaterra están hace muchos años adoptadas, como las de manicomios criminales, las del uso de los alcoholes, etc., serían necesarios, estando dominados todos, como estamos, por los males de la barbarie y aun por los de la civilización, unos procedimientos expeditos, un jurado técnico y limitado sólo á los delitos políticos, cárceles celulares en los países más infectos, y jueces que con la inamovilidad escaparan á la influencia de la política, mediante la que la justicia ó injusticia, son en Italia un mercado abierto á todas las avaricias y á todas las anormalidades.[1] Sin embargo de todo lo cual, nosotros pedimos por ahora solamente el cambio de dos palabras del art. 95 del Código Penal, para extender á los casos más graves y más frecuentes la aplicación de la *custodia*.

2. Así como Gabelli, para combatir mi *Uomo delinquente*, le supone reducido á un solo capítulo, el de los craneos y el de la fisonomía, así Orano, al examinar mi libro *Pensiero e meteore*, ve ó cree ver que yo hago derivar solamente del calor y del frío todas las determinaciones humanas, especialmente los delitos; y como verdaderamente los factores de todas nuestras acciones son múltiples y los meteoros no constituyen más que una sola parte, hace fácil juego contra mí y contra cuantos po-

1 V. mi *Incremento del delitto en Italia*, 1882.

nen las variaciones atmosféricas en el mismo lugar de la miseria, de la herencia, etc.; y me supone fácilmente también en contradicción y hasta en modo de enmienda y de penitencia respecto de mi obra *L'incremento del delitto;* donde independientemente de los meteoros, ó, como él dice mejor, de las *lunas*, figuran todas las otras numerosas causas de los delitos.

Pero mi noble contrario olvida que antes de esto, yo había publicado el *Uomo delinquente*, donde examiné ya, mejor aún que en este otro libro, todos los factores del delito, y que si en él he dejado aparte las influencias meteorológicas, y en el *Pensiero e meteore* he omitido casi todas las demás, es porque cuando se escriben los libros, no se sigue el método, por él empleado, de salirse del argumento, sino que se procura tener éste constantemente á la vista del lector. Cuando se investigan las causas que hacen exceder los delitos en Italia del término medio asignado ordinariamente á las razas incultas, y aún del término medio ordinario nuestro, no es oportuno estudiar aquellas causas generales como los meteoros. Por el contrario, cuando se va á tratar de las influencias meteorológicas, es inútil hacer perder tiempo al lector en las exposiciones de las otras concausas. Pero que yo ni he soñado con excluirlas, bien lo hubiera visto sin más que dirigir una mirada atenta á las páginas 191 y 192 del mismo volumen que se proponía examinar, en las cuales se afirma bien claramente cómo se asocian á las influencias meteorológicas la mala conformación del cráneo, la herencia, el alcoholismo, etc.

Lejos de haber yo olvidado mis ideas fundamentales en el libro sobre el *Incremento del delito*, no he hecho otra cosa que su aplicación práctica; así, por ejemplo, proponía los establecimientos para los incorregibles y las compañías de trabajo, como sustitutivos de la advertencia, del domicilio obligado y de la vigilancia, proposiciones basadas sobre mi estudio del hombre delincuente; del mismo modo que los manicomios criminales, la abolición de la libertad provisional y del indulto, etc.; y asimismo, combatiendo en la página 97 á Scalia, que me

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

objetaba precisamente como él que la reincidencia que no es constante en los reos, porque los crímenes disminuyen según el precio de los granos, las guerras, etc., yo escribía explicando esto, que "á la cantidad constante de criminalidad se añade una variable, porque aquellos actos no se realizan cuando las circunstancias no favorecen su desenvolvimiento y se multiplican en el caso contrario, como sucede precisamente también con los nacimientos, las muertes y los matrimonios."

No soy yo, pues, quien se ha arrepentido, sino él quien ha dejado de leer.

Más extraña resulta aún otra equivocación que padece. Habiendo visto que yo trato largamente de la influencia del frío sobre la inteligencia de los individuos sanos y enajenados y sobre las razas humanas, ha creído, ciertamente de buena fe, que yo llegaba á considerar la influencia del frío como determinante de los crímenes; y sobre esta base escribe unas sesenta páginas para demostrar que el frío tiene muy poca ó ninguna influencia, comparado con la miseria. El lector, y quizá él mismo, se maravillará cuando releyendo el libro vea que yo he cosiderado el frío solamente de influencia sobre la locura y los delitos contra las personas; y que el aumento de algunos delitos contra la propiedad en invierno lo explico, precisamente como él, por aquellas otras causas que me acusa de haber suprimido; por ejemplo, las noches largas de Octubre á Enero, la soledad de los campos, la paralización de los negocios en Noviembre, la época de los arrendamientos y mudanzas en Octubre (pág. 141), y en general, la mayor miseria de los meses fríos, miseria que es para él erróneamente la única causa de casi todos los delitos. "En los delitos contra la propiedad tenemos un notable predominio en el invierno, por ejemplo, el hurto y la falsedad en Enero, y poca diferencia en las otras estaciones. Aquí la influencia meteorológica es enteramente diversa; aumentan las necesidades y disminuyen los medios de satisfacerlas." (*L' Uomo delinquente*, segunda edición, pág. 238).

El autor, para no embrollarse en las cifras, hace un llamamiento al buen sentido universal, según el que, á su juicio, el clima no tiene influencia alguna sobre las acciones de los hombres, especialmente el calor. Verdaderamente los hombres de ciencia saben que quien apelase al pueblo, respecto de la circulación de la sangre, de los movimientos planetarios y de todos los grandes problemas de la vida, no obtendría una contestación muy adecuada. De todos modos, aun aceptando el reto, el pobre pueblo va, en este caso, mucho más allá que nosotros. Citaré estos proverbios que corren de boca en boca: "el calor le ha subido á la cabeza;" "tiene lunas;" "tener un cuarto de luna en la cabeza;" "soy la luna furibunda.... que presido á la locura y excito los furores (Nonio);" "de Mayo nacen los ladrones (Ginsti, 1279);" "Febrero podador, Marzo amoroso (idem, 1357)." Daudet ha hecho toda una novela (Numa Roumestan) para pintar la gran influencia del clima meridional en las tendencias morales. "El meridional no gusta de licores; se siente ebrio por el nacimiento: el sol y el viento le destilan un terrible alcohol natural, cuyos efectos sienten todos los que allí nacen; unos tienen sólo aquel ardor que aligera la lengua y produce los gestos, que lo hace ver todo azul, que desarrolla la audacia y hace decir mentiras: otros llegan al delirio ciego. ¿Quién es el meridional que no ha sentido la postración momentánea de los atosigados y el abatimiento general que sucede á la cólera y al entusiasmo?"

Donde, además de esto, el escándalo causado en la modestia pudibunda del crítico ha tocado su límite, es en la frase en que declaro que sobre la criminalidad no tiene influencia la educación. ¡Halla la cosa tan enorme que hasta se pregunta seráficamente si no se está en el caso de ocultar el error por caridad de la patria!

Verdaderamente, en un libro de hechos detenerse en una frase, es cosa que sólo puede hacer quien es autor y dueño de ella. Pero si él hubiera leído bien el periódico y la cita en que se funda (Guerry, pág. 12), vería que no es la educación en general, física ó moral, la que yo creo en absoluto inútil ó más

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

bien indiferente respecto á las causas del crimen y de la locura, sino la instrucción alfabética, sobre la que los charlatanes del derecho penal y de la sociología derrocharon tantas frases, parafraseando el conocido error de Guizot: "Por cada escuela que se aumenta, disminuye una prisión."

Como es lo contrario lo que sucede, y como hasta la instrucción alfabética que se da en las cárceles es la que en parte favorece las reincidencias, yo, que no me hago esclavo de los prejuicios, y menos aún de las frases que se transforman en prejuicios, lo he combatido frente á frente.[1]

Pero el distinguido escritor ha dado con un hábil artificio que excusa y explica sus remilgos. El entiende por educación toda aquella serie de medidas con las que se corrigen, en cuanto es posible, las aptitudes, y supone que esas son las que nosotros consideramos inútiles. Al parecer, no ha contado que, si yo combato las ventajas de la instrucción alfabética, jamás, en cambio, pretendí negar las de los medios educativos. Si me hubiera leído, hubiese visto que precisamente á estos medios, tanto ó más que á los Códigos, doy yo la mayor importancia, si no para desarraigar el delito completamente, lo cual es imposible, dada la participación que tienen el organismo y los meteoros, al menos, como sucede en Inglaterra, para disminuirlo; hubiera visto cuánta importancia doy yo á las escuelas de reforma inglesas *(ragged schools)* por encima de nuestros reformatorios; y también á las colonias para jóvenes, y á los asilos para la niñez, y á las medidas preventivas generales que tienden precisamente á alejar la influencia de los crímenes, de la barbarie, de la civilización desequilibrada, etc., por ejemplo,

1 Juzgo conveniente añadir un nuevo documento á este propósito, tomado de la Memoria del Comisario de las cárceles inglesas, 1882. "Es cierto que las circunstancias han variado mucho desde los tiempos en que la instrucción se consideraba panacea del delito. Aquel concepto fué reconocido como una exageración. Poco resultado, por otra parte, podía obtenerse intentando, en el breve tiempo de la detención, una instrucción que de pronto se interrumpiría después." Hay mucha verdad en el epigrama de Lord Notton: "La escuela en la prisión y la prisión en la escuela, ambas están fuera de lugar." (Rivista di disciplina carcelaria, 1883, cuaderno 3º) Añadamos el dicho de Carlyle: "La cultura es una cortesía, dentro de la cual puede arder viva, con su fuego infernal, la pasión salvaje de los hombres."

atemperando con baños fríos la acción del calor; con los caminos más numerosos, con el desarme, con la justicia rápida, con la abolición del indulto regio, la acción de la barbarie; con las leyes sobre el alcohol, sobre el divorcio, con las escuelas dirigidas por personas laicas y casadas, con el telégrafo de alarmas, con los premios á las acciones virtuosas, con la supresión de los relatos de procesos escandalosos y de las aguardenterías, los daños de la civilización. Si hubiese repasado mi *Archivio di psichiatria e scienze penali*, hubiera visto que aquellas primeras ideas apenas esbozadas, han tomado, gracias á Ferri, Garofalo, Lacassagne, etc., un inmenso desarrollo y un nuevo nombre: el de *sustitutivos penales*, basándose, no ya en la estadística italiana, sobre la que yo y ellos habíamos inútilmente errado tanto tiempo, sino sobre cincuenta años de estadística penal francesa, que es estadística verdadera y no ilusoria.

Es curiosa también la refutación que pretende hacer á una afirmación contenida implícitamente en mi estudio, pero que yo no creí de mi competencia hacer resaltar: la de la irresponsabilidad humana. Fúndase para ello, no sobre hechos, sino sobre frases del gran maestro Quetelet: "De esta regularidad (dice Quetelet), no se puede concluir que todas las acciones del hombre, que todas las tendencias estén sometidas á leyes físicas, y que, por consecuencia, yo suponga su libre arbitrio en absoluto destruido.... Si para valernos de un solo ejemplo consideramos en el hombre su tendencia al delito, vemos que ésta depende de la organización, de la educación que ha recibido, de las circunstancias, etc...."

Damos por sentado que cuando con los hechos (hechos al fin exagerados por Quetelet, según demostró en mi *Archivio* Ferri), se prueba el paralelismo de los fenómenos voluntarios y su sucesión invariable en horas, días y meses dados, de nada valen las frases; no obstante, analizándolas, se nota que, lejos de afirmar la independencia de la voluntad, la refutan. ¡Ah! si se me concede una voluntad que se modifica por la organización, por la educación y también por las circunstancias

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

externas, etc., esa voluntad, no libre, sino esclava de todo en el fondo, la admito yo también. Esa es la llamada *volición*, que tantos confunden con la voluntad. Pero esto tiene el apoyo del ilustre Messedaglia, que después de haber dicho que cuando más los delitos contra las personas presentan un mínimum en invierno y un máximum en verano, siguiendo en el mismo sentido las leyes sobre los suicidios y las exageraciones mentales, interpreta esto, no como efecto físico directo, ni siquiera como correlación necesaria, sino como efecto de las diferencias que se producen en las costumbres sociales. Y al fin, esto pase; pero después añade que son fenómenos generales de *periodicidad por causas complexas siempre*.

Confieso que aquel rubor que asalta al autor citado, ante mis frases contra la influencia de la instrucción, me ha asaltado á mi en cambio al leer esta otra, que en su embrollada pobreza envuelve tanta más escasez de miras y tanta más repugnancia para acoger la verdad, cuanto más clara es esta. ¿Qué quiere decir lo de "tendencia á la periodicidad," frase que no tiene sentido fuera de los fenómenos biológicos, sino lo mismo que se dice con la acción general cosmo-telúrica, causa del mayor número de los fenómenos periódicos de la naturaleza? ¿No es más bien esto un modo de engañarse para cocultar á otros y á sí mismo la verdad, como cuando se hablaba de fiebre pestílente, por no decir peste? A tanto equivaldría decir: es verdad que el pan se cuece en el horno; pero lejos de nosotros la idea de que se debe al calor del mismo: débese á una cierta virtud de cocerse que tiene el pan dentro de él.

El buen Orano objeta además: "si el delito fuese consecuencia del clima, habría una causa física productora de los fenómenos psicológicos;" lo cual, á su juicio, es imposible. Pero ¿acaso él no ha visto estos fenómenos morales producidos por causas físicas? ¿Qué son entonces la embriaguez, el amor, la imitación, que él admite después?

Más adelante reconoce que la edad tiene principal influencia sobre el crimen. Y la edad ¿es acaso una influencia moral?

Después habla de la influencia del sexo, de la profesión, del domicilio; ¿son acaso causas morales estas?

En cuanto al calor tendría razón para combatirme, porque he extremado su influencia sobre los reos; pero los argumentos que adopta no me parecen muy felices. Así, no entiendo, por ejemplo, cómo se propone demostrar que el calor no tiene influencia sobre la locura, en virtud de que nuestras dos grandes islas tienen menos locos que todo el continente.

Hagamos constar que mi escuela no confunde el delito con la locura. Concedamos también que la estadística psiquiátrica es todavía defectuosa en los criminales, por su inexactitud. Pero, caso de no ser esto atendible, ¿no cree él que la falta de habilidad ó de cultura bastarían para explicar el hecho?

El argumento con que niega la influencia del calor, el de que las tropas en marcha y los maquinistas deberían dar un mayor número de criminales y de locos, es ingenioso, pero se vuelve en contra suya, porque si él hubiese estudiado detenidamente mis trabajos, hubiera visto que en los países de grandes calores, lo mismo que en Moscou, bajo los grandes fríos, muchos soldados se vuelven locos; que en las profesiones mecánicas los metalurgistas y los cocineros dan un gran contingente á la locura por su exposición al calor; y que los militares enloquecen muchas veces precisamente por lo mismo.

3. En un pequeño trabajo sobre los *Cráneos de los delincuentes*, el Dr. Monti (Bolonia, 1884), nos ha combatido con mucho mayor derecho á respeto, porque empieza por hacer un examen, aunque ligero, de muchos cráneos de criminales, después de haber intentado también una comprobación.

Pero desde el principio de su estudio échase de ver en él la tendencia á discurrir *á priori*, lo cual le lleva á juzgar que el tener la nariz más ó menos larga no puede inducir á nadie al crimen, como si nosotros tuviéramos por causas específicas estas anomalías, y no, al contrario, por simples y más ó menos constantes concomitancias; al mismo tiempo que le obliga, y esto es peor, á afirmar que la sutura temporo-frontal no

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

puede influir sobre el cerebro y sobre la inteligencia, cuando cualquier anatomista sabe que esta es una causa frecuente de estenocracia, y, por tanto, de impedimento de las funciones y del desarrollo del cerebro.

Importa también notar que sus resultados se conforman con los de la escuela que pretende combatir. Así, por ejemplo, encuentra la misma capacidad inferior del cráneo que yo he hallado, de 1,374 cm. cúbicos, mientras en los sanos es de 1,530.

Igualmente ha hallado, aunque él no le concede importancia, las esclerosis en los cráneos de los reos, y en la misma proporción del 45 por 100, como también las microcefalias, y las circunferencias reducidas, de 481, 488, 475.

Supone también como Messedaglia, Billiakow y Bordier, que yo he dicho que en los asesinos y homicidas predomina siempre la braquicefalia; pero lo que he demostrado yo, en la primera edición, es solamente su frecuencia, señalando de paso notables excepciones.

Ahora bien, él hubiera hallado entre 88 reos 37 braquicéfalos, 22 dolicocéfalos y 29 mesocéfalos, mientras en 100 sanos hubiese visto 61 de los primeros, 14 de los segundos y 25 de los terceros. Pero, aparte de que tampoco considera distintos en nada los homicidas y los no homicidas, lo cual hace sospechar que carezca de indicaciones precisas; y aparte de que los decapitados pueden ser también ladrones y aun simplemente delincuentes políticos, él olvida una circunstancia importantísima: la del país de origen; porque el ser uno decapitado ó preso en Bolonia no demuestra de ningún modo que sea boloñés, y menos en los criminales, tan fácil y frecuentemente obligados á cambiar de residencia; así, con pocos que haya observado de Módena ó de Lucca, hay bastante para explicar la gran cifra de los dolicocéfalos; y él, que parece tan convencido de la ventaja de poder hacer comparaciones regionales, debía insistir sobre esto y presentarnos testimonios que hasta aquí le faltan completamente.

Por lo demás, la mucha importancia que yo doy á la braquicefalia se justifica por el aplastamiento del occipucio, que tan frecuente es en los degenerados; y por el otro hecho, comprobado ya, de que en los criminales existe exageración de las indicaciones especiales de la raza. Donde domina la braquicefalia, allí hay una de estas exageraciones.

En cuanto á las anomalías, él cree que no son más frecuentes en los criminales que en los sanos; pero para demostrar este error me bastará con la siguiente tabla:

	En los criminales.	En los locos.	En los sanos.
Sinostosis de las suturas	17%	15	2/10
Asimetría	27	—	(3,7)
Fosa occipital media	8	4,5	4½
Sutura temporo-frontal	4'5	1,5	0'7
Sutura medio-frontal	9	7,5	7
Huesos wornianos	23	—	20 28
Peso	693 grs.	693	654

4. Ziino, *Fisiopatología del delito* (Nápoles, 1884), si pudiéramos entrar en medio de sus muchas digresiones y faltas de gramática, parece querer combatir la escuela antropológica criminal. Pero, por el contrario, muchas veces la confirma; por ejemplo, cuando distingue los criminales de los reos de pasión, y admite que los primeros son incorregibles, y no admite la herencia, que no puede tener lugar sin un substracto orgánico en los padres.

Más adelante escribe que nosotros no encontraremos emparentados entre los reos que examina, y sin embargo, por un reconocimiento de sus tablas, hemos podido reunir 35 parentescos entre 179, y precisamente diez hermanos, tres padres, tres madres, once hijos, tres hermanas, tres tíos y dos parientes más. No está más acertado cuando afirma que, fuera de alguna mujer neurópata, loca ó perversa por germen hereditario ó adquirido (¿qué otra cosa son las criminales sino per-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

versas?) no ha hallado en ninguno los caracteres que la nueva escuela asigna á los criminales. Aquí también, pasando una mirada por sus tablas, hallamos entre 188, 90 submicrocéfalas, 29 anómalas en el cráneo y en la cara, y 28 con anomalías funcionales; por lo cual, si hubiera leído las propias observaciones, *la* anatema (para él. sin razón, anatema es femenino) que lanza contra nosotros, pobres antropólogos, podría muy bien revolverse contra él mismo.

Al tratar de la acción de los meteoros sobre el delito, se apoya, para negarla, en el estudio de unos cuantos individuos de las cárceles de Messina, que están allí solamente por cuatro años; mientras yo, con Guerry y Quetelet, he tomado en cuenta muchos millares de observaciones. Todavía resulta de peor efecto el singular argumento de que, admitiendo aquella influencia, los abogados podrían hallar en el *Boletin* meteorológico la exención de sus clientes. Esto sería casi lo mismo que querer excusarle á él de sus muchas faltas de gramática, diciendo que escribía en meses fríos, puesto que yo he demostrado, hasta cierto punto, que éstos son desfavorables á las producciones intelectuales *(Pensiero é meteore, 1878)!!*

Porque fácil es de comprender que la influencia meteorológica explique el hecho, pero no que le justifique ni le haga excusable; cuando más proporcionará una atenuante. Entre tanto, como la verdad siempre es útil, este conocimiento, por él descuidado y mirado como un peligro social, proporcionaría un precioso medio preventivo, sugiriendo leyes diversas para algunos delitos, por ejemplo, el estupro y el asesinato, en relación con lo frío ó lo cálido del país del delincuente; y mejor aún el uso, en los últimos, de abluciones frías para prevenir ciertos delitos.

5. Mucho más aguda y fecunda es la crítica que sobre mi libro publicó el vigoroso pensador que se llama Tarde. *(Le type criminel.—Revue philosophique, 1885;* núms. 6, 7 y 8).

Este, por ejemplo, me objeta que si el criminal fuese, como yo pretendo, alto, pesado y con cabellos tendiendo al color

obscuro, no nos recordaría al hombre primitivo, que, según Spencer, era pequeño y rubio. Objeción finísima, como aquella de Calucci, padre, que á las frecuentes microcefalias de los criminales por mí afirmadas, oponía la gran capacidad evidente del cráneo de los salvajes.—A estas agudas objeciones yo respondo que hay una estratificación, como observa Sergi, en el atavismo criminal, el cual no reproduce siempre el salvaje de las últimas capas; y que, por otra parte, no es cierto que todos los salvajes sean pequeños, blandos y macrocéfalos. Altos y obscuros son los negros, los andamanos, los papuases; con cabellos muy espesos y altísimos de estatura los patagonios; y todos tienen los huesos pesados, y muchos, como por ejemplo, los australianos, tienen poca capacidad craneana.

Por otra parte, la comparación debe hacerse con el epiléptico, que es muchas veces pesado y alto; en uno y otro esta estatura alta y este peso se explican (como se explicaría también en los salvajes), por la anestesia, que deja crecer el cuerpo á pesar de la neurosis. Es la aplicación del proverbio que dice: "la mala yerba crece mucho."

No sabe Tarde explicar por qué la cabeza de los asesinos es más grande que la de los ladrones; esto depende también de la mayor estatura.

La asimetría encontrada en el 57 por 100 de los reos no puede, según él, considerarse como carácter atavístico. Realmente no lo es; pero, en cambio, es un carácter principalísimo del hombre epiléptico, á cuyo tipo he acudido para fijar los criminales natos.

Objeta él, contra la gran importancia dada por mí á la fosa occipital mediana, que ésta es frecuente en los árabes y en los hebreos, poco criminales. Ahora bien; dejando los hebreos cuya criminalidad latente (encubrimiento y usura) disimula la verdadera, nosotros no decimos que la foseta explique la criminalidad, aunque sea frecuente en los delincuentes y también en los bárbaros, sino que se presenta en los unos y en los otros como carácter de atavismo, ó sea, en lenguaje técnico,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de degeneración retrospectiva. Por lo demás, precisamente cuando completaba mis estudios sobre la foseta *(Revue scientifique, 1883)*, hice la observación de que las anomalías atavísticas no se encuentran con la misma frecuencia en las razas más salvajes; sino que, siendo allí más frecuentes que en otros pueblos más civilizados, varían singularmente en su proporción, sin que la falta de una ú otra pueda estimarse como signo de mayor inferioridad de la raza. Así, las dos anomalías atavísticas del hueso del Inca y de la fosa occipital se hallan mucho en razas semi-civilizadas, como la americana, y poco en los negros; y viceversa la estenocrotafia bastante más en los negros que en los americanos.

Y á este propósito, fuera de aquellos casos en que una enfermedad, como la paquinemingitis, hace de intermediaria, y obscurece y anubla todo rasgo de atavismo, es necesario recordar siempre que las líneas sintéticas parece, á primera vista, que desaparecen ante el análisis minucioso; así, cuando se quiere hallar la ley darwiniana, la ley del atavismo, en aquellos fenómenos humanos en que predomina más, por ejemplo, en la embriología, se nota cómo aquellas líneas que parecen evidentes vistas en conjunto y de lejos, se desdibujan si se las analiza demasiado cerca. Sucede aquí como con ciertos cuadros modernos que llamaré holandeses, los cuales, examinados de cerca, parecen manchas amorfas de color, mientras á distancia nos resultan admirables. Tanto en un caso como en otro las líneas existen; sólo que para notarlas se necesita alejar el punto de vista.

Que esto es así, lo prueba el hecho de que, adoptando esta regla, se nos abren millares de vías nuevas que, al aclararse mutuamente, aclaran el asunto; mientras que si se tratara de una ilusión científica, debería suceder lo contrario, y cerrarse todos los caminos.

Tarde, admitiendo la existencia de un tipo criminal, afirma que lo mismo debe suceder en cualquier otro grupo de hombres, por ejemplo, los literatos; y así sucede en efecto, como demostré en el *Genio e follia* (1883, 4ª edición).

En punto á los rasgos señalados en el tipo criminal, confiesa Tarde que muchos de los criterios del juez instructor, por ejemplo, el atestado de los jueces inferiores, valen bastante menos; y advierte cómo los comentadores de las viejas leyes, según Loiseleur, contaban entre los motivos de sospecha la mala fisonomía del acusado; concluyendo "que la necesidad de una clínica criminal se hace sentir como complemento de la escuela de derecho, para la que son muebles insuficientes el Digesto y el Código civil."

"Seis meses de frecuentar las cárceles valdría diez años de ejercicio;" lo que es bueno que sepan aquellos que han impedido la entrada en las cárceles á los hombres estudiosos. Añadamos que Semal, Benedikt y Hegel tomaron la iniciativa de esta idea en el Congreso de Amberes, que aceptó la proposición por unanimidad.

Advierte además Tarde que la mujer tiene mucha más analogía con el hombre salvaje y con el criminal que no el varón, á pesar de lo cual comete menos delitos: á lo cual respondo que su verdadera criminalidad, lejos de ser menor, será mayor que la de los varones cuando se considere la prostitución como equivalente al delito. Pero él, replicando, me responde que de cualquier modo, esta criminalidad sería bastante menos desarrollada; y yo convengo que tiene razón: y quizás que se debe tomar en cuenta, más que lo hayamos hecho hasta ahora, el ambiente, y recordar también que los signos degenerativos del cráneo en la mujer son bastante menos numerosos.

El me objeta además que, queriendo hacer á la vez del delincuente un loco moral y un salvaje, un atávico, se sobrepondrían dos tesis, que se alternan y contradicen, puesto que la locura es fruto de la civilización y *es rara* en los salvajes. Pero la locura moral no es la locura común; es la falta de sentido moral, que no puede considerarse rara en los salvajes, sino que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

antes bien constituye su modo ético de vida. En los reos, es casi siempre congénita. Además, en este punto los hechos son demasiado elocuentes.

Fuera de los hechos atavísticos, por ejemplo, la foseta occipital mediana y los senos frontales, yo había visto, desde los primeros estudios intentados en este sentido, cómo existían en los reos algunos otros hechos que no podían ser atavísticos, por ejemplo, la asimetría facial, que no existe en los salvajes, los dientes en sierra, el estravismo, la desigualdad de las orejas, la pachimeningitis, etc., y desde entonces, sin pensar en la futura fusión, había yo ya dicho que éstos eran signos de enfermedades fetales. Fué mucho después cuando me ocurrió que estos caracteres coincidían con los que se daban en el loco moral, y que se unían en las funciones otros caracteres que eran patológicos y no atavísticos, como la discromatopsia, las parálisis unilaterales, la desigualdad de las pupilas; lo cual no fué demostrado artificialmente, sino que se vino formando poco á poco con una verdadera serie de demostraciones en los estudios ulteriores, desde la primera á la tercera edición del *Uomo delinquente*. Antes de concluida ésta, mientras yo preparaba para el 2º volumen el estudio sobre el delincuente epiléptico, que de mucho tiempo atrás había considerado totalmente falto de estudio en una de sus partes, me ocurrió que en la familia de éste entraban completamente el loco moral y el delincuente nato; y así llené aquella laguna que aún me quedaba en el entendimiento para explicar los fenómenos patológicos puros y no atavísticos del reo nato, por ejemplo, la frecuente discromatopsia, la intermitencia, la contradicción de los caracteres afectivos, los impulsos irresistibles, la necesidad del mal por el mal, y los fenómenos de meningitis, de reblandecimiento cerebral, que sin duda no eran atavísticos. Sin embargo, no por esto dejaba de existir el atavismo: ninguna otra enfermedad, fuera de la epilepsía, tiene la patología que pueda al mismo tiempo presentar y reunir los fenómenos morbosos con el atavismo. Ya los prácticos habían observado que el epiléptico realiza muchos actos atavísticos, como ladrar, comer carne humana, etc.[1]

Esto explica una masa de hechos que precisamente el atavismo no explicaba, por ejemplo, aquel carácter, tan abundante en la jerga de los reos, del cinismo, de la alegría brutal que embrutece cuanto toca; el cual falta en los salvajes, pero se halla en los epilépticos, alternado á veces en el mismo individuo con la excesiva religiosidad, como en los delincuentes.

Ni falta la relación con la infantilidad, porque es especial á los niños la impulsibilidad intermitente en que se resuelven por último todas las tendencias de los epilépticos. Recordemos, en efecto, la iracundia morbosa del niño, que frecuentemente olvida después de la cólera; la intermitencia y contradicción de sus impulsos, y su falta de contención.

Reuniendo bajo el tipo epiléptico la variedad de la locura moral, se evitan aquellas inexactas descripciones de esta enfermedad que habían provocado, no sin fundamento, la desconfianza de tantos médicos legales.

6. Vengamos ahora á las acusaciones genéricas.

"Vos abusais mucho—me dicen otros—de los hechos aislados, en vuestras deducciones; si uno, por ejemplo, tiene el cráneo asimétrico, una oreja en asa, etc., inmediatamente formáis la presunción de locura ó de criminalidad, que sin embargo no tienen relación directa y segura con tales anomalías." Ahora bien, dejando de lado que no se presenta en el cristal humano ninguna anomalía de formación que no tenga su razón de ser, especialmente en la paralización del desarrollo; dejando también aparte que la experiencia ha demostrado que aunque estas anomalías retrogresivas se asocian á veces entre sí, otras veces, sin embargo, se hallan aisladas en individuos afectos de profundas corrupciones morales, y que también una escuela respetable de alienistas se apoya en la actualidad muchas veces sobre una sola de estas anomalías para formar el diagnós-

1 Tarde, con una lealtad que es muy poco común, conviene ahora en que este dato responde completamente á su objeción. (*Revue philosophique*, número 9).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tico de la enajenación llamada degenerativa, recordemos ahora que nosotros no hacemos estas deducciones *à priori*, sino después de haber hallado en mayor proporción las anomalías en los criminales que en los no criminales; y que cuando están aislados los consideramos sólo como un indicio, como una nota musical, de la que ni pretendemos ni podemos obtener un acuerdo sino cuando se halla unida á otras notas físicas ó morales, por ejemplo, la de haber cometido un delito ó recaer indicios de él, que nos parece significar ya alguna cosa. Por lo demás, en la 3ª edición he cuidado mucho de reunir las anomalías que constituyen lo que se llama el tipo, procurando además que el lector lo comprobara por sí mismo con testimonios á la vista.

Sólo que aquí, precisamente, se me replica: "¿cómo podéis hablar de *tipos* de criminales, cuando de vuestras mismas clasificaciones resulta que un 60 por 100 carece completamente de esos rasgos y se asemeja más ó menos al hombre normal?"

Pero, aparte de que el 40 por 100 es una cantidad que merece ser tenida en cuenta, el paso insensible de un carácter á otro, se manifiesta claramente en las especies animales y vegetales, sin separación entre la una y la otra, y esto sucede mucho más en el campo antropológico, donde la variabilidad individual crece en razón directa de la mayor perfección ó de la mayor falta de cultura, hasta parecer á veces que casi se pierde el tipo completo. Es difícil, por ejemplo., que entre cien italianos tengan cinco el tipo conocido, presentando otros solamente fracciones que, por eso mismo, se conocen prontamente comparándolos con los extraños; y sin embargo, á nadie se le ocurrirá negar que hay un tipo italiano, y menos aún que hay un tipo mongólico, etc.

El tipo, en resumen, debe ser acogido con la misma reserva que el término medio en las estadísticas; cuando se dice que la vida media es de 32 años y que el mes de mayor número

de defunciones es Diciembre, nadie entenderá que de aquella edad y en aquel mes deben todos morir.

Por otra parte, los estudios de Ferri, Garofalo y Puglia, han revelado bien qué reos proporcionan el tipo normal, especialmente los reos de delitos políticos, de calumnia, de quiebra, de imprenta y de falsedad de letras de cambio; los cuales delinquen generalmente á consecuencia de una ocasión especial, mucho más que por un impulso congénito.

Esta limitación del tipo no daña, sino que antes bien favorece las aplicaciones prácticas de nuestras conclusiones. Muchas medidas, como la draconiana de la prisión perpétua, por ejemplo, serían impracticables en un gran número de individuos, pero no en unos pocos; y respecto de estos pocos, no parece tan extraño el consejo de considerar como un indicio de la posibilidad de delinquir la presencia de este tipo en individuos sospechosos de algún delito; tanto más, que si en nuestros estudios no se excluye que hombres de tipo normal puedan ser delincuentes, en cambio resulta seguro que hombres con tipo craneométrica y fisonómicamente criminales, lo son también normalmente, salvo poquísimas y fácilmente cognoscibles excepciones, demasiado bien explicadas con la demasiada teoría degenerativa.

Una importante acusación se nos hace, además, á propósito del tipo: la de que le obtenemos del estudio de unos cuantos millares de criminales, mientras éstos existan á millones, y mientras se sabe que no hay ley segura si no se deduce de un gran número.

Conviene recordar aquí una ley biológica que precisamente Ferry cree que debe combinarse con la del gran número: "la ley, por la que, en general, los datos biológicos de mayor importancia están sujetos á las variaciones más pequeñas; mientras, por ejemplo, la largura de los brazos puede variar de hombre á hombre muchos centímetros, la anchura de la frente no puede en cambio, variar más que algunos milímetros. De donde resulta, como consecuencia evidente, que en las investigaciones

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

antropológicas, la necesidad de las grandes cifras, está en razón directa de la variabilidad de los caracteres estudiados, ó sea, en razón inversa, de su importancia biológica."

"Las afirmaciones genéricas de los teóricos de la estadística sobre la ley de los grandes números, deben ser entendidas en el sentido de que el valor de las observaciones crece con la extensión y la repetición de las mismas; pero no en el sentido de que sea nula toda observación de pocos datos. En resumen, el valor positivo empieza á continuación de las primeras observaciones y aumenta con el aumento de éstas; y la necesidad de las grandes cifras depende de la diversa variabilidad de los elementos estudiados, puesto que si éstos fuesen absolutamente invariables, bastaría estudiar uno solo para extender la conclusión á todos los demás. Por eso Quetelet manifiesta claramente la convicción de que es innecesario repetir sus investigaciones antropométricas en un gran número de sujetos, respecto de aquellos caracteres que tienen más estrechos límites de variación." *(Nuovi orizonti*, 2ª edición, 1884).

Broca, en las *Instructions anthropologiques*, fija en veinte el número de individuos que concurren para dar la representación de una raza.

Las grandes cifras convienen cuando se trata de fenómenos que todos pueden observar, y en los que, por lo tanto, el gran número no excluye la certeza; pero no en aquellos hechos que se manifiestan en pocos individuos y en los que el número no puede suplir á la observación cuidadosa. Cuando se trata de saber, no el sexo, ni la edad, ni la profesión, sino la índole psíquica ó las formas del cráneo de un grupo de reos, es imposible obtener grandes cifras, ni aun empleando en ello toda la vida de un hombre.

En cuestiones delicadas que exigen especial cultura, los grandes números que la estadística oficial recoge, en caso, por medio de funcionarios ignorantes, tienen para mí menos valor que unas cuantas concienzudas observaciones de hombres competentes. Aquí es la seguridad de la indagación la que suple

á la cantidad; porque ¿qué utilidad ofrece la abundancia cuando es errónea y estimula el error?

Así, por ejemplo, en un dato tan poco difícil de conocer como la reincidencia, si se atiende á una estadística formada, con relación á más de 80,000 de nuestros penados, por el hombre más competente en Italia para estos asuntos, Beltrani–Scalia, resulta que está limitada al 18 por 100 en los *baños*, al 27 por 100 en los penales; cifras inmensamente inferiores á las de Francia y Holanda; y por las que hasta resultaría menor en las regiones más infestadas por el delito (de 10 á 14 por 100 en el Sur, y de 59 á 51 por 100 en el Norte). Gracias á que los conocimientos relativos al hombre criminal y al delito correspondiente, obtenidos por pocos, pero seguros datos, corrigen aquí, como ya respecto de Rusia corrigió Oettingen, el error de los grandes números.

¡En este punto me asaltan no pocos jurisconsultos, acusándome de reducir el derecho penal á un capítulo de psiquiatria y de subvertir todo el derecho penal y carcelario!—Esto no es verdad, sino en una pequeña parte, puesto que para los delincuentes de ocasión no se saldría de la esfera de las leyes comunes, salvo la mayor extensión concedida á los métodos preventivos, y en cuanto á los delincuentes natos, la reforma sería sólo en el sentido de la mayor seguridad social, por medio de una detención perpetua á la que no faltaría de carcelaria más que el nombre.

La novedad de nuestras más discutidas conclusiones es tan poca, que muchas podrían hallarse hasta en los períodos antehistóricos; en Homero, cuando habla de Tersites; en Salomón, cuando habla del corazón (Ecclesiastes, XIII, 31) que cambia la cara del hombre malo, y sobre todo, en Aristóteles y Avicenna y G. B. Porta, que trataron extensamente de la fisonomía criminal, quizá yendo los dos últimos más allá que nosotros. ¿Que más, si Polemone, después de haber insistido igualmente sobre la frente estrecha de los malvados, llega hasta á hablar del mancinismo de los criminales, observación que yo

creí haber hecho antes que ninguno? De aquí quizá derivan aquellos proverbios que van mucho más adelante que nosotros en las conclusiones fisionómicas, y que ciertamente son heredados de los antiguos.

El pueblo, ya hace muchos siglos, señaló la incorregibilidad de los reos, especialmente de los ladrones, y la ninguna utilidad de las cárceles;[1] lo cual conviene advertir en contra de aquellos que estiman nuestras conclusiones como contrarias á la conciencia pública.

Ni son siquiera nuevas aquellas aplicaciones prácticas de nuestra teoría que más atrevidas parecen á algunos. Valesio recuerda un edicto de la Edad Media, prescribiendo que "en caso de sospecha sobre uno ú otro de dos individuos, se aplique la tortura al más deforme;" en la Biblia se halla ya mencionado, y hasta condenado á la pena de muerte, el delincuente nato; y Solón inventó en el *Dicterion* el primer medio preventivo social contra los estupros y la pederistia.

En parte, esta acusación de revolucionario, me satisface, por cuanto me ayuda admirablemente á defenderme de la acusación opuesta que no pocos formulan: la de que yo, en mis últimas conclusiones (necesidad del delito, teoría de la defensa penal), he resucitado una doctrina anticuada, ó por lo menos, pasada de moda entre aquellos que yo llamo petimetres de la ciencia, acostumbrados á esperar para formularse una fe científica, el último figurín de la Soborna ó de la feria de Leipzig.

Pero supuesto que la acusación fuese verdadera, ¿había quizás, por lo dicho, razón para refutarme? ¿No es precisamente uno de los caracteres propios de la verdad, el ser eterna, el de reaparecer más viva cuando parece que va á caer ahogada por los oropeles de la moda, las trabas de la retórica y los estériles esfuerzos de los grandes ingenios equivocados? ¿Quizá las teorías del movimiento molecular, de la eternidad de la materia, no están todavía frescas y vivas, aunque nacidas en los tiempos de Pitágoras?

1 Véase "El delito en la conciencia popular." *Archivio de psichiatria*, III, pág. 451. V. también mi *Pazzi ed Anomali*, pág. 29.

Otro punto hay que me parece también escaso de fundamento: el de que me ocupo poco de la psicología del delincuente; cuando todo mi libro no es otra cosa que un tratado de psicología criminal, fundada en el examen de los hechos. Psicología es el estudio de las pasiones, de los escritos, de la jerga, de la religión, de la moral, de la educación, de las enfermedades mentales, de las influencias históricas, meteorológicas, hereditarias y alimenticias sobre el delito; y la parte anatómica, en que los críticos se fijan, no puede, aunque sólo sirva de fondo para el cuadro, considerarse como un simple apéndice de la psicología; puesto que ésta tiene necesidad del fundamento anatómico si no ha de alejarse hacia las nubes y desaparecer.

7. A estas importantes objeciones, presentadas por severos hombres de ciencia, otros, muy inferiores á ellos en doctrina y en decoro, añaden la que, por ser anónima, indeterminada, impalpable y menos digna de discusión, es más perjudicial que todas: la que llamo yo de la leyenda.

La leyenda pretende que con estos estudios se quiere echar abajo el Código penal, poner en libertad á todos los malvados y destruir la libertad humana.

Pero ¿quién no ve que si nosotros disminuimos la libertad individual, la sustituimos con la social, que es mucho más exigente y severa; que si disminuimos la responsabilidad de un grupo de delincuentes, no es porque que queramos mitigar su situación, sino para hacer más duradera la detención que hoy sufre, y que la sociedad, en homenaje á sus principios teóricos, interrumpe, con perjuicio total para sí misma, adoptando con mucha más incertidumbre, irregularidad é injusticia, una semicontinuidad de la pena, en forma de advertencia, vigilancia, domicilio obligado, etc., etc.; medidas poco eficaces é incompletas, pero con las que imagina, entre tanto, obtener la seguridad que las leyes no le proporcionan?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Faltará, es cierto, con las nuevas medidas, la infamia de la pena; pero tampoco nuestros jurisconsultos la creen necesaria, reputándola, por el contrario, una transformación atavística, una restauración de la vieja venganza, que cada día va desapareciendo más. Y ¿quién puede sustraerse á las ventajas de su desaparición sólo para justificar un sentimiento tan odioso? El que no comprenda que es un evangelio de nuestros tiempos la máxima: *tutto conoscere é tutto perdonare*.

En cuanto á la ejemplaridad, aparte de que subsistiría, porque una detención perpetua quiere decir algo muy doloroso, ¿quién cree que se reduce á esto el objeto principal de la pena?

Es ciertísimo que, reconocida la identidad del loco moral con el delincuente nato, reconocida la existencia de la perturbación mental de los *matoidi* y la de ciertas monomanías y manías sistematizadas; en estrecho rigor de palabras, para quien hace del libre arbitrio el fundamento de la penalidad, el perito podría paralizar la justicia, mostrando un enfermo donde para los demás hubiera un delincuente.

Pero esto ¿qué importa? ¿Hemos nosotros de falsificar ó negar la verdad porque la ley, no admitiéndola, se coloque en un terreno falso, estudiando el delito sin estudiar el delincuente? ¿No será más justo, entre ambos términos, exigir el de que las leyes se acomoden á los hechos y no que los hechos se falsifiquen para acomodarse á las leyes, sólo por no turbar la serena tranquilidad de aquellos á quienes desagrada ocuparse de este nuevo elemento traído al campo de los estudios?

Menos mal si las medidas adoptadas hasta ahora, aun en sentido contrario á nuestras conclusiones, condujesen siquiera á la seguridad social, que es el punto supremo á que miramos todos. Pero ¿quién ignora que los más serios é inteligentes penalistas prácticos convienen en que la obra de la justicia es una especie de labor de Sísifo, una inmensa fatiga con poco ó ningún resultado; y que los pretendidos adminículos sugeridos por las escuelas penales más modernas, como la libertad provisional, el jurado, la libertad condicionada, en vez de disminuir el delito le aumentan, ó cuando mucho le transforman?

¿Qué pensar, además, de aquellas otras medidas que, consideradas como la última palabra de la ciencia, son, por el contrario, la mejor demostración de su falta de sentido práctico, como la moderación de la pena á los reincidentes, la impunidad de la tentativa y la extensión del jurado á las penas correccionales?

¿Puede decirse otro tanto de las conclusiones prácticas de nuestra ciencia?

¿Puede decirse que sean igualmente peligrosas y absurdas las proposiciones de manicomios criminales, de cárceles de incorregibles y de multa ó pena corporal en sustitución á las primeras detenciones; las de leyes sobre el divorcio, sobre el trabajo de los niños y sobre el alcohol, para prevenir los adulterios, los estupros y las lesiones; y la obligación impuesta al reo de resarcir los daños causados en relación con sus propias fuerzas y riqueza?

Y ¿quién niega que en los procesos por pederastía, por envenenamiento, por asesinato, donde tan escasas suelen ser las pruebas, la introducción de los criterios antropológicos puede obtener mucho más partido que una incertísima nota anatómica ó una de aquellas reacciones químicas que todos los años se van renovando y demoliendo?

¿Qué decir, además, de aquellos casos en que el tatuaje por su propia obscenidad ó por la parte en que es practicado, designa claramente el delito, como nos ha demostrado Lacassagne?

Recordemos que el distinguido profesor Filippi halló en un pederasta la siguiente inscripción de tatuaje: "Pascual, tú eres mi único tesoro;" lo cual le proporcionó un indicio más seguro de sus costumbres depravadas que todas las alteraciones anatómicas.

Recuérdese la obscuridad del proceso Zerbini; pues bien, un antropólogo criminal hubiera podido ofrecer, como intentaba Ceneri, con el estudio del histerismo, de la degeneración

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hereditaria, de la fisonomía y de la apatía extraña de la acusada, un dato mucho más seguro que el de las declaraciones contradictorias; hubiera quizá hecho hablar al mudo cadáver de Coltelli, vengádolo quizá; y ahorrado sin duda las lágrimas de dos inocentes y el obsceno espectáculo de un pueblo entero riendo el triunfo del vicio.[1]

Añádase que, á haberse estado al dictamen de la nueva escuela, la Zerbini, que tenía los caracteres del criminal nato y de la histérica, y que había cometido delitos de joven, hubiese sido reducida en un manicomio y no hubiera podido hacer en adelante daño á nadie.

Quizá algunos no sepan que, por medio de la antropometría, fué como Bertillon proporcionó á Francia el modo de comprobar y completar su álbum criminal, para hacer imposible la falsificación de la identidad, que tan común era en los reincidentes.

Del mismo modo es improcedente la acusación que se nos ha dirigido, aquí y allá, de proteger á los malos en las prácticas médico-legales.

¡Que se citen, respondo con la frente levantada, los casos en que cualquiera de nosotros haya llevado perturbación á la justicia!

Hasta ahora, con una abnegación que no ha sido aún apreciada en cuanto vale, los sostenedores de la nueva escuela, al menos los médicos peritos, no han prestado sus servicios más que en pro de la justicia punitiva, absteniéndose hasta de intervenir en todo caso en que la verdad podía ser dañosa socialmente.

Cuando aún era incompleta nuestra teoría, cuando creíamos que todos los delincuentes natos eran anómalos y no locos morales, ya, al sostener aquellas conclusiones, declarábamos que nuestro primer pensamiento era la seguridad social, y que si la sociedad quería condenarlos como susceptibles de

1 V. Ceneri, *Defensa de Angel Paliotti*. Bolonia, 1884.—V. mi estudio sobre Pel y Zerbini en el *Archivio de psichiatria* (vol. VI, 2).

castigo, debíamos bajar la cabeza, y favorecer más bien que contrariar su reclusión.

Después hemos siempre sostenido, contra los sentimentalistas teóricos, la agravación de la pena, la perpetuidad de la reclusión en los reincidentes, y hasta la pena de muerte, contra la que se hace tanto derroche inútil de tinta y de lágrimas femeniles.

Podrán citarse casos en que los secuaces de nuestra escuela han demostrado y comprobado la criminalidad dudosa de un culpable, pero ni uno solo en que hayamos favorecido la absolución, á pesar de que esto nos hubiera conquistado simpatías y provecho dentro de la casta que domina ahora, y casi casi, infesta nuestro país.

Si hemos sostenido la irresponsabilidad de Passanante, de Guitteau, de Faella, de Verzene, de Fusil, ha sido cuando la muerte ó la condena les había ya alcanzado, exagerando el escrúpulo hasta llegar á la injusticia. ¿Pueden decir otro tanto los que nos acusan?

Si esta reserva nuestra, útil y laudable sin duda, pero al fin disimuladora de la verdad, siguiese siendo no sólo inadvertida, sino mal interpretada, y falta de eficacia sobre la opinión pública, acabaremos por romperla, con la satisfacción de que entonces las absoluciones escandalosas de hoy, peligrosas aunque justísimas dentro del rigor del Código, acabarían, como en Inglaterra y en América, por conseguir ó apresurar el establecimiento de los manicomios criminales y de las cárceles de incorregibles, que tanto tiempo hace que pedimos, con tan claras y numerosas pruebas.

Quien insinúa que nosotros favorecemos estas teorías por adquirir más fácilmente aplausos, da á conocer que ignora que las plebes, académicas ó callejeras, fueron y son los más acerbos y afortunados enemigos de toda innovación, y que éstas no triunfan nunca, si triunfan, hasta que han pasado sobre los despojos de su creador; da á entender también que ignora habérsenos hecho blanco de las más violentas diatribas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y de las fáciles burlas de los pisaverdes del día, acostumbrados á no acariciar más novedades que aquellas que, por ser poco consistentes y estar de moda, no exigiendo gran fatiga ni estudio para ser adoptadas, consiguen fácilmente la simpatía de los más.

¡Ah! quien afirma esto demuestra conocer bien poco nuestro país, incapaz de comprender toda nueva dirección, todo nuevo ideal. Salir de la corriente vulgar, lo mismo en las letras que en las ciencias, no sólo niega renombre á quien carece de él, sino que lo quita á quien lo había ya conquistado. Discurrid huecas declamaciones sobre los horrores de la pena de muerte y sobre la soberana bondad de la institución del jurado, bizantinizad sobre la definición del gran descubrimiento italiano de la retribución del delito con la pena, ó de la reintegración del orden jurídico, *et similia*, y conseguiréis, para los académicos corrientes, bastante más fama que con diez años de estudios penosos acerca de los delincuentes, por los que se reduzca á pobres fábulas lo que la escuela jurídica proclamó como maravillosos hallazgos.

Todavía es más extraño que tales adversarios se proclamen defensores de la libertad, porque lo son del libre arbitrio, jugando ante los ignorantes con la igualdad de sonido de ambas palabras; al modo que los jesuitas, que son los mismos, para defender su introducción en las escuelas valíanse, con perjuicio de la enseñanza, de la frase *libertad de enseñar*. No tengo más que responderles, sino que se guarden de los de su alrededor, y nieguen que la teoría del libre arbitrio sea la predilecta de la iglesia ortodoxa y de los enemigos del libre pensamiento. ¡Oh! ¡nieguen si pueden que sus secuaces se hallan mucho menos entre las víctimas que entre los cómplices del despotismo!

Repito, en conclusión, á los críticos: Indudablemente, ni yo ni mis compañeros de lucha nos creemos libres de error; antes bien, podremos estar del todo en él. Pero manifestadnos los errores examinándonos, demostrándonos, no proclamándonos inventores de conclusiones y teorías que jamás fueron las nuestras. Sobre todo, así como nosotros trabajamos con los hechos y sobre los hechos, combatidnos también con hechos, no con hipótesis ni con insinuaciones, por melífluas que sean. Como yo cedí ante las sabias críticas de Ferri, Bodio y Maury, y como Ferri cedió ante las de Garofalo y Puglia, así todos nosotros rendiremos las armas, humildes y sumisos, ante el triunfo de la verdad, como seguiremos firmes é indómitos ante el de la intriga y el de la calumnia.

CESAR LOMBROSO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EL AGUA EN SUS RELACIONES CON EL DERECHO INTERNACIONAL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL. *

VI

PROPIEDAD, USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

La propiedad del suelo implica la del subsuelo, según nuestro derecho civil.—Consecuencias, por lo que se refiere á las aguas subterráneas obtenidas por excavaciones ó tajos.—Jurisprudencia extranjera.—Necesidad de algunas reformas á nuestro Código Civil sobre esta materia.

Las aguas subterráneas, sobre las cuales no hay derecho adquirido por la apropiación y trabajo del hombre, se consideran del dominio de la colectividad social, para que los poderes constituidos de la Unión, con las leyes que dictaren, y el Gobierno del Estado, en virtud de las atribuciones que aquellas le confieren, faciliten su descubrimiento y adquisición, protegiendo luego su explotación y aplicaciones, para el aumento de la riqueza particular y pública. Nuestro Código Civil, en los arts. 731, 962 y 969,[1] establece:

"El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella. Por lo mismo, podrá usarlo y ha-

* Véase pág. 108.

1 Arts. 829, 1,063 y 1,702, Cód. Civ. de 1870 y adoptados por la mayoría de los Códigos de los Estados de la Federación.

cer en él todas las obras, plantaciones ó excavaciones que quiera, salvas las restricciones establecidas en el título de servidumbres, y con sujeción á lo dispuesto en la legislación especial de minas y en los reglamentos de policía."

"El dueño del predio en que hay una fuente natural, ó que ha hecho construir un pozo brotante, aljibe ó presa para detener las aguas pluviales de su propio fundo, puede usar y disponer de su agua libremente."

"Si alguno hiciere pozo en su propiedad, aunque por esto disminuya el agua del abierto en fundo ajeno, no está obligado á indemnizar."

La nueva ley de Minería, de fecha 4 de Junio de 1892, en su art. 9º, dice:

"Las aguas que se extraigan hasta la superficie en virtud de los trabajos subterráneos de las minas, pertenecen á los dueños de éstas, y deberán observarse las prescripciones de las leyes comunes en cuanto á los derechos de los propietarios de los terrenos por donde se dé curso á las mismas aguas."

De estas disposiciones se desprende que el propietario de un fundo tiene dominio sobre el subsuelo y todo lo que se encuentra bajo la superficie de su heredad, con facultad de hacer excavaciones hasta el centro de la tierra, siguiendo la vertical de sus linderos y de aprovechar cuanto logre descubrir.

Este derecho al subsuelo ha sido reconocido, tanto por el Derecho Romano, como por la Antigua Legislación Española, orígenes de nuestra actual Legislación, y en lo referente á las aguas subterráneas es más amplio en la legislación moderna.

Según las leyes 24, § 12, tít. 2, 1ª, § 12 y 21, tít. 3, libro 39 del Digesto, la legislación romana reconocía al propietario la facultad de hacer todas las excavaciones que estimara convenientes para descubrir las aguas subterráneas; no habiendo recurso alguno para ejercitar contra el propietario que para guardar su campo, procura apartar las aguas de un río ó barranco que tenga cerca, *ni contra el que, cavando en su heredad da lugar á que se disminuya el agua de la fuente del vecino;* pe-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ro era responsable si ejercía ese derecho, sin ninguna utilidad y necesidad, y los tribunales podrían impedírselo si los propietarios vecinos quedaban privados de las aguas que les eran útiles.

El preclaro jurisconsulto D. Juan Antonio de la Fuente, en un alegato sobre aguas subterráneas, de fecha 3 de Junio de 1848, presentado ante el juzgado de Parras de la Fuente (Coahuila), publicado en el tomo III, pág. 413 y siguientes, "Variedades de Legislación y Jurisprudencia," año 1851, hace el siguiente estudio comparativo de las disposiciones romanas y de la antigua legislación española, acerca de las aguas.

"Gregorio López, que es á todas luces el más erudito, exacto y concienzudo confrontador del Derecho Romano con las leyes de Partida, al aplicar esa alusión de la ley 19, tít. 32, Part. 3ª, señala como primer objeto de ella [1] la referida ley 1ª, párr. 12. *Denique Marcelus de aqua pluv. arcend.;* y efectivamente, ella contiene la misma franquicia para hacer excavaciones, la misma taxativa en los casos de dolo. Pero esta ley no trata únicamente de los pozos en las casas, sino en general de las excavaciones practicadas en la tierra por las que se atraiga el manantial del vecino. *(Qui in suo fodiens vecini fontem avertit).* Ni se limita á los usos caseros; antes bien, expresamente habla de la agricultura y del campo *(agrum meliorem faciendi).*

"He aquí, pues, conocido el objeto que tuvo á la vista el legislador, y así, necesario es ampliar el contesto de la ley.

Resta examinar si hay identidad de razón para la franquicia de abrir pozos en las casas y para hacer las demás excavaciones en los otros fundos. Sepamos antes cuál es la razón de la ley de Partida que nos ocupa; y con el fin de que nuestra investigación sea extensa y profunda, la cotejaremos con las leyes romanas á que se conformó y á que hizo referencia al acabar: con esas leyes que por tal conformidad y alusión deben

1 Glosa 3.

reputarse con vigor como la genuina expresión de la ley de Partida, y como el conjunto de sus detalles, rebosando todas en el mismo espíritu, en el mismo sentido y en las mismas resoluciones y motivos que la ley Alfonsina, y por lo tanto, con título auténtico para ser acogidas.[1] Es Gregorio López quien las señala,[2] y vamos á ver con cuánta verdad y acierto.

"Primer extremo. Libertad reconocida para abrir excavaciones. Repulsa de acción jurídica en contrario. Leyes romanas: primera, *Denique Marcelus* citada. Marcelo decide que ninguna acción existe[3] contra el que excarvando en su tierra desvía y atrae el manantial de su vecino. Segunda, ley 21, *si in meo* ff. *De aqua pluv. arc.* Si brota en mi fundo agua que tenga venas en el tuyo, y tú cortas esas venas, resultando de ello que me deje de venir el agua, no debe imputársete á violencia ni estás sometido al interdicto *quod vi aut clam.*[4] Tercera, ley *fluminum* 24 párr. final ff. *De damno infecto.* Si abro un pozo en mi casa (*si in domo puteum aperio*) de que resultan cortados los veneros del tuyo (*quo aperto venæ puteæ tui præcisæ sunt*) ¿estoy obligado á alguna cosa? (*¿an tenear?*) Trebacio responde que no estoy obligado por la acción de *damno infecto* (*non teneri me damno infecto*). Cuarta, L. Proculus 26 eod. Si en tu campo contiguo al mío abres minas ó excavaciones que se atraigan el agua del mío; aunque me la hagas perder, ninguna acción me compete, ni aun precedida estipulación de no dañarme" (*si in vicino tuo agro cunicula vel fossa, aquam meam avoces; quambis enim aquam mihi abducas tamen ex ea stipulatione* (la de no dañar) *actionem mihi non competere*).[5]

1 Auto 1, tít. 1, lib. 2. Recop. castill., y ley 5, tít. 6, lib. 1. Fuero Real.

2 Glosa 1 y 3.

3 Nihil posse agi. Es decir, ni diminución, pues que esta es una de las acciones en calidad de interdicto. Gotho-fred. Series Dig. lib. 8.—Feb. Mex. tom. 4, pág. 25, núm. 1.

4 Si in meo aqua crumpat quæ ex tuo fundo venas habeat, si eas venas incideris et ob id desierit ad mea aqua perveniri, tu non videris vi fecis nec interticto quod vi aut clam teneris.

5 N. B.—"Quotiens nec hominum nec prædiorum servitutes sunt; quia nihil vicinorum interest, non valet: veluti, *ne per fundum tuum eas, aut ibi consistas:* et ideo, si mihi concedas, *jus tibi non esse fundo tuo uti frui*, nihil agitur: aliter atque si concedas mihi, JUS TIBI NON ESSE IN FUNDO TUO AQUAM QUÆRERE. minuendæ aquæ meæ gratia. § 1. Servitutum

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

En este primer extremo la ley de Partida establece: "que fuente ó pozo de agua, habiendo un home en su casa, si algún su vecino quiere facer otro en la suya para haber agua é para aprovecharse de él, non gelo puede el otro deuedar (denunciar, como se ha explicado) como quiera que menguase por ende el agua de la fuente ó del su pozo." La libertad, pues, idéntica por el derecho romano y de las partidas.

"Segundo extremo. Caso de excepción en las excavaciones practicadas de mala fe. Leyes romanas.—La única que habla de esta circunstancia en las excavaciones, es la citada *Denique Marcelus*, la cual después de negar toda acción contra ellas (*nihil posse agi*), prosigue así: ni la acción de dolo, la que no debe deducir si el otro hizo esto no con ánimo de dañar al vecino, sino con el de mejorar el campo suyo (*nec de dolo actionem, ec sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit*).

"Y ahora, ¿cuál es la razón de la ley de Partida? Para establecer la restricción de dolo, ella misma la expresa: "Ca dijeron los sabios, que á las maldades de los hombres non las deben las leyes ni non los reyes sofrir nin dar pasada, antes deben siempre ir contra ellas." [1] La ley romana últimamente citada, y á la cual se ajustó la de Partida para establecer semejante restricción, no da la razón de ella; pero es evidente y conocido de todos el principio enunciado más arriba, según el cual nadie puede medrar con su malicia.

"Mas por otra parte: ¿cuál es la razón de la ley en su primer extremo, es decir, para otorgar en las excavaciones tan amplia libertad, que únicamente ante el dolo queda sujeta y reprimida? Cuando se investiga la razón de una ley, antes de echarse

non ea natura est, ut aliquid faciat quis (veluti viridia tollat, aut amæniorem prospectum præstet, aut in hoc, ut in suo pignat): sed ut aliquid patiatur, aut non faciat.

Ley 15. *Si nihil vicini intersit* § I, *de natura servitutum*, tit. I, lib. VIII, Dig. de Servitutibus.

El pacto de servidumbre de no buscar agua, para evitar la diminución de las aguas vecinas, como lo indicó la ley citada, es válido.—*(Nota del Autor)*.

1 Véase Escriche, artículo denuncia de obra nueva.

á bregar en un abismo de conjeturas, sin más guía que la muy infiel de nuestro interés particular, oigamos al legislador mismo los motivos de sus dictados y decisiones. Es verdad que la ley de Partida no expende la razón de esa franquicia concedida para buscar las aguas escondidas bajo la tierra; pero sí la hallamos en la ley *Fluminum* 24, párr. in fine ff. De *damno infecto*, que como la Alfonsina, habla de los pozos practicados con mengua de las aguas del vecino, más arriba copié esta ley, que concede la misma libertad que la ley de D. Alfonso para abrir estos pozos; é inmediatamente después de concluir la disposición que he transcrito, da la razón diciendo: "Porque no ha de atribuirse á vicio de mi obra un daño en aquello en que usé de mi derecho." (*Neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari in ea re in qua jure ussus sum*).... Sabemos, pues, la razón de la ley de Partida, restringiendo su texto únicamente á los pozos abiertos en las casas.

Veamos ahora la auténtica, explícita, indudable razón del derecho, para practicar excavaciones en los fundos ó campos hablando generalmente y sin distinción.

"La ley *Proculus*, también citada como otra de las confirmatorias de la ley Alfonsina, contiene la libertad que se ha visto para este género de obras. Pues bien, esta ley se introduce así: Próculo dice, que cuando alguno con derecho, hace cualquiera obra en lo suyo, aunque hubiese estipulado no dañar al vecino, sin embargo, no quedaría obligado por esa estipulación, como si usando de tu derecho levantes más altos los edificios contiguos á los míos, ó si en tu campo contiguo al mío abres mina ó excavación que se atraigan el agua del mío aunque me la hagas perder, etc.

Aquí tenemos, pues, no por argumentos ni inducciones, sino por la sencilla expresión de las leyes, cómo la razón de la dictada por D. Alfonso el Sabio, es la misma exactamente que la fundamental de las leyes sobre excavaciones en cualquiera fundos y para usos de agricultura. Luego es evidente que lo dispuesto literalmente por la ley de Partida, en orden á los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pozos de las casas, debe hacerse extensivo á esas otras excavaciones; porque donde hay la misma razón debe haber la misma disposición de derecho;[1] luego en uno y otro caso usamos del que nos compete y está mandado respetar por las leyes; luego en uno y otro caso debe tener efecto esta terminante prohibición de denuncia, non gelo pueden deuedar, de la ley de Partida; luego la denuncia es nula y no puede producir efecto alguno. *Quod nullum est, nullum producit efectum.*"[2]

La legislación española establece, en cuanto á las aguas de fundo: "Que el dueño de un predio lo es también de las aguas que dentro de él nacen, y puede disponer de ellas según mejor le convenga, salvo el derecho que otro hubiere adquirido á disfrutarlas por algún título ó por prescripción, conforme á las leyes 1ª, lib. XVIII, y 14 y 15, lib. XXXI, Part. 3ª

Sin embargo, si no justifica la prescripción inmemorial, no son aplicables las leyes 5ª, 12 y 15 de dicho libro XXXI, ni la Real orden de 5 de Abril de 1834, sobre la prescriptibilidad de las aguas corrientes y el uso de ellas, ni la doctrina de que, en materia de prescripción, debe respetarse el estado posesorio, especialmente cuando descansa en dicha posesión inmemorial (Sentencia de 3 de Abril de 1868).

Para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, están establecidas reglas sencillas, pero todas en el mismo sentido ya indicado, de que no se dañe á los intereses de tercero. Así, la ley 19, lib. XXXII, Part. 3ª, que lleva por epígrafe: "*Como puede ome fazer de nuevo pozo ó fuente en su heredad,*" si bien concede á todo dueño este derecho para sacar y aprovechar aguas en su propia finca, es siempre con las justas y prudentes limitaciones que determina, entre ellas, las de "*non destajar ó menguar las venas por do viene el agua ó pozo ó fuente de otro, ca entonce (segun explica la mesma ley) bien le podrian vedar*

1 Regla 36, tít. 34, Part. 7; Ley 13, cap. 6, tít. 24, lib. 8, Recop. ó 7, cap. 6, tít. 40, lib. Novis; Ley 12 ff. de Legib; ley 77, párr. 26 de Legat. 2, Feb. Mex. tomo I, pág. 16, núm. 21, regla 6ª

2 Cap. 52, de Reg. jur., núm. 6.

que lo non fiziese, è si lo oviese fecho, podrian gelo fazer derribar é cerrar." (Sent. de 24 de Septiembre y 7 de Noviembre de 1866). Y no solamente tiene esta limitación el principio de que cada uno puede abrir pozo ó fuente en su finca, pues tampoco puede prescindirse de las reglas necesarias para evitar todo daño; ni se deben admitir con el pretexto de abrir pozos, otras construcciones de distinta índole que aquellas cuyo exclusivo aprovechamiento sea las aguas del terreno propio y no tienden á atraer las propias del ajeno.[1] (S. 7 Nov. 1866).

Nuestra legislación moderna, inspirándose en los principios jurídicos de la época, se apartó de la ley romana y de las Partidas, y avanzó más en el reconocimiento de las prerrogativas que el propietario de la superficie tiene sobre las aguas subterráneas.

El Estado de Veracruz, que fué el primero del país en darse una codificación propia, adaptada á los adelantos de nuestro siglo, redactó el art. 785 de su Código Civil en estos términos:

"Si alguno hiciere pozo en su propiedad, aunque por esto disminuya el agua del abierto en fundo ajeno, no es responsable de indemnización."

El art. 1,072 del Código Civil de 1870, ordenó el mismo principio, y de allí fué adoptado por la mayoría de los Códigos de los Estados de la Federación, y hoy lo tenemos expresamente consignado en el art. 969 del Código Civil del Distrito Federal y Territorios.

La ley vigente hizo á un lado las restricciones de la ley antigua y amplió el derecho del propietario ilimitadamente para descubrir y aprovechar las aguas subterráneas que corren por debajo de su predio, sin otra limitación que las limitaciones especiales sobre minas y las que establecen los bandos de policía por causa de interés público.

Esta reforma de nuestros códigos, obedece á la tendencia que se observa en todas las legislaciones modernas de reco-

1 Zúñiga. Jurisp. Civil, pág. 204.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nocer las franquicias y libertad de la propiedad individual, en su lucha constante contra el Estado.

Con efecto, el Código Francés sanciona iguales principios en su artículo 552, acerca del cual *Demolombe* se expresa en estos términos: "La propiedad del suelo importa la de la superficie y la del subsuelo." "Aquel que tiene la propiedad de un fundo, tiene por esto mismo la del agua que encierra y que es una parte integrante de él, así como la tierra y la arena y las piedras que constituyen el suelo, *portio agri videtur aqua viva.*"

El mismo autor agrega en el número 15, tomo XI, página 71: "La segunda consecuencia del principio que acabamos de establecer, es que el propietario del subsuelo tiene el derecho de hacer en su casa ó en su fundo todas las excavaciones que juzgue convenientes, á fin de descubrir las aguas subterráneas que ahí se encuentren, y que por consiguiente, no es de ninguna manera responsable hacia los propietarios de los fundos vecinos, si el resultado de estos trabajos es cortar los veneros que conducían el agua á sus fundos y que alimentaban sus manantiales, sus pozos, sus cisternas."

G. Baudry-Lacantinerie[1] en sus comentarios al Código Civil Francés, sostiene los mismos principios. Los términos del artículo 552 al 1. "La propiedad del suelo importa la propie-"dad de la superficie y del subsuelo; *cujus est solum, hujus est* "*usque ad cœlum et usque ad inferos*, decían los antiguos. Este "es el hilo á plomo, que determina los límites del dominio "aéreo y del dominio subterráneo del propietario de un fundo "de tierra."

"Del principio que la propiedad del suelo implica la propie-"dad del subsuelo *(du trefonds)* propiedad de lo que está de-"bajo de una heredad, como antes se decía, arts. 552 al 3, se "deduce esta consecuencia: que el propietario puede hacer en "el subsuelo todas las construcciones y excavaciones que juz-

1 Precis de Droit Civil. Tomo I, núm. 1,281, pág. 777, 4ª edición. 1891.

"gue convenientes, y sacar de estas excavaciones todos los pro-"ductos que pueda adquirir, salvo las modificaciones que resul-"tan de las leyes y reglamentos relativos á las mismas, y de "las leyes y reglamentos de policía."

Adrien Dumont, en su preciosa monografía de *L'organization Legale des cours d'eau*, pág. 220, núm. 138, sostiene la misma teoría. "La propiedad del suelo, dice, implica la propiedad de la superficie y del subsuelo (artículo 552 Cód. Civ.), esto por la aplicación del principio que el propietario de un fundo está autorizado para hacer todas las excavaciones y todos los trabajos que crea convenientes, aun cuando esto tenga por resultado cortar las venas de las aguas subterráneas, que alimentan una fuente ó manantial que aprovecha el propietario inferior;" fundado en varias sentencias de la corte de casación francesa.[1]

Picard, en su *Traité des eaux*, año 1892, tom. 1º, pág. 74, hace este comentario al art. 552 del Código Francés.

"Siendo el dueño de fundo propietario á la vez de los veneros de aguas subterráneas, puede interceptarlas por excavaciones practicadas ya para buscarlas, ya para atraerlas, ya para transformar el suelo, afirmándolo, desecándolo y sentando cualesquiera construcciones."

"Esta facultad natural, añade, está consagrada por el último párrafo del art. 552 del Cód. Civ. (lo copia). El propietario tiene siempre esa facultad, aun cuando las excavaciones diesen por resultado algún perjuicio al fundo vecino, cual es secar ó agotar sus manantiales."[2]

El Código Civil Español vigente, de fecha 6 de Octubre de 1888, en su art. 350, dice: "El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y pue-

1 Sentencias de la Corte de Casación, 29 Nov. 1830.—S. V. 31, 1, 10; 15 Enero 1835, 35, 1-957; 26 Julio 1836; 36, 1,819.—*Sic.* M. M. Pardessus, núm. 78.—Toullier, tom. III, núm. 328.—Duraton, t, 5, núm. 156.—Destrais, 2, § 5, pág. 7.

2 S. 19 Julio 1837. 4 Diciembre 1849. 28 Mayo 1773. Req., 21 Abril 1872. Req., 14 Febrero 1882.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de hacer en él las obras, plantaciones ó excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres y con sujeción á lo dispuesto en las leyes sobre minas y aguas, y en los reglamentos de policía."

Falcón, en sus comentarios á dicho Código, observa que este principio conviene substancialmente con el art. 394 del proyecto de 1851, y literalmente con el 252 del de 1882.

Concuerda, además, con el art. 552 del *Código Francés*, el 626 del *Holandés*, el 352 del de *Vaud (Suiza)*, el 497 de la *Luisiana*, el 440 del *Italiano*, el 465 del *Portugués* y el 829 del de México, Código de 70. Hoy art. 731, Código de 84."[1]

Idénticas opiniones encontramos en *Laurent*, tomo VIII, pág. 219, § 186, *Aubry et Rau*, tomo III, pág. 34, en nota IV, *Braun Hegener et Ver Hees*, art. 354 Código Alemán, pág. 81, año de 1893, *Mourlon*, Der. civ., t. I, núm. 1,457, pág. 746.

Por último, *Blackston*, en su obra titulada: *Commentaries on the law of England*. Book II, chapt. 18, con la concisión y lucidez que le son peculiares, expone la ley que en Inglaterra rige esta materia, en los siguientes términos: "It is observable that water is here mentioned as a species of land." "Hay que observar que aquí el agua se considera como una parte integrante de la tierra." En los Estados Unidos del Norte, la ley no escrita, *the common law*, establece una jurisprudencia igual á la inglesa. *(Kent's Commentaries VI)*.

El Sr. Lic. Arroyo de Anda, en su brillante alegato sobre aguas subterráneas, presentado el año de 1892, ante la 2ª Sala del Tribunal Superior de Coahuila, observa: "que esta fa-"cultad absoluta que tiene el dueño de la superficie para apro-"vechar las aguas del subsuelo, y que la legislación y la juris-"prudencia universal la reconocen, parece á primera vista una "paradoja, porque hoy evito con mi excavación los veneros "que alimentan el manantial vecino, y mañana con igual de-"recho otra excavación posterior secará el mío; pero estos in-

1 Der. Civ. Español. Tom. II, pág. 34.

"convenientes están en la naturaleza misma de las cosas y ten-"drán que ser generalmente irremediables, porque el derecho "á las aguas subterráneas no se puede distribuir ni limitar, si "no es ajustándose á la medida ó distribución de la tierra que "cubre sus corrientes. A estos veneros subterráneos es á los "que nos conviene aplicar lo que Blackston dice del agua en "general, que siendo una cosa movible y escurridiza, debe ne-"cesariamente continuar siendo común por la ley de la Natu-"raleza, de modo que la propiedad individual sobre ella no sea "sino temporal, transitoria, usufructuaria; pero la tierra que cu-"bre esta agua es permanente, fija é inmóvil, y por tanto, sus-"ceptible de una propiedad bien definida, por lo cual la ley "toma los límites de la tierra para fijar los derechos sobre el "agua.

"For water is movable wandering thing, and must of ne-"cessity continue common by the law of nature so that I can "only have a temporary, transient, usufructuary property the-"rein: therefore, if a body of water runs out of mi pond into "another man's I have no rigth to reclain it. But the land, "which that water covers, is permanent, fixed, and inmovable; "and therefore in this I may have a certain substancial pro-"perty; of which the law will take notice, and not of the "other."

De todo lo expuesto se deduce, que los artículos de nuestro Código Civil vigente, en materia de aguas subterráneas, están conformes de toda conformidad con los principios adoptados por las legislaciones Romana, Española, Italiana, Francesa, Inglesa, etc., y que la libertad de abrir excavaciones en fundos propios, ha sido reconocida y garantizada como justa, aunque por ellos resulten perjudicados los manantiales vecinos, sin más limitación que la mala fe en el antiguo derecho y en el moderno, siempre que no se perjudiquen las aguas ó manantiales de uso y aprovechamiento público, pero sin limitación ni responsabilidad alguna, cuando se perjudiquen aguas pertenecientes á particulares.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Por último, las leyes antiguas dictadas por el Gobierno de nuestro país en tiempo del Virreinato, no sólo reconocían á los propietarios y poseedores el amplio y exclusivo derecho sobre las tierras, sino que les recomendaban con vehemencia que descubriesen y aprovechasen todas las aguas subterráneas que pudieran emplearse en beneficio de la agricultura y en las operaciones de la industria, como lo confirman las siguientes: caps. 24 y 25 de la Ordenanza de 13 de Octubre de 1749, caps. 47 y 48 de la Instrucción de Corregidores de 15 de Mayo de 1788, Ley 16, tít. 25, lib. 7, Novísima, y Nota 10 *ib.* Cédula de 15 de Mayo de 1788.

Pero lo que más confirma la legalidad de este derecho á las excavaciones y patentiza claramente el concepto elevado que tienen nuestras leyes de estos trabajos, es la Ordenanza de Intendentes, ley sin disputa la mejor de las dictadas por el Gobierno de nuestro país, en tiempo de la dominación española.

He aquí el art. 63 de esta Ordenanza:

"Con igual atención y cuidado han de procurar los Intendentes–Corregidores, por cuantos medios sean posibles, que los hacendados y naturales de sus Provincias, *aprovechando las aguas corrientes y subterráneas*, para el riego y fertilidad de las tierras, aumenten la agricultura y siembras de granos, especialmente la de trigo, al auxilio de la exención de derechos Reales.... celando también con especial vigilancia la conservación de los montes y bosques, dedicándose sobre todo á proteger la industria, la minería y el comercio, como ramos que directamente contribuyen á la riqueza y felicidad de aquellos y estos mis dominios." (Real Ordenanza de 4 de Diciembre de 1786, pág. 75).

Las aguas subterráneas halladas por medio de tajos, socavones, perforaciones horizontales ó galerías, las hace suyas el primer ocupante ó sea descubridor, llenadas que hayan sido las condiciones que la ley establece para la adquisición. En nuestro derecho, basta ser propietario según el art. 731 del Código Civil.

En algunas legislaciones extranjeras en que la propiedad está mejor reglamentada, se exigen al propietario del fundo ciertas condiciones antes de emprender sus obras materiales de investigación. 1º Una solicitud para la investigación. 2º El plano de las labores proyectadas y registro de la pertenencia hidroscópica. 3º El pueblo de la pertenencia hidroscópica, y 4º La demarcación y obtención del título de propiedad, y aun conceden á un extraño, llamándose *investigador de aguas subterráneas*, el derecho de emprender obras en predios ajenos, con el fin de obtener aguas subterráneas, imponiendo la servidumbre de *calicata* ó perforación á la superficie por donde solamente es posible penetrar á las entrañas de la tierra: así como para la explotación de la tierra se establece la servidumbre de paso, previa la corresponpiente indemnización. [1]

Este permiso para abrir socavones ó pozos de investigación se concede en terrenos que no estuvieren dedicados al cultivo, ya pertenezcan al dominio público ó particular del Estado ó de los pueblos, ya sean de propiedad privada.

En terrenos ó fundos de propiedad particular, es necesaria la licencia del dueño, y en caso de negativa, tendrá el investigador ó registrador, la obligación de constituir previamente fianza para la indemnización de daños y perjuicios, según convenio ó tasación, y cuando la licencia fuere concedida ó suplida por el Gobernador, serán á satisfacción de éste las fianzas ó depósito para pagar las indemnizaciones. [2]

Nuestros legisladores, procurando condensar en un solo cuerpo de doctrina todo lo referente á la propiedad de cualquiera clase que sea, formaron el Código Civil, estableciendo las bases sólidas en que la propiedad descansa, exceptuando las minas, los montes, pastos y arboledas, arts. 771 y 772 del Código Civil, y la propiedad literaria, [3] como propiedades que debieran regirse por leyes especiales.

1 Real decreto de 19 de Noviembre de 1835.
2 Pereyra. Tratado especial de las servidumbres legales, págs. 60 y siguientes.
3 La propiedad minera se rige por la ley de 4 de Junio de 1892 y su reglamento de 25 de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Llámanos la atención por qué no exceptuaron también *las aguas*, siendo así que militan en su favor, las mismas razones que la comisión tuvo para hacer excepción acerca de las antedichas.

Todas las legislaciones extranjeras consideran sujetas á legislación especial, las minas, los bosques, la propiedad literaria y *las aguas* en general.

Para no ser demasiado prolijos en citas, nos referimos á la legislación española, que ha sido el origen de la nuestra y cuyas reformas modernas, en materia de aguas, obedecen á los principios sancionados por las legislaciones Lombarda, Italiana, Francesa, etc.

La ley especial sobre aguas, de España, expedida por la Reina Doña Isabel II, en 3 de Agosto de 1866, reformada en 13 de Junio de 1879, en su cap. VI *del dominio de las aguas subterráneas*, concreta en diez y ocho artículos sus disposiciones acerca de estas aguas, siendo los principales los siguientes:

"Art. 45. Pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad, las aguas subterráneas que en él hubiere obtenido por medio de pagos ordinarios, cualquiera que sea el aparato empleado para extraerlas.

"Art. 46. Todo propietario puede abrir libremente pozos y establecer artificios para elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con ello resultaren amenguadas las aguas de sus vecinos. Deberá, sin embargo, guardar la distancia de dos metros entre pozo y pozo, dentro de las poblaciones, y de quince metros en el campo, entre la nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequias permanentes de los vecinos.

"Art. 49. El dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse plenamente por medio de pozos artesianos y por socavones ó galerías, las aguas que existen debajo de la superficie de su finca, con tal que no distraiga ó aparte aguas públicas de su corriente natural.

Junio de 1892. Los montes, etc. ..... Reglamento de 19 de Septiembre de 1881. Y la propiedad literaria por el Tít. 8º, Lib. 2º del Código Civil, como reglamentario del art. 4º de la Constitución.

"Por regla general, cuando amenazase peligro inminente de que un pozo artesiano, ó un socavón ó galería, distraiga ó merme las aguas de una fuente ó de una corriente destinadas al abastecimiento de una población ó riegos existentes, se suspenderán las obras, siempre que fueren denunciadas por el Ayuntamiento ó por la mayoría de regantes.

"Si del reconocimiento por dos peritos nombrados por las partes, y tercero en discordia, según el derecho común, resultare existir el peligro inminente, no podrán continuarse las labores, sino que se declarará por el Gobierno anulada la concesión.

"Art. 51. Nadie podrá hacer calicatas en busca de aguas subterráneas en terrenos de propiedad particular, sin expresa licencia de sus dueños. Para hacerlas en terrenos del Estado ó del Común de algún pueblo, se necesita la autorización del Gobernador de la provincia.

"Sin embargo, cuando la negativa del dueño del terreno contrariase fundadas esperanzas de hallazgo de aguas, según criterio pericial, podrá el Gobernador, oídas las razones en que se funde la negativa, conceder el permiso, limitado á tierras incultas y del secano; siendo en las de regadío, jardines y parajes cercados, exclusiva de los dueños la concesión, sin recurso alguno contra su negativa."

En el art. 50 de la misma ley, se ordena que para las excavaciones debe guardarse una distancia mínima de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril ó carretera, ni á menos de 100 metros de otro alumbramiento ó fuente, canal, acequia ó abrevadero público, sin licencia correspondiente de los dueños, ó en su caso, de los Ayuntamientos, previa formación de expediente.

Tampoco podrán ejecutarse dichas labores dentro de una pertenencia minera, sin previa estipulación de resarcimiento de perjuicios.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"Art. 60. Los concesionarios de pertenencias mineras, socavones ó galerías generales de desagüe de minas, tienen la propiedad de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven la de sus minas respectivas.

"Art. 61. En la prolongación y conservación de minados antiguos en busca de aguas, continuarán guardándose las distancias que requieren para su construcción y explotación en cada localidad, respetándose siempre los derechos adquiridos.

"Art. 62. El Gobierno podrá hacer concesiones para la explotación y alumbramiento de aguas subterráneas en cuencas ó valles, formando éstos de extensión limitada por las vertientes ó divisorias, con la mira del abastecimiento de las poblaciones y grandes riegos ú otras aplicaciones útiles, siempre que á juicio de facultativos, no puedan perjudicar á *tercero.*"

En nuestra legislación no hemos encontrando otra ley especial, sobre aguas subterráneas, que la dada por el Lic. D. Juan Antonio de la Fuente en Coahuila, el 9 de Agosto de 1864.

Juan Antonio de la Fuente, gobernador y comandante militar del Estado libre y soberano de Coahhila de Zaragoza.

CONSIDERANDO:

1º Que la facultad de abrir pozos y zanjas y en general cualquiera excavaciones con el objeto de descubrir y aprovechar el agua subterránea en los usos de la agricultura y de la industria, es un derecho claramente derivado de la posesión de las tierras en que estas obras hayan de practicarse, y explícitamente garantizado por las leyes dictadas en esta razón;

2º Que esas leyes no solamente han autorizado aquellos trabajos, sino que también han recomendado á las autoridades políticas que empeñosamente los promuevan;

3º Que mientras en el Estado son pocos respectivamente y pertenecen á pocas personas los terrenos de regadío, abundan los secanos que no pueden beneficiarse á causa de la escasez de las lluvias, y de la rebaja ó agotamiento de los manantiales, muy especialmente en los últimos años, de que ha resultado una extremada carestía en los artículos de primera necesidad;

4º Que en gran parte se remediaría este mal, como nuestra propia experiencia lo está diciendo, con el restablecimiento claro del utilísimo derecho para buscar cada cual en sus tierras el agua oculta debajo de la superficie, derecho malamente desconocido á veces por actos dimanados de una jurisprudencia falsa y mezquina, en abierta oposición con las leyes, con los justos intereses de los hijos del Estado, con las necesidades de éste, y con el espíritu de todo el país;

5º Que al mismo objeto conspiraría una franquicia temporal en pro de los que se diesen á estos trabajos.

Por estas causas, y haciendo uso de las facultades con que me hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1º Se declara que por letra y espíritu de las leyes concernientes al descubrimiento y uso de las aguas subterráneas, no solamente son y han sido lícitas, sino también recomendables las obras nuevas de tajos y todo género de excavaciones practicadas en los fundos por los poseedores de ellos, para obtener aquel beneficio.

Art. 2º Se declara que estas obras no son ni han podido ser objeto de denuncia por alegarse el riesgo ó certeza de que causen diminución en las vertientes de los fundos vecinos ó distantes.

Art. 3º Esta declaración abraza los casos de denuncia ya formalizada, con tal que no esté decidida por sentencia que cause ejecutoria.

Art. 4º Los jueces están obligados á desechar de oficio las denuncias de estas obras, siempre que para estorbarlas se alegue la causa reprobada por el art. 2º de este decreto.

Asimismo están los jueces obligados á repeler de oficio la denuncia en que no se puntualice con toda claridad otra causa que sea bastante conforme á las leyes, para interrumpir el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

curso de estas obras, como sería el hacerse en tierra poseída por el reclamante, ó el perjudicarse por virtud de ellas alguna servidumbre que el mismo tuviese en la parte exterior de la parte del terreno excavado.

Art. 5º Durante dos años no pagarán derecho alguno, sin exceptuar el municipal, los frutos que se cosechen de campos regados con agua subterránea que por primera vez se descubriese.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.—Dado en el Saltillo, á 9 de Agosto de 1864.— *Juan Antonio de la Fuente.*— *Cipriano Robert*, Secretario.[1]

Ministerio de Justicia.—México, Abril 7 de 1865.—Habiendo dado cuenta á S. M. el Emperador con el ocurso de D. Francisco B. de la Peña, apoderado general de Dª Refugio Santos de Aguirre, en que solicita la derogación del decreto de 9 de Agosto del año próximo pasado, expedido por el Gobierno de Coahuila, facultando á los propietarios de fundos para abrir en ellos, siempre que no halla servidumbre que lo impida, pozos, zanjas, y practicar en general cualesquiera excavaciones con el fin de aprovecharse de la agua subterránea y fomentar con ella la agricultura; S. M., teniendo en consideración que el decreto de que se trata no es más que un resumen de la legislación común vigente entre nosotros desde la conquista, encontrándose consignada textualmente la resolución capital en la ley 19. tít. 32, partida 3ª; por lo cual ese decreto lejos de dar por sí mismo fuerza legislativa á las disposiciones que contiene no ha hecho más que uniformar la legislación ya exsitente; así como que su derogación podría interpretarse como que envolvía también la derogación de los principios del derecho común que contiene, y considerando,

1 Tomado del núm. 44 de *La Acción*, declarado periódico oficial en cuanto á la autenticidad de los documentos de aquella naturaleza, que en sus columnas fuesen publicados.

por último, que el artículo 5º del expresado decreto por el cual se declara que los propietarios de esos terrenos quedarán exentos por dos años del pago de todo derecho por razón de los frutos que cosechen, independientemente del origen que tenga, traería graves inconvenientes por la necesidad que habría de justificar en cada caso la procedencia de los frutos; se ha servido resolver: que no há lugar á la expresada solicitud de D. Francisco B. de la Peña, sobre derogación del decreto de 9 de Agosto de 1864, y que se declara insubsistente el art. 5º del mismo decreto.—Lo comunico á V. S. para su inteligencia y fines consiguientes, en contestación á su oficio de 16 de Enero último.—El Ministro de Justicia, (Firmado) *Escudero.*—Señor Prefecto político del Saltillo.—Es copia.—El Subsecretario de Justicia, (Firmado) *Francisco de P. Tavera.*[1]

* * *

Si bien es cierto que nuestro Código Civil, en los artículos ya citados y obedeciendo á las reglas de estricto derecho, ha consagrado la propiedad absoluta de las aguas subterráneas, al grado de que á ningún tercero le es lícito intentar exploraciones en terrenos particulares, con objeto de descubrir aguas subterráneas; la observación y la experiencia aconsejan de consuno, una reforma acerca de esta delicada materia, en virtud de los cuantiosos y múltiples litigios que con frecuencia se presentan en los tribunales, debido á la deficiencia de nuestra ley por su absoluta falta de reglamentación.

A la formación orográfica y geológica de nuestro país debemos que sus ríos sean muy pocos y que las aguas pluviales ó sean muy escasas ó cuando abundan nos sea difícil su aprovechamiento, en virtud á que estas aguas se precipitan en forma de torrentes yendo á morir á nuestros mares; pero la ciencia geológica demuestra también que la formación especial, en muchos puntos de nuestro suelo, contiene innumera-

1 Tomado del Diario del llamado Imperio, núm. 86 de 15 de Abril de 1865.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

bles cuencas que encierran en sus senos gran cantidad de aguas subterráneas que la industria y la agricultura han empezado á disputarse.

La experiencia de tres siglos, con la irresistible autoridad de los hechos, cada día nos demuestra que en la agricultura y en la industria debemos buscar nuestras principales fuentes de riqueza; los capitales han empezado á desertar de la minería buscando en estas dos ramas importantes de la producción, su aplicación más ventajosa.

El criterio individual agrupándose, para el desarrollo de la industria y de la agricultura, necesitan bases ciertas, justas y bien definidas por nuestras leyes, para emprender obras, en busca y aprovechamiento de aguas subterráneas.

Las legislaciones extranjeras, obedeciendo á consideraciones económicas, han reformado su legislación de aguas subterráneas, exigiendo algunos requisitos á los propietarios antes de emprender sus obras, como una solicitud para la investigación ante la autoridad administrativa; el plano de las labores proyectadas, el pueblo de la pertenencia hidroscópica, la demarcación y obtención del título de propiedad, y aun conceden á un extraño llamado investigador de aguas subterráneas, el derecho de emprender obras en ciertos fundos de propiedad particular del Estado ó de los pueblos, mediante ciertos requisitos.

Establecen también determinadas distancias, entre las excavaciones, etc., etc.

En nuestro país, sin duda alguna, imperiosamente se hace sentir la necesidad de algunas reformas y reglamentación á las aguas y ya es tiempo de que nuestro Gobierno, preocupándose del estudio de esta materia, expida una ley especial, reglamentando la propiedad, uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas.

VII

Reformas necesarias en nuestra legislación y urgencia de una ley especial, que reglamente el uso y aprovechahiento de las aguas en beneficio de la agricultura y de la industria.

En el estado actual de nuestra legislación, las leyes, reglamentos y las ordenanzas que han regido y rigen la importante materia de las aguas, se encuentran diseminadas ya en las antiguas leyes españolas, ya en las colecciones de leyes, ó en nuestros Códigos, no presentando, en consecuencia, ni unidad ni armonía, y sí dificultades que han originado discusiones y cuantiosos litigios en los tribunales.

Como ejemplo pudiéramos citar los graves acontecimientos de años pasados, entre los ribereños del Río Nazas, á que han puesto coto, la ley de 25 de Junio de 1888 y el reglamento provisional vigente (Junio 24, 1891).

Nadie podrá negar la importancia que desde los puntos de vista económico y legislativo, presentan todas las cuestiones que se relacionan en el aprovechamiento de las aguas, bien sea la construcción de diques, la apertura de canales, como la irrigación y desecamiento de los pocos lagos, lagunas y pantanos existentes en el país, como también el alumbramiento de las aguas subterráneas.

Estas cuestiones, por demás importantes y que se relacionan directamente con el futuro desarrollo de la agricultura en muchas comarcas de nuestro país, el porvenir les reserva su desenvolvimiento, y tarde ó temprano los gobiernos y los particulares tendrán que resolver este trascendental problema: la organización de las corrientes de agua.

De una manera general, designamos así los trabajos de irrigación, la construcción de diques y presas, la desecación de lagos, lagunas y pantanos y el alumbramiento de las aguas subterráneas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Organizar las corrientes de agua en un país, es derramar en su superficie, por la irrigación, todas las aguas que es posible utilizar; es proteger por diques y presas todos los terrenos fértiles que están en condiciones favorables, aprovechando los ríos y torrentes limítrofes; es, en fin, desecar los lagos, lagunas y pantanos, cuando tal operación sea verdaderamente ventajosa, y alumbrar por medio de pozos artesianos y tajos las aguas subterráneas. En resumen, la organización de los cursos de agua, es el conjunto de los trabajos públicos ó particulares que tienen por objeto inmediato el aumento de la riqueza agrícola.

Hemos indicado que la organización de las corrientes de agua es no sólo un problema de legislación, sino también económico, puesto que las consideraciones que se pueden hacer en favor de la agricultura como ramo importante de la producción, se pueden también invocar en apoyo de los trabajos de irrigación, como en la construcción de diques, apertura de canales, obras de desecación, etc. Las estadísticas europeas nos suministran claramente el desarrollo extraordinario en su agricultura é industria, después de la organización de sus aguas.

Desde el punto de vista económico, estos trabajos agrícolas difieren esencialmente de aquellos que son relativos á la construcción de vías de comunicación, rutas y caminos de fierro, puesto que los primeros tienen por objeto aumentar la riqueza, crear valores nuevos y suministrar á la industria nuevos y anchurosos horizontes para su desarrollo, mientras que los segundos, si bien es cierto que dan gran impulso á la agricultura, poniendo en contacto todos los centros de consumo no hacen sino desparramar los valores ya existentes.

Nuestra República está ya cruzada por extensa red de ferrocarriles, que han puesto en comunicación los más lejanos pueblos del país, favoreciendo la industria; y si nuestro gobierno no ha omitido sacrificios para lograrlo, tales sacrificios y cuantiosos gastos serían inútiles si en la actualidad no se preocupara de impulsar la agricultura y la industria como fuentes

de riqueza para el porvenir; y el único medio para conseguirlo es la organización de nuestras aguas en general, expidiendo leyes y reglamentos adecuados para su uso y aprovechamiento. Toca á las autoridades administrativas y á los Gobiernos de los Estados, expedir leyes especiales adecuadas á sus necesidades, para impulsar los hechos enumerados, que eviten los dispendiosos litigios, las frecuentes y espinosas discusiones y aun disturbios que han motivado el uso y aprovechamiento de las aguas.

Mas el tiempo de los trabajos agrícolas ha llegado, y la opinión pública y el Gobierno se empeñan con ardor en la iniciativa de estas grandes medidas.[1]

Recientemente el Gobierno general ha expedido la siguiente ley, reglamentando las aguas públicas de la Federación:

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.—México.—Sección 2ª

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"*PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:*

"Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
"Art. 1º Se autoriza al Ejecutivo para que, de acuerdo con las prevenciones de la presente ley y la de 5 de Junio de 1888, haga concesiones á particulares y á compañías para el mejor aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, en riegos y como potencia aplicable á diversas industrias.

"Art. 2º Las concesiones se otorgarán con las condiciones siguientes:

1 Véase la pág. 122.—Rio Nazas y contratos celebrados por el Ministerio de Fomento.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"I. Previa publicación de la solicitud en el Periódico Oficial de la Federación y del Estado respectivo.

"II. Sin perjuicio de tercero y decidiéndose previamente por los tribunales competentes las oposiciones que surgieren.

"III. Presentación de planos, perfiles y memorias descriptivas para la completa inteligencia de las obras que se proyecten, debiendo hacerse la presentación dentro del plazo que se estipule en la concesión.

"IV. Obligación de admitir un ingeniero como inspector de los trabajos de trazo y de construcción de todas las obras, nombrado por el Ejecutivo y pagado por los empresarios.

"V. Obligación de constituir un depósito en títulos de la Deuda pública, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraigan por los concesionarios.

"VI. Obligación de sujetar las tarifas de venta y arrendamiento de las aguas al examen y aprobación de la Secretaría de Fomento.

"Art. 3º El Ejecutivo podrá conceder á los empresarios las franquicias y exenciones siguientes:

"I. Exención por cinco años de todo impuesto federal, excepto los que se pagan en la forma del timbre, á los capitales empleados en el trazo, construcción y reparación de las obras definidas en la concesión respectiva.

"II. Introducción libre de derechos de importación por una sola vez, de las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las mismas obras.

"III. Derechos de ocupar gratuitamente los terrenos baldíos y nacionales para el paso de los canales, para la construcción de presas ó diques y para la formación de depósitos.

"IV. Derecho de expropiar á los particulares, por tratarse de obras de utilidad pública, previa indemnización y con arreglo á las bases establecidas para los ferrocarriles, de los terrenos necesarios para los usos fijados en la fracción anterior.

"Art. 4º Conforme á los preceptos de esta ley y á los de la

de 5 de Junio de 1888, el Ejecutivo reglamentará el aprovechamiento de las aguas en el Distrito Federal y en los Territorios, pudiendo hacer concesiones para construir presas y formar depósitos, sujetándose igualmente á los principios que establece el Código Civil.

"Art. 5º Se faculta al Ejecutivo para conceder la importación libre de derechos de la maquinaria y aparatos necesarios para el aprovechamiento de aguas para riego y como potencia, á las empresas que obtengan concesiones de los Estados con aquel objeto, siempre que den garantías de llevar á cabo los trabajos, y mediante las reglas y limitaciones que para el caso establezca el Ejecutivo de la Unión.—*Pablo Macedo*, diputado presidente.—*R. Dondé*, senador presidente.—*E. Cervantes*, diputado secretario.—*Alberto García*, senador secretario.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio Nacional de México, á cuatro de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro.—*Porfirio Diaz.*—Al C. Ingeniero Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á vd. para su conocimiento y demás fines.

Libertad y Constitución. México, Junio 6 de 1894.—*Fernández Leal.*—Al....

Las franquicias y liberalidad que la presente ley concede, bien á las compañías que se formen ó á los particulares que soliciten concesiones, para el aprovechamiento de las aguas objeto de esta ley, me excusan de hacer apreciaciones ya jurídicas ó económicas.

ANTERO PEREZ DE YARTO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EL DOMICILIO Y SUS EFECTOS EN EL ORDEN POLITICO, EN EL ORDEN CIVIL Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Si la antigüedad de una institución jurídica; si el haber resistido todas las evoluciones de la humanidad, á través del tiempo y del espacio, arraigando en todas las legislaciones y apareciendo siempre llena de interés y fecunda en resultados, son motivos bastantes para dedicarle preferente atención y detenido estudio, es indudable que merece una y otro la institución jurídica de que voy á hablaros.

En efecto, desde el Derecho Romano la noción de domicilio estaba perfectamente fijada. La ley VII de *Incolæ* lo definía así: *Est locus in quo quis sedem ponit laremque et summam rerum suarum.* De ahí pasó al derecho consuetudinario y de éste á las legislaciones todas de los pueblos modernos que, aunque adoptando diversos criterios para fijar el lugar en que se constituye, conservan muchas analogías de fondo, que resaltan más al estudiar los diversos efectos que el domicilio produce.

Según las palabras de la ley romana, para que se repute fijado el domicilio, se requiere:

1º Que la persona tenga su habitación en determinado lugar y,

2º Que en el mismo lugar tenga también la parte principal de sus bienes. Las legislaciones modernas han aceptado como criterio uno ú otro de estos requisitos, ó ambos, y sin embargo, al descender á las cuestiones de detalle, al investigar, por ejemplo, si el domicilio es único ó pueden tenerse varios, la resolución que ofrecen es completamente diversa de lo que daba el derecho monumental que con tanto fundamento ha sido llamado razón escrita. ¿A qué obedece esta radical diferencia? ¿Por qué, partiendo de las mismas bases, se llega á resultados tan opuestos?

La razón es muy sencilla: las condiciones especiales de vida social del Imperio Romano, son radicalmente distintas de las que rigen á las naciones actuales; por consecuencia, las instituciones de aquel, al pasar á éstas, tenían, obedeciendo á ley forzosa, que sufrir todas las modificaciones necesarias para adaptarse al nuevo medio en que iban á vivir.

En tiempo de los grandes jurisconsultos,[1] el suelo del Imperio estaba dividido en numerosas comunidades urbanas, la mayor parte colonias y municipios y otras muchas comunidades secundarias. Cada una de ellas tenía su Constitución más ó menos independiente, sus Magistrados, su jurisdicción y su legislación especial, y los habitantes del Imperio, salvo raras excepciones, estaban forzosamente sujetos á una de las comunidades mencionadas, pudiendo estarlo á dos ó á muchas. Los medios que los hacían depender de determinada ciudad, eran el *origo* en primera línea y subsidiariamente el domicilio.

El *origo* ó derecho de ciudad que confería la ciudadanía romana, producía los mismos efectos civiles que el domicilio: como éste, sujetaba al individuo á sufrir los *munera* ó cargas municipales, determinaba la competencia de los Tribunales ante los que podía ser demandado y fijaba la legislación que le era aplicable; pero como podía pertenecerse por el origo á determinada ciudad y tener en otra su habitación y la parte

1 Savigny.—Tratado de Derecho Romano.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

principal de sus bienes, había conflicto irresoluble en cuanto al derecho que debía regir las relaciones jurídicas, del que tenía su domicilio en una parte y su origo en otra.

El Derecho Romano resolvió la dificultad, decidiéndose en favor del derecho de ciudad, por ser más antiguo y no depender, como el domicilio, de la voluntad arbitraria del hombre.

Esa organización especial del Imperio Romano, dividido en infinidad de ciudades que sujetaban á las que les pertenecían por una ú otra de las instituciones enumeradas, á su jurisdicción, á sus cargas municipales y á su derecho local, explica, en mi concepto, que se pudieran tener muchos domicilios, como podían tenerse muchos derechos de ciudad. Cada comunidad aplicaba los dos requisitos preceptuados por la ley romana para la determinación del domicilio, sin tener en cuenta si se tenían ó no se tenían bienes en otra parte.

El que pertenecía á diversas ciudades por el *origo* ó por el domicilio, ó por uno y otro juntamente, sufría, en todas, las cargas municipales, podía ser demandado ante los Magistrados de cualquiera de ellas y sólo respecto á la legislación que le era aplicable, se atendía al derecho de ciudad, ó en su defecto al domicilio más antiguo, por la razón antes expuesta.

Todavía no aparecían las diferencias entre bienes muebles é inmuebles en lo relativo á conflictos de legislación, pues el pueblo romano, dueño del mundo conocido, no podía abrigar temores de que se lastimase su soberanía con la aplicación de una ley emanada de soberanía extraña.

Esa distinción debía aparecer en la época del derecho feudal, en la que, los Señores sujetos á las continuas invasiones de sus vecinos y dueños absolutos de cuanto existía dentro de su territorio, eran demasiado celosos para permitir la aplicación de leyes extranjeras. Pero como ese principio riguroso de tener infinitas dificultades prácticas, como el estado de las personas, su capacidad ó incapacidad, estarían sujetas á múltiples variaciones, según el territorio en que tuviera nacimiento una relación jurídica determinada, hubo necesidad de dulcificarlo, dando á ciertas leyes efecto extraterritorial, de donde nació la teoría del estatuto personal, en oposición al real.

Por lo demás, podemos decir que el domicilio ha pasado al derecho actual conservando los rasgos típicos y los caracteres esenciales que tenía en la legislación romana. Por el contrario, el *origo* ó derecho de ciudad, tan íntimamente enlazado en esta legislación con el domicilio, á cuyo lado se colocaba en todos los efectos civiles que ambas instituciones estaban destinadas á producir, y sobre el cual tenía siempre preferencia, no ha pasado á nuestro derecho, al menos en el sentido especial que en aquel tenía. De entonces acá, las instituciones políticas han sufrido serias transformaciones siguiendo su marcha de evolución, y si son distintas las condiciones sociológicas de las naciones modernas, hay sobrada razón para que, las instituciones jurídicas que son el reflejo de aquellas, se transformen ó desaparezcan.

II

DIVISIONES Y NATURALEZA DEL DOMICILIO.

Desde tres grandes puntos de vista puede considerarse la institución jurídica que examino, según los efectos que produce y las relaciones sociales que está llamada á regular:

1º Todas las naciones exigen á los que habitan el territorio sujeto á su dominio, el cumplimiento de ciertas obligaciones de un carácter meramente político y que por lo mismo entran en la amplia esfera de acción del Derecho Constitucional, tales son: la ayuda para los gastos públicos, el servicio de policía, respecto de los extranjeros y éstas, la defensa del territorio, del honor y de los intereses de la Patria, la obligación de votar, de alistarse en la guardia nacional, de desempeñar los cargos de elección popular que se les confieran, etc., respecto de los ciudadanos. Esto por lo que se refiere á Mé-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

xico, aunque todos los pueblos modernos tienen idénticas disposiciones en sus códigos políticos. Desde este punto de vista el domicilio tiene un carácter especial, y aparece evidente la importancia de que se pueda determinar con absoluta precisión.

2º El progreso de las artes, de las ciencias, de la industria y del comercio, exige que sean cada día más frecuentes los indispensables cambios de servicios entre los particulares, y dan nacimiento á relaciones jurídicas cada vez más numerosas y más importantes. La adquisición, la transmisión, la pérdida de la propiedad, las variadas y múltiples transacciones mercantiles, los contratos que aseguran el uso de una cosa ó el goce de sus productos, todo lo que signifique un derecho ó importe una obligación, trae consigo, como una consecuencia natural, la necesidad de que se fije el lugar en que esa obligación puede exigirse, y por lo mismo, en que puede ejercitarse el derecho correspondiente, supuesto que de otro modo esas palabras no tendrían sentido práctico. Por último, las relaciones morales y de familia que constituyen la base de la organización social, exigen la determinación precisa del lugar en que nacen y la ley que las rige, puesto que ellas señalan condiciones de vida de la sociedad. Bajo estos dos puntos de vista, el domicilio se relaciona directamente con el orden público.

3º En una nación como la nuestra, dividida en muchas entidades soberanas en su régimen interior y que pueden y de hecho están regidas por legislaciones diferentes, la determinación del domicilio que hace las veces de nacionalidad y que señala la legislación aplicable á cada individuo para gran parte de sus relaciones de derecho, asume una importancia tal, que constituye una de las cuestiones que reclaman más imperiosamente el estudio atento y concienzudo de los que se dedican á la ardua ciencia jurídica.

Según lo expuesto, el domicilio puede clasificarse, por sus efectos en el orden político, en el orden civil y en el derecho internacional privado.

Procuraré estudiarlo en sus tres grandes divisiones; y si, como es seguro, incurro frecuentemente en error, muy pronto la voz autorizada del maestro señalará las deficiencias y corregirá los extravíos. Cumplo con un deber que me impone el Reglamento de la Escuela, y sólo esta consideración puede hacer que me atreva á exponer mis opiniones sobre esta delicada materia, ante los que, acostumbrados á vencer las dificultades, tienen la vista clara y perspicaz de la ciencia.

Antes, y por razón de método, procuraré investigar la naturaleza jurídica de la institución que examino.

Aunque son varias y numerosas las relaciones que el domicilio regula, aunque pertenecen á órdenes distintos de la ciencia jurídica, mejor dicho, aunque toda ella en sus diversas ramas y en sus múltiples manifestaciones está ligada estrechamente con esta institución, su naturaleza es una, y las reglas substanciales que sirvan para determinarlo en cada caso, deben por consiguiente ser las mismas.

El domicilio es un hecho jurídico: el hecho de residir habitualmente, en determinado lugar, el hecho de tener en una población cualquiera el asiento principal de los negocios, sujeta al individuo á sufrir cargas y le concede derechos cuya determinación corresponde al derecho público. Esos mismos hechos sirven para fijar el lugar en que deben verificarse los actos más importantes de la personalidad humana, los que se refieren al orden de la familia, que producen obligaciones y derechos de capital importancia. Esos mismos hechos determinan en dónde deben ejercitarse las acciones civiles, y sirven, por último, para resolver los conflictos de legislación que pueden presentarse entre los diversos Estados de la República, como sirven también en muchos casos para decidir los que ocurran entre Naciones Soberanas.

Se ve, pues, que la institución del domicilio es de orden público, esto es, están interesados en que se determine con precisión, todos los miembros de la colectividad, supuesto que interesa á todos saber dónde pueden ejercitar sus derechos, y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

supuesto que regula instituciones que la sociedad considera como la base de su organización.

Este carácter del domicilio explica por qué todos los legisladores, en lugar de definirlo, se han preocupado por determinar el lugar en que se constituye. Han comprendido perfectamente la importancia práctica de que ese hecho que produce tantos efectos jurídicos se fije con claridad, y han dejado á los tratadistas la misión de definirlo, evidentemente de menor importancia, supuesto que se reduce á una simple aplicación de los procedimientos de la Lógica. Algunos lo definen diciendo que es una relación legal y puramente intelectual entre una persona y el lugar en que tiene su principal establecimiento. Esta definición, que pertenece al Derecho Francés, es demasiado metafísica: me parece á todas luces preferible la de Ortolán: "El domicilio es la habitación que una persona está siempre obligada á tener á los ojos de la ley y para el ejercicio de ciertos derechos."

Nuestro Código Cilvil determina los requisitos que debe tener el domicilio, y por consiguiente, suministra los materiales que deben entrar en su definición.

Da á conocer la denotación y la connotación de la palabra. Según él, el domicilio es el lugar en que una persona reside habitualmente; á falta de éste, en donde tiene el principal asiento de sus negocios; á falta de uno y otro, el lugar donde se halla (art. 27 Cód. Civ.)

De esta enumeración se desprende sin esfuerzo el objeto del legislador mexicano, que no es otro que impedir las dificultades prácticas que resultarían de que una persona no tuviese domicilio ó tuviese varios, como sucedía en el Derecho Romano. En efecto, siendo el domicilio de orden público, los esfuerzos de la ley deben dirigirse á hacer que todos tengan un lugar fácil de ser determinado en cada caso, para el ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

III

DOMICILIO POLÍTICO.

Según el art. 30 de la Constitución Federal, son mexicanos:

1º Los nacidos dentro ó fuera de la República, de padres mexicanos.

2º Los extranjeros que se naturalicen conforme á las leyes de la Federación, y

3º Los que adquieran bienes raíces en el territorio de la República ó tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten su resolución de conservar su nacionalidad.

Art. 34. Son ciudadanos de la República los que, teniendo la calidad de mexicanos, reunan, además, las siguientes:

I.—Haber cumplido 18 años si son casados, y 21 si no lo son:

II.—Tener un modo honesto de vivir.

La simple lectura de los artículos constitucionales demuestra que la adquisición de la nacionalidad mexicana no se opera por el domicilio, y por consiguiente, que éste no produce efecto alguno sobre ella. La ley de extranjería de 28 de Mayo de 1866 preceptúa, sin embargo, en la fracción 7ª del artículo 1º lo siguiente: "Son mexicanos, los nacidos fuera de la República, pero que, establecidos en ella en 1821, juraron el Acta de Independencia, han continuado su RESIDENCIA en el territorio nacional y no han cambiado de nacionalidad." A primera vista parece que la residencia es aquí la razón determinante de la adquisición de la nacionalidad mexicana; pero examinando el artículo más atentamente, se ve que no es sino una circunstancia accesoria que sirve para presumir la voluntad de adquirir la nacionalidad mencionada. Lo importante, lo esencial, según la referida fracción, es que juraran la Independencia, esto es, que tácitamente renunciaran la nacionalidad del país á que pertenecían.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Pero si en el Distrito y Territorios no hay domicilio político, no sucede lo mismo en los demás Estados de la República. La Constitución particular del Estado de Coahuila, dice: "Art. 8º, frac. III: "Son coahuilenses: los mexicanos por nacimiento ó por naturalización que con un año de residencia en el Estado, ejerzan algún arte, industria ó profesión honesta. IV. Los que aun cuando no residan en el Estado, tengan en él propiedad raíz y manifiesten su voluntad de serlo. Art. 9º, frac. II, son ciudadanos coahuilenses: los mexicanos por nacimiento, que reuniendo la calidad de ciudadanos de la República, conforme al art. 30 de la Constitución general, tengan en el Estado un año de residencia y una ocupacción ó modo honesto de vivir."

La Constitución de Aguascalientes, en sus arts. 8º y 9º, la de Campeche en sus arts. 5º, 6º, 7º y 8º y todas las Constituciones de los demás Estados, exigen también para conceder su ciudadanía, cierta residencia, modo honesto de vivir, etc.

Se ve, pues, que para el ejercicio de los derechos políticos, prescriben las Constituciones mencionadas, entre otras condiciones, la de residir en el Estado de que se trate por un tiempo determinado.

El domicilio impone obligaciones y concede derechos. Entre las primeras, figura la de votar, la de desempeñar los cargos de elección popular, la de pagar contribuciones, etc. ¿Qué sucederá en el caso de que un individuo resida un año en un Estado y otro año en otro?

Creo que procede aquí la distinción que hacían los romanos al tratar del *origo*, entre obligaciones patrimoniales y obligaciones personales. En efecto, para el ejercicio del sufragio, para la obligación de desempeñar ciertos cargos, puede muy bien resolverse la dificultad diciendo, que si no se ha adquirido nuevo domicilio, esas obligaciones deben cumplirse en el antiguo y al contrario; pero no puede darse igual resolución respecto del pago de contribuciones, por la naturaleza económica del impuesto que está destinado á suministrar al Estado ó Municipio los fondos necesarios para el exacto desempeño de sus funciones. A su pago están afectos los bienes, y donde quiera que existan debe hacerse efectiva la contribución. De otro modo, el Estado no podría contar con recursos seguros y la organización social se desquiciaría.

Esto no quiere decir que el *origo* exista entre nosotros tal como existía en el Derecho Romano. Nuestras ciudades no tienen un derecho exclusivo, como las romanas, que lo concedían á sus hijos por el solo hecho del nacimiento, y si es verdad que los Estados tienen, aunque con muchas restricciones, su legislación especial, también es cierto que para gozar de sus beneficios ó para que puedan imponer sus cargas, no basta el nacimiento, se necesita el domicilio.

IV

DOMICILIO CIVIL.

La trascendencia de esta institución en el orden civil, se desprenderá perfectamente clara con la simple enunciación de los efectos que produce.

1º Determina la competencia de los tribunales, en materia de obligaciones personales, supuesto que el deudor debe ser demandado en su domicilio.

2º Fija el lugar en que debe celebrarse el matrimonio.

3º Determina el régimen que rige á los esposos cuando no hay contrato.

4º En el domicilio se hacen investigaciones legales para comprobar la ausencia.

5º En el domicilio del deudor debe verificarse el pago, cuando no se ha designado otro lugar expresamente.

6º Determina el lugar en que debe abrirse la sucesión.

7º Suple á la persona, respecto de las notificaciones, protestos, ejecuciones, etc., que conforme á la ley deban hacérsele. Abarca, pues, toda la esfera del derecho civil.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Se divide el domicilio en real y de elección, subdiviéndose el primero en voluntariamente adquirido y en establecido por la ley.

Es domicilio real el que se adquiere por la residencia habitual; á falta de ésta, por el principal asiento de los negocios, y en defecto de una y otro, por la residencia simple.

Es domicilio de elección el que fijan de común acuerdo dos ó más personas, para el cumplimiento de una obligación determinada.

Es domicilio necesario ó establecido por la ley, el que señala ésta á determinadas personas que se encuentran en condiciones especiales. Por disposición legal, el hijo legítimo adquiere, al nacer, el domicilio de su padre; el natural, el de éste también, si el padre y la madre lo reconocieron; si no, el de quien lo haya reconocido, y si ninguno lo ha hecho, el del Hospicio, tutor ó persona que lo recogiera. La mujer casada tiene también por disposición de la ley el domicilio de su marido, viva ó no viva con él, mientras no haya separación legal, supuesto que el ejercicio del poder marital es de orden público; el menor y el incapacitado, el de su tutor; los funcionarios públicos lo tienen en el lugar en que desempeñan sus funciones; los militares en servicio activo, en el lugar en que están destinados; los sirvientes, en la casa de sus amos, siempre que trabajen allí habitualmente y vivan con ellos; los condenados á confinamiento, en el lugar del destierro, por lo que toca á las relaciones posteriores á la condena, y respecto de las anteriores, conservan el que antes tenían; y las corporaciones y asociaciones permitidas por la ley, lo tienen en el lugar en que esté situada su dirección ó administración, ó en el que fijen sus Estatutos, siempre que esté dentro del territorio sujeto al Código. (Arts. 28 á 36 del Cód. Civ.)

¿Pueden tenerse varios domicilios? Esta cuestión que en otras legislaciones presenta serias dificultades, no ofrece ningunas en nuestro derecho, porque no se puede tener en dos sitios distintos el principal establecimiento, ni puede una persona hallarse á la vez en dos partes diversas. Esto respecto del domicilio real; en cuanto al de elección, es inconcuso que pueden tenerse muchos, supuesto que se ha establecido para facilitar las transacciones mercantiles y depende exclusivamente de la voluntad de los interesados.

Sin embargo, aunque por regla general el domicilio real es el único, la ley establece las excepciones siguientes: el menor que sirve habitualmente á una persona y vive con ella, tiene por domicilio el de ésta; pero si tiene bienes que administre un tutor, respecto de éstos su domicilio es el del tutor. La razón es obvia: no puede ejercitar sus derechos civiles, sino con anuencia é intervención del tutor, y como el domicilio determina el lugar en que deben ejercitarse los mencionados derechos, bajo este aspecto su domicilio debe ser el de aquel; pero como puede celebrar otros actos que no se refieran á sus bienes, como por ejemplo, contraer matrimonio, respecto de éstos su domicilio debe determinarse por las reglas ordinarias, pues con relación á ellos cesan los motivos de la ley para establecerle un domicilio necesario. El condenado á confinamiento tiene también dos domicilios: el lugar del destierro para las relaciones posteriores á la condena y el que antes tenía para las anteriores. Creo, por último, con el Sr. Velázquez, que en el caso de depósito por causa de divorcio, para los efectos del juicio, la mujer deberá tener domicilio distinto del marido, supuesto que persiguen intereses diversos y no puede señalarse una misma casa para lugar de todas las notificaciones, máxime cuando algunas de ellas han de ser personales.

El domicilio se pierde, salvo los casos de excepción señalados, por la adquisición de otro nuevo. El art. 209 del Código de Procedimientos Civiles, dice que para que la residencia de que habla el Código Civil se considere habitual, deberá pasar de seis meses, y preceptúa que el que no quiera perder su domicilio, debe manifestarlo así á la autoridad municipal y ésta le expedirá un certificado de la declaración, que le servirá de prueba en el lugar donde resida más tiempo del fijado por la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ley para adquirir domicilio. Para no perder el domicilio basta, pues, la declaración mencionada; ¿pero puede decirse lo mismo respecto de la adquisición? ¿Bastará para adquirir domicilio en un lugar determinado, el simple hecho de manifestar la voluntad de adquirirlo en la forma preceptuada por el art. 209, y aunque ni se resida en él habitualmente, ni se llenen ninguno de los otros requisitos que exige el art. 27 del Código Civil? Esta cuestión, sobre la que ha sido consultado hace poco por el Ministerio de Gobernación, un Profesor de esta Escuela, debe, en mi concepto, resolverse negativamente, pues bastan para ello las palabras terminantes y claras de la ley. Sin la residencia habitual, el centro de los negocios ó la residencia simple, el deseo por vehemente que se le considere, no puede constituir el hecho jurídico del domicilio. El art. 209 supone que puede haber casos en que un individuo resida más de seis meses en un lugar, y á pesar de eso ni desee ni le convenga perder su domicilio, y en la necesidad de fijar un término para determinar la residencia habitual, tuvo precisión de hacer la salvedad antedicha. Ese es, en mi concepto, el alcance jurídico del mencionado artículo.

V

DOMICILIO EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

He llegado, Señores, á la parte última y más importante de este imperfecto trabajo. ¿Qué importancia tiene la institución del domicilio en derecho internacional privado?

Aunque no hay ya quien sostenga, tratándose de naciones soberanas, que del domicilio dependen las leyes que determinan la capacidad ó incapacidad de las personas designadas por los estatutistas bajo el nombre de estatuto personal, pues todos reconocen que esas calidades deben ser determinadas por la nacionalidad y no por el domicilio; éste tiene sin embargo gran importancia en los conflictos de derecho internacional privado,

sobre todo en naciones, como la nuestra, divididas en muchos Estados que están ó pueden estar regidos por legislaciones diferentes, pues aquí el domicilio hace las veces de nacionalidad.

La dificultad surge desde luego: ¿el estado y capacidad de las personas se rige por el domicilio de origen ó por el domicilio actual? Creo que se debe sostener que por este último, supuesto que, según nuestro derecho público, basta ser mexicano y tener residencia en cualquier Estado, para adquirir domicilio y gozar de las ventajas de la ley especial que lo rija; en otros términos, la ley de un Estado cualquiera, se impone á los que residan en él, por razón del domicilio, y debe cesar de tener efecto cuando éste termine, pues de otro modo los Estados concederían á sus ciudadanos verdaderos derechos de nacionalidad, lo que no me parece admisible.

Pero puede tenerse el domicilio en un Estado y tener en otros bienes raíces. ¿Qué ley debe aplicarse en el caso de sucesión, por ejemplo? Este caso de conflicto, que me parece el más importante en la actualidad, supuesto que en el Distrito y en algunos Estados está admitida la libre testamentifacción y en otros impera aún el sistema de las legítimas, ha sido estudiado recientemente por dos notables publicistas mexicanos: el Sr. Vallarta y mi maestro el Sr. Algara. Ambos lo han resuelto en distinto sentido.

Según el Sr. Vallarta, debe aplicarse la ley del domicilio del testador, tenga ó no tenga bienes raíces en Estado distinto que no admita la libre testamentifacción, pues sostiene que la sucesión no es de orden público y por consiguiente que no puede afectarse la soberanía de un Estado con la aplicación de la ley de otro en asuntos que no se refieren á su organización, ni son de derecho público.

Mi maestro el Sr. Algara sostiene la opinión contraria, fundándose principalmente en nuestro derecho positivo.

En mi concepto, la cuestión puede verse desde dos puntos de vista: á la luz de los principios de la ciencia y á la luz de los preceptos de nuestra legislación. Bajo el primero, creo con

el Sr. Vallarta que debe regir la ley del domicilio. En efecto, la herencia es una *universitas juris* y debe ser regida por una sola ley. El derecho de testar es una consecuencia del derecho de propiedad y debe ser regido por la ley que rige á la persona. Además, es inconcuso que los efectos de ese derecho no pueden afectar el orden público, en el caso de que se trata, porque no puede un Estado tener interés ninguno en que los bienes de una persona pasen á su hijo y no á su hermano, ó á un extraño con preferencia de éstos.

¿Pero es esta la opinión sancionada por el Código Civil del Distrito, declarado Federal en todo lo que se refiera á extranjeros?

He aquí los artículos relativos: art. 13. Respecto de los bienes inmuebles sitos en el Distrito Federal y en la Baja California, regirán las leyes mexicanas aunque sean poseídos por extranjeros.—art. 16. Las obligaciones y derechos que nazcan de los contratos y testamentos otorgados en el extranjero, por mexicanos del Distrito ó de la California, se regirán por las disposiciones de este Código, en caso de que dichos actos deban tener lugar en las mencionadas demarcaciones.—art. 17. Si los contratos ó testamentos de que habla el artículo anterior, fueren otorgados por un extranjero y hubieren de ejecutarse en el Distrito ó en la California, será libre el otorgante para elegir la ley á que haya de sujetarse la solemnidad interna del acto, en cuanto al interés que consista en bienes muebles. Por lo que respecta á los raíces se observará lo dispuesto en el art. 13.—art. 3,286. Los extranjeros que testen en el Distrito y en la California, pueden escoger la ley de su patria ó la mexicana, respecto de la solemnidad interna del acto: en cuanto á las solemnidades externas, deberán sujetarse á los preceptos de este Código.

Como se ve, el art. 13 establece la realidad del estatuto en lo que se refiere á inmuebles en su extensión más lata, y el 17 lo ratifica del modo más terminante y más claro en cuanto á contratos y testamentos, declarando expresamente que estos

actos, siempre que tengan por objeto bienes raíces situados en el Distrito ó en la California, deberán regirse por el Código Civil de estas demarcaciones. No creo que pueda presentarse un caso que esté más perfectamente comprendido y resuelto por la ley: si el Código al tratar esta materia no hubiera dicho sino eso, toda discusión sería imposible. Pero el art. 3,286 preceptúa que los extranjeros que testen en el Distrito ó en la California, pueden escoger la ley mexicana ó la de su patria respecto de la solemnidad interna del acto, y esta disposición que aparentemente está en abierta pugna con los arts. 13 y 17 ya expuestos, ha venido á suscitar infinidad de dudas que han dado origen á una importantísima discusión, en la que los dos jurisconsultos que he mencionado, han hecho un verdadero derroche de talento y de ciencia.

Sin embargo, en mi concepto, la contradicción es sólo aparente. Según el Sr. Vallarta, el hecho de no haber repetido el art. 3,286 la taxativa del 17, indica que el legislador no quiso sujetar al mismo criterio el testamento del extranjero otorgado en el extranjero y el de éste otorgado en el Distrito, aunque no puede menos que confesar que no hay razón alguna para esta diferencia. Después, previniendo la réplica de que el art. 13 es general y no había por consecuencia necesidad de que reiterara expresamente el 3,286, lo prevenido en aquel, dice: "Esta réplica tendría fuerza si las palabras finales de éste, existieran en aquel, palabras que él suprimió intencionalmente; porque tal silencio, que no se puede imputar á ignorancia ó descuido del legislador, protesta contra el argumento que refuto. ¿Domina á toda esta materia la prescripción del art. 13, de tal manera que ni había necesidad de repetir que los bienes raíces del extranjero que testa en el extranjero, quedaran sujetos á ella? Luego son inútiles esas palabras finales del art. 17, y con ellas y sin ellas él debería tener la misma inteligencia, lo mismo que con ellas y sin ellas ordenaría igual cosa el 3,286, como lo pretende aquella réplica."

Este brillante sofisma, el principal de los argumentos del Sr.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Vallarta, no resiste, Señores, al más ligero examen. En primer lugar, da por probado lo que se trata de probar, supuesto que decir que el artículo en cuestión no está comprendido en la disposición general de los artículos 13 y 17, porque no repitió las palabras finales de este último, es eludir la dificultad en vez de resolverla, pues eso es precisamente lo que se desea investigar. Se trata siempre y sencillamente de una interpretación de la ley ¿y puede ser lícito interpretar la ley de esa manera? Estamos en frente de dos disposiciones claras que no ofrecen duda alguna, en cuanto á su significación gramatical y lógica y que parecen contener mandatos contradictorios; debemos, por lo mismo, proceder al examen del sistema adoptado por el legislador, pues ese examen es el único que puede darnos luz sobre el asunto y resolver el problema.

¿Cuál fué el criterio adoptado por el Código para resolver los conflictos de derecho internacional privado? Es indudable que fué el de los estatutos, nadie puede sostener otra cosa. Pero la dificultad queda en pie, porque según unos, el derecho de testar pertenece al estatuto personal, y según otros al real: el error de esta teoría consiste precisamente en que no da un criterio seguro para resolver ninguna duda, porque todas las relaciones de derecho pueden pertenecer á uno ú otro de los estatutos mencionados, según el punto de vista desde el cual se les considere. Ahora bien, ¿nuestro Código sancionó la realidad ó la personalidad del estatuto en lo referente á sucesiones? He aquí el punto capital de la cuestión. El Sr. Vallarta cree que estableció para el testamento del extranjero otorgado en el extranjero, el estatuto real, y para el de este mismo otorgado en el Distrito, el personal, y se funda en las siguientes palabras de la exposición de motivos del Código Civil: "el art. 3,423 (3,286 en el Código de 84) deja en libertad á los extranjeros para sujetarse á la ley mexicana en cuanto á la substancia; pero les exige su cumplimiento en cuanto á la forma. Ambas disposiciones son convenientes: porque la primera es una consecuencia del estatuto personal," etc.

Vais á ver cómo examinando ligeramente los artículos relativos, cae por su propio peso el argumento del Sr. Vallarta. Según el art. 13, respecto de inmuebles, regirá siempre la ley mexicana: he aquí el estatuto real en su extensión más amplia; según él, todo lo que afecte á los inmuebles situados en el Distrito ó en la California, se rige por la ley de éstos. ¿Entonces á qué repetir en el art. 17, dice el Sr. Vallarta, que los contratos y testamentos que se refieran á bienes raíces se sujetarán á lo dispuesto en el art. 13? La razón es muy sencilla: sobre testamentos y contratos versaba precisamente la discusión de los tratadistas, sosteniendo unos la realidad y otros la personalidad del estatuto, y el Código quiso quitar hasta la menor sombra de duda á ese respecto. ¿Pero había necesidad de repetir de nuevo la disposición dictada y ratificada expresamente en el caso especial de que se trata, en dos artículos colocados en el capítulo que establece reglas generales para el Derecho Civil? ¿Cuál es entonces el art. 3,286? En mi concepto, ese artículo no hace más que repetir lo dispuesto en la primera parte del tantas veces citado art. 17: los extranjeros pueden escoger la ley mexicana ó la de su patria, en cuanto al interés que consista en bienes muebles. Por eso dicen los autores del Código, que esa disposición es una consecuencia del estatuto personal. Admitir la interpretación contraria, es admitir que nuestro legislador incurrió en la más grosera de las contradicciones. ¿O qué, el hecho de que el testamento se otorgue en el extranjero y no en el Distrito, cambia la naturaleza jurídica de la relación?

Creo, pues, con el Sr. Algara, que según nuestro derecho positivo, al tratar de inmuebles, un testamento no puede tener efecto si está en pugna con la ley del lugar en que dichos bienes están situados.

Estos principios están muy lejos de los principios científicos; pero en el terreno de la práctica no pueden aplicarse otros, dados los preceptos de nuestra legislación. ¡Ojalá que muy pronto nuestros legisladores se preocupen del estudio de este

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

trascendental y delicado asunto, poniéndolo á la altura del progreso que ha alcanzado en estos últimos tiempos esta rama de la ciencia jurídica!

MANUEL GARZA ALDAPE.

LA CRIMINOLOGIA Y EL JUICIO POR JURADOS.*

(ENSAYO DE METODO).

De ninguna manera pretendo en este ensayo hacer, ni un tratado de Criminología, ni un estudio de su lógica; ni mis aptitudes ni los límites en los cuales debo desarrollar mis ideas me lo permiten. Lo único que pretendo es poner de manifiesto el contraste, la deficiencia enorme que hay entre las aptitudes intelectuales de un sabio que se dedica á estudiar las causas desconocidas del crimen y las aptitudes intelectuales que la ley exige á los ciudadanos que integran un jurado, así como á los abogados que llevan la acusación, la defensa ó la instrucción de una causa. Para ello lo único que necesito es fijar los puntos principales de sus criterios respectivos, los grandes coordenados de sus ideas, el andamiaje intelectual de cada uno, á efecto de que se palpe la enorme diferencia que hay entre especular sobre el crimen y fallar en un proceso criminal; entre creer que un hecho se ha verificado ó no, y dar por ciertas las causas que se reputan como productoras de ese hecho. Así, pues, lo que tengo que decir se reduce, mi tarea se simplifica; pero no tanto que me exima de precisar

* Véase la pág. 7.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

trascendental y delicado asunto, poniéndolo á la altura del progreso que ha alcanzado en estos últimos tiempos esta rama de la ciencia jurídica!

MANUEL GARZA ALDAPE.

LA CRIMINOLOGIA Y EL JUICIO POR JURADOS.*

(ENSAYO DE METODO).

De ninguna manera pretendo en este ensayo hacer, ni un tratado de Criminología, ni un estudio de su lógica; ni mis aptitudes ni los límites en los cuales debo desarrollar mis ideas me lo permiten. Lo único que pretendo es poner de manifiesto el contraste, la deficiencia enorme que hay entre las aptitudes intelectuales de un sabio que se dedica á estudiar las causas desconocidas del crimen y las aptitudes intelectuales que la ley exige á los ciudadanos que integran un jurado, así como á los abogados que llevan la acusación, la defensa ó la instrucción de una causa. Para ello lo único que necesito es fijar los puntos principales de sus criterios respectivos, los grandes coordenados de sus ideas, el andamiaje intelectual de cada uno, á efecto de que se palpe la enorme diferencia que hay entre especular sobre el crimen y fallar en un proceso criminal; entre creer que un hecho se ha verificado ó no, y dar por ciertas las causas que se reputan como productoras de ese hecho. Así, pues, lo que tengo que decir se reduce, mi tarea se simplifica; pero no tanto que me exima de precisar

* Véase la pág. 7.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la característica filosófica de la noción fundamental que tanto el criminologista como el penalista y el jurado deben tener. Me es indispensable, en consecuencia, antes de indicar á grandes rasgos los métodos que investigo, precisar de una vez por todas si las nociones fundamentales del crimen pertenecen á la Psicología ó á la Sociología; si el crimen es una *función orgánica* ó un *fenómeno* social; en suma, si como lo he afirmado, es ó no un fenómeno de circunstancias, cualesquiera que sean los elementos individuales del criminal. Para esto, y á efecto de partir de hechos y no de abstracciones, voy á transcribir y á analizar una página de uno de los más profundos é imparciales historiadores de este siglo.

H. Taine, en su obra "Les Origines de la France Contemporaine," Tomo I de "La Revolution," pág. 406, dice: "Este "(Guillin–Dumontet), antes capitán de buque de la Compañía "de las Indias, después comandante en el Senegal, y ahora "retirado de la vida activa, habitaba su castillo de Poleymieux, "con su joven esposa y sus dos hijos de tierna edad, sus her"manas, sus sobrinas y su cuñada: en todo diez mujeres de "su familia y servidumbre, un criado negro, y él, anciano de "sesenta años. *(Mercurio de Francia, 20 de Agosto de 1791, "artículo de Mallet–Dupan.—"Todos los rasgos del cuadro que "acabo de bosquejar me han sido suministrados por la misma "Mme. Dumontet." Estoy "autorizado con su firma para ga"rantizar la exactitud de este relato.")* ¡He ahí la guarida de "conspiradores militantes á quienes es preciso desarmar lo "más pronto posible! Desgraciadamente un hermano de Mr. "Guillin, acusado de lesa nación, ha sido arrestado diez meses "antes y esto basta á los clubs de las cercanías. Ya en el mes "de Diciembre de 1790 el castillo ha sido cateado por las pa"rroquias vecinas: nada encontraron; el departamento censuró "el hecho y prohibió después estas pesquisas arbitrarias. Pero "en esta ocasión se las arreglan mejor.—El 26 de Junio de "1791, á las diez de la mañana, se ve aproximarse al ayunta"miento de Poleymieux y otros dos con la banda terciada y

"300 guardias nacionales, y siempre so pretexto de buscar ar"mas. Mme. Guillin se presenta, les recuerda la prohibición "del departamento y pide la orden legal que los autoriza. La "niegan. Mr. Guillin desciende á su vez y ofrece abrir si se "le presenta esa orden. No hay orden que presentarle. Du"rante el coloquio, un tal Rosier, antiguo soldado, desertor "por la segunda vez y que hoy manda una guardia nacional, "ase á Mr. Guillin del cuello: el viejo capitán se defiende, "amenaza á su adversario con una pistola que se ceba, y des"prendiéndose de las manos que lo ahogan, entra cerrando la "puerta.—En el acto suena el toque de rebato en los alrede"dores, treinta parroquias se conmueven y acuden dos mil "hombres. Mme. Guillin, á fuerza de ruegos, obtiene que "unos delegados escogidos por la multitud declaren que no "han encontrado más armas que las ordinarias, después de "haber recorrido todos los departamentos. ¡Declaración inútil! "Por haber esperado, la multitud se ha enardecido: siente su "fuerza y no quiere volverse con las manos vacías. Una gra"nizada de balas acribilla las ventanas del castillo.

"Por un último esfuerzo, Mme. Guillin, con sus dos hijos en "los brazos, sale, llega hasta los oficiales municipales y los in"terpela para que cumplan con su deber. Ellos, en vez de aten"derla, la detienen como rehen y la colocan de manera que "reciba las balas, si disparan del castillo.—En seguida, deshe"rrajan las puertas, pillan la casa y después la incendian; y M. "Guillin, que se ha refugiado en el torreón del castillo, está á "punto de ser alcanzado por las llamas. En este momento, al"gunos de los asaltantes menos feroces que los otros lo ani"man á descender respondiendo de su vida; pero apenas llega, "se arrojan los otros sobre él; gritan que es preciso matarlo, "que tiene 36,000 francos de renta del Estado, que *"eso sería "otro tanto ganado por la Nación; á hachazos lo convierten en tro"zos palpitantes;"* le cortan la cabeza, la clavan en la punta de "una pica, despedazan su cadáver, y envían un trozo de cuer"po á cada parroquia: varios empapan sus manos en la sangre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"y con ella se embarran las caras. Parece que el tumulto, los "clamores, el incendio, el robo y la matanza, han despertado "en ellos, no sólo los instintos crueles del salvaje, sino también "los apetitos carniceros de la bestia, ¡Algunos de ellos, apre- "hendidos por la gendarmería de Chasselay, habían hecho asar "el antebrazo del muerto y lo devoraban en la mesa! *(Mer- "curio de Francia, 20 de Agosto de 1791, artículo de Mallet– "Dupan. "El procedimiento instruido en Lyon ha comprobado "este festín de antropófagos.")*—Mme. Guillin, salvada por la "compasión de dos habitantes, consigue llegar á Lyon con "grandes peligros. Todo lo han perdido ella y sus hijos "*cas- "tillo, dependencias, cosecha del año precedente, vinos, granos, "mueblaje, vajillas de plata, plata acuñada, asignadas, billetes, "contratos;*" y diez días despues, el departamento advierte á la "Asamblea Nacional que *los mismos proyectos se forman y com- "binan, que siempre se amenaza con quemar los castillos y los re- "gistros*" y que sobre esto ni es posible ni permitido abrigar "duda alguna. "*Los habitantes del campo sólo esperan una opor- "tunidad para renovar sus escenas de horror.*"

Esta terrible ocasión se presentó por varias veces en el intervalo de tres años, en las 40,000 comunas que formaban la Francia del siglo pasado. Desde Calais á Marsella, y desde Strasburgo á Bordeaux, todo el territorio francés fué barrido como huracán de exterminio por las *jacquerías*, los incendios, los pillajes, los asaltos y las matanzas, sin que en ninguno de esos crímenes interviniera el rencor político, como lo demuestra el gran historiador, sino como pretexto absoluto y ardid imbécil de los criminales para cohonestar sus infamias. Ahora bien, cuando en una extensión territorial de 500,000 kilómetros cuadrados y durante un período de tres años, el crimen, en todas las formas que un monómano homicida pueda imaginar, se desliza y penetra en una masa de población que llega á 25.000,000 de habitantes, causando la ruina individual de todos y exponiendo á la Nación á su ruina colectiva, es muy natural suponer que ante un cuadro de observación tan vasto

y ante acontecimientos tan terriblemente notorios, el criminologista deba plantearse el dilema siguiente: ó los autores de los crímenes de la Revolución Francesa eran criminales natos, ó los acontecimientos políticos de la época ocasionaron la perpetración inevitable de todos esos acontecimientos, obligando á los hombres honrados á convertirse en criminales. Si el primer término del dilema es el exacto, debemos admitir que los criminales determinan las crisis sociales de los pueblos, dejando siempre en reserva el problema de la producción misma de esos criminales; si, por el contrario, se admite que el estado político ocasiona el crimen, el problema anterior queda resuelto en parte, y sólo debe investigarse si la honradez del hombre, en la mayoría de los casos, depende de las convulsiones de la sociedad y de las crisis de su política.

Muy breve será el análisis que voy á hacer de los dos términos del dilema.—Un ejército de 2,000 hombres, formado con el contingente de *sangre* de treinta parroquias, se reunió según el relato de Mallet–Dupan, para asaltar un castillo guarnecido por diez mujeres, un criado y un anciano, y para perpetrar en la misma pesquisa de armas un crimen que se agravó después con el robo, el pillaje, el asesinato y el incendio.

Ahora bien, estos 2,000 hombres, ¿eran, antes del asalto, ladrones, salteadores, asesinos é incendiarios? Si lo eran ¿por qué antes no habían robado, asaltado, matado é incendiado? y si no lo eran ¿por qué roban, asaltan, incendian y asesinan cuando los campanarios de sus iglesias respectivas, á la vuelta desesperada de sus esquilas, los convocan para el exterminio, sin que ninguno de los que empuñó la horca, la espada, la pica, el hacha ó el fusil supiera el acto que iba á verificar y las causas ó pretextos que para verificarlo tenían?—Si eran criminales natos antes del crimen, es decir, si eran hombres que sólo con el crimen y para el crimen podían vivir, sin que en ellos pudiera tener acción la justicia, la policía, la familia, los negocios y todo lo que forman los frenos y los estímulos del hombre que vive en sociedad, no se concibe, ni la existencia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de esas treinta parroquias ni tampoco por qué antes del asalto de Poleymieux no habían enarbolado la bandera del exterminio. ¿Qué, dos mil bandidos, capaces nada más de los más horrendos crímenes, pueden vivir en paz sin ponerse de acuerdo para que al toque de rebato, como lo hicieron en Poleymieux asalten, pillen, incendien y asesinen?.... Es imposible aceptar la predisposición orgánica de estos asesinos y la fatalidad orgánica y criminal de su conducta. Antes del crimen eran lo que son en su clase todos los hombres; gentes sujetas á la rutina de la vida, que cumplen con su trabajo por miedo al hombre, que como su trabajo es de todo el día, éste lo ocupan en su tarea; que en los ocios de los domingos ó de las horas de la noche se entregan al descanso y que si en esas libertades de acción cometen un atentado, la policía interviene incontinenti para impedir que la infracción á un bando se convierta en un crimen, para impedir que el escándalo de un ebrio se convierta en asesinato.—Pero, de repente, aquellos hombres no tuvieron trabajo, la policía perdió su fuerza y el hambre excitó las potencias del hombre brutal, ignorante y sin ideales, ¿cuál fué la consecuencia?—El asalto de Poleymieux y todos los crímenes semejantes, que durante tres años y en las 40,000 comunas de la Francia se verificaron. A mi ver, el problema se reduce á estos términos: ó el hambre, la falta de trabajo y la enervación de las autoridades producen el delito; ó el crimen se tiene de presentar aunque la policía sea omnipotente, aunque las necesidades de conservación estén satisfechas y aunque la lucha por la vida en trabajos honestos quite todo el tiempo que el hombre en su vigilia necesita para preparar el mañana ó para descansar de su tarea.—El primer supuesto se convierte en un problema de dinámica social cuya solución es axiomática, ya sea que se plantee en términos concretos ó generales, ya sea que se trate de prever, explicar ó justificar la conducta de un individuo ó que se trate de historiar y analizar una época de crímenes al por mayor. Nadie que haya meditado un poco sobre la naturaleza humana dirá que los atentados contra la propiedad no se verifican cuando el hambre por una parte y la impotencia del poder público por el otro despiertan á la vez en la conciencia del hambriento el instinto brutal de la conservación, el desprecio á la justicia, y la confianza en el éxito del crimen; y esta solución terrible, axioma de criterio que la observación traza con signos de fuego en la negrura de las meditaciones de todos los hombres, cuando quieren delinquir ó cuando quieren prever y evitar el crimen, es el credo supremo que explica por qué el ratero arrebata el fistol de una corbata, por qué el salteador á hachazos y en cuadrilla derriba la puerta de una granja; por qué el banquero falsea los asuntos de su contabilidad y se fuga con los fondos en depósito; por qué el pirata y el corsario levantan su bandera negra en el horizonte neutral de los oceanos; por qué las guerras civiles tienen al bandolerismo como siniestro precursor, y por qué el pillaje es el heraldo infernal que tremola en las trincheras asaltadas el pendón del robo y del saqueo.

(Continuará).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LA ESCUELA POSITIVA DE DERECHO PENAL.

(Exposición sumaria de sus doctrinas).

Por el Lic. Carlos Díaz Infante, ex-Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.*

EL CRIMINAL.—(CONSTITUCION ORGANICA).

I

1.—Viendo la escuela clásica en el delito, si el producto de una voluntad perversa á la vez *incondicionada* ó *libre*, atributo este que, la psicología espiritualista tradicional supone concedido á todos los humanos, nada más natural que, dicha escuela, olvidara el estudio del delincuente, á quien considera en un todo semejante á los demás hombres no criminales, tanto por su manera de *pensar* como de *sentir*, pues, según las concepciones abstractas que informan el derecho penal clásico, lo mismo el hombre malvado y corrompido que el honrado y virtuoso, tienen *capacidad* para dejar de ser lo que son en el momento que así lo quieran, á virtud de un acto inmotivado, arbitrario y caprichoso de su libérrima voluntad. Así, para los continuadores de Beccaria y de Howard, el criminal no ha sido más que un desgraciado que, extraviado voluntariamente en los tortuosos senderos del delito, más que otra

* Véase la pág. 98.

cosa lo que merece es piedad y conmiseración por su extravío; por esto mismo, todo su afán ha sido procurarle el menor castigo posible por su crimen y el mayor bienestar y la mayor comodidad dables en el interior de las prisiones, empujando de esta manera, hasta el exceso, la reacción iniciada por aquellos dos eminentes filántropos, contra la crueldad y la infamia de las penas medioevales y el triste y repugnante estado de las cárceles de aquella época. Y como "el error ó la ilusión del espíritu, según Tavares de Medeiros, respecto de una idea fundamental, se proyecta en las últimas conclusiones de la ciencia con la misma facilidad con que se generaliza la impresión sobre un punto determinado de la periferia al transmitirse al organismo y convertirse en sensación;" de la misma manera, en el derecho penal clásico, cuando sus cultivadores fraguan y combinan la parte más esencial de ese derecho, la de la penalidad, ya busquen en la imposición del castigo la *compensación del mal moral causado por el delito ó la defensa del orden jurídico violado por ese mismo delito*, lo hacen bajo el yugo de aquella ilusión de que hablé al principio, reputan al delincuente como un hombre normal, y señalan penas á los delitos perfectamente catalogados; pero se les pasa por alto lo más esencial, la *individualización* del castigo según las distintas categorías antropológicas de delincuentes. El error de los clásicos ha consistido principalmeute en tratar de *proporcionar la cantidad de la pena á la cantidad del delito*, y no á la clase de delincuente que lo comete; error que ha traido consigo el fracaso, la impotencia de la penalidad hoy en vigor, hecho este plenamente evidenciado por la estadística criminal, la que ha venido á revelar de la manera más concluyente, no sólo el extraordinario aumento de la criminalidad, sino también la gran frecuencia de la reincidencia.

Ante el desenfrenado individualismo de las escuelas penal y penitenciaria clásicas, surgió espontáneamente la escuela positiva, como dique moderador de aquel torrente de simpatía excesiva y sentimentalismo exagerado hacia el delincuente,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tratando de armonizar los derechos del crimínal con los de la sociedad amenazada cada día más gravemente por la actividad maléfica de aquel. Y aquí es preciso consignar que, si á la sociología criminal los datos de la estadística le han servido de firmísima base para sustentar algunas de sus más importantes conclusiones, no menos útiles y necesarios le han sido los de la *antropología criminal*, ciencia contemporánea, de donde la *nueva escuela* penal ha tomado el nombre con que es generalmente conocida, ciencia aquella que, ha venido á poner de manifiesto esta fundamental verdad: que el *criminal* no es como la escuela clásica lo ha creido y lo sigue creyendo, un hombre normal que *piense* y *sienta* como los demás, sino que tanto por su *naturaleza orgánica* como *moral*, difiere del resto de los mortales.

Esta parte de mi estudio tiene, pues, por objeto dar á conocer las principales investigaciones y descubrimientos de los modernos antropólogo-criminalistas, acerca de los caracteres anatómicos, fisiológicos, patológicos y psíquicos del delincuente. Pero antes de exponer en detalle los factores antropológicos del delito, no carece de oportunidad indicar, aunque sea de una manera muy somera, lo que ha sido y es en la actualidad la *antropología criminal*.

2.—"La Antropología, según Tavares de Medeiros,[1] *es una ciencia general concreta que tiene por objeto el estudio del hombre sin restricción alguna*. Sus partes son ciencias antropológicas, denominadas y limitadas según el punto de vista particular en que nos coloquemos para estudiar al hombre y sus manifestaciones." El estudio del hombre delincuente constituirá, pues, una ciencia más en el vasto campo de la Antropología general, ciencia á la que con toda propiedad se ha llamado *Antropología criminal*, y que tiene por objeto hacer la *historia natural del hombre delincuente*, estudiándolo tanto en su constitución física como psíquica, y en su vida de relación con el medio físico y social; estudio este que demanda método antropológico, á fin de que determinados los caracteres propios del criminal, pueda establecerse segura comparación con los que presenta el hombre honrado, el loco y el degenerado.

1 Antropología y Derecho. Madrid, 1893, pág. 60.

Los estudios antropológicos acerca del criminal, comprendidos con verdadero método experimental y sistematizados y dirigidos á lograr los fines que acabo de indicar, son obra reciente; pero tales estudios, cuentan, sin embargo, con antiquísimos cultivadores, pues, como ya lo he dicho, siguiendo un pensamiento de Pascal: el hombre ha estudiado siempre al hombre. Según los autores, los que primero cultivaron la antropología, fueron Platón y Aristóteles, aunque yo encuentro que, si se ha de dar crédito á Cicerón, fué Zopyro, contemporáneo de Sócrates, pues refiere aquel famoso orador en su *Hado*,[1] que Zopyro pretendía conocer las costumbres y carácter de los hombres por la inspección del cuerpo, de los ojos, del rostro ó de la frente.

Haciendo á un lado las aberraciones y ridiculeces en que cayeron en la edad media, la Quiromancia, la Metoscopia y la Podomancia, se llega en el siglo XVII con Niquetius, Cortés, Della Porta y otros, á nuevos estudios fisonómicos, si menos imperfectos que los anteriores, tan empíricos como aquellos; pero estos investigadores fueron, en realidad, según lo asienta Ferri, los verdaderos precursores, por una parte, de las observaciones frenológicas de Gall y de su escuela; y por otra, de los estudios verdaderamente científicos de los Camper, los Bell, los Mantegazza y los Darwin, acerca de las emociones y de su expresión fisonómica y mímica.

Rolandis en 1835, Lauvergne en 1841, Attomyr en 1842, Sampson en 1846, Camper en 1854 y Ave Lallemant en 1858, publican trabajos en que el criminal es ya más directamente estudiado y en que se contienen importantes observaciones antropológicas; la obra de Ave Lallemant, sobre todo,

1 Obras y tomo citados, pág. 331.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

contiene observaciones psicológicas de verdadero valor, acerca del delincuente. Sin embargo, si entre estos estudios y los de los modernos antropólogo–criminalistas, puede establecerse ya cierto vínculo ó filiación, esto sólo se acentúa y marca con los trabajos de Winslow, Mayheu, Tompson, Wilson, Nicolson, Mansdley y Despine.

La Antropología criminal cuenta, como se ve, con antigua y dilatada genealogía, pudiendo citar, entre sus cultivadores más inmediatos, nombres de tal significación científica como los de Camper, Mansdley y Despine. Pero á pesar de esta antigüedad es, como ya lo he dicho, la ciencia más moderna, la contemporánea por excelencia, puesto que, su verdadero creador lo fué César Lombroso, actual profesor de Psiquiatria y de Medicina Legal en la Universidad de Turín. A él débese, como ya lo dejé sentado en el capítulo preliminar de este estudio, la observación del criminal con verdadero método antropológico, y él inicia, con la publicación de su *Hombre delincuente*, esa admirable, fecunda y no interrumpida serie de trabajos é investigaciones antropológicas, entre los que figuran en primera línea en Italia los del jefe de la escuela, los de Ferri, Marro, Ottolenghi y Roncoroni, Roncoroni y Ardú y Garofalo; en Francia, los de Lacassagne, Bordier, Corre, Manouvrier y Laurent; en Austria, los de Benedikt y los de Flesch; en Alemania, los de Knecht, Sommer, Sander y Kicter y Kraus; en Bélgica, los de Heger y Dallemagne; en Rusia, los de Bielakon y los de Froizki; en Portugal, los de Ferraz de Macedo; en los Estados Unidos, los de Mac Donald. En España y en la Argentina, Alvarez Taladriz, Silió y Bortes y Drago, se han mostrado decididos campeones de la nueva escuela penal.

3.—Antes de emprender el estudio de los caracteres orgánicos psíquicos del criminal, y á fin de que se vea con toda claridad cuál es la función que en la moderna ciencia penal desempeñan los datos de la antropología criminal, voy á transcribir la opinión y parecer de Ferri á este respecto:

"Es preciso, dice el citado penalista,[1] distinguir perfectamente el valor técnico de los datos antropológicos sobre el hombre criminal y su valor científico en la sociología criminal."

"Para el antropólogo–criminalista, que hace la historia natural del criminal, cada carácter tiene un valor anatómico ó fisiológico ó psicológico por sí mismo, haciendo á un lado las conclusiones sociológicas que de ellos se pueden deducir. La investigación técnica de estos caracteres bio–psíquicos es la obra característica de la nueva ciencia de la Antropología criminal."

"Pero estos datos que para el antropólogo no son más que el punto de llegada, para el sociólogo criminalista son, por el contrario, los que le sirven de punto de partida para sus conclusiones jurídicas y sociales. La antropología criminal es á la sociología criminal, por su función científica, lo que las ciencias biológicas de descripción y de experimentación, son á la clínica."

"Es decir, por una parte el sociólogo–criminalista no tiene el deber científico de hacer él personalmente las investigaciones de antropología criminal; como el clínico no tiene la obligación de ser fisiólogo ó anatómico. Ciertamente la observación directa del criminal es un estudio muy útil aun para el sociólogo–criminalista: pero el deber de éste se reduce á poner como base de sus inducciones jurídicas y sociales, los datos positivos de la antropología criminal, para el lado biológico del crimen, y los de la estadística para las influencias del medio físico y social, en lugar de hacer solamente silogismos jurídicos abstractos."

"Por otra parte, es evidente que varias cuestiones que interesan directamente á la antropología criminal, por ejemplo, con motivo de tal ó cual carácter biológico, ó de su interpretación evolutiva, no tienen un vínculo y un valor inmediato para la sociología criminal, que no toma más que los datos *fundamen-*

1 Obra citada, pág. 29.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tales y más *ciertos* de la antropología criminal. De suerte que, se sienta muy mal la cuestión cuando se pregunta: "qué relación puede existir entre el índice cefálico, ó el diámetro mandibular de un asesino y su responsabilidad por el crimen cometido." La función científica de los datos antropológicos es muy diferente: la sola cuestión que legítimamente puede poner la sociología á la antropología, es esta: ¿el criminal es, y en qué casos un hombre normal ó anormal? y si es anormal ¿de dónde viene su anormalidad? ¿es ésta innata ó adquirida? ¿corregible ó incorregible?"

"Esto es todo; lo que, sin embargo, basta al criminalista para sacar conclusiones positivas sobre los medios de defensa social contra el crimen, como saca otros de la estadística criminal."

II

CRÁNEO.

4.—La naturaleza propia de las cosas obliga á estudiar, antes que la constitución psíquica del criminal, la orgánica; porque como lo hace notar Corre:[1] "El hombre, se dice, es una inteligencia servida por órganos. Esto no es verdad, sino hasta cierto punto. La inteligencia es la resultante de las actividades propias de un órgano: el cerebro, y por medio de él, es como aquella puede pretender, con algún derecho, el mando de la máquina humana. Esta es un compuesto de ruedas, puestas en juego por el cerebro. Luego en el cerebro y en la bóveda craneana, que lo protege y sigue su desarrollo, es donde debemos buscar la expresión más íntima de las modalidades individuales. Pero, lo mismo que el amo hace á sus servidores á su manera de ser y de obrar, la cabeza imprime su sello á todo el resto del cuerpo, y no hay una parte del organismo donde no se pueda encontrar algún indicio de las tendencias

1 Les Criminels. París, 1889, pág. 1.

y costumbres de cada uno. *El examen físico precede así naturalmente al examen psicológico,* en el estudio comparativo de los criminales y de aquellos que les son opuestos." De donde resulta igualmente que, el examen anatómico del delincuente, debe empezar por el estudio de los caracteres que presenta su cabeza.

5.—*Capacidad craneana.*—Lombroso, examinando 121 cráneos de criminales italianos y 328 de italianos no criminales, llegó á este resultado: que, las capacidades inferiores—1,101 á 1,200 c. c.—son frecuentes entre los primeros, es decir, entre los delincuentes; las capacidades medias existen en la misma proporción entre éstos y los hombres honrados y las capacidades superiores—1,700 c. c. ó más—hacen del todo falta entre los criminales.

Ferri ha encontrado, con una capacidad media inferior, entre los criminales, un máximum relativo entre los asesinos y los autores de golpes y lesiones, un mínimum entre los estafadores y salteadores de camino. Benedikt confirma en su conjunto este resultado.

Los resultados obtenidos por Lombroso, han sido contradichos, principalmente, por las observaciones de Ardonine, Ten Kate y Pawlowski, Bordier, Manouvrier y Heger y Dalemagne; pues el primero de estos autores fija, para los asesinos, una capacidad de 1,654 c. c.; para los ladrones, de 1,627, y para los autores de violación, de 1,593 c. c.; y los últimos de los autores en cuestión, expresan el resultado de sus investigaciones en una serie de cráneos de asesinos belgas, de la siguiente manera:[1]

	Capacidad craneana.
Asesinos de Bruselas.....	1,538 c. cúbicos.
„ „ Gante.....	1,553 „ „
„ „ Lieja.....	1,487 „ „
Belgas normales.....	1,490 „ „

1 Corre. Ob. cit. pág. 21.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Los distintos resultados á que los observadores han llegado, al tratar de investigar la capacidad craneana de los criminales, explícalos Manouvrier, tanto por los distintos procedimientos que aquellos emplean al cubicar los cráneos, como por el reducido número de series observadas.

Lo que sí parece establecido es, que los asesinos presentan capacidades superiores á la media ordinaria, y los ladrones, por el contrario, capacidades inferiores.

6.—*Peso del cráneo.*— Corre[1] enseña que, este peso, con corta diferencia, es igual en el asesino y el hombre distinguido mínimo, medio y máximo, y que el hombre ordinario supera en dichos pesos, tanto al hombre criminal como al honrado, según es de verse por los datos siguientes:

1 Corre. Ob. cit. pág. 20.

	Asesinos	Hombres ordinarios.	Hombres distinguidos
Peso mínimo	470 grams.	472 grams.	450 grams.
Peso medio	654 „	700 „	656 „
Peso máximo.....	838 „	929 „	873 „

7.—*Circunferencia craneana horizontal total.*— Esta circunferencia entre los europeos normales es, en el hombre, por término medio, de 525 milímetros; en la mujer, de 498. Lombroso, Ten Kate y Pawlowski, Ferri, Corre y Bordier, están acordes en afirmar, en vista de las observaciones que han hecho que, entre los criminales, dicha circunferencia es más reducida, es menor; sólo Heger y Dallemagne, aseguran lo contrario para sus asesinos, según es de verse por los datos siguientes:

	Circunferencia total.
Belgas normales de Bruselas....	525 milímetros.
Asesinos de Bruselas.....	534 „
„ de Lieja.....	529 „
„ de Gante.....	527 „

El asesino del Presidente Garfield, Guiteau, y Cognard, el matador probable del Conde Pontis de Saint–Héléne, tenían

respectivamente la circunferencia de que me vengo ocupando de 521 y 520 milímetros.

8.—*Comparación de las semicircunferencias horizontales.*— Esta comparación no cabe dudarla, ofrece mucha mayor importancia que las anteriores investigaciones, dado que, como lo hace notar Corre, la apreciación de los actos cerebrales no puede basarse ni en la capacidad absoluta, ni en la circunferencia total del cráneo; pues "un cráneo pequeño puede contener un cerebro de gran capacidad intelectual, si este órgano ofrece un desarrollo predominante de los centros *nobles;* y por el contrario, un cráneo grande bien puede no encerrar más que un cerebro de ínfimo valor intelectual, si presenta un desarrollo predominante de los centros *animales.*" Y aunque hasta hoy no han podido ser localizadas las funciones cerebrales, sin embargo, sábese con certidumbre que, la parte anterior del cerebro, los lóbulos frontales son el asiento de las manifestaciones psíquicas más elevadas; que en esa parte de los hemisferios cerebrales se elaboran los verdaderos actos intelectuales; que en ellos radica la actividad racional que caracteriza al hombre: por el contrario, la parte posterior del cerebro, que corresponde en el cráneo á las regiones parieto–occipitales, es el sitio de las manifestaciones sensitivo–motrices; en ella se elaboran los actos instintivos y puramente afectivos del individuo. Las investigaciones en el sentido de comparar, las partes del cráneo que contienen las regiones del cerebro, relativas á la inteligencia, son las que cubren las que producen los instintos é impulsos en el hombre; ofrecen, pues, verdadera utilidad científica, porque esa comparación hace posible valorizar, ya la predominancia de la parte inteligente sobre la parte generadora de los instintos en el hombre, ya lo contrario.

De tal comparación ha resultado lo que algunos autores llaman el *tipo frontal* y el *tipo parieto–occipital:* el individuo que presente ó pertenezca al primero, será más inteligente, y si cabe decirlo, más humano que el que presente el segundo,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pues éste será más instintivo é impulsivo, menos humano. Ahora bien; tratándose de los criminales, ha quedado establecido de una manera concluyente por las observaciones de Corre, Heger y Dullemagne, Ten Kate y Pawlowski, Lombroso y Bordier, que aquellos pertenecen al segundo de los referidos tipos.

Así, Corre relacionando á 100 la circunferencia horizontal total del cráneo, encontró que, la semicircunferencia anterior en los autores de los delitos que á continuación se expresan, tenía los tamaños siguientes:

Violación	39.03
Homicidio bajo influencia genésica	41.10
„ bajo diversas influencias	43.20
„ premeditado	42.30
„ y robo	40.00 (?)
„ seguido de suicidio	39.29

La propia semicircunferencia en la serie de asesinos de Bordier, es de 44.75, inferior todavía que en el cráneo de la caverna del Hombre-Muerto, que es de 45, y con mucho inferior á la del parisiense moderno, que es de 48.

Heger y Dallemagne confirman las investigaciones de Corre y de Bordier sobre este particular, según es de verse por los datos siguientes:

	Semicircunferencia anterior.	
Belgas normales de Bruselas	248	milímetros.
Asesinos de Bruselas	244	„
„ de Lieja	240	„
„ de Gante	236.4	„

	Semicircunferencia posterior.	
Belgas normales de Bruselas	277	milímetros.
Asesinos de Bruselas	290	„
„ de Lieja	289	„
„ de Gante	291.2	„

9.—*Curva transversa supra-auricular.*—Esta curva corresponde á las regiones parieto-temporales del cerebro, y sobre todo á la parte que cubre las circunvoluciones parietales ascendentes. Heger y Dallemagne la reputan mayor en los criminales que en los normales; Ten Kate y Pawlowski piensan, por el contrario, que es inferior.

Siendo esta curva, según Broca, en los parisienses contemporáneos de 312.4$^{mm.}$ en los hombres y de 291.5 en las mujeres, Corre da para los autores de delitos graves las cifras siguientes:

	Medio.	Mínimo.	Máximo.
Violación	287.5$^{mm.}$	310$^{mm.}$	265$^{mm.}$
Homicidio bajo influencia genésica	295 „	300 „	290 „
„ „ diversas influencias	304 „	328 „	290 „
„ y robo	310 „	— „	— „
„ calificado (premeditación)	309 „	325 „	300 „
„ seguido de suicidio	288 „	— „	— „

Si posteriores investigaciones vinieren á confirmar la superioridad de esta curva en los criminales, tal resultado vendría á robustecer las pruebas que ya se tienen sobre las tendencias impulsivas de aquellos.

10.—*Curvas medianas antero-posteriores.*—Estas curvas son: la *frontal sub-cerebral*, la *frontal cerebral*, la *parietal*, la *occipital* y la *cerebelosa*. Han sido medidas por Broca en parisienses contemporáneos, y por Corre, Ardowine, Ten Kate, Pawlowski y Bordier en criminales. Los resultados á que han llegado estos autores en sus observaciones se encuentran anotados en la tabla siguiente, tabla que tomo de la obra de Corre que he venido citando. (Pág. 34).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CURVAS PARCIALES	BROCA		TEN KATE y PAWLOWSKY		Corre.	Ardowine.	Bordier.	Suicidas.	Términos medios de los criminales de las diversas series.
	Parisienses contemporáneos		Criminales.						
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres					
Frontal sub-cerebral.	18.1	16.5	22.3	20.0	18.6	19.0	26.0	20.0	21.5
Frontal cerebral.....	110.9	106.1	104.8	99.8	103.1	97.0	99.0	105.9	100.7
Parietal	126.3	121.4	124.0	120.2	122.8	125.0	127.0	126.9	123.8
Occipital	71.5	68.5	67.6	67.0	68.1	119.0	117.0	65.2	87.7
Cerebelosa.....	47.9	46.1	48.0	41.4	46.5	—	—	45.4	45.3

Francotte,[1] comentando los anteriores datos, se expresa en estos términos: "Si analizamos estas cifras, reconocemos con Corre que, entre los criminales, la curva cerebelosa y la curva parietal son casi idénticas á las de los sujetos ordinarios; pero que, entre los primeros hay predominancia notable de las curvas sub-cerebral y occipital y aminoramiento no menos notable de la curva frontal-cerebral. La predominancia de la curva occipital acusaría la predominancia de los lóbulos occipitales, es decir, la de la actividad sensitivo-impulsiva. El aminoramiento de la curva frontal-cerebral significaría la diminución de los lóbulos frontales y de su actividad, que es del todo intelectual y ponderatriz."

"El examen de las curvas antero-posteriores parciales, vendría, pues, á confirmar las enseñanzas suministradas por la comparación de la semicircunferencia horizontal anterior y de la semicircunferencia horizontal posterior, y permitiría á su vez colocar al criminal en el tipo occipital."

A este comentario nada hay que agregar, porque viene de un autor nada sospechoso para los adversarios de la antropología criminal, supuesto que se encuentra filiado entre ellos.

La suma de las anteriores curvas ó sea la *curva mediana*

1 L'Antropologie criminelle. París, 1891. Pág. 26.

cerebral total, es entre los asesinos de 297.15 milímetros y de 308.77[mm.] entre los normales, resultando de esto una diferencia á favor de los últimos de 112[mm.]; de esta diferencia, según Manouvrier, corresponden 92[mm.] á la curva frontal cerebral. Por lo que, dice Corre:[1] "Este hecho, unido á la menor circunferencia horizontal—sobre todo en la parte anterior—y también al menor desarrollo de la curva transversa supra-auricular, acaba por establecer que, el volumen del cráneo del criminal, á pesar de la contradicción de ciertas cifras relativas á la capacidad, es inferior al volumen del cráneo del no criminal; y esto es tanto más de notar cuanto que, la diminución parece tener lugar principalmente á expensas del cráneo anterior ó intelectual."

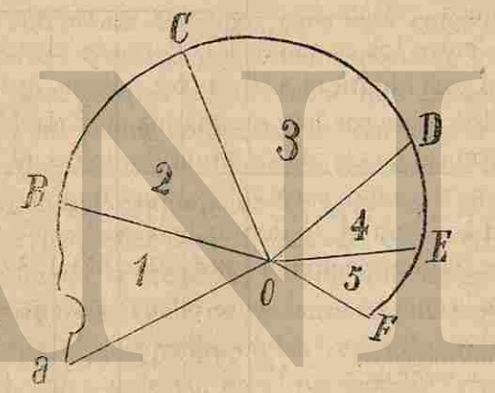


Fig. 1ª—Angulos auriculares.

11.—*Angulos auriculares.*—Al eminente profesor Broca, uno de los creadores de la Antropología, se le debe el primero, la medición de estos ángulos, que son: el *orbito-nasal*, el *frontal*, el *parietal*, el *occipital* y el *cerebeloso*. Estos ángulos tienen por vértice común el agujero auditivo o,—fig. 1ª—y miden los arcos de círculo comprendidos entre sus radios que, en el primero de aquellos, van á terminar en el punto alveolar A y en el supra-orbitario B, en el segundo en este último pun-

1 Ob. cit., pág. 39.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

to y en el bregma C, en el tercero en el bregma y en el lambda D, en el cuarto en el lambda y en el inión E y en el quinto en el inión y en el opistión F. Broca trazó los radios de los ángulos en cuestión, después de haber obtenido dibujos, por medio de su craneógrafo ó estereógrafo, del cráneo en que verificaba sus estudios; pero dichos radios pueden también trazarse directamente haciendo uso del instrumento, invención de Bernard Davis.

Los trabajos del Dr. Manouvrier sobre los ángulos auriculares, han sido reasumidos por el Dr. Corre en la tabla que pongo á continuación:

	ANGULOS AURICULARES.					
	Orbito-nasal.	Frontal.	Parietal.	Occipital.	Cerebeloso.	Cerebral-total.*
Gorila	61°	35°	58°	—	—	—
Chimpance	59.5	35	54	19°	43°	108°
Microcéfalos	52.5	41.2	59 3	36.5	35.7	138.5
Idiotas no microcéfalos	47.5	44	62 5	38.3	32.3	144.6
Neo-caledoneos (hombres)	—	49	63	36	30	148
,, ,, (mujeres)	—	52	61	32	27	145
Negros africanos	43.3	51.4	61.7	36.6	35.1	155
Asesinos franceses (22)	51.8	50.9	67.1	40.9	29 9	153.5
Parisienses modernos (hombres)	50.3	54.6	59 7	40.1	30.6	154.4
,, ,, (mujeres)	48.5	55.4	59.8	37.7	30.1	152.9

* El ángulo cerebral total comprende: los ángulos frontal, parietal y occipital, que corresponden á la progresión del cráneo cerebral.

Para la interpretación de las anteriores cifras me sirvo de Corre,[1] quien á su vez transcribe la interpretación que de ellas da el propio Dr. Manouvrier.

"El cuadro anterior, dice este autor, muestra con evidencia que, el ángulo *frontal* se eleva á medida que se sube de los antropoides á las razas humanas superiores y que los asesinos están mal dotados bajo este concepto."

"La pequeñez del ángulo frontal de los asesinos los iguala casi al nivel de las razas más inferiores. Sin embargo, justo es observar que, el ángulo frontal no da la medida del desarrollo de la región frontal, más que en el sentido antero-posterior. Es cierto que teniendo en cuenta el desarrollo transversal, los asesinos franceses se elevarían hasta nivelarse con los negros y aun arriba de éstos; pero esta consideración no tiene razón de ser si se comparan los asesinos á los hombres de su misma raza, porque la diferencia que presentan en su ángulo frontal no puede compensarse con mayor desarrollo en anchura. Al contrario, el diámetro transverso frontal mínimo es también más pequeño en los asesinos—96.3 en lugar de 100.—Esta pequeñez de la frente de estos criminales es tanto más de llamar la atención, cuanto que no se encuentra sino una pequeña diferencia en los otros ángulos ó líneas que pueden expresar el desarrollo de las regiones frontal y occipital-cerebral. Se puede ver en el precedente cuadro que, el ángulo auricular-parietal es un poco más grande entre los 22 asesinos que entre los parisienses; pero la curva transversal ó supra-auricular es un poco más pequeña 308$^{mm.}$ en lugar de 312; lo que puede ser que restablezca la igualdad para la región parietal. Un hecho, sobre el que creo debo llamar la atención, consiste en el valor un poco menor del *ángulo cerebral total*[2] en los asesinos. La suma de todos los ángulos frontal, parietal y occipital total, es menor en los asesinos que en

1 Ob. cit., págs. 41 á 45.

2 La suma de todos los ángulos auriculares, excepto el ángulo cerebeloso, es lo que forma el ángulo *cerebral total*.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

los parisienses. Es evidente que, la longitud absoluta de la bóveda craneana, con relación al agujero auditivo, centro común de los ángulos auriculares, no desciende adelante y atrás más bajo que dicho agujero; de suerte que, una línea recta terminando en los puntos extremos de aquella bóveda, el punto supra-orbitario y el opistión, tiende á pasar arriba ó más bien á aproximarse á este agujero, caso en el que, la suma de fos ángulos auriculares sería inferior á 180°. Pero, puesto que la parte anterior y la parte posterior de la bóveda craneana, descienden menos bajo la una que la otra con relación al agujero auditivo, síguese que, el eje antero-posterior del cerebro entre los asesinos tiende á aproximarse á la dirección rectilínea. Esto constituye incuestionablemente un carácter de inferioridad, porque la encurvación del eje cerebral es debida al mayor desarrollo de sus partes anterior y posterior con relación á su parte media ó parietal, que es tan predominante entre los microcéfalos, entre los antropoides y entre los cuadrúpedos. El resultado de la falta de proporcionalidad entre el desarrollo de la región parietal y de las regiones anterior y posterior del cráneo, se traduce en que el agujero occipital y la base de la frente suben en las especies y los individuos cuyo desarrollo frontal y occipital no va de acuerdo con el parietal. Así se explica el movimiento de báscula que se observa en los antropoides cuando pasan á ser adultos. La región parietal se agranda, y el agujero occipital, que estaba situado en la parte inferior del cráneo, como en el hombre, se transporta á la región posterior. Esto mismo parece que pasa entre los asesinos, aunque en menor grado, según las cifras de Orchanski. La elevación del punto supra-orbitario y del opistión con relación á la base del cráneo, me parece expresada de una manera sorprendente, por los ángulos auriculares. Resulta de esta doble elevación, ó más bien de la falta de descenso de las partes anterior y posterior de la bóveda craneana que, el *ángulo esferoidal* debe ser mayor entre los asesinos. El ángulo esferoidal, en efecto, no expresa otra cosa

que el grado de encurvación de la base del cráneo. Supongo que esta fué la idea que Virchow y Weleker tuvieron cuando imaginaron y midieron dicho ángulo. En todo caso, lo que debo hacer notar, porque esto contribuye mucho á aumentar el valor craneológico de los ángulos auriculares de Broca, es que, estos ángulos sirven, no solamente para medir el desarrollo de las regiones facial, frontal, parietal y occipital, sino que sirven también para medir, sobre la bóveda craneana misma, el grado de encurvación de esta bóveda; lo mismo que el ángulo esferoidal mide la encurvación de la base del cráneo. Además, los ángulos auriculares presentan sobre el ángulo esferoidal la gran ventaja de hacernos saber á expensas de qué parte del cerebro y del cráneo se produce la diminución de las curvas craneana y cerebral."

La encurvación de que se acaba de hacer mérito, según el Dr. Corre, es menos pronunciada en la mujer que en el hombre, pero á expensas de la parte posterior del cráneo; mientras que en el asesino, ya se ha visto que tiene lugar á expensas de la parte frontal.

12.—*Diámetros principales del cráneo.*—Estos diámetros, que son seis, llevan los siguientes nombres: *antero-posterior máximo, transversal máximo, vertical* ó *basilo bregmático, transverso frontal mínimo* ó *inferior, transverso frontal superior* ó *estefánico* y *occipital máximo.*

El primero de estos diámetros va de la glabela al punto más distante del cráneo por detrás, punto que el Dr. Topinard ha llamado *occipital máximo.* Morton, Retzius, Davis, Broca, Virchow y Ecker han tomado de la manera indicada el diámetro en cuestión. El segundo se mide transversalmente y máximo, como su nombre lo indica, sean cuales fueren los puntos donde caiga. Así han medido este diámetro, entre otros, Broca, Morton y Retzius. El tercero se toma de distintas maneras; pero la más usada es la que empleó Broca; en este caso, el punto inferior del diámetro corresponde al *basión,* y el superior al *bregma.* El cuarto se mide de los dos puntos más próximos de la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cresta temporal, sobre las apófosis orbitarias externas. En las razas blancas el punto superorbitario queda generalmente situado en el centro de este diámetro. Broca, Mantegazza y otros han medido este ángulo de la manera que se acaba de indicar. En el quinto y sexto respectivamente, sus puntos extremos tocan en los *estefaniones* y los *asteriones*.

El cuadro puesto á continuación da á conocer los resultados de las mediciones de estos diámetros, efectuadas por Broca en parisienses contemporáneos, y por Ten Kate, Pawlowski y Corre, en criminales:

DIAMETROS.	BROCA.		Ten Kate y Pawlowski.		CORRE.						
	PARISIEN. CONTEMPOR.		CRIMINALES								
	Hombres.	Mujeres.	Hombres.	Mujeres.	Homi. por influencia genésica.	Homi. por diversas influencias.	Homicidio y robo.	Homi. y suicidio.	Homi. calificado.	Violación.	Medios de la serie
Ant. post. máximo.....	182.7	174.3	178.8	170.0	182.6	184.0	175.0	168.0	183.0	175.5	178.0
Transverso máximo.....	145.2	135.5	144.2	136.8	142.6	143.2	146.0	139.0	146.0	143.0	143.3
Vertical.....	132.0	125.1	131.6	121.2	127.6	132.0	136.0	131.0	131.3	130.0	131.3
Trans. fron. mínimo....	100.0	93.2	97.7	94.4	98.0	98.8	108.0	100.0	100.0	107.0	101.9
„ „ máximo....	121.7	113.1	113.2	108.4	120.0	115.4	129.0	129.0	123.5	121.0	122.9
Occipital máximo.....	112.5	106.5	113.8	117.6	113.3	114.8	122.0	120.0	116.3	110.5	116.1

Sucede, pues, que en la serie de Ten Kate y Pawlowski los diámetros antero–posterior máximo, transverso máximo y vertical, y en la de Corre el primero y último de estos diámetros, son más cortos en los criminales que en los que no lo son; pero como de estos tres diámetros depende la capacidad craneana, se tiene que su diminución trae consigo la diminución de dicha capacidad. Además, se nota en la serie de Ten Kate y Pawlowski la predominancia del diámetro occipital máximo, y en la de Corre la de este diámetro y el transverso máximo

esencialmente parietal; por lo que este autor[1] pregunta: "¿Pero los caracteres de que se acaba de hablar, existen con una diminución de los elementos de la frente? O mejor dicho, ¿el aminoramiento general del volumen craneano resulta, según el estudio de los diámetros y según el de las curvas, de la reducción del cerebro anterior, de la reducción de la región frontal? Ten Kate y Pawlowski, Bordier y otros observadores suministran cifras en favor de la afirmativa. Ferri, sobre todo, insiste en la inferioridad del diámetro frontal mínimo en todos los criminales; bajo este concepto, dice, los asesinos están abajo de los salteadores de caminos, los ladrones ordinarios abajo de los delincuentes de golpes y heridas; los estafadores presentan el mayor diámetro frontal."

"En cuanto á las cifras suministradas por la columna del homicidio calificado—premeditación—sin duda que se podría buscar la interpretación de la ligera predominancia frontal que expresan, en la especie de criminalidad de que se trata, que supone el cálculo y largos razonamientos; por otra parte, dichas cifras coinciden con dimensiones infra–normales de la curva frontal mediana."

13.—*Indices: cefálico, vertical, frontal y cefálico espinal.*—El *índice cefálico* expresa la relación del diámetro transverso máximo con el diámetro antero posterior máximo; su fórmula es: $\frac{\text{D. trans. máx.} \times 100}{\text{D. ant. pos. máx.}}$. Este índice da á conocer la forma más ó menos alargada ó redonda del cráneo. En los términos medios de las series varía en las distintas razas humanas de 71.40 á 85.63, y para los casos particulares de 62.62 á 92.77; variación que es mayor si se trata de cráneos deformados, pues un escafocéfalo del laboratorio de Antropología de París presenta un índice de 56.33, y un peruano de Ancon el de 103.

"Los índices extremos, dice Topinard,[2] corresponden á los cráneos largos ó *dolicocéfalos* de Retzius y á sus cráneos redondos ó *braquicéfalos:* entre los dos faltaba un término para

1 Obra citada, pág. 48.
2 Antropología. Barcelona, 1891, pág. 148.

designar los cráneos medios, y Broca los llamó *mesaticéfalos;* pero siendo demasiado vasta en la práctica la escala recorrida por los grupos extremos, Broca añadió dos denominaciones: la de *subdolicocéfalos* para los cráneos menos largos, y la de *sub–braquicéfalos* para los menos redondos, resultando así cinco divisiones, cuyos límites fija del modo siguiente:

INDICES CEFALICOS.

Dolicocéfalos	75.00 y menos.
Subdolicocéfalos	75.01 á 77.77
Mesaticéfalos	77.78 „ 80.00
Sub–braquicéfalos	80.01 „ 83.33
Braquicéfalos	83.34 y más."

Por mucho tiempo, y debido á Retzius, se tuvo la creencia de que las razas superiores eran *dolicocéfalas* y las inferiores *braquicéfalas;* pero esta creencia resultó errónea al averiguarse que, los vascos y los cráneos fósiles más antiguos son *dolicocéfalos*, y que también lo son, por regla general, las razas negras, pues hasta hoy no se ha encontrado raza alguna *braquicéfala*, entre los negros de Oceanía.

En cuanto á los criminales, su cráneo se encuentra indistintamente colocado en todas las anteriores divisiones y subdivisiones, pues Bordier, en su serie de asesinos franceses, halló que sus cráneos son *mesaticéfalos*, inclinándose á la *dolicocefalia;* Corre, que los asesinos y envenenadores son *sub–braquicéfalos*, lo mismo que los incendiarios; y en la serie de Ten Kate y Pawlowski los cráneos son francamente *braquicéfalos*—83.9 en los hombres y 84.8 en las mujeres.—De donde resulta cierta esta observación de Lombroso:[1] "En cuanto al índice cefálico, todo lo que se puede deducir de nuestros cálculos es, que sufre siempre la influencia regional exagerándola: braquicefalía exagerada en el Piamonte, dolicocefalía en la Sicilia, la Cerdeña y la Calabria."—"De todo esto no se

1 Ob. cit., pág. 154.

puede deducir, lo repito, otra cosa, si no es que hay en los criminales una tendencia á la exageración de los índices étnicos."

El *índice vertical* da la forma del cráneo, según un corte antero–posterior del mismo, que lo dividiría en dos mitades laterales; este índice expresa la relación del diámetro vertical al antero–posterior máximo; su fórmula es: $\frac{\text{D. vertical} \times 100}{\text{D. ant. post. max.}}$.

Según Broca, el índice en cuestión, es, entre los parisienses modernos, de 72.2 en los varones y de 71.7 en las hembras. Es más alto en las razas inferiores que en las superiores, con excepción de la raza de la caverna del Hombre Muerto. En los criminales, según Bordier, Ardowine y Orchanski, es más grande que en los no criminales pertenecientes á la misma raza. Sin embargo, Heger y Dallemagne, en su serie de asesinos, encontraron el índice vertical de 69.00, siendo así que en los belgas no criminales es de 71.00. Lombroso estima que este carácter es muy variable entre los criminales, y que, por lo mismo, no tiene importancia.

El *índice frontal* da á conocer el desarrollo de la parte anterior del cráneo; su fórmula es: $\frac{\text{D fron. min.} \times 100}{\text{D. trans. max.}}$; por lo mismo, expresa la relación del diámetro frontal mínimo y el transverso máximo.

Las mediciones de este índice en los criminales no han dado á Lombroso resultados bastante satisfactorios, para que pudiera decirse que exista una diferencia bien clara entre los índices frontales de aquellos y los de las personas normales. Sin embargo, el autor de que se trata asegura que, los cráneos de criminales presentan con alguna más frecuencia índices frontales más cortos que los no criminales.

La introducción en craneometría del *índice cefalo–espinal*, débese al ilustre antropólogo Mantegazza. Obtuvo este índice relacionando la superficie del agujero occipital expresada en milímetros cuadrados, con la capacidad craneana tomada en centímetros cúbicos, suponiendo ésta igual á 100. En 200 cráneos de todas especies los índices más elevados fueron de 29.64 y 27.26, y los más bajos de 13 07 y 12.50. En los an-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tropoides el índice mayor fué de 8.35. Las razas inferiores se acercan bajo este concepto á los antropoides, pues siendo el índice en cuestión en los italianos de 19.9, en los negros sólo es de 16.8.

En los criminales el índice de que se trata los hace aproximarse á las razas inferiores, pues segun Varaglia y Silva, en 60 mujeres delincuentes encontraron que este índice media, por término medio, 17.7. En las culpables de violación el índice bajó á 16.6, en las de incendio á 16.7 y en las envenenadoras subió á 18.0.

14.—*Deformaciones patológicas del cráneo y asimetrías craneanas.*—Las deformaciones patológicas del cráneo son consecuencia, ya de la perversión ó paralización en el desarrollo general ó parcial del cerebro—*microcefalía,*—ya de la producción exagerada de líquido en la cavidad craneana—*hidrocefalía;*—pero en la mayor parte de los casos débense á las sinóstosis de las suturas de los huesos, sobrevenidas durante la infancia. A esta última causa obedecen principalmente: la *acrocefalía* ú *oxicefalía*, la *tracocefalía*, la *macrocefalía*, la *plagiocefalía*—deformación oblicua ovalar de Virchow,—la *escafocefalía*, etc. etc.

Las deformaciones patológicas del cráneo, son muy frecuentes entre los criminales: se puede juzgar de esta frecuencia por las cifras que tomó á los autores nombrados á continuación:

Bordier asegura que, en su serie de cráneos de asesinos, el 58.53% eran francamente patológicos.

Lombroso [1] da cuenta de las siguientes deformaciones:

Plagiocefalía	23.1%
Trococefalía	9.0 „
Subscafocefalía	6.1 „
Oxicefalía	4.5 „

1 Obra cit., pág. 165.

Rossi: [1]

Oxicefalía	5.0%
Platicefalía	5.0 „
Scafocefalía	4.0 „
Plagiocefalía	5.0 „

Roncoroni y Ardú: [2]

Plagiocefalía parcial	36.8%
„ total	20.7 „
Microcefalía	29.9 „
Platicefalía	16.1 „
Trococefalía	9.2 „

Salsotto, en 130 ladronas pudo observar que, 29 eran oxicéfalas y 9 platicéfalas. Ottolinghi y Roncoroni, en 100 criminales observaron que, 12 padecían una enorme plagiocefalía.

Troyski, [3] en mi concepto, ha dado mayor utilidad á sus trabajos, porque no se limitó á medir cráneos de criminales, sino que lo hizo también con cráneos normales y de psícopatas, resultando de la composición que al efecto hizo que, las deformaciones craneanas puestas en seguida, se encuentran repartidas en las distintas clases de los individuos mencionados, en las siguientes proporciones:

	Cráneos normales.	Cráneos de criminales.	Cráneos de psícopatas.
Platicefalía	0.0%	3.0%	6.6%
Subplaticefalía	30.0 „	22.0 „	18.0 „
Mesocefalía	43.3 „	31.7 „	21.6 „
Ipsicefalía	26.6 „	31.7 „	28.0 „
Oxicefalía	0.0 „	10 3 „	15.6 „

1 V. Lombroso. L'Antropologie. París, 1890, pág. 41.
2 V. Lombroso. Nouvelles recherches. París, 1892, pág. 15.
3 Lombroso. L'Homme criminel, pág. 221.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La *asimetría del cráneo*, que se caracteriza por la predominancia lateral de ciertas regiones, ó lo que es lo mismo, por el hundimiento relativo de las regiones opuestas, Corre la observó en autores de delitos de sangre, en la proporción de un 60%; en los de falsificación y quiebra fraudulenta un 63.6%; en los de robo un 67.5% y en los de atentados contra las buenas costumbres un 70.3%. Lombroso [1] en los hombres criminales la encuentra en la proporción de un 42.% y en las mujeres delincuentes en la de 21.%. En uno y otro caso es más frecuente la asimetría craneana entre los criminales que entre los que no lo son, toda vez que, en estos últimos, la proporción es: de 20.% en los varones y de 17.2% en las hembras.

Hablando el Dr. Corre de las deformaciones craneanas, se expresa en estos términos: "Cierto número de deformaciones craneanas tienen sin duda su origen en el cerebro. "El cerebro, ha dicho Broca, es el regulador del cráneo, y toda afección que, en el feto ó en el niño, altera gravemente la forma de la masa encefálica, produce necesariamente una deformación de la bóveda craneana." No hay que sorprenderse, pues, de la existencia entre los criminales de deformaciones de este orden, si se piensa en su origen y en las condiciones de su primera infancia. Varios tienen por padres, enajenados ó alcohólicos, ó bien seres que se señalan por sus costumbres anormales ó sospechosas. Muchos se inician en el libertinaje y el ocio desde que su inteligencia experimenta su primer despertar. ¿Cómo admirarse de que en semejantes condiciones los hemisferios cerebrales reciban, por transmisión hereditaria, ó adquieran, en una época en que el tipo es aún tan maleable, desviaciones que se traduzcan en las paredes de la cubierta? Con más frecuencia, sin embargo, el origen de las deformaciones craneanas será osteológico. Pero aun en estos casos, se encuentra la influencia hereditaria y la de las deplorables condiciones del medio en los primeros años de la vida. Muchos

1 Ob. cit., pág. 78.

criminales llevan los estigmas de la escrófula y del raquitismo, afecciones tan poderosamente modificadoras del esqueleto. El contenido ejerce una acción de paralización sobre lo que lo contiene; á su vez la bóveda ósea obliga al cerebro á sufrir como una reducción en su desarrollo, en ciertos territorios, y la perturbación de la nutrición general trae consigo una irremediable perturbación de las funciones cerebrales."

"Es imposible, si se arroja una ojeada comparativa sobre el conjunto de nuestras curvas y sobre las figuras del atlas de Lombroso, por una parte, y por la otra, sobre los tipos de locos y de degenerados, representados por Morel, Moreau, etc., no sorprenderse por las analogías ó semejanzas que se encuentran en las dos categorías. En un imbécil observamos un desarrollo exagerado del gran diámetro transverso; en otro, un aplastamiento posterior; en un tercero, la forma oblonga de la cabeza en el sentido vertical; en un idiota un cráneo microcéfalo puntiagudo, etc., caracteres que encontramos en nuestros ladrones. Pero Morel declara que semejantes anomalías no coexisten necesariamente entre sus degenerados, como una tendencia nociva; y aun añade el eminente alienista: "que ha notado generalmente que los imbéciles, con predominancia de aplastamiento posterior de la cabeza, eran de carácter inofensivo y no se distinguían por sus instintos perversos y eróticos;" que los individuos de cráneo pequeño y puntiagudo son también ordinariamiente inofensivos "y no se señalan de una manera especial por sus tendencias viciosas." En cambio, el tipo dolicocéfalo de un idiota de nacimiento, "solamente susceptible de mejora, bajo ó por lo que hace á los instintos," se encuentra en algunos de nuestros criminales, y en otro sujeto, idiota microcéfalo, muerto de convulsiones, encontramos uno de los tipos de nuestros condenados por violación. Algunos tipos, en fin, comunes á los criminales, á los idiotas y á los cretinos, son del todo simios. Sin exagerar la importancia de estas comparaciones—que sería fácil multiplicar—no puede despreciárselas, y sin extenderlas á todos los criminales, ve-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mos que es obligación, deber de los médicos y de los antropólogos, evidenciarlas para cierto número de aquellos. Reconozcamos, en fin, que fuera de todo estado que suponga ó deje suponer la enajenación, el idiotismo ó el cretinismo, la frecuencia de las deformaciones, de los diversos caracteres, excepcionales ó como aberraciones en la raza, parece traer consigo, entre muchos malhechores, un signo de inferioridad, una especie de detención infantil ó de retrogradación á los tipos salvajes ó bárbaros, entre los que las irregularidades craneanas se observan más frecuentemente que entre los civilizados."

Si las deformaciones craneanas traen consigo "la irremediable perturbación de las funciones cerebrales," la asimetría, por su parte, signo es también de defectos cerebrales que no pueden dejar de tener influencia en la mentalidad del individuo que la presenta como escudo, en cuyos blasones pueden leerse, no sólo las hazañas de los antepasados, sino las del actual poseedor. Sobre este particular, el propio Dr. Corre,[1] expresa su opinión en estos términos: "No podemos creer que la asimetría no esté frecuentemente en relación con algún defecto cerebral particular, cuando encontramos que es tan común en las series de criminales, principalmente en las categorías anotadas, las más bajas por sus costumbres, ó en aquellas que por sus actos parecen aproximarse más á los enajenados. En efecto, donde sobre todo la hemos observado, es entre los ladrones y los condenados por violación: los primeros, compuestos en su mayor parte de la hez de los presidios y de las casas penitenciarias, que Lauvergne llama *ladroncitos*, población viciosa y enferma desde la infancia, nacida de la prostitución ó educada á sus expensas, tan mal constituida en lo físico como en lo moral, incapaz de toda energía volitiva, aun para la falta, navegando sin cesar en las aguas más cenagosas del crimen y de la depravación; los segundos, frecuentemente separados de la sociedad, á consecuencia de atentados cometidos en circunstancias que denotan un impulso del todo accidental, ó actos repetidos que dejan algunas veces en el ánimo del médico la impresión de una especie de monomanía, desgraciados cuya necesidad genésica se ha sobrexcitado hasta el paroxismo por una privación absurda y contra los que la naturaleza se ha vengado de una organización social despiadada para ellos, antes como después de la falta."

1 Obra citada, pág. 69.

"La asimetría craneana, añade el autor que vengo citando, es, pues, en casi todos los casos, el índice de cierta perturbabilidad en los actos cerebrales, y cuando la educación no alcanza á desviar los efectos de semejante vicio anátomo-fisiológico, y con mayor razón cuando aquella hace falta, los instintos tienen gran probabilidad de degenerar en impulsos perversos que, colocando bajo sus órdenes á las facultades intelectuales, las obligan á dirigir sus esfuerzos hacia lo que se llama la criminalidad."

15.—*Anomalías craneanas diversas.*—La *persistencia* de la *sutura metópica*, ha observado Topinard en 611 cráneos de parisienses 58 veces, ó sea en la proporción de 9.49%. Esta anomalía es algo más frecuente en los criminales, pues aun cuando las investigaciones de Roncoroni y Ardú sólo la ponen de manifiesto en la proporción de un 9.2%, las de Mengazzini y Lombroso dan cifras más elevadas que Topinard: 16 y 12%. Además, Topinard no dice si los 611 cráneos, objeto de sus investigaciones, pertenecían todos á parisienses honrados; en caso contrario, la diferencia entre los normales y los criminales, por lo que á la persistencia de la sutura metópica se refiere, sería aún mayor.

La *sonóstosis precoz* de las suturas es anomalía también frecuente entre los delincuentes, según es de verse de las investigaciones hechas por Lombroso, Mengazzini y Ottolenghi y Roncoroni. Roncoroni y Ardú encontraron en sus criminales la *sonóstosis completa* de las suturas en la proporción de 9.2% y la parcial en la de 39.1%. Lombroso, en 44 delincuentes halló también la sonóstosis completa de las suturas en 11, y esto á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pesar de que dichos criminales no habían llegado aún á la edad madura.

Además de las mencionadas, los autores han notado en el cráneo de los criminales estas otras anomalías: sutura frontal muy sencilla, el 22%; suturas festoneadas ó simbólicas, el 13.9%, Lombroso:—sutura sagital pronunciada, el 6 9%, suturas prominentes, el 2.3%, y suturas casi rectilíneas, el 6.9%, Roncoroni y Ardú.

Entre los grandes criminales, Lemoine á los 19 años presentaba la sonóstosis de la sagital, Arnioni á los 20, Brusaferro á los 30,—autor de 99 homicidios—Hoffman á los 31 y Lacenaire á los 34.

Lombroso, en cráneos de criminales, ha encontrado la *línea crotofítica del temporal* muy marcada, y en algunos casos con salientes óseas, en la proporción de 39.40%, siendo así que en las de los normales es poco aparente.

El *hueso wormiano* se encuentra entre los criminales en la proporción de un 23%, según Lombroso; en la de un 43.7%, según Roncoroni y Ardú, y en la de un 10%, según Ottolenghi y Roncoroni.

Orchansky asegura que, el plano del agujero occipital está situado en los criminales más atrás que en los normales, á semejanza de las razas inferiores.

La *foseta occipital media*, que en los normales alcanza la proporción de 4.1%, en los criminales asciende, según Lombroso, á 16%. En 107 cadáveres de delincuentes, este autor, con Foá, Calori, Romiti y Tenchini, encontraron en la proporción de 60%, unida á la existencia de la foseta occipital media, la hipertrofia del vermis. "Estos hechos, dice Lombroso, permiten á la anatomía comparada y á la embriología concluir que: se trata aquí de una verdadera hipertrofia del vermis, de un verdadero cerebelo medio; de suerte que este órgano desciende de la elevada escala de los primatos al nivel del de los roedores, del de los lemurianos, ó bien del de el hombre entre el tercero y el cuarto mes de la vida fetal...."

La importancia que Lombroso le atribuye á la anterior anomalía, ha sido ridiculizada por Benedikt y criticada por Feré, quien asienta que: "es un carácter de poco valor." Sin embargo, Marimo, que emprendió sus estudios para combatir á Lombroso en el mismo sentido que Feré, llegó á un resultado diametralmente opuesto, pues de sus investigaciones que publicó en 1889 en el *Archivio di Psichiatría*, aparece que la anomalía en cuestión—foseta occipital media—se encuentra distribuida de la manera siguiente:

Europeos normales	4.19%
„ criminales	16.00 „
Zelandeses	50.00 „
Australianos	22.00 „
Americanos	26.00 „
Egipcios y Etruscos	19.00 „

Proporciones aún mayores que las citadas han encontrado en sus delincuentes Tenchini, Frigerio, Romiti y Mengazzini. Roncoroni y Ardú fijan la suya en 22.9%, presentándose dicha anomalía muy desarrollada en la proporción de 11.8%.

16.—*Alteraciones de los tejidos de los huesos.*—Estas alteraciones se observan con suma frecuencia entre los criminales, según es de verse por las cifras siguientes:

Hipertrofia	43.4%
Osteofitis del clivus	10.1 „
Huesos delgados	8.4 „
Pérdidas de substancia por osteofitis	5.6 „
Osteomas del roca y del occipital	4.8 „

Estos datos los tomo de Lombroso, y los que van á seguir pertenecen á Roncoroni y Ardú:

Sclerosis total del cráneo	23.0%
Espesor desigual de los huesos	6.9 „
Osteomas interiores del cráneo	16.1 „
„ exteriores „ „	9.2 „
Osteoporosis	2.3 „
Osteofitis	6.9 „

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Ottolenghi y Roncoroni, por último, encontraron: esclerosis del cráneo en la proporción del 11% y osteomas de los huesos del mismo en la de 4%.

17.—*Reunión de diversas anomalías.*—Lombroso asegura que, en los cráneos de criminales, al menos en un 43%, las anomalías no se presentan aisladas, sino que forman grupos compuestos de muchas, dándoles un aspecto del todo teratológico; por el contrario, las anomalías aisladas, sólo se ven en la proporción de un 21%.

Las anteriores afirmaciones del autor citado, se encuentran comprobadas, entre otras, por las investigaciones de los Dres. Ottolenghi y Roncoroni, quienes en 43 cráneos de criminales pudieron observar:

Cráneos.	Anomalías.	Cráneos.	Anomalías.
1 con	23	2 con	10
1 „	19	2 „	8
1 „	18	2 „	6
1 „	17	4 „	13
2 „	22	4 „	12
2 „	21	4 „	9
2 „	16	6 „	11
2 „	15	7 „	14

Entre los grandes criminales, como Vilella, Gatti, Lacenaire, Brusaferro y Scissak, su cráneo era el sitio de notables alteraciones, tanto por el número como por la calidad; por lo que, Lombroso pregunta: "¿Es posible que individuos dotados de un tan gran número de alteraciones, tengan el mismo grado de *inteligencia* y los mismos *sentimientos* que los hombres que presentan un cráneo del todo normal? Y notad que estas alteraciones craneanas no indican sino las más visibles alteraciones del centro intelectual, las alteraciones del volumen y de la forma."[1]

1 Ob. cit., pág. 184.

(Continuará).

POSESION DE ESTADO DE LOS HIJOS NATURALES.

Puede ser un medio de prueba de la filiación.—Da derecho á la herencia.—La posesión de estado constituye un reconocimiento.—La obligación que en caso de intestado impone la ley, de averiguar los parientes del autor de la herencia, es una investigación legal de la paternidad?—Es absoluta la prohibición de investigar la maternidad?—Tiene alguna excepción?

El objeto de la presente junta, según la expresa disposición del artículo 1,763 del Código de Procedimientos Civiles, se reduce á que en ella se discutan los derechos á la herencia, estas son palabras precisas. Previa esta discusión y la conformidad de los herederos entre sí y con el Ministerio Público, el Juzgado hace la declaración de quiénes sean los herederos y la forma y porción de la herencia para cada uno.

Fijado ya el objeto preciso de la junta, veamos cómo debe ser preparada según los preceptos del mismo Código.

En primer lugar, según los artículos 1,760 y sus relativos, deben convocarse por los periódicos y con un plazo de treinta días contados desde la publicación del último edicto, á los que se crean con derecho á la herencia.

En segundo lugar, según los artículos 1,751, 1,754 y 1,755, *en todo caso* debe recibirse información sobre si el intestado dejó cónyuge, descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del octavo grado; para que, conforme al artículo siguiente, 1,755: "Si con las certificaciones del registro, con la información ó por cualquiera otro motivo jurídico se prueba que el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Ottolenghi y Roncoroni, por último, encontraron: esclerosis del cráneo en la proporción del 11% y osteomas de los huesos del mismo en la de 4%.

17.—*Reunión de diversas anomalías.*—Lombroso asegura que, en los cráneos de criminales, al menos en un 43%, las anomalías no se presentan aisladas, sino que forman grupos compuestos de muchas, dándoles un aspecto del todo teratológico; por el contrario, las anomalías aisladas, sólo se ven en la proporción de un 21%.

Las anteriores afirmaciones del autor citado, se encuentran comprobadas, entre otras, por las investigaciones de los Dres. Ottolenghi y Roncoroni, quienes en 43 cráneos de criminales pudieron observar:

Cráneos.	Anomalías.	Cráneos.	Anomalías.
1 con	23	2 con	10
1 „	19	2 „	8
1 „	18	2 „	6
1 „	17	4 „	13
2 „	22	4 „	12
2 „	21	4 „	9
2 „	16	6 „	11
2 „	15	7 „	14

Entre los grandes criminales, como Vilella, Gatti, Lacenaire, Brusaferro y Scissak, su cráneo era el sitio de notables alteraciones, tanto por el número como por la calidad; por lo que, Lombroso pregunta: "¿Es posible que individuos dotados de un tan gran número de alteraciones, tengan el mismo grado de *inteligencia* y los mismos *sentimientos* que los hombres que presentan un cráneo del todo normal? Y notad que estas alteraciones craneanas no indican sino las más visibles alteraciones del centro intelectual, las alteraciones del volumen y de la forma."[1]

1 Ob. cit., pág. 184.

(Continuará).

POSESION DE ESTADO DE LOS HIJOS NATURALES.

Puede ser un medio de prueba de la filiación.—Da derecho á la herencia.—La posesión de estado constituye un reconocimiento.—La obligación que en caso de intestado impone la ley, de averiguar los parientes del autor de la herencia, es una investigación legal de la paternidad?—Es absoluta la prohibición de investigar la maternidad?—Tiene alguna excepción?

El objeto de la presente junta, según la expresa disposición del artículo 1,763 del Código de Procedimientos Civiles, se reduce á que en ella se discutan los derechos á la herencia, estas son palabras precisas. Previa esta discusión y la conformidad de los herederos entre sí y con el Ministerio Público, el Juzgado hace la declaración de quiénes sean los herederos y la forma y porción de la herencia para cada uno.

Fijado ya el objeto preciso de la junta, veamos cómo debe ser preparada según los preceptos del mismo Código.

En primer lugar, según los artículos 1,760 y sus relativos, deben convocarse por los periódicos y con un plazo de treinta días contados desde la publicación del último edicto, á los que se crean con derecho á la herencia.

En segundo lugar, según los artículos 1,751, 1,754 y 1,755, *en todo caso* debe recibirse información sobre si el intestado dejó cónyuge, descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del octavo grado; para que, conforme al artículo siguiente, 1,755: "Si con las certificaciones del registro, con la información ó por cualquiera otro motivo jurídico se prueba que el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

autor de la herencia ha dejado alguno ó algunos de los herederos que se enumeran en el artículo anterior, el Juez los cite á ellos ó á sus representantes legítimos, á una junta, á la que también concurrirá el Ministerio Público."

Hecha la convocatoria en debida forma, se presentó la Señora Pérez deduciendo derechos á la herencia como hija natural de la finada su Señora madre Doña Manuela Lortia, pidiendo plazo legal para comprobar su parentesco, lo cual ha verificado dentro del término, el que concluido ha pedido que se señale día para la presente junta conforme á lo dispuesto en el citado artículo 1,763.

Veamos ahora cuál ha sido el resultado de este procedimiento legal analizando su valor jurídico.

Debo llamar la atención acerca del hecho muy significativo á favor de la Señora Pérez, de que no se ha presentado ningún otro pretendiente que contradiga el derecho que ha deducido á la herencia de su finada madre la Señora Lortia.

Resulta, pues, de la sencilla exposición de estas prescripciones legales que se han observado para formalizar el procedimiento: primero, que el Juzgado, en cumplimiento de su deber, ha procurado investigar si la Señora Doña Manuela Lortia dejó descendientes que puedan tener derecho á su herencia: segundo, que para lograr este fin ha debido rendirse información acerca del hecho ó hechos relativos: tercero, *que la Señora Pérez ha tenido derecho* para pedir que se practiquen esas informaciones y para comprobar *por cualquiera medio jurídico, según el artículo 1,755*, el hecho de su filiación; y cuarto, que con las pruebas rendidas ha quedado plenamente justificado el hecho de la filiación y el derecho incontrovertible que tiene á la herencia de su señora madre.

Estas son consecuencias legales inmediatas del cumplimiento y aplicación de los preceptos del Código, que no pueden ni deben dejar de ser tomados en consideración por el Juzgado. Es descendiente, es hija de la Señora Doña Manuela Lortia, está en posesión de todos los derechos de un reconocimiento fundado en la posesión de estado, y por consiguiente, debe ser nombrada heredera, porque tiene derechos incontrovertibles á su herencia, según lo dispuesto en el artículo 1,764.

Para fundar debidamente esta acción, tengo que entrar en algunos detalles del todo indispensables.

Una cosa es investigar la paternidad ó la maternidad, y otra cosa es reclamar los efectos de esa maternidad ó paternidad legalmente comprobada y reconocida. En esta última situación se encuentra el que tiene justificada su posesión de estado, porque esta posesión es un reconocimiento formal.

Al tratarse de la aplicación de los artículos de nuestro Código Civil y de Procedimientos, es indispensable, antes que todo, fijar con precisión el sentido y significación de las palabras.

Acerca de la prohibición de investigar la paternidad ó la maternidad en sus respectivos casos, se debe tener presente que la palabra *investigación* designa una acción para descubrir lo que se halla oculto. *Ubi Luctulus cit investigare non possum.* Cic. 2ª Verr. 16 *Quæ natura involube viderunt.* Lull. 30 *Rerum ocultisinarum Cic. de Oficis.* Pues bien, el que ha gozado de la posesión de estado, tal como la entienden los Códigos y como la han explicado siempre los prácticos y ofrece comprobar ese hecho, no investiga nada oculto, ni descubre nada nuevo, es decir, no infringe la prohibición del artículo 359, y sea cual fuere la mente de los redactores al traducir esa prescripción del Código Portugués, nos hemos de atener á la genuina significación de la palabra castellana fundada en su etimología.

Esta apreciación es irreparable por la exactitud de sus términos y de su inducción, tanto que Demolombe le da la autoridad de su nombre y llega á considerarla como más completa, decisiva y concluyente que el título prevenido de la inscripción en el registro público.

"La posesión de estado, dice, es un verdadero reconocimiento; cuando una persona ha tratado constante y pública-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mente á un niño como hijo suyo, cuando lo ha presentado en ese concepto á su familia y á la sociedad.... es imposible negar que lo ha reconocido, aun cuando no haya consignado ese reconocimiento en la acta respectiva.... que bien pudiera ser el efecto de una sorpresa ó de una obsesión irresistible, mientras que la posesión de estado es un reconocimiento contínuo, perseverante, de todos los días, de todos los instantes;..... ¿qué razón habría para admitirla como prueba decisiva de la filiación legítima y negarla á la filiación natural, sobre todo de la madre?" "No se indaga ni investiga, continúa el mismo autor, el estado que se posee, esa reclamación sólo se comprende á falta de posesión constante, y tanto, que la ley de 18 de Brumario Año II, que prohibe la investigación, admite la posesión como prueba de la paternidad."

Dadas estas circunstancias, la posesión adquirida no puede perderse sino cuando *ánimo et corpore in contrarium actum sit Dig. 41, 2.*

Hablando de los motivos de la prohibición del Código, uno de los cuales, el mayor de todos, es el escándalo de esa clase de reclamaciones, dice con mucha razón, que en la comprobación de la posesión de estado no se trata de inquirir relaciones secretas, costumbres y actos reservados, sino solamemte si han concurrido las tres condiciones clásicas de la posesión de estado, *nomen tractatus, fama.* Por otra parte, hay que tomar en consideración, acerca de esta investigación, que los artículos del Código de Procedimientos no la prohiben sino que, al contrario, la exigen como indispensable, pues el 1,734. dice: "También se recibirán *en todo caso*, para los efectos del artículo siguiente, información sobre si el intestado dejó cónyuge, descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del octavo grado." Pues bien, si el cumplimiento obligatorio de esta prescripción legal, es una verdadera investigación de la paternidad ó maternidad, ¿cómo podrá sostenerse que esté absolutamente prohibida? Y esta razón se confirma, si atendemos al contenido del artículo siguiente, que autoriza para la investigación,

no sólo la prueba de las certificaciones del registro público, sino las informaciones de testigos, ó las que resulten de cualquiera otro *medio jurídico;* y al del 1,762, que autoriza á los que se presenten como herederos para que justifiquen su parentesco en el término de cuarenta días. Ya vemos que la prueba de la filiación debe promoverse por el Juzgado y puede pedirse y ponerse en práctica por los interesados, sin restricción y valiéndose de cualquiera medio jurídico; de lo que resulta, como ya lo hemos visto, que no es absoluta la prohibición de investigar la paternidad ó maternidad.

En cuanto á la separación absoluta que se quiere establecer entre las determinaciones de los capítulos 1º 2º, y 3º, por una parte, y el 4º del Código Francés, observaremos con el citado comentador, que el último sería completamente insuficiente, si no se relacionara con las anteriores cuya observación debe hacerse, porque en nuestro Código se hace una distribución casi igual de la materia, como después veremos; si no fuera el último, el 4º, como realmente lo es, sólo complementario; siendo doctrina unánime y práctica constante de la legislación Francesa, que las prescripciones de los primeros capítulos son aplicables al último en lo que las especiales eran aplicables y no limiten aquellas; porque ese sistema conduciría hasta á negar el estado del hijo natural, lo cual sería inadmisible (si se atiende al derecho que les concede el artículo 3,592 de nuestro Código Civil).

En nuestro caso, no habiendo reglas especiales acerca de ambas filiaciones, la legítima y la natural, si se considera al capítulo 4º como aislado, sin relación con los tres anteriores del mismo título, no se comprenderían sus determinaciones ni se podrían aplicar en la mayor parte de los casos, por cuya razón debemos considerarlo como verdaderamente complementario de los primeros, y que al mismo tiempo y á su vez, se complementa él también por los primeros, en todo lo que mutuamente no se limitan ó modifican expresamente. Examinando con el citado Código á la vista, uno á uno, los artículos del 311 al

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

323 del capítulo sobre las pruebas de la filiación de los hijos legítimos, y su aplicación á los hijos naturales, suponiendo casos idénticos y que de otro modo no encuentran solución en las prescripciones del capítulo 4º, que trata sólo de los últimos, y que son, sin embargo, muchas, tendríamos que declarar insuperable cualquiera dificultad. De manera que es indispensable apelar en muchos casos á las prescripciones legales relativas á la prueba de la filiación legítima, para integrar ó complementar lo que falta en el capítulo correspondiente á los hijos naturales.

Esta doctrina, en derecho francés, cuenta con la autoridad de Gortali y de Bigo de Preaumenen, en la exposición de motivos del título respectivo, á pesar de lo cual no fué bastante bien acentuado, para evitar variedades en la práctica.

En nuestro Código de Procedimientos, como ya lo hemos indicado, no son menos concluyentes los artículos 1,754, 1,755 y 1,764 al prescribir que se reciba información sobre si el intestado dejó cónyuge, descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del octavo grado, y que si con los certificados del registro, con las informaciones ó por cualquiera otro medio jurídico, se prueba que el autor de la herencia dejó algunos sucesores legítimos, el Juez los cite á junta, en la que podía declararlos herederos en la forma y porciones á que tuvieren derecho. Pues bien, ó estas disposiciones no tienen objeto, ó sirven de explicación á los artículos 345, 359 y 360, y facilitan su concordancia, reconociendo los derechos de los hijos naturales que no han podido ser negados explícitamente.

En conclusión, no pudiéndose interpretar el artículo 359 como derogatorio del 345, porque no se trata de investigar ningún negocio oculto, ni de revelar ningún secreto, ni de provocar ningún escándalo, sino sólo de comprobar legalmente un hecho, ya público y notorio, espontáneo, reiterado, constante é innegable, resulta que la petición fundada en los artículos del Código de Procedimientos y en el 3,592 del Código Civil, es perfectamente legal.

Tampoco puede negarse á los hijos naturales la aplicación de la mayor parte de los artículos de los capítulos 1º, 2º y 3º, en la parte de ellos no reformada por el 4º, porque la posesión de estado es un derecho adquirido legalmente, que puede probarse por los mismos medios que la de los legítimos, aun después del fallecimiento de los padres, en virtud de lo dispuesto en el artículo 360 del mismo Código, disposición de cuya aplicación no se podría privar á los hijos legítimos en casos idénticos, lo que constituye otra prueba de que los cuatro capítulos se relacionan mutuamente y se complementan entre sí.

Finalmente, y es otra prueba de la razón que venimos alegando, los artículos del Código de Procedimientos que autorizan la comprobación del derecho á una sucesión intestada por todos los medios jurídicos sin distinción alguna acerca de los hijos legítimos, naturales ó espúrios, constituyen la mejor interpretación jurídica de los del Código Civil, debiendo considerarse hasta derogatorios, en caso de verdadera contradicción, supuesto que son posteriores en fecha, como el Código á que pertenecen.

Todas estas razones son de gran peso, cuando se trata sólo de la maternidad; porque aun suponiendo todo lo que se quiera decir en contra, la prohibición de investigar sólo sería absoluta respecto de la paternidad, según el artículo 343 de nuestro Código Civil; supuesto que el 345 dice expresamente, que el hijo tiene derecho á investigar la maternidad.

El hijo es hijo desde que nace, y este carácter nadie se lo puede disputar, ni mucho menos el legislador encargado de protegerlo, mientras más desgraciado sea, mientras más desamparado se vea, y por eso los autores que defienden nuestro principio y los derechos de los hijos naturales, consideran, que ponerles limitaciones innecesarias en el ejercicio de sus derechos tan sagrados, sería lo mismo que causarles mayor desgracia que la que sufren por su condición de no tener padres conocidos, en lo que ciertamente no puede creerse que hayan pensado los legisladores.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Por otra parte, el artículo 345 citado, sólo trata del caso de que se pida reconocimiento del hijo como expresamente lo dice; y los artículos mencionados del Código de Procedimientos se ocupan del nombramiento de los herederos; y no es lo mismo, supuesta la amplitud de los términos de estos últimos, probar por cualquiera medio jurídico la existencia del parentesco, que pedir el reconocimiento; esto último supone necesariamente la vida, la existencia actual de los padres que son los que reconocen; lo segundo supone la muerte porque se trata del nombramiento de herederos, de lo que se infiere que los artículos del Código Civil nunca podrían limitar los derechos que conceden los ya citados del Código de Procedimientos.

Para confirmar los efectos del anterior raciocinio, bastará fijar la atención en el texto del artículo 1,762 del mismo Código de Procedimientos, que de un modo absoluto dice: "Luego que á virtud de la convocatoria (la de que trata el artículo 1,754) se presente un heredero, rendirá en la forma legal justificación de su parentesco, dentro de un término que se le señale para el efecto;" y en el del 1,764 que dice:.... "que si en la junta á que deben ser convocados, según el artículo 1,763, quedaren conformes y conviniere el Ministerio Público, el Juez los declarará herederos en la forma y porciones á que tuvieren derecho." Ahora bien, estos artículos que sólo tratan del derecho á heredar, nada dicen acerca del reconocimiento expreso de la madre durante su vida, ni del que el hijo haya podido exigir de ella antes de su muerte; y por consiguiente, no tratándose en ellos del hecho del reconocimiento sino de probarse la filiación, por cualquiera medio jurídico, como lo previene el 1,755, ninguna aplicación pueden tener para ese caso los artículos del Código Civil, que sólo tratan del modo y términos de pedir el reconocimiento; tanto más, cuanto que no hay un solo artículo, ni el Código Civil ni el de Procedimientos que niegue la prueba de la posesión de estado, para el efecto de los artículos del citado Código de Procedimientos.

Pues bien, si no hay disposición legal que prohiba la prueba de la posesión de estado, y si ésta puede resultar justificada á consecuencia de las informaciones que el juzgado ha debido mandar que se practiquen, y si esta posesión consta con evidencia innegable en los autos, ¿podrá negarse ese hecho y desatenderse los derechos que de él resulten á favor de un heredero á quien nadie puede privar de su carácter de hijo reconocido?

La posesión de estado que incontestablemente prueba la filiación legítima, adquiere un nuevo grado de certidumbre cuando se aplicó á la filiación natural. Para reconocer á un niño como fruto de una unión legítima, ninguna dificultad se concibe, el honor no se compromete; pero tratar á un bastardo, confesar públicamente el defecto de su nacimiento, confesar esta falta ante la sociedad procurando enmendarla en lo posible y á costa de un sacrificio del amor propio, ¿qué puede significar? nadie procede de esta manera si no está impulsado por la verdad y si al mismo tiempo no tiene la resolución firme de reparar el mal causado, haciendo público el reconcimiento del hijo y de los derechos que con ese carácter tiene.

Y por esta razón sin duda el sabio Jaquier en su magnífica monografía sobre la investigación de la paternidad natural, dice: que siempre que el hijo puede rendir prueba de que ha gozado de la posesión constante y pública del estado de hijo natural, podía revindicar judicialmente el beneficio y reclamar sus derechos tanto contra su padre como contra su madre.

Si estas razones son poderosas cuando se trata de la paternidad natural, adquieren fuerza incontestable cuando se trata sólo de la maternidad natural; y por esto los Señores Zacharia y Aubri y Rau, tan respetados en el foro francés, Tomo IV, páginas 75 á 77, enseñan: que la posesión constante de estado de hijo natural, basta para probar la identidad del reclamante; y que, si esta pesesión fuese contradicha, podría rendirse la prueba de testigos, aunque no hubiese principio de prueba por escrito, con tal que hubiese una prueba ó un principio de prueba por escrito, del pacto."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Fácil sería seguir aglomerando doctrinas sobre el particular; pero las omito para no hacer muy difusos estos apuntes, y concretándonos á nuestro caso, comenzamos por advertir que la Señora que hoy reclama sus derechos de hija natural, nació estando vigente la Ley de sucesiones de 10 de Agosto de 1857, la que en sus artículos 38 y 39 les concedió á los hijos naturales el derecho de heredar.

Este derecho, una vez adquirido, no ha podido perderse, cualquiera que sea la interpretación que quiera darse á los artículos del Código Civil 345 y 359; pues por lo que toca á los 1,754, 1,753, 1,762, 1,763 y 1,764, como ya lo hemos demostrado, favorecen los derechos que en esta junta se deducen, supuesto que sin restricción ni limitación alguna, mandan que se reciba la información para comprobar la existencia de los descendientes y admiten la justificación del hecho por cualquiera medio jurídico, mandando que sean declarados herederos á los que de ese modo prueben su parentesco.

La información que se ha rendido por disposición ineludible de los artículos citados, por orden del juzgado y á pedimento de la Señora Francisca Pérez, hace prueba plena según la expresa disposición de los artículos 562 y 563 del Código de Procedimientos, y prueba no solamente la filiación natural y la posesión de estado, sino también la identidad de la persona que deduce sus derechos, supuesto que prueban de una manera amplia y precisa el hecho de la dicha posesión de la que necesariamente se deduce la identidad, como lo enseña Demolombe en el lugar citado y todos los autores que tratan de la materia.

Además, en el presente caso tenemos *un principio de prueba por escrito*, en el certificado eclesiástico que obra en autos y con esto queda satisfecho el requisito que exige el artículo 38 de la citada ley de 10 de Agosto de 1857, vigente no sólo en el tiempo en que nació la parte que deduce derechos á la herencia, sino también en la época en que murió la Señora Lortia, de cuya sucesión se trata.

Y este principio de prueba es de tanto valor, que nos resolvemos á citar la doctrina del sabio y respetado Demolombe sobre el particular, que en su Curso del Código de Napoleón, Tratado de la Paternidad y de la Filiación, dice en el número 505: "Todo lo que se puede decir es, que cuando existe por otro un principio de prueba por escrito, la acta de nacimiento que justifica el parto de la pretendida madre, puede ser tomada en consideración por los jueces como cualquier otro hecho susceptible ó capaz de justificar la reclamación; porque el principio de prueba por escrito que ha abierto el paso á la prueba por testigos, por este mismo hecho ha dado lugar á que se admita la prueba de presunciones, citando á Valetta sur Proudhon, tomo 2º, pág. 140, y añadiendo después: "que resulta de muchas sentencias de la Corte de Casación que la acta de nacimiento en que se nombre á la madre, hace prueba completa de la filiación, ya sea con relación á terceros, ya con relación á la misma madre cuando la identidad del hijo no es atacada, y que basta un reconocimiento tácito de la madre para hacer imposible toda contestación:" citando en comprobación cinco ejecutorias de Casación sobre el particular: concluyendo el párrafo con estos notables conceptos: "Hemos hecho ya constar (que esta Jurisprudencia) daba por resultado precioso, que la posesión de estado se convertía en un medio de prueba de la filiación natural, teniendo, por lo menos, que producir al efecto, de establecer la identidad del hijo, *aun cuando no haya principio de prueba por escrito.* Siendo esta la razón de por qué nos hemos adherido á esta doctrina nueva, de acuerdo con nuestro sabio colega M. Valette. Explicación Sumaria del lib 1º del Cod. de Napoleón, páginas 183 y 186, y con Demante, tomo 2º, número 70 bis I."

He aquí nuestro caso, y con la circunstancia de encontrarse aplicada esta jurisprudencia, no sólo de conformidad con los principios del derecho común, sino también apoyada en las disposiciones de la ley de 10 de Agosto de 57 y en los artículos de nuestro Código de Procedimientos que ordenan expresamente que se practique *en todo caso* la información, como

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

se verificó, resultando plenamente comprobada la posesión de estado, y con ella la identidad de la persona que reclama la herencia.

Esta jurisprudencia relativa á la prueba de la posesión de estado y de sus efectos, podría ser comprobada con ejecutorias notables de los tribunales españoles, que no se insertan en lo conducente por no hacer más difusos estos apuntes, siendo una de ellas la que se encuentra en el tomo 10, página 486 de la colección titulada "Jurisprudencia Civil."

Resulta, pues, de todo lo expuesto:

Primero.—Que en uso del derecho que me concede el artículo 1,751 del Código de Procedimientos, denuncié el intestado de la Señora mi madre, Doña Manuela Lortia.

Segundo.—Que el Juzgado, cumpliendo con lo mandado en el artículo 1,754 del mismo, mandó hacer la convocatoria de los herederos y rendir la información correspondiente para la comprobación del parentesco.

Tercero.—Que, como hija natural, me presenté pidiendo término para comprobar por mi parte mi filiación, usando del derecho que me concede el artículo 1,762 del citado Código de Procedimientos.

Cuarto.—Que de la información rendida por el Juzgado en cumplimiento de la expresada prevención del artículo citado del Código de Procedimientos, y á pedimento mío en ejercicio del legítimo derecho que me concede el artículo 1,762 del mismo, resultó comprobada mi posesión de estado de hija natural única de la Señora Doña Manuela Lortia, de cuya sucesión se trata.

Quinto.—Que con esta posesión de estado ha quedado justificada, no sólo mi filiación, sino también la identidad de mi persona.

Sexto.—Que la aclaración y comprobación de mi derecho á la herencia ha sido el resultado necesario de la observancia de preceptos legales ineludibles y que el Juzgado no podía dejar de observar.

Séptimo.—Que, en consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 1,764, debo ser declarada heredera, de conformidad también con lo prevenido en los artículos 38 y 39 de la ley de 10 de Agosto de 1857, vigente al tiempo de mi nacimiento y al tiempo de la muerte de la Señora mi madre Doña Manuela Lortia.

Por todas estas razones y fundamentos legales, y con la anuencia del ilustrado é imparcial letrado Agente del Ministerio Público, espero de la notoria justificación y rectitud del Juzgado, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,764 del Código de Procedimientos, se sirva declarar que la Señora Francisca Pérez es descendiente única de la Señora su madre Doña Manuela Lortia. Es justicia que pido protestando todo lo que fuere necesario. México, Mayo veintiocho de mil ochocientos noventa y cuatro.

JUSTO BENÍTEZ.

SENTENCIA en favor de una hija natural, fundada en la posesión de estado.

México, Julio treinta y uno de mil ochocientos noventa y cuatro.—Vistos y teniendo en consideración:

I. Que decretada la radicación del Intestado de la Señora Manuela Lortia, se mandó recibir la información que ordena el artículo 1,754 del Código de Procedimientos Civiles y hacer la publicación que ordena el 1,760, sin que durante el plazo de la convocatoria se hubiere presentado persona alguna deduciendo derechos á la mencionada sucesión.

II. Que habiéndose presentado desde un principio la Señora Francisca Pérez con su carácter de hija natural de la expresada Señora Lortia, al abrigo de los preceptos contenidos en los artículos 345 y 3,575 del Código Civil, solicitó se le recibiese la información testimonial respectiva y se dictasen los de-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

más trámites que la ley ordena para la prosecución de la Intestamentaría.

III. Que de la información que en cumplimiento de lo preceptuado en el primero de los artículos citados se recibió, resulta que la Señora Manuela Lortia, á su fallecimiento, no dejó ascendientes ni colaterales dentro del octavo grado, y sí una hija natural que lleva por nombre Francisca Pérez, en cuya virtud hay que examinar si en el presente caso esta señora tiene derecho á la declaración de herederos de la repetida señora.

IV. Que si es verdad que el artículo 343 del citado Código Civil prohibe de una manera absoluta la investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio, y que esta prohibición es tanto en favor como en contra del hijo, lo es también que en el caso la Señora Pérez no ha ocurrido al Juzgado solicitando esa investigación; no es ella la que sin motivo alguno viene á pedir que se averigüe el parentesco que la ligaba con la autora de la herencia. Es que en obedecimiento de un precepto legal, los testigos han declarado que la Señora Lortia no dejó más parientes de los á que la ley se refiere, que como hija natural la Señora Pérez; es que á virtud de la convocatoria mandada publicar y obedeciendo la prescripción del artículo 1,762 del Código de Procedimientos, viene á justificar su parentesco, ya que tal precepto no tiene limitación alguna.

V. Que estudiando la cuestión bajo otra faz, se debe observar que el citado artículo 343 tiene las excepciones que establece el artículo 345, que en su fracción segunda dice: que puede obtenerse el reconocimiento de la madre, si se tiene á su favor la posesión de estado de hijo natural de aquella; así es que, aun permitiendo por un momento que en el presente asunto se investigara la maternidad de la promovente, estaría sin duda en el caso de excepción que establece la fracción citada, si es que en estas actuaciones se encuentra probada esa posesión de estado, que es el elemento primordial y la sólida

base sobre que descansa tal excepción, y para tal prueba da la norma el artículo 346 del repetido Código Civil.

VI. Que por el dicho informe de los tres testigos que se examinaron en acatamiento del artículo 1,754 referido, aparece que la Señora Lortia cuidó de la lactancia y educación de la Señora Pérez, reconociéndola, tratándola y presentándola ante la sociedad como su verdadera hija, tanto antes como después de haber contraído matrimonio dicha Señora Pérez. Si pues tales testigos reunen las condiciones que exigen los artículos 562 y 563 del Código de Procedimientos Civiles, deben estimarse justificados los hechos anteriormente expuestos, y por lo tanto, que para los efectos del artículo 345 mencionado, la solicitante tiene á su favor la posesión de estado de hija natural de la Señora Lortia, y le es entonces permitida la averiguación del parentesco con la que le dió el sér, para descansar en él su derecho á la sucesión, como efecto natural de ese parentesco.

VII. Justificada como lo está esa posesión de estado de la Señora Pérez, y descansando en hechos preexistentes y encadenados por largo transcurso de años, se robustece la apreciación contenida en el cuarto considerando, si se atiende á que la ley se refiere á la investigación de hechos verdaderamente ocultos y que por lo mismo todos ignoraban; pero en el asunto que analizamos, los hechos en que se apoya la peticionaria han sido del todo públicos en las sociedades donde vivió con la Señora Lortia; nada nuevo ha venido á averiguarse, nada oculto ha venido á descubrirse, y en consecuencia, lógicamente es permitido deducir que no se trata propiamente de la investigación de la maternidad, sino de reclamar, al amparo de la ley, los efectos de una maternidad que ha sido legal y constantemente reconocida por quien debía serlo; la posesión de estado viene, pues, como prueba de esa maternidad, y esa posesión de estado es un hecho notoriamente conocido y público.

VIII. Que si recurrimos al espíritu filosófico de esa prohibición, tendremos que convenir que la ley ha querido sin duda

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

evitar el escándalo que naturalmente traería consigo la averiguación de ciertos hechos ocultos, el descubrimiento de los secretos del hogar, la publicidad de ciertas circunstancias que en bien de las familias debieran ser siempre ignoradas; pero en la posesión de estado, ó mejor dicho, en los pormenores domésticos en que ésta descansa, no pueden existir tan serios inconvenientes, ya que se trata únicamente de saber el trato y la presentación social que por parte de la madre ha tenido la Señora Pérez y hemos visto que esas circunstancias fueron el resultado de la información ordenada por la ley, como consecuencia de lo cual tiene que venir, según el artículo 1,764, la declaración de herederos en la posesión á que hubiere derecho.

IX. Que esa misma posesión de estado probada en favor de la Señora Pérez, esos hechos en que aquella descansa reiterados con el transcurso de los años, perseverantes en la idea de considerarla como hija en la familia, y públicos en las relaciones sociales en que hija y madre vivieron, vienen á justificar también la identidad de la persona á que se refiere y envuelven los elementos de una reparación ante la sociedad, tanto más laudable, cuanto que importan cierto sacrificio de amor propio; pero reparación que hiciera tan sólo en los horizontes de la ilusión, si no hubiese un resultado práctico en bien de los intereses de una hija, poniéndola en aptitud de hacer efectivos los derechos hereditarios que esa situación jurídica le da.

X. Que corrobora lo anteriormente dicho el certificado eclesiástico exhibido, del cual aparece que la expresada Señora Pérez contrajo matrimonio con el Lic. Manuel Guerrero; siendo de notar que en tal documento se menciona también el dato primordial de la filiación de la interesada. Si pues tal certificado está debidamente confrontado con el libro parroquial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 553 del Código de Procedimientos Civiles, importa una prueba completa y entonces legalmente puede considerarse como principio de prueba por escrito, que viene en auxilio de la filiación que analizamos y apoyando la identidad de la tantas veces repetida Señora Pérez.

XI. Que lo expuesto sería bastante para deferir las pretensiones de la solicitante, ya que en cumplimiento á los preceptos del Código de Procedimientos Civiles ha justificado su parentesco con la autora de la herencia, y que es la única persona de las indicadas por la ley para el caso; pero no será fuera de propósito recordar el precepto encarnado en el art. 3,592 del Código Civil, que bajo el rubro de sucesión legítima, viene, sin duda, á armonizar con las disposiciones relativas á los procedimientos en la materia de que nos ocupamos.

Por tales consideraciones y fundamentos, y de conformidad con el parecer del Representante del Ministerio Público, se reconocen los derechos hereditarios de la Señora Francisca Pérez, á los bienes de la intestamentaría de la finada Señora Manuela Lortia, en las porciones que por derecho le corresponden, y se le nombra albacea de dicha sucesión, concediéndole, al efecto, todas las facultades que fueren necesarias para el desempeño de su encargo. Hágase saber al Ministerio Público y Defensor Fiscal. Lo decretó y firmó el C. Juez primero de lo Civil, Lic. Ramón Cárdenas, hasta hoy en que se expensaron las estampillas correspondientes. Doy fe.—*Cárdenas.—Luis G. Betancourt.*—Rúbricas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ILUSIONES DE LOS JURISTAS SOBRE LAS CARCELES.

Llamado por la confianza del Gobierno al cuidado de una cárcel judicial, he creído mi primer deber ocuparme, si directamente de la salud de aquellos infelices, también, hasta donde me era posible, del minucioso estudio del organismo carcelario; sobre el que los jurisconsultos, los penalistas y los filántropos escriben grandes volúmenes sin tener una idea, ni siquiera aproximada, entre otras cosas, por la dificultad indeclinable de la entrada en las cárceles.

Ahora bien: hay cuestiones prácticas que no se pueden resolver con el buen sentido y menos con el genio, pero que resuelve el contacto repetido, sin el cual se cae en las más extrañas conclusiones.

Por esto, además de la cárcel á que estoy agregado, he hecho por penetrar en otras cárceles menos perfectas, especialmente fuera de Italia, para notar sus inconvenientes; y á las últimas de ellas se entiende que aludo en estas observaciones.

1. *El aislamiento del procesado.*—A primera vista, la cárcel celular reune el máximum de los ideales para la investigación judicial, por cuanto aisla del mundo externo al individuo de

quien se quiere recoger indicios de delincuencia; y para el castigo de los reos no reincidentes, no incorregibles, que delinquieron por vez primera y á quienes la vergüenza y el daño del mutuo conocimiento quitaría todo pudor, multiplicando, como sucede en las casas llamadas de reforma, las primeras débiles tendencias al delito con la tendencia de los otros y con la terrible vanidad del delito mismo, que una vez iniciada, acaba por inducir á los hombres á los hechos más atroces, aun sin otro objeto que el mismo mal.

Todo esto, teóricamente, es justísimo, y yo mismo lo he predicado en mis libros, quizá demasiado; pero quien pasa de la teoría á la vida práctica, ve que es una ilusión en gran parte.

Hablando en primer lugar del secreto del aislamiento, se sabe lo poderoso que es para aumentar los suicidios y las locuras; pero no que sirva para la seguridad de la buena marcha de la causa. Indudablemente un ratero, un pordiosero, lo que constituye la plebe de los reos, aislado, tendrá las pocas comunicaciones de los días de fiesta, podrá tenerlas también, por ejemplo, en los corrales de paseo, donde las paredes, aun continuamente blanqueadas por las cuidadosas Direcciones, forman una especie de periódico diario, y en el verano de día alterno, periódico que, á falta de paredes, lo forman la arena en el verano y en el invierno la nieve; pero las tiene los días festivos, siempre que va á misa. El instinto religioso que domina ya todas nuestras instituciones, especialmente las judiciales, hace insinuar el prejuicio de que la religión es una panacea de las tendencias criminales, y hasta la forma ritual, que es la menos eficaz para esto, se considera de suma importancia, habiendo cárceles celulares donde sólo la iglesia costó la décima parte del total importe, más de medio millón, para conseguir, conservando la forma celular, la perfecta segregación de los detenidos que deben asistir á ella. El mal está en que para que estas preciosas y caras celdas funcionaran debidamente, sin que el uno viese al otro, sería necesario, dado el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

número de los encarcelados, nada menos que una semana entera para la ida á la misa y otra para la vuelta.

Naturalmente, como no llega á este punto la convicción de las ventajas rituales, resulta que la misa, que debiera sanar estas almas depravadas, es lo que contribuye más á favorecer las comunicaciones, aun de aquellos que no tuvieran ninguna otra.

Nótese, además, que respecto de los varones, por el buen sentido de los capellanes, óptima gente por lo común y que comprende también los intereses de la seguridad social, los ritos tienen una duración limitada; pero donde los frailes tienen absoluto imperio, en los departamentos y en los ergástolos femeninos, por ejemplo, alguna vez estos ritos llegan á durar cuatro ó seis horas seguidas, siendo imposible que en este tiempo las pías reclusas no se comuniquen, por los medios acostumbrados, en esta celdilla, demasiado pequeña para no ofrecer espacio á las deseadas y comunes relaciones.

Esto por lo que respecta á los ladronzuelos comunes. Pero viniendo á la aristocracia del delito, á los grandes criminales, éstos no tienen necesidad siquiera de dichos accidentes locales. Sabido es que el número de los guardianes de plantilla es de uno por cada 20 ó más; que, en realidad, descontados los servicios especiales, los guardianes verdaderamente dedicados á la vigilancia de las celdas y galerías, etc., son uno por cada 50; y menos todavía en los días de comunicación. ¿Cómo es posible que con tan poco número pueda hacerse un servicio completo? Es necesario que se ayuden de los mismos detenidos, generalmente de los menos agravados ó de los condenados á brevísimas penas. Sólo que esto no impide que no sea ninguno flor de harina; gracias á las campanadas del jurado, muchas veces los condenados á breves penas son dignos del *baño* y de la muerte. Nosotros hemos visto un condenado á ocho meses solamente, por falta á la autoridad, mientras tenía sobre sus espaldas tres asesinatos, de los cuales fué absuelto. Y Garofalo ha demostrado que muchos individuos que pasaban judicialmente por no reincidentes, tenían ya siete ú ocho reincidencias sobre sí, cuando se les examinaba real y no burocráticamente.

Ahora bien; éstos, que superan á veces á los guardianes en una decena (en algunas cárceles celulares, por ejemplo, de 700 detenidos, se tienen 40 guardias y 50 de estos sirvientes condenados), no tienen nada ó casi nada que perder con favorecer las comunicaciones, etc.; antes bien, por aquella especie de resentimiento contínuo contra la justicia que tienen cuantos sufren sus efectos, las favorecen hasta gratuitamente, y mucho más, por supuesto, cuando media alguna utilidad. La utilidad no falta cuando se trata de los grandes delincuentes; y esto es, por otra parte, una razón para pensar en que los guardias pueden hacer otro tanto.

Nótese, además, que los guardianes están en comunicación con el mundo exterior, y que el sistema celular favorece completamente, ó poco menos, la impunidad de estas relaciones. Porque ¿quién puede saber y denunciar lo que haya pasado entre un individuo solo y en otro individuo dentro de una celda aislada? Así, los guardianes están á cubierto de toda denuncia, más que si los reos estuvieran en cárceles comunes, donde siempre se halla un denunciador que puede comprometer.

Hay en las cárceles un oficio dependiente de la administración, el llamado de *matrícula* (en el que se ocupa siempre cualquier escribiente detenido, porque si no el Estado habría de pagar muchos funcionarios), que ve y anota á todo detenido cuando entra y cuando sale, que sabe y registra su nombre, su apellido, los particulares de la pena, el domicilio, y que viene á ser un núcleo centrípeto y centrífugo, que recoge todas las noticias y las difunde por medio de los mismos detenidos y de los sirvientes de las varias celdas. Hay, además, el servicio de los empresarios, de estos tiranos ocultos que dominan todas las cárceles, que no tienen responsabilidad alguna ni razón para guardar secreto, que tienen necesidad de hombres, aunque sean ya condenados, que hagan servicios de sastres, zapateros,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

faroleros, colchoneros, albañiles, carpinteros y herreros, los cuales están en contacto directo con hombres libres. Y el empresario no está obligado á no tener periódicos sobre su mesa, ni á esconder el papel y el tintero, con los que pueden hacerse las comunicaciones á placer.

Añádase á esto que, en el interior de la celda, los grandes criminales tienen más calma para afinarse en busca de alivios y de excusas y en el estudio del proceso; y no estando en comunicación con los demás colegas, no se entregan, sino que persisten en la negativa. El hecho es que muchas veces los jueces instructores, si quisieran hallar la pista de un delito, debieran desear alguna vez que el individuo, enfermo ó no, pasase á la enfermería, donde hallándose con muchos, pudiera abandonarse á aquellas confesiones espontáneas que están en el carácter de los criminales y que llevan hasta á los grandes delincuentes al extremo de descubrirse.

De cualquier modo, aunque vinieran á menos estos procedimientos, ellos hallarían medios por sí mismos. Así, un detenido, de vuelta de misa, para dirigir una palabra de inteligencia á otro que se hallaba entre los últimos, fingió caer desvanecido sobre las escaleras, y mientras uno de los guardias le socorría y le asía y los otros guardias, para impedir el amontonamiento, hacían desfilar más prontamente á los encarcelados, él, apenas vió llegar á su amigo, articuló, como en delirio, palabras sólo inteligibles para su compañero, y..... volvió en sí.

Otro, que tenía interés grandísimo en conversar con su abogado durante la instrucción de un proceso gravísimo por violencia sobre un guardián, se atrajo encima otra causa, donde nombró el mismo abogado que debía defenderle en la primera, y la autoridad judicial tuvo que permitir la entrevista.

A veces, en algunas cárceles celulares, cuando el amontonamiento es grande en el mismo departamento, se reune á dos acusados de leves culpas, ó á un condenado y un acusado. No pocas veces las prostitutas violaron de propósito sus reglamentos para poder ser reunidas en la celda con una imputada de delitos gravísimos y darle noticias de sus cómplices.

De todos modos, acusado ó condenado, cuando enferma gravemente, en la enfermería de muchas cárceles se une con los otros; y por esto Vazio ha comenzado á practicar en algunas cárceles celulares, el aislamiento de las enfermerías, que sólo existe, si no me equivoco, en Milán.

No he hablado de los trabajadores. En la cárcel celular, precisamente para impedir las comunicaciones, sólo se permiten poquísimos trabajos, y ninguno en común á los acusados; y esto, además del daño que produce al Estado y al país, además del que produce á las personas que se ven obligadas al ocio, sin más desahogo que el onanismo, trae otro daño futuro, porque los individuos activos se habitúan al ocio cuando no trabajan, y los holgazanes hallan en esto satisfechos sus deseos, y cuando están fuera delinquen para volver.

Además, admitido el trabajo, es imposible, aun excluyendo de él á los co-detenidos, que no se formen nuevas relaciones con los oficiales de las artes libres, con los empresarios, etc.

Pero, para mencionar aún otro medio de comunicación entre los detenidos, nótese que de una celda á otra, con golpecitos en el muro que corresponden á las letras del alfabeto, se hablan entre sí (esto sucede en Berlín como en Bruselas) aun á la distancia de seis ó siete celdas.

Otro hecho de no menor gravedad é importancia es el de que, en los días de audiencia con los abogados defensores ó de los interrogatorios ante el juez instructor, se hallan reunidos en la misma antecámara una docena ó más de detenidos. Por lo cual, en el momento mismo de la inquisición del juez, casi á sus mismos ojos, viene á infringirse precisamente para el sometido á un juicio, que es quien más interesa á la seguridad social aquella ley de aislamiento para cuya aplicación se ha gastado la enorme suma costada por las cárceles celulares y la que cuesta también su funcionamiento.

Sucede también con frecuencia que el sumario, secretísimo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

para el público, no tiene secretos para el sumariado, por cuanto el reo, cuando está sometido al proceso, si no puede conversar con su abogado, se comunica con él por medio de otro detenido que esté ya en defensa y que tenga el mismo defensor. Y si se calcula que de 700 detenidos están sometidos á sumario las dos terceras partes al menos, se comprende cómo en poco transcurso de tiempo pasen casi todos por la sala de la instrucción y comuniquen casi todos entre sí.

Y no se diga de los locutorios que, rigurosamente vigilados en algunas cárceles, en otras se prestan á mil medios de comunicación.

Aun en aquellos donde la vigilancia es grande, nunca se podrá impedir que con una palabra en jerga, con un signo convencional (desconocido para los guardianes), los delincuentes de la peor especie comuniquen con los cómplices desconocidos, con sus compañeros de cárcel, con los libertados poco antes, que obtengan un permiso de comunicación. Hemos notado que hasta las comidas de fuera pueden constituir un alfabeto convencional para el encarcelado en la celda.

Y en los libros que ellos obtienen para la lectura de la biblioteca de la cárcel, y que por su escaso número puede suponerse que en pocos meses pasarán por las manos del compañero de causa ó del detenido, á quien importa hacer una advertencia, se notan á centenares las inscripciones, bien con punta de aguja (que escapan al ligero vistazo que dan al libro los guardias al ser restituido), bien con sangre ó agua y ladrillo, como demostraré en mis *Palimsestos de las cárceles.*

Basten estos cuantos ejemplos de indicaciones halladas en libros de la cárcel:

"Querido D....: Te hago saber que por tí estoy en la cárcel; si tú, la tarde del 25 de Diciembre de 188.. no hubieses tirado la piedra sobre el cristal de la cantina, nada habría. Soy N...."

"Querido S....: Te ruego que no vayas á confesar en el juicio que soy yo quien te llamé para ir á matar á los aldeanos, y que te hice las heridas para figurar; y si quieres que yo te salve, dí que es otro amigo tuyo y que pensaste decir que era yo para no declararlo y para salvarte tú. Entonces te salvaré de los aldeanos. Adios. Tu amigo S.... S...."

"M.... L.... saluda á P.... Mi querido P.... Dime de qué manera he de obrar en la confrontación."

"Querido M.... Dime si S.... ha sido reconocido por las víctimas á quienes hirió S...."

"Querido N..... Si llega este libro á tus manos sabrás que soy G.... que te digo estés contento, que te aseguro que serás absuelto en el juicio; no quiero decirte el motivo, pero aseguro que lo lograré."

Además, los sirvientes agregados á la policía de la celda ¿no pueden también, en los breves instantes en que entran á recoger las inmundicias, etc., dejar caer una carta, una línea, pronunciar una frase, que para el detenido sea una completa revelación?

Concluyo que el sistema celular ahora vigente es totalmente inútil para los culpables no reincidentes, que, desconocedores de todas las refinaciones, vicios y subterfugios de la cárcel, entran por primera vez en ella y en el aislamiento y en el ocio obligado aguzan la inteligencia, meditan extensamente y preparan medios de defensa que les estarían negados en comunidad con otros; y es además ilusorio para aquellos grandes criminales que, con los mil medios de comunicación á que la cárcel se presta (y en los cuales son maestros) eluden la activísima vigilancia que producen las delaciones en la comunidad de detenidos, y que apenas existe ni tiene fuerza (hasta por falta de personal) en las cárceles celulares, cuando precisamente se cree obtener del aislamiento de los detenidos la fuerza misma que le falta.

2. *Ventajas morales de las cárceles celulares.*—Pero, para los condenados á breves penas y por vez primera, se dice, nosotros tenemos la ventaja de que sean desconocidos de los compañeros, produciendo una gran impresión dolorosa que les en-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mienda. En todo esto puede haber verdad, pero sólo en parte; puesto que, como vemos, es imposible que queden desconocidos á menos que usen una máscara, ya que la necesidad de llenar los servicios de matrícula y de provisión de víveres, sin contar además el salir á misa y á paseo, y de practicar la limpieza que ellos mismos deben hacer, les ponen en continuado contacto con un número notable de condenados, y el contacto quita generalmente la última salvaguardia del mal: el sentido del honor.

En cuanto á la impresión dolorosa, notamos que las penas breves son generalmente sufridas por individuos reincidentes más veces, á quienes nada hace impresión; y, por otra parte, se podría mucho mejor suplir con el ayuno, y dígase también sin miedo, con duchas frías, mucho más humanitarias, aunque menos iguales á la primera, y menos corruptoras que dos meses en la celda.

3. *Instrucción en las cárceles.*—Un ilustre ministro francés escribió una máxima que ha tenido una influencia fatal: "Por cada escuela que abráis cerraréis una cárcel." Entonces comenzó una serie de medidas que pretendían disminuir la delincuencia con la instrucción, y que, lejos de disminuirla, alguna vez la empeoraban. La cosa se puede apreciar *à priori* teniendo en cuenta que la tendencia al delito no nace y crece por falta de inteligencia ó de cultura, pues hay delincuentes inteligentísimos y cultos (Lacenaire, Troppmann, etc.), sino por falta de sentimiento.

De hecho la escuela aumenta, pero no disminuyen los delitos, como es fácil demostrar con la estadística, por ejemplo, de Francia, donde las estadísticas están bien hechas y donde una parte de los delitos graves, parricidio, estupro en general sobre niñas, estafas, etc., se triplicaron y alguna vez quintuplicaron al mismo paso que la instrucción.

Por lo demás, cuando de las investigaciones hechas en conjunto por las oficinas públicas, se pasa á otras un poco más delicadas, resulta que, al menos por lo que hace á estos últimos años, los criminales faltos de toda instrucción no forman una cantidad pequeña, comparados con la de la población libre.

Curcio cuenta haber hallado en Italia un condenado por cada 284 personas sin instrucción, y otro por cada 274 instruidas, diferencia que en sí es ya pequeña y que desaparece ante un examen más directo.

De 507 criminales y 100 hombres libres de las mismas clases, Marro observó que

No sabían leer.....	12	por 100 criminales y	6	por 100 normales.
Sabían leer y escribir.....	95	„	„	„	„	67	„	„	„
Tenían instrucción superior...	12	„	„	„	„	27	„	„	„

De donde resulta que hay menos que normales en la instrucción superior, pero hay más en la elemental. Ahora bien: ¿alguien pensará que se pueda dar la instrucción superior á los condenados y crear para ellos liceos y, Dios nos libre, Universidades?

Pero hay aún algo peor. La estadística carcelaria y criminal manifiestan que los delincuentes reincidentes forman mayor número, aun en Italia, entre aquellos que tuvieron una regular instrucción.

En 1875, de todos los condenados á los *baños* (deportados) el 73 por 100 no sabían leer, y eran reincidentes el 66 por 100; en los presidios el 65 y el 58 respectivamente, y entre las mujeres el 87 y el 88.

Recordemos ahora que los reincidentes abundan siempre en los delitos de reflexión, y más en los que atacan á la propiedad, dando los robos el 21 por 100, el hurto el 10 y los homicidios sólo del 5 al 3. (Bettinger, *Crimes of passion*, Londres, 1872).

También en Italia vemos prevalecer siempre, en los reincidentes, los delitos contra la propiedad, robos, estafas, que ascienden:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

	De todos los condenados.	De reincidentes.
En los *baños*	30 por 100	40 por 100
En los presidios	51 „ „	65 „ „
En las prisiones de mujeres.	46 „ „	70 „ „

(*Estadística de las cárceles*, Palermo 1877).

De todo esto se puede deducir que una parte de los reincidentes se ha instruido en las cárceles y debe la variación de su propia criminalidad á la instrucción carcelaria, la cual no ha hecho sino aguzarle en el crimen y darle una nueva dirección más peligrosa, aunque menos fácil de ser descubierta.

Ahora bien: ¿vale la pena de que el Gobierno, que tantas otras cosas tiene que hacer, se esfuerce en conseguir este resultado?

Por otra parte, en una cárcel judicial donde se trata de impedir todas las relaciones entre los detenidos, la escuela, más que de instrucción, sirve de comunicación peligrosa. Y esto mucho más en las cárceles comunes. Para obviar este inconveniente, ¿qué se hace? Se lleva á la escuela solamente á aquellos que están condenados á breves penas y no parecen, por lo tanto, peligrosos, aunque á veces lo son mucho más, ó que, condenados á penas largas, están ya para ser libertados; y así quedan reducidos á pocos, casi todos jovenzuelos, que no han recibido todavía una instrucción de uno ó dos meses cuando ya salen y la interrumpen, sin que les haya reportado ventaja alguna, como es natural; en tanto que podrían recibir la misma instrucción, mejor y más continuada en los reformatorios.

Además, cuando hayamos instruido á aquellos jóvenes (y esto puede decirse también de las casas de reforma) en la escritura y en la lectura, ¿qué ventaja les hemos ofrecido y qué medio moralizador les hemos proporcionado? ¿Acaso ellos van después á leer la moral cristiana, ó por el contrario, irán, en cuanto puedan, á leer libros obscenos, periódicos de crónicas escandalosas y criminales, perfeccionándose en el delito y buscando una nueva fuente de vanidad del mismo en el hacer hablar de sí ó los periódicos? Si, pues, debiera darse una instrucción, sería la mecánica, la frœbeliana, ya por el dibujo, ya por el manejo de algunos instrumentos, que puedan proporcionarles medios de ganancia sin perfeccionarles en el mal.

Por esto yo creo que debe abolirse del todo la instrucción alfabética en las cárceles judiciales y también en los presidios. En cuanto á las cárceles preventivas, entiendo también que sería enteramente inútil y dañosa para los adultos; y en cuanto á los menores, la instrucción alfabética seria útil si pudiera seguírsela de una instrucción superior (como, por ejemplo, hace D. Bosco en sus seminarios: sobre cuya ventaja social reservo mi juicio, pero cuyas ventajas moralizadoras son indudablemente grandes); y en ese caso convendría conservarla y ampliarla; pero si no, debe sustituirse absolutamente con una más difundida instrucción manual en las artes de carpinteros, tejedores, escultores en madera, etc.; en las artes de cuyo conocimiento no puede provenir ningún daño á la sociedad.

4. *Lectura en las cárceles.*—Por lo demás, si yo no pensaría en la instrucción alfabética de las cárceles y antes bien la aboliría, haría por proveer á un aspecto de la instrucción carcelaria que desatienden casi en absoluto los gobiernos, el de la lectura, puesto que una gran parte sabe leer y está completamente ociosa. No siendo el trabajo ni posible, más que de un modo muy incompleto, en las cárceles judiciales, yo creo que el darles á leer buenos libros es tan necesario como preservarles del frío y del calor.

El cerebro es un órgano como otro cualquiera, y cuando de su satisfacción se derivan ventajas y no perjuicios, debemos permitirlo.

Entendámonos: no es que yo crea que el criminal pueda mejorar siempre sus instintos sólo por la lectura; pero obtenemos sin duda una ventaja, la de darle una calma mayor, una mayor resignación; y tratándose en los encarcelados de personas impetuosas que van al bien como al mal por verdade-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ras erupciones dependientes de la impresión del momento, una lectura dada, en un momento dado, puede impulsarle á una acción virtuosa, ó al menos á una confesión; yo he oído á algunos declarar después de una lectura, que querían volverse apóstoles, por más que yo no crea de esto más que la mitad. De todos modos, la actividad de un órgano como el cerebro, satisfecha, impide el suicidio, le previene y le retarda. ¡Oh! ¿por qué pensaremos en su abrigo, en su alimentación, en hacerles pasear, y no pensaremos en nutrir su cerebro cuando no pueda resultar daño alguno para nadie?

Verdaderamente, hay muchas cárceles en que se ha hecho ya mucho; pero esto se debe en gran parte á obras pías; las cuales, por efecto de su origen, no llenan sino imperfectamente esta laguna, porque imaginando el encarcelado poco diferente de sus timoratas personas, no quieren escandalizarle con obras que no sean perfectamente ascéticas y de angélica moralidad; y en tanto, estas obras, cuando caen en temperamentos absolutamente opuestos, chocan contra ellos y producen una reacción dañosa á la moral é inútil al objeto que se quiere perseguir: el de satisfacer honestamente el espíritu y convertirlo por medio de una seducción imprevista.

No se necesita para demostrar esto sino transcribir varios fragmentos que he hallado en las márgenes de algunos libros que circulaban en una cárcel y fueron secuestrados.

"¡Qué estúpido es este escritor! Debiera haber ido á la escuela del profesor Dulcido."

(Sarasa. *El arte de vivir tranquilo).*

"El lugar de Sarasa es el manicomio. Es la cabeza de Sarasa y no el cielo lo que gira."

(Sarasa, *id. id.)*

"Galileo (nombre del detenido) manda mil.... al autor de este libro que da náuseas. Si pusieran á todos los sacerdotes en la ciudadela, yo haría de Petro Micco para hacer saltar por el aire á todos estos bribones de sacerdotes."

(Lecturas religiosas).

"Quien lee estos libros se vuelve tonto ó loco. Estos libros merecen ser llevados á la letrina."

(Padre Franco: *El amor y las vigilias en la aldea).*

"Imbécil quien escribió estas asnerías. Debieran ahorcarle para conservar memoria de él, cien veces estúpido."

(Personio: *Guía de los hombres).*

"Asno quien preste fe á semejantes porquerías. No debía ser permitido publicarlas."

(Lecturas religiosas).

"He acabado de leer este libro; pero puedo decir también como Jesús en los últimos momentos de su vida: "Tengo sed: ¡oh, qué sed!"

(Oraciones de un sacerdote piamontés).

"Pasaron ya los tiempos en que se creía en los sacerdotes y en los milagros de sus santos cocodrilos. Todas estas falsedades no merecen crédito; si fuesen ciertas, todos iríamos al infierno.

"El autor que quiere hacer de sabio, sería mejor que hubiese visto el error á que puede conducir la lectura de este libro."

(Personio: *Guía de la salud eterna).*

"Queridos amigos que leais este libro, mirad que os volveréis locos. Estad alerta, queridos compañeros, que este libro despierta los malos humores en todo el que lo lee."

(Sarasa: *Lecturas morales y religiosas).*

Otro más abajo respondía:

"Tienes razón, camarada: siento no saber tu nombre."

(Sarasa: *Lecturas).*

En cuanto á la necesidad de lecturas, yo no tengo más que transcribir este fragmento de un preso por falsedad, Ruscowich, publicado en la *Revista de disciplina carcelaria:*

"¡Ah! ¡Qué insoportable es el ocio para quien siempre tuvo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el hábito del estudio y del trabajo, y quien siente en sí mismo no haberse aún dormido aquella actividad y aquel deseo de ocupación que ennoblecen al hombre al mismo tiempo que le perfeccionan! Este fastidioso cansancio del ocio, esta putrefacción gradual en la miseria, aflige de tal modo mi espíritu, que temo acabar perdiendo la poca inteligencia que me quedaba. ¿Cómo? Todo lo creado se basa sobre el movimiento y sobre el trabajo, la naturaleza aborrece el estado de inercia, y ¿ha de ser el preso la excepción de esta ley universal? ¿Debe sólo él, como las aguas estancadas, podrirse en su mismo fango? ¿Debe sólo él consumir y no producir, perjudicar y no dar utilidad, y antes bien, destruirse á sí mismo al propio tiempo?

Si en las cárceles judiciales del reino de Italia hay, según las últimas estadísticas, cerca de 40,000 detenidos, todos los días se pierde para el tesoro común de la sociedad la obra de cien años de trabajo. La monja de Cracovia gritaba ¡pan, pan!; así yo, desde mi solitaria celda, lanzo mi voz suplicante en solicitud de trabajo.... ocupación."

Se dirá: pero entre tanto, estos libros son un medio de comunicación entre ellos; y yo respondo: sí, pero son bastante más peligrosas las comunicaciones cuyos trámites no se conocen, que las que podemos vigilar; dejemos escribir, y encarguemos á los capellanes y á los jefes de las cárceles que anoten los escritos que pudieran tener importancia para la justicia.

Esto producirá dos ventajas: satisfacer sus tendencias y procurarnos ventajas sociales.

Yo sé de una cárcel donde un ladrón neurópata dejó escrita su vida con revelaciones que pusieron á la justicia en buena pista para descubrir una asociación peligrosísima de malhechores.

Mézclese la dieta también, si se quiere, pero dése á todos los detenidos celulares el pan del espíritu, con lecturas adaptadas á éste y no con libros ascéticos, sino de moral aplicada, como *Las vidas paralelas* de Plutarco, como las novelas de D'Azeglia, como el *Corazón* de D'Amicis.

En conclusión: Entre las mentiras que se han ido acumulando, especialmente en cuestiones jurídicas y carcelarias, consolidadas por congresos y libros que se tienen como clásicos, hay que poner también las ventajas de las cárceles celulares, cuyos grandes gastos no han correspondido á las ventajas que se nos prometían con ellas, al menos para las investigaciones judiciales; y como no llevan en su organismo un trabajo aprovechable, común, no corresponden tampoco con el interés económico.

Y no hemos tocado ahora otros defectos de los pretendidos reformatorios que, como ha demostrado luminosamente lo sucedido en Florencia, contra el juicio de Pratesi, uno de los grandes apóstoles enemigos de la escuela, son muchas veces horribles sentinas de corrupción. No hablamos del *soi disant* sistema graduatorio que, como ya hemos demostrado en otro sitio, es una verdadera ilusión debida á la emigración por algún tiempo en América de los pretendidos reincidentes, etc.

¡Ah! Dejen los juristas por algún tiempo los cuadros y las bibliotecas á un lado, y entren y estudien en las cárceles sin prevención, y verán que casi todas las pretendidas reformas, no aseguradas con el examen de la práctica, no son más que peligrosas ilusiones.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Memoria presentada por el Excmo. Sr. D. Manuel Pedregal, Delegado de la Universidad de Oviedo.

Son las relaciones de familia base cardinal sobre la cual descansa el orden jurídico de las sociedades humanas, y, sin embargo, permanecen envueltas en un mar de vaguedades é incertidumbres las reglas á que debe ajustarse la celebración del matrimonio en países extranjeros: impera la arbitrariedad respecto á sus condiciones internas, ó á la ley que ha de regir, para juzgar de la validez y efectos del matrimonio, subordinados al *estado* y á la *capacidad* de los contrayentes; y no es raro el caso de que el consorcio legítimo en un país sea reprobado como concubinato, ó tal vez penado como bigamia en la nación ó en el domicilio de quienes se consideran como marido y mujer. Más de una vez se ha escandalizado la conciencia jurídica de los pueblos al ver cómo personas, unidas por vínculo indisoluble en su país, quedan libres, mediante el divorcio, autorizado por leyes extranjeras.

No es compatible tal estado de anarquía con el espíritu de la moderna civilización. Hay una justicia internacional y principios que la determinan, como existen principios y leyes que rigen en cada nación la vida de los individuos y las colectividades. La ciencia del Derecho va disipando nubes, que antes oscurecían el campo donde se mueven las sociedades humanas.

La opinión de la soberanía del Estado no consentía dentro de su territorio la aplicación de las leyes extranjeras, concepto derivado de la índole de la soberanía en los tiempos feudales, daba caracteres de arbitrariedad al régimen de las relaciones que constituyen el Derecho internacional privado. Todavía en la práctica se invoca como fundamental la utilidad recíproca, la cortesía *(comitas)*, cual si pudiera existir una rama del Derecho fuera de los principios de justicia.

Hay en el Derecho internacional privado mucho que depende de nuestro consentimiento, mucho que es vario y modificable, por estar en íntima relación con las creencias religiosas, con la naturaleza del territorio, con los accidentes de la historia y el genio de las razas; pero en el fondo permanece siempre lo que, siendo humano, arraiga en nuestra propia esencia.

Decía Santo Tomás que no se había establecido el derecho de gentes con fuerza obligatoria *(per modum præcepti)*, y sustentaba, por el contrario, el *eximio* Dr. Suárez, que era preceptivo, fundándose en que toda ley que dirige las acciones humanas, es obligatoria. Merece ser notada la razón principal en que apoya su juicio el gran teólogo y jurisconsulto español. *Ratio autem hujus partis et juris est, quia humanum genus quantumvis in varios populos et regna divisum, semper habet aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiam quasi politicam et moralem, quam indicat naturale præceptum mutui amoris et misericordiæ, quod ad omnes extenditur, etiam extraneos, et cujuscumque nationis.* (De Legibus ac de Deo Legislatore.—Pars I, l. II, c. XIX). Esos preceptos, que sin ser promulgados en las diversas naciones, revisten carácter propiamente obligatorio y rigen las acciones humanas, son fundamento indestructible del Derecho internacional.

No se entienda que proclamamos la existencia de una ley ó de un Código único para todas las naciones. No, la ley es

varia y modificable, por razones secundarias. Hay diversidad de leyes derivadas de principios comunes, porque son distintas las condiciones de vida, mudables, como el progreso de los pueblos, en que se divide el género humano.

El problema cardinal del Derecho internacional privado consiste en determinar cuál es la ley aplicable á determinadas relaciones jurídicas. En unos casos rige la ley del territorio, en donde nace ó se forma la relación jurídica, sea cual fuere la nacionalidad ó el domicilio de las personas interesadas. En otros casos es la ley *personal*, la de la nación ó del domicilio á que corresponden las personas entre quienes la relación jurídica se establece.

Con haber progresado grandemente la ciencia del Derecho en esa parte, son muchas las dudas que dificultan en la práctica la aplicación de la regla jurídica; chocan en la esfera científica las opiniones diversas, que se localizan con los intereses encontrados, y es urgente el concierto entre los Estados soberanos, para que dejen de ser piedra de escándalo las diferencias entre ciudadanos de diversas naciones ó las contiendas con motivo de los conflictos diarios, respecto á la aplicación de las leyes de unos ú otros países.

Muchos convenios y tratados celebraron los pueblos civilizados acerca de los intereses colectivos y de los derechos políticos. Algunos de esos tratados son extensivos á determinados derechos civiles. Pero los derechos y deberes de familia, el matrimonio que se celebra en país distinto de la nación á que pertenecen los contrayentes, ó uno de ellos, y el divorcio que se realiza en identidad de condiciones, piden á voces un concierto entre todas las naciones civilizadas. Por muy importantes que sean los tratados comerciales, el convenio postal, la unión monetaria y la protección de la *Cruz Roja*, en el orden moral son de alcance superior las relaciones de familia, más necesitadas que ninguna otra institución jurídica, de la estabilidad y respeto, que tan á menudo faltan al matrimonio y al divorcio realizados en país extranjero por la incertidumbre en que estamos respecto á la ley aplicable en casos determinados.

Veamos cuáles podrían ser las bases de un tratado que contuviera reglas de aplicación universal para la resolución de los conflictos, que ocurren con motivo de la diversidad de leyes que en los distintos pueblos rigen respecto al matrimonio y al divorcio.

I

Dos puntos capitales se ofrecen á nuestro examen, para juzgar de las condiciones de validez requeridas en el matrimonio: la *forma* en que éste se haya celebrado, y la *capacidad* de los contrayentes.

Se reconoce generalmente la validez del matrimonio celebrado con arreglo á las formalidades, ritos ó ceremonias que establece la ley del país en donde se celebra el matrimonio, haciendo aplicación del aforismo *loccus regit actum*. Es natural y aun necesario que la forma de toda clase de actos en que intervengan la autoridad ó funcionarios de un país civilizado, se ajusten á las condiciones requeridas en el lugar donde aquellos se celebren. Otra cosa sería imposible, á no ser que existan pactos que autoricen la ingerencia de funcionarios extranjeros, como sucede en algunos países de Oriente.

Se exceptúan de esa regla los matrimonios llamados diplomáticos, en cuya celebración intervienen los representantes ó cónsules de los respectivos países á que pertenecen los contrayentes.

Pero ocurren dificultades nacidas de las relaciones existentes entre la Iglesia y el Estado, que, previstas, suelen quedar sin resolución en los Códigos modernos. Esto acontece en España, cuyo Código civil establece que los católicos habrán de atenerse á las disposiciones de la Iglesia católica y del Santo Concilio de Trento para la celebración del matrimonio. Se puede acreditar la existencia del casamiento contraído en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el país extranjero, donde no hubiere un registro regular ó auténtico, por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho (art. 55); pero se negaron la Comisión y el Gobierno á establecer en el Código, con claridad, si es ó no válido el matrimonio civil que con arreglo á la ley escocesa, por ejemplo, celebren en Escocia dos españoles que profesen la religión católica.

Sabido es que los matrimonios denominados *Gretna Green*, celebrados ante dos testigos, verbalmente, son válidos en Inglaterra, sin embargo de que para burlar las disposiciones de la ley inglesa, suelen trasladarse los ingleses al lugar de donde el matrimonio toma su nombre, celebran allí su matrimonio sin más formalidad que la expresión del consentimiento mutuo ante dos testigos, volviendo los contrayentes perfectamente casados á su anterior domicilio.

El respeto que merece la santidad del matrimonio aconsejó á los ingleses proceder con laudable espíritu de tolerancia, teniendo por válidos los casamientos que verbalmente y ante dos testigos celebren los ingleses en país extranjero, si esa forma es legítima allí donde se realiza el matrimonio. Nuestro Código civil requiere, como condición de validez, que sea canónico el matrimonio entre católicos, sometiéndolo en absoluto á las disposiciones de la Iglesia romana. Es admisible cualquier medio de prueba para acreditar la existencia del matrimonio celebrado en país extranjero, si no existiere registro civil, como lo es en España, ó si éste hubiere desaparecido ó fuere en parte obstruido; pero el matrimonio entre católicos, para ser válido, ha de celebrarse con sujeción á las disposiciones de la Iglesia católica.

¡Cuánto retrocedieron nuestros legisladores en esa parte!

El insigne jurisconsulto americano Joseph Story, para autorizar su opinión, tan respetable de suyo, invocaba la del moralista español F. Sánchez, que figura como precursor en los estudios de derecho internacional al lado de otros grandes pensadores españoles del siglo XVI. Sostiene Story, de acuerdo con los más notables jurisconsultos contemporáneos que, para declarar válido ó nulo un matrimonio, se ha de atender á la ley del país en donde se haya celebrado. (*Such marriages shall be good or not according to the laws of the country Where they are celebrated.*—Conflict of Laws, pág. 201). Esa era la opinión de Sánchez, refiriéndose, por supuesto, á la forma de la celebración del matrimonio. Aunque era teólogo, y teólogo distinguido, no se detuvo F. Sánchez en sutilezas de raciocinio para reconocer que el matrimonio es un contrato, respecto del cual los peregrinos debían observar las costumbres y estatutos del lugar en donde lo celebran. Más aún: tenía por nulo el matrimonio celebrado con arreglo al Concilio de Trento, aun siendo esta la ley del domicilio de los contrayentes, si los decretos del Concilio no estaban recibidos como ley del Estado en el lugar donde se formalizase el matrimonio. (.... *solæ leges loci in quo contractus celebratur inspiciuntur. Locus autem, ubi hoc matrimonium initur, non petit eam parochi et testium solemnitatem ad matrimonii valorem, cum ibi decretum Tridentini non obliget. Ea solemnitas adhibenda est quam petunt legis loci, ubi contractus initur; cum ergo locus, ubi celebratur matrimonium, ab his peregrinis exegat solemnitatem Tridentini in eo vigentis; aliter contractum nullum erit*).

El bien público, que tanto depende de la claridad en las leyes, reclamaba gran precisión en las nuevas disposiciones del Código civil. Se pidió que la redacción fuera más precisa, y desatendiendo los precedentes de nuestra literatura jurídica y la opinión general de los jurisconsultos contemporáneos, quedó subordinada nuestra obra legislativa á las imposiciones de la corte pontificia.

Por lo demás, el *Instituto de Derecho internacional*, cuya autoridad en el mundo científico es de gran peso, declaró en Heidelberg, sesiones 6 y 7 de Septiembre de 1887, que para ser válido un matrimonio en todas partes, *se necesita* que hayan sido observadas las formas prescritas por la ley del lugar

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en donde se hubiere celebrado. A título de excepción, se recomendó la validez de los matrimonios diplomáticos y consulares cuando los dos contrayentes sean del país á que corresponda la legación ó el consulado en donde, con arreglo á las leyes de las respectivas naciones, se celebren los matrimonios.

Dice Kœnig, con razón, que cuando el matrimonio entre extranjeros se celebra en la embajada de su nación, el acto se realiza en condiciones de perfecta regularidad, porque la casa del embajador disfruta del beneficio de extraterritorialidad. No acontece lo mismo cuando el matrimonio se celebra en el consulado, que no goza del mismo beneficio. Entonces surgen dudas, que dan por resultados sensibles declaraciones de nulidad de tales matrimonios.

La ley belga tiene por válido el matrimonio celebrado en país extranjero ante el cónsul de Bélgica, con tal que sea de nación belga el *futuro*, aunque la mujer sea de otro país. La ley alemana es más expansiva, pero más ocasionada á pleitos de nulidad, facultando á los cónsules para intervenir, con autorización del canciller del imperio, en la celebración del matrimonio de una alemana con hombre extranjero. Más circunspecto el Instituto de Derecho internacional, requiere que los dos contrayentes sean del mismo país á que corresponda la embajada ó el consulado. Con censurable imprevisión, el Código civil español nada dispone acerca de los diferentes casos que pueden ocurrir, y ocurren, con motivo de matrimonios celebrados en el extranjero entre españoles, ó entre españoles y extranjeros.

Los matrimonios diplomáticos y consulares constituyen un hecho necesario, que no puede ser regulado separadamente por cada uno de los Estados soberanos, dada la diversidad de tendencias que en ellos dominan. Es materia que debe ser objeto de convenios internacionales. Llegado este caso, y atendiendo á que la mujer sigue siempre la condición del marido, al cónsul de la nación del *futuro* corresponde autorizar la celebración del matrimonio.

Al tratar de la *capacidad* de los contrayentes, es necesario resolver primeramente las cuestiones que surgen con motivo de la determinación de la ley que se haya de seguir en todo lo concerniente á las condiciones necesarias para que *se pueda* celebrar el matrimonio, según decía, con la precisión que le distingue, Rolin-Jacquemyns, Secretario general del Instituto de Derecho internacional, en la reunión ó sesión de Heidelberg, y examinar después cuál es la ley que debe regir en cuanto á las *condiciones de validez* del matrimonio, ó sea á la existencia de impedimentos dirimentes.

La cuestión que en esta parte más divididos trae á los jurisconsultos es la relativa al estatuto personal, que según unos, generalmente los de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, es la ley del domicilio, y según otros, es la ley nacional, llamada también de origen. Prevaleció en las declaraciones que hizo el Instituto de Derecho internacional, en su reunión de Oxford, la opinión tan brillantemente sostenida por los jurisconsultos italianos, especialmente por Mancini, á la vez que por Laurent y otros eminentes publicistas. El domicilio no imprime el carácter de permanencia que consigo lleva el sentimiento de nacionalidad; no encarna tan íntimamente en la persona sujeto del derecho; y es variable por las condiciones propias de la residencia, que cambia según las circunstancias en que el hombre se encuentra. Hacer que el estado y capacidad de las personas dependan de lo que tan mudable y transitorio es, cuando, para dar consistencia y estabilidad á las condiciones propias de la personalidad en el orden jurídico, se entiende que la ley de origen, aquella bajo cuyo amparo se formó el carácter y se desarrolló la conciencia íntima, nos acompaña como necesaria defensa de lo que es esencial á la persona humana, el estado y la capacidad; el separarnos de la nación para unirnos al domicilio, con el objeto de realizar los fines indicados, implica verdadera contradicción. La ley nacional es la que constituye el estatuto personal, y esa, la ley de los contrayentes, es la regla que deben tener presente las autoridades ó

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

funcionarios encargados de asistir á la celebración del matrimonio y los Tribunales á quien incumba resolver las cuestiones relativas á los impedimentos dirimentes.

La ley local, ó sea la del lugar en donde se celebra el matrimonio, rige lo concerniente á su forma; la ley de origen, la de los contrayentes, es la norma para juzgar de las condiciones requeridas para la celebración del matrimonio y de las causas que lo invalidan. Por eso importa, ante todo, determinar cuándo un requisito ó circunstancia afecta á la forma del matrimonio, y cuándo influye en la capacidad de las personas para contratar. Se estima, por ejemplo, que es parte de la ceremonia matrimonial el consentimiento previo de los padres, ó de otras personas llamadas á dirigir los actos de los contrayentes, cuando, en realidad, más parece que el consentimiento de los padres, no habiendo llegado los hijos á la mayor edad, es requisito para subsanar la falta de capacidad de éstos. Pues, según se considere que el consentimiento de los padres afecta á la forma del matrimonio ó á la capacidad de los contrayentes, se aplicará la ley local ó el estatuto personal.

Recuerda Dicey que en muchas ocasiones se ha lamentado la prensa británica de que mujeres inglesas, casadas en Inglaterra con franceses, prescindiendo éstos del consentimiento paterno, que es innecesario con arreglo á las leyes inglesas, vieron anulado el matrimonio en Francia, de conformidad con las leyes de este país. No bastó que en el Parlamento resonaran enérgicas protestas; subsisten *las diferencias fundamentales que rigen* en Francia y en Inglaterra *las relaciones de familia*, y mientras no se llegue á la resolución de estos conflictos por medio de tratados internacionales, se repetirán los escándalos de que mujeres válidamente casadas en su nación, sean tenidas por concubinas ante las leyes de otros países. Nuestro Código civil, que *prohibe* contraer matrimonio al menor de edad que no haya obtenido la licencia, y al mayor que no haya solicitado el consejo de las personas á quienes corresponda otorgarlo (art. 45), declara con buen acuerdo que si, á pesar de tal

prohibición, se celebrase el matrimonio, prescindiendo de la licencia ó del consejo en los casos respectivos, será válido el matrimonio (art. 50).

Por regla general, la infracción de una ley prohibitiva es causa de nulidad; pero no es el matrimonio contrato que, por mero respeto á la ley, se pueda invalidar. La realidad de la vida impone miramientos superiores, siempre que en el estado de una persona se realizan cambios que afectan profundamente á las condiciones internas de la vida; el retroceso, la vuelta al estado que las cosas tenían antes, se hace imposible, y el derecho ha de ser fiel reflejo de la vida misma.

No sucede con la edad de los contrayentes lo mismo que con la licencia ó consejos de los padres. La falta de edad obsta al perfeccionamiento del contrato. La edad requerida por la ley nacional de cada uno de los contrayentes, es condición esencial para la existencia del matrimonio. En realidad es más propia la afirmación de no haberse celebrado el contrato que su invalidación, sin atender para nada á las prescripciones de la ley local.—Distinto y vario es el criterio que suele presidir á la resolución de las dificultades que nacen del parentesco y de la afinidad. Un inglés, por ejemplo, no puede contraer matrimonio con la hermana de su difunta mujer. Tampoco es permitido que el extranjero, viudo, se case en Inglaterra con una cuñada suya. Pero el inglés, viudo, que se traslada á Suiza, puede, con arreglo á las leyes de este país, según afirma Kœnig, sabio profesor de la Universidad de Berna, contraer matrimonio con una cuñada. Cita el caso como curioso, y lo es en realidad. Entiende igualmente que tal matrimonio es válido en Inglaterra. En cuanto á este extremo, se equivoca el profesor Kœnig, á no ser que el inglés se hubiera *domiciliado* en Suiza, antes de la celebración del matrimonio.

Los impedimentos, por razón de parentesco ó de afinidad entre los contrayentes, interesan principalmente á las buenas costumbres y afectan á la capacidad; de donde se infiere que, tanto la ley del lugar, en donde se celebra el matrimo-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nio, como la ley nacional, deben ser tenidas en consideración.

La publicidad del matrimonio es condición substancial para la validez del matrimonio, en opinión de Rolin-Jacquemyns, de acuerdo con la jurisprudencia francesa, á diferencia de lo que opina Bar, eco fiel de la ciencia alemana, que incluye entre las cuestiones de pura forma la relativa á la publicación de las proclamas ó amonestaciones.

La clandestinidad, por sí sola, no es causa de nulidad; pero se debe exigir la publicidad para la celebración del matrimonio y cumplir todas las formalidades requeridas por la ley personal de los contrayentes y por la ley local. Con el objeto de evitar que las leyes sean eludidas, y á fin de que se conozca la existencia de cuantos impedimentos se opongan al matrimonio antes de su celebración, conviene la publicidad en el lugar de origen y en el de domicilio, dando cumplimiento además á la ley local, por lo que tiene de formal el acto. Celebrado el matrimonio con infracción de las leyes relativas á su publicidad, se podrá exigir la responsabilidad en que hayan incurrido los infractores de las leyes; mas no habría razón para llegar hasta el extremo de anular el matrimonio por esa causa tan sólo, á no ser que la ley del estatuto personal lo declarase nulo, empleando injustificado rigor.

El conocimiento de la ley extranjera es, en muchos casos, factor importante para la celebración de un matrimonio entre extranjeros, y no se ha de exigir á la autoridad local ese conocimiento, ni sería tarea fácil en ocasiones el cumplimiento de ese requisito. El medio más apropiado para vencer esa dificultad se ha de encontrar en la mediación de las autoridades diplomáticas y consulares, á quienes se debe facultar por sus respectivos Gobiernos, al efecto de que expidan certificaciones referentes al estado y capacidad de aquellos que, siendo del país representado por los embajadores ó cónsules, se propongan contraer matrimonio y necesiten acreditar que se encuentran en las condiciones requeridas por las leyes de su nación.

Las dispensas que respecto de algunos impedimentos se otorgan, ora por la autoridad civil, ora por la autoridad eclesiástica, como en España cuando se trata de un matrimonio canónico, ofrecen muchos inconvenientes, y por eso las opiniones aparecen muy divididas.

Los impedimentos, que no se dispensan con arreglo á la ley personal de los contrayentes, son obstáculo insuperable si afectan á la capacidad. Los relativos á la forma, que no tienen carácter de dirimentes, pueden ser dispensados con arreglo á la ley local, sin peligro de nulidad, que es en todo caso lo que se debe tener en cuenta.

Inclínase Bar á la opinión de que sean competentes para otorgar las dispensas, tanto en lo concerniente al parentesco como á la licencia ó consejo de los padres ó tutores, las autoridades del lugar donde se haya de celebrar el matrimonio. La misma opinión sostiene Kœnig. Pero no están llamadas, en mi concepto, las autoridades locales á otorgar por vía de gracia dispensas que envuelvan resoluciones concernientes al estado y capacidad de las personas. La regla que se haya de seguir para declarar cuál sea la autoridad competente en materia de dispensas, indicada está por la ley ó estatuto aplicable al caso de la dispensa. ¿Se trata de un impedimento que se refiera á la forma? Pues siendo necesario atender á lo dispuesto en la ley de la localidad para determinar la forma, compete á la autoridad local la dispensa. Si se trata de impedimentos que nazcan del parentesco ó de la licencia paterna, es la ley personal la que se debe aplicar, y corresponde su dispensa á la autoridad nacional. Parece natural que para la dispensa de un precepto legal sean competentes las autoridades de la nación regida por ese precepto.

La parte relativa á los efectos del matrimnnio en el Derecho internacional, aparece envuelta en tales contradicciones y vaguedades, que se cae en la tentación de repetir con Laurent, que la ciencia del Derecho es un mar de dudas. La espontaneidad de la frase con que siempre expone su pensa-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

miento el jurisconsulto belga, suele ir más allá de la intención. Sin embargo, forzoso es reconocer que en la práctica naufragan á menudo los principios de la ciencia jurídica, cuando se trata de su aplicación á los diversos actos realizados por alguno de los miembros de una familia en país extranjero.

¿Qué efectos surte el matrimonio con relación á los hijos habidos con anterioridad á su celebración? O, por mejor decir, ¿cuál es la ley aplicable teniendo ya hijos los *futuros*, cuando el matrimonio se celebra en país extranjero, ó siendo tan sólo extranjero el marido? La dificultad, en este caso, nace de que los hijos naturales tienen ya un estado en el momento de contraer sus padres matrimonio, estado que no perderían contra su voluntad siendo mayores de edad, Si fuesen *sui juris* los hijos naturales. según su ley ó estatuto personal, y por virtud del subsiguiente matrimonio quedasen legitimados con arreglo al estatuto personal del padre, ¿cuál sería la ley aplicable, la personal del hijo ó la del padre? Entiendo que la del hijo, por haber adquirido éste con anterioridad al matrimonio de sus padres un estado que le atribuye derechos en la nación de origen, y esos derechos podrían quedar mermados con el cambio de estado. Si fuere el hijo natural, por razón del nacimiento, de nación distinta que su padre, prevalecería el estado personal del primero.

Por lo demás, siguiendo la mujer la condición del marido y ejerciendo éste potestad indiscutible sobre sus hijos, con arreglo á las leyes de todos los pueblos civilizados, el estatuto personal del jefe de la familia será la ley que haya de regir en todas partes las relaciones internas de ese primordial organismo de las sociedades humanas.

Pero la organización de la familia está íntimamente ligada con el interés público, con el buen régimen de la sociedad en general, y todos los habitantes de un territorio deben respetar las leyes de policía, el orden público y las buenas costumbres. Sabido es que en muchas naciones puede el marido emplear medios coercitivos para exigir de la mujer que viva

en el domicilio conyugal, llegando hasta el extremo de la corrección, y que en otras naciones, como Bélgica, no puede el marido hacer uso de la fuerza contra su mujer. El Código civil del cantón de Zurich obra principalmente del eminente Bluntschli, dice en su art. 588, que la mujer debe seguir al marido, pero que éste no puede hacer uso de la fuerza *(mais il n'est pas permis de l'y contraindre de force)*. ¿Sería lícito á un español retener violentamente á su mujer en Zurich dentro del domicilio conyugal? El estatuto personal autoriza al marido español para emplear medios coercitivos, sin llegar al castigo, con el objeto de exigir de la mujer el cumplimiento del art. 56 del Código civil; pero el empleo de la fuerza en cualquiera de sus formas está prohibido en el cantón de Zurich, y el marido español no podría usar de medio alguno coercitivo. Lo mismo habría sucedido al marido inglés, que con arreglo á su *common law* hubiera intentado sacar á su mujer en España al mercado público con una soga al cuello.

La organización de la familia es de orden público, y, si hubiéramos de atenernos al sentido literal de la frase, las relaciones de familia se regirían siempre por el estatuto territorial, lo cual equivaldría á contradecir en lo principal las progresivas disposiciones de los Códigos modernos, que declaran obligatorias las leyes relativas á los derechos y deberes de familia, ó al estado, condición y capacidad legal de las personas, aun residiendo en país extranjero. Para la aplicación de los estatutos, en relación con los derechos y deberes de familia, se debe entender, con Laurent, que afectan al orden público los actos que comprometen el interés social, no los que corresponden tan sólo al orden interior de la familia.

Lo que no se debe perder de vista es que el poder marital y la patria potestad, respondiendo en todas las naciones civilizadas al mismo fin, representan cosas distintas, en cuanto á los medios de realizarlo, porque predomina en unos pueblos la corrección, siendo entonces legítimo el uso moderado de la fuerza, y en otros pueblos se otorga el poder para cumplir debe-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

res de protección y de perfeccionamiento, en cuyo caso el empleo de la fuerza no es legítimo sin la intervención directa de la autoridad pública. El interés de la sociedad, por lo que tiene de penal la corrección, autoriza la aplicación del estatuto real, para impedir el empleo de correcciones que constituyan ataques á la libertad ó á la seguridad, no autorizados por la ley del territorio.

Las relaciones de familia, en cuanto á los bienes, se rigen por la ley personal del marido. Los jurisconsultos ingleses y americanos sostienen que la ley del matrimonio es la del lugar en donde se haya celebrado, sin embargo de lo cual no convalidan el matrimonio contraído por ingleses ó americanos, conforme á la ley local, si uno de los contrayentes no tuviese capacidad para casarse, con arreglo á la ley personal.

Opone gran resistencia la preocupación general, en cuanto á la aplicación de leyes extranjeras, que se tiene erróneamente por contrario á la soberanía del Estado, y se da caso de que, admitiendo como principio indiscutible el estatuto personal para el régimen de los derechos y deberes de familia, aunque residan marido y mujer en país extranjero, se niega el principio en sus efectos al hacer aplicación de la ley extranjera, so pretexto de que ésta no pueda tener fuerza obligatoria. Una mujer francesa, por ejemplo, casada con un español, hipotecó en Francia un inmueble, que era de su pertenencia, para garantizar el cumplimiento de una obligación contraída por su marido. Era nula la hipoteca, con arreglo á la ley española, y así lo declaró el Tribunal del Sena en primera instancia; pero interpuesta apelación, y después en casación, se declaró que era inútil la discusión de la ley española, porque el art. 3º del Código civil francés dispone que los inmuebles, aun los poseídos por extranjeros, se rigen por la ley francesa. Con razón impugna severamente Laurent esa doctrina, porque la cuestión versaba sobre asunto distinto del régimen de los inmuebles en Francia. Tenía por objeto la declaración de capacidad ó incapacidad de la mujer española para obligarse solidariamente

con su marido, ó como fiadora de éste, y esa cuestión debió resolverse por los tribunales franceses con arreglo á la ley española.

Es verdad que la fórmula empleada por los Códigos modernos para consignar ese principio deja mucho que desear. Nuestro Código civil dice: "Las leyes relativas á los derechos y deberes de familia, ó al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan á los españoles, aunque residan en país extranjero." En el Código español se debería reconocer el derecho de los extranjeros, en tales casos, á regirse por su ley respectiva, y en los Códigos extranjeros reconocer á su vez idéntico derecho á los españoles. El Código del cantón de Zurich, que es un modelo de redacción, así lo establece. Dice su art. 3º: "Las relaciones de familia entre ciudadanos del cantón se rigen por la ley de su lugar de origen.

"Las relaciones de familia entre extranjeros residentes en el cantón se rigen por la ley del Estado á que pertenecen, con tal que esta ley así lo prescriba." Y en el art. 615 se lleva el respeto al estatuto personal hasta el punto de disponer que el "régimen matrimonial, descrito en los arts. 589 al 604, es el régimen legal para todos los que se encuentren sujetos á la jurisdicción del cantón *(ressortissants)*, aunque estén domiciliados fuera de él, así como para los extranjeros que residan en el cantón, en tanto que la ley del Estado á que éstos pertenezcan no se oponga á ello."

Esto es lo que, sin vacilación, se debe hacer en todos los Códigos de los pueblos civilizados: reconocer el derecho del extranjero á que se le aplique la ley de origen en todo lo relativo á su estado y capacidad y al régimen de la familia, sin perjuicio de la autoridad que respectivamente corresponde á los diversos Estados, soberanos dentro de su territorio en todo lo que concierne al orden público y á las buenas costumbres, ó, en términos más generales, al interés social.

En lo tocante al régimen económico de la familia, cuando ésta cambia de domicilio ó de nacionalidad, abandonando el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

país de origen, se habrá de tener en consideración que, por virtud del matrimonio, se establecen relaciones de derecho entre marido y mujer, que ninguno de éstos puede modificar *contra la voluntad del otro.* Tan sólo en el caso de que las leyes del país de origen fueran incompatibles con el interés social del país de adopción, cederían los intereses ó los derechos particulares de cualquiera de los dos cónyuges ante el interés general de la nación adonde se hubieran éstos trasladado.

Disuelto el matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, puede cambiar de nacionalidad el supérstite y pasar á segundas nupcias, continuando los hijos que hubiere del primer matrimonio en su país de origen, ó cambiar éstos de nacionalidad juntamente con el padre ó madre. ¿Cuál será la ley aplicable á las relaciones patrimoniales entre el cónyuge supérstite y sus hijos del primer matrimonio? El derecho á los bienes reservables, su garantía, ó constitución de hipoteca, se regirán por las leyes del país de origen. Todas las relaciones jurídicas, directamente nacidas del primer matrimonio entre el cónyuge sobreviviente y sus hijos, caen bajo la acción de las leyes ó del estatuto personal del padre de éstos al tiempo de celebrar el primer matrimonio. Los derechos creados con arreglo á una ley determinada no pueden sufrir alteración en sus condiciones intrínsecas por un cambio de domicilio ó nacionalidad. Se requiere una de las causas que en derecho modifican las relaciones jurídicas.

En cuanto á la sucesión hereditaria del cónyuge que pasó á segundas nupcias y cambió de nacionalidad, ó respecto de quien únicamente ocurrió esto último, habrá de regir la ley local, porque ya no se trata de derechos nacidos del primer matrimonio, sino de los efectos de una sucesión abierta bajo leyes distintas de las que rigieron el contrato matrimonial y sus efectos.

II

El divorcio en el Derecho internacional ofrece tales dificultades y conflictos, que ni por medio de tratados, mientras las ideas y las costumbres continúen en su actual situación, se encontrará solución al conflicto entre las diversas leyes de los países que componen el mundo civilizado. La religión entra en primer término á complicar las cuestiones que por su esencia son ó debieran ser exclusivamente jurídicas, y extrañas, por consiguiente, á toda creencia religiosa. Mientras la Iglesia católica condena en absoluto el divorcio como fuente de inmoralidad, los pueblos protestantes legislan acerca del divorcio con el fin de extirpar el escándalo y la inmoralidad de los matrimonios divididos por la disparidad de tendencias, de carácter ó de propósitos entre marido y mujer. Para unos, el divorcio es siempre piedra de escándalo; para otros es, como la amputación de un miembro enfermo, remedio contra la gangrena de uniones insostenibles.

Como punto de Derecho internacional privado, no cabe dentro de los límites de este estudio la discusión relativa á los fundamentos éticos del divorcio. Cuando se han roto los vínculos del amor y la unión de las almas desaparece, surgiendo en su lugar el fuego devorador de los odios íntimos, si el sentimiento del deber y el sacrificio personal no se sobreponen á los encendidos movimientos de la pasión, la separación será un hecho irremediable y el divorcio tomará entonces el carácter de medio reconstituyente de las fuerzas morales, debilitadas en el seno de un matrimonio desmoralizado.

Pero no se trata de dar unidad á los pensamientos discordantes ni de someter á un dogma las Iglesias infalibles. Existe diversidad en las leyes como resultado de las profundas diferencias que separan unos de otros á los individuos y á los pueblos. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre esas contradictorias leyes? ¿Cómo se evita que el divorcio decretado con

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

arreglo á las leyes de un país carezca de valor legal en otros países? ¿Cómo se impide que los hijos legítimos en Inglaterra sean adulterinos en Francia, y que los derechos hereditarios según la ley belga sean desconocidos por la ley española? La misión del Derecho internacional, eminentemente civilizadora, tiene por fin principal la resolución de tales conflictos que perturban en gran manera el orden jurídico. Coopera, sin duda, á la unificación del derecho en sus principios fundamentales; pero no es eso lo que se propone la ciencia, más que el legislador, enfrente de los conflictos entre las leyes de los diversos Estados, sino llegar á una solución que, respetando de un lado hechos que constituyen uno de los aspectos de la vida, sembrada de contradicciones, mantenga por otro lado el derecho de cada uno á vivir según la ley propia del caso.

Considerado por algunos el matrimonio como un contrato ordinario, sostúvose que el lugar de la celebración del matrimonio era, como diría Savigny, el lugar ó asiento de las relaciones jurídicas derivadas del divorcio. Story expuso extensamente las doctrinas reinantes en su tiempo, admitiendo como indiscutible que la jurisprudencia del lugar en donde se celebra el matrimonio y en donde á la vez están domiciliados los cónyuges, rige las relaciones de familia, y por consiguiente las del divorcio. La dificultad se presenta rodeada de cuestiones embarazosas, decía Story, cuando son distintos el domicilio y el lugar del contrato. Entonces la diferencia de criterio en los tribunales puso de manifiesto la falsa situación en que todos se habían colocado. La teoría, que hacía depender la ley aplicable al caso del lugar en que se celebraba el contrato, va quedando abandonada al olvido.

La determinación del lugar propio de la relación jurídica, que Savigny defendió con ardor como solución única enfrente de la insostenible doctrina de los estatutos, según la entendían los glosadores, aparecía bajo la pluma de tan egregio jurisconsulto con los prestigios de la novedad y de una profunda concepción; pero en realidad carecía de base, y quedó, con

aplicación al divorcio, reducida esa teoría á la ley del domicilio, que es la sostenida hoy por Bar y la mayor parte de los jurisconsultos alemanes, ingleses y norteamericanos.

Entiende Bar que el divorcio está sujeto á la ley del domicilio de los cónyuges, ó sea del domicilio matrimonial, que es el del marido, y añade que si bien el matrimonio descansa *sobre la intención de partes*, ó personas, *privadas*, es una institución de *derecho público*, y que marido y mujer están sujetos al derecho público *(jus publicum)* del lugar en donde tienen su domicilio. Parece, bajo cierto aspecto, que la ley aplicable es, en opinión de Bar, la del estatuto real, la del lugar en donde tienen fija los cónyuges su residencia; pero como ésta es variable, como depende de la voluntad del marido, es tenida la ley por personal con todos los inconvenientes de la movilidad á que está subordinado el domicilio de las personas.

Se confunde á menudo la competencia ó jurisdicción para conocer en las causas de divorcio, con la ley en que se debe fundar la resolución, y es necesario distinguir entre lo uno y lo otro. El juez del lugar en donde tiene fija su residencia el matrimonio, entiende en el pleito de divorcio promovido entre extranjeros, porque la administración de justicia es un deber del Estado respecto de todos los que se encuentran bajo su jurisdicción. Constituye, además, un deber la administración de justicia á propios y extraños, porque ésta es condición necesaria para la vida del derecho y para el sostenimiento del orden público, fines primordiales que se imponen á todo poder soberano. Pero la ley aplicable al caso será ó no la del lugar ó nación en que se administra justicia, según la índole de las relaciones jurídicas que entrañe la cuestión.

En Inglaterra, antes de 1858, tan sólo el Parlamento tenía competencia para conocer en los pleitos de divorcio. En la Cámara de los lores, y aún conserva ese carácter dentro de límites muy reducidos, alto tribunal y miembro del Poder legislativo, y los divorcios se decretaban por medio de leyes, que tenían forma de sentencia. De ahí el que se tuviera por

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nula la sentencia de divorcio, pronunciada en el extranjero, respecto de un matrimonio. En la práctica era indisoluble el matrimonio inglés, fuera de Inglaterra. Desde 1858, en cuya fecha se instituyó un tribunal especial para los divorcios, no sólo es disoluble el matrimonio, sino que el tribunal del domicilio en el Reino Unido, ó en el extranjero, es competente para conocer en pleitos de esa índole, aplicando, por supuesto, la ley inglesa.

Eran frecuentes los conflictos entre las leyes de Inglaterra y Escocia con motivo de los divorcios de matrimonios ingleses decretados en este país, considerado, para el caso, como extranjero.

En Escocia se rige el matrimonio por el estatuto real, y así como basta la residencia de pocos días para casarse verbalmente en *Gretna Green*, se declara el divorcio entre extranjeros con igual facilidad. Los inconvenientes aparecieron muy de relieve en el conocido *Lolley's Case*. Los jueces de Escocia estimaron un divorcio solicitado por Mr. Lolley, inglés, que en su país había celebrado matrimonio con mujer inglesa, y contrajo, después del divorcio, segundo matrimonio en Inglaterra. Los jueces ingleses le tuvieron por bígamo, entretanto que los jueces de Escocia, manteniendo su jurisdicción, continuaron disolviendo matrimonios ingleses. Casos idénticos se vienen repitiendo en otras naciones.

La raíz del mal está en la discordancia acerca del carácter que ostentan las relaciones jurídicas creadas por el matrimonio, que es una institución de derecho privado, aunque trascienda por sus efectos, como todas las instituciones que se forman y viven en el seno de la sociedad, al orden público. Afecta esencialmente el matrimonio, lo mismo que el divorcio, al estado y capacidad de los cónyuges, y el estatuto personal, que rige las relaciones de familia, se debe aplicar al caso de disolución ó subsistencia del matrimonio extranjero.

En buen hora que sea juez competente para conocer de una demanda de divorcio el del domicilio matrimonial, no el

de la mera residencia, que se proceda en la substanciación del juicio con sujeción estricta á la ley local, porque los actos se realizan con arreglo á lo establecido en el lugar donde revisten forma legal: *locus regit actum*. Pero los principios que han de servir de base á la resolución judicial no pueden ser distintos de aquellos en que encarna la relación jurídica objeto de la controversia, siempre que se trate de asunto concerniente al estado y capacidad de las personas. Negar esta doctrina sería tanto como rechazar los fundamentos del Derecho internacional privado.

Verdad es que se antepone el interés social al derecho ó al interés privado, y que, estimando el divorcio como suprema necesidad para restablecer el orden social perturbado, según unos, ó condenándolo como piedra de escándalo y contrario á las buenas costumbres, según otros, se decreta ó se rechaza el divorcio, invocando el interés primordial del orden público ó de las buenas costumbres, y prescindiendo del estatuto personal.

Pero ¿hay escándolo mayor, perturbación más honda del orden social que el divorcio, válido con arreglo á las leyes del país en que fué estimado, nulo según las leyes de la nación á que pertenecen los cónyuges? hay algo que desmoralice tanto como el segundo matrimonio, tenido por legítimo en un Estado y condenado como delito de bigamia en la nación vecina? ¿Es edificante el matrimonio cuya disolución reclaman las leyes y costumbres del país en donde nacieron y vivieron marido y mujer, sostenido, sin embargo, en la nación adonde se trasladara el marido con el objeto de eludir el cumplimiento de la ley personal? Tal estado de violencia en las relaciones de familia pugna con los sentimientos de honor, con el verdadero interés social de los modernos pueblos.

Existe una solución, esencialmente jurídica, para todos esos problemas. Las leyes relativas al estado y capacidad constituyen la garantía de la personalidad en el orden jurídico, y siguen á la persona, cualquiera que sea el lugar en que se en-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cuentre. El hombre es capaz ó incapaz, mayor ó menor de edad, casado ó soltero, según las leyes de su nación. No se modifica la personalidad en sus condiciones jurídicas al traspasar la frontera. Este es uno de los principios fundamentales del derecho, en lo que tiene de universal.

Con aplicar, pues, la ley personal á los casos de divorcio, respetando la indisolubilidad del matrimonio cuando sea indisoluble por virtud del estatuto personal, administrando justicia al que solicite la declaración de divorcio con arreglo á su ley personal, aunque el estatuto real no consienta la disolución del vínculo conyugal, se restablecerá la paz en esta parte interesantísima de las relaciones jurídicas en la familia.

Aparte la gravísima dificultad que presenta la diversidad de creencias religiosas, existen diferencias de carácter jurídico, principalmente en la doctrina anglo-americana y la generalmente seguida en el continente europeo, que no desaparecerá como no sea por medio de tratados internacionales. Es opinión común entre los jurisconsultos ingleses y norteamericanos que el divorcio se rige por la ley del lugar en donde el matrimonio se haya celebrado. El trabajo lento de la discusión científica va minando ó minó ya la base de esa doctrina, pues no cabe desconocer la poderosa influencia que los jurisconsultos italianos, principalmente, vienen ejerciendo en el sentido de que el estatuto personal tiene por fundamento la ley nacional de las personas interesadas, y á esta ley habrá de referirse toda solución que se adopte por medio de tratados internacionales para resolver los conflictos que surjan en los casos de divorcio intentado en país extranjero.

La misma ley nacional ó estatuto personal que sirve de regla para declarar el divorcio, debe regir la distribución y entrega de bienes entre los cónyuges y las relaciones de los padres con sus hijos. La alimentación de éstos, su educación y tutela nacen ó se derivan del matrimonio; y aunque éste se disuelva, subsisten relaciones de familia entre padres é hijos que deben ser dirigidas por la ley de origen.

Un gran jurisconsulto, aquel á quien más debe la ciencia del Derecho en los presentes tiempos, Laurent, sostiene que el estatuto real es aplicable á las relaciones de familia entre padres é hijos, porque el interés de la sociedad en que el padre eduque á sus hijos, perfeccione su instrucción y cumpla todos los deberes que le impone la patria potestad, es de orden superior al derecho y al interés personal del jefe de la familia,

Este es el título, en verdad, con que el Estado se ingiere en el seno de las familias, siempre que, con el objeto de hacer efectiva la enseñanza, emplea medios coercitivos para que el padre realice ese fin jurídico respecto de sus hijos. Se espera más del Estado que de la nación social, sin atender á que son muy complexos los medios que la sociedad pone en juego para cumplir todos los fines de la vida, y se corre el peligro de chocar con graves inconvenientes, en el orden económico, ora enervando las energías morales, ora creando serias perturbaciones en el movimiento interno de la familia y de la sociedad, cuando en detrimento de la espontaneidad individual se agranda la intervención del Estado por superiores razones de interés social. Ese camino nos conduciría á la negación del estatuto personal, porque indirectamente va envuelto siempre el interés social en el ejercicio de los derechos particulares. El interés social que justifica la intervención directa del Estado y la aplicación, por tanto, del estatuto real, en pugna con el estatuto personal, es el interés colectivo de la sociedad, tomada como organismo superior á los organismos en ella contenidos. Con tales procedimientos, la absorción del individuo por el Estado es siempre de temer.

Resumiendo: la forma ó solemnidades que hayan de concurrir en la celebración del matrimonio, serán las del lugar en donde éste se realice.

El estado y capacidad de las personas se determinarán con arreglo á la ley nacional de los futuros cónyuges.

Asimismo las relaciones de familia entre marido y mujer y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

entre padres é hijos se regirán por la ley ó estatuto personal del marido: es su estatuto personal la ley de la nación á que él pertenece.

Cuando se opone á la aplicación del estatuto personal un interés de orden superior, que se relacione con el derecho público, con el bienestar de la sociedad, ó con las buenas costumbres, prevalecerá el estatuto real, es á saber, la ley del territorio.

La competencia para conocer en los pleitos de divorcio corresponde á los jueces del domicilio matrimonial.

La ley aplicable, para juzgar de la procedencia del divorcio, y de las causas que lo motiven, es el estatuto personal de los cónyuges, salvando siempre el caso de que se opongan las buenas costumbres ó el orden público del lugar: entonces se aplicará el estatuto real.

¿ES CONSTITUCIONAL

LA LEY QUE AL CREAR UN IMPUESTO, CONMINA CON PRISIÓN Ú OTRO APREMIO PERSONAL AL CAUSANTE MOROSO? *

Señores Académicos:

Los elocuentes discursos que se han pronunciado, han dado á la discusión proporciones gigantescas; y como sostenedor de la inconstitucionalidad de la prisión por deudas fiscales, me creo obligado á hacer uso de la palabra por última vez, esforzándome hasta donde me sea posible, con el fin de evitar el naufragio de los dogmas constitucionales que he proclamado aquí.

Todos estamos de acuerdo en que el Fisco no puede atentar al sagrado derecho de la propiedad, declarando caducos los derechos ó acciones deducibles en juicio, si la parte actora no justificase haber saldado sus impuestos; lo estamos también, en que no puede apremiar á la parte demandada con la caducidad de sus excepciones, si á su vez no justificase haber pagado esos impuestos; y sin embargo, cuando discutimos y negamos que el Fisco tenga tal omnipotencia que pueda llegar hasta el santuario de la libertad humana, como un medio

* Discurso pronunciado por el Lic. Fernando Vega, en la Academia de Legislación y Jurisprudencia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

entre padres é hijos se regirán por la ley ó estatuto personal del marido: es su estatuto personal la ley de la nación á que él pertenece.

Cuando se opone á la aplicación del estatuto personal un interés de orden superior, que se relacione con el derecho público, con el bienestar de la sociedad, ó con las buenas costumbres, prevalecerá el estatuto real, es á saber, la ley del territorio.

La competencia para conocer en los pleitos de divorcio corresponde á los jueces del domicilio matrimonial.

La ley aplicable, para juzgar de la procedencia del divorcio, y de las causas que lo motiven, es el estatuto personal de los cónyuges, salvando siempre el caso de que se opongan las buenas costumbres ó el orden público del lugar: entonces se aplicará el estatuto real.

¿ES CONSTITUCIONAL

LA LEY QUE AL CREAR UN IMPUESTO, CONMINA CON PRISIÓN Ú OTRO APREMIO PERSONAL AL CAUSANTE MOROSO? *

Señores Académicos:

Los elocuentes discursos que se han pronunciado, han dado á la discusión proporciones gigantescas; y como sostenedor de la inconstitucionalidad de la prisión por deudas fiscales, me creo obligado á hacer uso de la palabra por última vez, esforzándome hasta donde me sea posible, con el fin de evitar el naufragio de los dogmas constitucionales que he proclamado aquí.

Todos estamos de acuerdo en que el Fisco no puede atentar al sagrado derecho de la propiedad, declarando caducos los derechos ó acciones deducibles en juicio, si la parte actora no justificase haber saldado sus impuestos; lo estamos también, en que no puede apremiar á la parte demandada con la caducidad de sus excepciones, si á su vez no justificase haber pagado esos impuestos; y sin embargo, cuando discutimos y negamos que el Fisco tenga tal omnipotencia que pueda llegar hasta el santuario de la libertad humana, como un medio

* Discurso pronunciado por el Lic. Fernando Vega, en la Academia de Legislación y Jurisprudencia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de coacción que apremie á los causantes morosos, un abismo nos divide. Aberración inexplicable que es necesario destruir con supremos esfuerzos de criterio.

Nuestros adversarios, por medio de la elocuente voz del Sr. Arroyo de Anda, han demostrado con una plenitud perfecta, que el Fisco no ejerce violencia, cuando, para la percepción de sus impuestos, acude á procedimientos irregulares, y han demostrado también, que la prisión, como medida de apremio, no significa la aplicación de una pena inusitada y trascendental. Nace ahora mi deber de retirar del debate esos argumentos, para reconcentrarme en el que es derivado del art. 17 de la Ley Suprema y que, á mi juicio, entraña la síntesis de la discusión.

Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil, dice el art. 17. ¿La obligación de pagar un impuesto público es de un carácter puramente civil? Nuestros adversarios sostienen que los constituyentes se refirieron á las obligaciones nacidas de contrato; es decir, á las que surgen de las relaciones que se producen entre individuos particulares en el curso de la vida civil, ó en otros términos, á las que emanan de un hecho generador de acciones y excepciones.

Niegan que la obligación de pagar los impuestos provenga "ex-contractu," porque siendo la base de una convención el consentimiento de las partes, no se encuentra ese elemento en la percepción de los impuestos, los cuales se pagan por los causantes con su voluntad ó sin ella. Se nos dice más todavía, que la obligación de pagar las contribuciones, no es civil, sino "política," y sancionada en la Ley Suprema como una de las bases del pacto fundamental.

Para resolver esas objeciones, las ciencias del Derecho y de la Economía política suministran una clave segura. Comte define el impuesto: "El pago de los servicios que recibe cada individuo de manos del Gobierno, representante de los intereses sociales." Eduardo Vignes lo define: "El impuesto es la contribución designada á cada ciudadano como precio de los

servicios y de la protección que él recibe de la sociedad." (Des impots, tomo 1º, número 1). Según Adam Smith, "el impuesto es la contribución de todos los miembros de la sociedad ó de una parte de ellos para los gastos del Gobierno." La Asamblea Nacional de 1789 lo definió: "la deuda común de los ciudadanos y el precio de las ventajas que la sociedad les procura." El impuesto no es, pues, otra cosa, que el precio de un servicio social ó la remuneración de esos servicios; y es tan necesario pagarlo, como pagar el precio de cualquiera otro servicio. Del principio de que el impuesto es el precio de un servicio, resulta, que si el "presente" recibe el servicio y aplaza el pago para el porvenir, comete una injusticia, porque extorsiona á las generaciones futuras, salvo que el impuesto sea también favorable á las generaciones venideras, porque entonces deben tener una obligación proporcional á la utilidad que han recibido.

"Se ha pretendido que la gabela del impuesto no cría una deuda que pueda exigirse por medio de un litigio judicial, supuesto que ella no proviene de contrato alguno y no existe previo consentimiento para el pago. Los procedimientos para su cobro "son in invitum." El impuesto es una contribución decretada por la autoridad del Gobierno para el sostenimiento del Estado, y no tiene ninguna de las cualidades que caracterizan á los contratos cuya esencia es el consentimiento implícito ó explícito.... Sin embargo, según los principios, parece que puede ejercerse una acción en materia de impuestos.... Los ciudadanos gozan de los beneficios del Gobierno: sus personas y propiedades son protegidas: ellos deben por tanto pagar los gastos del Gobierno. ¿Cómo la ley no podría suponer la implícita promesa del ciudadano de pagar la parte proporcional de esos gastos? Y cuando por la misma ley está determinada esa parte que debe cada ciudadano pagar, ¿no se podría considerar como una implícita promesa de éste, la de verificar ese pago? Los impuestos son una necesidad política. Si la ley cría una promesa de pago, para que un ciudadano no

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pueda obtener los servicios ó bienes de otro sin compensación, de seguro, en materia de impuestos, ella impone la misma promesa para que el Estado pueda existir. Las contribuciones constituyen una "obligación personal del ciudadano," sin perjuicio de afectar los bienes sobre que recae." (Burroghs. De la Tasación, págs. 253-254).

No puede ser más uniforme la opinión de los publicistas al definir el impuesto. Todos lo clasifican como un verdadero contrato innominado "do ut facias," que cría derechos y obligaciones recíprocos entre el poder público y los asociados. Estos tienen el deber imprescindible de pagar las cargas públicas; pero es indisputable el derecho que tienen también para exigir del Gobierno probidad en la administración de sus fondos, cumplimiento en los servicios de esa administración, y también lo tienen para obtener que esos fondos no se apliquen á otro objeto, que al sostenimiento de los diferentes ramos que constituyen la administración de un pueblo. El impuesto cuya recaudación no se aplique á aquel fin nobilísimo, puede ser resistido por los causantes y puede ser discutido en el terreno contencioso, mediante excepciones que enerven y destruyan la acción fiscal.

El inmortal jurisconsulto Sr. D. Ignacio Vallarta, traza con toda exactitud esas relaciones jurídicas que los impuestos crían entre el poder público y los asociados. Se expresa así en su notable monografía sobre facultad económico-coactiva: "Aunque establecemos como regla general que los tribunales son incompetentes para juzgar de la ilegitimidad, proporción, etc., de los impuestos, admitimos sin embargo como excepciones de esa regla los casos en que la contribución se impusiera para objetos privados y no públicos, en que ella se localice en un pueblo, cuando debiera extenderse á todo el Estado, y cuando la Legislatura traspasara sus poderes exigiéndola de cosas que están fuera de su jurisdicción territorial, cuando la contribución, en fin, estuviese en conflicto con la ley fundamental del Estado ó de la Unión. En todos estos casos toca á los tribunales decidir las cuestiones que en materia de impuestos se susciten (pág. 36).

Se ve, pues, con toda claridad, que las obligaciones existentes en favor del Fisco representan una relación jurídica entre deudor y acreedor, que puede dar margen á una contienda susceptible de definirse por sentencia formal; y después de este cuadro jurídico, no es lícito vacilar sobre el carácter civil de las obligaciones fiscales.

Si el adverbio "puramente civil" se usó por los constituyentes en contraposición de las deudas provenientes de delito ó de un origen puramente criminal, es incuestionable que, si la morosidad del pago de un impuesto no tiene por sí misma un carácter doloso, ni significa otra cosa que un simple atraso, que emana, ó de incuria del causante ó de su pobreza de recursos metálicos, no puede ser origen de una prisión, sin que el legislador que la imponga viole el artículo 17 de la ley suprema.

Por demás parece decir que no se trata de la prisión motivada por un contrabando, falsos informes á la autoridad ú otro hecho doloso, porque en estos casos nadie disputa la necesidad de procedimientos de un orden criminal, que repriman y castiguen esos verdaderos fraudes. La especie que provoca este debate es puramente la de saber si el Fisco puede acudir al secuestro personal, como procedimiento coactivo para obtener el pago de sus impuestos, y colocada la cuestión en tal terreno, si debemos disputarle el ejercicio de tan monstruosa facultad.

La jurisprudencia constitucional presenta un cuadro uniforme de ejecutorias, condenando la prisión por deudas fiscales:

"México, Junio 13 de 1881. Visto el recurso de amparo interpuesto ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por Ramón Alcalde, contra el presidente municipal de Tepetongo, que lo redujo á prisión por no haber pagado una contribución á favor de la Instrucción Pública, con lo que reputa violadas en su perjuicio las garantías que consignan los artículos 16, 17, 18 y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

27 de la Constitución. Visto el fallo del Juez de Distrito que concedió el amparo; y

Considerando: que el hecho ha sido confesado por la autoridad responsable; que el adeudo á Instrucción pública es de un carácter puramente civil, por lo que la prisión impuesta para obtener el pago viola el artículo 17 de la Constitución." (*Semanario Judicial*, segunda época, tomo II, página 408).

"..... que con el hecho de consignar á disposición del Jefe político á los que no enteran la cuota, se infringe el artículo 17 del Pacto federal, en su primera parte, pues equivale á una prisión por deudas de un carácter puramente civil." (*El Foro*, año de 1880, segunda época, tomo VII, número 91: Amparo promovido por los CC. Bartolomé Garcés, Juan Olin, Nemesio Mejía, Simón Martínez y Paz Serrano, vecinos del pueblo de San Felipe Tlalmimilolpan, en el Estado de México, contra los procedimientos de un Jefe político que les exigía el servicio llamado de "veintenas," ó en su defecto una multa, que si no era pagada se les conminaba con arresto).

La jurisprudencia y los principios han estado, pues, en íntimo consorcio, y el carácter civil de las acciones fiscales, ha sido sancionado ya con los honores de un principio teórico indiscutible. En vano acuden los defensores del apremio personal en busca de una nomenclatura convencional desconocida por la ciencia y por los publicistas, llamando "política" á la obligación que pesa sobre los ciudadanos para contribuir á los gastos de las cargas públicas. Si la Constitución elevó á la categoría de "base fundamental" dichas obligaciones, no fué porque á ella debiesen su origen ó advenimiento. Antes de formarse nuestra Constitución y desde que las sociedades han sido constituidas bajo la denominación de Estado, la obligación de contribuir para los gastos públicos ha sido un axioma; de modo que, si por un instante admitiésemos que la Constitución de la República no se había ocupado de la sanción de ese deber, eso no obstante, nadie tendría el valor de apoyarse en esa omisión para sostener que no teníamos el deber de sostener con nuestros bienes el servicio de la Administración. ¡Prueba inconcusa de que aquella obligación no emana de las constituciones escritas de un pueblo, sino de la existencia misma de la sociedad!

Si pues el artículo 17 de la Constitución admitió solamente la pérdida de la libertad personal por hechos delictuosos, ninguna autoridad conserva poder para decretarla en otro caso.

Ya el inteligente jurisconsulto Sr. D. José Portillo nos advirtió, en su erudito discurso, el íntimo enlace que existe entre los artículos 17 y 18 de la Constitución. En efecto, si la prisión procede solamente por delito que merezca pena corporal, el Fisco no puede decretarla contra los causantes morosos en el pago del impuesto, porque ni esa morosidad, ni las obligaciones del causante constituyen, como acabamos de verlo, un delito. Sería necesario suponer, como lo han sostenido ya los brillantes paladines de la escuela opuesta, que al poder público le es lícito considerar como delito un hecho esencialmente inocente, para admitir la existencia de una prisión por deudas fiscales, sin infringirse el artículo 18; pero, ¿sería admisible esa omnipotencia legislativa, ya no en el seno de una Constitución libérrima como la nuestra, sino en el terreno de los principios teóricos que están sirviendo de base al derecho penal moderno? En otros términos, ¿le será lícita al legislador erigir en delito un hecho que ni la justicia ni la moral condenan?

El Sr. Lic. Sánchez Gavito y yo con él, discutimos y desconocemos la existencia de ese poder tan desproporcionado que, bastardeando las funciones de un legislador, lo convertía en un tirano de la ciencia, en un tirano del derecho y una verdadera monstruosidad, que podría resistirse por la fuerza; y por lo que á nosotros toca, (satisfactorio es decirlo), cuantas veces ha intentado el legislador salvar sus naturales fronteras convirtiendo en delito los hechos más puros é inocentes, la justicia federal, mediante el procedimiento de amparo, ha hecho abortar semejantes extravaciones: . . . .

"Considerando" (dice una ejecutoria) que por más que diga

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la ley del Estado de Tamaulipas, el contrato de un sirviente con un amo, es de un carácter puramente civil y su falta de cumplimiento, como dice muy bien el Promotor Fiscal, se resuelve por daños y perjuicios y nunca por prisión ó encarcelamiento: que esto supuesto y ordenando el artículo 17 de la Constitución federal, que nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil, es claro que con el arresto ó detención de José Vázquez, se violó dicho artículo y el 17. (*Semanario Judicial*, segunda época, tomo XIII, página 381. Amparo pedido ante el Juez de Distrito de Tamaulipas).

"Considerando (dice otra sentencia), que si bien las leyes del Estado de Nuevo León, con sujeción á las que celebró Aguirre el contrato cuyo cumplimiento se le exige, califican como delito de estafa el hecho por que se le persigue, tal calificación no puede subsistir, por ser contraria á las prescripciones del artículo 17 citado y estar prevenido en el artículo 126 de la Constitución que ésta, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanan y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión, y que los Jueces se arreglen á dicha Constitución, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones que en contrario pueda haber en los demás Estados: que son numerosas las ejecutorias que conceden el amparo en casos como el presente.... (*Semanario Judicial*, segunda época, tomo III, página 317. Amparo pedido ante el Juez de Distrito de Coahuila).

¡Así ha muerto, señores académicos, ese poder autocrático en los momentos de nacer, derribado á los golpes del recurso de amparo!

Empero la fecundidad de ingenio del Sr. Arroyo de Anda encontró un nuevo sistema de argumentación ante el absolutismo del artículo 18. Ese precepto prohibe imponer pena de prisión á hechos que no estén castigados con ella en el cuerpo de nuestros Códigos; pero, según él, la prisión por deudas no significa una verdadera pena, ni significa otra cosa que una

simple medida de un orden administrativo, que cae de lleno en el ejercicio de esa facultad que la Constitución reconoce en favor de las autoridades políticas ó administrativas, para imponer, por vía de corrección, hasta quinientos pesos de multa ó un mes de reclusión. Nuestro respetable académico nos hace una distinción entre prisión como pena, detención y reclusión. Declara que el Fisco no puede fulminar el arresto como pena contra el causante moroso, pero sí como corrección, sí como medida administrativa, sí como apremio temporal. Ese sistema no corresponde al vigor de nuestros raciocinios, como vamos á verlo.

Estúdiese ese precepto de la Constitución y se descubrirá, sin esfuerzos, que él se ocupa solamente de resolver una cuestión de competencia constitucional, confiriendo á los jueces jurisdicción exclusiva para castigar todo hecho ilícito cuya gravedad requiera las solemnidades de un juicio criminal para ser definido, y reservando á la política ó administrativa la potestad de reprimir los hechos livianos, las faltas de policía ó de buen gobierno, y en general, todas aquellas infracciones que no demanden las solemnidades de un proceso formal para ser castigadas.

Como se advierte, la facultad que la Constitución otorga á las autoridades políticas ó administrativas, no es arbitraria, sino que en tanto se las ha revestido con esa jurisdicción constitucional, en cuanto que se trate de hechos delictuosos de carácter leve, que necesiten reprensión. No ha avanzado, pues, un solo paso el Sr. Arroyo de Anda en la discusión, al evocarnos la jurisdicción constitucional administrativa; porque de lo que precisamente se trata y lo que está manteniendo vivo el calor de esta discusión, es de saber si el no pago de un impuesto constituye por sí mismo un hecho delictuoso, grave ó leve, y que pueda autorizar á los agentes del Fisco para imponer la pérdida de la libertad personal, ya sea como pena ó ya como corrección.

El Sr. Lic. Sánchez Gavito ha dicho ya con notable acierto,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que la palabra *prisión*, de que habla el artículo 18, significa molestia personal, secuestro del individuo, y en general, el acto de privarle de su libertad de locomoción; todo lo cual significa que nadie puede ser ni detenido, ni declarado formalmente preso, ni arrestado, ni mucho menos castigado con pena corporal, por un hecho que no sea delito, ó que al menos pudiese ser reprimido con una pena pecuniaria. Ningún influjo ejerce, en consecuencia, en esta discusión la teoría de los criminalistas, que marca una distinción teórica entre la prisión como procedimiento y la prisión como pena, y cuya distinción tiene un especial objeto en materia penal. Para nuestra discusión, nos basta saber que por prisión se entiende la pérdida absoluta ó momentánea de la libertad, para que consignemos que ella no pueda ser dictada sino en el exclusivo caso de la averiguación de un delito castigado con pena corporal.

Dice más todavía el Sr. Lic. Arroyo de Anda. Recuerda que los funcionarios del orden judicial gozan de la facultad de hacer obedecer sus determinaciones mediante multas, cateos y prisión hasta por quince días, y sostiene que sería inexplicable que, mientras el poder judicial pudiese descender hasta el apremio para hacer cumplir sus ordenamientos, el Fisco tuviera que permanecer impasible é inerme ante los causantes de un impuesto que se relegasen á una inacción reprensible ó á un desprecio verdadero de los preceptos de una ley fiscal.

Existe, en efecto, esa facultad en el orden judicial; pero ¿es arbitraria y de tal manera absoluta que simbolice el "sic jubeo" de la potestad civil? Oigamos sobre este punto la autorizada voz del Sr. Vallarta . . . . . "Permitaseme advertir que aunque reconozco en los jueces civiles la facultad de decretar apremios, de imponer correcciones disciplinarias, sin que esto motive el amparo, cuando la ley haya sido aplicada exactamente, no admito que ellos, con ese nombre ó con cualquier pretexto, decreten penas verdaderamente tales, y sobre todo las prohibidas en la Constitucion. Si algún Juez quisiera por medio de los azotes hacerse obedecer ó con el tormento arrancar

la confesión de la parte ó de un testigo, apremiándolos así á declarar, aunque estos atentados se cometieran en juicio civil, el amparo sería procedente, porque sin duda se violaría una garantía constitucional." (Votos, Tomo IV, pág. 549.) Ya vera el Sr. Lic. Arroyo de Anda que en esta cuestión, como en todas las que puedan afectar la libertad individual, se levanta la Ley suprema proyectando sus rayos luminosos, marcando el tono á las resoluciones. Yo diría, parodiando al inmortal jurisconsulto, que la autoridad civil, que bajo la apariencia de esas facultades de apremio judicial que la ley otorga, lanzase una orden de arresto contra un litigante que no cumpliese con un fallo condenatorio, provocaría un juicio de amparo constitucional y se haría reo por violación de los arts. 16 y 17 de la ley Suprema.

Tampoco, pues, ha avanzado un paso más nuestro respetable académico al invocarnos en esta discusión las teorías sobre apremio judicial, como un testimonio que permitiese conferirlas también á la autoridad administrativa; y si de algo ha servido esa invocación, ha sido para fundar un paralelismo peligroso á las teorías de su autor, á saber, para demostrarnos que si los supremos preceptos de la Constitución han estorbado siempre las extralimitaciones de la autoridad civil, marcarán también la frontera del poder administrativo, con un círculo de hierro inquebrantable.

Para que las teorías del apremio judicial fundasen el apremio administrativo, sería preciso que el respetable académico nos atestiguase, que á la potestad civil le era lícito acudir al apremio personal para hacer cumplir sus condenaciones pecuniarias, pero esa comprobación no ha sido ni siquiera intentada. La jurisprudencia no se ha deshonrado hasta hoy con un solo caso en que la autoridad federal hubiese consagrado semejante atentado á la libertad humana. Al contrario, la única vez en que una autoridad verdaderamente bárbara, acudió á la prisión para obtener el pago de una suma pecuniaria en que el litigante vencido había sido condenado, la Suprema Corte

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de Justicia fulminó este anatema: "Considerando: que la autoridad responsable informa que en ejercicio de sus legítimas facultades substanció el juicio civil promovido contra Chaires, condenándolo á verificar el pago de la deuda de $15, por resolución dictada con arreglo á derecho, según aparece de las actuaciones que en copia acompaña esa autoridad: cuyo procedimiento por lo mismo no importa la violación de las garantías invocadas.

Considerando: que del mismo informe aparece que la propia autoridad puso preso á Chaires y lo destinó á las obras públicas por no haber cumplido aquella sentencia, y como este procedimiento está proscrito en la Constitución, es indudable que con él se han violado las garantías de los artículos citados por el quejoso." (*Semanario Judicial*, tercera época, tomo XI, pág. 356. Amparo pedido ante el Juez de Distrito de Zacatecas).

La cuestión asume una gravedad alarmante, si la examinamos bajo el aspecto que á mi juicio le es más peculiar. No se trata de otra cosa que de examinar y resolver si al Fisco le es lícito acudir al apremio personal como procedimiento coactivo: de resolver si á semejanza de la legislación antigua, puede el Fisco, en su calidad de acreedor, aprehender á un causante y retenerlo en la cárcel pública hasta que satisfaga el impuesto.

Presentada de este modo la cuestión, la facultad administrativa que discutimos, asume caracteres más monstruosos; porque ya no se trata de la prisión como pena, sino de la prisión como medio ó procedimiento coactivo; ó en otros términos, de un secuestro personal más odioso que la misma pena, porque ésta tendría un término, y el secuestro del deudor podría ser perdurable, si era perdurable su estado de insolvencia. Y si hemos discutido enérgicamente y hemos demostrado con tanta claridad que los adeudos fiscales no pueden ameritar la pena de prisión de un ciudadano sin violar el Pacto fundamental, ¿cómo sería posible fundar y sostenerse que lo que el Fisco no pudiese sancionar como detención ni como pena, pudiese sin embargo hacerlo como apremio personal? ¿Lo que no es lícito como fin, podría serlo como medio?

Cuando se discutió en el Congreso constituyente la abolición del tormento y demás penas trascendentales, hubo un diputado, el Sr. Ruiz, que pidió la abolición de aquellas pero manteniendo los grillos y cadenas como medios de seguridad. El inolvidable Sr. Ramírez exclamó: ¿Se cree que el hombre puede cometer todo género de crímenes para asegurar á un reo? Los grillos como medio de seguridad constituyen una verdadera pena y no es lógico, ni justo, ni humano, que un juez pueda ser más severo para asegurar que para castigar, y valdría más imponer desde luego al acusado la pena del delito que se le imputa, porque así, al menos, se le ahorrará una serie de martirios y sufrimientos.

Parodiando al Sr. Ramírez, permítanme los señores académicos, á quienes tengo el honor de combatir, que yo interrogue: ¿será lógico, será humano que la acción fiscal tenga menos poder para castigar lo que llamáis "la desobediencia de un causante moroso," que para asegurar el pago de su adeudo? Valdría más (sigo yo diciendo), de una vez castigarlo porque siquiera así su tormento personal tendría un término bien definido....

Creo que he satisfecho á las objeciones presentadas por los respetables jurisconsultos que han cargado sobre sus hombros el peso de una teoría inconstitucional condenada ya por la jurisprudencia y contra la cual lanzó ya el primero de nuestros constitucionalistas estos sangrientos apóstrofes:

"Erigir en delito el acto, la falta si se quiere de no pagar al Fisco lo que se le adeuda, sería una monstruosidad, sería volver á los tiempos en que la simple deuda civil era punible y ley que ese delito creara, sería plenamente inconstitucional... sería suspirar por los tiempos de la crueldad de los arrendadores; de los Ayuntamientos, que los conducía á la arbitrariedad, d ela insoportable dureza del apremio militar, de la pri-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sión por deudas fiscales y esto es luchar con el imposible.... Título de honor para nuestros legisladores es haber prohibido la prisión por deuda aunque sea fiscal, el apremio militar, el de dietas diarias, el de responsabilidad personal del Ayuntamiento, el remate de los bienes embargados por la postura que cubra el débito, crueldades todas por la avaricia del Fisco inventadas." Estudio citado sobre facultad coactiva, págs. 12 y 18.

Verdad es que en los Estados Unidos puede el Fisco descender hasta la barbarie de atormentar á un hombre, encerrándolo en una cárcel pública hasta que pague sus deudas fiscales; pero si ese atentado contra la libertad humana tiene ahí alientos de vida, es porque el "Habeas Corpus" se embota ante la legalidad de la prisión por deudas que mantiene aquel pueblo comercial y metalizado, como una sombra, como un punto negro, en medio de la luz que fulguran sus libérrimas instituciones. Empero en Francia, que ha mantenido también su "contrainte par corps" encontrará el pueblo americano una lección severa y un ejemplo elocuente de la inviolabilidad de la libertad humana y de cómo se yergue el derecho individual, aun sobre los resquicios de la antigua tradición romana que encadenando al hombre, como á un vil esclavo, lo abatía hasta prosternarlo á los piés de su acreedor. En Francia, los deudores fiscales que pueden encontrar abiertas las puertas de una cárcel pública, son los receptores, los arrendatarios de impuestos y los poseedores y detentadores de dineros ya pagados al Fisco.

Jamás se ha sujetado á los particulares deudores del impuesto, al apremio personal, porque á juzgar por la opinión del célebre jurisconsulto Coquille, los impuestos y otros subsidios, se pagan por los particulares como una ayuda al Rey y no á título de deuda precisamente debida. (Troplong. De la contratante parte corps, pág. 352).

¡Espectáculo singular! Mientras en Francia, en donde la prisión por deudas civiles exhala sus últimos alientos en el seno

del Código Napoleón, los deudores de impuestos están liberados del apremio personal, porque sus obligaciones no se consideran como verdaderas deudas de un carácter puramente civil, en México, país clásico de la libertad, que ha condenado para siempre la prisión por deudas, hay jurisconsultos respetables que abogan y sostienen el apremio personal contra esos mismos deudores, y (horrible es decirlo), precisamente apoyándose en que sus responsabilidades no son de un orden meramente civil!....

El sarcasmo no puede ser más sangriento, y es á nuestro erudito académico el Sr. Arroyo de Anda, á quien toca desvanecerlo y destruirlo!....

Séame ya lícito concluir declarando, que preñada como en efecto lo está, esta cuestión tan importante, de dificultades y escollos, no son tan poderosos, ni tan densas sus nieblas que no podamos descubrir que en México, el poder fiscal no puede apremiar con prisión á los ciudadanos hasta solventarse sus deudas, sin violar la Constitución de 1857, que es la "ley de nuestras leyes! y la paráfrasis de nuestro derecho público constitucional!"

LIC. FERNANDO VEGA.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LA RECIPROCIDAD INTERNACIONAL.

La reciprocidad internacional que consagra el artículo 32 de la ley de Extranjería y Naturalización, por la cual se conceden á los extranjeros todos los derechos civiles de que gozan los mexicanos, menos los que á éstos les sean negados en la patria de los primeros, es inaplicable, económica y constitucionalmente, porque si bien es cierto que tiende á que se reconozcan las facultades intelectuales, físicas y morales, propias para el desarrollo del hombre, no tiene en cuenta otros elementos que son de vital importancia y son particulares de cada nación, y además, ataca las garantías individuales.

Teóricamente, no hay una razón decisiva para justificar la desigualdad que de hecho existe entre el que nace en una patria y el que nace fuera de ella; los hombres dotados de las mismas facultades naturales, concurriendo al mismo fin, y siendo todos ellos factores de igual fuerza que concurren al progreso de la humanidad, deben tener los mismos derechos, ser amparados con el mismo manto de justicia y gozar de iguales privilegios, puesto que tienen las mismas aptitudes.

Sujetos á la ley de la sociabilidad é influenciados por el clima, el aspecto geológico del lugar en que viven, la producción

más ó menos espontánea ó trabajosa de los frutos de la tierra, la diversidad de razas, de religión y de costumbres, los ha obligado á dividirse en grupos distintos, que, identificándose cada uno de ellos con el medio que los rodeaba, hubieron de formarse necesaria é indispensablemente ideas especiales de patria. Por su carácter particular, por la diversidad de ideas, de hábitos, y por último, de civilización, inventaron formas distintas de gobierno en consonancia con sus necesidades y sus tradiciones, y de aquí que cada pueblo se formara una política propia, pero no quedando por esto destruida la personalidad humana.

Mas al descender de las esferas de la ciencia á estudiar la vida real de las naciones, la historia nos enseña que procurando su progreso individual, llegan á los límites del egoísmo, y las pasiones que surgen del afán de engrandecimiento, apoderándose de ellas, las llevan más allá de las fronteras de sus territorios, hasta ponerlas en estado de hostilidad; entonces, el interés particular, la conveniencia y el celo de mayor preponderancia, entran en juego, representando un papel importantísimo en su desarrollo. Estos nuevos elementos que determinan el individualismo de los pueblos, hacen que se considere al hombre no ya solamente como miembro de la gran familia humana, sino también como un sér perteneciente á una colectividad determinada.

Por esta doble consideración, un extranjero nunca intervendrá en los asuntos políticos de un país, ni en todo aquello que interese al orden público establecido; y sí podrá hacerlo para reclamar el reconocimiento de los derechos inherentes á su personalidad, siempre que no constituyan un peligro para el Estado y no afecte en manera alguna su soberanía, porque entonces no habrá razón alguna que milite victoriosamente para que les sean negados.

Así nuestra Carta Fundamental ampara al extranjero con las mismas garantías que aseguran la libertad, la vida y la propiedad del mexicano, prohibiéndole, sin embargo, todo acceso

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en la política. En su artículo 1º, proclama que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, con tanta firmeza, que prohibe que toda ley, toda autoridad pueda alterar ó modificar las garantías que otorga; y más adelante, en su artículo 33, concede al extranjero el derecho á estas mismas garantías, catalogadas en su sección I, título I, independientemente de las legislaciones de los otros países, y de las restricciones más ó menos onerosas á que estén sujetos los mexicanos residentes en ellos. Partiendo de esta base fija é inmutable, podremos decidir si las leyes mexicanas, conforme á la internacional y á los preceptos constitucionales, pueden ó no juzgar á los extranjeros en México por las mismas reglas que las otras naciones apliquen á los mexicanos residentes en sus territorios.

* * *

En el Derecho Internacional se nota bien marcada la tendencia á borrar toda distinción entre regnícolas y extranjeros, equiparándolos en lo que se relaciona al goce de los derechos civiles. Apenas Rodenburgh y Boullenois expusieron su doctrina sobre la territorialidad de las leyes para resolver los conflictos que se suscitaran entre los pueblos que estrechaban sus relaciones comerciales, cuando el mismo Rodenburgh y después Bouhier, observaron que por este sistema no se fijaban de una manera permanente los derechos del extranjero, puesto que con el solo hecho de viajar por diversas naciones, cambiaban éstos según la legislación de cada una. Se pensó entonces en que por utilidad general y por cortesía, algunas leyes debieran estar exceptuadas del principio, conservando su autoridad más allá de los límites del territorio para el que fueron expedidas, y la norma para resolver los conflictos fué la *comitas gentium*.

Pero la *cortesía*, teniendo por fundamento el arbitrio del gobernante, no ofrecía un criterio seguro, y hubo necesidad de

clasificar las leyes que debieran acompañar á la persona á donde quiera que fuese, y las que sólo debieran tener un valor territorial. He aquí el origen de la teoría de los estatutos, que desde un principio fué aceptada por casi todos los Jurisconsultos. Hercio y Voet, entre otros, definieron el *estatuto real* y el *estatuto personal*, y con estas definiciones se creyó que las contiendas entre las diversas leyes encontrarían fácil resolución; algunas de ellas, en efecto, no presentaban dificultad para clasificarlas; pero bien pronto se conocieron otras que participando de los dos caracteres, suscitaron entre los mismos partidarios del sistema disensiones interminables respecto á cuáles eran los elementos constitutivos de su *realidad* ó *personalidad*, llegando á conclusiones enteramente contradictorias.

Por otra parte, independientemente del Derecho Internacional, los extranjeros estaban sujetos á condiciones onerosísimas, negándoles algunas naciones, aquellas que mantenían vivas las tradiciones feudales, como Inglaterra, por ejemplo, no solamente el derecho de adquirir propiedades en el Reino Unido, sino aun el de arrendarlas en Londres; y no fué sino hasta comienzos del último tercio de este siglo cuando se suprimió el jurado *medietate linguæ* y se derogaron en la *Common law* las prohibiciones que se relacionaban á extranjeros, concediéndoles el derecho de adquirir bienes inmuebles; la ley de Mayo de 70, sin embargo, no extendió este derecho hasta las Colonias, dejando á los poderes de éstas la facultad de legislar lo conveniente. Otros, abjurando del feudalismo, con la adopción de los principios del Derecho Romano, se separaron de la idea de considerar la relación entre el súbdito y el soberano como de carácter territorial, y admitieron que la condición de ciudadano era voluntaria para el que quisiera gozar de los beneficios que dicha condición reportara; pero no desprendiéndose por completo de la máxima antigua de las Doce Tablas *adversus hostem æterna autoritas*, aunque si dulcificándola y modificándola por las necesidades del comercio y por

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la intervención del Cristianismo, que se difundía por todas partes, apenas admitieron á los extranjeros en sus dominios y con restricciones tales, que hacían su condición muy inferior á la de los nacionales, Así, el que no gozaba de la calidad de francés y residía en territorio francés, tenía que pagar impuestos gravosísimos para adquirir el *Droit formariage y el Droit de Chevage*. Los derechos llamados de *aubana ó albinagio*, generalizados en casi todas las naciones, precisan mejor la condición de los extranjeros, que no podían disponer libremente de sus bienes y después de su muerte volvían éstos al fisco, en virtud de que, considerados fuera del derecho común, nadie los podía heredar.

Con estas restricciones, si bien la teoría de los estatutos dió un gran paso en el progreso del Derecho Internacional, no cumplió con el fin que este mismo derecho persigue, puesto que, limitándose á determinar qué leyes se detenían en los límites de un territorio y cuáles los traspasaban, no entró á estudiarlas en su naturaleza para determinar cuáles eran contrarias á los derechos del hombre independiente de su patria, y cuáles eran exclusivas de ésta.

Se imaginó entonces una doctrina que pusiera en lucha las conveniencias y miras particulares de los diversos Estados, de la cual había de resultar el respeto á los derechos naturales del hombre, y por este medio se llegó al sistema de la reciprocidad.

Este nuevo sistema, apartándose de las concepciones especulativas de la ciencia, para no atenderlas sino en cuanto al fin que se propone, fundó sus conclusiones en el estudio histórico de los pueblos, en el concepto de que, ninguna nación civilizada, negaría en principio la igualdad de los hombres, y sin embargo, casi todas ellas, desconociéndole, llegan hasta contrariarlo, al negar en sus preceptos positivos al extranjero, muchos derechos que ya otras les han concedido, lo cual indica que es preciso también atender al orden de cosas deducido del conjunto de hechos que constituyen el individualismo de las

naciones y que son consecuencia de la tradición, de intereses particulares y de tendencias involucradas, para de esta manera llegar al objeto deseado.

Por otra parte, la coexistencia armónica de los Estados, á medida que el comercio se ensancha y aumentan las vías de comunicación, tiende á realizarse por las necesidades mismas de su existencia; la *civitas magna* se bosqueja cada vez más y mejor, á medida que la cultura de los pueblos crece, sin que puedan detenerse en esta marcha de aproximación, porque el progreso tiene su fuerza impulsiva é inevitable.

De estas dos tendencias en continua lucha, y en la cual prepondera la segunda, se aprovecha la teoría de la reciprocidad, para realizar su objeto de igualar la condición del nacional y del extranjero, en todo lo que se refiera á derechos civiles; no legitima, como dice Fiore, "la injusticia y las arbitrariedades que cometen las naciones estableciendo desigualdades inicuas, sustituyendo á la razón del derecho la de la utilidad," no niega la personalidad humana, concediéndole al soberano la facultad de legislar, con tanta amplitud, que pueda, á su capricho, destruir la naturaleza del derecho. No es este el espíritu de la nueva doctrina, cuyo ideal supremo es precisamente el respeto á esa misma personalidad. Tal vez estas objeciones han querido referirse á la reciprocidad concebida en términos generales, por la cual se conceden á los extranjeros sólo aquellos derechos que los nacionales gocen en la patria de los primeros, ó bien á la reciprocidad llamada diplomática y tomada como regla general.

La primera, en efecto, se sale por completo del espíritu del sistema, y es la que ha merecido justificadas censuras por parte de los sabios, y la menos aceptada por las diversas legislaciones. No sólo no se conforma con los principios del derecho internacional admitidos, universalmente, sino que en la práctica de las Naciones es la menos á propósito para resolver las dificultades que se presentan, comienza por negar al extranjero toda personalidad, como si los pueblos viviesen en estado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de hostilidad tal, que fuera necesario proceder con la más absoluta desconfianza, bajo pena de encontrarse amenazados peligrosamente, lo que no es posible suceda en la actualidad, en atención á que, la coexistencia de los Estados está indicada por la necesidad, sin que ninguno de ellos pueda aislarse, porque atentaría contra sus propias conveniencias. Semejante conducta es, pues, injustificable é irracional; además, ¿qué sucedería si dos Estados aceptasen el mismo sistema? El extranjero estaría sujeto á una condición demasiado triste é inhumana. Respectivamente cada soberano, en espera de que el otro le conceda el goce de algunos derechos á sus nacionales, los negaría todos entre tanto no se determinaran, porque como lo ha dicho ya Cockburn, "dos negativas hacen una afirmativa."

La otra, la diplomática, que consiste en conceder á los extranjeros algunos derechos civiles, en el concepto de que esos mismos les serán otorgados á sus nacionales, y que deberán quedar consignados en tratados, parecería arbitraria, si no se tuviesen en cuenta los antecedentes históricos que la motivaron, y si se la quisiera aceptar como única regla para toda clase de relaciones jurídicas. Si se recuerda que la idea primitiva de soberanía era la de considerar á ésta como un derecho absoluto de cada Nación para fijar las relaciones tanto de las personas entre sí, como de las personas á las cosas, sujetando unas y otras á la ley territorial, sin atender en ningún caso al título original de esas mismas relaciones, no será ya motivo de sorpresa ver aparecer la necesidad de convenciones y tratados, para establecer la condición social de los extranjeros; pero desde que modificada esta idea se admitió una comunidad de derecho entre los Estados, y se abandonó la máxima *leges non valent extra territorium*, la reciprocidad diplomática perdió mucha de su fuerza, y se adoptó solamente para aquellos derechos que no pudiesen estar comprendidos en el principio general, que independientemente de los tratados, arreglara la extensión de las concesiones á los extranjeros. En

esta virtud, desempeñando el papel de complementaria, no puede servir de base para fijar las relaciones de derecho entre los Estados, y por consiguiente, no puede servir de norma para resolver toda clase de conflictos que se susciten entre ellos, sino solamente para los especialmente determinados en los tratados.

Tomada en este sentido, nadie negará su justificación ante las necesidades de las naciones, ni tampoco su utilidad, porque es evidente "que no podrá conseguirse ver aceptadas por los Estados reglas uniformes para evitar los conflictos entre las leyes de diversos países, si antes no se han generalizado las convenciones jurídicas acerca de la autoridad extraterritorial de las leyes, y no se ha establecido en este punto la comunidad de ideas y de reglas de derecho." [1]

No así la reciprocidad internacional; ésta toma los hechos tales como existen, acepta las condiciones actuales de su existencia, y en el concepto de que hay intereses, que si no se atendieran de preferencia, amenazarían la ruina de un Estado, obliga á éste á que se mantenga en los justos límites de la acción necesaria para su existencia, no estableciendo más desigualdades que aquellas que son inevitables por la naturaleza misma de su soberanía.

Los súbditos ó ciudadanos tienen en todo tiempo derecho á ser protegidos por su gobierno, ya se encuentren en el territorio de su patria ó ya fuera de él, y si en un país extraño estuviesen sujetos á incapacidades en perjuicio de su persona y de sus intereses, sería en vano acogerse á los principios universales del derecho, si no están éstos sancionados por la ley positiva, porque la ley reguladora del orden social, es la única verdad atendible, y el único medio eficaz de protegerlos sería indudablemente el de suscitar en ese país el mismo interés, sujetando á sus nacionales á las mismas incapacidades que sufrieran los suyos. La movilización constante de población

1 Fiore.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

por todo el mundo, favorece la generalización de este interés, y concurriendo todas las naciones á evitar males idénticos, necesariamente las incapacidades disminuirían á medida que las conveniencias así lo exijan, y el resultado final no puede ser otro que el reconocimiento expreso de la igualdad de derechos individuales independientemente de la nacionalidad.

La reciprocidad internacional es más bien un medio, un procedimiento de que se valen las naciones para que, los principios admitidos por la ciencia respecto á la condición de los extranjeros, puedan ser aplicados eficazmente, y tan esto es cierto, que si las conclusiones á que en esta materia llega el Derecho Internacional, fueran admitidas en un momento dado por todas las legislaciones, la reciprocidad perdería su objeto, porque no habría sobre qué aplicarla. Supone que la negación de derechos proviene de la protección de ciertos intereses que obedecen á miras que no constituyen una necesidad indispensable, y que si desaparecieran no ocasionarían perjuicio alguno; supone, que las naciones están á igual grado de cultura, que su comercio y su industria están bastante desarrollados, y por último, que la densidad de su población es suficiente para no temer una acumulación exagerada del elemento extranjero que se sobreponga.

De otra manera, la concesión de derechos lastimaría la soberanía de los Estados, disminuiría sus facultades de conservación y de defensa, y los más fuertes absorberían á los más débiles.

México, para establecer una regla de derecho internacional, no debe preocuparse mucho con las verdades de la ciencia, ni con las doctrinas que hayan seguido las naciones más adelantadas de la Europa. Colindando con los Estados Unidos, debe deducir sus principios de las condiciones de coexistencia de las dos Naciones, conciliándolos en cuanto sea posible con los adelantos de la época.

El territorio de la República Mexicana es demasiado extenso con relación á la poca población que contiene; la propiedad está poco dividida, sobre todo en la frontera del Norte, en donde la industria apenas comienza á desarrollarse, y la riqueza del suelo está poco cultivada. Por el contrario, los Estados Unidos desbordan su crecidísima población más acá de las márgenes del Bravo, y sus negociaciones se extienden por todas partes, trayéndonos capitales, industria y actividad, atraídos por el ancho campo de especulación á que se presta nuestro país. Estas dos circunstancias favorecen la inmigración que, en la mayor parte de los casos, es benéfica; pero tratándose de extranjeros de una misma patria, que colinda con la nuestra, y en las condiciones en que nos encontramos, es peligrosa, y en consecuencia, es sensato regularizarla prudentemente, porque pudiera suceder que produjera resultados contrarios á los que se desearan.

Si los norteamericanos gozaran en nuestro país de tantos privilegios que los igualaran á los mexicanos; si tuvieran el derecho de adquirir propiedades é implantar establecimientos mercantiles, manufactureros é industriales sin limitación alguna, y su residencia en el país les fuera tan favorable que, á pesar de ser extranjeros, la protección de su gobierno se extendiera más acá de sus dominios, la acumulación sería inevitable, y tanta, que nuestros Estados del Norte sólo tendrían de mexicanos el nombre, no obstante que esas propiedades y esos establecimientos contribuyeran para los gastos públicos de la nación y fueran regidos por leyes mexicanas. El peligro sería entonces inminente y de fatales resultados para el porvenir; y no se diga con Cockburn, que "estas razones son de carácter débil y poco satisfactorias, porque no se puede temer seriamente que sean tantos los extranjeros que adquieran propiedad territorial, que pongan en peligro la seguridad del Estado," los acontecimientos de Texas confirman esos temores, que no son infundados, sino que, muy por el contrario, es muy posible que la acumulación exagerada del elemento norteamericano desnacionalice nuevas porciones de territorio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El primer deber de México es, pues, impedir que esa acumulación tome incremento en nuestras fronteras del Norte, manteniéndola en los límites indicados, por las necesidades de progreso del país, no concediéndole más prerrogativas que aquellas que dejan incólumes los medios de conservación y de defensa.

Aplicando la reciprocidad internacional, no se conseguiría este objeto, porque precisamente tiende á igualar el extranjero al nacional, lo cual para los Estados Unidos es, desde todo punto de vista, ventajoso, pues ellos no temerían, siendo tan poca la población de nuestra frontera del Norte y sus capitales de tan poca importancia, que los mexicanos que cambiaran su residencia á sus dominios y adquirieran propiedades en ellos, fueran en tal número y de tal valor, que peligrara la nacionalidad del territorio en donde se establecieran.

El Sr. Lic. Vallarta observa que ... "si las leyes de las naciones limítrofes prohiben á los mexicanos adquirir propiedades en ellas, y si, lo que es todavía más, la historia registra en sus páginas la cruel lección de Texas, no sólo por el principio de justicia que funda la retorción, sino por el derecho de defensa mismo, México obrará bien manteniendo en este caso la reciprocidad, impidiendo la aglomeración del elemento norteamericano en las fronteras, que cause nuevas desmembraciones de territorio." El argumento descansa en dos bases: la primera, la prohibición á los mexicanos de ser propietarios en territorio de las naciones limítrofes, la cual puede desaparecer fácilmente, en atención á que éstas no correrían ningún peligro si hiciesen desaparecer las desigualdades que existieran; y la segunda, la lección histórica que nos enseña cuáles son las consecuencias inevitables si las mismas circunstancias de entonces se reunen. Ahora bien, desapareciendo la primera, en virtud de la reciprocidad, México se obligaría á quitar las prohibiciones que hubiera impuesto al extranjero, para igualarlo al nacional, y concurrirían las condiciones de la segunda, que realizarían el peligro que se trata de evitar, y en este caso el

derecho de defensa, reclamando su acción, se impondría á la dicha reciprocidad, destruyéndola.

A México le incumbe, pues, dar reglas fijas que determinen la extensión de derechos de los extranjeros, como lo han hecho las leyes de 11 de Marzo de 1842, 1º de Febrero de 1856 y 22 de Julio de 1863, que han establecido prohibiciones á los extranjeros independientemente del tratamiento á que están sujetos los mexicanos en las otras naciones. Es de sentirse que estas leyes no satisfagan todas las necesidades del país, sin duda porque no tiene facultades el Congreso Federal para legislar ampliamente en esta materia, y porque del espíritu de los artículos 1º y 33 constitucionales, y de la interpretación de los que se refieren á las garantías individuales, no sólo resulta condenada la reciprocidad internacional, sino que, "antes que el Código Italiano proclamara resueltamente y sin ambajes el principio de que el extranjero puede disfrutar de todos los derechos atribuidos al ciudanano, ya había declarado la Constitución que los extranjeros tienen derecho á todas las garantías otorgadas á los mexicanos, y garantías que no comprenden sólo los derechos civiles, sino que son mucho más valiosas que ellos, pues versan sobre la libertad de conciencia, de trabajo, de la prensa, la igualdad ante la ley, el fácil acceso á los Tribunales, etc., etc. [1]

El pueblo mexicano, en quien reside la soberanía nacional, no concibe la existencia de una sociedad en la que no se respeten los derechos naturales del hombre, que constituyen no sólo la base, sino también el objeto de las instituciones que la rigen (art. 1º). La misma Constitución se encarga de enumerar cuáles son esos derechos que con el nombre de garantías otorga al individuo, independientemente de su patria y cualquiera que sea su nacionalidad, protegiendo con ellas la libertad, la vida y la propiedad, condiciones *sine quanon* para su desarrollo físico, intelectual y moral, rindiendo con esto homenaje al principio de la solidaridad entre los pueblos, principio

1 Vallarta. Exposición de motivos de la ley de Extranj.

que se va consolidando en el nuevo derecho de gentes, principio conforme á la ley cristiana, que hace hermanos á todos los hombres, que están formados á semejanza de Dios, [1] pero que desgraciadamente no ha pasado de la especulación científica á la aplicación práctica de las naciones, á excepción de la Italia, pues el Código de Portugal, entre los más adelantados, declara que "sólo los ciudadanos portugueses pueden disfrutar plenamente de todos los derechos que la ley civil reconoce y asegura;" y si es motivo de loable admiración para aquel pueblo el haberse desprendido generoso de los hábitos egoistas arraigados al través de su formación, es aventurada semejante conducta, porque si no es imitada por las otras Naciones, habrá de comprender que ha perdido mucho de su poder para proteger á sus súbditos ausentes, y necesariamente tratará de recuperarlo, dejando en la historia el glorioso recuerdo de haber sido la iniciadora de las grandes ideas que se preparan para el porvenir.

Entre la ley italiana y la ley de México, hay, sin embargo, esta diferencia: la primera contiene el principio de la igualdad en el código civil, que regula todas las relaciones jurídicas de los individuos entre sí y la acción del poder público para hacer efectivas esas mismas relaciones; y entre nosotros, ese mismo principio está contenido en la ley fundamental de la República, que sólo puede establecer reglas generales, pero que en la reglamentación de ellas, pueden establecerse algunas diferencias; el derecho de propiedad, por ejemplo, se extiende tanto al nacional como al que no lo sea, y sin contrariar el precepto, una ley secundaria bien podría exigir la residencia en el territorio al extranjero que pretendiera adquirirla, y en cuanto al mexicano, dejarlo en absoluta libertad de domiciliarse en donde á sus intereses conviniera, sin perjudicar su derecho de propiedad. Esto sería ya una distinción que la ley italiana, si es consecuente con sus principios, no podría establecer.

1 Cockburn.

Pero aquellas diferencias que pueden estar contenidas en las leyes secundarias son, ó de un carácter puramente civil, ó bien afectan al orden público; las segundas, no pueden estar sujetas á variación ninguna, porque es un principio admitido que lo que interesa á la existencia de una nación, no puede ser objeto de transacciones; y en cuanto á las primeras, compete á los Estados que forman la República legislar lo conveniente sobre la materia, pues el Congreso de la Unión, procediendo de facultades expresas, no tiene la de expedir leyes civiles, si no es para el Distrito Federal, y lo que no es de su competencia, se entiende serlo de las legislaturas de los Estados; además, la Constitución expresa terminantemente que éstos son libres y soberanos en todo lo concerniente á su régimen interior; solamente está restringida su acción, en aquello que se refiera á la soberanía nacional y no se pueda atender de otra manera que prohibiendo á los Estados darse leyes de esta naturaleza, pues podrían estar en contradicción sus disposiciones, con notorio perjuicio del interés general, y en esta virtud, es el Congreso el único que tiene facultades para expedirlas. Tales son las leyes de corso, de presas de mar y tierra, declaración de guerra y de paz, las arancelarias con relación al comercio extranjero, las de naturalización, ciudadanía y colonización, y algunas otras, entre las cuales no están mencionadas las que se refieren á fijar los derechos civiles de los extranjeros.

El espíritu de la Constitución es el de considerar á la Federación como una forma de gobierno compuesta de Estados libres, cuyas facultades en asuntos que caen bajo su soberanía, no tiene más límites que la acción que es necesario conceder al Gobierno general para que vigile los intereses nacionales. Pos esta razón un Estado no podrá inmiscuirse en asuntos internacionales; pero sí puede fijar los derechos civiles de sus habitantes, ya sean éstos nacionales ó no; y si un conflicto se suscitara, entonces el Estado desaparecería ante las naciones extranjeras y aparecería la República, no representándolo sino

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

como nación indivisible y única competente para dirigir las negociaciones diplomáticas hasta su resolución, con la sola taxativa de respetar en todo caso las leyes emanadas de las facultades del Estado en cuestión. De esa manera no se contradicen las facultades del Congreso de la Unión y las del Ejecutivo con las de los Estados, ni tampoco puede decirse que con este sistema se expone á la República á verse comprometida en contínuas disensiones, puesto que para prevenirlas está encomendado al Poder Ejecutivo, con aprobación del Congreso, la facultad de celebrar tratados con las potencias extranjeras, tratados que formarán parte de nuestras leyes supremas.

La reciprocidad internacional, debiendo mantener á los extranjeros en la condición en que los coloca la Carta Magna, no puede ser aplicada por lo antes dicho, sin contrariar sus preceptos; ellos, en México, tendrán siempre á los Tribunales expeditos para administrarles justicia, y ésta será gratuita; pueden dedicarse á la profesión, industria ó trabajo que les acomode, siendo útil ú honesta, sin que se les pueda impedir, si no es en las mismas condiciones que á los mexicanos; y tienen el derecho de asociarse ó reunirse con cualquier objeto lícito, así como el de entrar y salir de la República, fijar su residencia donde mejor les acomode, y esto cualesquiera que sean las disposiciones de las leyes extranjeras.

Se podría objetar diciendo que se aplicaría sólo en aquellas diferencias que en la reglamentación de los preceptos constitucionales pueden establecerse; pero entonces se desvirtúa el objeto á que se encamina la reciprocidad internacional, cual es la de obligar á los demás Estados á que reconozcan en el extranjero los mismos derechos que en el nacional; además, debiendo tener el carácter de federal, sería aun preciso eliminar todo lo que estuviera en las facultades de los Estados, quedando en este caso el Congreso de la Unión reducido á una esfera de acción tan limitada, que la haría por completo ilusoria.

Por lo expuesto se comprende que las leyes mexicanas no

pueden juzgar á los extranjeros, sujetándolos á las mismas incapacidades que puedan sufrir nuestros nacionales en la patria de aquellos, porque si dichas incapacidades son de tal naturaleza que nieguen los derechos reconocidos por la Constitución al hombre, sin atender á su nacionalidad, las leyes que así lo hicieran no tendrían fuerza ni autoridad.

LIC. A. RODRÍGUEZ FLORES.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

IMPORTANCIA DE LA CUENTA CORRIENTE.

1. Importancia de la cuenta corriente.—2. Su clasificación.—3. Naturaleza y efectos jurídicos.—5. Qué clase de contrato es?—6. Condiciones para que exista.—4. El interés en las cuentas corrientes y su legitimidad.

1. Importancia de la cuenta corriente.

Las cuentas corrientes que facilitan toda clase de operaciones mercantiles, que evitan el transporte de valores y ahorran gastos, han sido una de tantas consecuencias del desarrollo rápido del comercio, que en la actualidad liga á los hombres y á las naciones todas, cualquiera que sea la distancia que medie, ó los obstáculos que se interpongan. El resultado del incremento en las relaciones mercantiles, ha sido que la amplitud de las operaciones y su multiplicidad, cada vez sea más sensible. Hoy día las transacciones son de tal manera complicadas, que para poderlas verificar, para poder obtener la completa movilización de las riquezas, para lograr que todos los valores del comercio y de la industria formen parte del gran movimiento mercantil, y entren en circulación, se exige, no sólo el conocimiento perfecto del mecanismo de la moneda, de las letras de cambio, etc., sino además, vastos conocimientos del cálculo. La tendencia del comercio en su anhelo de multiplicar sus operaciones, ha dado origen á las cuentas corrientes, pues que borrando ó haciendo desaparecer los inconvenientes y las dificultades antes apuntadas, se ha logrado por su empleo el que las relaciones puedan ser más frecuentes y expeditas. El medio para obtener este resultado, consiste en que los comerciantes acuerden llevar á una cuenta que comprende los créditos de cada uno de sus corresponsales, ó de aquellos con quienes mantienen relaciones, todos los créditos, fijando por medio del balance hecho en una época convenida, el saldo deudor que viene á constituir el único crédito exigible, pues todo lo demás ha desaparecido por ministerio de la ley, por efecto de la compensación, representando en consecuencia ese saldo, el único crédito exigible ante el cual ha desaparecido la individualidad de todos los demás créditos. La importancia de la cuenta corriente es inmensa, si se observa que los valores que en ella pueden entrar son infinitos, como lo son también las operaciones que en el orden civil ó comercial se pueden practicar. Los valores que dan nacimiento á esas cuentas y que en la contabilidad se representan por guarismos, son de naturaleza distinta, unas representan derechos y otras obligaciones.

En ausencia de textos positivos que ilustren materia tan importante, hay que fundarse en los principios generales de derecho, así como en los usos y costumbres. Nuestro Código de Comercio sólo trata la cuestión de una manera incidental y únicamente desde el punto de vista meramente preceptivo. En su artículo 33, refiriéndose á los libros que deben llevar los comerciantes, habla del mayor ó de *cuentas corrientes;* en el 40, establece la manera de llevar la contabilidad de las referidas cuentas; más adelante, en su artículo 555, ordena que los cheques se separen de los libros talonarios, que los comerciantes, sociedades, bancos, etc., entreguen á sus acreedores en cuenta corriente; y por último, tratando de quiebras, dice el artículo 976: "La declaración de quiebra suspende el curso de las cuentas corrientes, etc.," de manera que en ninguno de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sus preceptos deja siquiera sospechar lo que por cuenta corriente deba entenderse.

2. Clasificación de las cuentas corrientes.

Varias son las acepciones que tiene la palabra *cuenta*, y una de ellas corresponde al tecnicismo mercantil.

Conforme á esa acepción, se la define diciendo que es "El conjunto de inscripciones que se hacen para consignar y comprobar metódica y cronológicamente, todos los valores que constituyen el movimiento de las operaciones civiles ó comerciales celebradas entre dos personas." (Barroso. Tratado de las cuentas corrientes á interés).

De acuerdo con la anterior definición, se puede hacer una clasificación distinta de esas cuentas, considerando las operaciones que se practiquen ó los contratos que se celebren entre las partes, pues mientras unas veces se trata de una operación aislada, otras se encuentra toda una serie y que pueden prolongarse durante un tiempo más ó menos largo. De allí la principal división en cuentas *comunes* y *corrientes*.

Debe distinguirse también la cuenta corriente *simple* de la *recíproca*, pues en la primera, una de las partes se encuentra siempre en anticipio respecto de la otra, y en la recíproca, las dos contratantes verifican operaciones de pago y cobro, encontrándose unas veces acreedores y otras deudores; y para subsanar la pérdida de tiempo transcurrido entre el envío de unos valores y el recibo de su equivalente, se estipula siempre que dichos valores produzcan interés. Como se verá más adelante, lo que principalmente caracteriza á la cuenta corriente, es el hecho de poderse disponer libremente de los valores ó efectos recibidos.

3. Naturaleza y efectos jurídicos de la cuenta corriente.

Dije antes que para determinar los elementos constitutivos de la cuenta corriente, hay que referirse abuso y á las prácti-

cas comerciales, porque no encontrándose en las legislaciones textos expresos, quizá á consecuencia de que se le ha querido considerar no como un contrato simple, sino como cree Dalloz, (Compte courant, §1, pág. 573), una situación complexa que puede derivarse de muchos contratos; no era posible que la ley (como él mismo indica), pudiera calificar semejante obligación, y debiese arreglar la posición respectiva de aquellos que practican operaciones de esa naturaleza.

Recurriendo, pues, al uno, encontramos que el comercio verifica sus operaciones de tres modos diversos:

1º Al contado, cuando el comprador pague inmediatamente lo que recibe.

2º Cambio, cuando en pago de los efectos recibidos, se entregan otros equivalentes en precio, quedando entonces ultimada la operación por la compensación.

3º A crédito, cuando se dé un plazo para el pago.

En este último caso, el comerciante, en sus libros, lleva su crédito al debe de la cuenta del comprador.

Este modo de efectuar las ventas es el que más debe llamar la atención, porque generalmente es el que da nacimiento á las cuentas corrientes, y allí se pueden encontrar los primeros elementos de ésta, si por parte de los contratantes hay voluntad de establecer entre ellos relaciones que los hagan aparecer sucesivamente acreedores y deudores; pues aceptando con Dalloz que la apertura de la cuenta corriente reconoce como origen el contrato de mandato recíproco, es lógico que si puede ser objeto de dicho mandato toda suma ó valor numérico que sea susceptible de contabilidad y que provenga ya de una operación civil ya de una comercial, también podrán ser objetos de las cuentas corrientes, todas esas mismas operaciones comerciales ó civiles.

Como uno de los elementos más esenciales de la cuenta corriente, se debe señalar el hecho de que las partes tengan la intención marcada ó la perfecta voluntad de transmitirse respectivamente la propiedad de los valores ó efectos, pues

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de no ser así, efectuarían otro contrato cualquiera, pero distinto de la cuenta corriente.

Lyon Cren reduce á cuatro los efectos jurídicos de las cuentas corrientes. El primero, que ya antes mencioné, consiste en la transmisión de la propiedad, pues juntamente con Dälloz cree que donde no existe el derecho de disponer, no hay cuenta corriente. 2º Los intereses devengados por parte del que transmite. Aun cuando no se puede decir que los intereses formen un elemento enteramente esencial ni que sean un efecto necesario de la cuenta, cuando no haya estipulación en contrario, se tendrá el interés corriendo siempre de pleno derecho. La legitimidad de éste, filosófica y económicamente tiene que ser aceptada. En efecto, ese interés representa no sólo la renta de que carece el acreedor, sino también la compensación del deudor por el goce que se le concede de las sumas ó efectos que se le facilitan. Se gradúa según es la importancia de la operación, y puesto que seguramente aquel que detiene cantidades ó fondos no los conserva improductivos, sino que tiene libertad para emplearlos por cuenta propia, ó para consagrarlos á empresas quizá más lucrativas, tiene el deber de compensar de algún modo la franquicia que se le concede. Por eso es que en la cuenta corriente, más que en ningún otro contrato, se encuentra justificada la estipulación de un interés, puesto que, en la mayor parte de los casos, las operaciones de esa naturaleza que se practican, sólo tienen por garantía la buena fe de los que estipulan, no se asegura la devolución de la suma que en efectos ó de otra manera es entregada, sino con sólo el crédito personal; y si el interés es definido como el producto del capital, claro es que en las cuentas corrientes donde se entregan efectos, valores ú otra clase de objetos, que constituyen ese capital, debe admitirse y sancionarse dicho interés. El comercio estipula para estas operaciones el uno por ciento, y dado el tiempo de que gozan los deudores para poder pagar y las pérdidas que los comerciantes sufren por el retardo, es justo y equitativo dicho tipo que

excede al legal. Por otra parte, todos los contratos reconocen como base un capital real ó virtual y sobre el cual se aplica un interés; para ser consecuentes tendremos que admitirlo en la cuenta corriente.

En efecto: el préstamo, bajo cualquiera forma que revista, siempre representa un capital puesto por X á disposición de Z, por cierto tiempo y á un tanto por ciento.

Las cuentas en participación, tan generalizadas entre comerciantes, tienen también como base la estipulación del tanto por ciento, que debe corresponder á cada uno de los asociados. El valor de la propiedad ha quedado bajo el dominio del interés proporcional. Toda clase de seguros son gravados con un interés fijado por las respectivas tarifas, tomando siempre como base el capital asegurado. Los honorarios del abogado, el juicio pericial, etc., etc., se estipulan siempre por un tanto por ciento, sacado del valor que representa el juicio de que se trata, etc.

Si he insistido en este punto ha sido porque en la poca práctica que tengo, he podido observar que en las contiendas que se suscitan éstos, sobre el particular, una vez llevadas á los tribunales, en ausencia de estipulación precisa, no han admitido el interés que el uso y la práctica comercial han fijado para el contrato de que me ocupo, por más que nuestra legislación, sumamente liberal en la materia, no haya puesto trabas ni restricciones de ningún género, pues por lo contrario, desde el año de 1861 se expidió la ley que derogó todas las prohibitivas del mutuo usurario, y tanto nuestro Código Civil como el de Comercio, dejan entera libertad y sólo cuando nada se ha estipulado, ó cuando por sentencia deba pagarse algún rédito, fijan el seis por ciento (Cód. Civ., art. 1,482, Cód. de Comercio, arts. 362 préstamo, 974 y 976 quiebras, 380 compra-venta).

Otro de los efectos de la cuenta corriente, y tal vez uno de los más importantes, consiste en la novación de los créditos, por cuya novación una nueva deuda sustituye á la primitiva.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

En efecto, si dos comerciantes establecen entre sí una serie de operaciones, pero aisladas unas de otras, cada uno de ellos tendrá, respecto del otro, tantas acciones como diversos sean los contratos celebrados. Mas desde el instante en que habiendo capacidad en las partes y voluntad expresa en las mismas, lleven á una cuenta corriente todos sus créditos, por ese sólo hecho efectúan una novación, á consecuencia de la cual, extinguiéndose una serie de obligaciones, son sustituidas todas por una nueva y única, para la que ya no queda sino una acción que poder deducir.—Por último, si atendemos á la autorizada opinión de Boistel, encontraremos que las cuentas corrientes se caracterizan muy especialmente por la indivisibilidad de los créditos que las constituyen. Puede decirse que es el efecto que encierra á los demás, el que hace que los créditos pierdan su existencia, su individualidad, para formar parte de un todo indivisible y poderse contar únicamente como elementos del saldo final, que es el único crédito exigible.

5. ¿Qué clase de contrato es? Condiciones para que exista.

De una manera enteramente suscinta entraré á estudiar qué clase de contrato encierra la cuenta corriente. Paul Clenaut, en su obra "Etude sur le comte courant," comentando las definiciones dadas por Merlin, Pardesus (Cursos de derecho comercial), Delamarre y Lepoitevin (Tratado del contrato de comercio) é inspirándose sobre todo en la dada por Lyon Cren y Renault, dice que es un contrato por el que dos personas, con objeto de hacerse recíprocamente remesas de valores, se obligan previamente á *transferirse la propiedad* de esas remesas y á transformarlas en artículos de débito y crédito, de manera que el saldo que resulte de la balanza de esos artículos sea lo único exigible. Analizando la anterior definición, que está de acuerdo con la naturaleza de la cuenta corriente, se ve que ésta por sí sola constituye un contrato especial *sui generis*, distinto de todos los demás, y así lo sostienen Lyon Cren y Renault en su "Derecho comercial."

Si es cierto, como algunos autores han sostenido, que los contratos de préstamo, comisión, depósito, etc., se encuentran á veces como elementos constitutivos de las cuentas corrientes, hasta el grado que los han querido considerar como esenciales y sin los cuales no podrían existir, un examen atento demuestra que sólo los saldos de los mencionados contratos entran como elementos para la formación del nuevo, produciendo una novación de la obligación primitiva. Así es que puede decirse que es un contrato bilateral, conmutativo, no solemne. Requiere para su validez todos los requisitos que la ley exige para los demás. (Cód. Civ., art. 1,279).

Comienza á surtir sus efectos desde el momento de la apertura del crédito, y termina en la fecha fijada para la liquidación. Exceptuando el caso de quiebra en que con arreglo al artículo 976 del Código de Comercio deben ponerse en liquidación las cuentas corrientes, para exigir ó cubrir su saldo en la manera y forma que corresponda. No puede tener lugar sino entre personas capaces de obligarse. El consentimiento puede ser expreso ó tácito. En el primer caso la obligación se regirá por la estipulación; en el segundo, por el uso y prácticas comerciales. Sin embargo, dicen los autores del Diccionario de comercio "es mejor que las condiciones hayan sido formuladas previamente para que cada uno de los contratantes tenga una posición precisa y conozca la extensión y duración de su compromiso." Cuando el consentimiento no sea expreso, los Tribunales en cada caso tendrán que buscar la prueba que demuestre la intención de las partes, pues es indudable que, relaciones prolongadas durante un tiempo más ó menos grande, deben haber estado basadas en el consentimiento, consentimiento que entre comerciantes no consta siempre de una manera expresa.

Los intereses comerciales se encuentran de tal manera vin-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

culados por este contrato, es tan benéfico su empleo y tanta su aceptación, que sería de desearse encontrar en la ley mayores ventajas para hacer cumplir sus estipulaciones, y un procedimiento más sumario en la tramitación de esta clase de contiendas.

M. Castelló F.

DICTAMEN DE LA SECCION 2ª DEL GRAN JURADO NACIONAL.

Señores Jurados:

A consecuencia de la muerte del Sr. D. José C. Verástegui, y en virtud de los rumores que aseguraban que esa lamentable desgracia había acaecido en un duelo, la justicia penal procedió á la averiguación de ese hecho, formando una verdadera instrucción.

Por los datos hábilmente recogidos por el señor Juez 2º de lo Criminal, aparecía que efectivamente había acontecido un duelo, en el cual sucumbió el Sr. Verástegui, y en cuyo suceso habían figurado como autores el occiso y el señor diputado D. Francisco Romero; como testigos del Sr. Verástegui, los señores, Senador D. Apolinar Castillo y Diputado D. Ramón Prida; como testigos del Sr. Romero, el señor Senador Coronel D. Lauro Carrillo y el Sr. D. Manuel Barreto; como Juez de campo el Sr. General D. Sóstenes Rocha, y el Sr. Dr. D. Casimiro Preciado como médico, que debía llenar las funciones designadas en lo que se llama el Código del Honor.

Como algunas de las personas que figuraban de una manera prominente en ese episodio disfrutaban fuero constitucional, la justicia ordinaria remitió á esta H. Cámara copia certificada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

culados por este contrato, es tan benéfico su empleo y tanta su aceptación, que sería de desearse encontrar en la ley mayores ventajas para hacer cumplir sus estipulaciones, y un procedimiento más sumario en la tramitación de esta clase de contiendas.

M. Castelló F.

DICTAMEN DE LA SECCION 2ª DEL GRAN JURADO NACIONAL.

Señores Jurados:

A consecuencia de la muerte del Sr. D. José C. Verástegui, y en virtud de los rumores que aseguraban que esa lamentable desgracia había acaecido en un duelo, la justicia penal procedió á la averiguación de ese hecho, formando una verdadera instrucción.

Por los datos hábilmente recogidos por el señor Juez 2º de lo Criminal, aparecía que efectivamente había acontecido un duelo, en el cual sucumbió el Sr. Verástegui, y en cuyo suceso habían figurado como autores el occiso y el señor diputado D. Francisco Romero; como testigos del Sr. Verástegui, los señores, Senador D. Apolinar Castillo y Diputado D. Ramón Prida; como testigos del Sr. Romero, el señor Senador Coronel D. Lauro Carrillo y el Sr. D. Manuel Barreto; como Juez de campo el Sr. General D. Sóstenes Rocha, y el Sr. Dr. D. Casimiro Preciado como médico, que debía llenar las funciones designadas en lo que se llama el Código del Honor.

Como algunas de las personas que figuraban de una manera prominente en ese episodio disfrutaban fuero constitucional, la justicia ordinaria remitió á esta H. Cámara copia certificada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de la averiguación, con el objeto de que el Gran Jurado Nacional resolviese de conformidad con lo dispuesto en la Ley Suprema, lo que juzgase conducente respecto del fuero é inmunidad de los funcionarios referidos.

Recibidos esos antecedentes, se consignaron á la segunda sección del Gran Jurado con el fin de que procediese al ejercicio de las funciones que la Constitución y el Reglamento de la Cámara le designan, y con la celeridad que se le recomendaba en el acuerdo respectivo, ha procedido á formar una breve, pero concluyente instrucción, que presenta con toda claridad *el hecho* que ha engendrado estos procedimientos y la participación que en él tomaron los funcionarios á quienes va á referirse en el curso de este dictamen.

No presentará la sección un verdadero proceso en contra de los funcionarios respectivos, al menos en el sentido absoluto de esa denominación jurídica; tampoco una instrucción acabada y minuciosa que, depurando todos los detalles, aun los más recónditos del hecho que se presenta como delictuoso, descubriese todos sus pormenores y todo ese conjunto de circunstancias que rodean comunmente la generación de un delito. Lo que la Sección presenta á la H. Cámara, es lo que únicamente debe someter en este momento á su deliberación, un conjunto de datos y de pruebas del orden jurídico, que ponen de manifiesto la existencia de un hecho infractor de leyes penales y una responsabilidad presunta en los funcionarios públicos que concurrieron á él desempeñando el papel que cada uno había aceptado.

Al conducirse la Sección de este modo, se inspira en el carácter jurídico de las funciones judiciales que le confiere la Ley Suprema y la ley vigente que reglamenta los artículos 104 y 105 de ese pacto federativo.

La instrucción criminal que detallan los artículos 140 y siguientes del Reglamento interior de la Cámara, no dan el tipo de una instrucción en toda forma, ni el de un juicio criminal perfecto con sus atributos característicos, *sumario y plenario.*

En el fondo, significa una investigación sumaria que, sin prejuzgar cuestiones de imputabilidad que no son de su incumbencia, precise y revele la existencia de una violación de leyes penales y la presunción de que un funcionario público es el autor de ella, ó en otros términos, una investigación sumaria que satisfaga solamente el ejercicio de las garantías individuales del funcionario infractor, la comprobación del cuerpo del delito y las pruebas de su material comisión. Llevar la instrucción más allá de esos límites y muy particularmente en el caso de que la inocencia ó la irresponsabilidad no deban surgir de ella, traería consigo el peligro de invadir sin motivo las funciones de la justicia ordinaria y de invadirla sin objeto, consignándose circunstancias probatorias que no tendrían el carácter de pruebas inalterables desde el instante en que un juez de lo Criminal se avocase el proceso en uso de su jurisdicción exclusiva.

El nuevo proyecto de ley reglamentaria, traza á la perfección esos principios; pero al perfeccionarlos, no propone precisamente una novedad en sus reformas, sino elevar al rango de *preceptos*, consideraciones que están por ahora latentes en el fondo de las prescripciones que rigen actualmente esta instrucción y que están, sobre todo, en la conciencia pública.

Hecha esa breve exposición, pasamos ya, sin más demora, al examen del caso, tomando como punto de partida las declaraciones que los inculpados han rendido ante la Sección del Gran Jurado, y que, según las aserciones que aparecen en la causa, no habían rendido algunos de ellos ante la justicia común por vedarlo el elevado fuero que disfrutan.

La tarde del 9 de Agosto del presente año, en las cercanías del Panteón Español, verificóse un duelo entre los Sres. D. José C. Verástegui y D. Francisco Romero, figurando como testigos del primero los señores Senador Don Apolinar Castillo y Diputado D. Ramón Prida, y como testigos del segundo el señor Senador D. Lauro Carrillo y D. Manuel Barreto. De acuerdo con las prácticas establecidas en casos semejantes, figu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

raron como Juez de Campo el señor Gral. D. Sóstenes Rocha, y el señor Dr. Casimiro Preciado, como médico.

Medida la distancia, concertada y sorteadas las armas y el lugar que debían ocupar las personas que iban á batirse, situadas cada una de éstas en su respectivo puesto, y dadas por el Juez de Campo las voces de mando, escucháronse á la tercera dos detonaciones casi simultáneas, según unos, simultáneas, según otros, quedando el Sr. Verástegui muerto en el campo instantáneamente. Los Sres. Prida y Barreto, y dos personas que casualmente transitaban, cargaron el cadáver, colocándolo en el coche que el Sr. Castillo había llevado; éste y los Sres. Prida y Carrillo condujeron en seguida aquel cadáver á la Inspección de Policía de la 6ª Demarcación. Al mismo tiempo regresaban á la ciudad los demás testigos de ese acontecimiento doloroso.

Sus causas generadoras se descubren al examinar con atención las constancias consignadas en estas diligencias inquisitivas.

El Sr. Romero visitaba cuotidianamente la casa del Sr. D. Juan Barajas, á la sazón que una vez le fué allí presentado el Sr. Verástegui. Según declara el Sr. Romero, al llegar una noche á esa casa, percibió, al acercarse á una de las ventanas, que alguien decía estas palabras: "me parece que le molesta "á usted que hable yo del Sr. Romero; pero me parece tan "pequeño, que no volveré á ocuparme de él."

El Sr. Romero se propuso inquirir cuáles habían sido todos los conceptos proferidos por el Sr. Verástegui, cuya voz había reconocido, hasta lograr al fin que el mismo Sr. Barajas le impusiera de ellos, revelándole, como lo hizo, todas las palabras que el Sr. Verástegui había vertido, las que el Sr. Romero había escuchado, y otras más que, á su juicio, contenían ofensas muy graves para él y para otras personas, cuyos nombres no ha querido descubrir.

Autorizado, al parecer, el Sr. Romero por el autor de aquella revelación tan grave, se propuso pedir sobre la marcha una

explicación al Sr. Verástegui, redactando una carta en que le exigía, ó la rectificación de sus frases, ó la designación de sus testigos, haciéndole advertir que el nombramiento de ellos lo estimaría como una sanción de los conceptos que le habían sido descubiertos.

La gravedad de las palabras que esa carta debió contener, estrecharon al Sr. Verástegui á romperla, según afirma un testigo; y á juzgar por los datos recogidos, no ha sido dado reconstruirla por completo, con excepción de unos fragmentos que el Sr. Carrillo presentó copiados en la diligencia de confesión.

El Sr. Verástegui no contestó esa carta, sino que, apresurándose á nombrar desde luego á los Sres. Senador Arguinzonis y Grande Ampudia, en calidad de representantes, aceptó, de hecho, el terreno trazado por su adversario.

El Sr. Romero designó á su vez á los Sres. D. Lauro Carrillo y D. Manuel Barreto, y las conferencias comenzaron á efectuarse.

Desde la primera conferencia celebrada entre los representantes de las partes, los testigos del Sr. Verástegui exigieron que se precisasen las causas que motivaban el desafío provocado por el Sr. Romero; pero circunscribiéndose los representantes de este señor á manifestar que eran reservadas y tenían prohibición de revelarlas, las mantuvieron en secreto.

Habiendo renunciado los Sres. Arguinzonis y Grande Ampudia el cargo que habían comenzado á desempeñar, fueron sustituidos por el Sr. Senador D. Apolinar Castillo y el Diputado Sr. D. Ramón Prida.

Las entrevistas continuaron, sin que los nuevos representantes del Sr. Verástegui lograran saber las causas que engendraron el disgusto habido entre sus ahijados respectivos. Los Sres. Castillo y Prida llegaron hasta la exaltación, según afirman, sosteniendo que sentían sublevarse su conciencia de hombres y de caballeros al abordar un reto cuyas causas se cubrían

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

con un velo impenetrable y misterioso que impedía mirar en dónde y de parte de quién estaba la justicia.

Los representantes del Sr. Romero no cambiaron su actitud un solo instante. Sostenían que era factible un duelo por causas reservadas y, plegándose á sus instrucciones particulares, demandaban, ó la contestación de la carta ó un hecho de armas; más aún: ó el combate ó la publicación de la carta cuya copia conservaba el Sr. Romero.

En esas circunstancias convinieron los Sres. Castillo y Prida en contrademandar al Sr. Romero, por instrucción expresa de su cliente, por los conceptos injuriosos en que se había redactado la carta que desempeña tan interesante papel en estos sucesos, exigiendo, ó una satisfacción ó un encuentro en armas, tanto por aclarar una situación que se cubría con densas nieblas, como por obtener en favor del Sr. Verástegui las ventajas que se otorgan á la persona ofendida.

Los representantes del Sr. Romero rehusaron, en su nombre, hacer explicaciones, y á partir desde este instante, solamente se pensó en concertar el duelo, el cual se estipuló que sería á pistola, por especial recomendación que había hecho el Sr. Verástegui para el caso de la elección de armas; á treinta pasos avanzando, conviniéndose en que el lance terminase hasta que hubiese resultado; quedando, empero, reservado á la voluntad del Ciudadano Juez de campo, dar por terminado el lance al primero ó segundo tiro.

Concertadas las bases antedichas, se designó el día 9 de Agosto para la celebración del duelo. Lo demás lo han oído ya los Señores Diputados de esta honorable Cámara. Constituidos en el lugar señalado de antemano las partes principales, los testigos, el juez y el médico, procedióse á la ejecución del duelo, en los términos y con los detalles que se narran en el acta cuya copia se agregó á estas actuaciones.

Tales son los hechos fielmente extractados de la voluminosa instrucción que ha llegado á formarse, sin alterar los sucesos en lo más mínimo y sin desfigurar los detalles que rodean el

acontecimiento deplorable que ha puesto en movimiento la acción de la autoridad pública.

Al posesionarse la Sección del Gran Jutado de todos los pormenores de los hechos referidos, su primera interrogación ha sido esta: ¿El duelo es un delito previsto y castigado en el Código Penal?

El cap. XI, lib. III, tít. II de ese cuerpo de leyes, responde á esa interrogación. Esos preceptos de la ley penal, castigan el duelo como un hecho delictuoso, desarrollando un sistema de penalidad, adecuado á las circunstancias con que puede efectuarse, y que llega á la agravación cuando el desafiador mata al desafiado.

A la Sección del Gran Jurado no le es permitido discutir esos preceptos bajo su aspecto netamente filosófico, en su calidad de Juez Instructor. La máxima "Judes non de legibus, sed secundum legibus judicæ debet," tiene que servirle de excusa para no discutir en estos momentos, si el duelo es una necesidad social, ó si no existe el derecho de vengar las injurias con usurpación del poder público. La ley penal está escrita. "Dura lex, sed lex. Lex, quanvis dura, SERVANDA."

Un interés social podrá demandar reformas, pero no es esta la oportunidad de mutilar la ley, sino de observarla.

Mejor que discutir esa cuestión, la Sección del Gran Jurado enuncia otra que es más oportuna: ¿Está comprobada la existencia del homicidio en duelo de la persona del Sr. Verástegui?

Esta es la cuestión fundamental en estos momentos, porque, tratándose de la formación de un proceso contra los funcionarios inculpados, no podría consentirse su prosecución, si no estuviese comprobado plenamente el cuerpo del delito.

Sobre este punto la instrucción arroja una luz vívida. Se encuentra primero la fe de *cuerpo muerto* que acredita que el Sr. D. José Verástegui ha dejado de existir. En segundo término se encuentran las declaraciones de todos los testigos presenciales que afirman que murió en el lance, y por último,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el certificado de autopsía, que, fundado en las consideraciones más persuasivas y luminosas, formula las siguientes conclusiones: "1ª El que fué José Verástegui, falleció por la herida de arma de fuego descrita, lesión que es mortal y que por sí sola y directamente produjo la muerte. 2ª Lo probable es que al recibir el Sr. Verástegui el proyectil que le ocasionó la muerte, haya estado en pie presentando el costado derecho ligeramente escorzado con el brazo levantado para descubrir el sitio en que penetró el proyectil, y quedando la boca del cañón de la pistola á una distancia mayor de un metro del sitio de la abertura de entrada del proyectil."

Como verá esta H. Cámara, el cuerpo del delito está comprobado con la confesión del autor principal del duelo, y con las declaraciones uniformes de los testigos que asistieron á él, armonizando con pruebas del orden jurídico que independientemente de ellas revelan con toda perfección su existencia física. En otros términos: está comprobado por medio de la *confesión de parte*, adminiculada con todos los elementos de convicción, que los criminalistas más autorizados exigen, para conferirla un valor legal y perfecto.

Resta tan sólo bosquejar otra cuestión decisiva en estas diligencias: ¿Hay motivos para creer que es autor del homicidio el Sr. D. Francisco Romero, y que fueron de él testigos los Sres. D. Apolinar Castillo, D. Lauro Carrillo y D. Ramón Prida?

La Sección afirma desde luego que existen esos motivos probatorios en cantidad bastante para producir una convicción completa. La confesión de todos los inculpados constituye una prueba incontestable sobre el hecho que han revelado al Gran Jurado Nacional. Cada uno de ellos asume su responsabilidad respectiva, y todos están acordes sobre el papel que desempeñaron en este acontecimiento.

Que el duelo se haya verificado ó no con sujeción á las reglas adoptadas, es una cuestión que envuelve detalles que influirían sobre la flexibilidad de la pena, pero que de ningún modo afectan al hecho fundamental, es decir, al duelo mismo, como acto delictuoso.

Hay, pues, datos bastantes para suponer que los funcionarios de quienes se ocupa este dictamen, son autores del hecho que se averigua, y que intervinieron en su verificación, desempeñando el cargo que cada uno de ellos había aceptado.

La Sección del Gran Jurado Nacional se encuentra, pues, en la penosa necesidad de reconocer que la instrucción ofrece datos suficientes para proceder en el orden penal contra los funcionarios referidos, sin que esta declaración prejuzgue en lo más mínimo las cuestiones referentes á la atenuación ó agravación de las penas, ni aun á la misma exculpación de los autores de este hecho, que están reservadas por la ley á la justicia ordinaria á quien corresponda juzgarlos.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, la 2ª Sección del Gran Jurado Nacional, tiene el penoso pero imprescindible deber de consultar al Gran Jurado Nacional la aprobación de la proposición siguiente:

"Há lugar á proceder contra los Sres. senadores D. Apolinar Castillo y coronel D. Lauro Carrillo, así como también contra los Sres. diputados D. Ramón Prida y D. Francisco Romero."

Económica.—Remítanse al C. Juez 2º de lo criminal la copia certificada que acompañó en su oficio de 15 de Septiembre próximo pasado, y las diligencias originales instruidas por los miembros de la Sección á quienes tocó conocer de ellas.

Sala de Comisiones. México, Octubre 5 de 1894.—*Rafael de Zayas Enríquez.—Ignacio García Heras.—Rafael Herrera.—Fernando Vega*, Secretario.

Discurso pronunciado por el Sr. Lic. Manuel Lombardo, ante el Gran Jurado Nacional.

SEÑORES DIPUTADOS:

La sensible muerte del Sr. D. José Verástegui trae á la barra al Sr. Coronel D. Francisco Romero, á efecto de contes-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tar ante sus pares las responsabilidades que por aquel acontecimiento le puedan sobrevenir.

No teme, Señores Diputados, el que la ley se le aplique, porque hijo del pueblo y custodio de las libertades públicas en su condición de soldado, sabe, Señores, que el primer deber del ciudadano es someterse voluntariamente á las leyes y á sus jueces, y el Sr. Coronel Romero, al atravesar la situación que atraviesa en estos momentos, se satisface en cumplir aquel deber que le impone su conciencia en su doble carácter de soldado y de representante del pueblo.

Pero lo que sí teme el Sr. Romero es que la fascinación, las pasiones ó cualesquiera otro prejuicio que puedan sobrevenir, sea la base de una resolución que le sea perjudicial, porque faltando la imparcialidad para juzgarlo, falta, Señores, la majestad de la ley, y con elementos tan pobres, cualesquiera causa puede zozobrar.

Esperando, pues, la defensa, Señores, que la Cámara, como lo ha hecho infinitas veces, se reconcentre en su conciencia de Juez y resuelva la cuestión, que es materia de esta sesión, con entera imparcialidad, la defensa del Sr. Romero entra en materia protestando á la Cámara ser parca en sus súplicas y ser del todo respetuosa en la seria misión que tiene el honor de desempeñar.

I

No toca la defensa del Sr. Romero la seria cuestión que está ya definida en el proceso, consistente en sostener si el desafuero da lugar á inquirir si hay algún delito comprobado, y si alguno de los miembros del Parlamento es culpable de aquel mal.

Esta cuestión, Señores, imbíbitamente está resuelta de antemano con la serie de pruebas que se han recibido en la instrucción formada por la 2ª Sección del Gran Jurado, y esta práctica, Señores, es, en mi sentir, acorde con la ley, y ello

nos evita á los defensores del Sr. Romero entrar en explicaciones sobre un punto que creo resuelto y que carece por hoy de toda dificultad.

Establecida esta premisa, podemos tocar desde luego la cuestión principal y juzgar si en el presente caso hay un delito que perseguir, y aunque en el dictamen se nos dice que se trata de un hombre muerto en duelo y de que el Sr. Coronel Romero es el autor de aquel suceso, de aquí no podemos deducir que haya un delito, porque aunque nuestras leyes positivas condenan y castigan el duelo, hay sin embargo un caso de excepción y en él se encuentra vinculado el Sr. Coronel Romero.

Me refiero, Señores Diputados, á los preceptos del art. 183 del Código Penal que declara abrogada una ley que deja de practicarse en el período de diez años y en cinco casos que hayan ocurrido desde el momento de su promulgación, y como esto tiene lugar en la actual cuestión, yo creo que el desafuero del Sr. Romero no debe prosperar si, como me lo prometo, llego á determinar que existen los cinco casos en los que haya habido hombres heridos y muertos como consecuencia inmediata de un duelo, sin que la autoridad pública haya perseguido á sus autores.

He aquí el texto:

"Art. 183. No se estimará vigente ninguna ley penal que no se haya aplicado en los diez años últimos, si durante ellos hubieren ocurrido más de cinco casos y en ninguno de ellos se hubiere impuesto la pena señalada en dicha ley sino otra diversa."

Fácil me sería, Señores, justificar mis propósitos con sólo traer á la vista de la Cámara la noticia que há pocos días publicó un periódico con relación á los duelos solemnes verificados desde la promulgación del Código entre nosotros, y sin temor de equivocarme podré señalar la cifra de 43 duelos que relata aquel periódico como combates en los que ha habido efusión de sangre.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Pero no queriendo traer al proceso otros datos que los que nazcan de vuestra conciencia, voy á citar, entre otros, seis duelos en los que no ha habido persecución alguna del orden penal.

El Sr. Gral. D. José Ceballos tuvo un encuentro con un caballero rectamente apreciable en sociedad: fué tocado en aquel duelo y su herida lo puso en la orilla del sepulcro, y no obstante, Señores, ni el Sr. General Ceballos ni su adversario estuvieron sujetos á persecución alguna de la justicia, pues lejos de ello, un año después vino á ocupar aquel General el primer puesto del Distrito Federal, por nombramiento expreso que en su persona hizo el Jefe de la Nación.

El Sr. D. Santiago Sierra ya había sufrido suerte más adversa: había muerto en un combate leal y caballeroso, y ni su adversario ni los testigos que asistieron á aquel lance sufrieron persecución alguna de parte de la justicia.

Con anterioridad había muerto de la propia manera el Coronel Garza en la huerta de "Los Morales," y la justicia no se movió para perseguir aquel duelo.

El Gral. D. Antonio Gayón sostuvo otro duelo en el que fué herido de inmensa gravedad, y ninguna inquisición se hizo para averiguar aquel delito.

Don Valentín Garro tuvo otro encuentro con el Sr. D. Eustaquio Barron, quien fué herido de gravedad, y la justicia no reclamó pena alguna en contra de los combatientes.

El Gral. Díaz de la Vega se batió con el Gral. Piña, y á pesar de salir heridos ambos combatientes, la justicia no hizo gestión alguna en perjuicio de los duelistas.

Ve, pues, la Cámara que no sólo cinco duelos sino seis he citado y podría seguir citando más, y á pesar de que ha habido en ellos efusión de sangre, la ley del duelo jamás se ha aplicado.

Siendo esto así, justo y moral parece que no se haga excepción particular y personal en el Sr. Coronel D. Francisco Romero, para desaforarlo, porque hay una ley que guarece

su responsabilidad y ella es el art. 183 del Código Penal que varias veces he citado en el curso de esta sesión.

Al obrar la Cámara de esta manera, jamás cometerá una injusticia, pues en la órbita de las funciones judiciales que hoy ejerce juzgando á uno de sus miembros, no hace otra cosa que interpretar la ley é interpretarla en los términos claros en los que la explicaba su respetable autor el Sr. Martínez de Castro, usando del lenguaje que sigue:

El art. 183 declara: "que no se estimará vigente ninguna ley penal que no se haya aplicado en los diez años últimos, si dentro de ellos ocurrieren más de cinco casos y en ninguno se impusiere la pena que aquella haya señalado." Esta regla, que á primera vista parece una novedad, no es sino una consecuencia necesaria del principio que establece que la costumbre deroga la ley; principio introducido por el derecho romano, adoptado en las leyes 5ª, y 6ª, lib. 2º, Part. 1ª y que la Comisión ha creído justo en materia criminal y fundado en la razón.

Ella persuade en efecto: que hacer aplicación de una ley penal, que ha caído en desuso ó que no lo ha tenido nunca, sería tan inicuo como aplicar una ley retroactiva ó no publicada; en primer lugar, porque cuando el pueblo lleva largo tiempo de ver que no se hace lo que la ley previene, debe presumir ó que ha sido abrogada, ó que su verdadera inteligencia es muy distinta de lo que se creía: en segundo lugar, porque no se puede exigir que el pueblo haga un estudio de las leyes como lo haría un letrado, para cerciorarse de cuáles son las disposiciones que están vigentes, cuáles abolidas y cuáles modificadas; y tercero, porque el legislador puede y debe dictar una nueva ley para dar vigor á una que lo está perdiendo, si quiere conservarla vigente.

Por otra parte: el derecho penal tiene en sí un elemento esencialmente variable: la medida de las penas; porque éstas deben cambiar según los tiempos, las circunstancias y las costumbres del país, para que permanezcan dentro de los límites de lo justo,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y cuando el legislador se desentiende de esto, la opinión pública, que es irresistible, viene á suplir su falta, condenando al olvido ó modificando las penas que han dejado de ser adecuadas. En vano se esforzará el legislador por evitarlo; en vano será que haga una declaración anticipada, previniendo que sus disposiciones no se entenderán abrogadas por el desuso, porque éste hará ineficaz esa misma declaración.

Una prueba irrefragable de esta verdad es la ley 11, tít. II, lib. III de la Nov. Recop. de Castilla, en que expresamente se manda que se observen literalmente todas las leyes del reino, aunque se alegue que no están en uso, pues á pesar de ello no se ha podido evitar la inobservación de la mayor parte de esas leyes que quiso conservar siempre en vigor. ¿Ni qué juez aplicaría hoy las penas que las antiguas leyes de España señalan á los delitos? ¿Quién, por obedecer la ley recopilada, castigaría á los llamados hechiceros, no ya con la pena capital que las leyes españolas imponen, pero ni con otra alguna, cuando nadie cree ya en las hechicerías? ¿Quién estimaría justo hacer efectiva una ley penal publicada muchos años antes de que naciera la actual generación, que no tiene noticia de ella y que jamás ha visto aplicarla?

Esto basta, sin duda, para persuadir que el artículo 183 contiene una declaración racional y justa, y como ella se contrae exclusivamente á las leyes penales, excusado parece advertir que no está en contradicción con lo que el Código Civil del Distrito establece en sus artículos 8º y 9º sobre derogación de las leyes civiles.

El Parlamento verá, por lo que acabo de exponer, que la ley, abrogada por el desuso, deja de ser ley; y si aquella que pena el duelo, no ha sido aplicada en el curso de diez años y en más de cinco casos, resulta necesariamente que el aplicársela hoy al Coronel Romero no sería otra cosa sino una soberana injusticia, incapaz de admitirse por el primero de los Cuerpos Legislativos de la República Mexicana.

Recuerdo á este propósito lo que los oradores del partido

conservador decían en el Parlamento Francés al votarse en 1886 la ley de la prescripción de los Príncipes.

El Honorable Jolly y Bois arrojaba al partido radical estas palabras:

"Vosotros traicionáis vuestro credo político si creeis que los Príncipes no son iguales á los ciudadanos franceses, sino algo superior á ellos mismos; vosotros no tenéis fe en el programa político que profesáis, y si por el contrario, los creeis iguales á los demás hombres, vosotros traicionáis vuestro sistema, puesto que queréis arrebatar para los Príncipes las prerrogativas que otorga el Pacto Federal á todo ciudadano francés."

Estas palabras, Ilustre Parlamento, podrían ser traídas al debate en favor de la causa de Romero, porque si no se han ejecutado en los seis casos que he señalado, las leyes que castigan el duelo, será una injusticia que hoy ellas se apliquen á nuestro patrocinado el Sr. Romero.

Ideas de esta especie é interpretaciones iguales, dieron los jueces franceses en la época de la Restauración, en donde los hombres de Gante y de la traición, venían en las grupas de los caballos rusos á apoderarse de los destinos de la Francia, pues aquel patriota pueblo, mareado aún por las glorias napoleónicas, no podía ver con serenidad ni con abandono, que aquella nobleza de sangre, pero que había contribuido en mucho para llevar á los Borbones al trono de sus antepasados, viniese á hollar á los hombres del régimen caído, preponderando sobre ellos y queriéndolos humillar.

Entonces los duelos se multiplicaron y el Tribunal de Casación de la Francia tuvo ocasión de establecer una doctrina explicada por Dalloz en su tratado de duelo y cuyo texto es como sigue:

"Núm. 98. Art. 3º—Fué en los primeros años de la Restauración en la época en la que la Corte de Casación fué llamada á pronunciar sentencia sobre la cuestión del duelo. Los acontecimientos que venían de colocar á los Borbones en el trono de sus antepasados, ponían á su vista en la sociedad ci-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vil y en el ejército á los servidores del gobierno caído y á los partidarios del nuevo régimen, á la nobleza creada por el imperio y á la nobleza de raza. Además, las luchas de la prensa y de la tribuna, el ejercicio de esas libertades nuevas de que la Francia hacía por entonces un laborioso aprendizaje, provocaban á cada instante conflictos entre los ciudadanos que sólo juzgaban resolverlos por medio de la efusión de sangre. Por esta causa se vió entonces reanimarse los duelos con una vivacidad que no se había visto hacía largo tiempo. ¡Cosa extraña! En esta época, en donde el vigor de la reprensión parecía ser necesaria, la opinión que prevaleció en el seno de la Corte de Casación fué que se asegurase al duelo y á sus consecuencias, cualquiera que ellas fuesen, el beneficio de la impunidad legal."

Más adelante, el mismo autor agrega:

"Una circunstancia merece que sea remarcada y que da á esta sentencia una gran importancia doctrinal. Ella es que, si bien aquel fallo se dió por la Sección Criminal, él había sido precedido de una deliberación anterior y confidencial de las secciones reunidas de la Corte de Casación, y de que la resolución que se adoptó era la expresión unánime de aquel alto Tribunal."

Blackstone, libro 4º de las leyes inglesas, pág. 562, nos dice: "El enganche de batalla ó el combate, es otra especie reprobada por las leyes, pero que ha estado en uso por las partes que lo prefieren y aceptan. Por una singular bizarría, la antigua legislación, en materia criminal, permitía á un acusado de asesinato justificarse por el combate singular, y en 1817, en un negocio que hizo gran ruido en Inglaterra, el proceso de Thorton, este remedio fué aceptado por los jueces."

Los Señores Jurados se persuadirán, con la doctrina que acabo de exponer, que no es sólo en México en donde la ley del duelo se ha abolido por una costumbre contraria, pues la Francia, en sus momentos difíciles, ha juzgado conveniente declarar prescrita aquella ley antes que encarcelar á un ciudadano

por un hecho que tiene en su apoyo la opinión pública. Digo esto, Señores, porque en teoría todos somos adversarios del duelo, de la misma manera que lo somos de la guerra; pero desde el momento en el que recibimos una injuria y nuestras pasiones se excitan, desde aquel instante, Señores, abandonamos la prudencia y ocurrimos al combate personal para satisfacer las ofensas de que hemos sido víctimas.

Somos, Señores, como los evangelistas, que predicaban el evangelio y no lo cumplían, y ante estas ideas, vosotros tenéis que tolerar el duelo.

He concluido, Señores; el Sr. Coronel Romero se sujeta con placer á la decisión de la Cámara, porque, hijo del pueblo y soldado, custodio de las libertades públicas, se entrega á sus jueces, y al hacerlo, parodia al orador romano en su sublime frase *fiat justitiæ et ruat cœlum*, y dice á sus jueces: "Hágase justicia y brame el cielo."

Discurso pronunciado por el Sr. Lic. D. Jacinto Pallares, ante el Gran Jurado Nacional.

El C. Presidente.—Tiene la palabra el C. Pallares como defensor del Sr. Romero.

El Sr. Pallares.—¡Señores Jurados! Abrigaba la esperanza de ahorrar mis palabras á este honorable Jurado, ante quien me presento sin preparación alguna, sin el más ligero estudio del proceso, sin otro antecedente que el de haber escuchado en estos momentos la lectura del dictamen de la Comisión. Arrebatado hace media hora al torbellino de los negocios civiles, que forman mi habitual ocupación, he venido ante esta Augusta Asamblea obedeciendo el llamamiento de uno de sus miembros contra quien se ha conjurado la grita de la prensa, el sentimiento de la opinión pública, y aun quizá el voto unánime de Vuestra Soberanía.

La opinión pública, ávida de crímenes sensacionales, aplau-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de prematuramente el dictamen de la Comisión del Gran Jurado Nacional; ese dictamen que me autoriza para ser cobarde ante la hostilidad del público, pues él, que erige en deber para un militar la cobardía, ¿cómo no servirá de patente á la mía que no soy militar? *(Aplausos)*.

Pero sobreponiéndome al miedo canonizado por ese dictamen, voy á plantear no el problema filosófico del duelo, no la exculpación de mi defenso ante la conciencia moral; este debate debe quedar aplazado para más tarde, para ser discutido ante el Jurado popular. En estos momentos el Gran Jurado Nacional no es un areópago de filósofos, no es ni siquiera un Cuerpo legislador, es simplemente un Juez y ante un Juez se alegan leyes, no teorías filosóficas.

Ciñéndome al debate estrictamente jurídico, tengo que combatir el dictamen de la Comisión como ilegal y como inconstitucional.

Como ilegal, porque el honorable miembro de la Comisión que ha tomado la defensa del dictamen, no ha podido, no, refutar el grave y decisivo argumento formulado por el Sr. Lic. Lombardo. Ha dicho mi compañero en la defensa que la ley penal que castiga el duelo, que los artículos del Código penal que hablan del duelo y lo penan, están derogados por el uso, por la costumbre, por la práctica de más de veinte años; ha dicho que la derogación de una ley penal por la costumbre está prevista, admitida, sancionada por el artículo 183 del mismo Código que habla del duelo; ha dado lectura á las frases enérgicas, inequívocas del ilustre Ministro de Justicia Martínez de Castro, autor de ese Código, y en las que proclama y explica la amplitud del sentido del artículo 183, diciendo que ese artículo tiene por objeto establecer el principio, la regla de que la costumbre deroga la ley. Y ante ese argumento incontestable, ¿qué ha dicho el defensor del dictamen?

Ha contestado con algo que es más alarmante todavía que la hostilidad de la opinión pública; con algo que ha sido siempre el peligro y el escollo de todas las libertades públicas; con

algo que ha parecido tan grave á este mismo parlamento, que ha provocado un gran debate para encontrarle un remedio á la iniciativa sobre inamovilidad del poder judicial. Ese algo es.... ¿por qué no decir la palabra mágica? ese algo es la *psicología*.

El defensor del dictamen, envolviéndose en frases latinas cuyo sentido ignoro, porque no sé latín, viene á reproducir esas prácticas psicológicas, que acogidas por los tribunales con desprecio de las garantías individuales, buscan una sanción solemne en esta Asamblea.

Un día, Señores, ¡ilustre Jurado! (permitidme los defectos del tecnicismo en el tratamiento que os dé, porque no tengo el hábito del lenguaje parlamentario), un día el Juez Dublán me consignó á mí, que cifro mi único título al respeto público y al cariño social en la completa honradez de mi vida, me consignó por un supuesto delito de allanamiento de morada al C. Juez Correccional, Lic. Luis Morán; y este funcionario procedió contra mí y contra mis supuestos cómplices, un Notario y un Doctor. Por consideraciones personales que agradezco, no pisé los umbrales de Belem, á pesar de asumir, como era el deber de mi lealtad profesional, toda la responsabilidad de un hecho en que yo era el autor principal y mis llamados cómplices sólo obraron bajo mi dirección; no pisé los umbrales de Belem, pero mis cómplices sí los pisaron, y después de tres meses de proceso, después de las vejaciones de un arresto, después de la vergüenza de un registro en los libros carcelarios, el Sr. Juez correccional, sin que los elementos que sirvieron para decretar ese arresto se hubieran modificado, subsistiendo íntegros los mismos hechos, no cambiados en nada los motivos de la prisión, el C. Juez correccional vino al cabo de tres meses á declarar *que no había delito que perseguir*.

¡No hay delito que perseguir después de haber vejado, deshonrado, perjudicado á supuestos delincuentes! ¿Pero por qué antes de esa vejacion no consultó el Código penal y sólo vino

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á consultarlo después de tres meses? ¡Porque había las *apariencias*, contestaba el psicólogo funcionario!

Y esas apariencias que son la piedra angular en que descansan todas las arbitrariedades procesales, son las que viene á invocar también el dictamen de la Comisión y el honorable miembro de ella que ha tomado su defensa. ¿Pero por qué las apariencias de un delito pueden ser bastantes bajo el imperio de nuestra libérrima legislación para vejar á un hombre y arrastrarlo á una galera de presos?

En todo proceso criminal, señores Jurados, hay dos problemas que se presentan desde el momento en que se inicia el procedimiento: un problema de hecho y otro problema de derecho. El problema de hecho es complexo y difícil, y su resolución no puede darse sino después de agotada la investigación, de apurados todos los medios de conocer la verdad; el problema de hecho se resuelve en esta pregunta: "X. ha ejecutado los actos que se le atribuyen;" y esa pregunta no puede contestarse sino en la sentencia definitiva después de laboriosas y difíciles investigaciones, en que el Juez agota su ingenio para descubrir la verdad. Pero mientras se llega al conocimiento pleno de la verdad, hay indicios, hay sospechas, hay datos más ó menos vehementes contra el procesado; y la ley, colocada entre la imposibilidad de temer una prueba perfecta desde el punto inicial del procedimiento, entre los peligros de la impunidad por la fuga y la imposibilidad de dar una regla precisa para determinar el valor de esos indicios, para solo el efecto de asegurarse de la persona del sospechoso, colocada la ley entre esas alternativas y dificultades, exige de todos los asociados el sacrificio momentáneo de su libertad en beneficio de la seguridad común, y deja al arbitrio prudente de los funcionarios judiciales la apreciación del valor que tengan sus indicios para motivar un arresto ó una prisión formal. Y aquí, en la esfera del problema de hecho entra á funcionar legítima y racionalmente la psicología.

Pero al lado de ese problema de hecho hay en todo proceso, desde su punto inicial, un problema puramente legal, único, de derecho. Ese problema es el siguiente: suponiendo plena, plenísimamente probados los hechos que se atribuyen al procesado, esos hechos importan la comisión de un delito.

Y este problema, señores Jurados, la resolución de este problema, no puede, no debe, no tiene derecho el Juez para aplazarlo hasta el período de sentencia. El Juez tiene el derecho de ignorar los hechos que se imputan al procesado, pero no tiene derecho de ignorar las leyes que sean aplicables á esos hechos; el Juez tiene que saber y saber de memoria la ley penal y conocer profundamente su sentido, y el Juez, antes de todo procedimiento, antes de causar la más ligera molestia á un acusado, debe saber si los hechos que se le atribuyen están ó no previstos y penados en el Código penal. En este punto no cabe la psicología.

Si así no fuera, bastaría que el Ministerio Público ó cualquier ignorante ó mal intencionado, acusara á un hombre del delito de haber visto á una muchacha bonita para que el Juez procediera á la detención del acusado, aplazando para más tarde resolver si ver á una muchacha bonita es ó no delito. Semejante sistema sería la negación de toda ley, de toda garantía, de toda seguridad personal, y los jueces tendrían un poder temible para vejar á todos los humanos durante dos, tres, diez meses, un año, aplazando para más tarde resolver si el hecho que motivaba esas vejaciones era un delito previsto en la ley penal.

Y ese sistema pavoroso y temible es el que viene á proclamar el dictamen de la Comisión y el honorable miembro que la defiende. Le bastan, dice, las apariencias de un delito, el hecho material de existir computado un homicidio cometido en duelo; pero ¡Señor! la defensa dice y lo dice fundándose en una ley expresa. Aquí hay una cuestión legal, prejudicial; aquí venimos á deciros con la ley en la mano, con el artículo 183 del Código, que el duelo no es ya un delito, por estar derogados por la costumbre de veinte años los artículos del Código penal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que hablan del duelo; el dictamen acusa de duelo y ese delito no existe hoy *legalmente*.

No se trata de la cuestión de hecho, no se trata de saber si efectivamente pasaron los hechos de esta ó de la otra manera; se trata de la cuestión legal, se trata de saber si aceptando que los hechos pasaron como consignan las constancias del proceso, á pesar de toda esa verdad no existe ley penal vigente aplicable, no puede haber procedimiento legítimo. Esta es la cuestión.

Y la Comisión debió resolver esa cuestión, porque para que haya delito que perseguir es preciso que haya ley que defina ese delito; y como hay un precepto, el del artículo 183 que dice que no hay delito de duelo, el Gran Jurado debe resolver previamente á todo procedimiento, si ese artículo es letra muerta ó si debe obedecerse. Mi defenso tiene derecho á deciros: "yo he visto hace veinte años que los tribunales, las autoridades políticas, los jurados populares no persiguen, no castigan el duelo: he visto más, he visto que el Ministerio de Guerra destituye y da de baja vergonzosamente á los militares que no se baten; he visto que los miembros de esta misma Cámara que se han batido, han continuado desempeñando sus puestos públicos y contando con el aprecio y estimación de sus conciudadanos, he visto esto y he creído que al hacer yo lo que todos los hombres honrados han hecho, no podía ser en mí un crimen lo que no es crimen en los demás asociados, y no podía aplicárseme á mí solo una ley que á otros no se ha aplicado hace más de veinte años."

Y á este razonamiento incontestable, la Comisión del Gran Jurado no tiene respuesta que dar y se contenta con envolverse ó escudarse en la psicología de que existen *apariencias materiales* de la comisión de un delito, á pesar de que todo delito supone una ley penal, y en nuestro caso no hay ley penal.

Pero no sólo falta la ley penal, hay algo más grave en el dictamen de la Comisión, algo que obliga á la Cámara á herir

los preceptos del derecho constitucional, de la ley Suprema de la Nación.

Sostiene la Comisión que su deber en la instrucción del proceso no es profundizar los elementos del delito, ni detenerse á investigar las circunstancias exculpantes del hecho, sino que debe y debió limitarse á una instrucción sumarísima de los hechos. Esto no es cierto, si el Gran Jurado puede llegar á decir que no *há lugar á proceder*, y esta resolución implica una sentencia absolutoria é irrevocable. *(Voces de algunos señores Diputados que dicen no, no).*

El Sr. Pallares.—Digo que sí.....

El Sr. Secretario Velázquez.—Dispone el Señor Presidente se dé lectura al art. 1º del Reglamento interior de la Cámara, que dice: *(lo leyó).*

El Sr. Pallares.—No sé si esas demostraciones son la expresión del ánimo preocupado de un pueblo que no conoce la realidad de los hechos ó son la expresión de conocimientos profundos de derecho constitucional, en cuyo último caso desearía recibir lecciones de esos preopinantes. *(Voces: no, no).*

Decía, Señores! y lo digo con toda sinceridad, no por vía de argumento rebuscado para la defensa, sino porque así lo he enseñado como profesor, decía, que si el Gran Jurado puede llegar á esta conclusión: *no há lugar á proceder*, ésta entrañaría una sentencia absolutoria, definitiva, irrevocable; y me autoriza para sostener esta verdad, el texto expreso de la ley Soberana, de la Constitución. "La Cámara (dice el art. 104), erigida en Gran Jurado, declarará á mayoría absoluta de votos, si há ó no lugar á proceder contra el acusado. En caso de negativa, no habrá lugar á ningún procedimiento ulterior."

No haber lugar á ningún procedimiento ulterior, quiere decir en castellano que *después, que posteriormente, que ulteriormente, ningún procedimiento* puede promoverse; *ninguno,* dice la Constitución, esto es, ni por el Congreso, ni por los Jueces comunes; ¿y qué cosa es no poder ya jamás proceder contra un hombre por un hecho, sino una verdadera é irrevocable

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

absolución? Si nadie puede proceder contra un individuo amparado por un veredicto de *no há lugar*, es evidente que, en derecho, ese veredicto es una sentencia absolutoria é irrevocable.

Ahora bien; si el Gran Jurado puede llegar hasta dar esa sentencia, si tiene derecho, si tiene facultades para dictarla, entonces tiene también derecho para conocer á fondo, no superficialmente, los hechos sobre que puede recaer esa absolución; tiene derecho á conocer el delito, sus circunstancias exculpantes, todos, absolutamente todos sus elementos constitutivos, pues sólo así puede con conocimiento pleno dictar un fallo absolutorio. Y si este es el derecho y estas son las facultades del Gran Jurado, entonces la Comisión de ese Gran Jurado no puede limitarse á hacer una información sumarísima, sino que debe, debió agotar la investigación, debió presentar en su dictamen estudiados y resueltos todos los problemas de hecho y todos los problemas de derecho que necesariamente debe conocer el Gran Jurado para absolver en caso de que así proceda.

¿Ni cómo limitarse á un procedimiento ó inquisición sumaria cuando allí está el reglamento consignando que se haga confesión con cargos al acusado, cuando estamos aquí los defensores llamados por el Gran Jurado? ¿Pues que, cuando se trata de sumarísimas investigaciones hay confesión, cargos, hay defensores, hay todo el aparato de un juicio pleno?

¿Para qué semejante aparato si sólo se trata de las *apariencias materiales* de un delito? ¿Qué tenemos que discutir, ni para qué se da la voz á los defensores si sólo se trata de simples apariencias?

El dictamen está, por lo mismo, imperfecto, trunco; él debió investigar las circunstancias del duelo; esclarecer si hubo felonía; debió tratar y resolver la cuestión legal de la vigencia de los preceptos del Código Penal que se invocan; debió, en una palabra, apurar la investigación para someter al Gran Jurado toda, absolutamente toda, la responsabilidad de sus miembros acusados.

Por desgracia, obedeciendo la Comisión la corriente de la opinión pública más que las inspiraciones de la ley, ha precipitado el proceso, como si la ley no estuviera antes que todos los arranques de esa opinión pública que ha emponzoñado el aliento de la difamación; de esa opinión pública que aunque algunos dicen ser *vox populi*, *vox Dei*, yo creo que, como decía el Nigromante de la conciencia, que es el *humor con que uno se levanta*, aquella es el humor con que cada uno recoge sus simpatías ó antipatías, sus odios ó cariños, las voces de la maledicencia ó las pérfidas insinuaciones de bastardos intereses.

La opinión pública no acrisolada por el análisis y serenidad del juicio, es el arranque de las pasiones fascinadas por hábiles prestidigitadores del sentido común. Yo sé muy bien que al hablar así no me atraigo ciertamente las simpatías del público; pero mi deber de defensor no es conquistarme esas simpatías siguiendo el impulso que aquí he dado al sentimiento público, sino interponer mi palabra desnuda de adornos y llena de verdades, entre los odios populares y el hombre perseguido.

Este me ha autorizado para decir al Gran Jurado Nacional que quiere mejor ser condenado por duelista, porque esto no mancharía su honra, que dejar envuelto en las sombras de la duda y de la maledicencia la lealtad con que se portó en el lance á que fué arrastrado por las exigencias de su posición de militar.

Para este efecto, acepta el desafuero como un medio de vindicación; pero ni él ni yo podemos aceptar que excepcionalmente y sólo en su contra se revivan leyes desusadas y se le arroje de esta Cámara por un cuerpo cuyos miembros todos, si al salir de este recinto son ultrajados por una bofetada ó por otro acto soez, ellos mismos, después de aprobado ese dictamen de la Comisión del Gran Jurado, harían lo que hizo mi

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

defenso; y no es justo que él, y sólo él, tenga el deber, á pesar de su carácter militar, de estar ligado por esa patente de cobardía obligatoria que le otorga el gran dictamen de la Comisión.

Discurso pronunciado por el Sr. Diputado D. Manuel Flores, ante el Gran Jurado Nacional.

El C. Presidente.—Tiene la palabra el C. Flores.

El C. Flores Manuel.—Señores Diputados: Por recuerdos lejanos de la primera infancia, por lecturas más recientes de la juventud y de la madurez, he sabido siempre que en los momentos de crisis política, los Parlamentos son volcanes en erupción. Brillan sobre sus cráteres relámpagos, estallan dentro de sus entrañas truenos, cúbrense de penachos de humo, vierten lavas hirvientes que todo lo arrasan, que todo lo aniquilan; pero en la cima y en el vértice de aquellos volcanes puede brillar, y brilla casi siempre, una luz—la de la justicia, la del derecho. No es sorprendente, pues, que en esos momentos de angustia y de conflicto, se entrechoquen en el seno del Parlamento todas las pasiones, se pongan en juego todos los ardides, se esgriman todas las armas, se adopten todos los expedientes; hay una meta—el triunfo; el camino lo abrirá la lava.

Pero si en los momentos de crisis política son disculpables y tolerables esa efervescencia, ese chisporrotear, como de fuegos artificiales, ese desfile de fantasmas, esa procesión de sombras veneradas, no es tolerable, Señor, que cuando se debate una cuestión seria; cuando precisamente lo que ha de extinguirse en el pecho es la pasión; cuando justamente lo que ha de brillar en el espíritu es el criterio, se vengan á resucitar los procedimientos tumultuosos de la política de combate y vengan á sustituirse al frío razonamiento, al cálculo severo y comprobado. Y menos es explicable, cuando un Parlamento, por circunstancias de actualidad y por la índole de las instituciones dentro de las cuales funciona, está constituido, no en un campo de batalla, sino en un augusto tribunal, ¿á qué, Señores, hacer salir las cuestiones de su verdadero asiento; á qué venir á dislocarlas de su verdadero arraigo; á qué jugar el eterno sofisma de poner á discusión un punto para discutir otro; de dar razones favorables á una tesis cuando es otra la que está sobre el tapete? ¿Para qué venir á disfrazar sofismas con el traje de argumentos? ¿A qué exhumar los esqueletos fríos, descarnados, de viejos odios políticos, para revestirlos de sotanas y roquetes, y hacerlos desfilar aquí con el fin de causarnos miedo? *(Aplausos).*

No; vuestra altísima ilustración, vuestro rectísimo criterio, no se dejarán alucinar, Señores Diputados, por esas fantasmagorías. Se trata de sorprenderos diciendo que son la prensa clerical y la prensa de oposición las que reclaman, las que imponen el que se haga justicia en el caso presente.

Yo vengo á deciros, Señores, que si en un orden de ideas meramente político es tolerable que la Cámara siga el norte que su brújula le marque, en cuestiones de moralidad y de justicia, donde quiera estén, en la oposición ó en el clericalismo, allí hay que ir á buscarlas y allí hay que prosternarse ante ellas. (*Aplausos*).

Yo protesto en mi nombre personal—y entiendo que, aunque indigno, llevo en estos momentos la voz de la nueva generación política y del joven partido liberal—que para nosotros no existen clericalismo y liberalismo: existen virtud y vicio. (*Aplausos*).

Estamos decididos á perseguir el ideal del derecho y de la justicia y á desentrañarlo del claustro, del monasterio, del taller, de la escuela, de la encrucijada, de donde quiera que pueda abrigarse. Allí irán nuestras manos piadosas, y llenos de veneración y respeto tomaremos la hostia, la elevaremos y la presentaremos al pueblo para que comulgue con ella. (*Aplausos*).

Digo esto, Señores, no aludiendo ciertamente á los defen-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sores que antes han hecho uso de la palabra, á los defensores de los Sres. Romero y demás acusados, no; están en su derecho; todo cuanto hagan, todo cuanto digan, todos los esfuerzos que impendan para salvar á sus defensos, entra de lleno en la tolerancia de los usos admitidos y de las leyes naturales; porque cualesquiera que sea la potencia que desplieguen para salvarlos, la justicia sabrá oponerles toda la resisteecia necesaria y condenará á los delincuentes.

Pero nosotros, en nuestra calidad de Diputados, necesitamos revestirnos de una serenidad estoica; somos jueces, blandimos en estos momentos la espada de la ley, tenemos en nuestra mano la balanza de Themis, y no es posible que esa balanza guarde su equilibrio si nuestra mano experimenta los sacudimientos de la pasión. (*Aplausos*).

Señor, la aprobación del dictamen que ha presentado la esgunda Sección del Gran Jurado, os la reclama la opinión, que habéis visto vilipendiar hace un momento, en ejercicio de un sagrado derecho, por uno de los defensores del Sr. Romero. La opinión, siempre extraviada, siempre en el otro polo, cuando se trata de dirimir cuestiones científicas, cuestiones técnicas (porque para dirimirlas es incompetente), la opinión es brújula y norte cuando se trata de las altas cuestiones de la moralidad y la justicia; esa opinión os pide, no la condenación de los hombres, sino el esclarecimiento de los hechos. Es derecho de la opinión pedirlo, y es obligación nuestra concederlo.

Lo exigen vuestro decoro y vuestra dignidad. La mayor parte de esos acusados son miembros útiles y distinguidos, algunos de ellos altísimos, de la Representación Nacional, y ¿vais á permitir que sobre ellos se cierna la sospecha injuriosa? ¿vais, dando vuelta á la llave, á cerrar la puerta por donde puede entrar á torrentes la luz, vais á dejar que se diga que en el seno de la Representación Nacional—¡como quien nada dice, de la representación genuina de la Patria!—hay miembros

gangrenados, hay manchas de fango y de sangre? No lo podréis permitir, va en ello vuestro prestigio.

Ese fallo os lo pide, Señor, la dignidad personal de los acusados; vosotros con un veredicto de—"No há lugar"—revestís á estos hombres de una coraza, tras de la cual quedan al abrigo de todos los ataques que á sus personas é intereses puedan dirigirse; levantáis al derredor suyo un muro impenetrable; pero no olvidéis que por encima de este muro pueden llegarles las salpicaduras de lodo, que mancharán sus reputaciones. (*Aplausos*).

No hagáis el papel de Paulo III, acogiendo bajo su manto papal á Benvenuto Celini, porque "los hombres de genio son superiores á las leyes humanas." Os exponéis, como pasó con Paulo III, á que debajo de ese manto se abrigue un delincuente. La conducta de Paulo III tenía explicación, ya que no disculpa, en el hecho de que se trataba de un hombre de genio, de genio creador y estupendo, que modelaba el bronce como el Hacedor la arcilla, y que, como el Hacedor, sabía transfundir en ella el soplo de la vida. Nosotros, Señor, no tenemos que juzgar á hombres de esa talla, son honorables; pero simples mortales. ¿Con qué derecho nos presentaremos mañana ante la opinión y qué cuenta daremos de nuestro mandato? Todo cuerpo político, Señores Diputados, contrae inmensas responsabilidades ante la opinión y ante la historia, tiene siempre flaquezas, debilidades, condescendencias; tiene que tenerlas su solo escudo contra la maledicencia, su solo título á la veneración del país y del mundo, es su eterna orientación hacia el derecho, su respeto incondicional á la justicia. (*Aplausos*).

¿Entraré, Señores, obsequiando la seducción con que me brinda el Sr Mateos, al escabroso terreno en que se dirime si el duelo es, como él dice, una necesidad social, una institución útil? Apenas me atrevo á hacerlo.

No quiero que al mal ejemplo que su Señoría ha dado desarraigando la discusión, siguiera el que yo tendría que dar acompañándolo en esa senda extraviada; pero sí no es posible

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dejar pasar en silencio el que se dé como prueba de la bondad de un acto ejecutado por el hombre, individual ó colectivamente, la imposibilidad de impedirlo: la ley no ha podido nunca impedir el crimen desde los tiempos primitivos. El adulterio, la perfidia, la mentira, la difamación, el homicidio, todos los crímenes, Señores Diputados, subsisten hoy como existieron en el pasado. Apenas, y gracias á la estupenda organización social moderna y á la delicadeza de su mecanismo, se ha logrado disminuir en cantidad, acaso atenuar un poco en calidad, esos extravíos del corazón y del espíritu; pero por eso ¿vamos á decir ahora que esos crímenes son otras tantas necesidades sociales, que el legislador es impotente contra ellas, que queda abolido el Código Penal y que la única moral es el desenfreno?

Esto es cuanto se puede decir en un Parlamento serio.

El duelo no es una necesidad, como dice el Sr. Mateos; el duelo es una enfermedad con sus recrudescencias de fiebre, con sus calosfríos de terciana, con su envenenamiento de la sangre, con sus palideces de muerte, con todo su cortejo de destrucción y de ruina. Tampoco es, cómo se pretende, la única salvaguardia del honor y de la dignidad personales. Extendámonos un poco, si os place, Señores Diputados, á este respecto.

El Sr. Mateos, con toques vigorosos, como todos los suyos, y á grandes rasgos, como no podía menos, nos ha trazado vagamente la historia del duelo á través de la humanidad; pero tuvo la atingencia de detenerse en los momentos en que el duelo, de institución útil y benéfica y de institución necesaria, se convierte en cáncer y en gangrena social.

Tuvo el orador el talento de estudiar el duelo desde las luchas personales, colectivas y sin cuartel que sucedieran á la caída del Imperio Romano; de seguirlo con mucha tranquilidad, á través de sus evoluciones, hasta la conclusión del feudalismo, hasta la consolidación del régimen monárquico absoluto; pero lo deja allí, no lo vuelve á tocar, y olvida hacer observar

á la Cámara, como lo exigía su lealtad, que desde ese momento el duelo es una calamidad.

¿El duelo fué una institución benéfica? Sí, no tiene duda, como es benéfico lo menos malo ante lo peor. El duelo nació del estado de anarquía en que, á la disolución del Imperio Romano, quedaron los territorios, antes ocupados por aquella vasta nacionalidad. Sin Gobierno constituido, aquellas moléculas humanas se dispersaron y comenzaron las unas con las otras á luchar despiadadamente por la vida. Fuéronse constituyendo en virtud de la atracción humana y fuéronse formando pequeñas agrupaciones de donde surgió después el sistema feudal que continuó la guerra política. El duelo vino entonces á producir este inmenso beneficio en el orden social y económico: limitar el número de los combatientes de una y otra parte. "Ya que la necesidad nos obliga—decían—á estar siempre en lucha con nuestros vecinos, tratemos de circunscribirla, tratemos de que los daños no se hagan generales, sino que se concentren en determinado punto." El primer paso en este camino fué que los siervos no combatían; cultivaban la tierra, se dedicaban á la industria y había una mesnada consagrada á la lucha, á la defensa del feudo, á la agresión de los vecinos; grupo de hombres de armas llamado él solo á combatir á las órdenes de su jefe.

Más tarde, los jefes comprendieron que esto también era grave, desastroso, y entonces concluyeron por entablar la lucha singular del uno contra el otro.

Como se ve, el duelo vino á producir este resultado: el de que se limitaran á determinadas personalidades y agrupaciones, los estragos del estado de guerra.

Consolidadas las grandes naciones europeas que fueron después los grandes reinos civilizados, el duelo no tenía ya razón de ser; habían cesado esas luchas intestinas, la guerra civil casi había desaparecido; si había guerra extranjera, no podía hacerse ni practicarse por el sistema del duelo, y para hacerla y afrontarla se constituyeron ejércitos permanentes, más ó me-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nos mercenarios. El duelo subsistió como costumbre, como hábito; se había vinculado en la práctica del duelo cierta gloria, y los nobles y los caballeros continuaron practicándolo. ¿Con qué resultados? Con resultados de todo punto desastrosos. Los tratadistas os dirán, como os dicen los pensadores, que lo mejor de la sangre noble se vaciaba por aquella vena abierta; os dirán que sólo en diez años perecieron ocho mil nobles franceses en duelo, sobre una cifra de veinticinco mil hábiles para batirse, y os dirán que si la democracia naciente en 1893 pudo derrocar á la nobleza, fué porque la nobleza había perdido la mitad de sus fuerzas en luchas personales de noble contra noble.

¡No es decible hasta qué punto se pudo prostituir el sentimiento del honor en aquella gente, ni hasta qué punto el duelo llegó á ser hipócrita!

Hipócrita, sí, Señores Diputados. El duelo se enmascara, como en la tragedia antigua el actor; con esta diferencia: que en la tragedia antigua el actor solía ser hermoso, y la máscara horrible, en tanto que en el duelo el actor es horrible y se pone una máscara hermosa. *(Aplausos).*

¡A cuántas aberraciones condujo la práctica del duelo! La primera consistió en que, dada una querella entre dos nobles, no tenían que batirse el uno contra el otro simplemente, como era lógico; sino que había que invitar, como quien invita hoy á un almuerzo ó á una tarde de campo, á dos ó tres amigos, los cuales, de una manera imbécil y estúpida, iban á esgrimir las espadas unos contra otros con el mayor desparpajo, sin odio ni rencor. Excusado es decir que generalmente morían los que no habian reñido, los que no habían tenido motivo alguno para desnudar la espada.

Este sistema de los segundos y de los terceros en los duelos, dió lugar á escenas verdaderamente repugnantes. En cierta ocasión se reconocen padre é hijo entre los combatientes; en efecto, uno de los dos nobles contendientes había invitado al padre y el otro al hijo; ¡cuál no sería la sorpresa de los segundos, cuando al encontrarse frente á frente se reconocen! Cualquiera de nosotros, menos celosos de su honra, acaso, que aquellos esforzados y nobilísimos caballeros, hubiera envainado su espada, dado media vuelta é ídose á su casa. No, Señores, no fué así; tomó la iniciativa el padre, y creyendo seguramente que con esto daba un ejemplo de alta educación moral á su hijo: "vengo con quien vengo—dijo—y mato al que delante tengo." Y mató á su hijo. *(Aplausos).*

Muere el Rey Enrique III, quien tenía, como es sabido, muchos favoritos —renuncio á repetir aquí de qué categoría— todos muy nobles, hombres de mucho honor y hábiles en el manejo de las armas: uno de ellos, Marivaux, desesperado por la muerte de su amo, escribe un cartel y lo lanza al viento; en ese cartel decía que quedaría retado y ofendido el primer caballero que lo recogiera; pasa un caballero, Des Marolles—es bueno conservar estos nombres—que debía ser un demente ó un sandio, á juzgar por su estado de conciencia, levanta el cartel, y en lugar de reírse de la locura del retador, va inmediatamente en busca de Marivaux, que era el desesperado, le da gusto y lo mata.

¿Me diréis que el duelo ha sido siquiera un medio para exaltar la dignidad? Pues qué, ignoráis acaso que nunca los principios de la dignidad humana—salvo para los efectos del duelo en sus formas ridículas y á veces atroces—ignoráis, digo, que la nobleza que más practicaba el duelo, que era la nobleza francesa, en punto á dignidad humana y á moralidad estaba absolutamente en el último y más ínfimo grado á que pueda el hombre llegar? Los nobles eran ladrones, mentirosos, estafadores; eran perversos hasta el grado de sacar la espada con el único objeto de causar un mal, se entretenían en destruir, por gusto, objetos de valor; en cercar á un infeliz en la noche, y con la punta de las espadas, formando círculo, impedirle que les diera la espalda; en hacer bailar á las mujeres del pueblo, acaso honradas, acaso vírgenes, sobre las manos y con los piés hacia arriba .... Estas, estas eran sus *gracias;* este era el tipo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de la moralidad á que aquella práctica inícua del duelo, á que aquel desprecio á la vida humana, había llevado á esa nobleza francesa.

Por eso vemos tan grande y colosal la revolución que destruyó la nobleza.

Veamos ahora qué es la dignidad humana, y veamos ahora si el duelo puede ser la salvaguardia de esta dignidad.

Señor, á través de la historia, la dignidad humana ha revestido las formas más extravagantes y más escandalosas. Si la consultamos, bien sea á través del tiempo, bien sea á través del espacio, encontramos que los hombres han vinculado su dignidad en actos que hoy no vacilaríamos en calificar de verdaderos crímenes, de verdaderas atrocidades.

Durante la guerra de las Cruzadas se practicaba el canibalismo. El Jefe vencedor asaba infieles pequeñitos, como lechones, y los distribuía entre los soldados, que se consideraban honradísimos de haber ejecutado estos actos de iniquidad con sus semejantes.

En ciertos pueblos antiguos, como en Esparta, ó modernos, como Fidji, el más ladrón es el más honrado. ¿No sabemos que los apaches se cuelgan del cinto las cabelleras de todos los hombres que han sacrificado? Pues en eso está lo que llaman su honra.

Nosotros nos ponemos en el pecho las cruces que ameritan el valor y los triunfos en la guerra, y ellos se cuelgan las cabelleras como trofeos de sus infames asesinatos.

En la actualidad, Señores, la dignidad humana es y debe ser otra cosa. ¿Sabéis qué cosa son la honra y la dignidad en una sociedad pacífica, democrática y constituida bajo un régimen industrial? No le déis más vueltas, Señores Diputados; la dignidad humana en ese pueblo, es la virtud. Hoy somos honrados en la proporción en que somos virtuosos; hoy lo que nos deshonra es el delito; y yo os pregunto si el duelo, que es la sanción de un delito, puede ser nunca la salvaguardia de la dignidad humana, que es la virtud. *(Aplausos)*.

Grande, excelsa, nobilísima es esa pasión que nos hace velar por la propia dignidad, vinculada como lo está, como lo debe estar en la sociedad moderna, en la práctica de la virtud, en el amor á los demás hombres, en el respeto á las autoridades constituidas, en el ejercicio ordenado de todos los derechos y de todas las prerrogativas y en la práctica estricta y severa de la justicia. El honor, Señores, es una altísima virtud y generalmente con ella se enmascara ese crimen disfrazado y abominable que se llama duelo.

Si creeis, en último resultado, que el honor, lejos de ser una deidad, levantada sobre un altar en el que vamos á hacer un sacrificio y ante el cual nos prosternamos con veneración, haya de ser un Minotauro sediento de sangre, entonces id á derramar la vuestra en los campos de batalla, en defensa del territorio ó de la honra nacional; id á derramarla en defensa del desvalido, como lo hacía el Hidalgo Manchego; id á envenenarla á la cabecera del apestado, ayudándolo en sus angustias, tratando de arrancarlo á la muerte; hacedla caer gota á gota, desde lo alto de la cruz, en la cima del Calvario, desde donde deis ejemplo á la humanidad de las grandes virtudes y excelsitudes que encierra el progreso humano. Eso será siempre el verdadero honor, porque será siempre la verdadera virtud. *(Aplausos)*.

Discurso del Diputado Don Francisco Bulnes, ante el Gran Jurado Nacional.

El C. Presidente.—Tiene la palabra el C. Bulnes.

El C. Bulnes Francisco.—El Sr. Mateos, con sus ideas, ha puesto en una pendiente muy peligrosa á los señores Senadores y Diputados comprometidos en la acusación; cree que una vez derogada ó declarada caduca la ley sobre el duelo, el homicidio en duelo será un acto legítimo, un acto plausible para la sociedad, acto que atraería inmediatamente el prestigio, con

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

todas las prerrogativas constitucionales que amparan el libre ejercicio de las más respetables industrias.

Pero el Sr. Mateos, lo mismo que los honorables defensores de los acusados, no han percibido aún que desde hace 24 años, el homicidio en contienda de obra está regido por dos leyes exactamente aplicables al caso: frente á la ley especial siempre ha estado la ley general; frente á la ley del privilegio se ha levantado siempre la ley común; frente á la ley prelativa se ha mantenido la ley constitucional; frente á la ley de excepción está la ley general; frente á la ley de los favores otorgados á los de levita han funcionado siempre las penas terribles contra los descamisados. El Código Penal, de un caso perfectamente comprendido en la riña, ha querido hacer un delito especial para privilegio de cierto grupo de la sociedad, y estos grandes oradores, prestigio del Foro Mexicano, han olvidado que una vez que el privilegio cae, el caso privilegiado vuelve inmediatamente al derecho común. *(Aplausos).*

Una vez que una ley se derrumba, la otra queda en pie para medir con la misma vara á todos los culpables, cualesquiera que sean su traje y su posición social. *(Aplausos).*

Preguntaba el Sr. Pallares, con una sátira delicada, casi femenina, á la Cámara de Diputados: *¿de qué ley vais á hacer uso, si el artículo 183*—(que no lo creo)—*ha derogado la ley del duelo?* De la ley de los descamisados, Sr. Pallares, de esa ley vamos á hacer uso.

Voy á probar cómo se aplica esa ley; ruego á la Cámara que acreciente su benevolencia para conmigo, dándome toda su atención: seré muy corto, porque no me gusta manejar muchos papeles.

Hecho: un hombre ha peleado con otro y lo ha matado. El juez de la gente decente mira su traje y dice: presumo un duelo. El juez de los descamisados lee el artículo 553 del Código Penal: "Por riña, se entiende la contienda de obra y no de palabra entre dos ó más personas."

Yo aprendí, hace creo treinta años, una infeliz lógica, y con

ella se puede ver esto: el duelo que es un combate con armas mortíferas, ¿es una contienda de obra? .... ¿Sí ó no? Evidentemente sí; pues entonces es una riña.

Hecho: aparecen cuatro individuos que presenciaron las preparaciones de la riña, proporcionaron las armas y arreglaron las condiciones del encuentro.

El juez de la gente decente ve la prueba de que hubo duelo en la existencia de padrinos: El juez de los descamisados: Artículo 5o del Código Penal: "Son responsables como cómplices: Los que ayudan á los autores de un delito en los preparativos de éste, proporcionándoles los instrumentos, armas ú otros medios adecuados para cometerlo, ó dándole instrucciones para este fin, ó facilitando de cualquier otro modo la preparación ó la ejecución, si saben el uso que va hacerse de los unos y de los otros."

Hecho: se presenta el acta del encuentro en que los padrinos han fijado las condiciones del combate.

El juez de la gente decente: segunda prueba de que hubo duelo; precisamente esto caracteriza el duelo y lo diferencía de la riña, el que haya un convenio previo que arregle las condiciones de un combate, según las reglas usuales en el caso. El juez de los descamisados: ¡Qué monstruosidad, atreverse á presentar un contrato ilícito, un convenio en que se pacta un crimen, un arreglo que tiene por objeto un homicidio!

Nuestro derecho público ordena que tales convenios deben desecharse de plano, que son nulos completamente y que no pueden surtir ningun efecto legal. A lo más, y por equidad, el juez lo aceptará como una prueba, aunque inmoral, de que en la riña no hubo alevosía.

Hecho: entre el reto y el encuentro transcurren dos dias: *Cuarta prueba del duelo:* dice el juez de la gente decente: es necesario que hablen los padrinos, que discutan, que tengan conferencias, en esto no cabe duda.

El juez de los descamisados: artículo 515 del Código Penal: "Hay premeditación siempre que el reo cause intencional-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mente una lesión después de haber reflexionado ó podido reflexionar sobre el delito que va á cometer."

Hecho: los contendientes manejaban desigualmente las armas con que se batieron. Es muy natural, no puede haber dos hombres iguales: si se baten un notario y un coracero, es natural que el coracero degüelle al notario.

El juez de los descamisados: artículo 517: "Hay ventaja cuando alguno es superior por las armas, por la mayor destreza en el manejo de ellas, ó por el número de los que le acompañan."

Resultado: el duelista después de su homicidio, es generalmente absuelto de la pena de cinco años de prisión, y se le considera más honorable que nunca; mientras el hombre del pueblo que comete el mismo delito en una riña, sin alevosía, es sentenciado á doce años de prisión por homicidio en riña, calificado con premeditación y ventaja y queda infamado por toda la vida. Tal es la justicia de la democracia mexicana que se inclina ante los fueros de la levita.... ¿En qué se funda esta enormidad, Señores? Pues se funda precisamente en que el duelo es un caso de la riña, exceptuado por un dislate jurídico. Desde el momento en que la riña—como he dicho antes—está precedida por un convenio en que se pacta un homicidio, ya entonces la riña pasó á la categoría de duelo, es decir, á un delito menor, debiendo ser mayor, porque se vuelve premeditado.

Esto que contiene la jurisprudencia mexicana, no lo han querido admitir ni la jurisprudencia francesa, ni la inglesa.

El Sr. Lic. Lombardo, con su habitual pericia para discutir, nos contó lo que había hecho la Restauración en Francia; pero nos calló que desde el 22 de Diciembre de 37, la jurisprudencia francesa, hasta la fecha, cincuenta y siete años hace, es el Derecho Común y por el Derecho Común; siempre que alguno muere en duelo, los jueces franceses califican el hecho de crimen, con premeditación, ventaja y alevosía, según se presentan las circunstancias del caso, y esto en la nación duelista por excelencia. Tengo aquí un acopio de datos; pero aunque no me gusta manejar muchos papeles, me es necesario darles lectura para luchar con personalidades tan conocidas en el Foro, como el Sr. Lic. Lombardo. Dicen así:

"Jurisprudencia fijada por la Corte de Casación.—Porque no "se puede admitir que las heridas, los golpes ó el homicidio, "como el resultado de un combate singular regulado por con- "venio previo entre dos ó más individuos, sean autorizados por "la necesidad actual de la legítima defensa, puesto que en es- "te caso el peligro ha sido enteramente voluntario, la defensa "sin necesidad y que el peligro puede ser evitado sin comba- "te, "que aun cuando ninguna disposición legislativa acrimina "especialmente el duelo, propiamente dicho, y las circunstan- "cias que preparan ó acompañan este acto homicida," tampoco "hay disposición de ley que expresamente "coloque" el duelo "entre las circunstancias que hacen excusables el homicidio, "las heridas ó los golpes.—Además, existe una máxima invio- "lable de nuestro derecho público ("y lo mismo sucede en Mé- "xico") que nadie puede hacerse justicia á sí mismo; que la jus- "ticia es el primer deber de la sociedad, que toca al Rey hacerla "cumplir. Existe sobre todo una máxima no menos sagrada "de nuestro derecho público (y lo mismo sucede en México) "que todo convenio contrario á las buenas costumbres y al "orden público es nulo de pleno derecho y que lo que es nulo "no puede producir ningún efecto y mucho menos paralizar el "curso de la justicia, suspender la acción de la vindicta públi- "ca y suplir al silencio de la ley, para excusar un acto califica- "do de crimen por ella y condenado por la moral y el derecho "natural. Un convenio por el cual dos hombres pretenden "transformar con su autoridad privada un crimen calificado en "acción indiferente ó lícita, suprimiendo de antemano la pena "decretada por la ley contra el crimen, equivale á atribuirse el "derecho de disponer el uno de la vida del otro y á usurpar "los derechos de la sociedad. Por tal motivo, dichos convenios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"no pueden producir efectos legales debiendo considerarse ul-
"trajantes para el orden público y las buenas costumbres."

INGLATERRA.

"Desde el momento en que el pueblo inglés ha dictado có-
"digos estableciendo el modo de proteger la honra, la vida, ó
"la propiedad de los súbditos de las leyes inglesas, no se pue-
"de aceptar sin ultraje para la civilización y para el pueblo,
"que dos ó más particulares cometan el delito de usurpar las
"facultades del pueblo para dictar disposiciones sobre la ma-
"nera de proteger la honra individual. Mucho menos se pue-
"de admitir, sin dejar de imponer severo castigo, que alguien
"celebre convenios en que se pacte el homicidio ó las lesiones,
"ó cualquier maltrato á las personas, y sería vergonzoso para
"la Nación si admitiera la inmoralidad de otros pueblos de
"dar valor legal á convenios ó contratos en que se pacten de-
"litos; esto equivale á colocar frente á la soberanía del pueblo
"la soberanía del crimen."

Esto es lo que se ha hecho ahora en nuestro Código Penal; pero como el Código Penal Mexicano, en cuanto á los preceptos penales de la riña es enteramente igual al Código francés, quitando el privilegio, queda la ley común, queda la riña. No deben olvidar los señorcs Diputados que han impugnado la vigencia de la ley, que hay un axioma en derecho penal que dice que, cuando se deroga una ley, el caso exceptuado con la pena menor no se ejerce libre é impunemente, sino que vuelve inmediatamente á entrar en la ley de la cual se le exceptuó.

Como veis, Señores, si la ley es mala, no es por lo que han dicho los Señores que impugnan el dictamen; es porque es una ley inconstitucional, es porque hasta aquí la Constitución no quiere leyes privativas, y esta es una ley privativa, es la ley democrática que debe regir para todo el mundo; la única diferencia que nos permitirá hacer bajo el punto de vista penal á favor de la gente decente, está expresamente consignada en el Código Penal; ser instruido, ser rico, tener buena posición social y armar escándalo en la sociedad, son circunstancias agravantes y no exculpantes en nuestra legislación penal.

Yo quisiera con los Sres. Pallares, Lombardo y Mateos, acabar con esta ley privativa del duelo que es una ignominia para el partido liberal. De un delito que se castiga todos los días se hace un delito especial, un delito de privilegio, un delito de lujo para provocar el escándalo social: esa ley es bochornosa para nuestras instituciones, porque tiende á establecer una democracia, no sobre el talento que glorifica la verdad, no sobre la virtud que glorifica la conducta, no sobre la riqueza que glorifica el trabajo, no sobre el valor militar que glorifica el patriotismo; sino sobre dos ó tres litros de sangre de un hombre honrado, sobre la desesperación de una familia desamparada, y desamparada por la ley. *(Aplausos).*

El partido liberal tiene que ser muy grande en esta República, Señores, porque ha fijado sobre bases sólidas el gran principio de toda sociedad demócrática: todos iguales ante la ley. Poco después de la Independencia el partido liberal se encontró frente á tres cordilleras de impunidad puestas por los siglos entre el delito y la justicia: los fueros de los extranjeros, los fueros del ejército y los fueros de la Iglesia. A los extranjeros, no pudimos conducirlos á nuestros tribunales comunes, porque sus ministros los amparaban amenazándonos con sus escuadras; los miembros del clero se creían invulnerables ante el Derecho Común, no admitiendo más jueces que los vicarios de Cristo en este mundo; el ejército en aquel tiempo no era el órgano del deber, era el órgano de la corrupción y de la violencia, era el enemigo de la ley.

El partido liberal luchó sesenta años, y ahora, todos vosotros lo sabéis, comparecen ante nuestros tribunales comunes los extranjeros de todas nacionalidades, el clero de todos los cultos y los soldados de todos los grados. Pero para llegar á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

esta elevada cima, el partido liberal ha tenido que combatir disciplinados y formidables ejércitos; ha tenido que luchar con la madre, con la hija, con los hermanos que le han pedido la inmunidad del clero, y ha tenido que luchar contra la familia, contra las creencias nacionales, contra los sofismas, contra los patíbulos; todo ¿por qué? Por el derecho, por la justicia, por la ley.

Y á ese partido liberal se le viene á decir por un viejo demócrata, como el Sr. Mateos, "no podéis acabar con el fuero."

¿Qué pasa en la República? ¿Se quiere hacer pasar ante la opinión una democracia indigna? ¿Se quiere que reverenciemos, no las cualidades que en otros tiempos han tenido todas las aristocracias, sino los restos podridos de sus errores y de sus vicios? ¿Se quiere hacer arrodillar á la Cámara ante una preocupación que la mayor parte de las veces esconde un delito, una farsa, y que también suele encubrir un crimen?

Sobre todo, Señores, lo más grave del caso es que estas dos leyes, exactamente aplicables al mismo caso, nunca entran en conflicto por una preocupación aún más extravagante: Un caballero no puede batirse con su mozo, ni con su cochero, ni con su cocinero, porque no tienen honor.

Yo pregunto á la Camara, ¿cómo puede admitir esta preocupación que infama al pueblo que representa? Si la Cámara cree que los mexicanos, ó su mayoría, tienen honor, debe fijarse en que esta mayoría no está compuesta de gente de levita, sino de chaqueta, de sombrero ancho y de zarape; y si el duelo no debe ser delito, porque es una preocupación aristocrática, la riña tampoco debe serlo, porque es la preocupación de la mayoría de los habitantes del país. (*Aplausos*).

Las dos clases sociales, la de los caballeros y la de los villanos, tienen la misma preocupación:—no es hombre el que no acude á un Tribunal de honor para vengar el agravio recibido;—y con esa preocupación cometen el mismo delito. Yo pregunto á los Diputados exageradamente demócratas que sostienen la respetabilidad de esta preocupación:—¿nuestra ley

reconoce la división entre caballeros y villanos? para mí, para la Cámara y para todo el mundo, no debe haber más que mexicanos, y ante la justicia, ante la Constitución y ante la ley, todos somos iguales. Pues bien, Señores, yo vengo aquí á proclamar ese principio de la igualdad ante la ley. Yo os planteo este argumento: Una de dos: ó los mexicanos no tienen honor, ó si lo tienen, es preciso que todos se hagan justicia á sí mismos, puesto que nos ha dicho el Sr. Mateos que esta es una prerrogativa del honor. En este caso, comencemos por inclinarnos con respeto ante la ley; si no, consideremos benéfico el puñal que los hombres de nuestro pueblo traen á la cintura y hagamos despejar á las galerías de esta Cámara, para traer á todos los homicidas de Belem á que contesten con vociferaciones de alegría la manifestación de nuestra inmoralidad.

Yo no puedo comprender cómo en una Cámara democrática, representativa, popular, que ha protestado solemnemente defender los derechos del hombre—y el primero de todos es el derecho á la vida—haya quien proponga que en el Territorio de la República, alguien que no sea el verdugo, ni el pelotón de soldados, pueda impunemente matar. (*Aplausos nutridos*).

Nos han hecho todos los defensores un argumento viejísimo—el de la costumbre—señor, nosotros no debemos ceder á la costumbre. En primer lugar, si hubiéramos cedido á la costumbre, nunca hubiéramos pasado de caníbales; en segundo, hay en esto un error histórico.

La ley no puede ceder ahora á la costumbre porque la costumbre es más fuerte que la ley.

Tal vez el Sr. Mateos y sus estimables compañeros se han preocupado con las lecturas de la juventud; han creído que los acontecimientos de los "Tres Mosqueteros" se verificaron en la Ciudad de México; que aquí se desarrollaron las aventuras del Vizconde de Bragelone, y que Artagnan nació y vivió en la República.... (*Risas*).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Extraño que el Sr. Mateos, mi estimado compañero y amigo, que es un gran literato, un gran dramaturgo, no conozca nuestra literatura, y que nunca haya visto, por ejemplo, que en "El Periquillo,"—que es el primer libro de nuestras costumbres,—no hay un solo caso de duelo. He consultado con el Sr. Vigil, he pasado algunos días en la Biblioteca, he preguntado al Sr. Prieto, y me han dicho, que fuera de algunos duelos que hubo entre militares, no conocían sino tres, en cuarenta y cinco años.

De suerte que no hay tal costumbre, y por otra parte, nuestras leyes no admiten el precepto de que la costumbre derogue la ley. Está en el Derecho Antiguo, es cierto, pero nosotros no estamos regidos por el Derecho Antiguo, sino por la Constitución de 57, que en su art. 23, dice: "que tan luego como se establezca el sistema penitenciario, quedará abolida la pena de muerte;" ¿cómo, entonces, admitir la compatibilidad entre este gran precepto de la Carta, y la doctrina del Sr. Mateos, que quiere reconocer prerrogativas á los duelistas? ¿Cómo admitir que esta Constitución diga que tan luego como se establezca el sistema penitenciario, ni la sociedad en nombre de la justicia podrá imponer la pena de muerte, y admitirla como privilegio de la acción individual, constituyéndose como juez de su propia causa? ¿De manera que entre nosotros, ni la ley podrá matar, pero sí podrá hacerlo la locura, el vicio, el odio, la venganza ó cualquiera otra mala pasión . . . . ?

¡Cómo, Señores, aceptar esto! La Constitución quiere que se haga astillas hasta el cadalso, para que respetemos la vida de los criminales, y el Sr. Mateos quiere que hagamos pedazos nuestra conciencia para dejar desamparada la vida de los hombres honrados . . . . .

Indudablemente que los hombres científicos, cuando encuentran un error en la Constitución, vienen á señalarlo; pero los grandes demócratas que se han prosternado ante la Constitución, olvidan frecuentemente sus grandes principios, los que merecen ser eternos.

Se ha dicho, y esto lo resume todo, que el duelo es caballeresco. Esta es una patraña: el duelo no es caballeresco; el duelo antiguo sí lo era, y voy á decir por qué. Porque reconocía la igualdad en los combatientes, mientras en los tiempos modernos queremos hacer leal un duelo, reconociendo la igualdad en las armas, como si las armas fueran las que se batieran y no los hombres

"En el año 501 el Rey Gundebaldo dió la inolvidable ley "Gumbetta, estableciendo el duelo judicial ó sea el juicio de "Dios. "Si los querellantes desiguales son, para descubrir el "perjurio seguiréis la prueba del fuego ruciente; pero si igua- "les fueren en valor, en arrojo, en pujanza y en destreza, po- "nedles en liza y sin ventaja posible en lo humano, Dios Nues- "tro Señor designará su víctima."

"En el cartel del último duelo judicial, La Chataignerage, "dice Chabot: os envío la patente de la liza que place al Rey "otorgarme, dentro de la cual quieroos probar con armas ofen- "sivas, sin traición, sin perfidia y sin ventaja, que habéis dicho "que os habéis acostado con vuestra madrastra y la habéis ca- "balgado." "Y cuando el heraldo da la señal del combate, di- "ce: "*iguales en el campo;* herid, Dios dirá."

Llamo la atención de la Cámara sobre que el juicio de Dios se abre con el principio de la igualdad en los combatientes y lo mismo se cierra.

Después, cuando el duelo de judicial pasó á ser completamente caballeresco, los caballeros del siglo XVIII ya no decían que Dios escogiera, sino que la casualidad designara su víctima; pero, en los tiempos modernos, son los mozos de la escuela de tiro los que hacen el papel de Dios y de la casualidad. Ellos pueden predecir con mayor acierto que cualquier augur, quién será el vencedor.

A la sociedad antigua se le llama bárbara por el establecimiento del duelo: el duelo era un privilegio de la nobleza, los nobles tenían dos únicas profesiones, la Iglesia ó el Estado; el noble que no se dedicaba á la Iglesia se dedicaba á las ar-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mas: de manera que el duelo se exigía á los nobles, á los militares; el ataque, el combate en aquel tiempo era cuerpo á cuerpo y con arma blanca; así es que ser buen militar era ser buen duelista, de profesión. De modo que esa sociedad que se llama bárbara, ha exigido el duelo á los duelistas de profesión; pero nuestra sociedad moderna lo exige muchas veces á una multitud desarmada que puede ser hecha pedazos por diez ó doce espadachines, que si algunas veces son moderados, otras están imbuídos por el alcohol de las tabernas.... *(Aplausos).*

Recordad, Señores, que la sociedad llamada bárbara sancionaba la destrucción, entre sus miembros puramente militares, corrompidos y degenerados por el uso constante de muchos vicios, mientras que no se comprende qué pueda querer la sociedad moderna buscando el choque, la destrucción, entre sus elementos buenos y malos; la sociedad llamada bárbara era consecuente con sus ideales, con su fin y con sus creencias; no teniendo delante de sí más que el espectáculo de la fuerza, creía en ella; no sintiéndose sacudida más que por la violencia, veneraba el valor; no pudiendo investigar las leyes sociales, adoraba la casualidad; no dudando un momento de su religión, creía que, en efecto, la vida humana era despreciable; no encontrando en ninguna parte la justicia, se inclinaba ante los preceptos despóticos.

Pero, ¿qué es lo que quiere la sociedad moderna?

Orgullosa con poseer la razón, pretende exigirle el duelo al hombre de trabajo, al hombre de estudio, al que cree en el derecho y no en la fuerza, al padre de familia, al sabio que desampara la ciencia, al que ha nacido para crear y no para destruir, al hombre virtuoso que deja huérfana á la humanidad. *(Aplausos nutridos).*

El duelo antiguo en esa sociedad bárbara, tenía gentes que no se batían por una mirada, no había que contar allí con la alevosía, sin tomar al enemigo desarmado en el campo; mientras en el mundo moderno hay lo que se llama maquinaciones

cautelosas, exactamente las maquinaciones cautelosas de que hablaba Felipe V, que consisten en tomar á un hombre desprevenido para llevarlo al campo del honor, en tomar á un hombre, distraerlo de sus deberes, arrancarlo de allí y matarlo.

Si la sociedad romana, como decía el Sr. Mateos, se divertía mirando luchar á los gladiadores con los leones; si la sociedad bárbara de la edad media se divertía viendo luchar á los diestros en el manejo de las armas, la sociedad moderna se recrea, no con el combate entre los hombres de armas, sino muchas veces con el sacrificio moral de un hombre de honor que se inmola en aras de la venganza.

La sociedad bárbara se deleitaba con el duelo, era la época de los torneos; la sociedad moderna, la civilizada, se deleita con el crimen; es la época de los cinismos.

Pero afortunadamente, Señores, esta sociedad no existe más que en los sofismas expuestos en esta Cámara. Yo me creo representante de una sociedad mejor y por eso me he levantado á defenderla.

¿Qué quiere decir ser partidario del duelo?.... El duelo puede ser una conciliación honrosa, una farsa grotesca, un combate leal en donde se reproduzca la ferocidad de los tiempos antiguos, ó un asesinato proditorio, con premeditación y ventaja.

Ya veis cómo el duelo tiene muchas fases, tiene chistes de payaso, páginas quijotescas, poesía romántica, olores felinos como los del tigre y el brillo siniestro de las armas que se utilizan en los patíbulos. ¿En qué se conoce un duelo leal? ¿Simplemente en el acta de combate? Señores, yo me detengo en este punto, porque mi deber no es el de venir á juzgar del caso concreto. Y así como no tenemos el derecho de entrar al caso concreto para condenarlo, no lo tiene el Sr. Mateos de entrar al caso concreto para absolverlo.

Los impugnadores del dictamen saben perfectamente cómo caen los hombres muertos en duelo en el territorio francés; pero no sabe cómo se levantan los cadáveres: no hay nación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

civilizada que dé á cinco particulares el derecho de sancionar jurídicamente las tres palabras frías, sonoras, contundentes: "matado en regla."

En Francia, siempre que hay un hombre muerto con arma mortífera, lo entierra la justicia, jamás un cuerpo legislativo.

Siento, pues, que el Sr. Mateos haya estado inspirado para hablarnos como hace cuarenta años, en que esta cuestión se hubiera podido tratar sólo en verso; los grandes principios sociológicos eran entonces dictados por D. José Zorrilla en "Don Juan Tenorio," ó por D. Antonio García Gutiérrez en su "Trovador." Todos eran perseguidores de lo bello, ninguno del deber; lo más bello que había entonces era odiar á la policía, despreciar los tribunales y considerar sublimes á todos los delincuentes de capa y espada, desde los ladrones de Schiller hasta los plagiarios de Monte Cristo.

Pero afortunadamente nuestro adelanto ha sido inmenso; hoy con algunos golpes de contundente lógica, podemos echar abajo el monumento levantado por las utopías humanas.

Yo no vengo á ilustrar la opinión, interpretada hasta por la poderosa voz de la prensa de la República, que ha hecho esta vez una gran manifestación moral al pedir el castigo de los culpables.

Sr. Mateos, á nosotros no nos importa que los delitos sean correctos ó no, nos importa cumplir con la ley. Yo he ido más allá de mi deber, he discutido tanto con el Sr. Mateos como con los ilustres huéspedes que nos han visitado, los Sres. Pallares y Lombardo, y no debía de haber salido de esta proposición: *Cuáles son los elementos constitutivos del delito;* y esto de que se le diga á la Cámara: no obstante que hay delito, absuelve porque puedes hacerlo, es tanto como decirle á una mujer honrada: vete al lupanar porque puedes hacerlo *(aplausos);* es como decirle á un padre: deja en la miseria á tus hijos porque puedes hacerlo; es como decirle á un hombre: mata, porque al fin y al cabo no tienes tribunal que te juzgue.

Nosotros somos irresponsables, es cierto; pero toda irresponsabilidad constituye un despotismo, y para hacer un acto despótico, necesitamos ser muy abyectos. No sé cómo se cree que nosotros podemos tener la irresponsabilidad del loco que estrangula á un niño ó del autócrata que mata á un inocente. No; la irresponsabilidad de la Cámara no es esa; la Constitución ha querido que la elección sea indirecta en segundo grado para que el pueblo pueda llevar á la Cámara á todo lo que él crea que tiene de más honrado, de más ilustrado y de más patriota; la Cámara está aquí para formar una conciencia nacional superior que haga respetable al país en el extranjero, y dentro de la Nación á la ley.

Es menester entender que el fuero no es privilegio de los Diputados, porque en una República democrática, representativa, no puede haber privilegiados; el fuero es el privilegio de la Cámara para conservarse y para llenar sus funciones constitucionales; el fuero emana del principio de conservación del orden democrático, y no de un principio de corrupción; el fuero no es un privilegio contra la ley, sino contra los fraudes á la ley; el fuero no es un privilegio contra la justicia, sino contra el atentado, contra la injusticia; y esta vez que el Derecho Común, en nombre de la sociedad, llama á nuestras puertas con la ley en la mano, no podemos decirle: "no há lugar para tus fallos;" porque entonces la opinión pública, que está fija en nosotros, contestaría: "no há lugar en mi conciencia para creerte honrado."

Señores Diputados, entregad á los acusados á la justicia del pueblo. *(Nutridos y prolongados aplausos).*

* * *

Puesto á votación el Dictamen de la Comisión del Gran Jurado, fué aprobado por ciento setenta y cuatro votos, por los de los Diputados Juan A. Mateos, Demetrio Salazar, Antonio Tovar y Manuel Leví.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DUELO VERASTEGUI-ROMERO.

INCIDENTE CIVIL.

SEÑOR JUEZ 2º DE LO CRIMINAL:

Genaro García, apoderado de la Sra. Doña Ignacia Aztegui, viuda de Verástegui, según aparece del testimonio legalizado que acompaño á este escrito y que ruego se me devuelva previa toma de razón ante vd., en el juicio que por el delito de duelo se sigue á los Sres. Francisco Romero, Manuel Barreto, Lauro Carrillo, Sóstenes Rocha, Ramón Prida, Apolinar Castillo y Casimiro Preciado, comparezco y expongo con el debido respeto y como mejor proceda, que vengo á entablar demanda judicial contra el Sr. Francisco Romero, de acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho que paso á exponer:

1º El día nueve de Agosto del presente año se entregó á la Comisaría de la sexta Demarcación el cadáver del Sr. D. José C. Verástegui, atribuyéndose su muerte á una causa accidental.

2º Pocos días después, radicada la averiguación criminal en este Juzgado, vd., con la inteligencia, ilustración y rectitud que lo distinguen, pudo descubrir que el origen de la muerte del Sr. Verástegui fué un delito en cuya ejecución concurrieron los Sres. Francisco Romero, Manuel Barreto, Lauro Carrillo, Sóstenes Rocha, Ramón Prida, Apolinar Castillo y Casimiro Preciado, asumiendo el primero la responsabilidad principal. Mas como la mayor parte de estas personas gozaban de fuero constitucional, por ser Diputados unos y Senadores otros al Congreso de la Unión, este Juzgado tuvo necesidad de dirigirse á la Cámara de Diputados, á fin de que, previos los trámites legales, declarase, erigida en Gran Jurado, si había ó no lugar á proceder contra los presuntos responsables á quienes amparaba el fuero constitucional.

3º La Cámara de Diputados, una vez que vió llenados los requisitos de ley, declaró, erigida en Gran Jurado Nacional, que había lugar á proceder contra los inculpados que acabo de indicar. Tal declaración fundóse no sólo en las luminosas diligencias judiciales que patentizaban ya de un modo irrefutable, tanto la existencia de un delito cuanto los nombres de los responsables, sino además en las confesiones detalladas de casi todos éstos rendidas ante la segunda Sección del Gran Jurado.

4º Queda así plenamente demostrado que el Sr. Francisco Romero había matado en un desafío al Sr. José C. Verástegui, y que los Sres. Casimiro Preciado, Sóstenes Rocha, Manuel Barreto, Lauro Carrillo, Ramón Prida y Apolinar Castillo, el primero como médico, el segundo como juez de campo y los demás como padrinos, concurrieron al desastroso lance.

5º Allanado por el Gran Jurado Nacional el obstáculo legal que parcial y momentáneamente había detenido la acción de la justicia, ésta pudo seguir su marcha normal.

6º Sería inútil que me detuviese á indicar los daños morales y pecuniarios que el Sr. Romero causó á la familia del Sr. Verástegui al matar á este mismo señor, porque no pueden escapar al vasto saber de este Juzgado. Diré, sin embargo, que la familia del Sr. Verástegui no contaba con más elemento principal de vida que el sueldo de cuatro mil quinientos

pesos anuales que el Sr. Verástegui ganaba en su calidad de Administrador General de la Renta del Timbre, conforme á la partida 12,031 del Presupuesto de Egresos vigente. El Sr. Romero, pues, al quitar la vida al Sr. Verástegui, quitó á la vez á la familia de éste sus medios de subsistencia.

7º Entretanto, la honorabilísima señora á quien represento, esposa legítima del Sr. José C. Verástegui, con el cual había contraido matrimonio desde el día 21 de Diciembre del año de 1870, sentía que su alma se ahogaba en el más acerbo dolor, y no obstante, perdonaba al Sr. Romero causa de su infinita desgracia, y no intentaba exigirle reparación alguna; mas el Sr. Romero, no comprendiendo quizá tanta virtud, quiso, después de haber matado al Sr. Verástegui, matar hasta el nombre de éste; fué entonces cuando la Sra. Verástegui, irresistiblemente movida por su amor acendrado de esposa, y más aún por el nombre inmaculado que llevan sus hijos, del cual ella se considera el más obligado guardián, quiso estar representada en el juicio criminal á que ya he hecho referencia, para poder así, ante todo, defender la memoria de su esposo. A tal fin me confirió la honrosa representación que tengo dicha. Ojalá que todas las personas dañadas ó perjudicadas por un delito siguieran el ejemplo noble de la Sra. Verástegui, asociándose á la justicia para pedir estricta cuenta á los responsables. Esto formaría un poderoso valladar contra la criminalidad, que día á día invade con intensidad creciente nuestras diversas clases sociales.

8º En ejercicio, pues, de aquel cometido me presento ante este Juzgado.

Indicaré cuáles son los fundamentos de derecho en que me apoyo:

1º No teniendo á mi disposición en el momento la constancia legal de matrimonio de la Sra. Verástegui, manifiesto, para cumplir con la prescripción del artículo 924 del Código de Procedimientos Civiles, que dicha constancia corre agregada á los autos de la Sección primera del Intestado del Sr. José Verástegui, radicado en el Juzgado tercero de lo civil de esta ciudad.

2º El artículo 362 del Código de Procedimientos Penales faculta á la parte ofendida para que ejercite la acción civil al mismo tiempo y ante el mismo tribunal que conoce de la pena, y esto por sí misma ó por quien legítimamente la represente, según lo previene la parte última del artículo 3º del Código citado. De aquí que pueda yo dirigirme á este honorable Juzgado.

3º Regla necesaria de la conducta humana es que cada quien responda de sus propios hechos é igualmente de los resultados de éstos. Así, el que ocasiona males á otro está imperiosamente obligado á la reparación. Herbert Spencer, en quien legítimamente se puede personificar el adelanto filosófico de nuestros días, pone la reparación y la restitución á la cabeza de los principios que debe contener un Código penal equitativo. Enrico Ferri, profundo sociologista, considera la reparación del daño como un principio fundamental del sistema positivo de defensa social contra el crimen. Garofalo, reputado criminalista, se expresa así al hablar de esta materia: "Lo esencial es que se repare el delito, y á fin de obligar á los delincuentes á que lo hagan, es preciso ser despiadado. Por lo que respecta á los insolventes, hay que obligarlos á que paguen, de la ganancia de cada día de trabajo, la parte que exceda de lo puro necesario, calculando, sin tener en cuenta la diferencia de condiciones, lo que es indispensable á un hombre para alimentarse." Por último, nuestro eminente D. Antonio Martínez de Castro, decía con toda sabiduría: "El que causa á otro daños y perjuicios ó le usurpa alguna cosa, está obligado á reparar aquellos y á restituir ésta, que es en lo que consiste la responsabilidad civil. Hacer que esa obligación se cumpla, no sólo es de estricta justicia sino de conveniencia pública, pues contribuye á la represión de los delitos; ya porque así su propio interés estimulará eficazmente á los ofendidos á denunciar los delitos y á contribuir á la persecu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ción de los delincuentes, y ya porque, como observa Bentham, el mal no reparado es un verdadero triunfo para el que lo causó." Nadie ignora que tales ideas están encarnadas en nuestra legislación desde el año de 1871.

4º El artículo 327 del Código Penal prescribe que siempre que se pruebe que una persona causó sin derecho, por sí misma ó por medio de otro, daños ó perjuicios al demandante, incurrirá en responsabilidad civil, sea que se le absuelva de toda responsabilidad criminal, sea que se le condene. Y hay que notar que esta regla legal comprende expresamente á las personas que perpetran el delito de duelo, exceptuando tan sólo á los médicos y cirujanos. Por tanto, si el Sr. Romero al dar la muerte al Sr. Verástegui quitó á la familia de éste sus medios de subsistencia, sin derecho alguno, puesto que al ser homicida quebrantó abiertamente la ley penal, es inconcuso que está obligado á reparar, ya que no los daños morales que ha ocasionado á dicha familia, porque éstos no toleran compensación alguna, al menos los daños pecuniarios que le causó. Contra él, pues, puedo dirigir en derecho esta demanda. Para mayor abundamiento de razón, citaré aquí el artículo 350 del Código Penal que permite al demandante de una responsabilidad civil, cuando sean varios los responsables, exigirla de quien más le convenga.

5º El Código de Procedimientos Penales, en su artículo 3º ya indicado, determina que la acción civil tendrá dos objetos que expresa el Código Penal; y este prescribe primeramente, en su artículo 301, que la responsabilidad civil proveniente de un hecho ú omisión contrarios á una ley penal, consiste en la obligación que el responsable tiene de hacer: I. La restitución. II. La reparación. III. La indemnización. IV. El pago de gastos judiciales; y después, en su artículo 318, como consecuencia del anterior, que: "La responsabilidad civil que nace de un homicidio ejecutado sin derecho, comprende el pago de los gastos indispensables para dar sepultura al cadáver, el de las expensas y gastos necesarios hechos en la curación del

difunto, de los daños que el homicida cause en los bienes de aquel, y de los alimentos, no sólo de la viuda, descendientes y ascendientes del finado á quienes éste los estaba ministrando con obligación legal de hacerlo, sino también de los descendientes póstumos que deje." De todo lo cual se deduce que el Sr. Romero, en el presente caso, está obligado á pagar el importe de los gastos hechos en los funerales del Sr. Verástegui, el de los alimentos de la familia de este señor y el de los gastos judiciales que se eroguen para hacer efectiva tal obligación.

6º Los gastos de los funerales, pagados por la Secretaría de Hacienda, porque la Sra. Verástegui no pudo cubrirlos, importaron la cantidad de *cuatrocientos sesenta pesos*, según consta de la factura respectiva cuyo duplicado acompaño. Es de notoria justicia que dicha cantidad reingrese al Tesoro Federal; así lo quiere la Sra. Verástegui vivamente.

7º Los alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 320 y 309 del Código Penal, 211 del Código Civil y demás razones y fundamentos que he alegado anteriormente, no pueden importar menos de *cuatro mil quinientos pesos* anuales. Esta cantidad tendrá que suministrarla anualmente el Sr. Romero á la familia del Sr. Verástegui durante el término de diez y ocho años setenta y nueve centésimos de año, porque así lo manda el Código Penal en su artículo 319, en vista de la edad de 48 años que el Sr. Verástegui tenía al morir.

8º Sabe perfectamente bien este Juzgado, que según lo dispone el artículo 364 del Código de Procedimientos Penales, el juicio á que dé lugar mi demanda deberá sustanciarse como juicio sumario, rigiéndose por los artículos 949 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles.

Por todo lo expuesto, y con la representación que he acreditado, demando ante este Juzgado al Sr. D. Francisco Romero el cumplimiento de la responsabilidad civil en que ha incurrido á causa de la muerte que consumara en la persona del Sr. Verástegui, y por lo mismo, pido que se le exija: I. Que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pague los gastos de los funerales de dicho Sr. Verástegui: II. Que constituya pensión á la familia de este repetido señor en los términos que he indicado; y III. Que satisfaga los gastos judiciales que origine este incidente.

Ruego á vd., pues, señor Juez, de una manera tan respetuosa como encarecida, que con fundamento de las razones y artículos de ley citados, se sirva: Primero. Acordar que para debido efecto de los artículos 67, 238, 305 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales, se me tenga como parte civil en el juicio que por el delito de duelo se sigue á los Sres. Francisco Romero, Manuel Barreto, Lauro Carrillo, Sóstenes Rocha, Ramón Prida, Apolinar Castillo y Casimiro Preciado. Segundo. Ordenar, de conformidad con lo prevenido en el artículo 951 del Código de Procedimientos Civiles, que se corra traslado á la parte demandada por el término de tres días, para lo cual acompaño las copias que señala el artículo 45, fracción 3ª del mismo Código. Tercero. Condenar en definitiva al Sr. Francisco Romero al pago de la suerte principal y gastos del presente juicio.

Es justicia que con lo necesario protesto.

México, Octubre 17 de 1894.—*Genaro García.*

Contestación del Coronel Romero á la demanda de la Sra. viuda de Verástegui.

Señor Juez 2º de Instrucción en lo Criminal.—Francisco Romero, evacuando el traslado que por vd. se me mandó correr, de la demanda civil que en mi contra entabla la Sra. viuda de Verástegui, con las protestas oportunas respetuosamente digo: que me he impuesto detenidamente del escrito de la parte contraria, y protestando desde luego contra toda expresión ó frase que injustamente se me atribuya por la Sra. viuda de Verástegui, en perjuicio de la memoria de un muerto cuya

pérdida siempre lamentaré, entro en materia proponiendo un artículo de previo y especial pronunciamiento, sobre la personalidad de la parte contraria; y apoyándome para sostener aquel artículo, en el texto del artículo 952 del Código de Procedimientos civiles, y al de su referente el 364 del Código de Procedimientos Penales.

Establecida esta base, la Sra. Doña Ignacia Aztegui no puede venir al juicio que me promueve con el carácter de viuda del Sr. Verástegui, porque se lo prohiben las leyes que en seguida paso á citar.

El artículo 309 del Código Penal, al hablar de responsabilidad civil, señala como legislación propia para decidir las gestiones que surgen en los procesos criminales, las prevenciones contenidas en el libro segundo de aquel cuerpo de leyes; y como legislación supletoria, aquella otra que se contiene y expresa en las leyes contenidas en los Códigos Civil y de Comercio, vigentes en el Distrito Federal.

Sentados estos precedentes, yo pregunto á la parte que me demanda: ¿cuando muere un padre de familia sin hacer testamento, su viuda tiene facultad para ejercitar las acciones que corresponden al difunto, ó este derecho pertenece al albacea que nombra la autoridad judicial, que conoce y resuelve el juicio universal de sucesión?

Sin temor de equivocarme, acepto el segundo extremo del dilema propuesto en el párrafo anterior; pues el artículo 3.730, fracción 8ª del Código Civil, da el derecho de representación al albacea del difunto, para el ejercicio de sus acciones; y de ninguna manera á su viuda por honorable que sea, como lo es para mí, la Sra. Doña Ignacia Aztegui de Verástegui.

Por otra parte, Señor, si los preceptos que acabo de citar, y que hablan de juicios universales, resuelven el artículo que propongo en términos favorables á mis intereses, decisiones más expresas contiene el cuerpo de leyes civiles, para rechazar esta demanda si se quiere á ella aplicar el artículo 118 del Código Penal.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El artículo 46 del Código Civil, dispone que el estado civil de una persona, sólo se comprueba con el certificado del registro del ramo, y mandándose como se manda en el artículo 45 del Código de Procedimientos Civiles, que con el primer escrito se acompañe el documento con el que una parte justifica su personalidad, es evidente que la demanda que contesto, carece de aquel requisito, faltando, como en ella faltan, las actas de matrimonio y de defunción, únicos medios que la Sra .Aztegui tiene para comprobar su estado sucesivo de mujer legítima y viuda del Sr. D. José Verástegui.

El Sr. D. Genaro García, en su empeño de querer acopiar datos que perjudiquen mi responsabilidad en el duelo de Verástegui, hace una interpretación forzada del artículo 924 del Código de Procedimientos Civiles, designando los autos del intestado de Verástegui, como el lugar y el archivo en donde se encuentra el documento que falta á su demanda, queriendo suplir por medio de esta indicación, los defectos que la demanda contiene.

Yo en manera alguna acepto esta interpretación de la ley, pues diciéndose en la parte final del precepto invocado de contrario, "se entiende que el actor tiene á su disposición los documentos siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales;" llámame mucho la atención, que al caso presente se le quiera aplicar la parte de la ley que se refiere á imposibilidad material, para alcanzar los instrumentos propios para fundar una demanda, cuando el Juzgado 3º de lo Civil se encuentra en esta capital, y el mandatario de la parte contraria, con toda facilidad habría adquirido el documento que hoy extraña, si con menos precipitación que la que ha mostrado para demandarme, hubiese preparado su reclamación, y la hubiera acompañado con los instrumentos que la ley requiere para juzgar lo perfecto y procedente.

Estas razones y prevenciones contenidas en los artículos 925 y 926 del Código de Procedimientos Civiles, me obligan á formar un artículo de previo y especial pronunciamiento, sobre

la personalidad de la Sra. Doña Ignacia Aztegui, pidiendo á vd. que al resolverlo, se sirva adoptar en su sentencia estas tres proposiciones:

1ª Que la Sra. Doña Ignacia Aztegui, no tiene personalidad para sostener esta demanda.

2ª Que tampoco la tiene para concurrir al juicio criminal ejercitando los derechos que le acuerda á la parte legítima el art. 361 del Código de Procedimientos Penales; y

3ª Que las costas de este artículo deben ser al cargo de la Sra. Doña Ignacia Aztegui.

Al Juzgado ruego se sirva proveer de conformidad, por ser ello de justicia que con lo necesario protesto.

México, Octubre 19 de 1894.—*Francisco Romero.*—*Lic. Manuel Lombardo.*

UANL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CUESTIONES CONSTITUCIONALES.

Recurso de amparo.—No procede de oficio. No puede el juez conceder el amparo de la justicia federal por hechos que no han sido alegados por el quejoso en su demanda.—*Acción constitucional.* Prescripción de esta acción.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> Si se renovasen siempre los procesos, se perpetuarían los litigios y el mundo no sería más que un inmenso proceso... ¿Quién garantiza que la decisión de un nuevo juez sería la expresión de la verdad, cuando es obra de hombres falibles.
>
> COLMET DE SANTERRE, t. 5, p. 624.

Angela Navarrete de Fuentes, en el juicio de amparo promovido por los Síndicos del concurso del Sr. Parrés y Comp., contra la sentencia de casación que declaró firme la ejecutoria pronunciada por la 3ª Sala del Tribunal Superior del Distrito en la tercería de dominio seguida por mí contra el referido concurso, ante la Suprema Corte, respetuosamente expongo: que siendo improcedente el recurso de amparo por las razones perentorias que voy á exponer, la Corte Suprema se servirá revocar la sentencia del Juez 2º de Distrito que cometió la aberración de amparar á los quejosos contra actos diversos de los que fueron presentados como objeto del recurso.

HECHOS:

En la quiebra de la casa "Parrés y Comp.," de la cual era socio mi esposo el Sr. D. Juan Fuentes y Solís, se procedió al aseguramiento de bienes, con tal encarnizamiento, que no solamente se posesionaron los acreedores de los bienes que formaban la Sociedad comercial, sino también de los particulares de mi esposo, y no solamente de éstos, sino de los bienes de mi exclusiva propiedad que aporté al matrimonio.

Como era natural, he estado en mi perfecto derecho acudiendo al concurso en solicitud de mis bienes propios, que no pueden servir de prenda común para garantir deudas que yo no he contraído.

Instaurada la demanda de tercería, se substanció hasta resolverse por ejecutoria de 11 de Marzo del año de 1893, que era procedente mi acción, y que en consecuencia, era de levantarse el secuestro respecto de las propiedades que me pertenecían en calidad de dueño exclusivo.

Contra esa ejecutoria interpuso el concurso el medio de *casación*, y después de haber sido substanciado, terminó resolviéndose que el recurso no había sido interpuesto legalmente, y que por consiguiente, debía reputarse como firme la ejecutoria pronunciada en mi tercería.

Contra esta última declaración legal ha interpuesto el concurso, por medio de sus Síndicos, una demanda de amparo federal, fundada en que fué dictada con violación de las garantías constitucionales consignadas en los arts. 14 y 16 de la Constitución.

Substanciada esta demanda, fué resuelta por el C. Juez 2º de Distrito en términos tan favorables al peticionario, que no solamente obtiene protección constitucional contra la sentencia pronunciada por la 1ª Sala, sino también contra la que la 3ª Sala pronunció, y de la cual no se ocupaba en el escrito de queja.

Este fallo original es el que va á revisarse por la Corte Su-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

prema de Justicia, y acogiéndome á la jurisprudencia sensata que ese Tribunal Supremo ha cimentado, oyendo en el debate á los colitigantes que tienen en él un interés palpitante, vengo á pedir respetuosamente al primer Tribunal del país se sirva revocar una sentencia monstruosa que ha vulnerado los principios más elementales del recurso de amparo, protegiendo y amparando, como lo ha hecho, en nombre de la Unión, contra actos violatorios, que no han sido denunciados por el quejoso y que no forman parte del debate constitucional.

La revocación que imploro es tan apremiante y concluyente, que muy pocos esfuerzos voy á emprender para demostrarla con toda plenitud.

I

Lo fenomenal de la sentencia protectora pronunciada por el C. Juez 2º de Distrito de la Capital, está en haber amparado contra un *acto* de autoridad que no había sido denunciado como violatorio, es decir, en haber amparado contra una ejecutoria que no ha sido objeto de la demanda de amparo de garantías!

Los Síndicos de la quiebra "Parrés y Comp.," han solicitado la protección de la justicia federal, *sólo* contra la sentencia de casación que declaró firme y subsistente la ejecutoria pronunciada por la 3ª Sala del Tribunal Superior del Distrito. Nada, absolutamente nada, piden contra esta ejecutoria, y sin embargo, el Juez de Distrito ha llevado su complacencia hasta proteger á los quejosos contra los efectos de esa sentencia judicial. Parece increible ese fenomenal absurdo, pero ahí está el ocurso de queja protestando contra toda incredulidad!

Para llegar hasta ese grado inconcebible, el Juez federal no ha temblado al sancionar bajo su firma, que acomete ese acto de valor civil autorizado por la facultad que le otorga el art. 42 de la ley reglamentaria.

La Corte advertirá desde luego de qué facultad se trata: de la de suplir el error ó la ignorancia de la parte agraviada, concediendo el amparo por violaciones no expresadas en el ocurso de queja, pero que resultan comprobadas en el curso del juicio. El Sr. Juez 2º de Distrito ha dado á ese precepto una inteligencia que no tiene y unos alcances que no cruzaron por el criterio de los autores de la ley.

La Corte ha sancionado que esa facultad se ejerce *respecto del acto denunciado como violatorio*, no respecto de cualquier otro que no esté comprendido en el ocurso del peticionario. Esa y no otra es la inteligencia que ha tenido siempre ese precepto constitucional.

Si un hombre es expropiado sin las solemnidades del art. 27 y pide la protección constitucional por violación del art. 14, el Juez federal puede corregir ese error negando el amparo por violación del art. 14 y concediéndolo por el art. 27. Si otro hombre es víctima de un despojo posesorio absolutamente arbitrario, de una autoridad municipal que calificó de nulos los títulos que protegían esa propiedad individual, y solamente pide amparo por violación del art. 16, el Juez federal puede concedérselo también por la infracción del precepto que garantiza el equilibrio de los poderes públicos y que conjura cualquiera invasión que un poder cometiere en la órbita de otro.

Todo eso sí es concebible y está consagrado por el art. 42 de la ley reglamentaria; pero crear recursos de amparo, forjar hechos violatorios, hacer, en fin, demandas de amparo, eso está vedado hacerse, y el funcionario que tal aberración cometa, conmovería nuestra institución, violando más de un precepto de nuestra ley reglamentaria.

No hay juicio de amparo sin *demanda*, es decir, sin la especificación del hecho que se denuncia como atentatorio. El juicio de amparo no lleva su especialidad hasta el grado inverosímil de fundar un debate sin cuestionario, una controversia sin *hechos* que generen una contradicción y anuncien un sistema probatorio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"El individuo que solicite amparo apoyándose en la fracción I del art. 1º de la ley, explicará pormenorizadamente el *hecho que la motiva*," dice el art. 7º de la ley reglamentaria. Ese artículo disipa todas las dudas. No hay amparo posible sin *hecho* que lo motive, y ese *hecho* debe revelarlo el individuo que solicite amparo, *no la autoridad federal.*

Es tan imperioso, tan sacramental en estos juicios constitucionales que el demandante designe el *acto* de la autoridad que ha violado la ley suprema, que ni aun tratándose de la suspensión provisional en casos urgentísimos, el peticionario está libertado de satisfacer esa exigencia. "En casos que no admitan demora, puede pedirse la suspensión aun por telégrafo.... refiriendo substancialmente el *hecho*, sin perjuicio de especificarlo después en demanda formal." (Art. 8º de la ley).

La claridad de esos principios se presenta con todos sus fulgores. En un juicio de amparo hay *partes* que controvierten: el quejoso y el promotor.

Hay, además, una autoridad, la que se acusa de violadora, que tiene derecho de rendir pruebas y alegar, y que por consiguiente, lo tiene también para imponerse de los hechos denunciados y de los fundamentos aducidos, para sincerarse, para justificar sus procedimientos y para presentar las pruebas que reclame la promoción formulada por el quejoso. Si todo eso es cierto, como de verdad lo es, no puede concebirse el ejercicio de ese derecho sin el establecimiento previo de una demanda protectora, que precise las cuestiones que van á ventilarse y que anuncie el cuestionario que debe resolverse en formal sentencia.

Pero á pesar de los fulgores de esos principios elementales en materia de amparo, el C. Juez de Distrito no ha sentido temblar su mano al dictar una sentencia en que no va á suplir el error de la parte agraviada, sino á sustituirse en el quejoso, prohijando nuevos hechos, forjando una nueva demanda é inventando otra promoción.

Se pide un amparo contra una sentencia de casación, y se

otorga contra la ejecutoria que había dado nacimiento á ese recurso. ¿Hay cordura en semejante procedimiento?

Se pide amparo contra la 1ª Sala del Tribunal, y se otorga contra la 3ª ¿Es esto sostenible?

El quejoso enmudece y se relega al silencio más absoluto en presencia de una ejecutoria dictada por un tribunal común, y el Juez de Distrito conmueve ese silencio haciendo surgir esa sentencia de enmedio del debate en los momentos de dictar su fallo, es decir, en los instantes en que ni el quejoso, ni el Promotor, ni la autoridad responsable, están en aptitud de hacerse oír y defenderse. ¿Tiene eso precedente?

Pero lo estamos mirando: ha habido un Juez que da á un promovente más de lo que pide, que ha ocupado su puesto, y que so pretexto de corregir un error, ha procreado una demanda protectora que no había cruzado por la imaginación del quejoso.

La Corte debe reprimir esa libertad jurisdiccional, porque ella no es tolerable en el seno de nuestra ley reglamentaria, y no lo es, porque el mecanismo de esa ley está basado en que no puede la justicia federal proceder de oficio, abriendo procedimientos sin petición de parte. "Todos los juicios de amparo se seguirán á petición de la parte agraviada," dice el artículo 2º de esa ley orgánica.

Si, pues, el quejoso no pidió amparo contra la sentencia dictada por la 3ª Sala del Tribunal, si el juicio que provocara fué destinado á implorar la protección constitucional contra la sentencia dictada por la 1ª, y en fin, si su demanda es contra esta última determinación y no contra la ejecutoria, entonces, al otorgársele amparo constitucional contra un fallo que no se denunciaba como violatorio, se ha abierto de hecho un juicio de amparo sin petición de parte y se ha infringido el artículo 2º de la ley.

Hay otra observación que condena los procedimientos del C. Juez de Distrito. Invocar un hecho violatorio que no está incorporado en el escrito de promoción, é implorarlo en los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

momentos de resolver el juicio, es sancionar el absurdo de que es lícito fallar una cuestión constitucional sin audiencia de partes.

Acabamos de ver que la autoridad que se designa como violadora, tiene el derecho de rendir pruebas y alegar, para sincerarse en presencia de la ley suprema. Que ese mismo derecho tiene el Promotor. Si, pues, esos derechos son incontrovertibles, cómo pueden ejercerse ante procedimientos inopinados y ante hechos que se anuncian por sorpresa, en los momentos de la resolución judicial?

Una sentencia de amparo puede terminar con una *consignación*, si el hecho violatorio engendra un delito, y no sería jurídico ni constitucional que la autoridad fuese infamada en una sentencia por la comisión de un hecho que no se había denunciado por el quejoso, que no se le había hecho saber, y en consecuencia, del cual no había podido ocuparse en el informe con justificación ni en su sistema de defensa. ¡Alarman las consecuencias que de semejante libertad podrían desprenderse!

¡Contemplemos al quejoso devorando una victoria en que su imaginación no había soñado, bendiciendo á una autoridad que le da cien veces más de lo que ha pedido! ¡Contemplemos también á los jurisconsultos que forman nuestra 3ª Sala, sorprendidos ante la inconstitucionalidad de una sentencia por ellos pronunciada, sin haber tenido la oportunidad de justificarse y defenderse!

Pero lo fenomenal de la sentencia va más allá todavía. La ley reglamentaria fija el plazo de cuarenta días para interponer el recurso de amparo contra una ejecutoria civil. Si el quejoso hubiera pensado á última hora en ampliar su escrito de queja pidiendo amparo también contra la ejecutoria de la 3ª Sala, se habría estrellado ante un obstáculo invencible, ante la *prescripción* de la acción constitucional; pero lo que el quejoso no habría conquistado con su iniciativa individual, lo alcanza sin esfuerzos mediante la iniciativa oficiosa de la autoridad. No puede concebirse uua aberración más monstruosa; al Juez federal sustituyéndose en la persona del demandante y haciendo en su nombre lo que él mismo no hubiera podido hacer, *pedir un amparo contra ejecutoria civil después de un año de haber sido dictada!!*

II

Debe, pues, concretarse el debate á la sentencia de casación, único acto de autoridad denunciado por el quejoso, relegándose la sentencia de la 3ª Sala como extraña á este amparo de garantías.

Circunscribiéndome al acto que se presenta como inconstitucional comienzo llamando la atención sobre que, firme el C. Juez de Distrito en su sistema de romper los linderos de la discusión y de internarse al examen de cuestiones que no están comprendidas en los términos del amparo interpuesto, ha fallado sobre el fondo de la cuestión civil sostenida en el fuero ordinario, en vez de constreñirse á la cuestión de procedencia ó improcedencia del recurso de casación, única cuestión y única materia de que se ocupó la 1ª Sala al dictar la resolución que ha engendrado este recurso.

En efecto: la Sala de casación no dió color en cuanto al fondo de la tercería. Cumpliendo con el deber de examinar *ante omnia* sobre si el recurso tenía los requisitos de procedencia, abordó este examen, concluyendo con que el recurrente no había interpuesto el recurso de una manera legal.

El concurso ha interpuesto el amparo contra esa resolución que, dejando vírgenes las cuestiones de fondo, no dejó traslucir su opinión acerca de ellas. El amparo no puede, en tal virtud, versar más que sobre el punto de *procedencia*, hasta investigar si, en efecto, la Sala no aplicó exactamente la ley al repeler el recurso por ese único capítulo.

Internarse como el Juez federal lo ha hecho, hasta resolver que la sentencia ejecutoria debió casarse por violación de ley

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

expresa, es tanto como cometerse una invasión á la jurisdicción ordinaria, es tanto como usurpar las facultades del Tribunal de casación, que no por haber violado como se supone las leyes relativas á la forma del recurso, se despojó de la jurisdicción que le compete para pronunciar sobre el fondo del recurso, es tanto, como resolverse en vía de amparo, una materia que no viene en grado y sobre la cual no llegó á pronunciarse una sentencia formal, y en fin, es tanto como pronunciar amparo sobre actos que no estaban comprendidos en el escrito de queja.

Es, pues, mi deber restringir el amparo al único acto de autoridad que puede ser objeto de su sentencia; á saber: á la procedencia de la casación en cuanto á la forma con que debió ser interpuesto el recurso.

La Sala de casación ha dicho que cuando las violaciones que se suponen cometidas se refieren á hechos apreciados por la Sala sentenciadora en uso de su soberanía jurisdiccional, no es procedente el recurso, porque no puede haber infracción de ley ahí en donde el criterio jurídico no tiene fronteras ni espacios que estorben sus funciones.

Para que el Sr. Juez de Distrito hubiere podido amparar contra esas afirmaciones, le habría sido indispensable citar *la ley* que las condenase; pero en lugar de citarla, y sin anunciarla siquiera, ha favorecido al quejoso en nombre de la Unión, por violación de leyes que no se citan y por aplicación inexacta de disposiciones que no se columbran en el curioso fallo que se revisa. A la soberanía de la Sala sentenciadora opone el Jucz federal la soberanía de su propio criterio. Eso es lo único que registramos en su sentencia. ¿Puede concebirse así el recurso de amparo?

La Corte ha rendido ya todo su homenaje á las máximas que me estoy permitiendo invocar. Cuando se dictó el célebre amparo en la sucesión del Sr. Landaluce, la Corte se encontraba en un caso homogéneo, en el de un amparo pedido contra una ejecutoria de casación que había declarado ilegalmente

interpuesto un recurso. La justicia federal protegió á los quejosos solamente en cuanto al punto relativo á la ilegal interposición del recurso, sin descender, sin internarse á las cuestiones de fondo que quedaron reservadas á la jurisdicción del tribunal ordinario.

Al reverse el recurso de casación, la Sala respetó, como era natural, la declaración pronunciada por la Corte, y dando por bien interpuesto el recurso, pasó al estudio de las violaciones alegadas por el recurrente, fallando lo que creyó conveniente respecto de ellos. No puede concebirse más corrección ni más acierto que el que revelaron tanto la justicia federal como la ordinaria al ocuparse de ese amparo célebre en nuestra jurisprudencia constitucional.

Yo reclamo para mí una corrección igual y una jurisprudencia uniforme. En consecuencia, si lo que no puedo suponer un solo instante, la justicia federal condenase como contraria á las garantías individuales la decisión de la 1ª Sala que calificó como mal interpuesto el recurso de casación, yo demando que se dejen vírgenes las cuestiones de fondo, que se respete la competencia de la justicia ordinaria y que no se ponga la mano sobre la substancia de la tercería hasta que en el fuero común sea definida y resuelta y siempre que se violen algunas garantías individuales.

III

Aquí debía poner término á mis observaciones, pero no quiero hacerlo sin decir algunas palabras acerca de la acción de tercería que ha motivado este recurso y sobre la certidumbre de mis derechos de propiedad hacia los inmuebles que son de mi exclusiva pertenencia.

Se trata de un amparo por violación del art. 14 de la ley constitutiva. El quejoso sostiene que el Tribunal superior violó las leyes reguladoras de la prueba al decidir que el reivindicante podía presentar después de la contestación de la de-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

manda, los documentos que consignaban su derecho de dominio y que comprobaban también haberlo adquirido con anterioridad al matrimonio celebrado con el fallido. Sostiene igualmente, que consistiendo esos títulos en copias certificadas y no en testimonios formales, no pueden estar dotados del privilegio probatorio conferido á los instrumentos públicos; y sostiene por último, que el concurso, en calidad de parte demandada, nunca reconoció, como el Tribunal da á entenderlo, la certidumbre de los hechos en que se funda la tercería, ni en el momento de la contestación, ni durante el curso del pleito.

Suponiendo que esta especie de controversia civil pueda emprenderse en la vía de un amparo constitucional, va á serme muy sencillo demostrar que la inexactitud en la aplicación de las leyes está en los Síndicos de la quiebra y no en el tribunal que sentenció.

Al posesionarse el concurso de esos inmuebles, y al incorporarlos á la masa de la quiebra, procedió en la inteligencia de que eran pertenecientes á la sociedad legal existente entre mi esposo y yo. Así lo dan á entender los Síndicos, al contestar la demanda de tercería, cuando sostienen que debiendo presumirse como gananciales todos los bienes que se encuentren en la sociedad legal, mientras no se pruebe lo contrario, debían presumirse gananciales los inmuebles que son objeto de mi reivindicación, y por consiguiente, afectos á las responsabilidades contraídas por mi esposo.

Ese modo de raciocinar y esos términos empleados en la defensa, significan que los acreedores no pusieron al debate la existencia de mi matrimonio, sino que por el contrario, era él un hecho tan indubitable, que precisamente en su existencia se fundaban para invocar la presunción *juris* que legitimaba la ocupación de mis bienes individuales.

Si eso es cierto, huelgan todas las razones que el concurso ha empleado para discutir el acta de mi matrimonio incorporada en mi sección de pruebas. Yo podría sostener con energía que esa pieza probatoria fué legal y debidamente consi-

derada por el Tribunal sentenciador, porque no basándose en ella mi promoción, no tuve obligación de presentarla precisamente al instaurar mi tercería.

La jurisprudencia ha sancionado que la obligación de presentar documentos al formularse una demanda, se limita á los que sean ó deban ser fundamentales de la acción deducida, no á toda prueba literal, porque entonces serían superfluos los preceptos de la ley adjetiva que reglamentan la forma en que debe rendirse una prueba escrita.

Pero no me empeño en esta empresa, porque mi matrimonio no era un hecho comprendido en los términos de la excepción y porque los mismos demandados lo invocaban como fundamento de su derecho.

La cuestión se concretaba, pues, como la concretó el Tribunal que pronunció la ejecutoria, á precisarse las fechas del matrimonio y la de las adquisiciones, para deducirse sin esfuerzos, si ellas formaban parte ó no de los bienes conyugales.

Plantear así la cuestión era resolverla. Mi matrimonio civil se verificó el día 30 de Octubre de 1868 y los inmuebles fueron adquiridos por mí varios años antes. Son y han sido, en consecuencia, bienes propios, y no hay razón, no hay sofisma que destruya esa consecuencia apremiante.

El matrimonio religioso que celebré en pleno orden constitucional el año de 1862, en México, no lo reconocían las leyes; es inútil por lo tanto invocarlo, y menos pretender revalidarlo, como si lo hubiera celebrado durante el régimen imperial.

La elocuencia de esos hechos es irresistible y á los Síndicos del concurso no les ha quedado más esperanza, ni han pensado en otro arbitrio que desconocer el valor legal de las copias certificadas y autorizadas que presenté atestiguando la fecha de mis adquisiciones respeetivas.

Como observará la Corte Suprema, no han tenido aquellos Síndicos el valor de lanzar contra ellas la excepción de falsedad.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Refugiados en el formulismo de la ley de procedimientos, sostienen que esos documentos debieron presentarse en el acto de interponerse la tercería, y no en el curso de la sustanciación.

Quiero suponer que fué mi obligación exhibirlos con la demanda; pero el caso es que mi promoción fué admitida y que los Síndicos no apelaron del auto de admisión ni alegaron excepciones dilatorias por defecto de forma. El Ministerio Público dijo, y dijo muy bien, que el auto de admisión de la tercería había pasado en autoridad de cosa juzgada.

Pero ni esa suposición es concebible, porque en el terreno del derecho positivo no tenía obligación de haber presentado mis títulos con mi demanda de tercería.

Yo adquirí los inmuebles antes de la promulgación del Código Civil de 1880, es decir, durante la vigencia de la legislación española que no exigía la necesidad del título escrito para la validez de las ventas y que solamente servía para facilitar la prueba de su celebración. El Código de Procedimientos civiles exige que se presenten títulos con la demanda de reivindicación en todos los casos en que el Civil exige *título escrito* para la validez de las ventas (art. 8º), y prescindiendo de que aun las leyes novísimas no exigen ese título solemne para las enajenaciones que no excedan de $500 como no excedieron las de que nos estamos ocupando, la verdad es que la legislación española no demandaba semejante solemnidad para la validez del contrato.

El concurso ha estado, en consecuencia, pisando un terreno falso exigiendo la aplicación de la ley á un caso que no puede estar regido por ella, por ser anterior á su promulgación y no poder retrotraerse.

Para la reivindicación de inmuebles adquiridos durante la legislación española, el reivindicante tiene derecho de acudir á toda clase de pruebas para comprobación de su derecho, demostrando con testigos, con documentos y hasta con presunciones el acto de la adquisición, (Ley 6ª, tí. 5º, Part. 5ª).[1] Aplicar á esas reclamaciones los preceptos de la ley nueva que restringió la prueba de la *reivindicatio* á la *literal*, al menos en los únicos casos de que el título escrito se hubiese exigido como *solemnidad interna* del acto, sería restringir la prueba del demandante, limitarle su defensa y violar en su persona más de una garantía individual.

He ahí por qué no admiten censura las sentencias pronunciadas en mi favor, ya acogiendo mi demanda sin títulos solemnes, ya admitiéndome la prueba testimonial, ya en fin, la prueba escrita bajo la forma de certificaciones de las escrituras de propiedad que originales existían en los momentos en que se aseguraron los bienes de la quiebra, porque la ley vigente al celebrarse las ventas me proporcionaba todos esos medios probatorios y porque la ley nueva no puede retrotraerse en mi perjuicio.

Además de esas consideraciones que desvanecen y disipan todo el cortejo de teorías que desarrolló el inteligente Sr. Juez de Distrito en su sentencia, mucho podría decir sobre la falta de personalidad de los Síndicos del concurso para interponer este amparo, y algo también sobre la procedencia ó improcedencia de ese recurso respecto de las *personas jurídicas*, pero voy á terminar haciendo unas reflexiones de otra índole.

El concurso no pone en duda la existencia de mis derechos de propiedad ni ha tenido, vuelvo á decir, el valor de sostener que sean falsos los hechos que han figurado en el debate! El matrimonio, las ventas verificadas y las fechas en que se han celebrado esas ventas, todo ha sido implícitamente reconocido por los Síndicos de la quiebra, ya sosteniendo que mis bienes se *reputen gananciales*, con lo que el *matrimonio* está admitido, ya defendiendo que mi matrimonio religioso debe considerarse como *revalidado*, con lo que la fecha del *civil* quedó reconocida; ya, por último, insistiendo en que los títulos debieron

1 Mascardo. – *De præsumptionibus*.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

presentarse con la demanda de tercería y no después, con lo que la existencia de ellos y su fuerza probatoria quedaron también de hecho consagradas.

Si es cierto todo eso, como no puede negarse, ¿cuál es el papel que está desempeñando el concurso "Parrés y Comp." en este asunto?

A mi juicio un papel muy maquiavélico: el de despojarme de mis propiedades, discutiendo mi derecho con ardides de forma y con verdaderas sutilezas de procedimiento, sin utilidad alguna para el concurso. Cuando esa masa de acreedores pretenda vender mis bienes, se encontrará con que los únicos títulos que existen son los que ahora discute y desconoce. Si esos títulos están en mi nombre, ¿cómo podrá venderlos? ¿Quién se atreverá á comprarlos?

La sentencia que ahora conquistase, declararía que yo no había probado mi derecho, pero no diría que los bienes fuesen de la quiebra. De suerte que el concurso no podría vender, y aparecería, como lo dijo muy bien la Sala sentenciadora, como un acreedor audaz que á sabiendas ocupaba bienes que no eran del deudor, para pagarse!! Esto da á la cuestión el tipo que merece, imprimiéndola un carácter inmoral que no puede alcanzar nunca la sanción de nuestros tribunales!

México, Septiembre de 1894.

A. Navarrete de Fuentes.

Lic. Fernando Vega.

ERRORES JUDICIALES POR CULPA DE LOS PERITOS ALIENISTAS.

Quien vaya á las Asises corre el peligro de que todos los días le atruenen los oídos con la vieja frase: "Acordáos del pobre Fornaretto." Pero quien estudia más dentro de los fastos judiciales, ve que los muy numerosos retóricos del foro no tendrían necesidad de acudir tan lejos ni de limitarse á aquella sola legendaria víctima de los errores judiciales; podrá hallar otros bien numerosos y bien claros ante sus mismos ojos.

Hablaré á este propósito de algunos ejemplos recientísimos acaecidos en Italia, Francia y España, limitándome, para no ser tachado de incompetencia, sólo á los casos en que el error proviene del celo poco inspirado de los peritos, no olvidando tampoco aquellos otros, como el de Lefroy, en que ni siquiera se quiso consultarles.

Mond.... G. de Asti, de 33 años, aldeano; su abuelo bebedor; en su línea paterna varias locas; una tía imbécil, una prima paterna loca furiosa que intentaba estrangularse, un primo en segundo grado estuvo loco, y después de salir del manicomio se ahorcó; un tío paterno borracho; su madre sujeta á cefalalgias; su padre con las orejas en asa, dado al vino, de joven sufrió dispepsia alcohólica y temblores matutinos y tuvo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

presentarse con la demanda de tercería y no después, con lo que la existencia de ellos y su fuerza probatoria quedaron también de hecho consagradas.

Si es cierto todo eso, como no puede negarse, ¿cuál es el papel que está desempeñando el concurso "Parrés y Comp." en este asunto?

A mi juicio un papel muy maquiavélico: el de despojarme de mis propiedades, discutiendo mi derecho con ardides de forma y con verdaderas sutilezas de procedimiento, sin utilidad alguna para el concurso. Cuando esa masa de acreedores pretenda vender mis bienes, se encontrará con que los únicos títulos que existen son los que ahora discute y desconoce. Si esos títulos están en mi nombre, ¿cómo podrá venderlos? ¿Quién se atreverá á comprarlos?

La sentencia que ahora conquistase, declararía que yo no había probado mi derecho, pero no diría que los bienes fuesen de la quiebra. De suerte que el concurso no podría vender, y aparecería, como lo dijo muy bien la Sala sentenciadora, como un acreedor audaz que á sabiendas ocupaba bienes que no eran del deudor, para pagarse!! Esto da á la cuestión el tipo que merece, imprimiéndola un carácter inmoral que no puede alcanzar nunca la sanción de nuestros tribunales!

México, Septiembre de 1894.

A. Navarrete de Fuentes.

Lic. Fernando Vega.

ERRORES JUDICIALES POR CULPA DE LOS PERITOS ALIENISTAS.

Quien vaya á las Asises corre el peligro de que todos los días le atruenen los oídos con la vieja frase: "Acordáos del pobre Fornaretto." Pero quien estudia más dentro de los fastos judiciales, ve que los muy numerosos retóricos del foro no tendrían necesidad de acudir tan lejos ni de limitarse á aquella sola legendaria víctima de los errores judiciales; podrá hallar otros bien numerosos y bien claros ante sus mismos ojos.

Hablaré á este propósito de algunos ejemplos recientísimos acaecidos en Italia, Francia y España, limitándome, para no ser tachado de incompetencia, sólo á los casos en que el error proviene del celo poco inspirado de los peritos, no olvidando tampoco aquellos otros, como el de Lefroy, en que ni siquiera se quiso consultarles.

Mond.... G. de Asti, de 33 años, aldeano; su abuelo bebedor; en su línea paterna varias locas; una tía imbécil, una prima paterna loca furiosa que intentaba estrangularse, un primo en segundo grado estuvo loco, y después de salir del manicomio se ahorcó; un tío paterno borracho; su madre sujeta á cefalalgias; su padre con las orejas en asa, dado al vino, de joven sufrió dispepsia alcohólica y temblores matutinos y tuvo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

diez hijos, de los que seis murieron precozmente; de los vivos tres eran bebedores. El acusado padeció desde joven dispepsias bajo pequeñas dosis de vino, sobresaltos, neuralgías en la cara, vértigos, epistasis y hemorroides; era, sin embargo, de índole dulce y honrada, hasta el punto de que siendo soldado obtuvo dos medallas y fué dedicado á la legión de los carabineros; licenciado del servicio, reemprendió su antigua profesión de agricultor, y se casó, dos años y medio antes de hecho, con Josefina Bian.... Todos los testigos estaban de acuerdo en asegurar la perfecta armonía que reinaba entre los dos cónyuges y la intachable conducta de la mujer.

En Mayo de 1881, sin embargo, perdió una pequeña cantidad en un contrato de vino, y le afectó de un modo tan extraordinario, sin razón, que le duró la tristeza hasta después de haberse desquitado de los daños.

Se agravó en Febrero de 1882, sintiéndose mal del estómago, como él dice, con un calor y una gran confusión en la cabeza, y nótese, temblor. Enfermó de nuevo el 14 de Mayo, y fué visitado por el Dr. Caracciolo, que lo halló preocupado, inquieto, taciturno, con repugnancia á la comida, y con accesos de ira, lentitud para responder, y extraña movilidad en los ojos, fenómeno que databa de un mes, según confesión de la mujer. Caracciolo le diagnosticó de loco, mandó á la mujer que volviera á verle al día siguiente, y le recetó cloral hidratado. Pero á la mañana siguiente, el 15 de Mayo, bajo el pretexto ó la alucinación de que su mujer le dijo que estaba tísico y que no tenía voluntad de trabajar, la mandó que le pidiese perdón de aquellas palabras, y no habiéndolo logrado, con una podadera la hirió en el antebrazo, en las manos, en la nuca, y en el vértice, con catorce heridas tan enérgicas que interesaron la médula; después con los gavilanes se cortó el cuello.

Recogido agonizante y repuesto, no pudo en un principio responder, limitándose únicamente á repetir de tiempo en tiempo con voz ronca: "Fué una mala hora." Otro día, en cambio, lamentábase de que la sangre se le había subido á la cabeza;

que no sabía lo que hacía; que desde algunos días antes no se sentía bien de salud; que sufría especialmente del estómago y que tenía melancolía. "No tuve jamás motivos de disgusto con mi mujer ni con nadie de la familia; pero mi estado era tal que la cosa más pequeña bastaba para alterarme."

Cuando yo le axaminé, cuatro meses después, presentaba: Peso, 65'700 kilos; estatura, 1,65 m.; circunferencia craneal, 560; circunferencia lateral, 322; circunferencia trasversal, 310; diámetro lateral, 186; diámetro trasversal, 160; capacidad craneana, 1,528, normal; índice cefálico, 86 normal en un piamontés; cuerpo delgado; piel amarillenta; cabellos encanecidos; frente deprimida por los lados con ateroma difuso en el izquierdo; ojo derecho ligeramente bajo y extenuado el orbicular derecho; movimientos vermiculares contínuos en la cara, especialmente en los labios; el buccinador derecho paralítico y también el elevador de los párpados derechos; la respiración 28, pulsaciones 108; vértice del corazón entre la cuarta y la quinta costilla; temperatura 37'30; sensibilidad dolorífica eléctrica, exagerada en el epigastrio; la lengua señaló 5 á 6 milímetros á la izquierda y 3 á 4 á la derecha, en el estesiómetro. El sabor de una solución de quinina le sentía bien en la derecha y nada en la izquierda: la fuerza muscular experimentada con el dinamómetro Mathieu señaló: en la derecha 29, en la izquierda 22. Cuando andaba, bajaba la espalda derecha; tocándole la mano con la mano y diciéndole que indicase el punto donde se le había tocado, se equivocó dos centímetros en el dorso y cuatro en la palma.

Orina escasa, pálida y ácida, 1,012.

Examen oftalmoscópico: hemorragia en la cámara anterior del ojo derecho y atrofia de la tetilla; movilidad en la pupila.

En la cárcel mudo, taciturno, inmóvil, rechaza la comida, á veces caía en verdaderos accesos de delirio agudo; se quejaba de dolores en el occipucio, en el ventrículo, en las espaldas, de vértigos y de alucinaciones.

De día y de noche veía á su mujer, con la que hablaba y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

discurría buenamente, del mismo modo *que si estuviese viva*. La veía de pie en la habitación y hablaba con ella.

Preguntándole: ¿á quién quieres más de todos? Respondió inmediatamente: "A mi mujer."—¿Y después?—"Padre" (sin decir *mi* padre).—Y después, ¿á quién quieres más?—"Madre."—Y después ¿á quién quieres más?—"Her.... her.... hermanos; al juez y al coronel poco."

—¿Tu mujer te insultaba?—"No."—¿Tenía la lengua larga? ¿No te decía nada malo?—"Me dijo solamente que yo *era* un tísico. Yo estaba enfermo, tenía frío, mucho dolor de cabeza, no dormía."

Preguntado por el nombre del juez, y cuando fué á la guerra y el precio del ganado, tardó en responder algún tiempo, que variaba de 2 á 15". Inmediatamente después de responder, se hallaba tan fatigado, que no se podía persistir en la pregunta; y cuando afirmaba una cosa, se le veía como arrepentido, tratando de destruir su propio aserto.

Preguntado si no se le pasó nunca por el pensamiento que estuviese loco, lo negó, y un poco después repuso: "Dicen que yo la había matado."

En el interrogatorio, en el tribunal, el retraso para contestar habíamos calculado que era de dos segundos á diez y seis; sin embargo, se le creyó simulador: se probó que tenía verdadera amnesia, que no recordaba haberse herido, que no comió en ocho días, que desde Enero se había vuelto taciturno y que quería á su mujer demasiado bien.

El juez atestiguó que se creía perseguido por individuos imaginarios, y odiado por los vecinos, los cuales se mofaban de él porque no tuvo acierto para impedir que aquel contrato de vino le resultase dañoso.

En suma, era una verdadera lipemania típica, debida especialmente á la herencia alcoholística y de locura, y el homicidio fué cometido en el verdadero *rapto melancólico*, como probaron sus tristezas sin causa, sus simplezas, el retraso característico de sus actos psíquicos, la alucinación, y más que todo

los signos, visibles hasta para los profanos, de una lesión del hemisferio derecho, la pared del lado derecho, que ciertamente no son simulables. A pesar de todo, fué condenado una primera vez á quince años, y otra posterior á diez; porque hubo dos peritos que declararon que no era loco y que la había matado por venganza de los insultos que le dirigió, él, que todos los testigos consideraron como dulcísimo y apasionadísimo para con su mujer.

En Francia no van mejor las cosas.

Le Maître, de quince años, apenas púber, fisonomía precozmente viril, frente baja, cejas prominentes, hijo de mujer histérica, nieto de hombre epiléptico muerto en un manicomio, robusto siempre, no tenía otra rareza que la de leer novelas, especialmente sanguinarias, y la de llorar sin causa. Tenía también á veces accesos de sonambulismo.

Desde los catorce á los quince años se dedicó á carnicero, pero cambió pronto; al segundo amo le robó 200 liras sin necesidad alguna, para darse buena vida; iba por los teatros y á los burdeles, donde (nótese también) le rechazaban porque era demasiado joven. "¿Acabado el dinero, confesó después, qué cosa me queda por hacer? Para matarme no tenía valor. Entonces me entró de pronto, como un vértigo, la idea de matar á alguien y compré un cuchillo, y lo puse abierto en una cómoda, en una casa tomada en arrendamiento á propósito y en la que me refugié. Pasaron tres ó cinco meses en leer y en fumar para ver si se me pasaba la idea, pero por el contrario, cada vez se hacía más fuerte." Se acercó á los estudiantillos y trató de llevarlos á su casa ofreciéndoles cadenillas de acero; tres, después de haber aceptado, rehusaron con espanto; un cuarto aceptó. Entrado que fué allí, le ató las manos, le desnudó, le echó en la cama, le dió dos golpes en el vientre y le cortó la cabeza. Salió inmediatamente después, se lavó y fué á casa de un tío suyo á contarlo, como si se tratara de un accidente sencillísimo; sintió sed y bebió un vaso de vino. Allí se entregó á la policía, que al principio no que-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ría creerle, y declaró que había matado al primero que se le presentó, porque así le matarían á él también. Pocos días después preguntó con insistencia si los periódicos se ocupaban de él y si habían publicado su retrato como el de Menescloud.

El juez le dijo: Habéis hablado de una fuerza irresistible, pero las circunstancias respectivas excluyen. Escogísteis un muchacho, subísteis con él, le atásteis; todo esto indica reflexión; puesto enfrente del cadáver de la víctima, no habéis manifestado emoción.

Reo.—Yo no lloro jamás; mi naturaleza me ha hecho así; es imposible conocer por mi cara lo que yo pienso.

Juez.—¿La idea de la pena que debía imponérseos, no os pasó por el pensamiento?

Reo.—Jamás.

Al perito le dijo: "Había hecho colación con el último dinero, me daba vueltas la cabeza, lo veía todo rojo, tenía vértigos, los oídos me silbaban; hasta los árboles me parecían todos rojos, no pensaba en nada; solamente sentía necesidad de matar; paseé, fumé, para que se me quitara la mala idea, pensé en los míos, pero la necesidad se hizo más fuerte, y entonces compré el cuchillo y lo puse en la cómoda." Más tarde, cediendo á las sugestiones del doctor, declaró que lo había premeditado todo, y así, Le Grand, con toda seguridad, excluyó la enajenación; como si muchos actos de los locos no fuesen premeditados largo tiempo, y como si la locura no estuviese allí plenamente demostrada por la herencia, por la edad, apenas púber, por la confesión de los vértigos, por el ningún verdadero impulso hacia el delito, y por la insensibilidad que declaró haber tenido siempre, como la impasibilidad para las emociones y la falta de temor á la pena, la entrada que se le negaba en los lupanares, que todo habla de un acceso erótico-sanguinario en un imbécil moral, nacido así. Fué condenado á veinte años, pasados los cuales, volverá peor de lo que ha ido.

Vengamos á un caso quizá peor.

Francisca Bougeram fué educada en el campo, junto á un tío suyo que nada le hallaba malo, salvo un poco de envidia. A los quince años, en la época de su menstruación, tomó un baño que le causó la supresión de la misma.

Puesta á servir aquel mismo año, comenzó á tener palidez y fatiga, que atribuía á la habitación por mal ventilada; entró al servicio de otra familia en la que había cuatro niños, donde fué sujeta á gravosas ocupaciones, y le tocó velar un enfermo.

Después de tres días consecutivos sucumbió al sueño, del cual fué con sobresalto despertada por la sensación de un pie que la oprimiese; sintiéndose además impotente para gritar y para librarse de aquel estado; y, entre tanto, la infeliz oyó una voz infernal que la mandaba destrozar á los niños. Reprodújose en la noche siguiente el mismo hecho, y entonces ella cedió; y en pocos días mató uno tras de otro metiéndoles en la boca excrementos y cuchillos provocando mortal hemorragia.

Dejado el servicio de la familia así privada de hijos, para entrar en otra donde también había niños, fué á los pocos días despedida porque se vió á uno de ellos vomitar excrementos y se temió que comunicase la enfermedad de la familia donde había estado anteriormente. Pero con motivo de un robo, fué perseguida por la policía, y al verla entrar, confesó todo su delito diciendo que era providencial su detención, porque había matado unos cincuenta niños que veía todas las noches jugando en el paraíso.

En el juicio, si bien faltaba toda intención de delinquir, se la reconoció alucinada y atacada de clorosis, y fué condenada, á pesar de ello, á veinte años de reclusión en la casa correccional de Vaunes, donde venía á ser la diversión de sus compañeras con motivo de la locura. Trasladada á Rennes, y después á Cayenne, consiguió aquí permiso para casarse con un condenado en trabajos forzados. Nada más ser madre, su primer cuidado fué el de matar á su hijuelo, y el digno cónyuge, entrando á la casa, la mató con el mismo cuchillo aún sangui-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nolento. ¡Cuántas tragedias habría, pues, evitado una sentencia más justa!

Vengamos á España.

J. Díaz de Garayo[1] nació en Eguilaz, de padres honrados; pero entregado uno al vino murió apoplético; la otra tenía neurosis graves y se embriagaba; tuvieron nueve hijos que se dedicaron, parte á la agriultura, y parte al servicio doméstico. El, Díaz, á los catorce años, empezó á trabajar como pastor, carbonero y agricultor, teniendo una conducta intachable.

En 1850 entró como jefe en una casa de una viuda, quien considerándolo honrado y activísimo, se casó con él. Duraron así hasta 1863, esto es, trece años (hasta que ella murió) en perfecto acuerdo, y él siempre honradísimo.

Tuvieron cinco hijos, de los que tres sobrevivieron; Díaz casó en segundas nupcias con una malísima mujer, tanto, que los hijos abandonaron de desesperación la casa, haciéndose vagabundos los dos menores; en 1870 murió también ésta de viruela; poco después se casó de nuevo con una tal A. L., que fué peor aún que la otra, que se embriagaba de contínuo y murió en 1876; y Garayo, un mes después, se volvió á casar con una vieja que á poco tiempo de allí vino á estar también en disputa con él.

Garayo, que hasta 1870 se condujo de un modo honradísimo, comenzó entonces una serie de delitos que quedó ignorada, precisamente por lo laborioso de su vida, hasta 1880.

En Marzo halló á una mujer de 40 años de mala vida; le ofreció como precio del coito tres reales; ella, considerándolo escaso, le hizo ofrecer uno más, y no bastándole todavía esto, se promovió una disputa; y él entonces la echó á tierra, la estranguló, la ahogó en metro y medio apenas de agua, después la desnudó, la violó, la puso echada boca abajo, la contempló algún tiempo, echándole á la espalda los vestidos; y después huyó y se dedicó tranquilamente á sus ocupaciones.

1 *El Sacamantecas*. Vitoria, 1881.

Un año después, el 12 de Marzo de 1871, halló á una pobre mujer, más vieja aún que la otra; la propuso ir juntos al campo; habiéndole dicho ella que no había comido aún, le dió un real y la citó para después. Ella fué á una taberna, comió, volvió á buscarle, promovióse disputa á consecuencia de no entenderse en el precio de la prostitución, él entonces la estranguló y la violó; después la colocó boca abajo, y se marchó á su trabajo con la tranquilidad de siempre.

En 1872, en Agosto, una robusta muchacha de 13 años pasó junto á él; sin decirle una palabra, él la cogió en los brazos, la llevó fuera del camino para que no fuese oída, y estrangulándola la violó; tirándola en seguida al fondo de un canal próximo.

El mismo mes, el día 23, halló una muchacha de mala conducta, se alejó con ella del camino, la ofreció dinero en cantidad que á ella le pareció pequeña, y entonces la estranguló como á las demás; creyéndola ya muerta se puso á contemplarla; habiendo hecho ella un movimiento, le quitó una horquilla de la cabeza y se la clavó en el pecho, la arrojó al agua y después se dirigió á la ciudad, cenó y durmió hasta el día siguiente. El público aterrorizado decía que se trataba de un *saca-mantecas*, que mataba las mujeres para hacer pomadas.

En Agosto de 1873 intentó otra estrangulación en una prostituta, que gritó y huyó.

En Junio de 1874 repitió con otra mendiga vieja y enferma, á la que de improviso echó las manos al cuello; pero ella huyó creyéndolo borracho.

Pasó después tranquilo hasta 1878. En Noviembre de este año, asaltó en su casa á una vieja molinera; intentando estrangularla, después de breves palabras; ante la defensa de ella huyó y entonces fué arrestado y condenado á dos meses, mostrándose en la prisión indiferente y reservado. Cinco meses después, en Agosto de 1879, mientras daba limosna á una pobre vieja, la hirió en la cabeza, ella huyó, y para hacerla callar, la prometió una suma. En Septiembre halló á una joven

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de 25 años, alta, robusta; anduvieron un rato juntos, y de pronto él la asaltó, apretándole el cuello, sujetándole las manos y ofreciéndole dinero si se entregaba á él; rehusándolo ella, sacó un cuchillo y la hirió en el pecho; y continuó hiriéndola después de haberla violado; después sacó, de la cesta que ella llevaba, aguardiente y dulces, que en parte comió y en parte guardó; se sentó bajo un árbol poco distante á fumar; después fué á una taberna á beber, y durmió, por último, en un rincón.

Dos días después halló una aldeana de 52 años, que llevaba una cesta á la cabeza con dos panecillos; llovía y ambos se refugiaron bajo un árbol; él la manifestó sus deseos, que ella rechazó acerbamente. Arrancó la cuerda de que colgaba la cesta, la estranguló, la desnudó y trató de gozarla, pero sin éxito. Respiraba la infeliz todavía, y él, con el mismo cuchillo, la hirió en el pecho y el vientre, y con las manos le arrancó los intestinos y un riñón que tiró cerca de la cesta. Después se lavó las manos y sacó de la cesta el pan que contenía. Durmió de nuevo por la noche bajo un puente, arrojó al agua el cuchillo y entró en su casa, solamente el tiempo necesario para mudarse de vestido, y se fué á servir lejos para el Sr. A... Una hija pequeña de éste, al verle, gritó: "¡Oh! qué cara, parece el saca-mantecas." La policía, habiendo tenido la indicación de un cartero, que le vió en coloquio con la última muerta, y recordando el asalto de la molinera, dirigió contra él sus pesquisas y le arrestó. Al principio calló, después lo confesó todo.

Era un tipo vulgar, de temperamento sanguíneo, estatura regular, frente baja y corta que en la parte alta presentaba una cicatriz profunda, ojos hundidos en las órbitas, nariz larga y gruesa en la punta; cabeza alta y estrecha por arriba, larga en la base, aplastada en el occipucio con desarrollo del parietal derecho en comparación con el izquierdo, enormes mandíbulas, fuertes las espaldas, sano y sobrio en las tres primeras cuartas partes de su vida, salvo una hidrocele y espermatorrea;

no era aficionado extraordinariamente á Venus, no habiendo jamás repetido los actos venéreos con sus víctimas. Declaró que hacía tiempo experimentaba poluciones á la vista de los cadáveres, y sentía un rumor en la cabeza, y vértigos, y echaba sangre por la nariz cuando disputaba con sus mujeres. Se probó que era habilísimo para el oficio, buen esposo y buen padre durante los trece años del matrimonio primero; después cambió de sentimientos y de carácter y perdió el afecto á los hijos y no pensó más que en reunir algunas monedas para comer y beber. En la prisión demostró clara inteligencia. No habiendo conseguido una navaja, se rasuró la barba muy bien con cerillas. Supo hacer de modo que, dividiendo la mecha de la vela, le durase ésta dos meses. Aprendió á leer en un mes. Escribió á su mujer para que le visitase, con el fin de obtener dinero. Con su hija se mostró conmovido por lo que había hecho, manifestando que la culpa no era suya, sino de aquellas mujeres que le hicieron perder la cabeza.

No mostró remordimiento ni vergüenza. Su mayor preocupación era la de comer; era muy interesado con los visitantes, á quiencs hablaba si le regalaban comida ó dinero, contando los más pequeños detalles, y si no, se callaba.

El día antes de la ejecución pidió se le llevase un gran pedazo de carne guisada y se la comió toda con extraordinario apetito, consumiendo más de una libra de pan, además de su acostumbrado y magnífico rancho. No le conmovió ver conducir á la muerte á su compañero de cárcel.

Demostraba mucha memoria, y habiendo tenido un libro sobre *El temor de Dios*, dijo que si hubiese podido aprender aquello en vez de las inútiles oraciones, no hubiera ido á la cárcel. Recordó un sepulcro antiguo descubierto cincuenta años antes.

Diez peritos y además un doctor, Ramón Apraiz, que dió una conferencia sobre esto en el Ateneo de Vitoria, quisieron probar que no era enajenado, fundándose en la perfecta lógica de sus actos, en sus antecedentes hereditarios y en el hecho

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de que no padecía satiriasis, puesto que no repetía dos veces el coito; y además, en que si hubiese sido un monomaniaco, no hubiera dejado tantos intervalos entre un acto y otro (razón esta última muy aguda), ni se hubiera detenido ante los obstáculos; acabando por declarar que "había obrado con pleno libre arbitrio, con verdadera libertad moral." (Dónde va á buscarse la libertad!)

Sólo dos alienistas, Esquerdo y Sánchez, tuvieron valor para objetar que se trataba de un imbécil que había cometido aquellos actos nefandos en estado de locura parcial; y nosotros, en el *Uomo delinquente*, y recientemente en el estudio *El amor en los locos*, Lœscher, 1881, habíamos comprobado que es frecuente en algunas formas de imbecilidad moral (que no excluyen la premeditación, ni la alevosía, ni la extraordinaria sagacidad), la necrofilomanía, la tendencia á gozar sensualmente cadáveres y agonizantes y hasta á sustituir el coito con las heridas, con el deshacerse del cadáver, que provoca, como confesó Verzeni, un verdadero placer venéreo; y por esto nos explicamos completamente el delito de Garayo por la enajenación mental, como sucedía probablemente á Menescloud y á Zastron (véase *Amores en los locos)*, demostrándolo no tanto por la herencia cuanto por la mala conformación del cráneo y por el contraste imprevisto con la vida anterior, sobria y honestísima durante cuarenta años, y por la causa bien señalada del hastío, esto es, por la muerte de la primera mujer y por la intemperancia de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Son prueba también de lo mismo los vértigos, las pérdidas de sangre por la nariz que seguían precisamente á las disputas, las anomalías genitales que producen á muchos alucinaciones y actos maniáticos instintivos de origen reflejo (recuérdense las manías masturbatoria, histérica y menstrual que señala Krafft–Ebbig), y la desproporción entre la causa del delito y el delito mismo; puesto que en sus cuatro mujeres y en su edad senil tenía ya bastante freno y desahogo á las tendencias venéreas excesivas, si acaso las hubiera tenido;

tanto más cuanto que casi siempre se trataba de prostitutas, con las cuales, aunque se le hubiera descubierto el estupro, no corría peligros graves, al menos tan graves como los del asesinato; por lo cual faltaba la correspondencia lógica entre el delito y el móvil. Añadamos á esto que se trataba muchas veces de viejas y enfermas que no podían producir, sino anormalmente, tan violentos deseos; y que mató á una cuando estos deseos estaban tan poco excitados que ni pudo satisfacerlos. Nótese, además, que hay en casi todos sus delitos un período del año constante, como en los delitos de Verzeni; dos en Marzo, cinco en Junio y Agosto y dos en Septiembre, con la excepción única del que realizó en Noviembre. Y sobre todo, hay que tener en cuenta la perfecta apatía moral que le hacía, á él, hombre honradísimo antes, tan indiferente ante delitos tan enormes, y la apatía ante la condena y el castigo, apatía ciertamente mayor de la que se observa en los delincuentes comunes. Es además de notar la voracidad extraordinaria que tenía, y que es propia de las formas de enajenación más graves. Sin embargo, fué condenado, y como hemos dicho, contribuyó á ello casi unánime el parecer de los peritos!

CÉSAR LOMBROSO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ESTUDIO SOBRE EL JUICIO DE JACTANCIA EN DERECHO PATRIO.

Propóngome, para estudiar con método el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles en su fracción I, que se refiere al juicio llamado de *jactancia*, analizarlo: I. Desde el punto de vista histórico, es decir, examinando cuál sea el origen del *juicio de jactancia*, y cómo ha llegado á verse implantado en nuestro cuerpo de derecho. II. Si se halla en armonía con los principios del Derecho Civil, que es el derecho sustantivo y primordial, como las leyes del procedimiento son adjetivas y derivadas ó secundarias. III. Si ese artículo se adapta al sistema del mismo Código de Procedimientos Civiles. IV. Si está de acuerdo con los principios constitucionales, ó, por el contrario, viola alguna de las garantías individuales. V. Si desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho y los principios de Legislación, es justo y equitativo el relacionado precepto.

CAPITULO I.

ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO DEL JUICIO DE JACTANCIA.

Para buscar los orígenes de nuestras leyes, de esas leyes cuyas prescripciones, sabias en lo general, hemos obtenido

después de múltiples evoluciones y á través de los tiempos, conquistando en los campos del indefectible progreso humano, hoy un principio y mañana otro; para investigar la primitiva forma de esos conceptos, hoy claros y terminantes, de nuestra ley; para averiguar, en suma, la raíz histórica de nuestro Derecho, sabido es que tenemos que remontarnos al Derecho Romano, fuente primitiva del Derecho Español, origen inmediato y directo de nuestra actual legislación en gran parte. Se comprende, pues, que lo que desde luego trataré de analizar en este primer Capítulo, será si la *acción de jactancia* existía en el Derecho Romano con el carácter que tiene en la fracción I del artículo 23 de nuestro Código de Procedimientos Civiles.

Antes que nada, y como base de ese análisis, debo recordar aquí que, como principio fundamental en materia de acciones, existe en Derecho Romano, un texto que, en la sencillísima frase: "*invitus agere vel acusare nemo cogatur*," reasume, por decirlo así, toda una jurisprudencia establecida sin excepción por aquellos famosos jurisconsultos de ese Cuerpo de Derecho que algunos publicistas han llegado á considerar como *la razón escrita.*[1]

Ahora bien, para convencerse de lo perfectamente racional que es ese principio de Derecho Romano, según el cual el ejercicio de las acciones era esencialmente libre, basta pensar en que las acciones, como cualquier otro derecho, son del patrimonio de aquel en cuyo beneficio se establecen, puesto que se conceden al individuo en consideración á sus intereses y no tomando en cuenta los intereses de aquel contra quien los va á ejercitar. Y si se admite, como tiene forzosamente que admitirse, que á nadie puede violentarse para que use de los derechos que están en su patrimonio, porque el uso de un derecho, es y será siempre un acto ineludiblemente voluntario; si se conviene en que sólo el que goza de un derecho ó sus here-

1 Código, Lib. III, Tit. VII.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

deros, pueden ejercitarlo cuándo y cómo les convenga, supuesto que son los que se hallan en mejor aptitud para juzgar de la oportunidad y conveniencia de su ejercicio, tendrá que convenirse también en que resalta la equidad y justicia del principio de Derecho Romano: "*invitus agere vel acusare nemo cogatur*," que, como dije antes, sirve de base fundamental en aquella legislación en materia de acciones.

Asentado lo anterior, veamos si la *acción de jactancia* ha sido consignada en alguno de los innumerables textos que componen el Corpus Juris Civilis.

Los textos que de preferencia se citan á este respecto, según Ernesto Valabrégue, autor de un magnífico trabajo sobre la *acción de jactancia*, trabajo que he seguido y consultado en esta primera parte de mi estudio, son la ley *Diffamari*, ó *ley 5 del Lib. VII, Tit. XIV del Código; las leyes 4, del Lib. V, Tit. LVI, 7 del Lib. IX, Tit. I y 21, in fine, del Lib. IX, Tit. IX del Código.*

De la primera de estas leyes se asevera que establece la *acción de jactancia* para un caso especial, generalizando su aplicación, se dice, las otras.

Por lo que hace á la ley *Diffamari*, Valabrégue demuestra brillantemente que no puede referirse sino á una acción *prejudicial*, ejercida por un ingenuo que, sabe que su estado es puesto en duda por rumores que el error ó la mala fe han propagado, y se dirige á los emperadores Diocleciano y Maximiano, exponiéndoles los procedimientos que ha seguido y preguntándoles cómo hará respetar su estado, si el autor de esos rumores sigue esparciéndolos; á lo que contestan los emperadores aprobando la conducta del ingenuo consistente en intimar varias ocasiones á su contrario, para que contradiga sus pretensiones, su derecho á la libertad, y concediéndole la acción de injurias, si el autor de los rumores persiste en propagarlos; pero nunca puede hallarse en este texto frase alguna que autorice á creer de una manera general, que el ingenuo perturbado en su estado, pudiera obligar al propalador de

los rumores erróneos ó calumniosos, á fundar sus dichos, para que, en caso de que no lo hiciera dentro de cierto término, quedara sometida á perpetuo silencio. Así, pues, sin tergiversar los términos de la ley *Diffamari*, nunca podrá encontrarse en ella el origen de la *acción de jactancia*.

El segundo de los textos citados, que es la ley 4 del Lib. V, Tít. LVI del Código, es también de Diocleciano y Maximiano, y no debe interpretarse, según Valabrégue, como lo pretenden los que dicen que si el ex-tutor de un pupilo, ó el ex-curador de un loco ó de un menor de 25 años, temiesen ser molestados en lo futuro, por la reclamación de algún crédito que se pudiera formular en su contra, tienen facultad, el ex-tutor ó el ex-curador, de obligar al pupilo, al menor ó al loco, á ejercer la acción de tutela ó la de curatela; y si el pupilo ó el menor permanecen en silencio, el antiguo curador ó tutor quedará para siempre al abrigo de toda demanda de pago, tanto del capital como de los intereses.

El entendido jurisconsulto, para comprobar que no puede ser la anterior interpretación la racional, examina, como en el caso de la ley *Diffamari*, cuál fuera el motivo porque dieran los emperadores esta ley, motivo que no fué sino el siguiente: Un tutor interroga á Diocleciano y Maximiano de cómo podrá precaverse de las futuras reclamaciones de su pupilo, pues temía quedar expuesto á demandas de intereses acumulados, si éste llegase á descubrir que le era deudor de cierta suma, no pudiendo aquel pagar ni depositar el importe de esa suma, cuyo monto ignora. Al exponerles esos temores, pregunta: ¿Qué debe hacer para detener el aumento de los intereses? á cuya pregunta contestan los emperadores: Que no puede obligar al pupilo á ejercer la acción de tutela, y sólo debe apremiar al menor á que diga si tiene alguna reclamación que hacerle, y si éste se calla, el tutor hará conocer su voluntad declarando que está anuente á pagar lo que deba, adquiriendo con esto perfecta seguridad de no deber ningunos intereses, quedando en igual situación que si hubiera pagado ó consig-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nado la suma; contestación que á las claras deja ver que no se trata de jactancia, esto es, de reclamaciones con que el pupilo amenazara ya al tutor, sino que éste último trata de precaverse contra pretensiones futuras que pudieran sobrevenir; *adversam futuram calumniam*, dice textualmente la ley, siendo muy de notar que los emperadores no dicen, ni siquiera vagamente, que prohiben al pupilo reclamar el capital que se le deba, por el hecho de haber guardado silencio ante el apremio del tutor.

Por lo que hace á la *ley 7 del Lib. IX, Tit. I del Código, (De his qui acusare non possunt)*, sólo impone á los que hayan hecho alguna acusación, el deber de proseguirla en cierto plazo, bajo la pena de sufrir el castigo que se imponía á los calumniadores, cosa que de ningún modo puede significar que se obligara al difamante ó jactancioso á que formulara una acusación, ó ejercitara una acción contra alguno, sino simplemente que se le imponía el deber de *proseguir* la acusación que antes hubiera iniciado.

Por fin, el último de los textos citados por los defensores del *juicio de jactancia*, en apoyo de que reconoce un origen que arranca del Derecho Romano, es la *ley 21, in fine, del Lib. IX, Tit. IX del Código*, y, como dice muy bien Valabrégue, parece á primera vista tener una relación directa con la *acción de jactancia*, puesto que obliga al marido que amenace á su mujer con acusación de adulterio, á intentar estas acusaciones en un plazo perentorio; siendo sin duda alguna el fin principal de esta ley, proteger la tranquilidad del hogar y el honor de la mujer, inminentemente amenazados por los amagos de una acusación que pudiera ser falsa y calumniosa.

¿Pero puede darse á esta ley más amplitud de la que en sí misma tiene, hasta el punto de confundirla con la *acción de jactancia?* De ninguna menera, pues la ley de que me ocupo se diferencía principalmente del *juicio de jactancia*, en que el texto señala al marido el plazo para que entable la acusación con que amenaza á su mujer, mientras que en el *juicio de jactancia* la

ley no señala ni determina un plazo, sino que lo deja al arbitrio del juez, cosa en que principalmente veo lo injusto, lo poco previsor y lo absurdo del artículo 23 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, absurdo, injusticia y poca previsión, que procuraré demostrar en el último Capítulo de mi presente estudio.

Después de las anteriores líneas en que he procurado reasumir brevemente el análisis concienzudo que el ilustre Consejero del Tribunal de apelación de Aix, hace de los textos que los jurisconsultos, ciegos idólatras del Derecho Romano y de la tradición, invocan en apoyo del rutinario *juicio de jactancia*, no puedo prescindir de transcribir literalmente el párrafo con que termina el primer capítulo de su magnífico trabajo sobre la acción de jactancia, párrafo que dice así: "¿Qué resulta en suma del análisis que hemos hecho? Que no hay nada, ni en los principios generales del Derecho Romano, ni en los textos, que justifique la acción provocatoria. Ninguno la consigna, y sin embargo, debido á su importancia, al trastorno que habría ocasionado en el procedimiento romano, debía haber sido formulada con toda claridad y jamás envuelta en las espesas sombras de unas cuantas frases de sentido dudoso. A pesar del gran respeto que se debe á la tradición, podemos concluir diciendo que nos hallamos al frente de una opinión que se apoya en bases demasiado frágiles, como son textos mal interpretados y tergiversados, de cuyo análisis se desprenden las conclusiones que hemos asentado. Sin embargo, es muy difícil destruir semejante opinión, porque tiene en su favor toda la fuerza de la rutina y el prejuicio."

Razón de sobra tiene que concederse á Valabrégue, si se reflexiona en que el casuismo peculiarísimo del Derecho Romano, es incompatible con la vaguedad que tan oportunamente hace notar de los textos examinados; textos que, por otra parte, parecen referirse más bien á otro orden de ideas, relacionándose con la *existimatio*, cosa de que siempre fué tan celoso el legislador romano, hasta el punto de legarnos varios textos

en que se detallaban la *infamia*, la *turpitudo* y la *levis nota*, esas tres clases de alteraciones que podía sufrir la *dignitatis illœsæ status, legibus ac moribus comprobatus*, según define Callistrato la *existimatio.*[1]

Pero si en Derecho Romano carecemos absolutamente de textos que fundan positiva y expresamente el *juicio de jactancia*, no acontece lo mismo en Derecho Español, en donde encontramos el caso de la ley *Diffamari* extendido á otros, pues la ley de Partida[2] lleva en su texto estas palabras: "*ca en tales cosas como estas ó en otras semejantes dellas.*"

Y no se limita la ley de Partida á autorizar al difamado para "*ir al Juez del Logar á pedir que constriña á aquel que las dixo, que le faga demanda sobre ellas en juizio, é que las prueue, que se desdiga dellas ó quel faga otra enmienda qual el judgador entendiese que será guisada,*" sino que completando el juicio tal como se encuentra prescrito en nuestro Código de Procedimientos vigente, agrega: "*E si por aventura fuese rebelde que non quisiese facer su demanda, despues quel judgador gelo mandase, decimos que deue dar por quito al otro para siempre: de manera, que aquel nin otro por él, non le pueda facer demanda sobre tal razon como esta.*"

Se ve, pues, que dando una amplitud extraordinaria á la romana ley *Diffamari*, y casi tergiversando esa disposición, fué como el Sabio Rey Don Alfonso consignó en sus admirables Siete Partidas el *juicio de jactancia*, juicio que es una excepción al principio "*invitus agere vel acusare nemo cogatur*," fundamental en materia de acciones.

Como asimilándose al *juicio de jactancia* y siendo también una excepción al principio antes enunciado, citan los autores el caso previsto en la Ley 47, tít. II, part. 3ª que lleva por epígrafe: "*Como los judgadores pueden apremiar á algunos omes*

1 Esos textos son: Dig. 50, 15, 5 §§ 1, 2 y 3. *De his qui notantur infamia*—22, 5, 3—37. 15; 2—50, 2, 12—23, 2, 44 y 40, 11, 5; Cód. 12, 1, 2—3, 28, 27—9, 43, 3 y 9, 51, 7; Inst. 2, 18 y 19.

2 Ley 46, tít. II, Part. III.

que fagan sus demandas contra aquellos que quieren ir en sus caminos," pero el texto de esa ley, si no bastara el epígrafe, convence suficientemente de que para nada se ocupa del *juicio de jactancia*, motivo por el cual me creo eximido de examinarla, por más que nuestro legislador la haya consignado á su vez en la fracción II del artículo 44 del Código de Procedimientos Civiles de 1880, como se verá después.

Durante el período de tiempo comprendido desde que México quedó definitivamente separado de España, hasta el año de 1872, en que se promulgó el primer Código de Procedimientos Civiles Mexicano, el *juicio de jactancia* asumió los caracteres que someramente paso á exponer.

Desde luego se observa que durante este período histórico, el juicio de que me ocupo revistió un aspecto menos injusto y menos arbitrario del que tiene actualmente, cosa que pone de manifiesto hasta qué punto influyen la rutina y los prejuicios para entorpecer la marcha del progreso, y especialmente tratándose de legislación.

Entre los requisitos que la jurisprudencia establecía en aquella época, hay dos que no exige nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente y que constituían sin duda una garantía con que se resguardaban los derechos del demandado como jactancioso. Esos dos requisitos son los siguientes: *Primero:* Era indispensable que se probara ante todas cosas la jactancia, porque este es el hecho preciso sobre que estriba la institución de todo el juicio. Por tanto, debía tener principio probándose el hecho mismo de la jactancia, y esto podía verificarse por medio de una información sumaria, que se recibía por el juez, á pedimento del difamado, ó á virtud de otras pruebas suficientes al efecto. Y como entre ellas la confesión sea la mejor, en la práctica se observaba que, presentado el primer escrito, el juez proveía se hiciera saber al difamante, á fin de que, confesado por éste el hecho de la jactancia, se excusara cualquiera otra prueba, y en caso de que negara el jactancioso ese hecho, se diera por el difamado la prue-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ba que correspondiese.[1] *Segundo:* Si el jactancioso no ejercitaba su acción dentro del término fijado por el juez, volvía á requerirle; y si aun así no la entablaba, se le imponía perpetuo silencio; siendo de notarse que respecto á este último punto había opiniones encontradas y diversas de los autores, pues algunos, como Covarrubias, aseguran que en su tiempo bastaba un solo requerimiento para imponer silencio,[2] en tanto que otros sostenían, que eran necesarios dos requerimientos,[3] no faltando quien enseñara que debían acusarse *tres rebeldías* para que el juez pudiera imponer silencio.[4]

Esta jurisprudencia fué seguida en un todo, no há mucho tiempo, por el Tribunal Superior de Puebla en su ejecutoria de 24 de Agosto de 1888, publicada en "El Foro" de 15 de Diciembre del propio año.

Cuando en 1872 se promulgó el primer Código de Procedimientos Civiles, no se consignó en él el *juicio de jactancia*, pues ese Código, en su artículo 53, sólo prescribía lo siguiente: "A nadie se puede obligar á intentar una acción contra su voluntad; salvo en los casos expresamente determinados en la ley." Ahora bien, esos casos expresamente determinados en la ley, no se encuentran en el mencionado Código ni en el Código Civil de 1870, pues en ninguno de ellos se señalan expresamente esas excepciones, ni mucho menos el *juicio de jactancia;* por lo que se ve que los legisladores de 1872 comprendieron perfectamente que ningún texto del Derecho Romano, ni los progresos que ha alcanzado la ciencia del derecho, los autorizaban á consignar en su obra la *acción de jactancia*.

1 Don Manuel de la Peña y Peña, en el 2º tomo, lección 12, de su magnífica obra titulada: "Lecciones de Práctica Forense Mexicana," obra que mereció un voto de aprobación del Congreso General de la República, en 31 de Enero de 1837, y en la que trata del juicio de jactancia bajo estos cuatro puntos de vista: 1º Los casos en que debe tener lugar esta especie de juicio. 2º Los requisitos con que procede. 3º El juez competente ante quien debe entablarse y fenecerse. 4º Si la excepción á la regla general: "*el actor debe seguir el fuero del reo*," excepción que tiene lugar en este juicio, se verifica en otros semejantes.

2 Covarrubias, Lib. I, cap. 18, núm. 2. "Var. Res."

3 Gregorio López. Glosa 4 de la Ley 46, tít. II, Part. 3ª

4 Berni, en su anotación á esa misma ley.

¿Fueron de la misma opinión los legisladores que reformaron ese Código y nos legaron el de 1880? No, sin duda alguna, pues en este último vemos con extrañeza que sus autores no sólo se conforman con resucitar el *juicio de jactancia*, en general, sino que *cometieron el imperdonable anacronismo* de prescribir en el artículo 44 que: "A nadie puede obligarse á intentar ó proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes:

I. En el de la ley Diffamari.

II. Cuando una persona pretende hacer un viaje al extranjero ó á lugares distantes, y tiene la seguridad de que hay otro que desea frustrárselo, intentando en su contra una acción en los momentos de emprenderlo; y

III. Cuando alguno tenga acción ó excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro, á quien puede exigir que la interponga ó continúe desde luego; ó que en el caso de excepción se la abone."

Parece verdaderamente increible que en la penúltima década del presente siglo, en un país que tiene por ley fundamental la libérrima Constitución de 57, se pudiera encontrar en un precepto legal una prescripción en que, como excepción al libre ejercicio de las acciones, se consignara el caso de que á algún ciudadano de una República de hombres libres se le atribuyera el carácter de esclavo. ¡Parece increible, sí, que los autores del Código de 1880, entre los que se hallaba un abogado que escribió sobre los "*Derechos del hombre*," hubieran consignado en su obra *el caso de la ley Diffamari!* De dos cosas una, ó no examinaron nunca esta ley, ó si la conocían, creyeron que legislaban para un país en el que la esclavitud aún subsistía.

Los autores de ese Código de Procedimientos Civiles de 1880, dicen en su *Exposición de Motivos*, lo que textualmente copio: "El artículo 53 previene que á nadie puede obligarse

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á intentar una acción contra su voluntad, salvo en los casos expresamente determinados en la ley. El principio que establece este artículo es exacto. Por regla general, el que tiene una acción es libre para ejercitarla cuando quiera; si deja pasar el tiempo sin deducirla, podrá ser que cuando se proponga intentarla, se encuentre con que aquella ha caducado por la prescripción; pero en todo caso no ha dejado de tener la libertad de que se trata, y su silencio durante el tiempo definido por la ley, obra de esa libertad, sólo á él habrá perjudicado. Esta regla, como decimos, es general; pero tiene, como todas las de su especie, determinadas excepciones que el artículo consigna bajo la salvedad general de los casos en contrario expresamente determinados en la ley. ¿Cuáles son esos casos? ¿Qué ley los determina de una manera expresa? Ni el Código Civil ni el de Procedimientos contienen disposiciones á este respecto, y por lo mismo, pareció conveniente á la Comisión llenar este vacío, fijando los tres casos que propone: son los mismos que nuestra antigua legislación y jurisprudencia consignaban; y como además están fundados en principios bien conocidos de equidad natural, la Comisión los aceptó por completo."

Yo creo, por mi parte, que la Comisión padeció un muy lamentable error, pues en vez de llenar un vacío, donde éste no existía puso un estorbo. Por otra parte, no es por cierto la equidad natural lo que apoye, por lo menos la primera fracción del artículo 44 del Código de Procedimientos Civiles de 1880; Código que por ventura está derogado, lo que me evita el trabajo de estudiar más profundamente ese artículo.

Por fin, los legisladores de 1884, tampoco están de acuerdo con sus predecesores los de 1880, y en el Código de Procedimientos Civiles que se promulgó en 15 de Mayo del primero de los años citados, consignan en el artículo 23, principios enteramente distintos de los del artículo 44 del Código de 1880 y de los del artículo 53 del Código de 1872.

El artículo 23 de nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente, dice: "A nadie puede obligarse á intentar ó proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes:

I. Cuando alguno se jacta públicamente de que otro es su deudor, ó de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. En este caso, el poseedor ó aquel de quien se dice que es deudor, puede ocurrir al juez de su propio domicilio, pidiéndole que señale un término al jactancioso para que deduzca la acción que afirma tener, apercibido de que no haciéndolo en el plazo designado, se tendrá por desistido de la acción que ha sido objeto de la jactancia. No se reputa jactancioso al que en un acto judicial ó administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona ó sobre alguna cosa.

II. Cuando por haberse interpuesto tercería ante un juez menor ó de paz por cantidad mayor de la que fija la ley para los negocios de su competencia se hayan remitido los autos á otro juzgado y el tercer opositor no ocurra á la tercería."

Como desde luego se observa, el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles de 1884, difiere mucho del 44 del Código de 1880 y del 53 del Código de 1872, diferencia ventajosa respecto del Código de 1880, pero que sin embargo no llena los principios de la justicia y de la ciencia de la Legislación, como procuraré demostrarlo en su oportunidad.

En vista de lo anterior, creo deber llegar á la conclusión de que el *juicio de jactancia* no existió jamás claramente definido en Derecho Romano, apareció en el Derecho Español con las Siete Partidas del Rey Sabio, y de allí se perpetuó en nuestro Derecho Patrio, asumiendo un carácter menos injusto en la época anterior á la promulgación de los Códigos.

Aquí debo dar cima al primer Capítulo de mi trabajo, puesto que, aunque en un breve resumen, he apuntado el origen y desarrollo histórico del *juicio de jactancia* en el Derecho Patrio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO II.

EL JUICIO DE JACTANCIA ANTE EL DERECHO CIVIL.

En Derecho Romano aprendimos que el estudio del Derecho Civil se dividía en tres partes: personas, cosas y acciones. Ortolan nos enseña que la palabra *acción*, en el sentido jurídico y en su acepción más extensa, significa: "El acto ó la "serie de actos por los cuales se recurre al poder judicial para "que éste atribuya fuerza y autoridad á nuestro derecho, ya "sea que nos defendamos ó que ataquemos á otro," ó bien: "los "medios, las formas prescritas para ejercitar los derechos."[1]

Un famoso autor y filósofo inglés nos dice: "El objeto de "las leyes, cuando son lo que deben ser, es producir, en el ma-"yor grado posible, la felicidad del mayor número; pero ya "sean buenas ó malas, no pueden obrar sino creando derechos "y obligaciones. Estas leyes no tendrían ningún efecto, si el "legislador no crease al mismo tiempo otras leyes que tienen "por objeto hacer cumplir las primeras: éstas son las leyes del "procedimiento. Para marcar la diferencia entre unas y otras, "llamaremos á las primeras "leyes sustantivas," y á las segun-"das "leyes adjetivas."[2]

Por su parte los jurisconsultos españoles Manresa, Miquel y Reus, asientan lo siguiente: "Las leyes civiles, consideradas "en abstracto, no son más que principios inanimados, reglas de "conducta á que deben acomodarse los asociados; principios y "reglas que no podrían ponerse en ejercicio, si no existieran "de antemano funcionarios que debieran aplicarlas en los casos "y circunstancias para que se dictaron. Por eso dice con mu-"cha oportunidad M. Bencome, que los jueces son los órganos "de la ley; que no hacen el derecho *juc dicere*, sino que lo de-"claran *jus dare:* son sus dispensadores, no sus árbitros.[3] Pero

1 Ortolan, Histoire de la legislation romaine, Generalization, pág. 662, Edit. de 1884.
2 Jheremías Bentham, Tratado de las pruebas judiciales, Lib. I, Cap. I.
3 Bencome, Théorie de la procédure civile, Introd.

"si la existencia de la ley civil supone la existencia del juez que "la aplique, la existencia del juez supone necesariamente una "forma á que dicho juez se sujete para hacer dicha aplicación. "Sin esa regla, sin esa forma, se entronizaría el arbitrio judicial "hasta un punto que fuera funesto para los asociados."[1]

Y más adelante,[2] los mismos autores dicen: "*Acción* es el "medio que nos conceden las leyes para ejercitar en juicio el "derecho que nos compete. Estas ideas, *acción* y *derecho*, son "tan correlativas, que con la mayor frecuencia y sin faltar al "tecnicismo del lenguaje forense, se toma la una por la otra, "así es que con igual propiedad decimos, "tengo *derecho* para "reclamar tal cosa," que, "tengo *acción* para reclamar tal otra." "Mas es necesario no confundirlas: el *derecho* existe antes que "la acción *judicial*, y de consiguiente, con absoluta indepen-"dencia de ésta, así es que podemos muy bien tener derecho "á una cosa, sin que pongamos en ejercicio la acción para re-"clamar ó hacer uso de ese derecho, al paso que no puede exis-"tir la acción sin la existencia previa del derecho que por ella "se haya de reclamar. Aquella es el medio y éste es el fin."

Y aun hay más: el propio Código de Procedimientos Civiles nos dice en su artículo 1º: "Se llama acción el medio de "hacer valer ante los tribunales los derechos establecidos por "la ley." Tratándose de acciones civiles, que son las únicas que puede otorgarnos el supradicho Código, ¿cuál ley es la que establece los derechos á que re refiere ese artículo? Ningunas otras que no sean las sustantivas, y entre ellas principalmente el Código Civil.

Apoyado, pues, por la definición que de la acción nos da Ortolan, por la diferencia establecida por el eminente filósofo inglés y por los jurisconsultos españoles, así como por el mismo Código de Procedimientos Civiles en su artículo 1º, me creo autorizado, tanto para establecer que los principios del Código Civil son primordiales y fundamentales, mientras que

1 Manresa y Reus, La ley de enjuiciamiento civil. Introd.
2 Manresa y Reus, ob. cit., Primera parte, pág. 4.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

los del Código de Procedimientos, son accesorios y secundarios ó derivados, como para aceptar las denominacion es de*leyes sustantivas* para los primeros y *leyes adjetivas* para los segundos, pues basta, en efecto, pensar en que los derechos existen antes de que nazcan las acciones para ejercitarlos, en tanto que las acciones no surgirían jamás, sino como una consecuencia de la anterior existencia de esos derechos.

Ahora bien, si queda sentado qne los principios consignados en el Código Civil son los fundamentales, tenemos que admitir que las leyes derivadas de ese Código, que son las del procedimiento, deben estar siempre en armonía con él y nunca pugnar con sus preceptos ó derogarlos; defecto de que adolece el *juicio de jactancia*.

En Derecho Civil se nos enseñó que nuestros derechos y obligaciones se extinguen de diversas maneras, que vienen perfectamente detalladas en nuestro Código Civil y que enumeraré brevemente.

Desde luego, en el cap. 3º, título 8º del libro I del mencionado Código, encontramos los preceptos relativos á la extinción de los derechos y obligaciones que nos resultan del ejercicio de la patria potestad; en el cap. 3º, título 9º del mismo libro, las reglas que presiden á la extinción de las obligaciones del tutor; en todo el título 7º del libro II, las reglas relativas á la prescripción, que, como el mismo Código la define, "es un medio de adquirir el dominio de una cosa ó de "librarse de una carga ú obligación, mediante el transcurso de "cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley." [1]

En los títulos 4º y 5º del libro III se hallan los medios como se extinguen las obligaciones, y son: el pago, la consignación, la compensación, la subrogación, la confusión de derechos, la novación, la remisión de la deuda, la cesión de acciones, la prescripción, la rescisión y la nulidad; en el capítulo 6º, título 8º del libro III se ven las reglas para la extinción de la hipoteca; en el capítulo 6º, título 11º del mismo libro, se encuentran los principios que rigen la extinción de la sociedad; en el capítulo 4º, título 12º de igual libro, se hallan los diversos modos como termina el mandato; y, por último, en el capítulo 4º, título 23º del propio libro III, se ven las reglas que sirven de base para la extinción de las inscripciones del Registro Público de la propiedad.

1 Ahora bien, entre todos los términos que para la prescripción señala el Código Civil en ese título, ninguno es tan breve como el arbitrario que puede señalar un juez conforme al artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles, para la prescripción de la acción de que se supone que se jacta el demandado como jactancioso. Por otra parte, esos términos son fijos y concretos, no vagos, como el que se deja al caprichoso arbitrio de un juez.

De entre todas las anteriores disposiciones del Código Civil, no hay una sola que no señale términos fijos y precisos, como en el título que trata en particular de la prescripción, para que nuestros derechos perezcan ó nuestras obligaciones se extingan; no hay un solo precepto que nos diga que perderemos nuestros derechos en el plazo arbitrario que nos señale un juez.

El espíritu del legislador se guió en el Código Civil por principios equitativos y justos, y siempre tuvo por norma, en todos sus preceptos, fijar términos y actos determinados y concretos, para que el dueño de un derecho lo perdiera, y el que tuviera sobre sí el peso de una obligación se librara de esta carga.

¿Qué concepto debería formarse de un Código Civil en el que su autor hubiera consignado: "Los derechos y las obliga-"ciones prescriben por el lapso del tiempo, desde un día hasta "cincuenta años, al arbitrio del juez?" ¿No se reprocharía á semejante Código el defecto de dar una amplitud exagerada y torpísima al arbitrio judicial, muchas veces venal? Sin duda alguna que sí. Pues bien, de este defecto adolece el artículo 23 de nuestro Código de Procedimientos Civiles en su fracción I, supuesto que deja al caprichoso arbitrio del juez el que señale un término al supuesto jactancioso para que deduzca su acción, so pena de perderla; es decir, deja al arbitrio judicial, como dije antes, fijar un término para la prescripción de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

un derecho; término que puede variar desde un día hasta cien años, con lo que el juez puede así favorecer á aquel de los dos litigantes que más le plazca; y esto sin separarse un ápice del precepto del Código de Procedimientos Civiles, que, lo repetimos, está en pugna abierta con los principios del Código Civil, principios que deben servir de base y norma á la ley del procedimiento, sin ser derogados jamás por ésta.

Pero, como si no bastaran las anteriores consideraciones, que pudieran decirse, como de un orden puramente filosófico, se presentan otras de orden jurídico que nos conducen á la siguiente conclusión: el *juicio de jactancia* no debe existir en el Código de Procedimientos Civiles, supuesto que establece un procedimiento que no se deriva de algún derecho establecido en el Código Civil ó en alguna otra ley sustantiva, y supuesto también que el primero de esos Códigos no debe comprender nunca, en los límites de sus prescripciones, más que la reglamentación para el ejercicio de los derechos que estén consignados en las leyes civiles sustantivas, únicos derechos que pueden requerir del Código de Procedimientos Civiles, forma ó medios para su ejercicio.

Si en el artículo X del Código Civil existiera un precepto que dijera, por ejemplo: "A nadie es permitido jactarse pú-"blicamente de que otro es su deudor ó de que tiene derechos "sobre una cosa que otro posee," entonces cabría perfectamente en un artículo del Código de Procedimientos Civiles, un precepto que normara la acción que se entablara contra el infractor de aquel artículo X del Civil, diciendo: "En el caso del "artículo X del Código Civil, aquel de quien se dice que es "deudor ó el poseedor, etc." Pero si ese artículo no existe en el Código Civil, y se conviene en que el de Procedimientos Civiles sólo puede y debe contener las formas, los medios para ejercitar los derechos que nos otorga el Civil; tiene que convenirse también en que aquel no puede ni debe consignar en sus preceptos el *juicio de jactancia*, porque no puede separarse en ninguno de sus preceptos de los principios de éste,

ni mucho menos hasta el punto de que esa separación importe una absurda y gravísima excepción de esos principios. Excepción por la cual el Código de Procedimientos Civiles, más que normar el procedimiento en cuya virtud pudiera hacerse valer un derecho preexistente ú otorgado ya por el Código Civil, crea verdaderamente un nuevo derecho.

Y aunque pudiera aducirse como razón para sostener la validez del artículo 23 de que me ocupo, que el legislador que tiene facultad para expedir una ley, tiene también facultad para derogarla ó reformarla por una ley posterior; yo contesto que semejante sutileza, no es una razón aplicable al caso, pues aunque el Código de Procedimientos Civiles de 1884, sea posterior, por la fecha de su promulgación, al Código Civil del propio año, debe entenderse que, al hacer uso de esa facultad, el legislador lo haga promulgando una segunda ley relativa al mismo asunto que la derogada ó reformada; pues á nadie puede ocurrírsele que con una ley sobre testamentos, pueda reformarse ó derogarse un precepto sobre obligaciones de los defensores de oficio; ni que una ley orgánica de un artículo de la Constitución, reforme ó derogue otro artículo distinto de ella; ni que una ley reglamentaria reforme ó derogue la ley que reglamenta; ni, por último, que los preceptos del Código de Procedimientos Civiles puedan reformar ó derogar los derechos que consigna y otorga el Código Civil, ó crear otro derecho, cosa que sucede en el caso.

Así, pues, creo que las razones expuestas en este Capítulo, me autorizan para deducir lógicamente que el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles, en su fracción I, rompe con los principios del Derecho Civil, supuesto que establece un medio para perder los derechos, que se separa de la prescripción y demás medios que este último señala, y porque contiene un precepto que, creando un derecho propiamente dicho, debería estar consignado en el Código Civil, y nunca en el de Procedimientos, que sólo debe contener acciones.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO III.

EL JUICIO DE JACTANCIA ANTE EL SISTEMA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Tócame examinar en esta parte de mi estudio la conformidad ó inconformidad del *juicio de jactancia* con el sistema del Código de Procedimientos Civiles.

Desde luego el primer reproche que puede hacerse al *juicio de jactancia*, por lo que hace á su inconformidad con el sistema del Código en que se halla prescrito, es que, como digo en el Capítulo anterior, no establece una regla de procedimiento, propiamente hablando, sino que lo que en realidad establece es un derecho que, á no dudarlo, debería estar consignado en el Código Civil, que es el único cuerpo de leyes donde deban consignarse nuestros derechos civiles.

Para convencerse de que el artículo 23 en cuestión establece más bien un derecho que un procedimiento, basta fijarse en que su fracción I, dice: "Cuando uno se jacta públicamen-"te de que otro es su deudor, ó de que tiene derechos que de-"ducir sobre alguna cosa que otro posee. En este caso el po-"seedor ó aquel de quien se dice que es deudor PUEDE OCURRIR "AL JUEZ, etc...." frase en la que indudablemente se suplió esta idea: "PUEDE USAR EL DERECHO QUE POR ESTE ARTÍCULO SE LE CONCEDE, DE OCURRIR AL JUEZ, etc."

Es decir, concede el derecho de obligar al jactancioso á que ejercite la acción de que se jacta, crea ese derecho en favor del que supone víctima de la jactancia, y al mismo tiempo reglamenta el derecho que crea.

En segundo lugar, el juicio establecido en el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles, adolece del defecto de no ser juicio en realidad. Unico en su especie, en el mencionado Código, se separa en todo de las reglas que éste fija, tanto para los juicios ordinarios como para los extraordinarios.

Todos los tratadistas, todos los autores difieren en las definiciones que dan de la palabra JUICIO en su acepción jurídica. Sala nos dice que juicio es: "legítima contención de causa que "se disputa entre el actor y el reo, ante el juez, para que los "pleitos se terminen por autoridad pública."[1] La Ley de Partida[2] define el juicio en estos términos: "Juyzio en romance "tanto quiere dezir como sententia en latín. E ciertamente juy-"zio es dicho mandamiento quel Judgador faga á alguna de las "partes, en razón de pleyto que se mueue ante el." Tapia en su Febrero,[3] dice que es: "Un acto legítimo que se sigue por dos "ó más personas, ante un juez, sobre alguna cosa," dando en la nota relativa esta otra definición: "Una controversia legal "entre dos ó más personas, ante un juez autorizado para deci-"dirla con su sentencia." Escriche, por su parte, define el juicio de la siguiente manera: "La controversia y decisión legítima "de una causa, ante y por el juez competente, ó sea la legíti-"ma decisión de un negocio entre actor y reo, ante juez com-"petente que la dirige y determina con su decisión ó sentencia "definitiva."[4]

Pero cualquiera que sea ia definición que aceptemos (yo prefiero la de Tapia en su nota), se hallará siempre en ella como elemento esencial, una contienda entre dos ó más personas, de las cuales una ó varias afirman tener un derecho, y otra ú otras varias niegan al actor ese derecho.

Ahora bien, esa contienda asume, desarrollándose, el carácter de un juicio, que, para ser considerado como tal desde su principio hasta su desenlace, requiere indispensablemente: 1º Un juez competente ante quien dirimir esa contienda. 2º Una parte que reclame su derecho, en la demanda y otra que niegue ó discuta ese derecho, oponiendo excepciones. 3º Gestiones del actor para probar sus acciones y gestiones del deman-

1 Sala, Lib. IV, Tít. II, Tomo II, pág. 247, ed. de 1870.
2 Ley 2. Tít. 22, Part. 3ª
3 Núm. 1, Cap. I, Tít. 2, Lib. 3.
4 Escriche, Diccionario, palabra *juicio*.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dado para probar sus excepciones, respecto de las cuales es actor; y 4º Resolución del juez absolviendo ó condenando al reo, absolución ó condenación que habrá de fundarse *precisamente* en lo que de una manera lógica resulte de las pruebas; pues la sola demanda no es más que la afirmación de que se tiene un derecho, y de las pruebas y de la ley saca el juez la conclusión de este gran silogismo que se llama juicio, la cual conclusión se llama sentencia.

Sin estos elementos esenciales, no podrá existir jamás un juicio propiamente dicho, pues todos y cada uno de ellos vienen á ser factores indispensables para la iniciación, desarrollo y desenlace de la contienda entre partes. Averigüemos, pues, si el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles establece en realidad un juicio.

Juan se dirige á un juez, y, con fundamento del mencionado artículo, le pide que emplace á Pedro, de quien afirma que se jacta públicamente de que Juan es su deudor, para que comparezca á ejercitar su acción dentro del término que el juez tenga á bien señalarle, apercibido de darlo por desistido de su acción si no comparece dentro de ese término. El juez señala á Pedro el término de ocho días; Pedro no comparece en ese término y el juez hace efectivo el apercibimiento, declarando que Pedro debe tenerse por desistido para siempre de la acción que ha sido objeto de la jactancia.

En la anterior tramitación tenemos: 1º Un juez que dirime la controversia, si es que ésta existe. 2º El demandante supuesta víctima de la jactancia, también supuesta. 3º Resolución del juez. ¿Encontramos los demás elementos esenciales de todo juicio? ¿Probó Juan que Pedro, en efecto, se jactaba públicamente de que el primero era su deudor? Si Pedro no compareció á ejercitar su acción, ¿se sabe acaso si fué, porque, aunque acreedor de Juan, no tiene en su poder las pruebas de ello en ese instante, instante que dolosamente aprovecha Juan para demandarlo como jactancioso, sabiendo que no podrá ejercitar entonces ninguna acción en su contra, ó que si

la ejercita no podrá probarla? ¡No ha habido prueba del actor, no ha habido siquiera contestación del reo á la demanda de jactancia, se pudiera decir que ni demanda tampoco; sin embargo, el juez, quizá contra su conciencia, á todas luces contra la justicia, se ve estrechado, ineludiblemente estrechado por la ley, á condenar al supuesto reo á perder para siempre sus derechos! ¿Y desde cuándo es buena, equitativa y justa una ley que obligue al juez á condenar al demandado sin que el actor compruebe sus derechos? Semejante ley y semejante práctica, equivalen á dar franca entrada á la injusticia mas abominable y al abuso más punible. Cualquier individuo podría, con tan absurda jurisprudencia, demandar á todo ciudadano, pidiendo al juez que sentenciara desde luego á su favor, sin más prueba ni más trámite que su simple dicho. Porque esta y no otra cosa establece el artículo 23 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, supuesto que no exige, como requisito previo, que el demandante pruebe el hecho de la jactancia, hecho que es precisamente en el que funda su demanda.

Por otra parte, el mencionado artículo establece un juicio que carece por lo menos de uno de los elementos esenciales á todo juicio, el elemento principal: la prueba, ó lo que es lo mismo, establece un juicio que pugna con el sistema que el mismo Código adopta para toda clase de juicios; que deben constar, según ese sistema, de la demanda y contestación, prueba, en uno y otro sentido, y resolución ó sentencia.

Pero no es esto sólo en lo que el artículo de que trato pugna con el sistema del Código en que se halla implantado.

En materia de jurisdicción contenciosa, el Código de Procedimientos Civiles establece dos grandes divisiones de los juicios: juicios ordinarios y extraordinarios. No debo entrar al análisis detallado de una y otra clase de juicios, y básteme decir que al frente de las disposiciones relativas á los ordinarios, en su artículo 922, nos dice textualmente ese Código lo que sigue: "Todas las contiendas entre partes que no tengan se-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"ñalada en este Código tramitación especial, se ventilarán en "juicio ordinario."

¿El *juicio de jactancia* tiene señalada en el Código de Procedimientos Civiles tramitación especial? De ninguna manera, se me dirá, porque el título 2º del libro II de este Código, que se ocupa de los juicios extraordinarios, nos detalla la tramitación especial del *sumario*, del *hipotecario*, del *ejecutivo*, del *verbal*, de los *interdictos*, del *arbitral* y del *procedimiento convencional;* pero para nada se ocupa de señalar una tramitación especial para el *juicio de jactancia.*

Admitiendo sin conceder que el llamado *juicio de jactancia* no tenga señalada una tramitación especial en el Código de Procedimientos Civiles, ¿cómo deberá ventilarse? En juicio ordinario, se me contestaría, conforme al artículo 922 del propio ordenamiento.

¿Y puede decirse que el procedimiento comprendido en el artículo 23, sea el de un juicio ordinario? ¿No es, por el contrario, un procedimiento mucho más rápido y sencillo que el que rige las disposiciones especiales del juicio *ejecutivo*, el *sumario* ó el de *desocupación?* Sí, á todas luces, supuesto que con el *juicio de jactancia* se establece un procedimiento *sui generis* que consiste en demanda, emplazamiento, al arbitrio del juez, y sentencia.

Conforme al procedimiento señalado á los juicios ordinarios, una vez entablada la demanda de jactancia, se debería correr traslado por nueve días al supuesto jactancioso para que contestara,[1] y transcurrido este término sin que compareciese, se daría por contestada la demanda, acusada que fuera una rebeldía,[2] abriendose después el juicio á prueba y siguiendo los demás trámites hasta la sentencia.[3]

¿Por ventura es así como se procede en el *juicio de jactancia?* No, lo repetimos, porque en este juicio no hay ni contestación á la demanda, ni término de prueba, sino simplemente un auto del juez después de la demanda, que representa el papel hasta de citación para sentencia.

1 Art. 928, Cód. de Proc. Civ.
2 Arts. 933 y 942, Cód. de Proc. Civ.
3 Arts. 361 y 362, Cód de Proc. Civ.

Quizá de este cúmulo de irregularidades es de donde se ha podido deducir la singular opinión, sustentada desgraciadamente aun por abogados de respeto, de que este *juicio de jactancia* es de *jurisdicción voluntaria.*

En efecto, si no se necesita la presencia del demandado, es voluntario de todos los deudores pedir al juez la liberación de sus deudas; y el juez, autorizado por el artículo de que trato, podrá dar esos finiquitos, extinguir esas obligaciones, siempre que cualquier deudor se lo pida y el acreedor no comparezca, despreciando su atentatorio apercibimiento.

Pero yo sostengo y creo sostener fundadamente, que el artículo 23 tiene una tramitación especial señalada en el Código de Procedimientos Civiles; porque si bien es cierto que las disposiciones especiales para el *juicio de jactancia* no están comprendidas y detalladas en el Título segundo del Libro segundo de ese Código, esto mismo sirve para sostener que se quiso comprender en los breves términos del susodicho artículo, toda la tramitación que se asignaba al mencionado juicio.

Si el legislador hubiese querido que la contienda entre partes que surgiera de los términos de ese artículo, se ventilara con distinta tramitación que la que allí se señala, se tendría que decir forzosamente que el artículo en cuestión no establecería en realidad sino un medio preparatorio del juicio, en que ejercitara su acción el demandado como supuesto jactancioso. Pero esto es inadmiisble, desde el instante en que en el Código de Procedimientos Civiles hay un capítulo especial, el capítulo segundo, del Título cuarto, del Libro primero, que se ocupa de detallar cuáles son los medios preparatorios del juicio, haciendo de ellos una completa enumeración, enumeración en la que no está comprendido el caso en que alguien pueda provocar á otro á que ejercite la acción de que se jacta.

Por otra parte, el artículo es suficientemente explícito, y al

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

autorizar al que se supone víctima de la jactancia para pedir al juez de su domicilio que señale un término al supuesto jactancioso para que ejercite su acción, apercibido de darlo por desistido de ella si no la ejercita; es evidente que autoriza también al juez para que señale ese término, para que lo señale con ese apercibimiento, y, por último, para que haga efectivo dicho apercibimiento. Suponer otra cosa, sería lo mismo que admitir que la ley concedía un derecho que no pudiera hacerse efectivo ante el juez, lo que sería enteramente absurdo.

De lo expuesto resulta, que el *juicio de jactancia* pugna por tres conceptos con el sistema del Código de Procedimientos Civiles en que se halla prescrito.

Primero: Porque establece propiamente un derecho, en un cuerpo de leyes en que sólo deben hallarse prescritos los medios para ejercitar derechos.

Segundo: Porque carece de algunos de los elementos esenciales á todo juicio, según el mismo Código.

Tercero: Porque sigue una tramitación especial, *sui generis*, que es á todas luces irregular y absurda.

CAPITULO IV.

EL JUICIO DE JACTANCIA ANTE EL DERECHO CONSTITUCIONAL.

Debo entrar ahora al análisis del *juicio de jactancia* desde el punto de vista constitucional.

Como creo haber demostrado en el Capítulo anterior, el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles no establece sino un procedimiento incompleto, que no es propiamente un juicio, supuesto que carece, por lo menos, de uno de los elementos esenciales en toda contienda jurídica: la prueba.

He procurado patentizar también que la defensa del demandado como supuesto jactancioso, no se encuentra prescrita en el mencionado artículo, pues para nada se le oye en defensa de las imputaciones que se le hacen; y he demostrado que se

le condena por el juez á perder sus derechos, sin que el actor tenga necesidad de suministrar la más pequeña prueba de sus asertos para convencer al juez del hecho de la jactancia.

Ahora bien, si el criterio constitucional es el supremo criterio para conocer cuando una ley es buena ó mala, aplicable ó inaplicable, y si consigo, como me atrevo á esperarlo, que el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles, es anticonstitucional, habré conseguido fundar sobradamente la proposición final de mi trabajo: reforma del citado artículo 23.

Falta de audiencia y defensa por parte del demandado, carencia absoluta de prueba por parte del actor: he ahí los capitalísimos defectos de que adolece el *juicio de jactancia*, para pugnar, como pugna indefectiblemente, con los principios constitucionales.

¿Con qué artículos de la Constitución se encuentra en pugna el 23 del Código de Procedimientos Civiles? ¿Qué garantías individuales viola?

Las garantías que otorgan los artículos 16 y 17 del Código Federal.

¿Por qué razones puedo creerme autorizado para asentar lo anterior? Por las siguientes razones, que sucintamente paso á exponer.

El artículo 16 de la Constitución dice á la letra: "Nadie "puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles "y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la "autoridad competente que funde y motive la causa legal del "procedimiento." Examinemos el *juicio de jactancia*, comparando sus disposiciones con todas y cada una de las partes de este artículo constitucional.

¿En el *juicio de jactancia* se molesta al individuo en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones? Se hace más, muchísimo más que originarle una simple molestia; se le arrebata para siempre un derecho. ¿Se le arrebata ese derecho en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente? Sí, á no dudarlo, porque la sentencia en que el juez declara

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que se tiene al supuesto jactancioso por desistido para siempre de la acción de que se supone se jacta, llena ese requisito. Pero esa autoridad competente ¿ha fundado y motivado la causa legal de ese arrebato inicuo? Sí, se me contestará, la ha fundado y motivado, desde el instante en que ha dictado su sentencia, conforme al artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles.

Pero entonces, debemos investigar si ese artículo suministra al juez los elementos necesarios é indispensables para fundar y motivar su procedimiento, en virtud del cual priva para siempre de su derecho á un individuo.

Un respetable autor dice, al examinar esta parte del artículo 16 de la Constitución, lo que copio: "En el orden civil ó ad-"ministrativo, el fundamento y motivo del procedimiento pue-"den ser precisamente el objeto de una contestación, y enton-"ces hay una necesaria relación entre el hecho ó caso y la ley, "en virtud de la cual se procede.... Hay, pues, en este caso, "que citar el hecho, la ley que funde el procedimiento, ó al me-"nos la naturaleza de éste, sin que sean necesarios más requi-"sitos."[1]

En el *juicio de jactancia* ¿cuál es el hecho que el juez cita al mismo tiempo que el artículo 23? No puede citar otro sino el de que el supuesto jactancioso no compareció á ejercitar su acción en el término fijado. Este hecho no tiene relación ninguna con el hecho que motiva la demanda, pues el motivo de ésta es el hecho de la jactancia, hecho que, conforme á los trámites del susodicho artículo, no ha sido objeto de la controversia judicial. De manera que el juez en su sentencia tiene que decir: "En virtud de que Juan demandó á Pedro, porque "se jactaba públicamente de que aquel era su deudor, según me "dijo Juan, pero sin haberme comprobado el hecho de la jac-"tancia que atribuye á Pedro; y en virtud de que Pedro no com-"pareció en el término que yo, el juez, le señalé á mi soberano

1 Ruiz. Curso de Der. Const. y Admin., Tomo I, pág. 184.

"arbitrio para que ejercitara su acción, que dijo Juan era objeto "de la jactancia; con fundamento del artículo 23 del Código de "Procedimientos Civiles, sentencio á Pedro á perder para siem-"pre los derechos que Juan dice que Pedro se jacta de tener "contra él."

El objeto de una sentencia tiene que ser *cierto* y *determinado*. ¿Lo es en este caso?

Pero además, ¿se puede decir que semejante sentencia funda y motiva la causa legal de tan absurdo procedimiento? Si el hecho por que se me demanda es porque me jacto públicamente, que se me demuestre primero que me jacto, y después que se me obligue, contra mi voluntad, coartando mi libertad, tal vez contra mi posibilidad y mi conveniencia, á ejercitar una acción, que no puedo ó no quiero ejercitar en ese instante. ¡Pero que, sin permitirme defenderme, sin permitirme siquiera contradecir el hecho de la jactancia, se me arrebaten mis derechos, esto es una injusticia incalificable, una arbitrariedad inaudita! ¿Cómo puede ningún juez del mundo fundar y motivar la causa legal de un procedimiento por el que se me arrebatan mis derechos, sin oirme siquiera en defensa de esos derechos? ¿Por ventura tenemos por jueces dioses ó semidioses, que puedan adivinar en el demandante la verdad ó mentira de su dicho? ¡Todo lo contrario, no escasean, por desgracia, en la humanidad, jueces venales, que cubren de lodo el blanco manto de la justicia y su conciencia dúctil, para satisfacer el mezquino y vil interés!

Puede alegárseme en contra que el artículo 16 de la Constitución no se refiere ni puede referirse á la materia civil; pero para contestar, victoriosamente en mi concepto, semejante alegación, me bastará agregar á la cita que ya tengo hecha de uno de mis maestros, la de otro maestro digno por mil títulos de respeto por su saber y vasta erudición.

El señor Lic. Jacinto Pallares, en su "Alegato presentado "ante el C. Juez 1º de Distrito de México, por varios acreedo-"res prendarios que fueron despojados de las prendas, sin for-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"ma de juicio, por orden del C. Juez 2º de lo Criminal de Mé-"xico, Lic. Quirino Domínguez,"[1] lo que en seguida copio:

"Bien sabido es, que muchos de los Honorables Magistrados de la Corte Federal, que rechazan ó han rechazado el amparo por aplicación inexacta de la ley en materia civil, lo conceden, sin embargo, cuando una flagrante violación de ella en juicios civiles, entraña necesariamente ó tiene que resolverse en la violación del artículo 16 de la Constitución; siendo de advertir que en este punto, si no del todo constante y uniforme, sí ha prevalecido en el mayor número de las ejecutorias de la Alta Corte Federal, la jurisprudencia que concede el recurso de amparo. Pero en lo que sí ha habido uniformidad absoluta en dichas ejecutorias, y aún unanimidad en las votaciones de los ilustrados Magistrados que las han emitido, es en sostener, en consagrar la justísima doctrina de que las decisiones judiciales del orden civil, dictadas sin citación, SIN AUDIENCIA *ó* SIN DEFENSA *de la persona cuyos derechos, bienes ó posesiones son perjudicados por aquellos decretos ó sentencias, importan necesariamente la violación del artículo 16 de la Constitución."*

"Recorriendo escrupulosamente todas las ejecutorias de amparo desde que ellas han sido objeto de publicaciones oficiales, no he encontrado una sola que niegue el amparo de la Justicia de la Unión á los individuos que, sin audiencia ni defensa, son molestados en sus personas, propiedades ó posesiones por cualquiera autoridad, aunque sea la judicial, pues el serlo, no la sustraé á la obligación de respetar las garantías constitucionales, ni la autoriza para privar á los individuos del derecho natural de audiencia ó defensa, derecho que notoriamente reviste el carácter de garantía individual, dados la letra, el espíritu y los antecedentes del artículo 16 de nuestro Código Político."

"En comprobación de esta jurisprudencia uniforme, consagrada por nuestra Corte Federal, bástame citar las siguientes ejecutorias: La de 19 de Mayo de 1881, que corre en el "Semanario Judicial de la Federación," tomo II, pág. 84. La de 8 de Enero de 1872, obra citada, tomo II, pág. 528, que decidió que la responsabilidad civil, aunque provenga de una sentencia en juicio criminal, no puede ejecutarse con apremios del orden penal; y en el presente juicio de amparo consta que el C. Juez 2º de lo Criminal, nos apremió con multa para hacer efectiva la privación de nuestros derechos prendarios sin oirnos. La de 10 de Septiembre de 1884, dictada por unanimidad, tomo VII, pág. 596, obra citada, en que se declara: "que la garantía del artículo 16 comprende también los negocios judiciales civiles, no para revisar las decisiones de los jueces, sino para ver si ellos han procedido judicialmente, esto es, observando las formalidades substanciales de todo procedimiento judicial." La de 23 de Octubre de 1884, dictada por unanimidad, que se encuentra en el tomo VII, pág. 670, obra citada, y que contiene una decisión igual á la de la anterior sentencia. En el mismo sentido las ejecutorias de 6 de Febrero de 1885, tomo VIII, pág. 201; la de 10 de Febrero de 1885, tomo citado, pág. 222; 17 de Febrero de 1886, tomo citado, pág. 207; 4 de Febrero de 1881, tomo II, pág. 255. La de 12 de Octubre de 1884, tomo III, pág. 528, que declaró que las irregularidades de un procedimiento JUDICIAL CIVIL, SEA MATERIA DE AMPARO SIEMPRE QUE IMPORTEN UN ATAQUE ARBITRARIO CONTRA LA PROPIEDAD. *La de 5 de Marzo de 1886, que se encuentra en el tomo X de la obra citada, pág. 541, dictada por unanimidad de votos, y en la cual se decidió:* "QUE PROCEDE EL AMPARO, CUANDO EN UN JUICIO CIVIL UNA DE LAS PARTES NO HA SIDO OIDA, Y SIN EMBARGO, SE DICTA SENTENCIA CONTRA ELLA."

1 Revista de Legislación y Jurisprudencia, tomo 4º, pág. 49.

¿Pero cuál ha sido el motivo, la causa de que nuestra Corte Federal haya sentado en sus ejecutorias esa jurisprudencia, que da á la garantía consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución un alcance que llega á cubrir con su protectora egida los asuntos del orden civil? Sin duda alguna que no ha sido sólo la consideración de que nuestra historia jurídica ha consagrado en varias de sus disposiciones, como principio de justicia, la audiencia y defensa previas,[1] sino que ha influido poderosamente en el ánimo de los Magistrados que han suscrito esas ejecutorias, la consideración de que los constituyentes, y con especialidad los autores del proyecto de Constitución, tuvieron clara y patentemente la idea de sancionar en ese artículo una garantía que amparara, no sólo la seguridad individual,

1 Leyes 12 y 22, Tít. 22, Part. 3ª; leyes 7, 8, 9, 10 y 11, Tít. 4º, Lib. 3º, N. R.; leyes del Tít. 34, Lib. 11, de la Nov.; Curia Filípica, Juicio civil, 1ª parte, § 12.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

contra el procedimiento arbitrario de cualquiera autoridad, sino también la posesión, bienes y derechos de los individuos.

El artículo 16 de nuestra Constitución, era el 5º del proyecto y decía textualmente lo que sigue: "Todos los habitantes de "la República, así en sus personas y familias, como en su domi- "cilio, papeles y *posesiones*, están á cubierto de todo atropella- "miento, examen ó cateo, *embargo* ó *secuestro*, de cualquier per- "sona ó *cosa*, excepto en los casos especificados por las leyes, "y con la indispensable condición de que se proceda racional- "mente y que la autoridad competente exprese en su mandato "escrito la causa probable del procedimiento...." [1]

Al consignar, pues, los autores del proyecto las palabras *posesiones*, *embargo*, *secuestro* y *cosa*, dejan comprender muy claramente que la garantía que consignaban, era extensiva á los derechos civiles de todos los habitantes de la República. Y este artículo no fué de ninguna manera reprobado, sino simplemente modificado por la Comisión que lo presentó reformado, con mayor concisión y menos detalles en la forma, pero con el mismo alcance, objeto y sentido en su espíritu. [2]

Y después de la incontrovertible autoridad de las ejecutorias citadas por el reputadísimo Lic. Pallares, y de la fuerza de estos antecedentes históricos, ¿puede dudarse por un instante de que una ley que da facultades á cualquiera autoridad para mandar *embargos*, *secuestros* ó *molestias* de otro género en los bienes y posesiones de los individuos, sin audiencia y defensa de éstos, es una ley anticonstitucional á todas luces? ¿Y podrá dudarse de igual modo, que es perfectamente anticonstitucional el *juicio de jactancia* prescrito en el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles, que ordena al juez privar para siempre á un individuo de su derecho, sin audiencia y sin defensa previas? Nunca podrá dudarse de una verdad tan palpable, porque al *juicio de jactancia*, son enteramente aplicables

1 Zarco, Hist. del Congreso Constituyente, Tomo 1º, pág. 468.
2 Zarco, Hist. del Congreso Constituyente, Tomo 1º, págs. 698 á 705.

todas y cada una de las circunstancias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en sus ejecutorias como flagrantemente violadoras de la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución.

¿Por ventura es sólo contra el mencionado artículo constitucional contra el que pugna el 23 del Código de Procedimientos Civiles? No, según creo, pues el artículo 17 del Código Magno, se encuentra también frente á frente del *juicio de jactancia* que con él pugna.

He procurado demostrar que, sin audiencia ni defensa previas, no podrá existir jamás un procedimiento que la autoridad pueda fundar y motivar legalmente. Privar, pues, á un individuo de esos derechos, constituye la violación de una garantía, violación que la autoridad judicial puede llevar á cabo por cualquiera de estos dos motivos: ó porque desprecia las prescripciones de la ley, ó porque la misma ley sanciona tan absurda y torpe arbitrariedad.

En este último caso, la ley misma es la que rompe con los principios constitucionales, violando una garantía, que, á no dudarlo, se halla consagrada por el artículo 17 de la Constitución Federal.

¿Cuáles son, en efecto, los términos de este artículo? Los siguientes: "Nadie puede ser preso por deudas de un carácter "puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para reclamar "su derecho. *Los tribunales estarán siempre expeditos para ad- "ministrar justicia.* Esta será gratuita, quedando, en consecuen- "cia, abolidas las costas judiciales."

Como se ve, este artículo previene que "los tribunales estén "siempre expeditos para administrar justicia," y creo que basta sólo reflexionar un instante en lo que significa *administrar justicia*, para convencerse de que esta frase no significa ni puede significar otra cosa que: escuchar al demandante ó acusador y al demandado ó reo, recibir las pruebas de uno y otro, oír sus ataques y defensas, para formarse clara idea de los derechos que á cada uno asisten, y en consecuencia de ello, *administrar-*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

les justicia; y no como algunos espíritus rigoristas creen inexplicablemente que esas palabras significan solamente que los juzgados estarán *siempre abiertos* para que todo el mundo pueda entrar á ellos; explicación inadmisible: 1º porque sería absurda la prescripción, en cuya virtud los juzgados debieran estar abiertos *siempre*, es decir, de día y de noche; y 2º porque sería ridícula la Constitución, el gran Código Político de una República, que descendiera á la pueril reglamentación de las horas de despacho en las oficinas públicas. Por ventura nuestra Constitución no es tan ridícula, y el principio que su artículo 17 consagra, es mucho más elevado y no tan superficial como los raquíticos espíritus que de ese modo lo interpretan.

Así, pues, el artículo 17 de la Constitución, al ordenar que los *tribunales estén siempre expeditos para administrar justicia*, no ordena ni puede ordenar otra cosa, sino que esos tribunales escuchen siempre en justicia á los que ante ellos vayan á discutir sus derechos; prescripción con que no cumplirán los tribunales si privan á un individuo de la citación, de la audiencia ó la defensa, que son elementos esenciales y precisos para poder administrar justicia.

"En consecuencia, dice con razón el distinguido Lic. Palla-"res,[1] una ley que facultara á los tribunales para ejercer su ju-"risdicción ó atribuciones en general, ó en un caso dado, sin "observar esas formalidades esenciales, de lo que se llama, se "ha llamado y se llamará siempre *administración de justicia;* "una ley semejante, entraña por fuerza la violación de la garan-"tía del artículo 17 y su aplicación se resuelve y tiene que re-"solverse en la violación de ese artículo y de la garantía en él "consagrada."

Y si se recuerda que el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles establece un procedimiento especial, que carece absolutamente de la forma de un juicio, supuesto que priva de audiencia al demandado como supuesto jactancioso, y sobre

1 Alegato citado, Rev. de Legis. y Jurisp., Tomo 4º, pág. 57.

todo, no exige prueba del demandante, pues aunque se cita al presunto jactancioso, se le cita con un apercibimiento que, si se hace efectivo, resulta que se le condena sin oirle y en virtud tan sólo de una afirmación *no probada* del actor; tendrá que convenirse en que el *juicio de jactancia*, como lo establece nuestro Código de Procedimientos Civiles, es una prescripción violadora del artículo 17 de la Constitución, pues como dice con notable acierto el tantas veces citado Sr. Lic. Pallares: "Hace consistir la administración de justicia, precisamen-"te en no administrarla, pues no se administra justicia sin au-"diencia y defensa, y llega al exceso de llamar procedimiento "judicial á la negación misma de toda forma de juicio."[1]

Sé bien que á pesar de las razones anteriormente expuestas, puede aún alegárseme que no son estas las sanas doctrinas constitucionales, y que es ya jurisprudencia perfectamente sentada que los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución no pueden referirse á materia civil. Sé bien que en apoyo de semejante doctrina se cita, entre otros, al eminente constitucionalista Sr. Lic. Vallarta, que en uno de sus "Votos," el que pronunció en el amparo pedido por Celestino Cortés, contra un alcalde de Morelia que le quitó un terreno de su propiedad sin oirlo ni citarlo,[2] sostiene, entre otras cosas, con una fuerza de dialéctica poderosa y alucinadora, pero nunca convincente, que el recurso de amparo no es procedente cuando en un juicio civil se deja sin audiencia y defensa á una de las partes.

Pero si la prominencia científica del Sr. Vallarta, permite á mi obscura nulidad que me valga de sus propios argumentos para comprobar la tesis que yo sostengo, me bastará tomar algunos de sus conceptos vertidos en el "Voto" citado, para demostrar que el mismo jurisconsulto, aun á pesar suyo, conviene en que los derechos de audiencia y defensa previas, son y serán siempre derechos del hombre, que deben estar garantizados por la ley.

1 Rev. de Legis. y Jurisp., loc. cit., pág. 58.
2 "Votos," Tomo 3º

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

En el "Voto" á que vengo refiriéndome, dice textualmente el Sr. Vallarta:[1] "Sin negar que la defensa sea un derecho na-"tural en toda clase de juicios...." y adelante, en la misma página: "No se permitió que el juez civil condenara sin oír; "pero puesto que la nulidad ha sido la sanción eficaz de ese *de-"recho natural*, no se juzgó necesario asegurarlo también con el "amparo." Ahora bien, estas confesiones del Sr. Vallarta traen consigo necesariamente la réplica que él mismo se hace en estos términos y que, sea dicho con todo el respeto debido á su memoria, elude y deja sin contestación satisfactoria: "Y los "derechos naturales, los que nacen con el hombre, los anterio-"res á toda ley, los que son la condición indispensable de la "personalidad humana, ¿cómo pueden quedar sin protección só-"lo porque la Constitución no los enumere? ¿Existen ó no ta-"les derechos? Si existen, deben respetarse, diga lo que dijere "la Constitución: si no existen, confiésese de una vez que toda "ella reposa sobre el error que contiene su artículo 1º al pro-"clamar que los derechos del hombre son la base y el objeto de "las instituciones sociales."[2]

El mismo Sr. Vallarta dice adelante y en el propio "Voto," lo que sigue: "He dicho antes, y creo haberlo probado, que "las declaraciones de derechos no son, ni han sido hasta ahora, "ni es probable que lo sean en lo futuro, más que la consagra-"ción de los que se consideran como indispensables, apropiados "á las instituciones, necesidades y costumbres del pueblo para "quien se dan."[3]

La anterior es una observación justísima y racional, es una verdad que da honra al esclarecido talento del Sr. Vallarta; pero fundado precisamente en esa verdad que brota de los autorizados labios del ex--Presidente de la Suprema Corte, me permito preguntar con toda modestia: ¿por ventura los derechos de audiencia y defensa previas, que él mismo confesara que son

1 Tomo 3º, pág. 23.
2 Loc. cit., págs. 26 y 27.
3 Loc. cit., págs. 28 y 29.

derechos naturales, no son por ventura indispensables y apropiados á las instituciones, necesidades y costumbres de un pueblo, como nuestra patria, que pretende figurar en el catálogo de los pueblos civilizados? ¿Creería el Sr. Vallarta que no es indispensable ni apropiado á nuestras instituciones, necesidades y costumbres, el que se nos sentencie previa audiencia y previa defensa que hagamos de nuestros derechos en un juicio civil?

Pero no es mi objeto discutir las opiniones del eminente publicista á este respecto, y creo que lo que llevo asentado basta para demostrar plenamente que el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles, establece un procedimiento que pugna abiertamente con los principios consagrados en los artículos 16 y 17 de nuestra Carta Magna.

CAPITULO V.

EL JUICIO DE JACTANCIA ANTE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO Y LOS PRINCIPIOS DE LEGISLACIÓN.

Abordo la última parte de mi estudio, en la que sin duda tendré que volver á hacer mención de algunas de las razones anteriormente expuestas, porque según creo, para examinar cualquiera disposición legal desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho, ningún criterio puede ser mejor ni más adecuado para ese objeto, que los principios científicos de Legislación, deducidos de la revelación de las leyes sociales, hecha por la experiencia humana, que no puede tener otro origen que la atenta observación del resultado que ha dado en la práctica la disposición legal que se examina; criterio que en ninguna parte podremos encontrar mejor en el presente caso que en el origen, evolución y desarrollo histórico de las leyes del procedimiento.

En efecto, al estudiar la historia del Derecho, se palpa que el procedimiento nos ofrece muy variados y distintos aspectos,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

según las diversas edades de los pueblos, y según el mayor ó menor adelanto y cultura de las sociedades.

Desde las disposiciones legales que entre los indus y otros pueblos ordenaban una forma de procedimiento como las pruebas de la doble pesada, del fierro rojo, del fuego y del agua, hasta la época actual en que las formas del procedimiento se han dulcificado en extremo, han transcurrido un sinnúmero de años, durante los cuales ha recorrido paulatinamente la humanidad, esa enorme distancia que separa aquel procedimiento rudo y primitivo del actual procedimiento. Esa marcha paulatina de las sociedades, demuestra con evidencia que el principio que el gran filósofo y naturalista inglés aplicaba á sus teorías sobre Historia Natural, es también perfectamente aplicable á las sociedades, porque, en efecto, ellas, como la Naturaleza, nada hacen por salto, sino que su desarrollo, sus adelantos y progresos, se hallan también irremisiblemente sujetos á la ley de evolución.

Para no extenderme en el examen del desarrollo histórico de las leyes del procedimiento, me concretaré á analizar de una manera breve y sucinta las diversas formas de esas leyes en el Derecho Romano, que es el que mejor patentiza la conclusión filosófica á que deberé llegar.

Recorriendo el Derecho Romano en su parte relativa al tratado de acciones, se observa desde luego que la administración de justicia en Roma pasó sucesiva y progresivamente por tres sistemas de procedimiento: el de *las acciones de la ley*, el *procedimiento formulario* y el *procedimiento extraordinario*, que marcan perfectamente las etapas diversas del desenvolvimiento social de aquella que fué soberana del mundo.

El *sacramentum*, la *judicis postulatio*, la *conditio*, la *manus injectio* y la *pignoris capio*, constituyendo el primer sistema de procedimiento, que reina exclusivamente, si no de hecho, al menos de derecho, hasta la LEY ÆBUTIA (año 577 ó 583 de Roma), es el sistema característico del derecho de los Quirites, sellado con toda la rudeza originaria, con huellas del predominio de las *castas* sacerdotal y patricia, con sus símbolos en acciones, palabras y objetos, con la suma depositada en manos del pontífice en la *actio sacramenti;* el *Judicem, arbitremve, postulo uti des* en la *judicis postulatio;* el *vadimonium* en la *condictio;* el *addictus* en la *manus injectio* y los ademanes y palabras solemnes de la *pignoris capio*, nos revelan los actos de una edad primitiva, propios de la civilización todavía informe de un pueblo.

El segundo sistema, que domina hasta el reinado de Diocleciano (año 1047 de Roma y 294 de J. C.), es, como dice con razón Ortolan, [1] "la obra incesante del derecho pretoriano y de "la jurisprudencia filosófica. Es la administración de justicia que, "de la dominación patricia pasa á la ciencia; es el genio jurídico "de Roma que se transforma: de patricio y quiritario que era, "se hace plebeyo y humanitario; es la plebe que se manumite, "es el extranjero á quien se hace partícipe de la justicia roma-"na." Pero que aunque ya no exige de las partes los ademanes y palabras sacramentales y es menos rigorista para con los litigantes, exige, sin embargo, del magistrado que, al instituir al juez que debe dirimir la controversia, determine la extensión de sus poderes y las cuestiones por resolver en la fórmula. La *in jus vocatio*, la *litis denunciatio* y la *actio postulatio*, ante el magistrado, la *comperendinatio*, la *causæ collectio* y la *causæ peroratio*, ante el juez, la precisión de volver ante el magistrado para la *manus injectio*, así como la *demonstratio*, la *intentio*, la *condemnatio* y la *adjudicatio* de la *formula*, demuestran que la sociedad romana había avanzado bastante en el sendero de la civilización.

Por fin, el tercer sistema, que de una excepción que era se convirtió en una regla general, primero en las provincias y luego en todo el imperio, manifiesta un notable adelanto en la cultura del pueblo romano; pues significa nada menos que la autoridad gubernamental revistiendo un carácter imponente, y

1 Histoire de la legislation romaine, Generalization, pág. 663, edit. de 1884.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

atribuyéndose las funciones públicas de la administración de justicia.

Por un examen semejante de las leyes del procedimiento español, desde el *Código de Eurico* ó *de Tolosa* hasta la *Novísima Recopilación*, á través del *Fuero Juzgo*, el *Espéculo* y el *Fuero Real*, las *Siete Partidas*, el *Ordenamiento de Alcalá*, las *Leyes de Toro*, las *Ordenanzas de Madrid y de Alcalá* y la *Nueva Recopilación*, encontraremos igual marcha progresiva en esas leyes, que fueron por mucho tiempo las nuestras, hasta que en 1872 apareció el primer Código de Procedimientos Civiles mexicano, enteramente distinto en la forma y en el fondo de las disposiciones que en esa materia le precedieron.

¿Qué consecuencia filosófica se deduce del anterior examen histórico? La siguiente, que me servirá de base y fundamento para juzgar el artículo de que trato bajo el punto de vista de la Filosofía del Derecho. Las leyes adjetivas, como las llama Bentham, surgieron de la necesidad de allanar las dificultades que brotaron á su vez como consecuencia necesaria de la aplicación de las leyes naturales, primeras inspiraciones de las sociedades rudimentarias. Estas leyes adjetivas, como las sustantivas, fueron acomodándose precisamente á las circunstancias de cada época, llenando las necesidades de las sociedades que iban á regir, debiendo transformarse ó derogarse, según las variaciones que sufrían esas sociedades en los usos y costumbres de sus individuos.

Sentado esto, ¿qué criterio debe servir de norma al legislador para que sus preceptos llenen las condiciones de una buena legislación? ¿Qué debe hacer para elaborar leyes que no sean injustas, rutinarias ni absurdas? Debe estudiar los usos, costumbres y necesidades del pueblo para quien va á legislar, y tener esto en cuenta para ponerlo de acuerdo con el fin que se proponen las leyes.[1]

1 En cuanto á las leyes del procedimiento en particular, el jurisconsulto español Reus, dice lo siguiente:

"El objeto de las leyes del procedimiento es la averiguación de la verdad y la justa aplicación del derecho: son las que sirven de garantía á los litigantes y aseguran la recta administración de justicia; y de aquí *la necesidad de observar las formas del juicio*, hasta el punto de que su infracción se ha reputado siempre como causa de nulidad del procedimiento y da lugar al recurso de casación en la forma." (Emilio Reus, Ley de Enjuiciamiento civil española de 1881, tomo IV, pág. 30). Ya he procurado demostrar que el art. 23 del Código de Procedimientos civiles *no observa las formas del juicio*.

Ahora bien, ¿el art. 23 del Código de Procedimientos Civiles se acomoda ó está de acuerdo con los usos, costumbres y necesidades de nuestra sociedad? Yo contesto que no, de una manera terminante, porque nuestros usos, costumbres y necesidades, nuestro actual estado y adelanto social, repudian toda ley que rompa abiertamente con los principios de inmutable justicia que han reinado en las leyes del procedimiento hasta en los primitivos tiempos de las sociedades más rudas. "*Nadie puede ser condenado sin ser oído*," es un principio, una prescripción justísima proclamada en todas las edades y que los romanos consignaban ya en sus leyes.[1]

Nuestros usos, costumbres y necesidades sociales se descubren y detallan en nuestras instituciones democráticas. Con estas instituciones, no puede ni podrá jamás estar de acuerdo, un precepto que vulnere lo que hasta bajo el régimen despótico más absoluto se ha considerado siempre como un derecho natural del hombre. Aun en aquellos pueblos y en aquellas épocas en que ha privado el absurdo procedimiento judicial de las ordalías, no ha dejado de considerarse como un derecho del acusado el que compareciera á tomar parte en las terribles pruebas, que las rudas inteligencias de esos pueblos y de esas épocas, consideraban en su resultado como infalibles juicios de la divinidad, de suerte que hasta la misma divinidad tenía que oír ó juzgar de alguna otra manera para poder condenar; y hoy que el progreso y la civilización han hundido para siempre en el polvo á las divinidades y al derecho de ellas emanado, ¿puede ser racional, científico, equitativo y justo, lo que la humanidad juzgara ya en sus primeras edades como arbitrario, impío, irracional é inicuo?

1 Ley 17, Cod. de jure fisci.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Por otra parte, es una verdad palmaria que el legislador debe preocuparse más que nada de dar preceptos en sus leyes que cierren hasta donde es posible la entrada al abuso y la injusticia en la práctica, por más que espíritus superficiales digan que la ley no puede ni debe prever los casos extraordinarios. Y si esto es una verdad palmaria, con toda evidencia que el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles no fué el producto de tan loable cuanto necesaria preocupación de nuestro legislador, sino más bien el resultado, como dice muy bien Valabrègue, *"de una opinión que tiene en su apoyo toda la fuerza de la rutina y el prejuicio."*

¡A cuántas injusticias, en efecto, y cuántos absurdos se presta el artículo de que me ocupo, tal como se encuentra redactada su fracción I!

Ya en mis anteriores capítulos he tratado de esbozar ligeramente esos absurdos y esas injusticias, pero debo insistir, sin embargo, en ellos, con el fin de hacerlos más patentes.

Las disposiciones legales más buenas y más santas serán enteramente negativas si no se pueden llevar al terreno de la práctica. Si, al contrario, en la práctica tenemos aplicadas leyes que choquen con los más rudimentales principios de la justicia, esas leyes merecerán la execración de la moral y la filosofía del derecho, y sólo serán aprobadas por aquellos que miren en sus preceptos un barniz de legalidad con que encubren sus reprobados fines.[1]

¿Cuáles son los casos que en la práctica pueden presentarse y en los que el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles sirva de máscara legal á la maldad, á la injusticia y al fraude? Son múltiples y variados, pero bástame indicar algunos para patentizar lo absurdo del *juicio de jactancia* tal como está prescrito por nuestra ley.

1 Corroborando lo que asiento y como una prueba de la indignación que provocan las leyes injustas ó absurdas, citaré la bella cuanto enérgica frase con que Mirabeau terminó el magnífico discurso con que combatió en la Asamblea Constituyente la indisolubilidad del matrimonio: "Por último, señores, si promulgáis esa ley, juro violarla."

Supóngase, por ejemplo, que con el objeto de demostrar á varias personas que podré más tarde entrar en negocios con ellas, les digo que, aunque carezco de fondos en ese instante, podré tenerlos en un término de tres meses, pues Juan me adeuda la suma de quinientos pesos. Las personas con quienes yo he conversado de esta suerte, para convencerse de la verdad de mis asertos, ó con el fin de tener mayor seguridad en los negocios que emprendan conmigo, ó bien en simple comunicación, refieren á Juan lo que yo les he comunicado. Juan, que sabe que los documentos justificativos de deuda para conmigo no se hallan en mi poder en ese momento, sino que los tiene en su poder mi apoderado que está en Europa, de donde no podrá enviármelos en menos de un mes, ve la oportunidad propicia de librarse de la obligación de pagarme los quinientos pesos que me adeuda, valiéndose para ello del procedimiento sencillísimo que le permite usar el artículo 23 del Código de Procedimientos. Ocurre al juez y le dice: "Fulano se jacta públicamente de que le adeudo quinientos pesos; señálale un término para que ejercite su acción, y si no lo hace en el término que le señales, dalo por desistido de ella." El juez, en un auto, sencillísimo también, provee lo que sigue: "Como lo pide: se señala á fulano el término de ocho dias[1] para que ejercite la acción de que Juan dice que se jacta (sin que á mí, juez, me conste el hecho de la jactancia, debería agregar), apercibido de darlo por desistido de ella si no la ejercita en el término fijado." Se me notifica este auto, y me encuentro desde luego con el siguiente dilema terrible, cuyos extremos siempre me traerán como ineludible solución la pérdida irremisible de los quinientos pesos que me adeuda Juan: ó ejercito mi acción dentro del plazo señalado, ó no la ejercito; si lo primero, no podré comprobarla, Juan será absuelto y perderé desde luego mis quinientos pesos; si lo segundo, el juez me

1 Término que no podria yo pedir al juez que me ampliara para probar mi acción, pues el artículo 238 del propio Código le prohibe terminantemente concederlo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dará por desistido de ella y también perderé mis quinientos pesos.

Dense á este caso, que sin duda puede presentarse en la práctica, todos los matices que se quiera. Supóngase, por ejemplo, que yo no me he jactado públicamente, y no obstante, se me exige ejercitar mi acción en el instante mismo que yo no puedo ó no quiero ejercitarla, porque mi deudor está entonces insolvente y espero que reciba la herencia que le dejará su padre; supóngase que ni se me notifica siquiera el auto en que el juez me señala el término para que ejercite mi acción, porque el actuario venal fué comprado por mi deudor con diez, veinte ó cien pesos, para poner razón de que fuí notificado y no firmé por no querer hacerlo, venalidad contra la que tendría yo aún un recurso, pero recurso ilusorio, supuesto que sería el de proceder criminalmente contra el actuario, que con la prisión no me indemnizaría nunca de mis intereses; supóngase, que el juez, amigo de mi deudor, me señala un término en extremo corto, supuesto que el artículo 23 del Código de Procedimientos lo autoriza para señalarme desde veinticuatro horas hasta mil años; supóngase que el juez, fundándose en el artículo 115, fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles, me señala el término de tres días para que ejercite mi acción, término demasiado exiguo para que me proporcione los medios de comprobar mi acción; supónganse otros varios aspectos de estos procedimientos que nadie duda pueden presentarse en la práctica, y dígaseme después si no se presta el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles á encubrir el abuso, la injusticia y el fraude.

Pero no sólo son el abuso, la injusticia y el fraude lo que ampara el mencionado artículo, sino que además establece un incalificable absurdo.

Supóngase, por ejemplo, que mi crédito aún no se vencía, y que por esto no ejercité mis derechos en el término que se me señaló por el juez, derechos que sólo tenía en perspectiva, ó supóngase que al ser citado pretendí ejercitarlos y el juez

absolvió á mi deudor, porque su obligación no era de plazo cumplido. En una ú otra hipótesis, cuando llega el momento en que se cumple el plazo, quiero hacer efectivo mi derecho y demando á mi deudor, quien me opone, por ejemplo, la excepción de cosa juzgada, fundándose en que ya se me dió por desistido de esa acción. El juez ante quien demando á mi deudor, ¿qué hace? O lo absuelve ó lo condena al pago. En el primer caso, me despoja de mis bienes en provecho de mi deudor, de la manera más arbitraria y contra todo derecho. En el segundo caso, dice implícitamente que la resolución del anterior juez que me dió por desistido de mi acción, es nula y de ningún valor, por más que se haya fundado en el artículo 23 de un código. En ambos casos, pues, se llega al absurdo.

Y como si no bastara que el artículo de que trato ampare el abuso, la injusticia y el fraude, y establezca el absurdo, aún surge en su contra la objeción más terrible que puede hacérsele á una ley y que es la de su completa inutilidad. Supóngase que el que me demanda como jactancioso es mi deudor en efecto, que entablo mi acción en el término que el juez me señala y no la pruebo por no tener entonces á mi disposición los documentos en que la fundo; el juez, á mí demandante, si no entablo mi acción convencido de mi impotencia para probarla, me dan por desistido de ella; en uno y otro caso, yo continúo diciendo que mi demandante es mi deudor, á pesar del juez y del artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué consiguió con demandarme? Nada. ¿Podrá negar que me debe mientras no me haya pagado? ¿Podrá negar que me ha hecho un miserable robo, enteramente legal, es cierto, pero siempre robo? Pero aun hay más. ¿Se quiere defender el artículo de que trato, como sanción penal? Es muy discutible la proporcionalidad de la pena terrible que ese artículo impone al que siendo en efecto acreedor, pierde para siempre en derecho, tan sólo por no haber podido comprobar ese derecho en el perentorio término que le señaló un juez quizá venal y arbitrario.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Debo apuntar aquí tres distintos casos del *juicio de jactancia* que he conocido, y que ponen en evidencia hasta qué punto da origen ese llamado juicio á las más terribles increpaciones por parte de la razón, de la moral y de las más rudimentales nociones de Filosofía del Derecho.

Sea el primero el siguiente: H. demanda á N. como jactancioso ante un Juzgado de lo Civil; el juez, fundado en el artículo 922 del Código de Procedimientos Civiles, tramita esa demanda en juicio ordinario y dice en su auto: "Traslado á la contraria en vía ordinaria, por el término de la ley;" el demandante no se conforma con este auto, y al ser notificado, apela; el juez, siguiendo las prescripciones relativas á los juicios ordinarios, admite la apelación en ambos efectos y remite los autos al superior; éste, ¡oh sorpresa! revoca el auto del inferior, fundándose en que: "*el juicio de jactancia es un asunto de jurisdicción voluntaria.*"

El segundo caso es el siguiente: H. demanda á N. ante un Juzgado de lo Civil; N., antes de contestar la demanda, se dirige á un Juzgado Menor y demanda á H. *como jactancioso!!!*

El tercer caso tiene alguna semejanza con el anterior, y es el que sigue, que yo mismo he palpado cuando estaba á punto de terminar este trabajo, caso en el que tomé alguna parte, aunque indirecta. Siendo yo apoderado jurídico general del Sr. C. E., acomodado propietario y comerciante, fuí requerido por este señor para proceder criminalmente contra uno de sus dependientes que, con abuso de confianza, había dispuesto de ochocientos y tantos pesos, producto de efectos que se le confiaron para su expendio. Llamé al dependiente y convino en que le faltaba esa suma, suplicándonos tanto á su patrón como á mí, que le permitiésemos hacer revisar su cuenta por otra persona, para proponernos después el pago de la suma de que había dispuesto, en condiciones que le fuera posible cumplir con exactitud. La bondad del Sr. E., así como mi poco interés en hundir por cierto tiempo en las mazmorras de Belem á un infeliz, cuya familia sufriría más que nadie las terribles consecuencias, nos inclinaron á conceder á B. lo que pedía. Este no se presentó en el plazo que él mismo se había fijado, y, ¿cuál no sería la sorpresa del Sr. E. al recibir como veinte dias después, poco más ó menos, un instructivo de un Juzgado Civil en que se le notificaba que B. lo demandaba como jactancioso! Por supuesto que B. no obraba por inspiración propia, sino aconsejado por el peor de los espíritus santos, uno de tantos homeópatas de la abogacía, uno de esos tinterillos ó pica-pleitos, que por desgracia son tolerados en los tribunales, con desdoro de la justicia, para mayor auge de la chicana y menoscabo de los intereses de los infelices que tienen la desdicha de caer en sus afiladas garras.

Estoy seguro de que consumiría tiempo y espacio citando casos que, verdaderos y supuestos, pudieran demostrar la injusticia palmaria del *juicio de jactancia*, tal como se halla consignado en el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles; pero bastan los casos supuestos y los que he citado por haberse presentado en la práctica, para hacer patente que ese precepto legal da franca entrada al abuso, al fraude y la injusticia; conduce al absurdo, resulta inútil y como sanción penal no es proporcional ni equitativo, aspectos todos bajo los cuales pugna con la Filosofía del Derecho y los principios de Legislación.

VI

De todo lo expuesto: ¿cuáles son las conclusiones lógicas que se deducen necesariamente? Las siguientes:

Primera.—La acción de jactancia no existe prescrita terminantemente en el Derecho Romano. Apareció en el Derecho Español con la Ley 46, Tít. II, Part. 3ª, transmitiéndose del Derecho Español al Derecho Patrio, que no la consignó en el Código de Procedimientos Civiles de 1872, que la hizo figurar en el de 1880, dándole una significación y alcance incompatibles con los progresos del Derecho Público, supuesto que en ese Código se preceptuaba *el caso de la ley Diffamari*,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en un país donde hacía más de cincuenta años que la esclavitud estaba abolida, y que, por fin, la implantó en el Código de Procedimientos Civiles de 1884, reformando el incalificable anacronismo cometido por los legisladores de 1880, pero sin llenar aún del todo las exigencias científicas de los principios de Legislación y Filosofía del Derecho.

Segunda.—El art. 23 del Código de Procedimientos Civiles, rompe con los principios del Código Civil, porque usurpa en sus prescripciones disposiciones que sólo deben consignarse en este último, y porque da un medio de perder los derechos, que se separa de todos los que el Código Civil señala para la extinción de las obligaciones.

Tercera.—El artículo en cuestión, no se adapta al sistema del Código en que se encuentra, porque establece un derecho propiamente dicho y no un procedimiento, porque tampoco prescribe un juicio, supuesto que el procedimiento que establece carece de algunos de los elementos esenciales de todo juicio, según el mismo Código; y, por último, porque no sigue la tramitación del juicio ordinario como lo ordena el art. 922 del propio cuerpo de leyes, sino una tramitación *sui generis* y á todas luces absurda.

Cuarta.—La repetida prescripción es anticonstitucional, porque viola las garantías otorgadas en los arts. 16 y 17 de nuestro Código Político, al establecer un procedimiento en virtud del cual se nos arrebatan nuestros derechos sin audiencia ni defensa previas.

Quinta.—Ese precepto es injusto bajo el aspecto de la moral y de la Filosofía del Derecho, porque da franca entrada al abuso, al fraude y la injusticia; porque conduce al absurdo y como sanción penal no es proporcional y resulta inútil, defectos por los que también pugna con los sanos y científicos principios de la ciencia de la Legislación.

CONCLUSION.

¿Cuál es la deducción lógica que se desprende forzosamente de las anteriores conclusiones? La siguiente á mi entender: "El art. 23 del Código de Procedimientos Civiles, requiere ur-"gentemente una reforma que responda mejor á las exigen-"cias de la justicia, de la filosofía y de los principios de Legis-"lación y Constitucionales."

¿En qué debe consistir esa reforma? Sin duda alguna que mi reconocida insuficiencia no puede autorizarme para proponer esa reforma, especialmente cuando hasta los hombres de saber y de experiencia suelen equivocarse, como lo tengo demostrado respecto de los autores de nuestro Código de Procedimientos Civiles de 1880. Pero si á pesar de ser incompetente para ello, tengo de formular, siquiera sea tímidamente, cuál pudiera ser esa reforma, propondría la siguiente: "Su-"prímase por completo del Código de Procedimientos Civiles "cuanto su artículo 23 tenga de derechos propiamente dichos, "para consignar éstos en el Código Civil, donde deben con-"signarse; establézcase un procedimiento para ejercitar esos "derechos, que esté sujeto al sistema de todo juicio y no pri-"ve á una de las partes de los derechos de audiencia y defensa "previas, vulnerando así las garantías individuales; prescríbase, "por último, que el *juicio de jactancia* se descomponga en *jui-"cio de jactancia* propiamente dicho, que conste de demanda, "contestación, prueba y sentencia, y juicio en el que, el decla-"rado jactancioso, por esa sentencia, entable la acción de que "se jacta, que seguiría los trámites relativos."

¿Qué razones influyeron en mi ánimo para no obtar porque se desechara por completo el *juicio de jactancia?* Dos razones, poderosas según entiendo. La primera es la consideración de que los miembros de una sociedad necesitan estar siempre á cubierto de los dichos calumniosamente jactanciosos que pudieran menoscabar su crédito y reputación. La segunda, es la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

siguiente, que me hizo observar con justicia mi respetado cuanto querido y sabio maestro el Sr. Lic. Protasio P. Tagle, al demostrarme que toda sanción civil que era eficaz en la legislación de un pueblo para reprimir una infracción á la ley, sustituyendo á una acción penal, revelaba á las claras un progreso y adelanto social.

Así, pues, la equidad y el buen orden social, reclamando una sanción para que no se arrebate el crédito á ninguno impunemente, y el progreso de la sociedad satisfecho con una sanción civil, en vez de la penal de difamación, por ejemplo, inclinaron mi ánimo á concluir que es necesaria una reforma del artículo legal, objeto de mi estudio, y no su derogación completa, por más que el mencionado artículo pudiera considerarse también como una invasión que el Derecho Civil, y esto en una ley adjetiva, hace al Derecho Penal en sus prescripciones; pues si como dice el art. 642 del Código Penal: "La difamación consiste en comunicar dolosamente á una ó "más personas la imputación que se hace á otra de un hecho "cierto ó falso, determinado ó indeterminado, que pueda cau-"sarle deshonra ó descrédito, ó exponerlo al desprecio de al-"guno," no se puede dejar de convenir en que el que se jacta de que otro es su deudor cuando no lo es, produce dolosamente un positivo y verdadero descrédito con su jactancia, lo que constituye responsable de un delito.

RICARDO LÓPEZ Y PARRA.

ENSAYOS JURIDICOS.

Excepción de "non numerata pecunia."

A MI ESTIMADO MAESTEO EL SR. LIC. FRANCISCO DE P. SEGURA.

La ciencia del derecho, en sus múltiples y grandiosas manifestaciones, ligada con los otros conocimientos humanos que han venido á iluminarla, sirviéndole de auxiliar poderoso en la investigación de la verdad, no le ha bastado encontrar principios abstractos y concepciones elevadas para fijar la distribución de lo que á cada uno pertenece. Esos dogmas sin movimiento y sin vigor, que producto fueron de los estudios y discusión de los sabios, necesitan fundirse en preceptos de ley positiva y ampararse con el poder y la fuerza, á fin de poner un hasta aquí á las contiendas de los hombres. Fué preciso que algo superior viniera á imponérselos á los demás y que al dárselas á conocer al pueblo, en la plaza pública, en el mercado, en el foro, se advirtiera á todos, que las armas vigilarían por que se les respetase, y que severas penas caerían sobre la cabeza de quien lograra infringirlos.

De esta suerte se pudo establacer el derecho positivo, y sin embargo, faltaba algo capaz de actualizarlo y de que lo llevase á producir los efectos á que estaba destinado. En efecto, de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

siguiente, que me hizo observar con justicia mi respetado cuanto querido y sabio maestro el Sr. Lic. Protasio P. Tagle, al demostrarme que toda sanción civil que era eficaz en la legislación de un pueblo para reprimir una infracción á la ley, sustituyendo á una acción penal, revelaba á las claras un progreso y adelanto social.

Así, pues, la equidad y el buen orden social, reclamando una sanción para que no se arrebate el crédito á ninguno impunemente, y el progreso de la sociedad satisfecho con una sanción civil, en vez de la penal de difamación, por ejemplo, inclinaron mi ánimo á concluir que es necesaria una reforma del artículo legal, objeto de mi estudio, y no su derogación completa, por más que el mencionado artículo pudiera considerarse también como una invasión que el Derecho Civil, y esto en una ley adjetiva, hace al Derecho Penal en sus prescripciones; pues si como dice el art. 642 del Código Penal: "La difamación consiste en comunicar dolosamente á una ó "más personas la imputación que se hace á otra de un hecho "cierto ó falso, determinado ó indeterminado, que pueda cau-"sarle deshonra ó descrédito, ó exponerlo al desprecio de al-"guno," no se puede dejar de convenir en que el que se jacta de que otro es su deudor cuando no lo es, produce dolosamente un positivo y verdadero descrédito con su jactancia, lo que constituye responsable de un delito.

RICARDO LÓPEZ Y PARRA.

ENSAYOS JURIDICOS.

Excepción de "non numerata pecunia."

A MI ESTIMADO MAESTEO EL SR. LIC. FRANCISCO DE P. SEGURA.

La ciencia del derecho, en sus múltiples y grandiosas manifestaciones, ligada con los otros conocimientos humanos que han venido á iluminarla, sirviéndole de auxiliar poderoso en la investigación de la verdad, no le ha bastado encontrar principios abstractos y concepciones elevadas para fijar la distribución de lo que á cada uno pertenece. Esos dogmas sin movimiento y sin vigor, que producto fueron de los estudios y discusión de los sabios, necesitan fundirse en preceptos de ley positiva y ampararse con el poder y la fuerza, á fin de poner un hasta aquí á las contiendas de los hombres. Fué preciso que algo superior viniera á imponérselos á los demás y que al dárselas á conocer al pueblo, en la plaza pública, en el mercado, en el foro, se advirtiera á todos, que las armas vigilarían por que se les respetase, y que severas penas caerían sobre la cabeza de quien lograra infringirlos.

De esta suerte se pudo establacer el derecho positivo, y sin embargo, faltaba algo capaz de actualizarlo y de que lo llevase á producir los efectos á que estaba destinado. En efecto, de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nada serviría la ley que regulase los derechos del individuo, de la familia, de la sociedad y del Estado, si no se enseñase el camino que debe seguirse para prosperar, la ruta por donde hay que dirigirse para convertir, de vanas é ilusorias, en positivas y palpables, las ofertas consignadas en la ley. Sin esas indicaciones se produciría el resultado de que nadie alcanzase sus legítimas esperanzas, ó lo que es peor, que todos se atropellasen para obtenerlas, y entonces esa ley, lejos de conseguir su principal objeto, se traduciría en un semillero de dificultades y de luchas. El orden, el sistema, el método, en fin, se abandonarían en lo absoluto, y la sociedad, presa de amargura, concluiría por destruirse á sí misma, y la definición de esos derechos, creados para su beneficio, sería el elemento más eficaz para acabar con ella. Las contiendas que se pretendió evitar, se enardecerían, terminando por ser la declaración del derecho, el anatema terrible arrojado en medio de los asociados para que mutuamente se destrozasen, y el deseo de cambiar esa ciencia, de puramente especulativa, en práctica, claudicaría por su base, limitándose á vivir petrificada en las páginas muertas de los libros inventados por los hombres científicos, y lo más que podría decirse era que existía un ramo de conocimientos lógico y atractivo por las delicadezas de su asunto, pero que desgraciadamente no podían impartir sus beneficios á la humanidad, porque la presentación de sus axiomas acarrearían una ruina inevitable. Con el propósito de remediar males tan serios, nacen y se desarrollan con general aplauso las leyes de procedimientos, cuya misión principal consiste en vivificar los preceptos de la ley sustantiva, en movilizarlos, sistemando su manera de obrar para entregarlos á la sociedad en una forma de la cual puedan servirse con seguridad y acudiendo á las autoridades encargadas especialmente de ponerlos en inmediata ejecución.

Fundidos, pues, los preceptos de la ley sustantiva y adjetiva, se establece entre ambos la relación íntima, indivisible y perfecta que en los hombres se advierte entre el alma y el

cuerpo, y en esta situación, los conflictos se suspenden y las luchas se apagan. El fin inminentemente práctico que se propone realizar la ciencia, está conseguido. Al revestirse la ley de una forma que la hace tangible, al vaciarse en un molde que la pone al alcance de aquellos que la van á utilizar, al corporizarse, en una palabra, vemos brotar algo nuevo, cuya necesidad preveíamos y cuya existencia no podíamos adivinar, y que desciende de las concepciones teóricas para ajustarse á las necesidades sociales; aparece la acción, lo diremos, por último, que no es otra cosa que el derecho en ejercicio.

Constituida por esta combinación de preceptos, se desenvuelve y se entrega en manos de los particulares, para que con ella ataquen al que pretenda usurpar sus derechos; es, pues, un medio ofensivo, digámoslo así, que se endereza contra cualquiera que tácita ó expresamente desconoce el derecho que nos asiste para solicitar alguna cosa. Llegados aquí surge el juicio, con el carácter de un verdadero combate, y como sería inicuo conceder á uno de la contienda todas las armas y privar de otras á su adversario, entregándole inerme, lo que haría fácil y seguro el triunfo de aquel, y como por otra parte, hechos anteriores coexistentes ó posteriores á la acción, podían haberla modificado ó destruido, es menester la creación de otra entidad, lo suficientemente poderosa para aplazar ó abatir esa acción, otorgando al que se ve atacado un medio defensivo que iguale en posición con la de aquel que en su contra se levanta. En este estado se nos presenta la excepción, hija también de un derecho, y que frente á frente de la acción la contrarresta y enerva, protegiendo al injustamente arrastrado al litigio, con manto impenetrable ante el cual se estrella la acción, como se embota la lanza contra el bruñido peto.

Haciendo á un lado la división de las excepciones, la moralidad ó inmoralidad que se puede hallar en el empleo de algunas de ellas, por ahora nos quedaremos con estas ideas, para pasar á ocuparnos de una que presenta rasgos característicos, y que, nacida entre los romanos, se ha transmitido hasta nos-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

otros, obedeciendo su permanencia en la legislación, no á un espíritu de rutina, sino fundada en rasgos que justifican su existencia. Nos referimos á la excepción conocida bajo el nombre de "non numerata pecunia," sobre la cual tenemos que preguntarnos á qué clase pertenece, qué efectos produce, á cuáles contratos se aplica, si introduce modificaciones al sistema general de pruebas y si su existencia en nuestro Código es ó no conveniente.

Para abordar estas cuestiones, es preciso que las estudiemos en el Derecho Romano, en el español y en el nuestro, porque en esos tres afecta matices diferentes, que hacen que no pueda darse una solución general y acertada para todos, aunque sí se podía, y nos apresuramos á anticiparlo, para descartar desde luego ese debate, establecer de antemano el grupo á que en su clasificación corresponde y los efectos que produce.

Las excepciones se dividen en perentorias y dilatorias: las primeras ponen como cualidad esencial, su poder de minar para siempre la acción, y las segundas se contraen á dilatar el ejercicio de ella. Ahora bien, sostenemos que la excepción propuesta es perentoria, fundándonos en la opinión unánime de los autores (cód. L, IV De non num, pec. IV XXX Just. 528. Vinio cap. XLI, Magro y Beleña Elucidationes Instit. Lib. V tít. 13, part. 2. Heinecio Der. Cir. tom. 2. pág. 890. Antonio Gómez, Resoluciones Varias, pág. 71. po. 7. Harprertar, Lib. III, tít. XXII, po. 11. Mor. Sala Mextom. 2, pág. 232, po. 15. Manresa y Reus. tom. 2, pág. 98. Escriche, palabra Exc. non num. pec. Gregorio López, glosa 1ª 1. 9. tít. 1. P. 5. Mateos Alarcón tom. 2 pág. 361) y citaremos por más expresivas, las siguientes palabras de Vinio (loc. cit.) "Sed illa, quæ est confesione mutui accepti, intra bienieum competit, merecivilis est, et exitu inutilis quia per exceptionem perpetuam non numeratæ pecuniæ infirmatur," y llama en su apoyo la ley 112 de reg. jur.: "Nihil interset, dice, ipso jurequis actionen non habeat, an per exceptionem infirmetur," y en la razón de que bien sea que se le asimile á la excepción de dolo entre los

antiguos, ó bien se le tome tal como se le encuentra en la jurisprudencia moderna, desde el momento en que no se prueba la entrega del dinero, y prospera, por lo mismo, la excepción, ya en ningún tiempo podrá moverse cuestión sobre el asunto, por quedar roto para siempre el vínculo obligatorio que se supuso existir entre dos personas.

Consideramos de tal manera indiscutible lo que acabamos de exponer, como que en nuestro Código está colocada esa defensa en el título de prescripción, y á la prescripción ni por un momento se le ha negado su carácter de perpetua. Sentado lo anterior, redundante nos parece detenernos á describir los efectos que produce; sólo notaremos que juega de dos modos, uno como acción en devolución del Vale llamado por los romanos "canditio–chirographi" (Fresquet. Droit Romaine, tom. 2, pág. 157) y otro como excepción propiamente dicha, y que consiste en que á la acción ejercitada por el acreedor, se le opone el no haberse contado y entregado las especies.

Hechas estas observaciones, que se pueden aplicar á las tres legislaciones indicadas, pasemos á ocuparnos del estudio de los demás puntos en cada una de ellas y nos encontramos con que esta excepción, en derecho romano podía tener lugar en todos aquellos contratos que revistiesen la solemnidad *litteris* ó *verbis*, interviniendo en ellos dinero ú otras especies que se acostumbra contrapesar ó medir.—Textos evidentes así nos lo aseguran, y entre ellos citaremos los siguientes: "In contractibus in quibus pecuniæ vel *aliæ res* nummeratæ vel data esse conscribuntur, non intra quinquenium quod antes constitum erat, non numeratæ pecuniæ objicere possit cüi accepisse pecunias vel alias rescriptus sit, vel succesor ejus, sed intra solum bienieum continuum ut so lapso nullo modo quere la non numeratæ pecuniæ introducit possit."—La Constitución de Alejandro (Cód. 4, 30) nos dice con entera generalidad: "Ignorare autern non debes, non nummeratæ pecuniæ exceptionem, ibid locum habere ubi quasi credita pecunia petitur . . . ." y después agrega que no tendría lugar para el caso de que la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

obligación se transfiriese á persona ni personas, ni tampoco en la transacción, pero sí en la hipoteca y en la *cautio*, etc., como lo disponen Diocletiano y Maximiano, Caracalla y Alejandro Severo en sus constituciones (Ib. 6, 11, const. D. y M. 7. 7. ib, const. C. y A. S.)

Teófilo, en su paráfrasis, explica cómo una obligación *consensu* puede convertirse en *litteris* y entonces también cabe la excepción.

Harprector (loc. cit pos. 41 y 42) asegura que era de uso entre los mercaderes y que se extendía su beneficio á los herederos del suscritor, del quirógrafo y, por último, la misma excepción se encuentra en materia dotal, pero con la salvedad ya mencionada, es á saber, que se ejercitase dentro del término fijado por Justiniano, á quien se hace la imputación de que, al admitir esta defensa, vino á echar por tierra el contrato literal, y de aquí se concluye que sólo para que resultase simétrica la clasificación por él adoptada, llamó obligación *litteris* á algo que él mismo quitó su carácter, toda vez que ya no nacía el derecho de la escritura material, sino de la numeración de las especies.

No son, sin embargo, exactos estos reproches, porque ni fué Justiniano el creador de esa excepción, ni ella, como hemos demostrado, se aplicaba únicamente al contrato *litteris*, sino de igual modo al *verbis*, particularmente cuando en éste se trataba de un préstamo de consumo (Otolan, tom. 3º, pág. 265). Así es que entonces, apoyados en la misma razón, pudiérase afirmar que el contrato *verbis* había desaparecido ya en tiempo del emperador bizantino, y no es exacto esto, pues lo único que de verdad se encuentra, es que él no hizo más que reglamentar el contrato literal como lo encontró en su época. Los fragmentos transcritos así lo prueban, y á mayor abundamiento tenemos dos del jurisconsulto Gallo (L. III, P. 131 y 134) de los cuales se infiere que son los mismos quirógrafos del tiempo de este escritor los que han pasado á las institutas.

De la jurisprudencia romana sacamos, pues, dos conclusiones: la excepción de *non nummeratæ pecuniæ* no es exclusiva del contrato de mutuo, sino que también se extiende á otros contratos; y Justiniano no destruyó el contrato *litteris*, sino que se limitó á ser el eco de una doctrina establecida mucho tiempo antes.

En derecho español la ley 9, tít. 1, P. 5ª, funda la excepción, sin enumerar los casos á los cuales se aplica, y los comentadores se dividen opinando unos que tiene lugar en todo contrato en el cual no se cuentan, entregan ó pagan las especies, y otros disienten restringiendo más ó menos los puntos de su aplicación. Advertiremos, sin embargo, que los más renuentes entre éstos aceptan esa excepción, además de en el mutuo, en el contrato dotal, y entre ellos se hallan las opiniones respetables de Gregorio López (loc. cit. palabras "emprestar alguna cosa") y Antonio Gómez, quien sostiene que igualmente procede por causa pretérita, como si dijese el deudor confieso que recibí en mutuo ciento, que se me entregaron dos años há, pues con la misma facilidad y esperanza de la futura entrega que en los casos referidos se confiesa haber recibido por causa anterior. (Ob. cit. pág. 71, po. 8.)

Esta breve relación nos persuade de que, en ese derecho, cuando menos había otro contrato al cual se aplicaba y por lo que al nuestro se refiere debemos tomar la discusión desde el Código de 1870, porque jugaba en él una contradicción entre el art. 1,392 y los 1,202 y 1,203. Por una parte se revestía al consentimiento, del poder de perfeccionar por sí solo al contrato, aceptando las doctrinas de las leyes, Unica, tít. 16 del Ordenamiento de Alcalá, y tít. 1, lib. 10 de la Novísima Recopilación, y por otra se requiere la precisa entrega de la cosa, so pena de hacer irrito el convenio á los ojos de la ley. Apercibiéronse los reformadores de esto y suprimieron con mucho tino por cierto, esa parte del artículo, proclamando implícitamente la doctrina de que los contratos, para perfeccionarse, basta en algunos el consentimiento; mas en otros, como los reales, necesitan la entrega de la cosa. Formulamos esta ob-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

servación, porque nos servirá en lo de adelante, y descendemos al Código de 1884, cuyos preceptos, relativos á esta materia, nos dicen: "Prescribe en dos años la acción para exigir la devolución de un vale ó escrito privado, en que una persona confiesa haber recibido de otra una suma prestada, cuando realmente no la haya recibido. Los dos años se contarán desde la fecha del documento. Opuesta la excepción antes de dos años, incumbe al acreedor la prueba de la entrega; pero si el deudor no reclama ésta dentro de dos años, se presume legalmente hecha, sin que se admita prueba alguna en contrario." (Arts. 1,093 y 1094, Cód. Civ.)

Hemos copiado los términos de que se sirve la ley para que se vea, y así con ingenuidad lo confesamos, que sólo queriendo sacar las palabras de su natural sentido é inquiriendo distinciones que la ley no propone, se podría sostener que hoy la excepción del dinero no entregado puede recaer en contratos distintos del de mutuo.

Rompen los artículos con la tradición que debió ser su guía; serán, si se quiere, poco científicos, pero á la verdad contradicen la tesis por nosotros sostenida. El mutuo, pues, tiene que servirnos de base para nuestros ulteriores razonamientos y sólo á él nos concretaremos, ya que las palabras de la ley no se prestan para una generalización; por lo demás, muy apropiada, según los principios de equidad, porque no hay un motivo concluyente para descartar ciertos contratos, como por ejemplo, la dote, el cual siempre gozó del beneficio de esta excepción y que por sus fines muy elevados é importantes, ha merecido en las legislaciones de otros países y aun en la nuestra, concesiones amplias y liberales, basadas en la situación especial de las personas que concurran á formar ese contrato.

Mas de que concedamos en este punto no se sigue que la referida excepción deje de aplicarse, como juzgan algunos, al mutuo mercantil, pues si bien es cierto que en el Código de Comercio nada se preceptúa á este propósito, sin embargo, creemos que es de sostenerse la suplencia del derecho común,

apoyándonos en el artículo 2º de aquel y en la razón de que la ley nos habla de sumas prestadas en general sin distinguir el objeto á que el mutuario haya de destinarlas. Nuestro autor de derecho mercantil nos suministra la regla á que hay que atender para que subsista ó no la coexistencia del derecho común con el mercantil. "De todo lo expuesto, se deduce..... II: que, como esta ley (la mercantil) no regula, sino que al contrario, supone ya regulados por el derecho común, la naturaleza extrínsica de los actos civiles, ó lo que es lo mismo, los elementos substanciales de su validez, licitud, etc., en todo lo que no esté previsto por el Código Mercantil respecto de sus principios fundamentales de los actos civiles, como: capacidad de los contratantes, vicios del consentimiento, causas de rescisión y nulidad, licitud de objeto de los contratos, en una palabra, en todo lo que se refiera á las condiciones esenciales é intrínsecas de los actos civiles y á los efectos esenciales y naturales de los mismos, el Código Civil ó el derecho común coexiste con el derecho especial mercantil." (Pallares, tomo 1º, pág. 760, § 258, inciso 2º)

Si, pues, agregaremos nosotros, la ley consideró necesaria, indispensable, natural, la entrega del dinero, para que existiese dentro de los dos primeros años, la obligación del mutuatario; es exacto afirmar, que sucede lo mismo en las operaciones mercantiles, que reconocen por origen este mismo contrato.

Y no se diga para eludir la fuerza de este argumento, que la interpretación de cualquier beneficio es restrictiva, porque á esto hay que contestar que no pretendemos ampliar el beneficio de la ley á casos que en ella no se quisieron prever, sino que siendo inherente al género de la acción de mutuo, pasa con ella al derecho mercantil una vez que en éste no se varía el fondo de la prestación, subsistiendo el propio contrato de mutuo. Oportuno nos parece recordar aquí, en apoyo de nuestros asertos, la teoría seguida por los antiguos sobre que el favor que se concede por el género de acción, los acompaña

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

siempre, sean quienes fuesen los que la intenten. (L. LXVIII de reg. jur.).

Fijados ya los casos de su aplicación, analizaremos el problema relativo á averiguar si esta excepción introduce una novedad en el sistema general de pruebas, ó si no es otra cosa que la aplicación de las reglas comunes.

La jurisprudencia antigua que tanto favoreció las otras partes de nuestra tesis, resueltamente nos niega su apoyo, y con Ulpiano y Celso á la cabeza proclama que siendo, como son, verdaderos los aforismos "Qui excipit, probare debet quod excipitur," ó más concisa y elegantemente "Reus in exceptione actorest" (Dig. 22. 3. de probat 9. f Cels.—44. 1. de exception 1. f. Ulp.) al arrojar sobre el demandante la carga de la prueba, de la excepción opuesta por el demandado, claro es que se derogan abiertamente esos principios.

No obstante, y volviendo á los límites de nuestros Códigos, notaremos que el papel del demandado se reduce á negar, y como lo que nunca ha existido no puede dejar tras de sí huella ó indicio alguno por los cuales se pudiera comprobar la verdad de esa negativa, dada esa imposibilidad, las negaciones no están sujetas á prueba y permanecen firmes é inquebrantables en tanto que el actor no justifique los hechos que afirmó.

Por otra parte, con anterioridad apuntamos la teoría que, gracias á la comisión reformadora, profesa nuestro Código en materia de consentimiento, y aplicándola podremos decir que siendo el mutuo un contrato real (Molitor, tomo 2º, pág. 178, § 778, y otros muchos autores que sería ocioso citar), el consentimiento que aparece dado en el vale ó escrito, es incapaz de crear el vínculo obligatorio, sino que es menester que se compruebe la entrega de esas cantidades, parte integrante, condición *sine qua non*, para que prospere el derecho que invocara la parte actora, y ésta al evidenciar esa entrega, no hace más que cumplir con el estricto deber que la ley impone á todo el que se atribuye un derecho.

En contra de estos razonamientos se formulan dos objeciones. Cierto es, se dice, que el que niega no está obligado á probar; mas no usando esa negativa envuelve el desconocimiento de una presunción legal y hay bastantes probabilidades para estimar que un individuo es deudor de otro, en presencia de un documento suscrito por el primero y en el cual confiesa que ha recibido la suma que se le demanda.

En segundo lugar, se extraña que si en el momento en que concurren las dos voluntades, el consentimiento sea incapaz de acreditar el contrato, ¿cómo, pues, transcurrido el bienio, ese consentimiento basta y consolida la prueba de tal modo que se rechace cualquiera otra que se intentara aducir en contrario?

No negaremos que esta argumentación es poderosa; mas no carece en verdad de respuesta, y para comprender en ella las dos observaciones, distinguiremos la época que precede y la que sucede al bienio. En la primera, hablando con rigor y tomando el contrato literal en el estado que nos lo legara la tradición, que se ha venido perpetuando, según lo hemos demostrado, desde tiempos bien anteriores á Justiniano, se debe tener presente que la obligación en modo alguno brota de lo escrito, sino de la realidad de los hechos y todo lo más que se podrá conceder es que la ley no acepta, en el caso, la prevención de que se quiere hacer mérito, y en este orden de ideas juzgamos más probable que dentro de un precepto legal se haya establecido, que no tiene cabida ese medio presuntivo y vago á no ser que el legislador rompiese abiertamente con todo un sistema perfectamente encadenado. Sólo espíritus superficiales dejarían de notar la grave, la gravísima inconsecuencia que con esto se originaría, lo que no sucede si se acepta que en este punto simplemente se rechazó una prevención que por lo demás está contradicha por otra que la misma ley no menciona.

Con efecto; la ley presume que se ha sorprendido, con más ó menos dolo, el consentimiento que aparece dado en el documento, y en esta virtud á nada queda reducida la objeción, toda vez que destruyéndose por contradictorias las dos pre-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sunciones, volvemos á encontrar la negación del deudor, lisa y llana, frente á frente de una aseveración que forzosamente reclama que se le corrobore por medio de la prueba.

Transcurridos los dos años, la ley, de un modo terminante y claro, entiende que la entrega se verificó y formula una presunción de las que se llaman Juris et de jure, sin tener en cuenta la voluntad del demandado, sin la transmisión de la cosa, lo que robustece más y más nuestras anteriores doctrinas, á propósito de que en este contrato se busca la entrega de la cosa para fijar el lazo jurídico, sin preocuparse del consentimiento. De no ser así, el artículo diría, pasados los dos años, basta la aquiescencia del deudor; y no nos dice eso, sino que se presume que el dinero fué entregado.

Mas si se pregunta á qué obedece el temperamento adoptado por la ley, contestaremos: que no se quiso que los contratos viviesen eternamente envueltos en esa especie de penumbra; tuvo por objeto castigar al deudor que vió con negligencia que el término pasaba sin acudir á los medios que la misma ley le suministra á efecto de proteger sus derechos, y el buen sentido arrastra á pensar que si no hizo uso de aquellos medios, fué porque él mismo se juzgó sin derecho para entablar una reclamación que repugnaba á su conciencia, pues había recibido la suma; se debió, por último, al peligro que había en no limitar la concesión de ese beneficio á un término prudente, poniéndolo á perpetuidad en manos de quien tal vez se serviría de él con poca honradez. Estos son los motivos enteramente racionales que explican la actitud tomada por la ley; pero poco importa que se diga que ella fué el resultado de un sofisma, el producto de un criterio erróneo, la manifestación de un tradicionalismo ilógico; lo verdadero, lo indudable es que no se tuvo en cuenta la idea de consentimiento, sino la entrega de las monedas.

En vano llaman en su auxilio los partidarios de la opinión contraria la legislación anterior, porque hemos visto, que esa legislación y los principios por ella observados, en este punto,

no han sido respetados por nuestro Código, el cual nos da esta excepción con particularidades que la diversifican de la conocida y desenvuelta, tanto en el derecho romano como en el español. De manera que al consignar que el acreedor soporta el peso de la prueba, no se hizo otra cosa que valorizar esas presunciones, para evitar cualquiera duda, sin que esto signifique que sufrieran alteración las reglas generales del sistema probatorio.

Por otra parte, opuesta la excepción dentro del bienio, equivale á que el demandado hubiese obrado contra el que se pretende su acreedor, por medio de la acción en devolución del documento. A ésta el acreedor opone la excepción de que entregó el dinero, y entonces claro es que á él corresponde la prueba de lo que afirma. Ahora bien, al convertirse esa acción en defensa, en nada deben variar los medios probatorios de que hay que valerse.

Réstanos por tratar el punto referente á si es ó no provechosa en nuestro derecho la permanencia de esa excepción que variada en su primitiva naturaleza ha llegado hasta nosotros, sin saberse, según opinan algunos, los motivos de su existencia que entorpece la celebración de su contrato sobre el cual las leyes alfonsinas nos dicen: "que acaece mucho á menudo entre los homes; de que recibe placer ó alluda los unos de los otros" (tít. 1º pág. 5ª), cuyo fundamento deriva de un sentimiento de piedad y de simpatía, según juzga Gutiérrez Fernandez, (tom. 5º pág. 135), que esa defensa coloca al mutuante en situación dificilísima, no obstante que debía considerársele por su desprendimiento y á quien Tácito define como el que imparte un favor "qui beneficien tribuit:" en una palabra, se hace la apología del contrato y del prestamista, para hacer resaltar lo inequitativo de esa excepción. Se agregan todavía los peligros que su ejercicio acarrea, se nos habla de la facilidad con que los deudores pueden hacer nugatorios los justos derechos de su acreedor, y que favorecen la mala fe y es fuente de inagotables chicanas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Hay algo de cierto en todo esto; pero se olvida, sin embargo, que si el nuestro debiera ser un pacto respetable y piadoso, por la idea que movió á instituirlo en manos de los hombres, se ha corrompido, y sólo saca provecho de él el mutuante, que es el explotador más encarnizado de la miseria, que lejos de beneficiar al deudor, lo hunde en la más desoladora miseria y lo acosa hasta arruinarlo.

La figura del prestamista perdió ya ese carácter dulce y benévolo para aparecer lúgubre, en medio de la sociedad, presidiendo ora la desolación de una familia, ora la desesperación de todos los que estrechados por las circunstancias, á ellos ocurren. La usura, esa dolorosa llaga social, contra la cual nada pudieron las leyes ni la filantropía de los particulares, se ha unido de un modo indisoluble al mutuo y agobia más que nunca á los necesitados. Existen deudores pillos, es verdad; mas hay agiotistas sin entrañas que escrupulosamente dedicados á la fructificación de sus capitales, no se paran en los medios que hay que emplear para conseguir su objeto, y cuando ante ellos se presenta un individuo víctima de la necesidad, les es fácil obligarlo á firmar un contrato y después no entregar el dinero, considerando en su inmoral criterio, no la burla del infeliz, no la ilicitud del caso, sino el brillante, el incomparable negocio que de esta suerte efectúan, siendo ellos los primeros en borrar la buena fe de los componentes esenciales de un contrato.

¿Y el legislador debería permanecer impasible ante semejantes vejaciones? ¿Y dejaremos ligado al deudor para siempre y suceda lo que quiera, sólo por la materialidad de la escritura? ¿Qué, la equidad no se levanta y protesta contra tales actos?

Para tachar de una plumada esa excepción de nuestro Código, es necesario tener presente que la cuestión social se compone, entre otros elementos, de la poca protección que la ley concede al proletario enfrente del rico, y que el primero se entrega confiado en manos del segundo para que éste lo extorsione.

Además, esa defensa es fácil de evitar, dejando transcurrir el plazo que fija la ley, haciendo que se renuncia ó valiéndose de otros arbitrios que llevan á considerar que si no es enteramente buena, eso proviene de que por desgracia no es ineludible. Dígase en buena hora que es una moratoria más ó menos penosa, pero no se quiera hallar en ella la razón por la cual los deudores no satisfacen sus obligaciones. Esa razón no se muestra aquí, la hallaréis tal vez en la escasa fuerza del apremio judicial y en la facilidad de evitarlo, expedientes más fructuosos y á los que acuden los individuos que se resisten á solventar sus deudas. Si se cree mala la excepción aceptada por la ley, tenemos el derecho de pedir á los detractores de ella que la sustituyan por alguna otra que mitigue al menos los males que hemos indicado y á los que el legislador no puede negar su atención.

A fin de añadir menos elementos para robustecer la idea de su inconveniencia, se asegura que la legislación francesa no la acepta; agregamos nosotros que hay autores que expresamente la rechazan, como Guyena, que nos dice es otra clase de abuso el que desde muy antiguo se notó en estas obligaciones: el deudor necesitado firmaba recibir dinero que no recibía, ó mayor cantidad, y esto era lo más frecuente. Pata cortar el abuso se introdujo por derecho romano y se adoptó en el nuestro la excepción de "non numerata pecunia," que bien pronto cayó en desuso y ningún Código moderno ha resucitado (tomo 3º, pág. 165). Mas no añade, como hubiera sido de esperarse, algún raciocinio que justificase su desaparición; por el contrario, se marca, no la posibilidad, sino algo más, la existencia de un abuso, y en esta situación, los legisladores se cruzan de brazos, persistiendo en que perezcan intereses que están obligados á defender.

A tales extravíos llegaríamos nosotros si no mantuviéramos en nuestra ley ese vigilante de la avaricia insaciable de los prestamistas, y amparo natural de los engañados. Sin que obste para eso el que se diga que ha pasado la época de ella, que ya no

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hay personas lo bastante candorosas para dejarse engañar por medios tan burdos; mientras haya indigentes por un lado y maldad de los poderosos por otro, la excepción de "non numerata pecunia" tiene que convalecer para servir de obstáculo á que se cometa la más atroz de las injusticias.

México, Agosto 1º de 1894.

MANUEL SÁNCHEZ GAVITO.

CONGRESO JURIDICO NACIONAL.

INICIATIVA PRESENTADA
EN EA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA POR EL SR. LIC. DON AGUSTIN VERDUGO,
PARA LA CELEBRACION DE UN CONGRESO JURÍDICO.

SEÑORES ACADÉMICOS:

Uno de los más graves é importantes problemas que han agitado en el presente siglo á todas las naciones, muy especialmente á aquellas que deben su actual composición á la conquista ó anexión de otras, poseedoras de antecedentes históricos propios y aun pertenecientes á diversas razas, por lo que en su origen llevaban vida separada é independiente, es sin duda aquel que tiene por objeto la codificación y unificación de su derecho, principalmente del civil ó privado, pudiéndose notar, ó mejor dicho, admirar cómo en el estudio y resolución de ese problema, han esgrimido sus mejores armas las más grandes figuras de nuestra ciencia en el mundo: los Portales y los Bigot–Preameneu, en Francia; los Thibaut y los Pape, en Alemania; los Migliete y los Vacca en Italia; los Silvela; los Alonso Martínez y los Gamazo, en España, á los esfuerzos de todos los cuales débense en el día, á la par que esa homogeneidad del Derecho, elemento seguro de cohesión y fortaleza en las naciones que la han aceptado, los gigantescos avances de nuestra ciencia, mediante un perfeccionamiento cada día más visible, obra del concurso de todas las fuerzas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hay personas lo bastante candorosas para dejarse engañar por medios tan burdos; mientras haya indigentes por un lado y maldad de los poderosos por otro, la excepción de "non numerata pecunia" tiene que convalecer para servir de obstáculo á que se cometa la más atroz de las injusticias.

México, Agosto 1º de 1894.

MANUEL SÁNCHEZ GAVITO.

CONGRESO JURIDICO NACIONAL.

INICIATIVA PRESENTADA
EN EA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA POR EL SR. LIC. DON AGUSTIN VERDUGO,
PARA LA CELEBRACION DE UN CONGRESO JURÍDICO.

SEÑORES ACADÉMICOS:

Uno de los más graves é importantes problemas que han agitado en el presente siglo á todas las naciones, muy especialmente á aquellas que deben su actual composición á la conquista ó anexión de otras, poseedoras de antecedentes históricos propios y aun pertenecientes á diversas razas, por lo que en su origen llevaban vida separada é independiente, es sin duda aquel que tiene por objeto la codificación y unificación de su derecho, principalmente del civil ó privado, pudiéndose notar, ó mejor dicho, admirar cómo en el estudio y resolución de ese problema, han esgrimido sus mejores armas las más grandes figuras de nuestra ciencia en el mundo: los Portales y los Bigot–Preameneu, en Francia; los Thibaut y los Pape, en Alemania; los Migliete y los Vacca en Italia; los Silvela; los Alonso Martínez y los Gamazo, en España, á los esfuerzos de todos los cuales débense en el día, á la par que esa homogeneidad del Derecho, elemento seguro de cohesión y fortaleza en las naciones que la han aceptado, los gigantescos avances de nuestra ciencia, mediante un perfeccionamiento cada día más visible, obra del concurso de todas las fuerzas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vivas de la sociedad y que se basa sobre la vigilante observación de todas y cada una de las enseñanzas suministradas sin cesar por el progreso y cambio de los tiempos.

El pensamiento, sin embargo, no puede decirse hijo solo de nuestro siglo, por mucho que en él haya venido á realizarse en toda su plenitud y á producir sus verdaderos y más copiosos frutos, pues sus autores son en verdad de todos los tiempos, como si por su medio hubiérase manifestado la natural tendencia de las sociedades humanas, á constituirse y organizarse vigorosamente, á dar mayor robustez á sus elementos de vida y á cobrar por la estrechez de todos los vínculos sociales entre los que no figura al último la legislación, toda la fuerza, toda la respetabilidad y necesaria resistencia frente á frente de los inevitables sacudimientos del complicado y vasto desarrollo de la historia.

Sin hablar de las muchas compilaciones de que la antigüedad romana nos ofrece ejemplos desde las leyes Fabularias hasta las Basílicas, para venir desde luego á la legislación de aquellas poblaciones intermediarias arrojadas por la Providencia en el ocaso de la civilización antigua y la aurora de la moderna como para infiltrar sangre nueva en las empobrecidas venas del género humano moribundo, y rejuvenecer así poblaciones gastadas y ya civilizadas hasta el exceso, según la enérgica expresión de Kant, vénse por lo que hace á Francia, desde los esfuerzos de aquel Prelado ilustre de Lyon, que en el siglo nono exclamaba: "Dígnese el Omnipotente reunir á todos nuestros hombres bajo la autoridad de una sola ley, que la Concordia de los Ciudadanos y el reinado de la equidad entre los pueblos, serán de este modo mejor asegurados;" desde la obra de Luis XI en el siglo XIV, en orden á la cual Felipe de Comines nos dice que ella respondía al vehemente deseo de aquel espíritu organizador de reducir todas las costumbres de Francia á una sola, general y común para todos los franceses; desde los notabilísimos estudios en el siglo XVI de aquel maravilloso genio en la ciencia del Derecho, llamado

Carlos Demoulin, que, bajo la más viva impresión producida por los perniciosos efectos é incomprensible embrollo de la diversidad de costumbres, escribió su célebre discurso sobre la utilidad y ventajas que advendrían á la Francia con la reunión y fusión de todas ellas, hasta la obra del docto y honrado Antonio Loysei, cuyas *Institutas consuetudinarias* fueron inspiradas por la misma idea, hasta los trabajos de Bernabé Brissón, cuyo proyecto de Código fué también un esfuerzo unitivo sobre la legislación, y en fin, hasta las altas miras en el propio sentido, manifestadas por D. Agueseau, por Domat, por Pothier, y por lo que á España respecta, desde la obra de unificación civil de Eurico y más tarde de Recaredo patente, el Fuero Fuzgo; desde los grandes trabajos de San Fernando, de Don Alonso el Sabio, de los Reyes Católicos y de Felipe II, hasta la Novísima Recopilación, hasta la abolición en los principios del siglo XVIII de los fueros de Aragón y de Valencia, de Cataluña y de Mayorca, por el decreto llamado de *Nueva Planta* del rey Felipe V.

Mas es ciertamente en nuestro siglo donde mayor unanimidad y más perseverante esfuerzo son de notarse para realizar ese tradicional pensamiento, obscurecido en ciertas épocas por el estado de guerra, aplazado en otras por la exigente é inmediata atención reclamada por intereses sociales de otro orden, pero siempre vivo y entusiasta lo mismo en los afanes de los pueblos, que en el espíritu de los más renombrados jurisconsultos. Francia, la gran nación de los Merlín y Treilhard, abre la serie de los trabajos unitarios en materia de legislación, y por la voz autorizadísima de los miembros de la Comisión, nombrada á fines del pasado siglo para formar el primer proyecto de un Código Civil, dice ante el mundo: "La Francia, así como los otros grandes Estados de la Europa, se ha agrandado sucesivamente por la conquista y por la libre reunión de diferentes pueblos. Estos, los conquistados y los libres, han estipulado siempre, en sus capitulaciones y en sus tratados, el mantenimiento de su legislación civil, pues la experiencia prueba

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que los hombres cambian más fácilmente de denominación que las leyes. De aquí esa prodigiosa diversidad de costumbres que se encuentran en un mismo suelo: se dijera que la Francia no es sino una sociedad de sociedades. La patria ha sido común, y los Estados, particulares y distintos; el territorio uno, y las naciones diversas. Magistrados recomendables habían concebido más de una vez el proyecto de establecer una legislación uniforme. La uniformidad es un género de perfección que, según la palabra de un célebre autor, se percibe algunas veces por los grandes espíritus, pero impresiona infaliblemente á los pequeños." El Código Civil de 1808, fué el resultado de la grande idea que palpita en estas palabras, y todas las naciones, sin excepción de una sola, han respondido, al menos por los estudios de sus más conspícuos pensadores, á la voz de la nación francesa.

Es la primera España, que desde 1812, manifiesta inequívocas aspiraciones hacia la unidad de su derecho civil, aspiraciones que sostiene en los años 37, 45 y 69, que abierta vigorosamente en un Congreso nacional de jurisconsultos, entre los cuales figuraban nombres tan ilustres como los de Gómez de la Serna, Pacheco, Cortina, Permanyer, Olólaga, Cirilo Alvarez, Martos y Alonso Martínez, y que viene á ver triunfantes en nuestros días, después de los proyectos de Goyena, de Galleri y de Navarro Amandi, en el notable Código de 1888, merced á las notabilísimas defensas en el sentido de la unidad legislativa de jurisconsultos tan insignes como Silvela, Conde y Luque, Rodríguez, San Pedro, López, Puigcerver, Gamazo y otros no menos distinguidos en el Foro Español.

Sigue Alemania, que desde 1815, no ha cesado de emprender trabajos de señaladísima importancia en el sentido de la legislación civil, uniforme y nacional, los cuales, bajo la inteligente dirección de Thibaut se sostienen hasta 1865, en que las dificultades, precursoras de los acontecimientos del siguiente año, tienen que aplazar, como en efecto aplazan, la grande obra que ya tocaba á su fin.

Pero como lo propio de todas las ideas vivas y fecundas es perseverar á pesar de cualesquiera obstáculos que se yergan, al menos para atajar su paso, la de Thibaut reaparece al poco tiempo y ya entonces, bajo la sólida y autorizada forma de una ley federal, la de 20 de Diciembre de 1873, que vino á hacer entrar todo el Derecho Civil Germánico en el dominio de la legislación del nuevo imperio. En 1874, una comisión de cinco miembros es nombrada por el Consejo Federal, y bajo la presidencia de Schelling traza el proyecto de los trabajos de elaboración del suspirado Código, cuya definitiva redacción es confiada á once insignes jurisconsultos, representantes genuinos de la teoría y práctica del Derecho en Alemania. Ellos eran: Pape, presidente del Tribunal Supremo del Imperio; Johow, consejero de la Corte de Justicia de Prusia, y Kurlbaun, consejero del Ministerio de Justicia también de Prusia, que representaban al *Landrecht* prusiano; Derscheid, consejero del Tribunal Supremo cuanto al Derecho Francés; Gobhars de Carlsruhe para el Derecho de Banden; Kübel, Planck, Paul de Roth, Schmitt, Presidente del Tribunal regional de Baviera; Windscheid para el Derecho común, y Weber, que había de representar el Derecho Sajón. Esta comisión inauguró sus trabajos en 17 de Septiembre de 1874, distribuyendo las cinco grandes partes del Código, de la manera siguiente: la *Parte General*, fué encargada á Gebhard, las de *Obligaciones* á Kübel, la del *Derecho de las cosas* á Johow, la del *Derecho de la familia* á Planck y la de *Sucesiones* á Schmitt. Impreso el *Proyecto de Código* en el curso del año de 1880, sólo se espera quizá para su definitiva aprobación, el término de las observaciones solicitadas por la Comisión de todas las Universidades alemanas. Basta por lo demás fijarse, establecida ya la tendencia alemana hacia la uniformidad de su Derecho Civil, en la peculiar condición de su organización, en la vasta complexidad de sus leyes, tanto antes como después del desmembramiento del inmenso Imperio Franco, vasta complicidad de que da alguna idea sólo considerar que al lado de las *Leyes Barbarorum* es-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

taba la *Ley Sálica*, junto á ésta la Ripuaria, la de los *Bávaros*, la de los Suringios, la de los Sajones y Frisones, y más tarde los Estatutos Provinciales, para no sorprendernos de la minuciosa y prolija tramitación por que ha pasado y aún tal vez tenga que pasar el pensamiento de Thibaut, pues si la unidad política está hecha en Alemania, para la legislativa era preciso no herir arraigados intereses, no chocar con hábitos inveterados, y procurar, en suma, la conciliación de esos dos elementos colocados en la Nación frente á frente el uno del otro, con dominio particular y exclusivo cada uno, el elemento Romano y el elemento Germánico, aquel sostenido á porfía por las Universidades, éste consistente en vastísimas compilaciones, ineductibles al compendiado y severo método de la Codificación.

Por esto Italia, donde sí es ya un hecho la unidad de las leyes civiles, no ha tardado en verificarla, apenas consumada la unidad política, pues excepto los Estados Pontificios, donde regían el Derecho Romano y una ley de enjuiciamiento civil del Papa Gregorio XVI, de 10 de Noviembre de 1834, todos ó casi todos los antiguos reinos, ducados ó principados de Italia, habían ya certificado sus particulares leyes al terminarse la guerra de 1859. Para no hablar sino de este siglo y haciendo punto omiso de la vigencia del Código de Napoleón sobre la mayor parte del territorio italiano hasta el Congreso de Viena, que restauró el anterior fraccionamiento en muchos Estados independientes, vemos que la Lombardía y Venecia habían hecho su Codificación desde 1815, las dos Sicilias desde 1819, el ducado de Parma en 1820, el Piamonte en 1837, el Tessino en el mismo año y Módena en 1851. La obra, pues, de los Miglielli, de los Vegezzo y de los Pisanelli en el sentido de la uniformidad civil en Italia, y de que es producto el Código de 1º de Enero de 1866, fué un trabajo de refundición más bien que de certificación, no recibido con sorpresa por el pueblo, ni precedido de ardientes discusiones como en Alemania entre la escuela histórica y la filosófica, sino acogido con

sincero entusiasmo, como el remedio de innumerables querellas entre hijos de una misma patria, como la satisfacción de una necesidad imperiosa, impuesta por la creciente estrechez de vínculos entre las distintas Ciudades, y á no dudarlo también por la trascendental transformación política que en los tiempos modernos habían sufrido dinastías seculares, muchas de ellas en abierta pugna con las conquistas de la civilización.

México, señores Académicos, no podía ser extraño y no lo ha sido, á este acorde movimiento de los principales países tanto latinos como germánicos, hacia ese ideal que se levanta, radiante y vivísima claridad sobre la cúspide del progreso de los pueblos, verdadera estrella polar que parece guiar sus pasos, advirtiéndoles sobre todos los peligros, sobre todos los inconvenientes y sobre todas las imperfecciones que acompañan siempre á su desarrollo histórico, si éste no es presidido por la unidad de la ley, como por la unidad de aspiraciones, por la unidad de intereses y por la unidad de esfuerzos. Pasemos por alto, Señores, aquel no corto período que se extiende en nuestra Independencia de 1821 hasta los primeros trabajos de Codificación más seriamente intentados en 1842 y llevados á cabo en los años de 69 y 70. Pasemos por alto ese período, no porque él no sea en lo posible patentísima muestra de que igual tendencia, igual convencimiento que en Europa, han movido á nuestros legisladores y hombres de Estado hacia la inconformidad de la ley civil, que por entonces, mediante la inevitable prelación de los distintos cuerpos de leyes españolas, era la misma vigente en la Metrópoli, sino que combatida nuestra reciente nacionalidad por toda suerte de sacudimientos políticos, y no bien cimentado todavía sobre la firme base de una organización perfecta en el orden social y económico, natural era que en sentido de disposiciones generales sólo se expidiese la ley de 23 de Mayo de 1837, que prevenía la sujeción de la Administración de Justicia, así en la sustanciación de los juicios como en la determinación de los pleitos, tanto civiles co-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mo criminales, á las leyes vigentes antes del año de 1824 en cuanto no pugnara con las Instituciones. Pero desde 22 de Enero de 1822, ya vemos que la junta gubernativa creada por el Plan de Iguala, nombra diversas comisiones de jurisconsultos para la elaboración de los Códigos, y entre ellas para la del Civil una compuesta de los Sres. Don José María Fagoaga, Don Juan Francisco Azcárate, Don José Hipólito Oduardo, Don Tomás Salgado, Don Miguel Domínguez, Don Benito C. Guerra, Don Juan Wenceslao Barquera, Don Antonio Cabeza de Vaca y Don Manuel Bermúdez Zozaya. "Esta comisión, escribía el señor Lic. Don José Linares, tenía dos defectos ante los que debían fracasar el patriotismo, la buena intención y toda cualidad favorable que la distinguiera. Era muy numerosa y se componía de personas de diferente profesión, con hábitos é ideas bien disímbolos. Cuando la ardua empresa de la formación de un Código exige esencialmente, sin huir de la discusión, la unidad de pensamiento, no podía esperarse ese resultado de una comisión numerosa, compuesta de caracteres tan variados." Transcurren veinte años de guerras civiles y apasionadas luchas políticas y en 1º de Diciembre de 1842, el Gobierno del General Bravo nombra al sabio y probo Don Manuel de la Peña y Peña, una de las más grandes lumbreras en los anales de nuestra Magistratura, para que redacte el Código Civil. Esta nueva tentativa debía frustrarse, como se frustró por la calamidad de los tiempos, por la amenaza primero y el advenimiento al fin de la invasión norte-americana, que tan difícil pero siempre heroicamente pudimos resistir, y á cuyo definitivo desenlace hubieron de acudir el patriotismo y ciencia del mismo Sr. Peña y Peña.

En 1859, es decir, durante la más desastrosa época en esta historia, el Gobierno Constitucional refugiado en Veracruz no se olvida de la necesidad de la codificación, y para redactar el proyecto de un Código Civil nombró al distinguido jurisconsulto yucateco D. Justo Sierra, quien lo emprende y lleva á cabo en 1860 sobre la base de la uniformidad de todas las

disposiciones para la nación entera. El Congreso de la Unión expide en 29 de Abril de 1861 un decreto, mandando poner desde luego en ejecución en el Distrito Federal y Territorios dicho proyecto é invitando á los Estados para que también lo adoptasen, y tres años después, el Sr. Terán, ministro de Justicia, designa á los Sres. Sebastián Lerdo de Tejada, Fernando Ramírez, José María Lacunza, Pedro Escudero y Echanove y Luis Méndez para revisar el proyecto del Dr. Sierra, sin que, al menos no ha llegado á nuestra noticia, á ninguno de estos insignes jurisconsultos se hubiera ocurrido que preparaban una legislación meramente local en alguna de nuestras entidades federativas. Los trabajos de esta comisión continuaron hasta después del establecimiento del Imperio de Maximiliano, á causa de que éste la invitó con el mayor empeño á proseguir sus importantes labores de que fueron felicísimos resultados los dos primeros libros del Código Civil de 1886. Restaurada la República en el 67, una nueva comisión formada por los Sres. Mariano Yáñez, José María Lafragua, Isidro Montiel y Duarte, Rafael Dondé y Joaquín Eguía Liz, aprovechando en no pequeña parte los trabajos de la anterior, dió cima á lo que fué nuestro Código Civil del Distrito Federal y la Baja California, de 1870, el cual sucesivamente fué aceptado, sin dificultad alguna, y mediante muy insignificantes modificaciones, por todos los Estados, excepto el de Veracruz que se había dado desde 17 de Diciembre de 1868 un Código Civil propio, el de México que lo tuvo también desde 21 de Junio de 1870 y el de Tlaxcala que regido desde su erección á entidad federativa é independiente por la antigua legislación española, vino á tener un Código también propio, aunque muy semejante al del Distrito Federal del 70, desde 22 de Diciembre de 1883. Sabéis, por último, Señores, que reformada nuestra legislación civil en 1884, muy principalmente en lo relativo á la libertad testamentaria, esta reforma ha sido ya aceptada por algunos Estados, creo que por los de Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, aprestándose los de México,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Michoacán y Veracruz á revisar sus Códigos y quizá á introducir en ellos esa misma innovación.

Tales son, Señores Académicos, dentro y fuera de nuestra Patria los antecedentes doctrinales y legislativos de acuerdo con los cuales venimos á proponer á la Academia, como la obra, siquiera no pase por de pronto de la esfera de la teoría científica, más digna de ella, más adecuada al linaje y trascendencia de sus ordinarias labores y más factible en no lejano porvenir si la toma bajo su patrocinio tan distinguida Corporación, se sirva aceptar la proposición de convocar un Congreso Jurídico Nacional que tenga por objeto preparar la unificación de la Legislación Civil en la República.

Todo, Señores, concurre á demostrarnos la necesidad de que México piense ya, bajo el impulso de nuestra poderosa iniciativa en esta obra trascendentalísima que es ya un hecho en todas aquellas naciones cuyas corrientes jurídicas más han influido en el desenvolvimiento de nuestra legislación.

Desde luego, Señores, ocurre á nuestro espíritu que la diversidad de legislaciones locales, en materias que afectan tan profundamente á la familia y á las sucesiones; diversidad que puede señalarse en los Códigos de Veracruz y México, respecto de las demás, no tiene ni la más mínima razón de ser en un país donde el sentimiento Jurídico que informa toda la legislación es nacional y no local, donde los organismos jurídicos son iguales, presentan el mismo carácter, están animados del propio espíritu, viven con igual arraigo y han brotado de la misma evolución histórica, inspirándose en educación, sentimientos, creencias y costumbres comunes. Se concibe, Señores, que en Rusia, por ejemplo, haya diferencias y no cualesquiera, sino capitalísimas, de legislación dentro del mismo país. La Rusia europea, con necesidades particulares, con intereses propios, en nada se parece á la Rusia asiática, cuyo grado de civilización es inferior, cuyas condiciones históricas son diversas y cuyo dilatado territorio sobre el cual viven muy diseminadas poblaciones casi primitivas, impone, á no dudarlo,

ciertas limitaciones y otros especiales derroteros al Derecho Civil. Análoga observación, aunque por diverso motivo, pero conduciéndonos al mismo fin, puede hacerse respecto de Austria–Hungría, donde no hay sino de nombre una sola nacionalidad, pues en realidad existen varias, unidas sólo por el lazo del Imperio. Pero entre nosotros ¿cabe afirmar algo siquiera semejante? Una idéntica civilización se extiende sobre todo nuestro país, y aunque bastante dilatado el territorio nacional, las mismas aspiraciones, los mismos ideales han puesto en juego nuestra actividad, tanto en la guerra como en la paz, así en la industria y el comercio como en las leyes políticas que han impreso un mismo sentido á todas las otras de cualquier clase que sean, del uno al otro extremo de nuestras fronteras. Nada, por otra parte, de intereses exclusivos en determinadas colectividades, nada de emulaciones ó rivalidades que no sean las naturales y loables del progreso, á tal grado, Señores, que no teniendo nuestra nacionalidad esa diversidad de orígenes históricos que en otros países determinaron la variedad de legislaciones, como la consuetudinaria y escrita ó romana en Francia y la de Castilla y las Forales en España, nosotros conservamos y sólo modificamos adaptándolos á nuestras necesidades hasta días muy vecinos á los nuestros, los preceptos de una legislación civil, uniforme, la Española antigua, que recibimos de nuestros mayores como tradición venerable, no olvidada sino más viva después de nuestras luchas políticas, como que ella, con una especie de religioso culto, fué vista por los legisladores de nuestra Carta Fundamental. Esto se debió, sin duda alguna, á que nuestros Constituyentes, en su alto sentido político, nada encontraron en ella que pugnara con el sistema federal, con la autonomía de los Estados, que en nada se reciente del respeto de un mismo criterio en el orden civil por la libre jurisprudencia de los diversos tribunales supremos del país, como la soberanía de las varias naciones europeas tampoco se lesiona con la tendencia marcadísima de uniformar la legislación mercantil en tratados de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

comercio, modelados los unos por los otros, ni con las estipulaciones que tienden á generalizar los principios de Derecho Internacional Privado, tan íntimamente conexo con los del Derecho Civil, ni con el arbitraje como medio de dirimir las contiendas internacionales, pues todos estos esfuerzos tienden, no á contrariar, sino á producir una gigantesca federación, con una sola codificación comercial, con una sola codificación civil y con un Supremo Tribunal arbitral que trate de la paz y de la guerra de los pueblos.

¿Cómo desconocer, por otra parte, que la unidad de legislación en orden al individuo, á la familia y á la propiedad robustecerá y afirmará más y más esa necesidad de todos los pueblos, en satisfacer la cual han empleado siempre sus mayores energías y consumado sus más gloriosos sacrificios, es, á saber, la unidad también de la Patria? Porque, Señores, las leyes civiles son, rigurosamente hablando, las verdaderas leyes fundamentales de la sociedad, puesto que ellas regularizan la familia, sancionan las diarias convenciones de los individuos que vinculan en su exacto cumplimiento todo el fruto de su incesante trabajo y consolidan y garantizan el derecho de propiedad. Estos eminentes servicios han merecido á tales leyes el glorioso nombre de segunda religión de los pueblos. Pueden los asociados abstenerse de las luchas políticas, del ejercicio de las prerrogativas del ciudadano, de tomar parte en el movimiento y combinaciones del Derecho administrativo; pero desde que se nace, mientras se vive y hasta el momento de la muerte, la ley civil nos toma bajo sus prescripciones, nos dicta nuestros deberes como hijos, entrega á la esposa bajo nuestra protección y nos reviste de la augusta autoridad de padres, resguardando contra todo atentado el santuario del hogar, marcando como inviolables nuestras propiedades y haciendo cada vez más fecundo por la esperanza nuestro trabajo. ¿Dudaréis, Señores académicos, que la homogeneidad de estos elementos bajo la dirección de unas mismas reglas contribuiría al mejoramiento social, á la armonía de todas las actividades de la nación, á su más firme y eficaz

concurso hacia el progreso moral, intelectual y físico, que todos debemos ambicionar?

Mas, como los que suscribimos las siguientes proposiciones estamos muy lejos de pretender que la obra de la unificación civil venga á marcar una reforma constitucional, y al contrario, anhelamos que todas las Entidades Federativas traigan á la realización de nuestro pensamiento el contingente de su ciencia, de su experiencia jurídica y de las observaciones hechas en el curso de su vida local, nos hemos fijado en el medio de la convocación de un Congreso Jurídico Nacional de que formen parte todas esas Entidades Federativas, para lo cual mucho, en nuestro concepto, tiene ya andado la Academia con la creación de centros correspondientes en cada una de aquellas.

No desconocemos todo lo grave, todo lo serio y trascendental de la idea que venimos á proponer. Pero, por lo mismo que en ello nos hemos fijado, dos de nuestras proposiciones dejan ancho campo á nuestra prudencia y meditación: la que se refiere al nombramiento de una comisión para que al cabo de un mes de nombrada presente el programa sobre la organización del futuro Congreso, sobre el orden de sus debates y las materias que en él hayan de estudiarse y discutirse, y la que trata de que se acuerden con el Señor Presidente de la República, que es también Primer Presidente Honorario de esta Academia, los medios más eficaces para realizar el alto fin de que se trata.

Por todo lo expuesto, los infrascritos pedimos á la Academia se sirva aprobar las siguientes proposiciones:

PRIMERA.

La Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia provocará la reunión en México, de un Congreso Jurídico Nacional, que tendrá por objeto preparar la unificación de la Legislación Civil en la República.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

SEGUNDA.

A fin de preparar esta unificación, la Academia nombrará una Comisión para que forme un programa al cual hayan de someterse las discusiones y trabajos del Congreso.

TERCERA.

Esa Comisión llenará su cometido dentro del mes de haber sido nombrada.

CUARTA.

El programa comprenderá la organización del futuro Congreso, un reglamento para sus debates y la enumeración de las materias que se habrán de someter á su deliberación y decisión.

QUINTA.

Se convocará el Congreso para el 15 de Junio de 1895.

SEXTA.

La Academia nombrará una Comisión para que, encabezada por su Presidente efectivo, se acerque á su Primer Presidente Honorario, Señor General Don Porfirio Díaz, á fin de acordar con él los medios que más eficazmente conduzcan á la realización del objeto del Congreso.

México, 16 de Noviembre de 1894.

A. VERDUGO.

LA ESCUELA POSITIVA DE DERECHO PENAL.*

(Exposición sumaria de sus doctrinas).

Por el Lic. Carlos Díaz Infante, ex-Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

III

CARA.

18.—*Longitudes y anchura de la cara. Indice facial.*—Los antropólogos distinguen dos longitudes de la cara: la *longitud total*, que se toma del punto superorbitario á la extremidad inferior del mentón ó barba, y la *longitud simple* ú *ofrio-alveolar*, que se toma del punto superorbitario al alveolar. Estas líneas, como se ve, son oblicuas, mientras que la que mide lo que se ha acostumbrado llamar *altura de la cara*, es la perpendicular bajada del punto superorbitario al plano alvéolo-condiliano.

En los parisienses, la *longitud total* de la cara, mide, según Topinard, 128^{mm}; en los negros es de 124. En los criminales, la longitud en cuestión es mayor que en los normales, circunstancia que explica el Dr. Corre, por el gran desarrollo que, en aquellos, alcanza la mandíbula inferior. Las longitudes obser-

* Véase la pág. 222.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

SEGUNDA.

A fin de preparar esta unificación, la Academia nombrará una Comisión para que forme un programa al cual hayan de someterse las discusiones y trabajos del Congreso.

TERCERA.

Esa Comisión llenará su cometido dentro del mes de haber sido nombrada.

CUARTA.

El programa comprenderá la organización del futuro Congreso, un reglamento para sus debates y la enumeración de las materias que se habrán de someter á su deliberación y decisión.

QUINTA.

Se convocará el Congreso para el 15 de Junio de 1895.

SEXTA.

La Academia nombrará una Comisión para que, encabezada por su Presidente efectivo, se acerque á su Primer Presidente Honorario, Señor General Don Porfirio Díaz, á fin de acordar con él los medios que más eficazmente conduzcan á la realización del objeto del Congreso.

México, 16 de Noviembre de 1894.

A. VERDUGO.

LA ESCUELA POSITIVA DE DERECHO PENAL.*

(Exposición sumaria de sus doctrinas).

Por el Lic. Carlos Díaz Infante, ex-Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

III

CARA.

18.—*Longitudes y anchura de la cara. Indice facial.*—Los antropólogos distinguen dos longitudes de la cara: la *longitud total*, que se toma del punto superorbitario á la extremidad inferior del mentón ó barba, y la *longitud simple* ú *ofrio-alveolar*, que se toma del punto superorbitario al alveolar. Estas líneas, como se ve, son oblicuas, mientras que la que mide lo que se ha acostumbrado llamar *altura de la cara*, es la perpendicular bajada del punto superorbitario al plano alvéolo-condiliano.

En los parisienses, la *longitud total* de la cara, mide, según Topinard, 128^{mm}; en los negros es de 124. En los criminales, la longitud en cuestión es mayor que en los normales, circunstancia que explica el Dr. Corre, por el gran desarrollo que, en aquellos, alcanza la mandíbula inferior. Las longitudes obser-

* Véase la pág. 222.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vadas por este autor, en los responsables de los delitos puestos á continuación, son las siguientes:

	Longitud total. *
Violación	135.5
Homicidio bajo influencia genésica	131.0
„ „ influencias diversas	132.2
„ y robo	138.0
„ seguido de suicidio	133.0
„ calificado (premeditación)	140.0

* Corre. Ob. cit. pág. 85.

La *longitud simple* ú *ofrio-alveolar* es también mayor en el delincuente que en el honrado. Así, siendo esta longitud, en los parisienses, de 87.7$^{mm.}$, y de 86.0$^{mm.}$ en los italianos (Topinard), en los criminales, si se ha de dar crédito al mismo Dr. Corre, dicha longitud alcanza las cifras que en seguida copio:

	Longitud simple.
Violación	90.0
Homicidio bajo influencia genésica	87.0
„ „ diversas influencias	90.4
„ y robo	86.0
„ seguido de suicidio	92.0
„ calificado (premeditación)	92.6

El término medio, pues, de la *longitud simple*, en los criminales, tomado de las cifras anteriores, resulta de 89.7, medio superior al que Topinard da para los parisienses é italianos; pero aun es mayor el término medio que Lombroso fija para la longitud simple de la cara de los delincuentes, pues, según este autor, tal término es de 92$^{mm.}$

La *anchura máxima* de la cara la da el diámetro bicigomático, que, como su nombre lo indica, se toma de uno de los arcos cigomáticos al otro. Este diámetro, según opinión de Lombroso, es sensiblemente igual entre criminales y no criminales, con esta única reserva: que, tanto en las cifras mínimas, como en las más altas, suministradas por la medición de la anchura de que se trata, los criminales hacen del todo falta.

En las mediciones practicadas por el Profesor Topinard, los parisienses resultan con un diámetro bicigomático de 132$^{mm.}$; y en los ejecutados por el Dr. Corre, en criminales, aparecen éstos con un diámetro bicigomático de 132.7$^{mm.}$, si bien Orchanski asienta que los asesinos lo tienen de 133.6$^{mm.}$ De todas maneras, tales resultados vienen á confirmar lo antes dicho: que la anchura de la cara es sensiblemente igual, entre criminales y honrados.

El *indice facial* es la relación que existe entre la *longitud* simple de la cara y su anchura máxima. Broca expresó esta relación, por medio de la fórmula: $\frac{\text{long. ofrio-alveolar por 100}}{\text{Diam. bicigomá.}}$

Sucede con este índice, lo que con la anchura de la cara, esto es, que no hay diferencias notables entre el que presentan los delincuentes y el que tienen los hombres honrados. Así, siendo dicho índice de 65.9 en los parisienses, de 67.9 en los auverneses, de 68.6 en los negros, es de 68.6 en los criminales.

19.—*Frente.*—Una frente bien desarrollada, es patrimonio de las razas blancas y señal de belleza, dice Topinard. Esta parte de la cara, que se extiende desde el nacimiento de los cabellos á las cejas y de una sien á la otra, es entre los criminales el asiento de diversas anomalías, cuidadosamente notadas por los modernos antropólogo-criminalistas.

Tiénese, pues, que Marro, comparando la altura de la frente entre delincuentes y normales, y fijando en 4 centímetros el límite de las frentes bajas, obtuvo el siguiente resultado:

Frente.	Criminales.	Honrados.
Baja—menos de 4 centímetros	41.3%	15.3%
Alta—más de 4 centímetros	58.6 „	84.6 „

Penta señala para las frentes bajas en los criminales, la proporción de 19%, y Roncoroni y Ardú la de 25.3%.

La frente *deprimida* ó *huyente*, que entre los normales sólo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

se encuentra en la proporción de 4%, en los criminales se observa con mucha mayor frecuencia. Así, Lombroso asegura que, la proporción de frentes deprimidas entre los delincuentes asciende á 28%; Roncoroni y Ardú la fijan en 16% y Penta en 22%.[1]

La raza prehistórica de Neanderthal tenía la frente deprimida, y en la actualidad la tienen los negros de la Oceanía.

El desarrollo exagerado de las *protuberancias* ó *gibas frontales*, los Doctores Roncoroni y Ardú, en 43 craneos de criminales dicen haberlo observado en la proporción de 27.6%.

Todavía es más frecuente, entre los delincuentes, que la anterior anomalía, el excesivo desarrollo de los *senos frontales;* pues Rossi, Roncoroni, y Ardú y Penta, fijan la frecuencia de esta anomalía asignándole respectivamente las proporciones siguientes: 20, 46 y 30%.

Encuéntranse también en el criminal, con mucha más frecuencia que en el honrado, las *arcadas superciliares* muy salientes. Lombroso y Penta pudieron observar respectivamente esta anomalía, en la proporción de 52.2 y 21%.

20.—*Cavidades orbitarias. Indices: orbitario y céfalo-orbitario.*—Bono, estudiando la capacidad orbitaria de los delincuentes, observó que esta capacidad es mayor en éstos que en los hombres normales, pues siendo en los lombardos honrados dicha capacidad de 56.5 c. c., es en los lombardos criminales de 61.5 c.c. Entre los piamonteses normales se encuentra la propia capacidad orbitaria que entre los lombardos primeramente citados, y en los piamonteses delincuentes tal capacidad asciende á 57.7 c.c.

Roncoroni y Ardú, en sus cráneos de criminales, pudieron observar la desigual capacidad de las órbitas en la proporción de 11.5%, y las órbitas casi circulares en la de 6.9%.

Lombroso[2] hablando de la gran capacidad orbitaria en los delincuentes, se expresa en estos términos: "Este gran desarrollo de la capacidad orbitaria se explica, como entre las aves de presa, por la coordinación de los órganos á consecuencia de un ejercicio más frecuente; por esto mismo tal capacidad aparece aún más desarrollada entre los ladrones que entre los asesinos."

1 V. Lombroso. Nouvelles recherches, etc. París, 1892. Pág. 36.
2 L'Homme criminel. Pág. 162.

El *índice orbitario*, es la relación que existe entre el diámetro vertical de la base de la órbita y su diámetro horizontal. Según Broca, son *megasemos* del índice orbitario, es decir, tienen grande este índice, los que lo presentan de 89 ó más; son *mesosemos*, ó lo que es lo mismo, tienen mediano el índice en cuestión, aquellos en que es de 89 á 83, y por último, son *microsemos*, ó de índice orbitario pequeño, los que lo tienen de 83 ó menos.

Todas las razas prehistóricas de Francia, fueron microsemas, hoy lo son los Neocaledonios, Fasmanios, Australianos y Guanches. Los Parisienses modernos tienen el índice de que se trata de 84.4. Entre los asesinos, Orchanski encontró dicho índice de 88.4.

Roncoroni y Ardú, dicen haber observado en sus cráneos de delincuentes, desigual el índice de una y otra órbita, en la proporción de 18.4%.

El *índice céfalo-orbitario*, expresa la relación que existe entre la suma de los volúmenes de las órbitas y la capacidad cerebral. Mantegazza fué el primero que determinó este índice y fijó su término medio en 27.2.

Según Lombroso, en los hombres normales el índice en cuestión es de 26.6, y en los criminales de 24.7. Si fuera cierta la afirmación de Mantegazza: *que la capacidad orbitaria es tanto más pequeña con relación á la cerebral, cuanto menos elevado es el lugar jerárquico que se ocupa en la serie orgánica*, los criminales se acercarían, bajo este concepto, á las razas inferiores y aun á los antropoides.

21.—*Nariz.*—Lombroso, en su *Anthropologie criminelle*,[1] da

1 Ob. cit., pág. 42 y siguientes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cuenta de los estudios publicados por el Dr. Ottolenghi en 1888, acerca de las anomalías que los criminales presentan en esta parte de la cara; al hacerlo se expresa en estos terminos:

"Ottolenghi ha examinado la escotadura nasal, en 526 cráneos pertenecientes: 397 á individuos normales, 129 á criminales y 50 á locos. Encontró anomalías, en la proporción de 23.92% en los normales y 39.52% en los criminales, (48.14% en los hombres y 33.33% en las mujeres)."

"Pero, lo que es de mucha más importancia, halló el mayor grado de anomalía que darse puede: la verdadera gotera simiana, en la proporción de 1.70% en los normales y de.... 16.60% en los criminales."

"En 20 cráneos de cretinos de la Lombardía y del Piamonte, la anomalía de la escotadura nasal, se veía en la proporción de 55%. En los locos observó, casi con igual frecuencia, la propia anomalía (42%)."

"Estudió también las anomalías de la espina nasal, en los cráneos de 30 criminales, de 60 individuos normales, de 13 epilépticos, de 50 locos y de 20 cretinos; y la encontró muy desarrollada en los criminales, (48.7%), sobre todo en los asesinos y en los locos, y con menos frecuencia que en aquellos en los normales (24%)."

"Estudió igualmente la dimensión, la superficie, la inclinación y la protuberancia de los huesos nasales."

"Los criminales, sobre todo los asesinos, son los que ofrecen los huesos nasales más desarrollados, 40%; mientras que, en los normales la proporción solo asciende á 4%."

"Por lo que hace á la dirección, Ottolenghi encontró, en la proporción de 36%, la desviación de los huesos nasales en los delincuentes, de 30% en los epilépticos y de 16% en los normales."

"Ottolenghi observó también la *abertura nasal asimétrica*, llamada por Welecker *pteleiforme:* esta abertura, muy rara en los normales—8%—es frecuente entre los delincuentes—36%

—especialmente en los ladrones—37.50%—y en los locos—32%—en los cretinos en 20 individuos la halló el 20%, y en 13 epilépticos el 32%."

"Sobre el vivo estudió Ottolenghi, según las reglas trazadas por Bertillon, la forma de la nariz, su perfil, su base, su longitud, su protuberancia, en 630 normales, 392 criminales, 40 epilépticos y 10 cretinos."

"El criminal, por lo general, presenta la nariz rectilínea—60.97%,—de longitud mediana—48.73%,—amplia—54.14%—pero sin ser protuberante, y con frecuencia desviada—48.13%—."

"El ladrón, presenta en muchas ocasiones la nariz rectilínea—40.4%,—frecuentemente cóncava—23.32%,—de base levantada—32,13%,—algunas veces corta—30.92%,—anelva—53.28%,—chata—31.33%,—con frecuencia desviada—37.5%—."

"Los violadores con suma frecuencia tienen la nariz rectilinea—54.5%,—chata—50%,—desviada—50%,—pero de dimensiones medianas."

"En los normales, la nariz es ya aguileña—26.87%,—ya ondulosa—25.4%,—ya larga—57.7%,—de anchura mediana—54.8%,—de base baja—42%—y rara vez desviada, pero en muchas ocasiones protuberante."

"Se ve, pues, que, si el perfil, lo más frecuentemente rectilíneo y la dirección desviada, distinguen la nariz del delincuente de la del normal, la longitud, la anchura y lo protuberante, distinguen suficientemente entre sí los diferentes tipos de criminales."

Roncoroni y Ardú, en sus 43 cráneos de criminales, notaron las siguientes anomalías de la nariz:

Agujero nasal anterior asimétrico.....	48.2%
Desviación del tabique nasal.....	23.0 „
Huesos nasales asimétricos.....	13.0 „
Huesos nasales desviados.....	9.0 „

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Espina nasal voluminosa....	6.9 „
Suturas anómalas.....	2.3 „
Hueso nasal en forma de gancho.....	2.3 „
Cornetilla media muy desarrollada.....	2.3 „

El *índice nasal*[1] expresa la relación entre la anchura máxima del orificio anterior de la nariz con su longitud máxima, tomada desde la espina nasal á la sutura naso–frontal. En los Parisienses modernos este índice es de 46.81, en los negros de Africa de 56.92, y en los hotentotes de 58.38.

Broca, habiendo encontrado en un Bosquimano el mayor índice nasal y en un Ruso el menor, siendo en el primero dicho índice de 72.22 y en el segundo de 35.71, separó este intervalo formando las tres divisiones siguientes: índice nasal de 58 ó más hasta 53, de 52 á 48 y de 47 á 42 ó menos; á los individuos que presentan alguno de los índices comprendidos en la primera división, ó lo que es lo mismo, que tienen el esqueleto nasal ancho, los denominó *platirrinos;* á los comprendidos, por el índice de que se trata, en el segundo grupo, ó lo que es igual, aquellos cuyo esqueleto nasal es mediano, los llamó *mesorrinos,* y á los que presentan el esqueleto de la nariz prolongado y tienen por esto mismo alguno de los índices comprendidos en el tercer grupo, los nombró *leptorrinos.* Las razas negras, pertenecen á la primera división ó grupo, las mongolas y americanas, con excepción de los esquimales, al segundo, y las blancas al tercero.

En los criminales, según las mediciones del índice nasal, ejecutadas por Lombroso, los *platirrinos* son dos veces más frecuentes que en los normales; los *leptorrinos,* por el contrario, dos veces menos frecuentes.[2]

22.—*Orejas.*—Las anomalías que los criminales presentan en esta parte de la cara, han sido estudiadas ante todo por los Dres. Trigerio y Gradenigo. Las conclusiones del primero de

1 V. Topinard. Ob. cit. pág. 161.
2 V. Lombroso. L'Homme, etc., pág. 158.

estos profesores, acerca de las referidas anomalías, son las siguientes:

1ª "El pabellón de la oreja, debe colocarse en primera línea, entre los órganos que ofrecen caracteres degenerativos."

2ª "El ángulo aurículo–temporal, merece la mayor atención, tanto bajo el punto de vista antropológico, como bajo el punto de vista de la identificación personal."

3ª "El ángulo aurículo–temporal, se observa con mucha más frecuencia, mayor de 90°, en los locos y criminales que en los normales."

4ª "El término medio del ángulo aurículo–temporal por ciento, tiende á aumentar del hombre sano al enajenado y al criminal."

"En los monos, dicho término medio es muy superior, pues raras ocasiones es inferior á 100°."

5ª "El índice de la concha y el del pabellón, decrecen en los individuos sanos, en la niñez y en la edad adulta."

"El desarrollo de la inteligencia, parece ligado al de dichos índices, y á la amplitud del ángulo aurículo–temporal."

6ª "La variación más grande del índice de la concha, comparado al del pabellón de la oreja entre los individuos sanos, permite creer que, de la primera edad á la edad madura, hay, especialmente en la concha, mayor desarrollo en el sentido longitudinal que en el transversal."

7ª "Si entre los enajenados se adopta el índice medio de las dos orejas, para la concha y el pabellón se observa: tanto que el índice de la concha es superior al del individuo normal, como que el del pabellón le es inferior. Sin embargo, entre los enajenados, la concha tiene un desarrollo más grande que el pabellón, sobre todo en el sentido transversal."

8ª "Según el índice medio de la concha, los enajenados y los criminales se suceden en el orden decreciente que sigue: no hereditarios, 0.69; degenerados y violadores, 0.67; homicidas, 0.65; ladrones y falsarios, 0.65; hereditarios, 0.64; incendiarios, 0.60."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Lombroso,[1] hablando de los estudios que sobre la materia de que trato hizo el profesor Gradenigo, se expresa así:

"Gradenigo ha estudiado en vasta escala el pabellón de la oreja."

"Los individuos por él observados fueron numerosísimos. Además del examen atento de 650 personas,—350 hombres y 300 mujeres—pasó en rápida revista el pabellón de 25,000 personas de Turín—15,000 hombres y 10,000 mujeres.—Examinó igualmente 330 enajenados,—180 hombres y 150 mujeres,—76 cretinos—50 hombres y 26 mujeres—y 352 criminales típicos—304 hombres y 48 mujeres.—"

"He aquí sus resultados:

	CRIMINALES.	HONRADOS.	
		Hombres.	Mujeres.
Pabellones regulares.....	29.2%	50.33%	62.00%
Lóbulos adherentes.....	25.0 „	28.00 „	22.00 „
Orejas en asa.....	24.0 „	12.15 „	6.00 „
„ Wildermuth.....	18.0 „	6.02 „	9.12 „

"En las personas honradas, las orejas en asa, son cerca de la mitad menos frecuentes en las mujeres que en los hombres; las orejas Wildermuth, por el contrario, son más frecuentes en aquellas."

"Las anomalías en la conformación del pabellón, son cerca de dos veces más frecuentes entre los criminales que entre los adultos honrados de Turín. En cuanto al número de lóbulos adherentes, la excepción que resulta de las cifras no es más que aparente: porque en los criminales, se notan muy frecuentemente los lóbulos adherentes á lo largo de la mejilla, especie de anomalía más grave que los lóbulos adherentes simples. Además, Gradenigo ha demostrado, entre los criminales, una frecuencia del todo particular de las orejas de Darwin, malformaciones del hélix y del antehélix, y asimetría de implantación, etc., etc."

1 Antropologie criminelle. Págs. 48 y 49.

"De estas investigaciones resulta también que, la proporción por ciento de las anomalías del pabellón, varía sensiblemente —aun haciendo abstracción del sexo,—según la región, la ciudad, la clase social, y aun para ciertas anomalías, según la edad. Pues ha encontrado—Gradenigo—un número mucho más considerable de orejas en asa en los niños—25%,—que en los adultos—12.50%.—"

Penta, en 500 criminales de los presidios de Italia, condenados por crímenes muy graves, observó las siguientes anomalías de la oreja:

Orejas desiguales.....	24.00%
„ en asa.....	35.00 „
„ pitecas.....	5.60 „
„ sesiles.....	3.00 „
„ con los tubérculos de Darwin.....	45.00 „

(Continuará).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

NOTAS.

El artículo que con el título de "Cuenta Corriente," publicamos en nuestro número anterior, fué escrito por nuestro inteligente colaborador el Sr. Lic. D. Manuel Castelazo F. y no por el Sr. M. Castelló F., como equivocadamente asentó el cajista.

***

Hoy insertamos la notable iniciativa presentada por el conocido abogado D. Agustín Verdugo, para la reunión de un Congreso Jurídico Nacional, presentada á la Academia de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la de Madrid, en una de sus últimas sesiones. La iniciativa pasó al estudio de una comisión especial.

***

Hemos sido autorizados por el Presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia, para insertar los trabajos de aquella interesante asociación, y tendremos el gusto de dar á conocer á nuestros lectores los estudios de mayor interés que se presenten, comenzando hoy con el del Sr. Lic. Verdugo.

México, Diciembre 1º de 1894.

V. M. C.

LA ESCUELA POSITIVA DE DERECHO PENAL. *

(Exposición sumaria de sus doctrinas).

Por el Lic. Carlos Díaz Infante, ex-Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

23.—*Mandíbulas.*—Las modalidades del *aparato masticador*, tienen estrecha relación con ciertos instintos, según han podido observarlo gran número de autores. Entre otros el Dr. Corre, se expresa sobre este particular, en los siguientes términos: "Las razas obligadas á alimentarse con la carne de los animales, tienen dientes y mandíbulas más fuertes que las de las razas que se alimentan de frutos y de granos. Las primeras, que deben proveer á su subsistencia por la caza, es decir, por la lucha contra seres frecuentemente temibles, tienen una masticación más vigorosa que las segundas, de costumbres más tranquilas y sedentarias. Los dientes y las mandíbulas traducen, pues, hasta cierto punto tanto los instintos salvajes del cazador y del carnívoro, como los instintos más dulces del cultivador y del sedentario; y, en las razas de régimen mixto, como la nuestra, su desarrollo exagerado puede verse como una especie de retroceso hacia el tipo ancestral."

Para Lombroso, es incuestionable el exagerado desarrollo,

* Véase la pág. 517.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en el criminal, de la mandíbula inferior; pues, mientras en el hombre honrado su peso es sólo de 80 grms., en el delincuente es de 84 y en el loco tan sólo de 78 grms.[1]

Según Manouvrier, el peso de la mandíbula inferior en el parisiense moderno, es de 84.gr.4d. gr., y en los asesinos de la misma procedencia de 94.gr.3d. gr.

El diámetro de la mandíbula inferior mide, por término medio, en los normales 98.2mm., en los locos 97.8 y en los criminales 103.9mm.

Las siguientes mensuraciones de Orchanski, confirman la existencia, en los delincuentes, del gran desarrollo de su mandíbula inferior.

	Asesinos franceses.	Razas caucásicas.	Razas mongólicas.	Razas negras.
Anchura bigónica del maxilar inferior...	99.4	95.0	98.0	—
,, bimentoniana del maxilar inferior.....	45.1	45.0	—	46.0
Altura sinfisiana del maxilar inferior	32.9	31.0	—	33.0
,, molar.....	27.2	26.0	—	—
Longitud del brazo montante.....	66.4	57.0	—	62.0
Anchura ,, ,, ,, ...	33.0	30.0	—	—
Indice medio	50.0	53.5	—	—
Angulo mandibular medio	117.°6	123.°0	—	—
Cuerda gonio-sinfisiana media.....	86.4	82.0	—	86.0

"En resumen, dice Lombroso, se encuentra entre los criminales un peso mayor, una anchura más considerable y una altura más grande de los brazos del maxilar inferior; todo lo que, podría parangonarse con los resultados obtenidos por Quatrefages, sobre las razas prehistóricas."

"El Dr. Manouvrier, ha relacionado el peso de la mandíbula con el del cráneo del criminal, dándole á esta relación el nombre de *índice cráneo-mandibular*.

"En una misma raza, dice aquel autor, el *peso de la mandíbula* y el *índice cráneo-mandibular*, se elevan al mismo tiempo que el peso del cráneo y el peso del esqueleto. Esta elevación se explica fisiológicamente; pero, cuando no coincide con la elevación del peso del cráneo, lo que sucede en las razas inferiores y en cierto número de individuos de las razas civilizadas, se toma como un carácter evidente de inferioridad. Esto sucede en la mayor parte de los asesinos, porque el peso de su cráneo no es más alto que en los Parisienses ordinarios; por el contrario, es un poco menor; de suerte que la resolución del peso de la mandíbula al peso del cráneo es mayor en los asesinos, lo que los hace asemejarse á las razas inferiores...."

1 L'Homme, etc., pág. 158.

El autor de que vengo hablando, obtuvo los *índices cráneo-mandibulares* siguientes:

Parisienses—hombres	13.4
,, —mujeres	12.8
Asesinos franceses.....	14.78
Negros	15.69
Microcéfalos.....	22.0 á 25.0
Antropoides.....	40.0 á 46.0

Roncoroni y Ardú, en sus cráneos de criminales, notaron las siguientes anomalías de la mandíbula:

Apéndice lemuriano.....	34.5%
Mandíbulas voluminosas.....	16.1 ,,
Mandíbula inferior con neoártrosis.....	2.3 ,,

Rossi en 100 criminales notó la hipertrofia de la mandíbula en la proporción de 23%

24.—*Prognatismo.*—"El prognatismo, dice Topinard,[1] significa para todo el mundo, desde la época de Prichard, la prolongación y la prominencia de las mandíbulas, ó también su oblicuidad."

1 Ob. cit., págs. 175 y 179.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Según el autor citado, todas las razas y todos los individuos son prognatos, las diferencias sólo son de grado. Sin embargo, corrige el anterior concepto agregando: "Si se toma la palabra en su sentido corriente ordinario, podemos decir, que las razas blancas no son nunca prognatas, y que las amarillas y negras lo son en grados diversos."

Las especies de prognatismo que, al decir del propio Topinard, se pueden admitir, son las siguientes:

Facial superior { por completo. / maxilar superior. / alveolo subnasal. / dentario superior.

Facial inferior { dentario inferior. / maxilar inferior.

El único prognatismo verdadero es el subnasal.

Roncoroni y Ardú, en sus 43 cráneos de criminales, observaron: el prognatismo alveolar en la proporción de 27.6% y el maxilar inferior en la de 20.7%. Penta, en 500 criminales encontró el prognatismo alveolar en la proporción de 45%.

Para medir el prognatismo se ha hecho uso del ángulo facial de Camper, del naso-basal de Welcker, de los triángulos palatino y vomeriano de Vogt, y de otros varios procedimientos, siendo los empleados por Broca y Lucæ los mejores, porque se aprecia el prognatismo colocando el cráneo en la posición que tiene la cabeza en el sér vivo.

25.—*Angulo facial.*—Uno de los primeros medios empleados por los antropólogos, para apreciar los caracteres que distinguen las razas entre sí, según la posición y desarrollo del cráneo propiamente dicho con relación á la cara, fué el de los ángulos faciales.

El más antiguo de estos ángulos es el ideado por Camper; sus lados se toman: el llamado *horizontal*, trazando una línea desde el agujero auditivo al borde inferior de las ventanas de

la nariz; y el denominado *facial*, trazando igualmente otra línea tangente con los dos puntos más salientes de la cara, es decir, la glabela ó la frente arriba y la cara anterior de los dientes incisivos abajo. El vértice de este ángulo, que es la intersección de las dos líneas dichas, es un punto virtual que, en las razas blancas, queda colocado en la espina nasal; en las negras, delante del maxilar superior, y en muchos animales, detrás de dicho maxilar.

Sigue al anterior el ángulo propuesto por Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier, ángulo en el que se conserva la línea ó lado *facial* del de Camper, y la *horizontal* se convierte en oblícua, pues se traza del ajugero auditivo al borde cortante de los incisivos.

En 1821, J. Cloquet imaginó un tercer ángulo; la línea *facial* se conserva en su parte superior tangente al punto más saliente de la cara; pero abajo termina en el borde alveolar superior, y el lado *horizontal* como en el ángulo de Saint Hilaire es oblícuo, pues se traza del agujero auditivo al mismo borde alveolar superior, en cuyo punto queda el vértice de este ángulo.

Todavía Jacquard en 1856, introdujo un cuarto ángulo facial, que, aunque muy usado entonces, se ha abandonado hoy casi por completo, por ser el resultado de una mala inteligencia de su autor, quien colocó el vértice de su ángulo en la espina nasal.

Topinard, después de señalar las influencias que hacen variar al primero, segundo y cuarto de los ángulos faciales mencionados, opina que, el que debe preferirse es el de Cloquet, á cuyo ángulo propone se le dé el nombre de *ángulo facial zoológico*, con tal de que se fije el límite superior del lado *facial*, en el punto superorbitario.

Según Camper, en las razas humanas el ángulo facial varía de 70 á 80°. Este ángulo rara vez es recto, y se aleja de esta medida conforme se desciende en la escala zoológica.

Corre y Roussel, encontraron repartido el ángulo facial de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Jacquard en los autores de los delitos puestos en seguida, en esta proporción:

	De 75° y más.	De 74 á 70°	De 70° y menos.
Robo	19.51%	53.27%	6.80%
Falsificación	27.27 „	59.09 „	13.63 „
Incendio	40.00 „	40.00 „	—
Atentados al pudor y violación.	28.57 „	42.08 „	28.57 „
Delitos de sangre	25.00 „	60.00 „	15.00 „

26.—*Pómulos, dientes, paladar y asimetría facial.*—El excesivo desarrollo del pómulo, que lo hace muy saliente, es de frecuente observación entre los criminales.

"Los dientes, escribe Lanvergne, sirven al instinto de la conservación, de la misma manera que las piernas para huir de un peligro; los dientes, que van á buscar y á elegir en un cuerpo nutritivo la separación del sér, están ligados á la naturaleza de su instinto. El instinto entre todos los hombres preexiste á la inteligencia; le basta á un gran número de pueblos, para recorrer con la ayuda de sus solas voliciones el ciclo de su duración. Los pueblos salvajes son aquellos que mejor responden á la explicación de nuestras ideas sobre los dientes. Desde luego, esta parte de la armazón huesosa, es admirable entre ellos por su blancura y su dureza. En seguida, bajo la relación del aparato dentario, se pueden casi dividir estos pueblos en dos series: 1°, los que viven de carne, se comen á sus enemigos y hacen la guerra por satisfacer la inaneidad de sus instintos, el robo y la crueldad: 2°, los que viven de los productos de la tierra, de frutos, de raíces feculentas, y cuyo instinto pacífico no concibe una emigración de un lugar árido, sino cuando deja de apaciguar su hambre..... El instinto carnicero se nota en la boca de los primeros, por caninos, que afectan forma de verdaderos garfios, mientras que, en la del dulce fengívoro descuellan, sobre los bordes enanchados del maxilar, blancos y gruesos, propios para triturar." Bajo este concepto, el criminal puede igualmente parangonarse con el salvaje.

Rossi, en 100 criminales observó las siguientes anomalías de los dientes:

Dientes superpuestos	8%
Carencia de incisivos medianos	2 „
„ „ caninos	1 „
Incisivos medianos hipertrofiados	3 „
Caninos „ „	2 „

Roncoroni y Ardú, en sus 43 cráneos de delincuentes, notaron estas otras:

Diastema de los dientes	18.4%
Caninos hipertrofiados	13.8 „
Incisivos irregulares	6.9 „
„ enormes	4.6 „

El Dr. Laurent asegura que, es un estigma de degeneración observado con mucha frecuencia en las prisiones, la implantación viciosa de los dientes; y más frecuente que esta es todavía la persistencia á una edad avanzada, de los dientes correspondientes á la primera dentición.

Lombroso,[1] en los homicidas ha encontrado el 4 por 100 con un desarrollo exagerado de los caminos. Y en siete de estos criminales, además de la anomalía anterior, pudo observar otras, tales como la carencia de incisivos laterales, la semejanza de éstos con los caninos, la mala dirección de los últimos y su superposición.

Clouston, ha estudiado el paladar: en la población en general, en los criminales y en los locos, imbéciles é idiotas. Para sus comparaciones admitió tres formas de paladar: la *típica*, en que la bóveda es larga y aplanada; la *neurótica*, en

1 Ob. cit., pág. 230.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que la bóveda es muy alta y algunas veces tiende á tomar la forma de un *hocico de liebre;* la *deforme*, en que la bóveda toma la forma de una Y.

Este paladar en forma de Y, el autor citado lo observó en las siguientes proporciones:

Población en general	19 %
Locos	33 „
Criminales	35 „
Imbéciles	61 „

Roncoroni y Ardú notaron: el índice palatino muy elevado 4.6%; la bóveda con una curva muy pronunciada 2.3%; espina huesosa en la bóveda 2.3%.

El diámetro palatino, siendo en los Parisienses, según Topinard, de 747, Orchanski lo encontró en su serie de asesinos de 81.5.

La *asimetría facial* es de tal manera frecuente en los criminales, que el Dr. Corre dice haberla observado, por término medio, en la proporción de 25%, en los cráneos que estudió en unión del Dr. Roussel.

Para las distintas especies de criminales, la halló distribuida de esta manera:

Ladrones	28.9%
Falsarios	18.1 „
Atentados al pudor y violación	32.1 „
„ contra la vida	24.0 „

Rossi observó en sus criminales la asimetría facial en la proporción del 24%; Roncoroni y Ardú en la de 20.7% y Penta en la de 15%.

(Continuará).

EL RECURSO DE AMPARO Y LAS PERSONAS MORALES. *

¿Es el hombre, individualmente considerado, la única persona que tiene derecho al recurso de amparo por violación de garantías individuales ó pueden también promoverlo las personas morales, y en uno ú otro caso, es requisito indispensable que la parte quejosa habite en la República?

Habiendo tenido el honor de ser designado por el Sr. Presidente de la Academia para estudiar y resolver las cuestiones constitucionales propuestas, voy á cumplir con ese honroso encargo, apuntando las razones jurídicas que á mi juicio deben tenerse presentes para resolverlas con acierto.

Si las cuestiones se sometiesen al texto literal adoptado en la ley Suprema de la República, la solución no tendría dificultad de ningún género. El art. 102 de la Constitución dispone, que la sentencia en los juicios de amparo será siempre tal, que sólo se ocupe de *individuos particulares*. Ante el tenor literal de este precepto no parece sino que nuestros constituyentes se refirieron á las personas *físicas*, como decía un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia: *á personas de carne y hueso.*

Un publicista distinguido, el Sr. Lic. D. José María Lozano, patrocina esa teoría sosteniendo que siendo el objeto de

* Discurso pronunciado por el Sr. Lic. D. Fernando Vega en la Academia de Legislación y Jurisprudencia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que la bóveda es muy alta y algunas veces tiende á tomar la forma de un *hocico de liebre;* la *deforme*, en que la bóveda toma la forma de una Y.

Este paladar en forma de Y, el autor citado lo observó en las siguientes proporciones:

Población en general	19 %
Locos	33 „
Criminales	35 „
Imbéciles	61 „

Roncoroni y Ardú notaron: el índice palatino muy elevado 4.6%; la bóveda con una curva muy pronunciada 2.3%; espina huesosa en la bóveda 2.3%.

El diámetro palatino, siendo en los Parisienses, según Topinard, de 747, Orchanski lo encontró en su serie de asesinos de 81.5.

La *asimetría facial* es de tal manera frecuente en los criminales, que el Dr. Corre dice haberla observado, por término medio, en la proporción de 25%, en los cráneos que estudió en unión del Dr. Roussel.

Para las distintas especies de criminales, la halló distribuida de esta manera:

Ladrones	28.9%
Falsarios	18.1 „
Atentados al pudor y violación	32.1 „
„ contra la vida	24.0 „

Rossi observó en sus criminales la asimetría facial en la proporción del 24%; Roncoroni y Ardú en la de 20.7% y Penta en la de 15%.

(Continuará).

EL RECURSO DE AMPARO Y LAS PERSONAS MORALES. *

¿Es el hombre, individualmente considerado, la única persona que tiene derecho al recurso de amparo por violación de garantías individuales ó pueden también promoverlo las personas morales, y en uno ú otro caso, es requisito indispensable que la parte quejosa habite en la República?

Habiendo tenido el honor de ser designado por el Sr. Presidente de la Academia para estudiar y resolver las cuestiones constitucionales propuestas, voy á cumplir con ese honroso encargo, apuntando las razones jurídicas que á mi juicio deben tenerse presentes para resolverlas con acierto.

Si las cuestiones se sometiesen al texto literal adoptado en la ley Suprema de la República, la solución no tendría dificultad de ningún género. El art. 102 de la Constitución dispone, que la sentencia en los juicios de amparo será siempre tal, que sólo se ocupe de *individuos particulares*. Ante el tenor literal de este precepto no parece sino que nuestros constituyentes se refirieron á las personas *físicas*, como decía un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia: *á personas de carne y hueso.*

Un publicista distinguido, el Sr. Lic. D. José María Lozano, patrocina esa teoría sosteniendo que siendo el objeto de

* Discurso pronunciado por el Sr. Lic. D. Fernando Vega en la Academia de Legislación y Jurisprudencia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

un amparo asegurar los derechos del hombre, los seres morales no podían acogerse á ese recurso por no ser hombres (Lozano, Derechos del Hombre, página 345).

El respetable Magistrado Sr. D. Félix Romero se expresa en estos términos: "Y como el legislador constituyente hubiese tenido la previsión de que, con el curso del tiempo y la práctica de la ley de garantías, podía llegar una ocasión en que se quisiera favorecer con esta ley no sólo al hombre, al individuo, á la propia y única persona (que todo quiere decir lo mismo en el tecnicismo de la lengua castellana), sino también á las entidades colectivas ó corporaciones, representadas por un ciudadano ó una personalidad cualquiera, recalcó en el artículo que antes citamos *que sólo los individuos particulares* podían ser objeto de las sentencias de amparo, con cuya expresión, *particulares*, que, acaso, sea una redundancia en el texto constitucional, porque bastaba decir individuos para referirse á particulares, y al contrario; con esa expresión, repito, se procuró reforzar más la sola y única inteligencia que debía darse al precepto referido, como si de tal manera se hubiera querido poner una cortapisa, un dique, ó si se me permite la palabra, un blindaje á la institución constitucional del amparo, para que ninguna mano pudiera llegar hasta ella para subvertirla ó desfigurarla."

Como se ve, respetables jurisconsultos han sustentado la teoría restrictiva del amparo á las personas *físicas* ó individualmente consideradas; pero muy pronto va á observarse que la cuestión no está finalmente decidida y que, lejos de haberse adoptado esa solución como un dogma absoluto, la ciencia, los publicistas y aun la jurisprudencia de la Suprema Corte, se han separado del rigorismo del texto constitucional, admitiendo en el terreno de la filosofía del derecho público, más de una excepción al absolutismo del precepto.

En efecto, el progreso comercial de la República Mexicana y la facilidad de comunicaciones de que disfrutamos ahora, han dado gran impulso á nuestro comercio internacional, y á

la sombra de la paz de que gozamos, estamos mirando cómo se multiplican y desarrollan las instituciones bancarias, las sociedades mercantiles, y en general, todas esas asociaciones que simbolizan el progreso material de los pueblos cultos; y si la teoría de que el recurso de amparo sólo pueden interponerlo los individuos de *carne y hueso*, fuese de verdad un axioma entre nosotros, á la vez que habríamos sancionado una máxima constitucional impura, habríamos, sin quererlo, puesto un dique á la marcha comercial y regeneradora de nuestra República. El día en que nuestras empresas ferrocarrileras, que nuestras instituciones bancarias, nuestras asociaciones mercantiles, y en general, todas nuestras instituciones de crédito, adquieran el convencimiento pleno de que podían ser expropiadas sin indemnización previa, de que en un juicio contencioso podrían ser condenadas por leyes de efecto retroactivo, sin que hubiese un poder protector, ni una institución que las colocase al abrigo de semejantes arbitrariedades, no lo dudemos, veríamos desaparecer todas esas sociedades de crédito como por encanto, veríamos desaparecer todos esos capitales de la masa de la riqueza comercial, y á las conquistas de la paz, arraigada ya entre nosotros, estrellarse ante la tiranía de una Constitución que en vez de proteger tantos intereses, los abandonaba en brazos de la arbitrariedad judicial ó administrativa.

No son esos conceptos vanas declamaciones. Si esas entidades morales contaran siempre con recursos en el fuero común, para proteger sus derechos de propiedad, no habría peligro alguno que nos preocupase; pero desde que fué abolido entre nosotros lo *contencioso-administrativo*, sustituyéndose con el amparo constitucional, las arbitrariedades del poder público quedarían sin remedio respecto de quienes no pudiesen acudir á este procedimiento. Una declaración de expropiación inmotivada por parte del Poder Administrativo, ó una decisión de Juez federal que la declarase sin indemnización previa, no pueden conjurarse de otro modo más que por me-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dio del amparo constitucional. Yo, al menos, no conozco otro recurso.

Una sentencia de casación que violase una garantía constitucional, aplicando, por ejemplo, una ley derogada, como fundamento de su decisión, no tendría tampoco recurso ulterior de ningún género. En todos estos casos, una asociación comercial quedaría abandonada en brazos de la arbitrariedad judicial, sin más recurso que el de protestar en nombre de la ciencia y de la civilización contra tan graves atentados. ¿Puede concebirse semejante espectáculo en el seno de nuestro régimen constitucional, que ha proclamado, entre otros principios, el de igualdad política y el de igualdad civil?

Esta situación anómala debe preocuparnos seriamente y alentarnos para estudiar el amparo constitucional en una esfera filosófica, en las regiones elevadas de la interpretación doctrinal.

Voy, pues, á emprender someramente ese estudio, comenzando por hojear rápidamente las enseñanzas de nuestros publicistas acerca del amparo constitucional.

El juicio comparativo entre el *Writ of Habeas Corpus* y el amparo constitucional clásicamente formulado por nuestro inolvidable Vallarta, nos reveló con una perfecta claridad la supremacía de nuestro recurso patrio, respecto del sistema inglés, por cuanto á que su esfera de acción es mucho más vasta y eficaz. El recurso de amparo no se limita á proteger la libertad personal, sino que también protege todos los derechos del hombre detallados en la sección 1ª de la Ley Fundamental, descollando entre ellos el de que nadie puede ser molestado en sus posesiones ó propiedades sino es por mandamiento de una autoridad competente que funde ó motive la causa legal de esa molestia, y el de que la propiedad no puede ser ocupada, si no es por causa de utilidad pública y previa indemnización.

Desde que el juicio de amparo se instituyó para garantir la propiedad individual, se marcó el camino que debe conducir-

nos, para resolver con acierto el problema que se ha propuesto. No hay ni se concibe una propiedad que no esté bajo la salvaguardia de ese precepto orgánico; y así como no hay, ni se supone que un hombre pise nuestro territorio y esté fuera de la comunión de las garantías individuales que protegen la libertad personal, tampoco puede idearse una propiedad, ni un propietario, que estén fuera de la comunión de las garantías individuales que aseguran y defienden esa propiedad.

Suponer lo contrario, es decir, que las garantías constitucionales están como en suspenso y para determinados poseedores ó propietarios, equivaldría á sancionar una desigualdad irritante y oprobiosa en el seno de nuestro régimen constitucional.

Anticipándose á estas reflexiones, ha dicho ya nuestro eminente publicista que las compañías comerciales pueden ser juzgadas como cualquier individuo, por consiguiente, sus propiedades deben estar bajo la protección de la ley constitucional, contra los actos arbitrarios de las autoridades, como innumerables ejecutorias de la Corte lo han sancionado y admitido. (El juicio de amparo, pág. 110).

Desde que la jurisprudencia constitucional asumió resueltamente esa actitud, repito, quedó trazada la solución del cuestionario propuesto por la Academia. No es necesario que el promovente sea una persona *física*, sino que puede serlo también una persona *civil* ó *moral* reconocida por la legislación. En efecto; la Suprema Corte de Justicia ha estado reconociendo personalidad jurídica bastante para pedir amparo de garantías, á concursos representados por sus respectivos Síndicos, á sucesiones representadas por sus respectivos Albaceas y á compañías representadas por sus Gerentes respectivos, pudiendo registrarse, entre otras, la ejecutoria de Junio 23 de 1887, en el amparo interpuesto por la sociedad "Rosalí, Ogallo y compañía," (Semanario Judicial, tomo XII, página 703), siendo muy digno de observarse que, cuando se ha provocado discusión sobre este punto en el seno de la Suprema Corte

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de Justicia, ha sido en los casos de amparo constitucional, promovidos por el Fisco ó por los ayuntamientos vecinales. Ha sido entonces cuando, preocupándose nuestros respetabilísimos Magistrados por el texto de la ley constitucional, han sostenido que el recurso sólo puede promoverse por *individuos particulares*, no por seres colectivos que no entran en la clasificación de *hombre* de que usa el texto constitucional. Cuando de compañías comerciales se ha tratado, ninguna discusión ha surgido en el primer Tribunal de la República, al menos con un carácter formal que hubiese dado margen á una ejecutoria expresa ó á un voto particular.

Reservándome hablar oportunamente sobre esa inconsecuencia en los principios teóricos, me limito á interrogar por ahora: ¿Es filosófica la jurisprudencia de la Corte al revestir con los atributos de una personalidad jurídica bastante para impetrar el amparo de la Unión, á las compañías comerciales?

Adhiriéndome á la opinión del Sr. Vallarta, yo creo que sí; porque en el terreno abstracto, lo mismo es el *individuo particular*, creación de la naturaleza, que el *individuo moral*, creación de la ley, salvo ciertas desemejanzas que no puede extinguir el poder de una ficción.

El art. 38 de nuestro Código Civil, y con él los preceptos de varios Códigos de los Estados, establece que las sociedades civiles ó mercantiles formadas con arreglo á la ley, son *personas morales* y con tal carácter tienen *entidad jurídica*. Según este precepto, esas sociedades constituyen una individualidad jurídica distinta de la de los asociados, porque en el terreno doctrinal y en el lenguaje escolástico, son sinónimos la *individualidad jurídica* y la *persona civil* ó *moral*.

Las personas civiles son capaces de adquitir y de poseer: cuando la sociedad tiene una individualidad jurídica, distinta de la de sus miembros, es la sociedad la que adquiere y posee; en consecuencia, si esa sociedad es víctima de una expoliación, de una expropiación sin indemnización previa, y en general, de un ataque á la propiedad, debe tener abiertas las puertas del amparo federal por violación de garantías individuales, porque en el lenguaje constitucional y en el terreno de las nociones sobre propiedad, lo mismo es el individuo *físico* que el individuo *jurídico*, permitiéndoseme esta nomenclatura que he tomado del derecho civil francés.

Poner en duda la exactitud de esos principios, suponer que las colectividades comerciales están fuera de la ley constitucional, me permitiré repetirlo, es romper el principio de igualdad civil que sustenta, entre otros, nuestro régimen constitucional. La interpretación extensiva del texto de la ley suprema, se impone, pues, como una necesidad social y como un homenaje á los principios filosóficos y á las tradiciones del derecho sobre *personalidad* civil.

Pero no está la dificultad, señores Académicos, en la personalidad de las asociaciones civiles ó comerciales. En donde se pulsa, y con graves caracteres, es en la de las corporaciones civiles ó políticas, por ejemplo, en la de los ayuntamientos, que hoy y siempre han sido rechazados del santuario del fuero federal, como excomulgados de las leyes constitucionales, como si hubieran sido condenados á perpetuo anatema ó lanzados como réprobos del gran teatro social.

Yo creo, señores, que no se ha pronunciado aún la última palabra sobre la personalidad jurídica de las corporaciones, para impetrar el amparo de la justicia de la Unión, que la cuestión debe estudiarse y que las sentencias por *mayoría* que han desconocido ese derecho á los Municipios, revelan que ni en la Corte misma ha reinado la armonía al pronunciarlas.

Yo he adquirido la convicción de que, conquistado el principio de que las sociedades comerciales pueden pedir amparo, hay que reconocer ese mismo derecho en favor de los ayuntamientos, porque ambas personalidades presentan una misma fisonomía jurídica con los mismos caracteres, con admirables semblanzas que reclaman una misma decisión y una igualdad de doctrinas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Voy á exponer mis opiniones con el natural temor que debe suponerse cuando se lanza por primera vez una doctrina que choca contra la jurisprudencia establecida y contra las opiniones de los publicistas. Por primera vez voy á segregarme de la escuela del respetabilísimo Maestro en derecho constitucional.

El Sr. Vallarta ha dicho: "La Federación, el Estado, el Municipio y otras corporaciones políticas de ese género, no pueden usar de este recurso. Se funda esta excepción en el motivo capital de que el amparo ha sido de preferencia instituido para proteger los derechos del hombre, derechos cuyo goce no tienen, sin duda, esas corporaciones. Tienen, es cierto, derechos civiles, tienen propiedades y celebran contratos que les producen derechos y obligaciones: si éstos se vulneran, tienen para hacerlos respetar los otros recursos que les da el derecho constitucional, el administrativo y el civil." Ob. cit., pág. 106.

Con el respeto debido á la memoria del publicista insigne, me permito observar que incurre en la misma inconsecuencia teórica que han cometido las ejecutorias que rechazan á los Municipios del seno del amparo constitucional. Voy á explicarme.

Comienzo por confesar que las personas llamadas *civiles*, son séres ficticios y creaciones de la ley, y que por consiguiente, solamente el legislador puede infundirles existencia real. Al verificar esa creación, como que imita á la Divinidad, haciendo de la nada un sér incorpóreo, reconociéndole alguno de los derechos que Dios ha dado al sér humano, obedeciendo á motivos indiscutibles de utilidad pública que imponen al legislador esa necesidad.

En las legislaciones que han mirado esos séres ficticios con mucha precaución, como la francesa, por ejemplo, que no se han atrevido á denominar *personas civiles* á esas corporaciones, no es fácil reconocerles una personificación propiamente dicha, limitándose el criterio á mirar entidades morales con el goce de derechos de propiedad necesarios para llenar los fines de

su instituto; pero en el seno de Legislaciones, como la Belga y la Mexicana, que al lado de las personas jurídicas *humanas*, coloca á *personas morales* con *entidad jurídica*, los Ayuntamientos tienen *personificación civil*, ó en otros términos, tienen individualidad jurídica, son *individuos* por ficción de la ley.

Tratándose de las *comunas* hay observaciones especiales que no presentan las demás corporaciones civiles, y son éstas: el Municipio tiene una existencia natural y es anterior al Estado, del cual forma un elemento componente. Fundado en ellas, publicista ha habido que sostiene que el Municipio es una persona natural y que, por consiguiente, debe gozar de la plenitud de derechos que pertenecen al hombre. Podrá ser avanzada esa teoría; pero no debemos poner en duda que el Municipio simboliza una personalidad que nada tiene de ideal y que se asimila á la personalidad humana.

Abstrayendo esas observaciones particulares, vuelvo á decirlo, desde el momento en que el Legislador ha dado al Municipio el nombre de *persona*, la lógica nos conduce invenciblemente á reivindicarle el goce de los derechos apropiados á su existencia.

No se trata de un simple juego de palabras. Nuestros codificadores tenían demasiada sabiduría para haber ignorado la lucha científica habida entre las escuelas que disputaban la *individualidad jurídica* de las corporaciones, y al usar el lenguaje que adoptaron, se afiliaron á la escuela Belga, inclinándose á revestir esas creaciones de la ley con verdaderos atributos de personalidad jurídica.

Así, pues, los Ayuntamientos tienen dos fisonomías; son *autoridades* y son *personas civiles*. Bajo este aspecto pueden ser propietarios porque necesitan rentas para llenar el fin de su institución: pueden adquirir y poseer, y por consiguiente, contraer, obligarse y comparecer ante la justicia por medio de sus Síndicos. Poseer y hacerse representar; esos son los signos característicos de la *persona jurídica* según Savigny.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Bien se comprende que hay diferencia entre los derechos de propiedad de un Municipio y los de un sér humano; el Municipio no tiene el *jus abutendi* que caracteriza la propiedad individual; pero salvo esa diferencia, la propiedad comunal se rige y gobierna por una misma legislación y está protegida por unas mismas leyes. A semejanza de los bienes de los incapacitados, los Ayuntamientos tienen restricciones para administrar, pero no por eso dejan de ser propietarios como el menor, la mujer casada, etc., etc.

Dados estos antecedentes, á nadie sorprende ver á un Ayuntamiento figurando como actor ó reo en una controversia civil. En ejercicio de su personalidad jurídica ataca ó se defiende, apela ante los Tribunales Superiores, de Casación y se acoge á los interdictos posesorios. ¿Qué razón hay para que sin repugnancia admitamos que un Municipio puede ejercitar todas las acciones y recursos civiles de la ley procesal, y no pueda, sin embargo, invocar el amparo de la justicia de la Unión, que no es otra cosa más que un simple recurso constitucional, deducible en juicio con las formas de todo procedimiento contencioso? ¿Por qué al llegarse al recinto de ese recurso se eclipsa esa personalidad y se extingue, volviendo á la nada de que fué hecha por el poder de una ficción? En verdad, no hay razón alguna satisfactoria.

Que no es un *hombre* y que el recurso de amparo solamente se instituyó para garantir los derechos del hombre. Tal es el fundamento capital en que se apoya la escuela que combato; pero si ese argumento fuese realmente incontestable, yo pregunto á sus sostenedores, ¿por qué admiten que las Compañías Comerciales puedan invocar el amparo constitucional? ¿Esas compañías constituyen un sér humano? No lo constituyen, incuestionablemente, y si al fin se les ha reconocido ese derecho, ha sido por las mismas causas que yo imploro en favor del Municipio porque constituyen un *individuo civil*, porque el legislador les ha infundido una existencia legal, que en el terreno de la práctica es igual enteramente á una existencia

física. El dilema es apremiante: ó el amparo procede solamente para proteger las garantías de un hombre físicamente considerado, y entonces se ha violado la Constitución al amparar á las Compañías Comerciales, ó procede también en favor de las personas jurídicas, y en tal evento los Ayuntamientos tienen el incuestionable derecho de no ser excomulgados de esas doctrinas. Ese dilema no tiene una explicación satisfactoria y yo espero con firmeza escuchar á los sostenedores de esa monstruosa inconsecuencia.

El carácter de autoridad que los Municipios representan, no servirá nunca de clave para resolver el enigma, porque en los casos en que los Ayuntamientos hacen el papel de actor ó reo en una controversia civil, ó de otro modo, cuando adquieren derechos ó contraen obligaciones, se desnudan de ese carácter para convertirse en simples personas morales, sin lazo ni vínculo alguno con la autoridad que representan. Cuando un Ayuntamiento se presenta en juicio, no es la autoridad la que reclama, es la persona civil.

La Corte de Justicia ha fijado ya con toda exactitud la diferencia que hay entre el Ayuntamiento como *autoridad* y como *sér moral civil*. Más todavía: ha diseñado perfectamente que el miembro de la corporación municipal que con motivo de sus funciones ha sufrido una molestia personal inmotivada, puede aspirar á la protección constitucional, porque la personalidad civil del cuerpo, es distinta de la de cada uno de los que la componen.

La Constitución de 1857 contiene preceptos que no armonizan con la idea absoluta de que las garantías constitucionales se reconocieron exclusivamente al hombre individualmente considerado; y muy particularmente cuando se refiere á las garantías sobre la propiedad, se expresa declarando que la de las *personas* no puede ser ocupada sin los requisitos constitucionales. El artículo 27 no dice que la propiedad de los *hombres* no pueda ser ocupada, sino que adoptó la denominación de *personas* sin distinción de físicas ó morales y esto sólo bas-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

taría para que la propiedad municipal estuviese bajo la salvaguardia del procedimiento de amparo.

El pronombre *nadie* que se adoptó en la estructura del artículo 16, para proteger la posesión civil, no se refiere al hombre físico, sino á las personas, según el Diccionario de la Lengua Castellana. Si, pues, ese precepto proclama que ninguna *persona* puede ser molestada en su patrimonio sin causa motivada, sin distinguir entre personas físicas ó morales, las posesiones de un Municipio tienen el derecho de aspirar á la protección Constitucional. Cuando la Ley Suprema se refirió á *hombres*, lo expresó literalmente como puede verse en los artículos 4º, 5º, 10º y otros de ese pacto Federativo.

Tales son los fundamentos que me permito presentar al sostener que los Ayuntamientos pueden implorar el amparo federal contra los actos de cualquiera autoridad que les violen la propiedad comunal que representan, ya sea porque han sido expropiados sin las garantías constitucionales, ó porque han sido condenados en juicio con fundamento de leyes retroactivas, y en general, siempre que hayan sido víctimas de una arbitrariedad recaída sobre los bienes ó propiedades que constituyen su patrimonio.

Pero mi tesis avanza más todavía: no solamente el Municipio, sino todas las asociaciones ó corporaciones reconocidas por la ley, se encuentran en el mismo caso. Desde que el legislador las ha denominado *personas*, no hay razón para que sean exceptuadas de los beneficios concedidos á toda personalidad civil. Cuando se adopta un principio hay que afrontar todas sus consecuencias, porque si el principio es verdadero, sus derivaciones tienen que ser correctas.

Toda entidad moral que tiene derecho de adquirir, de poseer, de contraer, y de presentarse en juicio, debe gozar del recurso de amparo, como uno de tantos procedimientos adoptados en nuestra legislación.

El principio de igualdad civil impone esa conclusión de una manera apremiante y decisiva, porque no me cansaré de repetirlo, no se concibe en nuestro sistema constitucional el fenómeno de una legislación que rija solamente á determinadas individualidades jurídicas, y no á todas las personalidades susceptibles de comparecer en una controversia judicial ó de apersonarse en juicio.

Nuestro régimen constitucional rechaza la existencia de *leyes privativas*, y leyes privativas son aquellas que no se aplican á todas las personas que pueden ser llevadas al terreno de una ley de enjuiciamiento, y cuyos beneficios, cuyos recursos y cuya protección no pueden ofrecerse á todos los asociados.

Llevando mis principios hasta donde los condujo el sabio jurisconsulto Merlín, que otorga á las *personas civiles* un *estatuto personal* perfecto, profeso la doctrina de que cuando un sér colectivo existe legítimamente, siéndole permitido poseer y adquirir, su existencia y capacidad lo asimila á los séres reales en cuanto á sus relaciones jurídicas sobre el derecho de propiedad. A nuestras entidades federativas las miro también colocadas en la misma posición. Como entidades jurídicas pueden desempeñar el papel de actor ó reo en una contienda civil, y á semejanza del Municipio no puedo persuadirme de que esa personalidad se evapora y perece ante los procedimientos judiciales de un amparo federal.

En la Unión americana no es raro ver á un Estado pedir ó ejercitar el *writ of habeas corpus* en nombre de su personalidad moral y en favor de uno de sus ciudadanos.

Mis derivaciones se detienen solamente al llegar á la *Unión*, que puede también figurar como colitigante por medio de su Procurador General, y que eso no obstante, en mi concepto, no podría hacer uso del amparo federal.

Parece imperdonable esa inconsecuencia, en un estudio destinado á combatir las antinomías de nuestra jurisprudencia constitucional; pero una grave consideración me detiene. El amparo se otorga en nombre de la Unión, es decir, equivale á un acto de *justicia nacional*, que condena mediante un pro-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cedimiento verdaderamente singular las arbitrariedades que uno de sus funcionarios ha cometido, menospreciando la ley constitutiva, y la Unión, como entidad jurídica, no puede invocar su propio nombre para alcanzar una reparación.

La justicia federal existe como un fuero, pero sin perder su carácter de justicia común. Cuando la federación litiga ante aquella, no es la Unión que litiga ante la Unión, sino ante un tribunal competente por razón de la materia. En el amparo es la Unión misma la que coloca su mano sobre la autoridad violatoria.

Simplificando mis opiniones y contestando al cuestionario propuesto, opino porque el recurso de amparo no solamente puede ejercitarse por un *individuo particular físico*, sino por un *individuo moral*, ó lo que es lo mismo, por las compañías civiles ó comerciales; por los Municipios, por los Estados, con excepción de la Unión, y en general, por toda asociación ó corporación reconocida por la ley y considerada como *entidad jurídica*, sólo en lo que se refiere á las garantías *sobre la propiedad*.

Por valerosa que sea la tesis que propongo á los respetables miembros de esta Academia, no lo es tanto que raye en una doctrina disolvente indigna de un debate caluroso. Repito que he lanzado mis opiniones con miedo, porque ni las he vertido con los honores de verdades indiscutibles, ni se ha ocultado á mi penetración humilde que la jurisprudencia y la opinión de los publicistas han estado en pugna, condenándolas. Pero estoy convencido de que no se han discutido esas cuestiones con la prolijidad de que son dignas, y que es á la Academia á quien corresponde marcar el tono definitivo que ha de servir para fundar una jurisprudencia acorde con nuestros preceptos constitucionales.

La legislación civil nos está facilitando la clave, no solamente vivificando á la entidad *moral* con el nombre de *persona jurídica*, sino animándola hasta convertirla con su poder omnímodo en un *individuo particular*, para todo lo relativo á la

prescripción de sus bienes susceptibles de propiedad privada. Está marcado el camino.

Repugna que una ficción legal transforme esas agrupaciones de hombres en un "individuo físico," para el efecto de perder sus bienes, y los vuelva á su sér anterior al tratarse de salvarlos de una expropiación arbitraria.

Voy á terminar tratando, aun cuando sea someramente, la última cuestión propuesta. ¿Se necesita estar pisando el territorio mexicano para pedir amparo á la Justicia de la Unión?

La ley reglamentaria establece que "*cualquier habitante de la República puede demandar amparo*," con lo que da á significar muy claramente que el mexicano ó extranjero que no estén pisando el territorio nacional en los momentos de formular su demanda, no tienen derecho á la protección de la ley suprema.

Lo primero que llama la atención es que semejante requisito no figura entre los preceptos constitucionales. El art. 102 guarda sepulcral silencio acerca de él, y entiendo que ni cruzó siquiera por la mente de aquellos legisladores. Esa exigencia es exclusiva de la ley reglamentaria y hay que mirarla desde luego con reservas. Es inconcuso que ella significa una restricción al ejercicio de un derecho que la Constitución ha ofrecido incondicionalmente y sin limitaciones. Basta esto sólo para condenarlo. El poder de reglamentación no puede ser superior á la ley cuyos preceptos van á animarse con los detalles de su aplicación práctica. El reglamento de una ley significa el desarrollo de sus principios absolutos, el complemento de sus ideas, en fin, la seguridad de su aplicación. Natural es que debe haber armonía entre el principio y su ejecución. Ley secundaria que restrinja, que altere en lo más mínimo nuestros preceptos orgánicos, es inconstitucional, y la de que me ocupo se encuentra en este caso. La Constitución no propuso la restricción de habitar en la República para obtener un amparo federal y esto me basta para condenar un precepto re-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

glamentario que se atreve á alterar la Constitución demandando ese requisito.

Además, es inconsecuente con el sistema de procuración que desarrolla la misma ley de amparo. No es necesario pedir *personalmente* la protección constitucional, sino que puede pedirse por el marido en nombre de su esposa y viceversa, por el padre en nombre de su hijo, por el pariente, y en fin, por un mandatario en el sentido genuino de la palabra. No exige, pues, la ley que el quejoso acuda *in corpore* á solicitar el amparo federal. ¿Qué importa, pues, que el peticionario esté presente ó ausente de la República? Nadie ha tratado mejor este punto que el respetabilísimo Sr. Magistrado D. Eustaquio Buelna, quien se expresó del modo siguiente en el célebre amparo Birmingham-Burns: "Efectivamente, el art. 9º de la ley de 14 de Diciembre de 1882, dice: que cualquier habitante de la República puede pedir amparo; pero tal concepto no implica precisamente la negación de este recurso para el que no lo sea, pues el artículo no contiene un precepto prohibitivo y bien admite una interpretación consecuente con el texto de la Carta fundamental, que debe servir de pauta al desarrollo de las leyes orgánicas, y la cual en ninguno de sus preceptos relativos á las garantías individuales exige la calidad de habitante de México para otorgarlas. La Constitución proclamó en sus primeros artículos, no los derechos del habitante, sino los derechos del hombre, y no circunscribió el alcance de sus prescripciones á un número ó clase de personas más ó menos amplio, con lo que demostraba que esos derechos serían demandables por todo individuo de la especie humana, cualquiera que fuese la situación en que se encontrase. Sin embargo, hay en la extensión textual de las garantías una restricción ineludible fijada por la naturaleza misma de las cosas, y es que la justicia federal tenga acción y poder para hacerlas efectivas, es decir, que tenga á su alcance la materia del juicio y pueda efectivar la reparación que se implora, haciendo volver las cosas al estado que tenían antes de la violación."

"En el presente caso, se dice haber sido violada una garantía por medio de un auto de prisión, y como este auto constituye la materia reparable, como él es el que debe revocarse para hacer cesar la violación acusada, ó confirmarse si ésta no existe, es evidente que la materia del juicio está al alcance de la jurisdicción federal, por más que el quejoso se halle ausente.

En un juicio criminal no puede continuarse el procedimiento contra un reo prófugo, entre otras razones, porque la persona misma del reo es comunmente la materia justiciable; en un juicio civil una sentencia quedaría ilusoria, si el objeto de la demanda se hallase en país extranjero, á menos de exhortos suplicatorios, que podrán no ser atendidos; pero en un juicio de amparo, la materia no es la persona encausada, ni la cosa demandada, sino la providencia ú orden de la autoridad que se dice violatoria de los derechos consagrados por la Constitución en favor del hombre. Por lo expuesto, el quejoso, aun hallándose ausente de la República, ha podido usar de dicho recurso con arreglo á la Constitución, por medio de apoderado legítimo."

La Corte sancionó esas doctrinas amparando y protegiendo al Sr. Burns, no obstante que se hallaba fuera de nuestro territorio.

La opinión de los publicistas es casi unánime, con excepción del eminente publicista D. José Mª Lozano, quien con gran sorpresa nuestra sostiene: "que un habitante de la República "que se ausente de ella, se pone fuera de la protección cons- "titucional." Tal vez á él se refiere el Sr. Vallarta cuando dice: "Alguno de nuestros publicistas ha sostenido que ese recurso no procede en caso de ausencia de la República, aunque tenga bienes en ella y se viole alguna garantía de la propiedad y aunque sea su apoderado quien quiera hacerlo valer. No encuentro yo fundada esa excepción en texto alguno constitucional. Ese ausente vive en la República por la representación de su personero; y no se le podrá despojar de sus bienes ni

UANL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

aplicárseles leyes retroactivas ni confiscársele sus propiedades." Ob. cit. pág. 108.

Puede afirmarse sin temores que el artículo 9º de la ley de amparo, es inconstitucional porque altera el texto de la ley suprema exigiendo condiciones para implorar ese recurso, que no impuso el constituyente.

Tampoco veo en eso dificultad, pero donde vuelvo á pulsarla es en el caso de peticiones de amparo formuladas por representantes de sociedades existentes en el extranjero, poseedoras de bienes raíces en la República. Esas personas morales deben su advenimiento, como acabamos de verlo, á una *ficción* legislativa y á un acto de soberanía. La ficción imita á la naturaleza, pero podría objetarse que esos actos de soberanía no pueden tener efecto extraterritorial y que más allá de las fronteras de una Nación, vuelven á la *nada* de que han sido formadas.

Una entidad moral extranjera que se presentase ante nuestros tribunales ejercitando derechos, provocaría sin duda la cuestión de si tenía ó no efectivamente personalidad jurídica para litigar, y esa cuestión reclamaría el conocimiento perfecto de la ley extranjera que había dado alientos de vida á ese sér ideal. La cuestión no sería, empero, insoluble. Desde que profesamos la máxima "locus regit actum," tenemos el deber de aplicar la ley extranjera para definir una personalidad ó la validez de un contrato. El que funda su derecho en leyes extranjeras debe probar su existencia y su aplicabilidad. Eso es todo lo que exige nuestra ley positiva.

No tendrán nuestros jueces la obligación de estudiar y resolver de oficio esos cuestionarios; pero una vez que el promovente llenase esas obligaciones probatorias, demostrando cual si fuera un *hecho* la existencia y aplicabilidad de la ley extranjera, el deber de definir la cuestión por medio de sentencia es ineludible.

Esas ideas han sido acogidas aun en las legislaciones que

desconocen en las personas civiles una vida extraterritorial que no estuviese fundada en tratados internacionales.

Desde que el progreso comercial vinculó á las naciones civilizadas, nació la necesidad de infundir á las sociedades anónimas una existencia extraterritorial. Dado ese primer paso, los avances de la teoría no deben sorprendernos, y las legislaciones que no han tenido escrúpulo en revestir á las colectividades con el nombre de *personas civiles*, tienen que mirar como personalidades jurídicas á las entidades morales residentes en el extranjero, siempre que deban su advenimiento á una ley, que esa ley se pruebe, y que el objeto de esa sociedad ó corporación no sea contrario á la Constitución de un pueblo.

Nuestra ley mercantil *nacional* reconoce expresamente la personalidad de las sociedades mercantiles extranjeras, siempre que deba su existencia á una ley y sean debidamente registradas en México. (Art. 24, Cód. de Com.) Estamos, pues, afiliados en la escuela de Merlín, que reconoce el estatuto personal en favor de las *personas civiles*. Una *asociación*, que resida en el extranjero y que sea víctima de una expoliación en sus propiedades existentes en México, podrá pedir amparo por medio de su representante legal.

Termino ya este estudio. Fundada esta Academia con el fin elevado de cultivar la ciencia del derecho, descubriendo la verdad científica en aquellos problemas de la legislación que permanecen envueltos en el misterio y en la duda, yo me he atrevido á presentar estas cuestiones para que el voto de la Academia las decida, prestigiándolas con la respetabilidad de sus opiniones. Propongo, pues, un estudio, no axiomas incontrovertibles, y si soy convencido de error, con gusto abjuraré de mis principios, pues tengo una sola virtud: la de no creer en la suficiencia de mis opiniones.

México, Noviembre 16 de 1894.

LIC. FERNANDO VEGA.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CONFERENCIAS Y LECCIONES DE DERECHO CONSTITUCIONAL.

Por el Lic. D. Jacinto Pallares. *

En las anteriores lecciones hemos descrito á grandes rasgos los caracteres políticos del régimen federativo, hemos explicado la diferencia que existe entre un Gobierno federal nacional y una simple confederación de Estados; hemos visto que á través de la aparente identidad de los textos de nuestra Constitución y de la Constitución del pueblo norteamericano, esos Códigos responden por su espíritu, por su historia, por el significado social y positivo de sus fórmulas, á diferentes necesidades, á diversos ideales, á tendencias casi opuestas de la constitución social de esas dos naciones. Allá, el régimen federativo expresa una transacción [1] de soberanías rivales preexistentes, sometiéndose difícilmente á la unidad nacional informada en el Código federal; acá, el régimen federativo significa una combinación artificial de la política idealista inventada teóricamente y *à priori* para dar forma al poder público en los momentos en que detrás de la víctima de Padilla, envuelta en el sudario de los tratados de Córdoba, no queda-

* Vease la pág. 455. Tomo VI.

1 "Es la obra de adversarios resignados y de partidarios entusiastas á medias del Gobierno que se trata de establecer." (Boutmy.—Obra citada).

ba en pie ninguna institución política con títulos bastantes para asumir la soberanía nacional. Allá, todos los textos, todas las instituciones, todos los funcionarios creados por la Constitución traducen la celosa y suspicaz rivalidad de los Estados y su resistencia á conceder al Gobierno federal más de lo absolutamente necesario para unificar la vida internacional de los cantones confederados; por esto las garantías individuales no simbolizan allá derechos absolutos del *hombre*, sino simplemente limitaciones á la acción del poder federal á beneficio de los Estados y no de la *humanidad;* por eso el Senado no fué en sus comienzos sino una especie de Dieta de plenipotenciarios [1] donde estaban y están representados con igualdad absoluta de votos todos los Estados, como para atemperar ó destruir la preponderancia que algunos por su población ó riqueza pudieran alcanzar en la Cámara de Diputados, donde el número de representantes corresponde al número de habitantes; por eso en el Senado es donde radican las más altas y trascendentales funciones legislativas y administrativas del Gobierno federal, elección de Ministros, aprobación de tratados y aun aprobación definitiva de contribuciones; [2] por eso, finalmente, las grandes revoluciones, las grandes luchas parlamentarias y políticas de los dos partidos (demócrata y republicano) que han dividido aquella nación, no encarnan un antagonismo radical en cuestión de dogmas sociales, políticos ó religiosos; no ven á las profundidades de la conciencia huma-

1 Jefferson decía: "El Gobierno nacional no es sino nuestro departamento de negocios extranjeros."

2 En tanto que los proyectos que nacen en la Cámara de Diputados son ampliamente discutidos en la de Senadores, las enmiendas que nacen en el Senado casi nunca son discutidas en la Cámara de Diputados, pues esta Asamblea casi no las conoce. Sólo conoce las proposiciones de una comisión mixta en la que no está representada sino por tres Diputados y la cual ha deliberado aisladamente, teniendo por lo mismo la Cámara que resolver en *blok* sobre las conclusiones de esa comisión y no sobre cada una de las enmiendas. Basta que los tres Senadores, miembros de la Comisión, tengan alguna tenacidad para que sea conservada la mayor parte de las enmiendas decretadas por el Senado en el texto llamado de conciliación, el cual aprueba la Cámara de Diputados precipitadamente. Y este procedimiento es el que siguiéndose á la aprobación del presupuesto, da cierta preferencia al Senado."—(Boutmy. Op. cit.)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

na, no entrañan problemas elevados, ni menos ideales quiméricos, sino acusan simplemente antagonismos entre los Estados industriales y los Estados agrícolas, entre los productores y los consumidores, entre los librecambistas y los proteccionistas; por eso la elección de un Presidente y de un Congreso es una lucha económica y mercantil, y el triunfo de Cleveland significa el triunfo del libre cambio y la derrota del *bill* de la plata; por esto su más gigantesca revolución no surgió entre dos partidos nacionales, sino entre dos agrupaciones de Estados con intereses opuestos; por esto la cuestión de esclavitud no fué un problema filosófico de humanidad, sino un problema de consumo de algodón.

En cambio, acá jamás se ha presentado en la historia parlamentaria, en la historia de las conmociones políticas, en la historia de nuestras continuas revueltas, problema alguno que encarne seriamente conflictos entre los Estados, intereses opuestos y luchas por la supremacía de algunos, resistencias sistemáticas al ensanche de la acción del Gobierno Federal. Algunas veces la anarquía, la consiguiente debilidad del poder público ha inspirado, como era natural, ciertas rebeliones y resistencias aisladas de alguno que otro Estado; pero esto ha sido no el reflejo de un profundo y tradicional sentimiento de autonomía política, sino simplemente el espíritu de insubordinación, pasando del individuo al guerrillero, del guerrillero al ejército, del ejército al clero, del clero á las agrupaciones políticas llamadas Estados. En México han existido dos partidos *nacionales*, es decir, brotados de la masa general de la Nación, que han obrado ó pretendido obrar á nombre de ésta, á nombre de sus intereses, de su religión, de sus tradiciones generales, no á nombre de los intereses locales de uno ó varios Estados; y si alguna vez esos partidos han encarnado sus tendencias y sus programas el uno en el centralismo, el otro en el federalismo; si el grito de *¡Viva Su Alteza! ¡Viva el Imperio!* y el de *¡Viva la Federación!* han sintetizado aparentemente los propósitos opuestos de ambas facciones, no son ciertamente

los Estados como entidades los que han empuñado el lábaro federal para defender su autonomía y sus fueros históricos ó constitucionales, es el pueblo, es la masa *general* de la nación, es un partido derramado en todo el territorio nacional y extraño en sus luchas á todo espíritu local y de provincialismo el que se ha agrupado al rededor de esa bandera para cobijar con ella propósitos más serios ó tendencias más radicales.

El régimen federativo ha tenido importancia más bien como disolvente de todo despotismo, que como disolvente de despotismo federal; ha sido un factor de libertad *nacional* y no un factor de autonomías cantonales; el partido progresista se ha encariñado instintivamente con ese sistema, porque él llama á un gran número de individuos á la vida pública y derrama y distribuye el poder en multitud de fracciones, y no porque tenga la virtud de equilibrar y unir intereses provinciales;[1] el partido del retroceso le ha visto con temor é instintiva antipatía, no por sus propiedades de composición administrativa, sino porque á su amparo crecía y se alimentaba el espíritu de reforma en la vitalidad política de las provincias.

Cuando un partido gritaba *¡Viva la federación!* no quería decir *viva la soberanía de los Estados*, sino *viva* la vida política *derramada en mayor número de individuos, viva la libertad de acción y de pensamiento* en *veinticuatro localidades, viva la variedad en veinticuatro cenáculos de novadores y reformistas*. Cuando el partido opuesto gritaba *¡viva la Monarquía!* ó *¡viva el Centralismo!* quería decir: *¡vivan las tradiciones, viva la religión de nuestros antepasados, viva la forma económica del régimen virreinal con sus clases aforadas, sus millares de conventos, su sacerdocio privilegiado*, protegido *todo esto por un Gobierno centralizado en pocas manos, encomendado á la parte escogida de la sociedad, á la clase depositaria de la tradición.*

Así es como se explica que en los Estados Unidos del Norte

1 Las frases y los discursos que se han pronunciado en este sentido para defender el régimen federativo, son argumentos convencionales y técnicos tomados de la literatura general que explica el régimen federativo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el pacto federativo, el Gobierno federal, han sido extraños á las transformaciones políticas y sociales, á los cambios en sentido democrático operados en las constituciones de los Estados, las que se han modificado sin alterar para nada el pacto federal; mientras que en México la Constitución federal y el partido federalista son los que han sometido á su influencia á las constituciones particulares de los Estados, los que han sometido á toda la nación al impulso progresista iniciado por los poderes federales. Podremos, pues, afirmar, que en el pueblo norteamericano la Constitución federal es obra de los Estados, una obra que deja y ha dejado intactas sus constituciones particulares, que no ha tenido ni tiene influencia directa en su manera de ser social;[1] y que en México la Constitución federal ha sido una obra eminentemente nacional, que ha transformado la constitución económica, política y social de los Estados, que los ha sometido á fórmulas dictadas por los poderes federales; ¿y cómo no, si los Estados mismos son obra de la Federación y no ésta obra de los Estados?

Por esto la historia y la conciencia popular han adunado entre nosotros la idea de federación á la idea de progreso y la idea de centralismo ó monarquía á la idea de retroceso, de

1 "Yo creo (dice Boutmy, op. cit.) que la mayor parte de nuestros comentadores se encontrarían sorprendidos, salvo á excusarse después de haberlo oído, si oyeran decir que las verdaderas analogías con nuestra Constitución, existen no en la federal de los Estados Unidos, sino en las particulares de cada Estado, las únicas que crean poderes generales de gobierno, las solas de donde emana en su conjunto el derecho civil y el derecho criminal, el derecho administrativo, la legislación industrial con los funcionarios y jueces que la hacen observar; las solas de que el ciudadano siente á cada paso, por decirlo así, la acción tutelar ó represiva. Allí es donde se encuentra el asiento profundo de las instituciones políticas de América, la clave de la Constitución federal, la explicación de sus misterios y el secreto de sus destinos. Haré una sola observación. Desde el origen de la Unión hasta 1860, la base del poder se ha transformado completamente en América; ella se ha convertido de republicana en democrática, y de democrática en casi oclocrática. Pues bien, de esta lenta y gradual evolución, que ha durado casi un siglo, no dice una palabra la inmutable Constitución federal. Si nos atenemos solamente á consultar este Código, parece que nada ha cambiado desde 1789 y que entre la América de Washington y la de Jackson y la de Buchanan (dejo á un lado el período contemporáneo) no hay distinción política que establecer. Esta sola enormidad debe ser bastante para que nuestros futuros escritores desconfíen del método seguido por sus predecesores y para estimularlos á estudiar profundamente las Constituciones de los Estados, evitándoles así tomar la excepción por la regla y la parte por el todo."

tradición y de *statu quo;* por eso el partido liberal defiende el lábaro federativo como símbolo de democracia, más bien que como escudo de soberanías locales, como agente de libertad nacional, más que como salvaguardia de la autonomía de los Estados; por eso hoy mismo ese partido liberal tolera las extralimitaciones de los poderes federales en el orden político, en el administrativo, en la acción legislativa, y no toleraría, así lo creemos, el cambio radical del credo democrático, del credo económico, del credo social formulado en la Carta fundamental y que responde á las libertades y preocupaciones de toda la nación y no á los derechos y fueros federativos de los Estados.

La historia está allí para confirmar las verdades que hemos enunciado y para demostrar que la federación ha sido combatida no por federación, no por los vicios ó defectos políticos de ese sistema, sino que ha caído envuelto en la derrota de un partido *nacional*, ó ha triunfado con las victorias del partido *nacional* opuesto; que ha figurado en nuestras luchas civiles como un accidente, como un asociado de programas más radicales, más vastos, en una palabra, más nacionales.

El 6 de Octubre de 1821 la Soberana Junta provisional creada por el plan de Iguala declara, no en nombre de los Estados que no existían, sino en nombre de la Nación emancipada por el triunfo del ejército de Iturbide, que ésta es soberana é independiente de la antigua España.[1]

En 24 de Febrero de 1822 el primer Congreso constituyente reunido en virtud del art. 11 de dicho plan y convocatoria de 17 de Noviembre de 1817 (siguiendo la Constitución es-

1 La primer acta de Independencia que existe en nuestra historia es la firmada por el Congreso que instaló Morelos en Chilpancingo el 6 de Noviembre de 1813; firmanla el Lic. Andrés Quintana Roo, Lic. Manuel Herrera, Lic. Carlos María de Bustamante, Dr. José Sixto Verdugo, José M. Liceaga y Lic. Cornelio Ortiz de Zárate. Este Congreso sei nstaló en Chilpancingo el 13 de Septiembre de 1813.

UANL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pañola de 1812 y sus leyes electorales reglamentarias), declara solemnemente que en él reside la *representación absoluta de la soberanía nacional*, declarando más tarde (8 de Abril de 1823), en nombre de la Nación, por dos decretos simultáneos de 8 de Abril de 1823, la nulidad de los tratados de Córdoba y plan de Iguala en la parte que llamaban al trono mexicano á una dinastía extranjera, la nulidad de la Coronación de Iturbide y que la Nación estaba en absoluta libertad para constituirse como le acomodase.

Ese mismo Congreso ante quien se habían presentado exposiciones de las diputaciones provinciales convertidas por sí y ante sí en *Legislaturas de Estados*, pidiendo se adoptase el régimen federal, ese mismo Congreso[1] anuncia á las Provin-

1 Este Congreso fué disuelto por Iturbide el 30 de Octubre de 1822 y reducidos á prisión varios de sus miembros que después salieron de la cárcel para volver á reunirse, llamados por el mismo Iturbide el 15 de Marzo de 1823, aunque sin tener el número completo de sus miembros; este Congreso se vió obligado, contra su voluntad, á convertirse de Constituyente en simple convocante, pues si el pronunciamiento de Santa-Anna en Casa Mata en 1? de Febrero de 1823 le dió vida, otro pronunciamiento del mismo en San Luis Potosí, de 5 de Junio siguiente, le obligó á someterse á las exigencias de las diputaciones provinciales. Estas diputaciones fueron creadas por la Constitución española de 1812, y en el desorden con que se planteó en Nueva España ó México el sistema político de ese Código, no se sabía si todo el virreinato era una sola provincia ó si cada antigua intendencia debía considerarse como provincia. De *hecho* las intendencias se convirtieron en provincias; eligieron sus diputaciones provinciales y al verificarse la independencia, los políticos más avanzados ó más ilustrados de las provincias del interior y sobre todo de la frontera de México, conocedores ya de la Constitución americana, trabajaron con ahinco por el régimen federativo. La Constitución americana era muy conocida desde antes de la independencia. Al discutirse por el Congreso de los insurgentes la Constitución de Apatzingan de 22 de Octubre de 1814, sus miembros tuvieron en estudio la Constitución española, la de Caracas y la de los Estados Unidos, á donde tanto Hidalgo, como Rayón y Morelos, enviaron, para pedir apoyo y protección, á los comisionados Coronel Bernardino Gutiérrez de Lara y Francisco Peredo. Mas ese Congreso desechó desde luego la idea federal, porque, dice uno de sus miembros: "más sesudos nuestros legisladores que los de 1824 que proponían la Constitución americana como modelo, no quisieron ni aun pensar en la *federación de provincias*, porque estaban bien convencidos de que lo que convenía á éstas para triunfar de sus enemigos era unirse; y esta importantísima verdad se las había enseñado lo ocurrido en España en 1808, en que cada provincia erigió su gobierno, cada junta tenía miras de superioridad." Pero al consumarse la Independencia y á la caída del trono de Iturbide, los hombres habían cambiado; otras inteligencias estaban al frente de la revolución y de los puestos públicos; uno de ellos, como el Dr. Mier, habían estado expatriados en los Estados Unidos, multitud de ejemplares de la Constitución americana circulaban en todas las provincias, los delegados de éstas fueron llamados á la Junta de guerra que tuvo lugar en Puebla instalada por los sostenedores del plan de Casa Mata, y allí Michelena, representante de Michoacán, sugirió la idea de la federación para atraerse al programa revolucionario á las diputaciones provinciales; idea ya propalada en las provincias internas de Oriente por Ramón Arizpe, en Jalapa por uno de los vocales de una junta militar, y en el primer periódico diario que hubo en México, titulado *El Aguila Mexicana*, y en otro periódico de Guadalajara, titulado *El Iris*.

cias que como representante de la Nación se adhiere al voto de aquellas en favor del sistema republicano federal y decreta se convoque un nuevo Congreso. "Pero había un partido (dice un escritor), ya irresistible, que tomaba cada día más fuerza; un partido que, abriendo una puerta amplia á empleos y cargos lucrativos y honoríficos, bajo el nombre de *República federal*, no podía encontrar más resistencia que la débil voz de la capital, en la que había el interés de centralizar el poder, las riquezas y los destinos de las Provincias. El ejército, ó mejor diré, los directores de la fuerza armada, no formaron entonces una facción; tomaron diferentes direcciones; cada jefe tenía su opinión. Bravo, por ejemplo, Negrete y Morán, se declararon por el Gobierno central; Bustamante, Quintanar, Guerrero y Barragán, abrazaron el de los federalistas; Santa-Anna proclamó en San Luis estos principios, y por *esta combinación de circunstancias* los abogados y estudiantes de las Provincias pudieron obrar con libertad en favor de esta forma de Gobierno y alegar en su apoyo la opinión pública y la voluntad general. Las Diputaciones provinciales de Guadalajara y Yucatán comenzaron declarándose poderes legislativos y dando una existencia política é independiente á esas provincias que llamaron Estados soberanos; las demás provincias siguieron este ejemplo. El Congreso general fué despojado de todas las facultades legislativas por las diputaciones y ayuntamientos que le intimaron la orden de reducirse á dar una ley de elecciones.... Fué necesario ceder. El Congreso general formó una nueva ley de elecciones, ley conforme á la de las Cortes de España, que concede el derecho de sufragio activo y pasivo á todos los ciudadanos que no están suspensos por alguna causa de los derechos políticos."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Este mismo Congreso sacó de la nada política á algunos Estados, aceptando la división de hecho de las provincias de Sonora y Sinaloa, dividiendo las provincias de Nueva Vizcaya en las dos provincias de Durango y Chihuahua, creando la provincia del Istmo de Tehuantepec y fijando las atribuciones de todas las Diputaciones provinciales del antiguo Virreinato (Decretos de 19 de Julio, 14 de Octubre, 11 de Julio y 16 de Septiembre de 1823).

Instalado el segundo Congreso Constituyente en 5 de Noviembre de 1823, convocado y constituido con arreglo á las leyes *nacionales* de elecciones de 12 y 17 de Junio[1] de 1823, continuó ejerciendo la soberanía interior y exterior en toda la Nación, decretó el establecimiento de las Legislaturas en los Estados que no las hubiera ya de hecho[2] erigido; determinó la forma de elección y número de representantes; clasificó las rentas federales y locales, mandando que se entregasen á los Estados las rentas y oficinas que se les designaron; estableció por Decreto de 23 de Junio de 1823 un Supremo Tribunal provisional, y finalmente, el 31 de Enero de 1824 decretó en calidad de Congreso Constituyente, obrando en nombre de la Nación, que ésta se componía de las provincias (no Estados), comprendidas en el Virreinato llamado antes Nueva España, del que se llamaba Capitanía general de Yucatán y de las Comandancias generales de provincias internas de Oriente y Occidente; que siendo libre la *Nación* Mexicana y residiendo la soberanía esencial y radicalmente en la *Nación*, *ésta* tiene derecho para adoptar por medio de *sus* representantes (de la *Nación*, no de los Estados), la forma de Gobierno que mejor

1 En estas convocatorias se fijaron las siguientes 23 provincias: *Alta California*, Baja California, Durango, Guanajuato, Guadalajara, Coahuila, León (Nuevo Reino de), México, *Nuevo México*, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Santander (Tamaulipas), Sinaloa, Sonora, Tabasco, *Tejas*, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y las provincias de *Guatemala* en el caso de permanecer unidas á México. (Las provincias cuyos nombres están subrayados no pertenecen á México).

2 Eran Guanajuato, México, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis, Durango, Nuevo México, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tejas, según decretos de 8 de Enero, 4 de Febrero, 7 y 20 de Mayo, 7 de Julio y 4 de Agosto de 1824.

le acomode; que la Nación adopta para su Gobierno la forma de República, popular, *federal;* que las partes integrantes de la Nación serán Estados independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente toca á su régimen interior; que los Estados de la Federación que se reunen en este acto solemne de constituir el país son los diez y siete que allí se enuncian;[1] que los Poderes federales serán electos en la forma que prevenga la Constitución.

La Constitución de 4 de Octubre de 1824, la primera que fué, si no científica y razonada, á lo menos sincera y espontáneamente discutida y aceptada por la Nación; esto es, por las clases ilustradas, esa Constitución obra del mismo Congreso que expidió la anterior acta constitutiva, sancionó los principios en ésta consignados, y desenvolvió, copiándolos de la Constitución de los Estados Unidos, las doctrinas y dogmas que constituyen el régimen federal.

Quedó, pues, planteado el régimen federal por las causas que hemos expresado, pero descansando ese mecanismo en dos bases sociales facilísimas: la aptitud de la Nación para el sistema republicano representativo, y el conocimiento y práctica del juego de los resortes federativos. Nada de esto existía, y muy pronto se vió á los Poderes federales invadir con la fuerza armada al Estado de Jalisco para evitar revoluciones y motines, y se vió á los Estados (Veracruz) dictar leyes de proscripción contra los funcionarios federales (contra el comisario general D. Ignacio Esteva); muy pronto se vió al Gobierno federal ingerirse en la vida íntima de los Estados por medio de comandantes militares y por la aplicación de la ley de 27 de Septiembre de 1823, sobre salteadores, ley que se aplicó á los pronunciados; muy pronto se vió al Gobierno federal conceder sin

1 Estados de Guanajuato, de Occidente, compuesto de Sonora y Sinaloa; de Oriente, compuesto de Coahuila, Nuevo León y Tejas; del Norte, compuesto de Chihuahua, Durango y Nuevo México; de México, de Michoacán, de Oaxaca, de Puebla, de Querétaro, de San Luis, de Nuevo Santander, que se llamará Tamaulipas; de Tabasco, de Tlaxcala, de Veracruz, de Jalisco, de Yucatán y de Zacatecas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

facultades una ley represiva de la libertad de imprenta, que los Estados se negaron á obedecer, con justicia, aunque impulsados por sentimientos de facción; muy pronto se vió que esos mismos sentimientos les impulsaron á obedecer otras leyes federales sobre impuestos (año de 1829); es decir, muy pronto se vió que la federación no era comprendida ni era practicable, porque el Gobierno federal tenía á su cargo, por las necesidades de la constitución social, el conservar la paz y el orden público en *toda* la Nación, el reprimir la lucha de partidos *nacionales*, vedar rivalidades de Estados. Estos partidos, que al verificarse la independencia eran tres, á saber: Carbonista ó español tradicional, Iturbidista y demagogo, quedaron reducidos después del fusilamiento de Iturbide á dos: retrógrado y progresista, incorporándose los Iturbidistas en los partidarios de la Federación.

El primero estaba dirigido por las logias masónicas escocesas, el segundo por las yorkinas;[1] en el primero figuraban los españoles, los comerciantes ricos, la gente decente, el clero; en el segundo, los antiguos insurgentes, los literatos y abogados, y la masa popular de las capitales y de las grandes poblaciones; pues la masa general de la Nación ha sido y es extraña á todo movimiento político.

La lucha se comprometía entre esos dos partidos, y en ella la simpatía ó antipatía por el régimen federal no figuró como elemento de discordia[2] hasta el momento en que por medio de motines se apoderó el partido conservador del gobierno, é imprimió á su política una marcha notoriamente retrógrada y

1 Las logias escocesas se fundaron en México después de promulgada la Constitución española en 1822, bajo el patrocinio de D. Juan de Escoria, con el objeto de impedir fecundaran en Nueva España las doctrinas reformadoras de Europa; y el rito yorkino se fundó en México por el Ministro americano Ivel R. Roinseb en 1823.

2 En la inmensa serie de motines que hubo en esta época, sólo dos aislados y no secundados proclamaron el régimen central: el de la guarnición de Campeche de 6 de Noviembre de 1829, y este plan fué secundado en Mérida el 9 del mismo mes; pero estos motines y las intrigas de que después hablaremos, fueron obra del partido conservador dirigido por Alamán; y contra esas revoluciones centralistas vino la iniciativa de la Legislatura de San Luis, proponiendo una coalición para defender la soberanía de los Estados.

violenta. Apoderados los hombres prominentes del partido conservador del poder público federal, iniciaron ellos mismos una serie de revoluciones en los Estados que les sirvieron de pretexto para cambiar, como cambiaron, legislaturas, gobernadores, ayuntamientos, etc., etc.; sustituyendo por medios violentos, por acusaciones y por intrigas todos los funcionarios contentos y afectos á las ideas liberales con otro formal afecto á las ideas retrógradas de la administración, encarnadas en Bustamante y en su gabinete dirigido por Alamán. La lucha era, pues, de dos partidos nacionales, no de Estados con Estados; el régimen federativo no era del desagrado de los hombres del partido conservador por ser federativo, esto es, porque la existencia de los Estados amenazase la unidad nacional; les era antipático simplemente porque la existencia de gobiernos distintos, de legislaturas de varios centros políticos facilitaban las libertades públicas, favorecían cambios sociales y económicos, é impedían someter á toda la Nación á la unidad de miras de los próceres del partido retrógrado.

Por esto apenas se apoderaron del Gobierno nacional, procuraron justificar el necesarismo de la federación, eliminar á los diputados y senadores progresistas, poner al frente del Gobierno de todos los Estados criaturas del Gabinete y preparar un verdadero golpe de Estado imprimiendo á la administración un espíritu esencialmente retrógrado. La revolución iniciada en Zacatecas, Jalisco y Veracruz, secundada por toda la Nación, popularizada por el periódico titulado *El Federalista* y otros más vehementes, derrocó al Gobierno de Bustamante y trajo, con el llamado plan de Zavaleta, la elección de Santa-Anna para Presidente y Gómez Farías para Vicepresidente de la República, volviendo á funcionar libremente la soberanía de los Estados. Pero esa administración de Gómez Farías (pues Santa-Anna pidió licencia para separarse del cargo de Presidente) inició en los años de 1833 á 1834 una serie de reformas liberales tan prematuras, tan atrevidas, tan radicales, que difundiendo la alarma en toda la Nación, no

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

preparada aún suficientemente para abandonar tradiciones seculares, facilitaron al partido conservador una poderosa reacción que lo llevó al poder y que le permitió destruir prontamente el régimen federal, á cuyo amparo aquellas reformas alarmantes habían podido prepararse y realizarse. Algunos Estados primero, como Zacatecas, México, Michoacán y otros, y más tarde el Congreso General, llegaron á decretar reformas tan importantes como la supresión de la coacción civil para pagar los diezmos eclesiásticos, la libertad legal en votos monásticos, la libertad de la usura, la eliminación de la intervención de Roma para proveer beneficios eclesiásticos, la secularización de la instrucción pública, y se proyectaban seriamente leyes sobre ocupación de bienes eclesiásticos, supresión de conventos y libertad de cultos. Ante esa actitud del Gobierno federal, secundada por los Gobiernos de varios Estados, la Nación entera se alarmó, el partido conservador inició una cruzada contra semejantes reformas, que herían el sentimiento religioso, y muy pronto las revoluciones de Córdoba y Orizaba resolvieron á Santa–Anna á decretar la disolución de las Cámaras legislativas el 21 de Mayo siguiente, cayendo así aquella administración progresista. El partido conservador se apoderó entonces de la cosa pública y aprovechó la profunda alarma causada por aquellas reformas, para cambiar el sistema federal en central y promulgar las siete leyes llamadas *constitucionales*, de 30 de Diciembre de 1836, que hicieron pesar sobre el país un gobierno, á la vez que dictatorial, débil y sin prestigio durante once años.

No fué, pues, un vicio político el que destruyó la federación; fué simplemente un partido nacional, y por consideraciones del orden religioso y social, el que para salvar con la unidad de acción gubernativa los principios ó dogmas tradicionales de toda la Nación é impedir la avalancha de reformas prematuras, se vió en la necesidad de concentrar el poder en las manos de unos cuantos representantes del antiguo régimen.

Pero si el centralismo era la tabla de salvación de las tradiciones, era ya impracticable administrativamente, porque no era ya posible gobernar á los extinguidos Estados, provincias ó departamentos, como antes habían sido gobernadas las intendencias. Era impotente el gobierno central para responder con su acción tardía, débil é ignorante de las necesidades locales, á la actividad, al movimiento de la vida política, económica, social, administrativa, despertada en diez y nueve ó veinte apartadísimas provincias, al calor de tantas revoluciones, al abrigo del aparato federativo, al empuje de nuevas ideas y de nuevas aspiraciones. No se gobierna lo mismo un grupo de súbditos creyentes en el poder divino de los reyes, que una masa de hombres que profesan el dogma de la soberanía popular. Y esa impotencia del régimen central en el orden administrativo, agravada por la resistencia pacífica y á mano armada del partido progresista, que naturalmente debía informar su programa en la palabra federación, puesto que sus contrarios buscaban en el centralismo la fuerza política para desarrollar sus programas de retroceso, esa impotencia enervó de tal manera la acción del régimen central *constitucional*, que éste cayó casi sin lucha, por una vergonzosa abdicación.

El pronunciamiento de Paredes en 8 de Agosto de 1841, el de Valencia en México el 31 del mismo mes, el de Santa–Anna en Perote el 9 de Septiembre siguiente, trajeron las bases de Tacubaya de 28 de Septiembre que pusieron término á la administración centralista de Bustamante y que originaron un nuevo Congreso Constituyente formado por *treinta y siete* notables presididos por un Arzobispo (D. Manuel Posadas) y el cual sancionó el 13 de Junio de 1843, la Constitución centralista conocida con el nombre de *Bases de Organización Política de la República Mexicana*. Esta Constitución era simbólica. ¿Cuál es el significado histórico de esta nueva Constitución? Las leyes centralistas de 1836 fueron, como hemos dicho, combatidas por la mayoría de la Nación, por conservadores y federalistas, por el clero y por la milicia, por-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que realmente ellas ni fundaban una dictadura fuerte, ni consolidaban con poderes enérgicos el poder central, ni favorecían el desarrollo y libertades populares, ni respondían, en una palabra, á las aspiraciones de los dos partidos nacionales: el progresista y el tradicionalista. Era una Constitución híbrida que pretendía conciliar lo imposible y que dejaba al poder público sin fuerzas y al pueblo sin libertades; y por esto al levantarse todas las clases sociales contra ese código impotente para el Gobierno, pudieron esas clases unidas sólo en el común sentimiento de destrucción de lo existente, pudieron aprovechar un momento de libertad electoral en nuestra historia, debida á la incertidumbre de los programas, y llevar al Congreso constituyente, convocado con arreglo á las *Bases de Tacubaya*, un contingente bastante serio de partidarios de la reforma. En ese Congreso, los progresistas encarnaron sus ideales en proyectos de Constitución federal y los contrarios en proyectos de constituciones centralistas. Las discusiones entre ambos partidarios llegaban ya á una transacción que alarmó á las clases privilegiadas, y éstas, invocando, no motivos políticos, sino motivos religiosos, no vicios del régimen federativo, sino la audacia de ciertas reformas sociales, evitando la pendiente á que podía ser llevado ese Congreso, iniciaron en Huexotcingo la revolución que acaudillada secretamente por el mismo Poder Ejecutivo (Santa-Anna y Bravo), determinó la disolución del Congreso y la convocación de una Asamblea de notables que formó la Constitución ya mencionada de 12 de Junio de 1843, más centralizadora que las leyes constitucionales de 1836.

De esta manera, á medida que el partido liberal formulaba más categóricamente su credo social, basando su realización práctica en el régimen federativo, el partido contrario sentía la necesidad de combatir las tendencias de sus adversarios, oponiendo un régimen cada vez más inclinado á la monarquía. Y así se explica cómo á medida que el partido reformista llegaba hasta el credo social informado en el Código de 1857, el partido conservador llegaba á la dictadura y á la monarquía. La lucha del federalismo y el centralismo, encierra, pues, en nuestra historia una lucha de principios sociales, y no simplemente de combinaciones políticas ó administrativas.

El centralismo creado por la Junta de Notables cayó al empuje de otra nueva revolución que proclamó en Guadalajara el 20 de Mayo y en México el 4 de Agosto de 1846, la convocación de un nuevo Congreso Constituyente, restableciendo entretanto el Código federal de 1824. Reunido ese Congreso el 6 de Diciembre de 1846, adoptó, después de una larga discusión, aquel Código primitivo, decretando algunas reformas moderadas, obra del diputado D. Mariano Otero.[1] Siete años duró este nuevo período del régimen federativo, y su corta duración y vacilante y débil funcionamiento son la confirmación más solemne de lo que venimos demostrando; á saber: que los defectos ó virtudes del régimen federativo, las simpatías y antagonismos de su sistema, no provenían del carácter político de esa forma de gobierno, sino de causas más profundas y sociales. Durante esos siete años, el régimen federal se vió envuelto en los mismos peligros, aquejado de la misma impotencia, sujeto á las mismas vacilaciones que el régimen central; los Poderes federales en lucha con motines, revoluciones, desenfreno de la prensa, oposiciones sistemáticas, apenas ejercían autoridad fuera del Estado federal; pero mientras el carácter acentuado de la oposición á los Poderes federales era el de una lucha de principios y aspiraciones todavía no perfectamente definidas hacia reformas sociales, y no simplemente una lid contra la forma federativa, ésta, á pesar de su impotencia política y social, dejaba sentir sus benéficas in-

1 Durante este período de régimen federal se vió que ese sistema, lo mismo que el centralista, no influía nada en el patriotismo ni en la consolidación del poder público; durante ese período, invadido México por los americanos, se vió á los Estados indolentes y desunidos, Tabasco y Yucatán sublevados, la Guardia nacional rebelándose, el clero promoviendo rebeliones indignas, y sólo el ejército derramando su sangre en la Angostura y en Cerro Gordo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

fluencias administrativas, pues en medio de esas vacilaciones, de esa debilidad de los Poderes nacionales, de esa anarquía del ejército, de esas revueltas y motines, algunos Estados, al amparo de su autonomia, alcanzaron por sus propios esfuerzos y por la actitud enérgica y patriótica de sus gobernantes, grandes adelantos. Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, organizaron la hacienda pública, impulsaron la instrucción, promovieron mejoras importantes y dieron estabilidad á la máquina administrativa.

Pero á medida que avanzaban los años, las discusiones periodísticas, el progreso científico, la ineludible acción de los espíritus acentuaba cada día más y más el conflicto entre los dos grandes partidos que venían luchando desde 1810, y aproximaban la época en que, formulando el partido progresista sus aspiraciones en un credo avanzadísimo, debía obligar á sus adversarios á tocar por su parte el extremo opuesto y buscar en la dictadura ó en la monarquía el único valladar que pudiera detener las corrientes progresistas que se desataban por todas partes. Ya en el Congreso extraordinario que decretó el acta de reformas mencionada, de 21 de Mayo de 1847, se presentaron proyectos alarmantes de reformas atrevidas, cuya discusión no pudo evitarse sino por un golpe de Estado parlamentario que dió, no el Poder Ejecutivo, sino el mismo Presidente del Congreso D. Luis de la Rosa, quien pretextando la falta de asistencia de diputados, lo cual incompletaba el *quorum*, instaló el Consejo de Gobierno (Diputación Permanente) poniendo así en receso al Congreso é impidiendo la discusión de aquellos proyectos.

Continuó, pues, el régimen federativo de 1824 con las ligeras y moderadas reformas de 1846; y ambos partidos, el progresista y el liberal, ocuparon el Gobierno bajo ese régimen, procurando los primeros, al amparo de esa Constitución, implantar las reformas que eran su ideal, y los segundos cambiar ese sistema que consideraban germen de anarquía y ocasionado á insurrecciones antisociales y antireligiosas. La verdad es

que la impotencia de esa forma de Gobierno provenía, como hemos repetido, y como explicaremos más pormenorizadamente al historiar el desenvolvimiento de nuestro derecho social; provenía no del mecanismo federativo, sino de nuestra misma constitución social. La evidencia de esos dos partidos inconciliables había creado en esas luchas continuas, luchas de motín y de revuelta, no parlamentarias y pacíficas, había creado un tercer partido, si este nombre puede darse al espíritu, al hábito de anarquía, de desorden y rebelión, que difundiéndose en las masas de toda la Nación había constituído una verdadera entidad política por la impunidad que siempre encontraban los revoltosos. En ese partido figuraban indistintamente liberales y conservadores, el clero y la milicia, patriotas y ambiciosos; y cuando la administración de Arista, quien gobernó con la ley y con la Constitución, se vió aislado, abandonado por todos los partidos, y tuvo que sucumbir vergonzosamente abdicando el poder, abandonando el Gobierno y entregando á la Nación á los facciosos amotinados en Jalisco proclamando el plan de 20 de Octubre de 1852, secundado por numerosos motines en todos los Estados y que triunfante en la capital de la República, trajo el golpe de Estado de 19 de Enero de 1852 y la consiguiente disolución del Congreso en medio de la universal apatía de todo un pueblo que hacía treinta años redactaba constituciones republicanas.

En esa disolución del Congreso, en ese golpe de Estado, no fué, no, la federación la que sucumbió y murió por muchos años, fué el sistema representativo, fué la forma republicana, fué el Gobierno popular el que confesándose impotente abdicó por la aquiescencia de todos los Estados y la sumisión á las decisiones del militarismo.

Después vino la dictadura de Santa-Anna como una reacción contra aquella inmensa anarquía brotada al amparo de la práctica franca y sincera de las instituciones populares. (1853 á 1855).

Después vino el Plan de Ayutla y la Constitución de 1857

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

como una reacción contra la ominosa dictadura de Santa-Anna. (1856 á 1858).

Después vino el golpe de Estado de Comonfort y la dictadura de Miramón como una reacción contra la desecha tempestad de las reformas sociales y religiosas decretadas por el partido liberal triunfante. (1859 á 1861).

Después vino la Reforma triunfante como una reacción contra medio siglo de campanadas políticas, de indecisiones cobardes y fanatismos y tradiciones sociales y religiosas. (1861 á 1863).

Después vino el Imperio como una reacción contra ese tremendo *ultimatum* de la democracia, de la libertad, de la expulsión de frailes, de la nacionalización de bienes del clero, de la ocupación de templos, de la extinción de fueros y privilegios.

Después vino la restauración de la República y la caída del Imperio como una sanción histórica, definitiva é irrevocable de los dogmas progresistas. (1867 á 1894).

Pero lo que no ha venido es el gobierno popular, lo que no ha venido es el sufragio verdadero, lo que no ha venido es la realidad del sistema representativo. Y en su lugar existe el aparato de elecciones populares, el aparato de República, el esqueleto del sistema representativo.

Y sin embargo, dentro de ese esqueleto, protegido por ese respeto exterior á las formas, envuelto en ese manto hipócrita de soberanía popular y democracia, el régimen federativo ha desenvuelto y sigue desenvolviendo, no ciertamente su *vitalidad política*, que esto sería un milagro social, pero sí su vitalidad *administrativa*, revelando así que si el pueblo mexicano no está aún en aptitud de practicar franca y sinceramente las instituciones democráticas, sí necesita las libertades administrativas del sistema federal arraigadas en sus costumbres, apoyadas por su geografía, exigidas por su constitución social,

como una disciplina previa para llegar más tarde á la realización de la libertad política.[1]

1 Una observación muy curiosa es que mientras que el sistema federal *en la esfera puramente administrativa* se ha consolidado en virtud de 20 años de paz, el sistema representativo ha quedado convertido en una verdadera burla. Bajo el imperio de la Constitución de 1824, bajo el imperio de las leyes centralistas de 1836, bajo las administraciones de Bustamante, Paredes, Gómez Farías, Guerrero, Arista, de 1823 á 1852, había lucha electoral, el Gobierno ejercía presión en las elecciones, pero no las ahogaba; mientras que desde Tuxtepec hasta nuestros días, el jefe del Ejecutivo es el que elige Gobernadores, Diputados, Senadores con el simulacro de elecciones á las que el pueblo mexicano todo se abstiene de concurrir por desidia y porque lo cree inútil. Aun en las crisis políticas de los Estados, cuando se trata de derrocar una administración, los círculos políticos no ocurren al pueblo, sino al Presidente de la República para obtener su beneplácito. Es, pues, un problema difícil de resolver en estos momentos (1894) si el orden y la paz están vinculados á la personalidad del Ejecutivo federal ó al aparato exterior de las instituciones; es difícil saber si cuando desaparezca el actual Presidente de la República volverán los motines y revueltas de otras épocas.

J. M. Charles.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

INDICE ALFABETICO DEL PRESENTE VOLUMEN.

A

Págs.

ACCIÓN.—Prescripción de la acción para intentar el recurso de amparo 410

AGUA.—En sus relaciones con el derecho internacional, administrativo y civil ..... 51 y 108

———Descripción física de las Aguas en México 54

———Reseña histórica de las propiedades inmuebles en México y de la de las aguas 108

———Su naturaleza jurídica 113

AGUAS.—Su división. Públicas, privadas, federales, de los Estados, municipales, subterráneas y superficiales 118

———Servidumbre de 123

———Propiedad, uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas .. 170

———Facultades al Ejecutivo de la Unión para conceder el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, en riegos y como potencia aplicable á la industria 193

AMPARO.—No procede de oficio el recurso de amparo. No puede concederse por hechos que no han sido alegados en la demanda. 410

APREMIO PERSONAL.—Es inconstitucional la ley que conmine con él al causante moroso en el pago del impuesto 311

B

BENITEZ JUSTO.—Posesión de estado de los hijos naturales 253

BULNES FRANCISCO.—Discurso pronunciado ante el Gran Jurado en pro del Dictamen que consultaba el desafuero de los diputados y senadores que intervinieron en el duelo Romero-Verástegui ... 385

C

CÁRCELES.—Ilusiones de los juristas sobre las cárceles, por César Lombroso 270

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Págs.

CÁRCELES.—El aislamiento del procesado 270
———Ventajas morales de las cárceles celulares 277
———Instrucción y lectura en las mismas ..... 278 y 282
CASTELAZO F. MANUEL.—Importancia de la cuenta corriente... 342
CODIFICACIÓN.—Datos sobre la unificación de la legislación patria y extranjera 503
COMPETENCIA.—Tribunal competente para hacer la declaración de la quiebra 87
CONGRESO JURÍDICO NACIONAL.—Iniciativa para convocarlo. 503
CRIMINAL —Constitución orgánica del criminal 222
CRIMINOLOGÍA y el juicio por jurados ..... 7 y 215
CUENTA CORRIENTE.—Su importancia y clasificación. Su naturaleza y efectos jurídicos. Contrato á que pertenece. Condiciones para que exista. Interés de la cuenta corriente y su legitimidad.. 342

D

DERECHO PENAL.—Exposición de sus doctrinas según la Escuela positiva ..... 34, 98 y 222
DIAZ INFANTE CARLOS.—La escuela positiva del derecho penal ..... 34, 98, 222 y 529
DOMICILIO.—Sus efectos en el orden político, civil y en el derecho internacional privado 196
DUELO.—¿La ley que pena este delito, puede dejar de aplicarse por haber caído en desuso? 361
———Datos sobre su historia ..... 381 y 385
———Romero-Verástegui 351

E

EXCEPCIÓN DE NON NUMERATA PECUNIA.—Estudio sobre esta excepción 487
ESCUELA CRIMINAL POSITIVA.—Su defensa, por César Lombroso 127
ESCUELA POSITIVA DE DERECHO PENAL.—La exposición de sus doctrinas ..... 34, 98 y 222
ESTERRITORIALIDAD.—Efectos esterritoriales que puede tener el juicio de quiebra 89

F

FERNANDEZ CASTELLÓ ALONSO.—La quiebra en derecho internacional privado 78
FLORES MANUEL.—Discurso pronunciado ante el Gran Jurado con motivo del duelo Romero-Verástegui 376

G

GARCÍA GENARO.—La condición jurídica de la mujer 66
———Demanda á Don F. Romero la responsabilidad civil procedente por haber matado en duelo á D. José C. Verástegui 400

Págs.

GARZA ALDAPE MANUEL.—El domicilio y sus efectos en el orden político, en el civil y en derecho internacional privado 196
GUERRERO JULIO.—La criminología y el juicio por jurados.. 7 y 215

H

HIJOS NATURALES.—Posesión de su estado constituye un reconocimiento en su favor 253

I

IMPUESTOS.—Inconstitucionalidad de la ley que conmine con apremio personal ó prisión al causante moroso 311

J

JURADOS.—El juicio por jurados y la criminología 7
JURADO NACIONAL (Gran) —Dictamen de la sección 2ª del Gran Jurado sobre el desafuero de los diputados y senadores que intervinieron en el duelo Romero-Verástegui 351
———Discurso pronunciado por el Lic. Lombardo 359
———Id. por el Lic. J. Pallares 367
———Id. por el diputado Sr. M. Flores 376
———Id. por el diputado Sr. F. Bulnes 385
JACTANCIA.—Orígen y desarrollo histórico del juicio de jactancia.. 438
———El juicio de jactancia es anticonstitucional 462
JUICIO DE JACTANCIA.—Estudio sobre este juicio 438

L

LOMBROSO CÉSAR.—Defensa de la escuela criminal positiva 126
LOMBARDO MANUEL.—Discurso pronunciado en defensa del diputado F. Romero ante el Gran Jurado Nacional 359
———Niega la personalidad de la Sra. de Verástegui, para reclamar la responsabilidad civil por la muerte de su esposo en duelo 406
LOMBROSO CÉSAR.—Errores judiciales por culpa de los peritos alienistas 425
LÓPEZ y PARRA RICARDO.—Estudio sobre el juicio de jactancia en derecho patrio 438

M

MATERNIDAD.—No es absoluta la prohibición de investigarla 253
MATRIMONIO.—(El) y el divorcio en derecho internacional y privado 286

P

PALLARES JACINTO.—Discurso pronunciado en defensa del Diputado F. Romero, ante el Gran Jurado Nacional 367
———Conferencias y lecciones de derecho constitucional 556

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Págs.

PATERNIDAD.—La obligación legal en caso de intestado, de averiguar si existen parientes del autor de la herencia, puede ser una investigación legal de la paternidad..... 253
PEDREGAL MANUEL.—El matrimonio y el divorcio en derecho internacional privado..... 286
PÉREZ YARTO ANTERO.—El agua en sus relaciones con el derecho internacional, constitucional, administrativo y civil..... 51
PERSONALIDAD.—Condición jurídica de la mujer, según Herbert Spencer..... 66
PERITOS ALIENISTAS.—Errores judiciales cometidos por su culpa. 425
POSESIÓN DE ESTADO de los hijos naturales..... 253
PROPIEDAD INMUEBLE.—Reseña histórica de esta propiedad en México, y de la de aguas..... 108
PROPIEDAD, uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas.... 170
PRESCRIPCIÓN de la acción de amparo constitucional..... 410

Q

QUIEBRA.—La quiebra en derecho internacional privado..... 78
———Unidad, universalidad é indivisibilidad de la quiebra..... 81
———Tribunal competente para declararla..... 87
———Efectos esterritoriales del juicio de quiebra..... 89

R

RECIPROCIDAD INTERNACIONAL.—Aplicación de este principio en el derecho mexicano..... 326
RESPONSABILIDAD CIVIL.—Demanda de responsabilidad civil proveniente del delito de duelo..... 400

S

SÁNCHEZ GAVITO MANUEL.—Estudio sobre la excepción de non numerata pecunia..... 487
SERVIDUMBRE DE AGUAS..... 123

V

VEGA FERNANDO.—¿Es constitucional la ley que al crear un impuesto conmina con prisión y apremio personal al causante moroso?..... 311
———No puede el Juez conceder el amparo de la justicia federal por hechos que no han sido alegados por el quejoso en su demanda. 410
———El recurso de amparo y las personas morales..... 537
VERDUGO AGUSTIN.—Iniciativa á la Academia de Jurisprudencia para convocar un Congreso Jurídico Nacional..... 503

1190001154

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

